

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias de la Comunicación



**Educación y capacitación para la población
penitenciaria: Un análisis desde la reinserción
social en el CERESO Apodaca**

Tesis

Presentada en cumplimiento parcial de los requisitos para
obtener el grado de Doctorado en Filosofía con orientación
en Comunicación e Innovación Educativa

Por:

M.C. Emma Cerda Pérez

Monterrey, Nuevo León; enero de 2021

Nota:

Para el desarrollo de este trabajo se consideran las reglas de citación y referencias establecidas por la American Psychological Association (APA); sin embargo, en lo que corresponde al formato del texto se omiten dos reglas; la primera es aquella que hace referencia a que la estructura de los párrafos debe presentarse a doble espacio, la segunda es la que indica que solo debe usarse uno de los lados de la hoja.

Siguiendo las sugerencias de la Secretaría de Sustentabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se omitieron estas reglas con la finalidad de optimizar el uso de papel. Utilizar el interlineado sencillo y emplear ambos lados de la hoja permitirán reducir lo más posible la cantidad de papel utilizado para la impresión de este trabajo.

Hoja de aprobación

Los integrantes del H. Jurado examinador de la sustentante

EMMA CERDA PÉREZ

hacemos constar que hemos revisado y aprobado la tesis titulada
**EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN PENITENCIARIA:
UN ANÁLISIS DESDE LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL CERESO APODACA**
y en vista de los cual damos nuestro consentimiento para que sea sustentada en examen
de grado del Doctorado en Filosofía con Orientación en Comunicación e Innovación
Educativa.

Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez
Directora de tesis

Dra. Satu Elisa Schaeffer
Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la UANL, *Secretaria del
Jurado de examen de grado*

Dr. Juan Antonio Caballero Delgadillo
Facultad de Derecho y Criminología de
la UANL, *Vocal del Jurado de examen
de grado*

Nombre del vocal
Facultad de Ciencias de la
Comunicación, *Vocal del Jurado de
examen de grado*

Nombre del vocal
Facultad de Ciencias de la
Comunicación, *Vocal del Jurado de
examen de grado*

Agradecimientos

Agradezco a Dios por darme la oportunidad, la inteligencia necesaria y la salud para cumplir uno de mis grandes sueños como es el realizar mis estudios doctorales.

Agradezco a mis hijos Aquiles, Francisco, Emma Roxana y José Luis por su amor su comprensión y su apoyo para cumplir en el desarrollo de mis estudios doctorales.

Agradezco a mis nietos Andrés Francisco, José Alejandro, Irma Roxana, Luisa Ximena y Emma Paola por su comprensión en la ausencia de su abuela en estos tres años de trabajo doctoral.

Agradezco a mis hermanos Juan Manuel, Irma, Jesús Alberto, Rogelio, Rómulo y Patricia por su amor y su apoyo en el cumplimiento de esta aventura académica.

A mis maestros de los cursos doctorales, mi agradecimiento por su paciencia y sus enseñanzas, en especial a mi maestra Patricia Liliana Cerda Pérez, porque con sus enseñanzas me fortaleció en el aprendizaje de las técnicas de investigación y me llevó de la mano a conocer y aplicarlas en forma teórico-práctica.

A cada uno de mis compañeros de los cursos doctorales, mi agradecimiento por su solidaridad y apoyo; en especial a José Gregorio Alvarado Pérez por su por su impulso y apoyo para no claudicar en mi proyecto de tesis.

Reconocimientos

Mi reconocimiento a la Universidad Autónoma de Nuevo León por la oportunidad que me que me otorgó y por el apoyo que me ha brindado para lograr mi superación académica a través de este doctorado.

A la doctora Patricia Liliana Cerda Pérez, mi asesora de tesis, quien con sus puntuales consejos me permitió llegar al final en el desarrollo de esta tesis; por su apoyo y por el impulso que siempre me manifestó, de doy mi reconocimiento y agradecimiento.

Agradezco a la doctora Elisa Schaeffer y al doctor Juan Antonio Caballero Delgadillo por la dedicación y por el valioso tiempo enfocado a la revisión y corrección de mi proyecto de tesis.

Al doctor Ernesto Rocha Ruiz quien se preocupó para integrarnos en este proceso de desarrollo académico doctoral.

A la administración de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL la cual siempre está pendiente de qué sus maestros se desarrollen y crezcan académicamente; gracias por su apoyo.

Resumen

M.C. Emma Cerda Pérez

Fecha: enero de 2021

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Título: *Educación y capacitación para la población penitenciaria: Un análisis desde la reinserción social en el CERESO Apodaca.*

Número de páginas:
424

Candidata al grado de Doctorado en Filosofía con
Orientación en Comunicación e Innovación Educativa

Propósito y método del estudio:

Este proyecto de investigación tiene como propósito evaluar las condiciones educativas y académicas imperantes dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2017 y 2019. Se parte de la premisa de que la educación es uno de los ejes torales sobre los cuales se fundamenta el proceso de reinserción social tal como se establece en la reglamentación existente tanto a nivel internacional como en México, a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Desde el punto de vista de las personas privadas de la libertad, este trabajo analiza la importancia de la preparación educativa para la reintegración de los internos a la convivencia en comunidad con mayores posibilidades de desarrollo personal, educativo, profesional y con una mejor calidad de vida.

Conclusiones y contribuciones:

De manera general las personas privadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca son personas jóvenes con un nivel educativo básico (primaria y/o secundaria) que, durante su sentencia, no encuentran posibilidades de desarrollo académico en el nivel medio superior dentro de esta institución penitenciaria. Por otro lado, quienes deciden participar en actividades educativas dentro de este penal destacan que, aunque el esfuerzo de las autoridades es importante, existen carencias y deficiencias en términos de personal humano, así como en los insumos necesarios para su educación. Entre las necesidades más urgentes se encuentra la de ofrecer apremiantemente el bachillerato y oficios a los internos puesto que este tipo de educación, consideran, les resultará útil para el proceso de reinserción social y para su futuro personal. A lo largo de este trabajo se indica la importancia de que las autoridades penitenciarias del estado de Nuevo León, así como las instituciones educativas y las universidades, sumen voluntades para ofrecer mejores alternativas académicas a las personas internas.

Firma de la directora de tesis:

Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez
Directora de tesis

Índice

	<i>Página</i>
Hoja de aprobación	iii
Agradecimientos	v
Reconocimientos	vii
Resumen	ix
Índice	11
Introducción	21
Capítulo I. Naturaleza y dimensión del estudio	25
1.1. Planteamiento del problema	25
1.1.1. Formulación del problema de investigación	29
1.2. Objetivos de la investigación	33
1.3. Preguntas de investigación	35
1.4. Justificación de la investigación	36
1.5. Criterios para evaluar la investigación	38
1.5.1. Conveniencia	39
1.5.2. Relevancia social	39
1.5.3. Implicaciones prácticas	40
1.5.3.1. Limitaciones	40
1.5.4. Valor teórico	41
1.5.5. Utilidad metodológica	41
1.5.6. Consecuencias	41
1.5.7. Viabilidad del estudio	42
1.5.8. Disponibilidad de recursos	42
Capítulo II. Marco teórico y referencial	45
2.1. Educación y reinserción social: fundamentación teórica	47
2.1.1. Fundamentación de reinserción social	51
2.1.1.1. Concepto de reinserción social	51
2.1.2. Importancia de los programas de reinserción social	56
2.1.3. Reinserción social: un recuento histórico	61
2.1.4. La perspectiva institucional de la reinserción social en México	67
2.2. Sociología de la educación	70
2.2.1. Fundamentación de la educación a nivel mundial	76
2.2.2. Acuerdos internacionales en torno a la educación	81
2.2.3. Retos de la educación a nivel internacional	82
2.3. Educación en México: fundamentación y motivación	84
2.3.1. Ley General de Educación	91
2.3.2. Educación para los adultos	94
2.3.3. Educación para el desarrollo humano	99
2.3.4. Educación y comunicación	107
2.4. Educación en el contexto penitenciario	113
2.4.1. Perspectiva institucional de la educación penitenciaria	114
2.5. Estadística de población penitenciaria	124
2.5.1. Población penitenciaria en el mundo	124

2.5.2. Población penitenciaria en México	130
2.5.2.1. Nivel educativo de las personas privadas de la libertad en México	132
2.5.2.2. Infraestructura y personal penitenciario en México	136
2.5.2.3. Educación y el sistema penitenciario mexicano	142
2.5.3. Población penitenciaria en Nuevo León	148
2.6. Evaluación de la calidad penitenciaria	151
2.6.1. Evaluación y diagnóstico de los centros de reinserción social en México	151
2.6.2. Evaluación penitenciaria en Nuevo León	155
2.6.2.1. Evaluación y diagnóstico de los centros de reinserción social en Nuevo León	155
2.6.2.2. Evaluación del aspecto educativo y académico en los penales en Nuevo León	164
Capítulo III. Marco metodológico	171
3.1. Resumen	171
3.2. Tipo de investigación	171
3.3. Población por estudiar	172
3.4. Muestra	173
3.4.1. Participantes	173
3.5. Hipótesis u objetivos del estudio	174
3.6. Variables e indicadores	175
3.6.1. Operacionalización de las variables del instrumento aplicado a personas privadas de la libertad para evaluar su situación educativa	175
3.6.1.1. Encuesta aplicada en febrero 2017 dentro del estudio Reinserción social: entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica	177
3.6.1.2. Encuesta aplicada en junio de 2019 del estudio Prisión, espiritualidad y religión: una visión desde la espiritualidad	179
3.7. Instrumentos	180
3.8. Recolección de datos	180
3.9. Procesos y técnicas estadísticas para el análisis de datos	181
3.10. Costo estimado del proyecto	182
Capítulo IV. Análisis de resultados	185
4.1. Carencias y desafíos educativos para la reinserción social en el CERESO Apodaca: Resultados de la encuesta aplicada en marzo 2017	186
4.1.1. Infraestructura y servicios educativos en el CERESO Apodaca	188
4.1.2. Servicios educativos utilizados por las personas privadas de la libertad	195
4.1.3. Cursos complementarios de apoyo a la reinserción social y laboral	202
4.1.4. Actividades culturales y deportivas	204
4.1.5. Lectura y adquisición del conocimiento	206
4.1.6. El deporte como complemento a las actividades educativas	208

4.2. Educación en el contexto carcelario: Un enfoque para la reinserción social	209
4.2.1. Datos generales de las personas privadas de la libertad	210
4.2.2. Historia de familia	212
4.2.3. Situación académica y escolar durante la infancia	217
4.3. Entrevistas a expertos en reinserción social y educación en el contexto penitenciario	222
4.3.1. La importancia de la educación en la administración penitenciaria (Entrevista con el Lic. Alejandro Balderama Avitia, Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del estado de Nuevo León)	224
4.3.2. Educación, cultura y deporte: Un camino hacia la reinserción social (Entrevista con Radamés Tovar Velázquez, Coordinador del área de Educación, Cultura y Deporte)	235
4.3.3. Falta de programas institucionales y de planeación educativa: El contexto académico en el CERESO Apodaca (Entrevista con el Pbro. Roberto Ibarra Montes, miembro de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey)	245
Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones	257
5.1. Conclusiones	257
5.1.1. Respuesta a las guías de trabajo	266
5.2. Recomendaciones	276
Bibliografía y referencias	285
Anexos	293
Anexo 1. Reconocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León por el trabajo realizado dentro del proyecto titulado Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de PPL.	293
Anexo 2. Programas de apoyo para infantes y adolescentes en vulnerabilidad. Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de Personas Privadas de la Libertad	297
Anexo 3. Comprobante de la participación en el proyecto “Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de Personas Privadas de la Libertad: Programas de apoyo para infantes y adolescentes en vulnerabilidad”	377
Anexo 4. Encuesta aplicada a personas privadas de la libertad aplicada en febrero de 2017	379
Anexo 5. Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad en junio de 2019	395
Anexo 6. Cuestionario base para entrevista a profundidad con el Lic. Alejandro Balderrama Avitia (Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del estado de Nuevo León)	413
Anexo 7. Cuestionario base para entrevista a profundidad con el Lic. Radamés Tovar Velázquez (Coordinador de Educación, Cultura y Deporte del Centro de Reinserción Social Apodaca)	417
Anexo 8. Cuestionario base para entrevista a profundidad con el Pbro. Roberto Ibarra Montes (Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey)	421
Acerca de la autora	423

Índice de tablas

<i>No.</i>	<i>Título</i>	<i>Página</i>
2.1	Población penitenciaria a nivel mundial (2019)	125
2.2	Población penitenciaria por nivel continental (2019)	125
2.3	Top 3 de países con mayor población penitenciaria clasificados por región (2019)	128
2.4	25 países con el mayor número de personas privadas de la libertad (2019)	129
2.5	Género de los internos penitenciarios en México (2019)	130
2.6	Población penitenciaria en México clasificada por género y tipo de fuero (2019)	130
2.7	Rango de edad de los internos penitenciarios en México (2019)	131
2.8	Escolaridad de los internos penitenciarios en México (2019)	132
2.9	Internos penitenciarios con escolaridad del nivel básico en México (2019)	133
2.10	Escolaridad de los internos penitenciarios en México (2019)	134
2.11	Alfabetización de las personas privadas de la libertad en México (2019)	134
2.12	Nivel en el que se encuentran estudiando los internos penitenciarios en México (2015)	136
2.13	Centros penitenciarios en México (2019)	137
2.14	Distribución de los espacios en los centros penitenciarios en México (2019)	138
2.15	Personas que laboran dentro de los centros penitenciarios en México (2019)	140
2.16	Clasificación del personal que labora en los centros penitenciarios en México (2019)	142
2.17	Cantidad de espacios dedicados a la educación/capacitación en los centros penitenciarios en México (2019)	143
2.18	Espacios dedicados a la educación/capacitación en los centros penitenciarios en México (2019)	146
2.19	Personal enfocado a actividades de pedagogía y educativas (2019)	147
2.20	Género de los internos penitenciarios en Nuevo León (2019)	148
2.21	Población penitenciaria en Nuevo León clasificada por género y fuero (2019)	149
2.22	Escolaridad de los internos penitenciarios en Nuevo León (2019)	150
2.23	Alfabetización de los internos penitenciarios en Nuevo León (2019)	150
2.24	Personas privadas de la libertad en Nuevo León (2019)	151
2.25	Evaluación de aspectos educativos en los centros penitenciarios en Nuevo León (2015)	165
2.26	Evaluación de aspectos educativos en el Centro de Reinserción Social Apodaca (2015)	166
2.27	Evaluación de aspectos educativos en el Centro de Reinserción Social Cadereyta (2015)	167

2.28	Evaluación de aspectos educativos en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico (2015)	168
4.1	Edad de las personas privadas de la libertad dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca entrevistadas clasificadas por rango	187
4.2	Valores estadísticos de edad de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca entrevistadas	187
4.3	Escolaridad de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca	188
4.4	Opinión de las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca respecto a las aulas educativas	189
4.5	Opinión de las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca respecto a la biblioteca	189
4.6	En que ocupan su tiempo las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca	190
4.7	Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han acudido a servicios educativos	191
4.8	Cantidad de veces por las que las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca han acudido a servicios educativos	191
4.9	Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron que el departamento de trabajo social los ha invitado a iniciar o continuar con sus estudios de primaria y secundaria	192
4.10	Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron que el departamento de Trabajo Social ha estado pendiente de su participación o la razón del abandono de los programas a los que se inscribió	193
4.11	Razones por las que las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca han acudido a servicios educativos	193
4.12	Razones por las que las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca no han acudido a servicios educativos	194
4.13	Grado educativo del interno a su llegada al CERESO Apodaca	195
4.14	Personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca que han utilizado servicios educativos para concluir su educación	196
4.15	Servicios educativos utilizados por las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca	196
4.16	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han tenido que abandonar sus estudios una vez iniciados	197
4.17	Número de horas a la semana que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca dedican a actividades educativas	197
4.18	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que consideran haber tenido un avance educativo	198

4.19	Grado en que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca consideran haber tenido un avance educativo	198
4.20	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han recibido un certificado	199
4.21	Nivel en que las personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca han recibido algún certificado	199
4.22	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que consideran que el apoyo de maestros y que el material recibido por la institución es suficiente	201
4.23	Nivel de satisfacción de las personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca respecto a los estudios que ha realizado	201
4.24	Contenido educativo que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca consideran importante para su desarrollo	202
4.25	Curso de formación que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca consideran que les servirán al salir de la institución	203
4.26	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que les interesaría participar en actividades educativas y de capacitación laboral que complementen su reinserción social	203
4.27	Actividades educativas y de capacitación en los que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca les interesaría participar como complemento a su reinserción social	204
4.28	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron haber participado en alguna actividad artística	205
4.29	Actividades artísticas en las que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca han participado	205
4.30	Eventos artísticos en las que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca han participado	206
4.31	Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron que el departamento de trabajo social lo ha invitado a integrarse a programas de cultura de este centro, como es la música, la pintura, entre otras	206
4.32	Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron practicar ajedrez	208
4.33	Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que practican ajedrez y han participado en torneos	208
4.34	Deportes practicados por las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca	209
4.35	Edad de las personas privadas de la libertad clasificadas por rango	210
4.36	Escolaridad de las personas privadas de la libertad previo a su reclusión	211
4.37	Escolaridad de las personas privadas de la libertad posterior a la reclusión	212

4.38	Personas privadas de la libertad que afirmaron que alguno de sus familiares ha estado en un centro de reinserción social	212
4.39	Parentesco de los familiares de las personas privadas de la libertad que han estado dentro de un centro de reinserción social	213
4.40	Edad hasta la cual las personas privadas de la libertad vivieron con su familia de origen	213
4.41	Evaluación del ambiente familiar durante la infancia de las personas privadas de la libertad encuestadas	214
4.42	Problemas vividos en la infancia de los hogares de las personas privadas de la libertad	214
4.43	Personas privadas de la libertad que afirman haber sido víctimas de violencia durante su infancia	215
4.44	Tipo de agresiones recibidas durante la infancia por las personas privadas de la libertad encuestadas	215
4.45	Personas privadas de la libertad que afirman haber sido víctimas de violencia durante su infancia	216
4.46	Personas privadas de la libertad que afirman haber sido miembros de alguna pandilla	216
4.47	Edad en la que las personas privadas de la libertad ingresaron a la pandilla a la que pertenecieron	217
4.48	Personas privadas de la libertad que afirman que alguno de sus familiares ha sido miembro de alguna pandilla	217
4.49	Personas privadas de la libertad durante su infancia asistieron de forma regular a la escuela	218
4.50	Evaluación de las personas privadas de la libertad respecto al ambiente escolar durante su infancia	218
4.51	Apoyo familiar para que las personas privadas de la libertad cumplieran sus compromisos escolares	219
4.52	Razones por las que las personas privadas de la libertad afirman que no han podido recibir apoyo de su familia para cumplir sus compromisos escolares	219
4.53	Personas privadas de la libertad que afirmaron haber recibido agresiones durante su estancia en la escuela	220
4.54	Agresor de las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela	220
4.55	Agresor de las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela	221
4.56	Respuesta de las personas privadas de la libertad a las agresiones recibidas mientras se encontraban en la escuela	221
4.57	Personas privadas de la libertad que mientras se encontraban en la escuela recibieron apoyo de las autoridades ante las agresiones recibidas	222

Índice de gráficas

<i>No.</i>	<i>Título</i>	<i>Página</i>
2.1	Población penitenciaria por nivel continental (2019)	126
2.2	Temas importantes de atención en los centros penitenciarios en México	152
2.3	Evaluación de los centros penitenciarios en México (2019)	154
2.4	Promedio de los centros penitenciarios en México (2019)	155
2.5	Evaluación general en los centros penitenciarios en Nuevo León (2011–2019)	156
2.6	Promedio de los centros penitenciarios en Nuevo León (2019)	157
2.7	Tendencia de los centros penitenciarios en Nuevo León por rubro (2019)	157
2.8	Evaluación de los centros penitenciarios en Nuevo León por rubro (2019)	158
2.9	Evaluación del CERESO Apodaca (2019)	158
2.10	Temas importantes de atención en el CERESO Apodaca (2019)	159
2.11	Temas donde existe una atención apropiada en el CERESO Apodaca (2019)	160
2.12	Evaluación del CERESO Cadereyta (2019)	161
2.13	Temas importantes de atención en el CERESO Cadereyta (2019)	161
2.14	Temas donde existe una atención apropiada en el CERESO Cadereyta (2019)	162
2.15	Evaluación del CERESO Femenil Escobedo (2019)	163
2.16	Temas importantes de atención en el CERESO Femenil Escobedo (2019)	163
2.17	Temas donde existe una atención apropiada en el CERESO Femenil Escobedo (2019)	164
4.1	Porcentaje de personas privadas de la libertad que certificaron sus estudios dentro del CERESO Apodaca	200
4.2	Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que gustan de la lectura	207
4.3	Preferencias de lectura de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca	207

Introducción

Educación para la población penitenciaria

Introducción

Educación para la población penitenciaria

El proceso de reinserción social se sostiene en diversos ejes que fundamentan el trabajo penitenciario realizado con el objetivo de que las personas privadas de la libertad, una vez que hayan cumplido con la sentencia que les fue impuesta, puedan reintegrarse a la vida en sociedad con mayores posibilidades de éxito. Tanto a nivel internacional como en la legislación que opera en México, la reinserción social se basa en el trabajo, la cultura, la salud, el deporte, los derechos humanos y, de manera importante, se considera que la educación es un aspecto clave para dar cumplimiento a la reglamentación existente en materia penitenciaria.

Sin embargo, dentro de los centros de reinserción social en México, existen factores que limitan el trabajo que se realiza para brindar oportunidades educativas a las personas privadas de la libertad. Entre estas se encuentran la falta de participación de organizaciones civiles, no gubernamentales, académicas y universitarias; la ausencia de un presupuesto y de programas específicos para la educación de los internos; así como las condiciones de seguridad que imperan en los penales mexicanos.

En el caso del Centro de Reinserción Social Apodaca, ubicado en el estado de Nuevo León, las condiciones imperantes dentro de esta institución lo colocan en un estado de atención urgente, tal como se establece en los diagnósticos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de sus instalaciones se albergaba, para el año 2019, a cerca de 2,000 personas privadas de la libertad; con la inauguración del CERESO denominado Apodaca II, ubicado a un lado de este penal, la cantidad de internos se duplicó.

En este contexto, las personas privadas de la libertad, caracterizadas por ser personas jóvenes, la mayoría por debajo de los 40 años, cuentan con un nivel educativo generalmente básico (primaria y secundaria) y provienen de núcleos familiares donde se presentaron conflictos; agresiones; pertenencia a pandillas y en los que algunos de sus

miembros debieron cumplir con una sentencia dentro de un centro penitenciario con anterioridad.

Aunado a estas condiciones, los internos que forman parte de la comunidad penitenciaria del CERESO Apodaca enfrentan un ambiente penitenciario hostil y poco propicio para el proceso de reinserción social en el que se encuentran inmersos. Dentro de este centro penitenciario las carencias en equipamiento, escasez de personal, falta de recursos económicos, entre otras problemáticas, dificultan sus condiciones de vida e impactan de forma negativa en su desarrollo personal.

En este contexto, también existen dificultades para el desarrollo educativo de las personas privadas de la libertad en este centro penitenciario, estas se derivan, entre otras razones, por la falta de programas específicos y porque este penal no cuenta con un área específica para la planeación educativa ni con el personal suficiente para atender a la totalidad de la población penitenciaria. Asimismo, la oferta educativa que existe dentro del penal no satisface las necesidades y expectativas educativas de los internos, limitando su crecimiento académico de forma importante.

Dentro de este centro penitenciario no existe un trabajo que permita brindar capacitación y preparación para las personas privadas de la libertad que están próximas a recuperar su libertad y que, en la mayor parte de los casos, regresarán a vivir con sus familias. Asimismo, en el ámbito laboral, la capacitación que se brinda dentro del CERESO Apodaca se limita únicamente a preparar a los internos para fabricar los productos que se realizan en las empresas maquiladoras instaladas dentro de este penal y que, en pocas ocasiones, resultan útiles para que los internos puedan acceder a un empleo mejor remunerado.

Este trabajo analiza el estatus educativo y académico de las personas que se encuentran privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca, instalación que tras su inauguración fue considerada como una institución modelo, pero que en la actualidad, por aspectos relacionados a la seguridad, a la falta de recursos económicos y a la escases de personal, no cuenta con las condiciones adecuadas para que el proceso de reinserción social se pueda llevar a cabo tal como lo dicta la reglamentación existente a nivel internacional y la Ley Nacional de Ejecución Penal en México.

Capítulo I

Naturaleza y dimensión del estudio

Capítulo I

Naturaleza y dimensión del estudio

1.1. Planteamiento del problema de investigación

Los centros de reinserción social ubicados en Nuevo León (CERESO Apodaca, CERESO Cadereyta, CEPRESO Topo Chico –recientemente cerrado– y el CERESO femenino de Escobedo) son instituciones que albergan a hombres y mujeres que, por diversos motivos, cometieron un delito por el cual deben purgar una condena. De acuerdo con la nueva legislación mexicana en esta materia (*Ley Nacional de Ejecución Penal*, 2016. Capítulo I. Artículo 1), estas instituciones de seguridad tienen como objetivo lograr que quienes se encuentran dentro de los CERESO adquieran los conocimientos y desarrollen las aptitudes que les permitan volver a la vida en comunidad; la *Ley Nacional de Ejecución Penal* tiene por objeto:

I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan como motivo de la ejecución penal, y III: Regular los medios para lograr la reinserción social.

La reinserción social está centrada en cinco ejes: “el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, y el respeto a los derechos humanos” (*Ley Nacional de Ejecución Penal*, 2016. Título Tercero. Capítulo I. Artículo 72.). De acuerdo con las recientes reformas aprobadas para el sistema carcelario penitenciario en el país, la reclusión si bien es una privación de la libertad para quienes han delinquido, también se constituyen en instituciones donde se forma, educa y apoya a los internos para reinsertarse socialmente y, con ello, disminuir las posibilidades de delinquir nuevamente.

El crecimiento de la población de PPL –internos penitenciarios– que se encuentran cumpliendo un proceso condenatorio dentro de los centros penitenciarios en México se ha desarrollado exponencialmente, durante la última década; según datos presentados por el INEGI (2017) en la publicación *Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en*

México, al término del 2016, se registraba un total de 188,262 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas.

Sin embargo, estudios recientes como el desarrollado por Cerda (2017), confirman que aun cuando existe un aumento en el índice de población penitenciaria; los recursos económicos destinados para la atención de la reinserción social de los internos en los CERESO del país no resultan suficientes para atender las necesidades y dificultades relacionadas con la estancia de las personas privadas de la libertad dentro de instituciones de seguridad.

El incremento de la población penitenciaria y el hecho de que la infraestructura de los centros de reinserción social haya tenido poco o nulo desarrollo, ha provocado el surgimiento o, en algunos casos, que se agraven las problemáticas vividas dentro de estas instituciones; una de las más riesgosas es el hacinamiento que se ha visto intensificado dentro de las cárceles mexicanas, incluso al grado de convertirse en un factor que ha generado conflictos al interno de estas instituciones; todas estas dificultades impiden cumplir cabalmente los objetivos planteados dentro de la reinserción social.

En las instituciones penitenciarias estatales en México, y en particular en Nuevo León, existen factores adversos que complican el proceso de reinserción e impactan en forma directa en las actividades relacionadas al control de los internos y al logro de la reinserción. Entre estos elementos destacan la sobrepoblación y el hacinamiento, hecho que lesiona las reglas y protocolos mínimos para la operación carcelaria en el país y que provocan también, según Cerda (2014):

La pretensión de controles de las áreas por parte de algunos grupos de internos; el menoscabo en la calidad de las visitas familiares para los reos y, por supuesto, y la apatía del mismo proceso de encarcelamiento que vive el interno, merma tanto los deseos como las expectativas de participación de los reclusos en los propios programas previstos en aras de la reinserción social.

La autora señala, además, que desde el punto de vista de investigadores internacionales como Palacios-Pámanes (2012) y Christie (1993), el combate al delito y el proceso de reinserción social necesariamente debe incluir una política penitenciaria, donde sean facilitados espacios para el desarrollo educativo e intelectual de los internos, a fin de que éstos puedan reintegrarse a la vida social al terminar su sentencia.

A estos factores debe añadirse el hecho de que existen escasos estudios de seguimiento a los miembros de la comunidad penitenciaria de los CERESO en el país y en Nuevo León. Otro aspecto en consideración es el hecho de que existen una falta de información y escaso conocimiento en el que se analicen las tareas educativas, laborales y de capacitación que se desarrollan dentro de estas instituciones. Los programas de reinserción, son ejecutados dentro de un clima poco propicio y adverso derivado –entre otras razones– del hacinamiento; la violencia imperante al interno de las instituciones de seguridad y la coexistencia entre reclusos de orden común con aquellos que incurrieron en delitos de alta peligrosidad y vinculados a la delincuencia organizada. A esto se añade la convivencia sin divisiones entre la población penitenciaria procesada y sentenciada y una subdivisión por tipo de delitos cometidos, es decir, entre aquellos que se clasifican como de orden común y los que se configuran como delitos graves.

Aunque existen esfuerzos por brindar a los internos educación y capacitación que los ayude no solamente durante su estancia en el penal, sino que cumpla con el objetivo verdadero de la reinserción; hasta ahora, no se cuenta con un estudio que permita determinar un perfil educativo y académico de quienes se encuentran dentro de los CERESO que sirva como fundamento para el diseño y establecimiento de estrategias de seguimiento académico para los reclusos del estado de Nuevo León.

Los datos generales obtenidos a través del Observatorio de Prisiones que desarrolló, en conjunto con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2017), indican que en un total de 33 entidades federativas, existen 8,035 internos que no cuentan con preparación académica; 135,160 personas con el nivel de educación básica (primaria y secundaria); 40,576 con educación media superior (bachillerato); y 9,766 personas con educación superior (carrera universitaria).

Las entidades federativas que cuentan con un mayor número de internos dentro de los CERESO con nivel de estudios de educación superior son: en primer lugar, la Ciudad de México con 1,553 personas; en segundo sitio, el estado México con 1,197 personas; y en tercer lugar el estado de Jalisco con 640 personas. Debemos precisar que el estado de

Nuevo León se encuentra en el catorceavo lugar con 287 internos penitenciarios que cuentan con estudios de nivel superior.

De acuerdo al *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria* (DNSP), en el que se presenta un panorama nacional respecto a la situación de los centros de reinserción social ubicados dentro de la República Mexicana, para la supervisión de las instituciones de seguridad, se establecieron cinco áreas de evaluación las cuales incluyen aspectos que garantizan: la integridad física, psicológica y moral de las personas privadas de la libertad; una estancia digna para el interno; las condiciones de gobernabilidad de las instituciones; la reinserción social del interno y los grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad (DNSP, 2019).

Las estadísticas de la DNSP indican que, para el año 2019, el estado de Querétaro obtuvo la mejor evaluación respecto a su sistema penitenciario con una puntuación general de 8.22 de 10; en contra parte, el estado de Tamaulipas tiene la calificación más baja a nivel nacional con 5.42 de 10.

En lo que respecta al estado de Nuevo León, el *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciario 2019*, elaborado por la CNDH, califica al estado de Nuevo León con un 6.18 en su puntaje general en sus tres centros penitenciarios. De las calificaciones alcanzadas por penal en Nuevo León, se encontró que el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo registra el mayor puntaje de calificación con un registro de 6.87 de 10; seguido por el CERESO Apodaca con una evaluación general de 6.19 puntos de 10; calificándose con puntaje más bajo de 5.49 de 10 al CERESO Cadereyta. El Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico contaba con una evaluación general –previo a su clausura– de 5.51 de 10.

Las estadísticas descritas por el *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019*, dejan ver que la situación por las cuales transitan los CERESO de la entidad, provoca que los ejes torales considerados dentro del proceso de reinserción para los internos penitenciarios, no se desarrollen conforme lo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, dificultando que las personas privadas de la libertad puedan cumplir cabalmente los objetivos de este proceso: regresar con éxito a la sociedad y disminuir las posibilidades de reincidencia.

Conforme a los datos emitidos por el *DNSP 2019*, las tres instituciones penitenciarias ubicadas en la entidad en este mismo año funcionaban en el rubro de reinserción social del interno en forma negativa, ya que este reporte informa que existe una deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia o inexistencia de actividades educativas; insuficiencia o inexistencias de actividades deportivas; existe también una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades enfocadas la reinserción social.

Con respecto al CERESO Apodaca, en el tema de reinserción social la calificación general fue de 6.19 lo que marcando una tendencia positiva respecto a años anteriores; este CERESO en el año 2018 obtuvo una calificación de 6.18 y de 5.17 en el 2017. Es importante aclarar que la evaluación de la DNSP se llevó a cabo previo a la inauguración y puesta en operación del denominado CERESO “Apodaca II”, instalación penitenciaria a donde fueron trasladadas quienes se encontraban reclusos en el CEPRERESO “Topo Chico”.

1.1.1. Formulación del problema de investigación

El presente estudio tiene como propósito la identificación del perfil académico y de capacitación laboral que aquellos que se encuentran privados de su libertad en el CERESO Apodaca durante el año 2017 y 2019. El análisis se aboca a examinar el proceso académico que se lleva a cabo dentro de esta institución para lograr incrementar la eficiencia terminal de los internos, así como la preparación y capacitación en el ámbito laboral; además, se evalúa el involucramiento y participación de los internos en la oferta educativa que esta institución ofrece.

El sustento metodológico del presente trabajo se fundamenta en las modificaciones hechas al Artículo 18 de la *Constitución Mexicana*, durante el año 2016. En ellas, tanto la educación como capacitación constituyen dos ejes centrales de los cinco que en cuestión de la reinserción social incluye la nueva legislación. Estas modificaciones que parecerían ser de tipo gramatical manifiestan “la necesidad de enmarcar las penas carcelarias bajo un esquema de reinserción social de los privados de la libertad, delimitado por los derechos humanos de los internos sujetos a cumplir una pena en prisión”.

Adicionalmente y desde el campo educativo, surge de una visión, donde la educación parte del paradigma previsto por Edward D. Myers, (Myers en Bauman, 1960:24), en el sentido de que la educación debe ser considerada como un proceso antes que un producto.

Las citadas Reformas al Artículo 18 de la Constitución Mexicana, que se presentaron durante el año 2008, mismas que comenzaron su operación en el año 2016, representan un enfoque novedoso dentro del esquema carcelario y penitenciario en México; la nueva tendencia dejaba de lado la función meramente punitiva de la reclusión o encierro penitenciario para dar paso a un esquema en el que tiene un peso específico las garantías individuales de las personas internas (Constitución Mexicana, 2008). Una de las modificaciones más importantes es la sustitución del término “reo” por “persona privada de la libertad” y de “readaptación” por “reinserción”.

Desde la perspectiva del Derecho Penal, la significación de reinserción social ha sufrido un proceso de transformación y evolución. Para 1917 este concepto fue introducido en la Constitución Mexicana en la que se estableció que la cárcel debía ser utilizada con el objetivo de lograr “regenerar” a aquellas personas que se encontraban cumpliendo con una condena. Previo a este cambio, los penales mexicanos eran vistos solamente como un castigo. Según Pámanes (2011), “cuando se operaba bajo el concepto de “regeneración”, el trabajo era considerado como la principal vía para alcanzar dicha meta dentro del sistema penitenciario”.

Por otra parte, Cuinjama, Cisneros y Ordaz (2012), indicaron que los cambios en la legislación mexicana en materia de reinserción social fueron influenciados por la ideología imperante en Europa; mismas que se reflejaron en que en 1999, en la Constitución Mexicana, el concepto de “regeneración”, evolucionara a “readaptación social”. Antes de estos cambios, las prisiones se regían por una perspectiva médica y de salud, en esta se hablaba de la “reparación” de aquellos que cometieron un delito utilizando como fundamento la ética, el trabajo, la educación y el apoyo psicológico.

El clima adverso vivido dentro de las instituciones penitenciarias mexicanas ha provocado la existencia de condiciones de vida precarias dentro de los mismos. En algunos casos, el hacinamiento, el autogobierno, la escasez de recursos y la convivencia de reos

de distintos grados de peligrosidad ha derivado en motines y riñas como los suscitados en el CEPRERESO Topo Chico y en el CERESO Apodaca (Cerde, 2015).

Estas situaciones, dificultan la vida de los internos; crean incertidumbre entre los familiares de estos por las condiciones que éstos deben atravesar; propician la inseguridad y violencia dentro de los centros penitenciarios. Tales condiciones ambientales se erigen en un aspecto que impacta directamente frenando las labores propias de la reinserción social.

Dentro del sistema penitenciario mexicano, una de las áreas en las que existe una mayor dificultad es en la aplicación de programas educativos o escolares, mismos que, en ocasiones, deben ser impartidos por personal ajeno al centro penitenciario; frecuentemente, a los profesores y capacitadores, les es negado el acceso o es limitado su accionar por razones de seguridad; en otros casos, instituciones educativas y universitarias han retirado sus programas de apoyo ante la inseguridad imperante dentro de estas instituciones (Cerde, 2017).

Gladys Susana Blazich (2007), especialista en gestión y conducción del sistema educativo, en el artículo *La Educación en Contextos de Encierro* afirma que:

La educación en contextos de encierro conforma un escenario altamente complejo. Los establecimientos que funcionan en instituciones penitenciarias desarrollan sus actividades en un campo de tensiones permanentes, generadas no solo por la particularidad de su alumnado sino por un difícil contexto de funcionamiento en el que priman las cuestiones de seguridad.

Como parte del proceso de reinserción social, en los centros penitenciarios ubicado en Nuevo León, existe una oferta educativa para que las PPL puedan mantenerse en preparación educativa constante, principalmente, en primaria y secundaria. En el capítulo titulado *Preliberación y Reinserción Social* (Cerde y Alvarado, 2014), los autores señalan que de un total de 349 internos que accedieron al derecho de preliberación en 2012 y 2013, la mayoría de ellos (30.9%) solamente habían alcanzado a concluir estudios de secundaria; 29.2% de primaria y solo 12% tenía estudios del nivel medio o superior.

Según Cerde y Alvarado (2014) “una de las funciones de los centros penitenciarios es ofrecer a los internos opciones de capacitación y educación que les permita, una vez liberados, desempeñar algún oficio o insertarse exitosamente en el sistema social”. En

relación con este concepto, las estadísticas obtenidas por los autores demuestran que en las personas que fueron preliberadas se disminuyó la cantidad de PPL sin educación (de 12.9% a 7.4%). Por otra parte, en el nivel de secundaria, esta estadística fue de 30.9% a 54.4%.

Las estadísticas antes señaladas demuestran que los programas educativos que se ofertan dentro de los centros de reinserción resultan efectivos y cuentan con aceptación por parte de los internos; sin embargo, aún resultan insuficientes. El aspecto educativo dentro de los penales, además de permitir que los internos continúen preparándose educativamente, también contribuye a que se alcancen los objetivos de reinserción trazados en la ley como una de las funciones principales de todas las instituciones penitenciarias. Según Blazich (2007):

La escuela en contextos de encierro funciona a modo de una institución dentro de otra y supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo con lógicas de funcionamiento diferentes: en el primero la del castigo y el disciplina miento, fundante del derecho penal y las prisiones; y en el segundo, la lógica del desarrollo integral, fundante de la educación.

Entre ambas posturas puede ubicarse los factores necesarios para cambiar de conductas antisociales que el delito conlleva hacia conductas pro sociales donde se impulse la reinserción social extramuros de las personas privadas de la libertad. Este es un punto sustancial a través del cual se busca frenar la reincidencia delictiva y potencializar el desarrollo personal de quienes viven en las comunidades penitenciarias del país.

Desde el punto de vista de Goffman (2006) las modalidades de organización de los centros penitenciarios actuales pueden denominarse como “instituciones totales o cerradas” cuyo único fin es el control de los sujetos, en cual es logrado mediante “la deconstrucción de los signos de identidad de las personas a través de homogenización, la masificación, la clasificación y el despojo de todos los derechos, incluso el de la educación”.

Sin embargo, la escuela –aún dentro de la cárcel- es un aspecto que podría ayudar a aportar un lugar propio desde el cual fuera posible pensar en un sistema más incluyente

y enfocado a la verdadera readaptación social del interno. Tal como lo define Blazich (2007), un sistema que valorara a los reclusos como “sujetos de derechos”.

La educación, vista desde la mirada de la educación social, se constituye como un componente insoslayable de la construcción social y coproducción de subjetividad, ya que ella tramita el abordaje de conocimientos, distribuye el capital cultural, socializa y asocia deberes, incorpora actores, recuerda mitos, teje vínculos con lo desconocido, con el conocimiento, con los otros, con el mundo. La educación así entendida se hace un imperativo de inscripción, construcción de identidad, pertenencia y lazo en las sociedades humanas.

1.2. Objetivos de la investigación

Objetivo general:

- Analizar las tareas educativas que se han desarrollado en el Centro de Reinserción Social “Apodaca” en Nuevo León durante los años 2017 y 2019, para el logro de la eficiencia terminal en estudios básicos planteado desde la Ley Nacional de Ejecución Penal dentro de las tareas de reinserción social. Asimismo, la investigación se aboca a evaluar la capacitación ofrecida a los privados de la libertad y la participación de estos en los cursos que desde este enfoque se ofrecieron en el citado periodo de tiempo.

Aunado a los objetivos de investigación de este trabajo, en el Capítulo 3, correspondiente al marco metodológico, se indican las guías de trabajo que sustentan este trabajo.

Objetivos específicos:

- Analizar las tareas educativas que en materia de eficiencia terminal en estudios básicos se desarrollaron en el CERESO Apodaca (Nuevo León), durante los años 2017 y 2019.
- Indagar la participación de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca en los diversos cursos de capacitación ofrecidos por las autoridades penitenciarias durante los años 2017 y 2019.

- Evaluar el desarrollo y trayectorias académicas que tienen las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca durante los años 2017 y 2019.
- Analizar los programas educativos y de capacitación brindados a las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca, durante los años 2017 y 2019.
- Identificar los oficios o profesiones ejercidos por las personas privadas de la libertad antes de ingresar al CERESO Apodaca del estado de Nuevo León.
- Evaluar la participación de las personas privadas de la libertad dentro de los programas educativos y de oficios ofrecidos por las autoridades de las instituciones penitenciarias de Nuevo León, durante el periodo comprendido por los años 2017 y 2019.
- Identificar la opinión de profesionales y expertos en el ámbito educativo y de penitenciario respecto a la importancia de la educación en el proceso de reinserción social.
- Indagar de que forma la capacitación para el trabajo influye en el proceso educativo de la población penitenciaria y cuál es el beneficio para la reinserción social.
- Analizar cuáles podrían ser los oficios y/o profesiones cuya enseñanza pueda beneficiar a las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca para acceder a mejores oportunidades laborales al concluir su condena y abandonar estas instalaciones de seguridad.
- Examinar si existe abandono escolar entre las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca.
- Evaluar cuántas horas hombre destinan las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca a las actividades educativas previstas dentro del proceso de reinserción social en el que se encuentran.
- Analizar si la educación terminal prevista hasta el nivel medio superior es impartida en el CERESO Apodaca.
- Cotejar las perspectivas de ingreso salarial extramuros que los estudios de preparatoria y la capacitación dentro del penal Apodaca, proporcionan a la población que obtiene su libertad.

- Identificar si la realidad familiar vivida por las personas privadas de la libertad en CERESO Apodaca durante su infancia es un factor que incide en la presencia de conductas delictivas y para el acceso a oportunidades educativas durante su etapa formativa.

1.3. Preguntas de investigación

Pregunta central:

- ¿Cuál es el perfil y participación que en los ramos educativo y de capacitación presentan las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, NL, durante los años 2017 y 2019 y cómo y cuáles son los procesos que se priorizan por parte de las autoridades penitenciarias, en los contextos educativos y de capacitación para el logro de la eficiencia terminal en los estudios básicos ahí impartidos, y en la capacitación adecuada para el trabajo, conforme lo previsto por la LNEP, para la adecuada integración de las personas privadas de la libertad en su proceso de reinserción social?

Preguntar subordinadas:

- ¿Cuáles han sido las tareas educativas que en materia de eficiencia terminal en estudios básicos se desarrollan en el CERESO Apodaca, Nuevo León, ¿durante el año 2017 y 2019?
- ¿Cuáles son los cursos de capacitación que se impartieron en el CERESO Apodaca durante 2017 y 2019; y cuál es la participación de las personas privadas de la libertad ahí albergadas?
- ¿Cuál es el desarrollo y trayectorias académicas que tienen las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca como parte de su proceso de reinserción?
- ¿Cómo están conformados los programas educativos y de capacitación brindados a las personas privadas de la libertad dentro de los centros de reinserción social del estado de Nuevo León durante los años 2017 y 2019?
- ¿Cuál era el oficio o profesión ejercido por la persona privada de la libertad antes de ingresar al CERESO Apodaca del estado de Nuevo León?

- ¿Cómo es la participación de las personas privadas de la libertad dentro de los programas educativos y de oficios ofrecidos por las autoridades de los centros penitenciarios del estado de Nuevo León?
- ¿Cuál es la opinión de profesionales y expertos en el ámbito educativo y carcelario respecto a la importancia de la educación en el proceso de reinserción social, conforme los lineamientos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal?
- ¿Cómo influyen las tareas de reinserción social del CERESO Apodaca y la capacitación para el trabajo en el proceso educativo de la población penitenciaria?
- ¿Cuáles podrían ser los oficios y/o profesiones cuya enseñanza beneficie a las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca, para acceder a mejores oportunidades laborales al abandonar estas instalaciones de seguridad?
- De existir abandono escolar entre la población penitenciaria del CERESO de Apodaca, ¿qué factores provocan esta deserción?
- ¿Cuántas horas hombre destinan los internos del CERESO Apodaca a las actividades educativas previstas dentro de la reinserción social?
- ¿Cuántas horas/hombre destinaron las personas privadas de la libertad del CERESO de Apodaca al estudio y a la capacitación para el trabajo, durante los años 2017 y 2019?
- ¿Qué programas se tienen previstos para alentar la educación terminal prevista hasta el nivel medio superior en el CERESO Apodaca?
- ¿La situación familiar vivida por las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca durante su infancia es un factor que incide en la presencia de conductas delictivas y que impacta de forma negativa en su formación educativa?

1.4. Justificación de la investigación

Para cualquier ser humano la educación es un aspecto vital, ésta colabora a su formación integral como persona. A través de la educación el hombre no solamente adquiere los conocimientos, sino, además, la destreza para desarrollar tareas que le permitan hacer frente a sus necesidades. De esta forma, recibir educación de calidad incide directamente en las oportunidades de desarrollo de cualquier individuo.

Dentro del proceso de reinserción social, la educación se erige en un pilar fundamental para aquellas personas que tras cometer un delito purgan una condena. Desde la óptica vanguardista del Estado en materia criminológica, tal como lo establece Cerda (2017) en el texto *Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica*, se piensa que sólo a través de la formación educativa y de valores, las personas podrían dejar atrás la figura de un interno penitenciario, para adentrarse en una formación enfocada al surgimiento de un nuevo ciudadano.

En el texto titulado *Prisión y familia: Retos para la cohesión social del Siglo XXI* (Cerda, 2014) se analizaron 349 actas de internos penitenciarios del estado a Nuevo León que recibieron el derecho de pre liberación; es decir, que tras mantener una buena conducta, participaron en actividades al interno de las instituciones de seguridad y después de pasar una serie de pruebas psicológicas y sociológicas, entre otros factores, tras la revisión del Consejo Técnico Interdisciplinario de los CERESO, fueron acreedores a una disminución en su condena.

En el mismo se establece que de la población analizada 12.9% ingresó al centro penitenciario sin educación alguna, estadística que se reduce a 7.4% entre las personas que lograron cumplir con su sentencia o que accedieron al derecho de preliberación. Mientras que la cantidad de internos con secundaria concluida fue de 30.9% a 54.4%. Estos números permiten concluir que las autoridades muestran interés en el aspecto educativo de las PPL; empero, esta oferta no es suficiente si se toma como referencia lo establecido en la legislación, en donde se indica que el ámbito de primaria secundaria y de preparatoria son obligatorios desde el punto de vista de la SEP, aún y cuando no se imponen como obligación a las PPL dentro de la LNEP (Cerda, 2014).

La escasa formación académica limita el acceso de cualquier individuo a empleos en los que puedan tener mayores ganancias y que le permitan incrementar sus posibilidades de desarrollo personal. En ese sentido, los datos del citado estudio señalan que de 57% de los 349 internos en preliberación de los que se cuenta con su información laboral previa a la reclusión, el 20.9% laboraba como albañil; 11.9% como operador o chofer y un 10.9% como ayudante general (Cerda, 2014).

Entre los múltiples requisitos solicitados a los internos en situación de preliberación se encuentra el indicar cuál será su oficio posterior a abandonar el centro penitenciario; es decir, a qué actividad laboral se dedicarán. Según los datos de Cerda (2014) la mayor parte de los internos, una vez que egresan, se integrarán a labores de construcción (albañiles, 15.5%); soldadura (6.3%) y comerciantes (6.6%)

Si bien, los esfuerzos por brindar educación a los internos en centros penitenciarios por parte del Estado son loables, aún queda mucho por hacer para que, a través del ámbito académico, se posibilite el cumplimiento del objetivo de la reinserción. Sin embargo, éstos pueden resultar insuficientes en términos temporales; las habilidades de un interno (sea cual sea su oficio) al momento de ingresar, no serán las que se requieran en ese ámbito tras egresar de un centro penitenciario cuando la condena promedio es de 8 años.

Esta investigación encuentra su justificación en el hecho de que analiza hasta qué punto aquellos individuos que, tras la reclusión por haber cometido un delito, tienen acceso y forman parte de las tareas educativas y de capacitación previstas por Estado mexicano en sus labores de reinserción social, mismas que, al recuperar su libertad, les permitirán formar parte del mercado laboral con mayores posibilidades de éxito y, con ello, se cumplan los propósitos del proceso de reinserción social.

Por tal motivo, resulta pertinente realizar una evaluación a profundidad del estatus escolar y académico de aquellos que se encuentran internados dentro de un CERESO, a fin de analizar cuáles son las áreas en las que se requiere una atención urgente para mejorar la situación de los reclusos, de cara al logro de mejores condiciones de bienestar personal y laboral, a través de las cuales, se prepare a la población privada de la libertad, con las herramientas pertinentes para un mejor desarrollo familiar, económico y social extramuros. Así mismo, esta información permitirá encontrar los lineamientos fundamentales para un anteproyecto de política educativa y de oficios para los internos.

1.5. Criterios para evaluar la investigación

Con la intención de conocer el status educativo y la formación académica de las PPL, esta investigación, desde una perspectiva cualitativa – cuantitativa, analiza el estatus educativo, así como la preparación académica recibida dentro del CERESO de Apodaca,

Nuevo León, durante el año 2017, entre personas que deben purgar una condena dentro de estas instalaciones de seguridad como parte de las tareas de reinserción social previstas para éstas.

Por tal motivo, se desarrolla un análisis documental y de contenido de registros estadísticos, provenientes de distintos órganos que llevan un conteo respecto al número de internos reclusos dentro de los centros penitenciarios en México y, en lo particular de Nuevo León; así mismo, serán recolectadas las opiniones de expertos tanto en el ámbito educativo como carcelario y la percepción de las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca sobre la oferta educativa y de capacitación que se oferta dentro de esta institución penitenciaria.

1.5.1. Conveniencia

Considerando a la educación como un derecho inalienable del hombre y la mujer porque a través de ella, las personas logran tener las herramientas necesarias para una mejor convivencia familiar, social y desarrollo laboral, el presente estudio plantea conocer el nivel educativo con el cual ingresa el interno; la propuesta educativa que ofrece la institución penal para el desarrollo académico y la capacitación recibida por la persona privada de la libertad durante su estadía penitenciaria, así como los resultados obtenidos sobre ambos rubros, conforme a lo propuesto por la *Ley Nacional de Ejecución Penitenciaria*.

El aspecto educativo y académico es una parte de suma importancia para cumplir cabalmente los propósitos expuestos como parte de las tareas reinserción social previstas en el sistema penitenciario mexicano. El hecho de que las personas privadas de la libertad mejoren su situación educativa y académica permitirá que estos se empoderen y sean capaces de regresar al sistema social con mayores oportunidades laborales y, con ello, entre otros factores, puedan disminuirse los índices de reincidencia delictiva.

1.5.2. Relevancia social

El presente análisis se enfoca a examinar los ámbitos educativo y de capacitación, dirigidos a internos del CERESO Apodaca, como parte de las actividades de reinserción

social previstas dentro de la Ley de Ejecución Penal del 2016, donde la educación constituye un pilar básico para apoyar a aquellas personas que viven bajo un esquema de privación de la libertad. La educación y la capacitación en este sentido, forman parte de un proceso para encauzar la vida de individuos que viven una desestructuración familiar, económica y social, derivada del internamiento de una persona en un CERESO. En el caso de la comunidad penitenciaria de Apodaca, se trata de investigar hasta qué punto opera el proceso educativo previsto para 2,000 personas.

1.5.3. Implicaciones prácticas

El estudio se enfoca al análisis de la información pertinente sobre los niveles, tipos y formas que en materia de educación y capacitación se imparten para los internos de la comunidad penitenciaria del CERESO Apodaca. En este sentido, la metodología prevista dará un panorama sobre el esquema educativo y/o de capacitación entre los internos privados de la libertad de este centro penitenciario. Para tal efecto, se tienen estudios previos como *Prisión y Familia* (Cerde, 2014) y *Vulnerabilidad y Silencio* (Cerde, 2015) que se considerarán a fin de profundizar en la generación de conocimientos para el ámbito educativo y de capacitación.

El análisis que se plantea en esta investigación permitirá diagnosticar el estado académico de quienes se encuentran privados de su libertad en el CERESO Apodaca; así mismo, será posible evaluar las actividades y políticas educativas implementadas por las autoridades de esta institución educativa a fin de establecer si estas se encuentran dentro de lo establecido en la legislación existente en materia penitenciaria.

1.5.3.1. Limitaciones

Los resultados sobre el análisis de educación y capacitación de esta investigación, se limitan al estudio de los factores educativos y de capacitación dentro del centro penitenciario de Apodaca, Nuevo León, en los años de 2017 y 2019. El examen de la educación y capacitación extramuros de las personas privadas de la libertad, no está incluido.

1.5.4. Valor teórico

El estudio se enfoca hacia un ámbito exploratorio-descriptivo, de una realidad de un ambiente escasamente explorado como es el contexto educativo y de capacitación en el esquema carcelario, una vez que han sido aprobados los nuevos lineamientos derivados de la reforma penal del año 2016. Desde este marco, el análisis parte de una fundamentación donde a posteriori se podrían trabajar líneas de investigación dentro de la realidad carcelaria y sus procesos educativos.

1.5.5. Utilidad metodológica

Esta investigación es de carácter no experimental y descriptivo y parte de un enfoque cuantitativo y cualitativo. El presente estudio se enfoca a analizar las actividades educativas y académicas que en materia de eficiencia terminal en estudios básicos y de desarrollo y participación que en capacitación, se tenían en el CERESO Apodaca, Nuevo León, durante el año 2017. En lo que corresponde al criterio de clasificación de acorde al período en que la información es captada, el estudio mantiene un carácter transaccional, retrospectivo parcial y prospectivo.

En ese sentido, metodológicamente el estudio se clasifica como observacional-no experimental que bajo una perspectiva descriptiva es de carácter transversal, retrospectivo parcial y prospectivo.

1.5.6. Consecuencias

A través de este trabajo de investigación se desarrollará un perfil académico y educativo de las personas que se encuentran internadas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca que deben cumplir una sentencia después de haber cometido un delito.

Esta evaluación permitirá conocer cuál es la situación actual en términos educativos y académicos de las personas privadas de la libertad; cuál es el impacto que tienen las tareas de reinserción social en el ámbito educativo desarrolladas al interno del CERESO Apodaca y, cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar este servicio, para con ello, facilitar el reingreso de las personas privadas de la libertad con sus familias, con la comunidad, y, de forma colateral, reducir la reincidencia.

Los resultados finales de esta investigación, permitirán, por un lado, contar con indicadores específicos del status educativo de quienes se encuentran internados en el CERESO Apodaca y, por otra parte, podrían ser útiles como líneas de trabajo para el fundamento de programas educativos específicos para facilitar las tareas de reinserción social.

1.5.7. Viabilidad del estudio

Al analizar la viabilidad de esta investigación, el estudio se considera factible en relación al problema planteado y sus objetivos. Para llevar a cabo este estudio los permisos para el ingreso al CERESO Apodaca fueron gestionados por la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez (directora de este proyecto de investigación) a través del Dr. Juan Antonio Caballero quien se desempeñó como Comisario de la Dirección General de Administración Penitenciaria en el estado de Nuevo León. Las autorizaciones necesarias para la aplicación de instrumentos previstos para el desarrollo de la investigación, cuidando en todo momento los aspectos la confidencialidad de todos los internos participantes.

1.5.8. Disponibilidad de recursos

Para el desarrollo de este trabajo de investigación el investigador cuenta con los recursos, tanto en términos de información como de acceso al Centro de Reinserción Social Apodaca. Para poder ingresar a las instalaciones de esta institución de seguridad se contó con el apoyo del Alcaide Humberto Marroquín y del Subdirector de Reinserción Social de este centro de reinserción Moisés Ramírez.

Es importante destacar que la gestión para el permiso para el acceso al CERESO Apodaca fue mediante el apoyo de la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez quien, además, es la asesora de este trabajo de investigación. En términos financieros, los costos derivados de esta investigación fueron solventados por el investigador.

Capítulo II

Marco teórico y referencial

Capítulo II

Marco teórico y referencial

El propósito principal de las instituciones penitenciarias y de los centros de reinserción social en todas partes del mundo es conseguir que, al término de la sentencia, la persona privada de la libertad sea capaz de integrarse a la sociedad con las mayores posibilidades de éxito y que éste, no reincida en conductas delictivas. Para conseguir este objetivo, la educación es un factor de suma importancia. Sin embargo, las condiciones adversas, complejas y sobre todo hostiles dentro de los centros penitenciarios, dificulta severamente la implementación de programas educativos que permita a los reclusos tener oportunidades nuevas para forjarse un futuro alternativo al que vive hacia el interior del centro de readaptación social.

Este análisis propone realizar una evaluación académica de los internos, desde una perspectiva en donde la educación se reconoce como parte de las necesidades de los seres humanos y por consiguiente como un derecho humano que le ayuda en su pertenencia a la sociedad. El derecho a la educación establecido por el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Resolución 11/6 adoptada en su 11º período de sesiones (2009), insta a que se garantice el derecho a la educación de las personas privadas de libertad. En base a lo anterior, el presente trabajo se enfoca a establecer un perfil educativo de los internos y encontrar cuáles deben ser los lineamientos fundamentales para el diseño de las políticas educativas (académicas y de capacitación para oficios) acorde a las necesidades de los privados de la libertad y, con ello, incrementar sus posibilidades de reinserción a la sociedad.

Las instituciones penitenciarias del estado de Nuevo León, es decir, los CERESO de Apodaca, Cadereyta y el femenil de Escobedo, son instituciones que albergan a individuos que cometieron un delito y deben purgar una condena. El propósito de la estancia de estas personas dentro de estos sitios es que, al terminar con el tiempo correspondiente a su condena, éste, se reinsera al sistema social y no reincida en conductas delictivas. La mayoría de los internos, son una población de jóvenes en edad

productiva, lo que hace que la educación se vuelva vital, ya que esta le serviría como una herramienta que fortalezca a su reinserción social, laboral y familiar.

Dentro de las instituciones penitenciarias en México, y en particular en Nuevo León, existen factores adversos que dificultan el proceso de reinserción social y que impactan directamente en la forma en la que se realizan y controlan las diferentes actividades enfocadas a brindar a las personas internas las mejores condiciones para lograr su regreso exitoso a la sociedad. Entre estos factores destacan la sobrepoblación y el hacinamiento, hecho que lesiona las reglas y protocolos mínimos para la operación carcelario en el país y que provocan también, según Cerda (2014):

La pretensión de controles de las áreas por parte de algunos grupos de internos; el menoscabo en la calidad de las visitas familiares para los reos merma tanto los deseos como las expectativas de participación de los reclusos en los propios programas previstos en aras de la reinserción social.

A estos factores debe añadirse el hecho de que existen escasos estudios de seguimiento a las personas internas que conforman la comunidad penitenciaria de los CERESO en Nuevo León. Prevalecen vacíos de información y poco conocimiento objetivo sobre las tareas educativas, laborales y de capacitación que se desarrollan dentro de estas instituciones. Las condiciones en las que viven los internos del orden del fuero común, en convivencia diaria con delincuentes del crimen organizado y de alta peligrosidad, dificultan brindar una educación que los ayude a sobrellevar no solamente su estancia en el penal, sino que cumpla con el objetivo principal que es reinsertarlo en la sociedad.

Este análisis se sustenta en el hecho de que resulta necesario identificar las características académicas de los internos penitenciarios, su grado escolar y la capacitación laboral recibida. Ello, con la finalidad de establecer un perfil educativo que sirva como base para proponer líneas de trabajo pertinentes para el diseño de políticas penitenciarias enfocadas en la atención de las personas reclusas en instalaciones de seguridad penitenciaria en Nuevo León.

A lo largo del presente trabajo, se analiza la necesidad de atender las necesidades educativas y de capacitación de las personas que se encuentran cumpliendo con una

sentencia dentro de un centro penitenciario desde la perspectiva de políticas públicas establecidas a nivel internacional como la ONU, la UNESCO y la OEI. Este proyecto se fundamenta en documentos como los *Objetivos del Desarrollo Sostenible* de la Organización de las Naciones Unidas, de programas de la UNESCO y de investigaciones de la Organización de Estados Iberoamericanos como la titulada *Educación en Prisiones en Latinoamérica: derechos, libertad y ciudadanía* en los que se establece la necesidad de brindar oportunidades académicas para aquellos que se encuentran dentro de una institución penitenciaria y que, en el futuro, buscarán reinsertarse a la sociedad. Asimismo, se realiza un análisis de esta problemática desde las teorías de la comunicación y de la educación para, con ello, ayudar a que su regreso al sistema social sea exitoso y que el índice de reincidencia se disminuya.

2.1. Educación y reinserción social: fundamentación teórica

El clima complejo y adverso que se vive dentro de las instituciones penitenciarias, en especial en aquellas que se encuentran ubicadas en México, provoca que las condiciones de vida de los mismos, sean precarias, y, en múltiples casos, hasta insalubres. Los motines que han surgido durante la última década a lo largo del territorio nacional, son ocasionados, en gran parte, por la falta de recursos económicos para la aplicación de una adecuada política penitenciaria; a esto se añade el hacinamiento que, dentro de las instituciones carcelarias, activa la convivencia obligada entre internos de alto grado de peligrosidad, con aquellos procedentes del delito del orden común. Todo ello, obstaculiza el proceso de la reinserción social en las cárceles del país.

La aplicación de programas educativos en los centros penitenciarios, tiene una serie de limitantes, la principal se centra en la inseguridad prevaleciente tanto para los internos, como para el personal de las instituciones educativas y universitarias que brindan programas de apoyo, motivo por el cual, en múltiples sitios del país, se han retirado.

Para cualquier ser humano, la educación es un aspecto fundamental que contribuye a su formación como persona íntegra. Al continuar con su educación, dentro de las cárceles, las personas privadas de la libertad, no solamente serán consideradas como unos internos/internas, sino que adquieren el estatus de alumnos/alumnas, lo cual le brinda

diferentes posibilidades para integrarse de nuevo en la sociedad, con oportunidades de desarrollo.

En el proceso de reinserción social, el aspecto educativo es de suma importancia para cumplir con el propósito del mismo, tal como lo menciona Scarfó (2013), en el texto titulado *El derecho a la educación en las cárceles: abordaje situacional*; el autor indica que “cuando una persona accede a la educación, este hecho implica que pueda crear un lazo de pertenencia a la sociedad, y en pocas palabras, a la transmisión y recreación de la cultura”. Por lo tanto, el contexto situacional, la estructura social y cultural que rodean a un individuo, determinan su personalidad y, sobre todo, en cómo perciben la realidad social y cómo se integran a la sociedad. Una percepción que no opera como un proceso individualizado, sino que parte de la construcción de la realidad de los sujetos y las diferentes visiones de los grupos sociales a los que se pertenece y coinciden, en sus interpretaciones, sobre los contextos que les rodean.

Cerda y Alvarado (2014), en el capítulo titulado *Preliberación y Reinserción Social*, afirma que del análisis de 349 candidatos a preliberación en Nuevo León durante los años 2012 y 2013, el 30.9% solamente había concluido el nivel de secundaria; mientras que 29.2% lo había hecho en el nivel de primaria, lo que nos permite observar que un porcentaje alto de los candidatos se encontraban con estudios básicos.

Los autores afirman que “una de las funciones de los centros penitenciarios, es ofrecer a los internos opciones de capacitación y educación que les permita, una vez liberados, desempeñar algún oficio o insertarse exitosamente en el sistema social” (Cerda y Alvarado, 2014). Además, los datos derivados de este análisis indican que las oportunidades educativas existentes dentro de los CERESO de Nuevo León indican que han sido (hasta cierto punto) efectivas al registrar un aumento considerable de un 30.9% a un 54.4% en el número de internos que al cumplir con su sentencia contaba con educación secundaria.

Las cifras antes mencionadas demuestran el trabajo realizado por el Estado en su responsabilidad de brindar mayores oportunidades académicas a quienes se encuentran privados de la libertad. Empero, en la base a lo establecido en la *Ley General de Educación*

(2019), la educación es una obligación del Estado, por lo menos, en el nivel educativo de primaria, secundaria y preparatoria. Específicamente, en el Artículo 3º se indica que en nivel básico y medio superior deben formar parte de un esquema obligatorio para todos los ciudadanos, incluidos aquellos que se encuentran dentro de los penales en México.

El Artículo 3º de la *Ley General de Educación* establece que:

El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Un bajo nivel de estudios de cualquier individuo, limita su desarrollo laboral y personal, y desde luego, no es la excepción con los internos en situación de preliberación, en este sentido los datos presentados en el análisis de Cerda (2014) muestran que, de 349 internos, el 20.9% laboraba como albañil, 11.9% como operador o chofer y 10.9% como ayudante general, según la información laboral proporcionada sobre las actividades desarrolladas en etapas previas a su reclusión.

Uno de los parámetros solicitados a los internos que han accedido al derecho de preliberación es el indicar cuál será su oficio y/o actividad laboral al abandonar el centro penitenciario; conforme a los datos obtenidos en el análisis de Cerda (2014), la mayoría de ellos ejercerían oficios como albañiles (15.5%), soldadores (6.3%) y comerciantes (6.6%). Estas cifras indican que los programas educativos de los centros penitenciarios, aunque pueden ser insuficientes, resultan atractivos para los privados de la libertad al contar con una amplia participación; empero, las labores que los internos realizarán posterior a su liberación, no están relacionadas con las actividades educativas que se brindan dentro de los penales.

Es preciso, sin embargo, realizar un análisis del estatus educativo de los internos y de las condiciones académicas desarrolladas dentro de los mismos centros penitenciarios puesto que la preparación académica es un aspecto toral que permitirá que las personas privadas de la libertad, una vez que abandonen el penal, incrementen sus opciones y oportunidades laborales. En ese sentido, reviste especial importancia que, en las

instituciones carcelarias, la educación para los internos permita acercarse a los objetivos que se plantean dentro del proceso de reinserción; además, la educación de aquellos que se encuentran cumpliendo una sentencia, contribuye a su formación personal y profesional y, con ello, los aleja de la posibilidad de cometer delitos nuevamente.

Blazich, en su artículo *La educación en Contexto de Encierro* (2007), en relación a la educación de las personas privadas de la libertad menciona que:

...la escuela en contextos de encierro funciona a modo de una institución dentro de otra y supone conjugar prácticas y marcos normativos entre el sistema penitenciario y el sistema educativo, con lógicas de funcionamiento diferentes: en el primero la del castigo y el disciplinamiento, fundante del derecho penal y las presiones; y en el segundo, la lógica del desarrollo integral, fundante de la educación.

La educación como formación para los internos dentro de la cárcel es un aspecto que puede contribuir como un sistema incluyente y dirigido en la reinserción social del interno. Blazich (2007) lo define como un sistema que valora a los reclusos como “sujetos de derechos”.

La educación, vista desde la mirada de la educación social, se constituye como un componente insoslayable de la construcción social y coproducción de subjetividad, ya que ella tramita el abordaje de conocimientos, distribuye el capital cultural, socializa y asocia deberes, incorpora actores, recuerda mitos, teje vínculos con los desconocidos, con el conocimiento, con los otros, con el mundo. La educación así entendida se hace un imperativo de inscripción, construcción de identidad, pertenencia y lazo en las sociedades humanas (Blazich, 2007).

El Estado al brindar educación a los internos en los centros penitenciarios, posibilita el cumplimiento del objetivo de la reinserción social de los internos. Sin embargo, este esfuerzo puede resultar insuficiente, si partimos que las habilidades con las que ingresan los internos (independientemente del oficio de cada uno) no van a ser las mismas y, sobre todo, no serán las que se requieran en el ámbito posterior, al egresar del centro penitenciario.

La presente investigación parte de la justificación de que todo individuo privado de su libertad por haber cometido un delito y que se encuentre recluido dentro de un centro penitenciario, cuente como parte de su proceso de reinserción social con formación académica que le permita aumentar su abanico de oportunidades laborales al dar

cumplimiento a su condena y salir del centro penitenciario. De lo contrario, además de no cumplirse el objetivo de la reinserción social, se incrementarán las posibilidades de que ese individuo reincida en conductas delictivas.

El paradigma del cual se parte, es el establecido y reconocido por el propio Estado Mexicano, a través de la *Ley Nacional de Ejecución Penal* y de lo previsto por las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, dentro de sus lineamientos de educación inclusiva. Esta información permitirá encontrar las características básicas para un anteproyecto de programa educativo y de oficios para los internos, que contribuya en su reinserción social.

2.1.1. Fundamentación de la reinserción social

Desde la perspectiva internacional y en concordancia con autores expertos en el tema, la reinserción social es entendida como un proceso sistemático de acciones que tiene como orientación principal el favorecer la integración al sistema social a una persona que ha recibido una condena por haber cometido un delito tras haber violado las leyes vigentes.

Las acciones encaminadas a la reinserción social de una persona privada de la libertad, incluyen una serie de elementos que permitirán un cambio integral en la forma de ser de ese individuo. Éstas, tienen como objetivo disminuir sus probabilidades de reincidencia y buscan promover el cambio hacia la conducta social aceptada como correcta.

En el siguiente apartado se analizan los principales conceptos respecto a reinserción social; desde definiciones y conceptos básicos, hasta la perspectiva de autores expertos en el tema y de instituciones tanto internacionales como de aquellas que opera en el contexto mexicano a fin de brindar un panorama amplio respecto a este tipo de acciones.

2.1.1.1. Concepto de reinserción social

El proceso de reinserción social comienza cuando una persona que cometió un delito es privada de la libertad para comenzar el cumplimiento de su condena; sin

embargo, éste continua a lo largo de la vida del individuo aún cuando ésta logra obtener su libertad y regresar a vivir en comunidad (CNDH, 2019).

El proceso de reinserción social inicia desde que la persona forma parte de los programas que los centros penitenciarios han creado como parte del cumplimiento de sus objetivos, para que, al término de sus condenas, las personas se integren familiar, social y laboralmente en la sociedad (CNDH, 2019). El proceso educativo, llevado a cabo dentro de un centro penitenciario, tiene como características principales el desarrollo de competencias que le permitan a esa persona desempeñarse con éxito en los ámbitos antes mencionados. Asimismo, este proceso tiene como meta el fortalecimiento de los valores de la persona pues, con ello, se facilitará su integración a la sociedad. Es importante establecer que en la reinserción social siempre se encontrará inmerso el proceso natural de socialización y psicosocial que vive todo individuo, ya que intervienen aspectos formales como es la educación, y la capacitación; así como aspectos que tienen que ver con su círculo familiar y social.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), durante el año 2014, desarrolló el documento titulado *Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes*¹; en este texto, la UNODC establece que uno de los objetivos principales del proceso de reinserción social es conseguir que la persona privada de la libertad desarrolle las habilidades que le permitan regresar con mayores posibilidades de éxito a su entorno social.

Como parte de las actividades enfocadas a que un individuo pueda regresar con éxito a su ambiente social, la UNODC (2013), indica que es necesario el involucramiento y la participación de distintos actores sociales, entre los que se encuentran las autoridades gubernamentales (el Estado); el sistema penal; organizaciones de índole no gubernamental y sociales; instituciones universitarias y académicas, así como de la sociedad en general

¹ Texto originalmente publicado en inglés con el título *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders* por la UNODC; en este, se utiliza el término “social reintegration” cuya traducción es “reintegración social”. Cabe destacar que, en el idioma español y derivado de los cambios en materia penal el término “reintegración” quedó en desuso para dar paso al de “reinserción social”; sin embargo, respetando la publicación original, se seguirá utilizando el primero.

para buscar que los objetivos y directrices planteados dentro del proceso de reinserción social sean cumplidos cabalmente. En este sentido, la UNODC indica que:

La integración social se refiere al proceso de integrarse social y psicológicamente en el entorno social. Sin embargo, en los campos de prevención del delito y justicia penal, en donde se la usa con frecuencia, el término se refiere más específicamente a las diversas formas de intervención y programas individuales para evitar que se vean involucrados en conductas delictivas o, para aquellos que ya están en conflicto con la ley, para reducir la probabilidad de que vuelvan a delinquir. Las intervenciones de integración social son por lo tanto intentos de los diversos componentes del sistema judicial, en asociación con organismos sociales, ONG, instituciones educativas, comunidades y familia de los delincuentes, para apoyar la integración social de individuos con riesgo de delinquir o caer en la re-delincuencia.

Desde la perspectiva de la UNODC (2013), las personas privadas de la libertad están conformadas por un grupo de personas con características heterogéneas y con marcadas diferencias. En base a este concepto, es importante que los programas y políticas diseñadas para ser desarrolladas dentro de las instituciones penitenciarias estén enfocados de manera que pueda abarcarse a la mayor parte de la comunidad penitenciaria. Empero, existen factores que condicionan el efecto de las medidas establecidas dentro de los penales y que disminuyen el efecto de los programas a través de los cuales una personas puede desarrollar las habilidades que le permitan regresar con éxito a su grupo social; entre estas destacan las condiciones de vida previas al ingreso al centro penitenciario.

Los programas pueden ser desarrollados para varios grupos de individuos con riesgo de delinquir o caer en la re-delincuencia , incluyendo niños y jóvenes cuya socialización todavía está “en proceso”, como así también para individuos de grupos que tienden a confrontar algunos desafíos de integración social particulares, tales como los grupos minoritarios, inmigrantes o individuos que padecen de enfermedades mentales o problemas de abuso de sustancias. Algunos de estos grupos pueden ciertamente estar confrontando situaciones inmediatas de exclusión social y pueden necesitar ayuda para tratar con obstáculos invencibles de integración social (UNODC, 2013).

Para la UNODC (2013), un “programa de reintegración social” representa todas aquellas actividades y acciones que establecidas por las autoridades penitenciarias y del Estado que estan enfocadas en ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida y personales de las personas que se encuentran cumpliendo con una condena dentro de un centro penitenciario con el objetivo de que estas puedan regresar a su grupo social y a la

vida en convivencia. Dentro de estos programas, la UNODC sostiene que un aspecto toral es la inclusión de indicadores y medidas específicas que permitan que el interno sea capaz de evitar volver a delinquir y, con ello, no reingresar al penal.

El término “programas de reintegración social” se usa para referirse específicamente a intervenciones diseñadas para ayudar a los delincuentes que han sido ubicados en una institución, tales como un reformatorio, un centro de detención o una prisión, institución de salud mental o centro residencial para el tratamiento de drogas. Incluyen rehabilitación, educación y programas previos a la puesta en libertad ofrecidos en la prisión, como así también las intervenciones de libertad condicional y de asistencia posterior a la liberación. El objetivo primordial de los programas de reintegración social es proporcionar a los delincuentes la asistencia y la supervisión que necesitan para aprender a vivir sin cometer delitos y evitar recaer en la delincuencia. Su propósito es ayudar a los delincuentes a desistir del delito y a reintegrarse exitosamente dentro de la comunidad.

En relación a los programas dirigidos a las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, la UNODC destaca la existencia de dos tipos de políticas aplicables a la reintegración. El primero de los tipos de programas corresponde a las acciones del estado y de las instituciones penitenciarias; el segundo, indica que es importante la participación de la comunidad en el proceso.

En general, hay dos categorías principales de programas de reintegración social: (a) programas e intervenciones ofrecidos en el medio institucional mismo, con anterioridad a la puesta en libertad de los delincuentes, para ayudarles a resolver problemas, tratar con los factores de riesgo asociados con su conducta delictiva y adquirir la destreza necesaria para vivir una vida respetuosa de la ley y autosuficiente, como así también prepararles para su liberación y reinserción dentro de la sociedad; y (b) programas de base comunitaria, que a veces son parte de un esquema de libertad condicional, para facilitar la reintegración social de los delincuentes después de ser puestos en libertad. Muchos de los programas que pertenecen a la segunda categoría descansan sobre la provisión de alguna forma de supervisión comunitaria, como así también en diversas formas de apoyo y asistencia a los delincuentes y algunas veces también a su familia (UNODC, 2013).

En lo que corresponde a la participación comunitaria en el proceso de reinserción social, la UNODC establece que las acciones más importantes se presentan una vez que el privado de la libertad consigue regresar al sistema social. Este tipo de actividades son definidas como “ayuda post penitenciaria”; “servicios transitorios”; “reasentamiento” o “reintegración social”. Desde la UNODC se indica que este tipo de apoyo pueden

presentarse aun cuando el interno se encuentre dentro de una institución penitenciaria; este factor permite que la transición del internamiento a la libertad sea más fácil y mejor.

Algunas de estas intervenciones posteriores a la liberación comienzan de hecho mientras los delincuentes todavía están encarcelados, con la intención de facilitar su ajuste con posterioridad a la puesta en libertad. En muchos países se enfatiza reiteradamente la gestión de reinserción de los delincuentes en la sociedad. La reinserción típicamente se produce al terminar una sentencia penitenciaria u otra forma de privación de la libertad, pero también puede darse antes como parte de un programa de libertad condicional, a veces bajo supervisión formal y a veces sin ningún tipo de supervisión o asistencia (UNODC, 2013).

Este tipo de programas que comienzan previo a la liberación de los internos, denominado por la UNODC (2013) como “programa de reasentamiento delincuentes”, operan en diversos países alrededor el mundo. Según la UNODC, la Asociación de Funcionarios a Cargo de la Libertad Condicional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte definen los programas de reasentamiento como:

Un proceso sistemático basado en pruebas, por el cual se actúa para trabajar con el delincuente, sea como prisionero o ya en libertad, de modo que las comunidades queden mejor protegidas del daño y se reduzca significativamente la re-delincuencia. Incluye la totalidad del trabajo con los prisioneros, sus familias y convivientes, en asociación con organizaciones reglamentarias y voluntarias.

Asimismo, desde la UNODC (2013) se establece de manera tajante que el éxito o fracaso de los programas de reinserción depende en gran medida del hecho de que la ciudadanía desarrolle conciencia respecto a la problemática que se presenta respecto a la privación de la libertad y que, los liberados, son personas que se encuentran preparadas para regresar a la vida en comunidad. En ese sentido, la UNODC indica que:

La vasta mayoría de individuos encarcelados son eventualmente liberados de la prisión. El proceso de reinserción es una transición plena de significado emocional y dificultades prácticas para los delincuentes. Puede además presentar desafíos para las familias de los delincuentes y para la comunidad en general. Los esfuerzos para ayudar a que regresen exitosamente a la comunidad deben por lo tanto considerar tanto las necesidades de los delincuentes como el riesgo que presentan en cuanto a seguridad comunitaria. Los programas exitosos son usualmente aquellos que han logrado la concientización pública del problema y han trabajado con las comunidades locales para hacer posible la reintegración de los delincuentes.

En México, actualmente operan varias políticas nacionales de educación para los adultos; principalmente, aquellas dirigidas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. El INEA (2015), estableció el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT); mismo que representa una opción en los niveles de primaria y secundaria para las personas adultas en México. En lo que representa a la realidad penitenciaria, el INEA desarrolló la *Estrategia MEVyT Penitenciario 2012*, cuyo objetivo se enfoca en garantizar lo necesario dentro de los centros penitenciarios para atender a las necesidades, condiciones y características de sus poblaciones.

2.1.2. Importancia de los programas de reinserción social

La labor realizada dentro de los centros de reinserción social es un punto de suma importancia para que aquellos que se encuentran recluidos cumpliendo una sentencia, desarrollen mayores posibilidades de volver a la vida en convivencia con su comunidad. De ahí que la Educación que se les brinde a los internos les puede ayudar a tener mejores oportunidades para que su proceso de reinserción en la sociedad contribuya también a mejores condiciones de vida, evitando así que vuelvan a cometer actos delictivos. Por tal motivo, más allá de un lugar meramente restrictivo y de separación social; las autoridades de los centros penitenciarios deben desarrollar proyectos y programas específicos para la atención de los internos.

Estos programas además de ayudar a la reintegración de las personas privadas de la libertad a su comunidad, permitirán disminuir los índices de reincidencia, mismos que “siguen siendo muy altos entre ciertos grupos de delincuentes” (UNODC, 2013). Asimismo, la UNODC sostiene que es necesario, además de programas de atención específico, el diseño de programas de seguimiento para el cumplimiento de los mismos y un sistema que permita hacer una evaluación constante de las condiciones que enfrentan aquellos que recuperaron su libertad tras cumplir con su sentencia. Al respecto, desde esta organización se afirma que:

Si bien no se dispone de estadísticas globales, los datos de países individuales confirman altos índices de re-delincuencia, alcanzando un 70 por ciento o más. A principios de 2012 en Brasil, que tiene 500,000 presos, fue encargado un estudio de los índices de reincidencia en siete estados federales por parte del Consejo Nacional de Justicia. En el Reino Unido, los índices de re-delincuencia también alcanzaron el 70 por ciento en

algunas prisiones, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Justicia. Muchos delincuentes, incluso después de severas sentencias de prisión, vuelven a delinquir repetidamente y no pueden reintegrarse a la comunidad como ciudadanos respetuosos de la ley. La prisión, en sí misma, es incapaz de solucionar las cuestiones de reintegración social de los delincuentes. Aun cuando los programas sólidos de la prisión han ayudado a los delincuentes a lograr algunos progresos durante la detención, esos progresos se han perdido como resultado de la falta de supervisión de seguimiento y ayuda pos penitenciarias a la liberación. Por lo tanto, es razonable pensar que las estrategias de prevención eficaz del delito tanto a nivel local como nacional deben prestar atención especial a la integración social de los delincuentes y a la reintegración de los ex prisioneros a la comunidad.

Por tal motivo, desde la UNODC (2013) se recomienda a todas las naciones que conforman la ONU el diseño y establecimiento de políticas públicas de reinserción social que vayan más allá de lo punitivo o del encierro y que permitan evitar la reincidencia en los CERESO. Al respecto, se afirma que:

Tales intervenciones no necesariamente requieren el encarcelamiento de los delincuentes. Por el contrario, muchas de ellas pueden realizarse más eficazmente dentro de la comunidad que en una institución. De hecho, se puede decir que es más fácil aprender el modo de comportarse de una manera socialmente aceptable cuando se está en la comunidad que dentro del ambiente aislado y difícil de una prisión. Cuando es necesario recluir a los delincuentes para proteger a la sociedad, su reintegración social usualmente depende de si el periodo de reclusión se usa para asegurar, en la medida de lo posible, que cuando regresen a la comunidad no sólo quieran, sino que sean capaces, de vivir respetando la ley (UNODC, 2013).

De acuerdo a las leyes vigentes, el Estado, no debe abandonar la inversión en programas que tengan como objetivo la reinserción, que sean integrales y que incrementen las posibilidades de que los internos e internas, al abandonar una de estas instituciones, incrementen sus posibilidades de regresar con éxito a la vida en comunidad. Para tal efecto, el diseño de programas integrales intra muros y extra muros, es fundamental.

Estos programas forman, desde la perspectiva de la UNODC (2103), una parte “esencial de toda estrategia de prevención del delito. Invertir en la construcción de prisiones es un aspecto necesario; sin embargo, sin la correcta administración de programas de rehabilitación y reintegración, no producirán una reducción significativa de la reincidencia; al contrario, se pueden convertir en un factor que complique el problema”.

El encarcelamiento puede ayudar a mantener a los internos bajo control; empero, este tipo de acciones puede durar poco sin el apoyo de los programas necesarios.

Dichos programas pueden ser implementados a mucho menor costo que el de encarcelamiento y pueden producir algunos resultados muy efectivos en materia de costos. La reducción de la cantidad de delincuentes que vuelven a delinquir significa menos víctimas, mayor seguridad comunitaria y menos presión para los organismos policiales. El éxito de la reintegración de los delincuentes significa que menos de ellos se tendrán que presentar ante los tribunales penales, volver a la prisión y contribuir al hacinamiento en la misma, y, en general, aumentar los costos del sistema de justicia penal.

La privación de la libertad de un individuo es un aspecto que tiene un alto costo para el sistema social; y no solamente de índole económico, sino para la comunidad. Aunque en primera instancia se analiza el costo del encarcelamiento, también deben tomarse en cuenta los costos para las víctimas y la comunidad. Asimismo, el costo social y económico de la reintegración fallida de los internos en centros penitenciarios puede ser mayor a los recursos que se destinen a su reclusión; así mismo, éstas deben representar una gran preocupación para quienes formulan las políticas públicas en torno al contexto penitenciario.

Si un prisionero no se reintegra exitosamente hay costos directos e indirectos para la comunidad. Si los prisioneros reinciden después de la puesta en libertad, la seguridad comunitaria se ve afectada por el aumento del delito. Hay costos relacionados con actividades policiales y la adjudicación de estos nuevos delitos además de los costos de la administración de nuevas sanciones. Hay muchos costos que no son fáciles de cuantificar o costos indirectos, tales como los que sufren las víctimas de estos delitos, aquellos asociados con la pérdida de la capacidad económica y comunitaria, o por la necesidad de que los ex prisioneros recurran a servicios sociales en vez de contribuir a la sociedad.

Una de las principales problemáticas derivadas de la reclusión de personas en un centro penitenciario y de la insuficiencia de programas adecuados que ayuden en este proceso –principalmente educativos, académicos y de capacitación para el trabajo– provocan que el índice de reincidencia se mantenga alto. Estos factores provocan que dentro de estas instituciones exista una sobre población y hacinamiento y, con ello, la eficiencia de los programas de reinserción social disminuye considerablemente. Al respecto, en el documento de UNODC titulado *Guía de Introducción a la Prevención de la Reincidencia y la Reintegración Social de Delincuentes* afirma que:

Además, el hacinamiento en la prisión es un gran problema en muchos países. Si bien el hacinamiento en las prisiones representa un problema complejo, la población de las prisiones está aumentando y una de las principales razones de ese aumento es la gran cantidad de delincuentes que reinciden o violan las condiciones de su libertad condicional. Si bien el hacinamiento en las prisiones es un problema complejo, no hay duda de que se debe en parte a la gran cantidad de delincuentes reincidentes que las pueblan y para quienes el encarcelamiento tiene poco o ningún efecto en cuanto a desistir del delito. Una estrategia clave para reducir la cantidad de personas en las prisiones es proveer programas eficaces de rehabilitación para los prisioneros y ayudar a su reintegración social posteriormente a su liberación. Desafortunadamente, el mismo hacinamiento de la prisión afecta la capacidad de la misma para ofrecer programas de rehabilitación con significado y tiende a limitar el acceso de los prisioneros a los programas existentes.

Otro de los grandes problemas de los centros de reinserción social en México, es la cantidad de internos recluidos por delitos menores y la falta de programas de métodos alternos de solución de controversias que permitan que, aquellas personas que hayan cometido delitos simples, no lleguen a la reclusión; estas carencias se traducen en una gran población penitenciaria en un sistema que no cuenta con las condiciones ni de infraestructura, ni de personal, ni económicos. UNODC afirma que:

El problema de los delincuentes reincidentes es otra gran preocupación. Con frecuencia una amplia proporción de delincuentes pasa por el sistema de prisión debido a delitos relativamente menores, cumpliendo términos de encarcelamiento sucesivos y relativamente cortos. Si bien los delitos en sí son relativamente menos serios, principalmente delitos menores contra la propiedad, el impacto de la reincidencia es substancial sobre las comunidades y la seguridad pública, así como sobre la confianza pública en el sistema de justicia. Mucha de la conducta de estos delincuentes puede estar ligada al abuso de sustancias y adicciones, desórdenes mentales, falta de destreza para el trabajo y demás cuestiones.

Generalmente, las personas privadas de la libertad tienden a cumplir estancias cortas, factor que dificulta su acceso a programas de reinserción social que se extiendan por un periodo prolongado de tiempo; esto implica que, cuando recuperen su libertad al cumplir con su condena, aún se encuentren expuestos a una situación de riesgo y de volver a delinquir (UNODC, 2013).

Desafortunadamente, muy pocos de estas personas privadas de la libertad, participan significativamente en los programas de la prisión y aún menos reciben apoyo o supervisión después de ser liberados. Este grupo de personas, no sólo constituyen una preocupación de seguridad pública real, sino que también hacinan las prisiones y tienen escasas oportunidades de integrarse en la sociedad normal. Por lo tanto, es importante dar a los

delincuentes reincidentes acceso prioritario a los programas de rehabilitación y reintegración y someterlos a la supervisión comunitaria eficaz –y administración de delincuentes– cuando quedan en libertad.

Por su otra parte, la UNODC (2013) afirma que existen países que no cuentan con las medidas y políticas sociales apropiadas para la atención de la población en general; por lo que el diseño y aplicación de programas específicos para la comunidad penitenciaria se torna aún más complejo por la carencia de recursos económicos para su desarrollo. En ese sentido la UNODC establece que:

En países de ingresos bajos y medios, los que hacen las políticas son a veces reacios a proponer ofrecer a los delincuentes asistencia y servicios que a veces no están ni siquiera disponibles para los ciudadanos comunes. Esta es ciertamente una cuestión complicada y con frecuencia de difícil solución. Sin embargo, al final los políticos deben recordar que la ayuda a la integración no es necesaria sólo para el bien de los delincuentes, sino que es todavía más importante para la seguridad de la comunidad, el beneficio de las futuras víctimas en potencia y finalmente para el desarrollo socioeconómico de los países.

En nuestro país, en diversas instituciones penitenciarias se han registrado esfuerzos para el diseño e implementación de programas que permitan cumplir con objetivos trazados dentro del proceso de reinserción social y que permitan cumplir con los términos dispuestos en el Artículo 18 de la Constitución Mexicana, en los cuales se establece que los centros de reinserción en el país deben operar con base en la capacitación, el trabajo y la educación.

Uno de estos programas es el denominado *Penitenciaria Modelo* implementado por el Gobierno del Estado de México. Este implica “un programa de reinserción único en el ámbito nacional que busca establecer un método obligatorio de educación, capacitación y ocupación para internos provenientes de otros centros que presentan buena conducta y que están a sólo dos años de concluir su sentencia” (Gobierno del Estado de México, 2006). Este centro de reinserción social trabaja a través de la combinación del modelo educativo tradicional con el método psicocinético, lo cual implica trabajar a la par o en forma alterna el cerebro y el cuerpo del recluso como propulsores de cambio.

En la Penitenciaria Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez” del Estado de México se presenta un estricto sistema disciplinario, donde su objetivo primordial es preparar a las personas privadas de la libertad que durante el transcurso de su reclusión modificaron

o mostraron interés en modificar sus hábitos tanto sociales, culturales, educativos y laborales, contribuyendo así a que una vez que los reclusos obtengan su libertad y se reintegren a la sociedad mejor capacitados.

2.1.3. Reinserción social: un recuento histórico

A lo largo de la evolución de la sociedad las penas o castigos impuestos a las personas que infringen la ley o que cometen un delito han sufrido diversas transformaciones. En principio, la cárcel, no era un lugar donde las personas reclusas eran internadas para recibir un tratamiento integral que les permitiera regresar a su sistema social. En sus orígenes, la cárcel tenía un concepto meramente punitivo, donde la reinserción social de la persona culpada era el último de los temas a tratar. La prisión representaba un lugar de castigo, mismo que no se limitaba la reclusión; en este sitio, quienes eran detenidos sufrían castigos, inclusive, eran asesinados. Al respecto, el autor Elio Gómez-Grillo (2005) en la ponencia titulada *Evolución histórica de la cárcel* sostiene que:

La cárcel no nació para dar tratamiento ni castigo alguno. La cárcel, esto es, la medida de la privación de libertad aparece como una manera de asegurar al transgresor hasta tanto se ejecutase la pena, que, generalmente, era de muerte, o de galeras, o de mutilación, o de azotes, o de multa, inclusive. El encarcelamiento constituía una medida procesal, no una instancia punitiva.

Conforme el tiempo continuó su curso, diversos hechos históricos contribuyeron a cambiar formas, conceptos, actitudes, prioridades y, para el siglo XVI, el descubrimiento de América, las guerras, epidemias mortales e incluyendo los desastres naturales disminuían en forma notable la población, en específico la población varonil ejecutora de la producción de los países europeos. Por lo tanto, ejecutar a los delincuentes no era una contribución a la sociedad, sino todo lo contrario, en esa época resultaba más productivo adiestrar a los delincuentes en trabajos de rendición de frutos, y de esta forma explotar su mano de obra.

Baratta (1999), afirma que “la principal función con la que surgió la cárcel al inicio de la sociedad capitalista, era la de transformar y hacer producir al hombre, adaptándolo a la disciplina de la fábrica”. De esta forma, la reclusión penitenciaria se transformó,

dejando atrás las ejecuciones públicas y los castigos físicos para paso a la pena privativa de la libertad.

Desde esta perspectiva, en países como Holanda e Inglaterra, la cárcel era entendida como un nuevo concepto de “casas de trabajo” o “casas de corrección”. En éstas, personas que habían cometido un delito o que vivían en condiciones de vida precarias (alcohólicos, indigentes, vagabundos) eran obligados a desarrollar hábitos disciplinarios y productivos como los que existían en las fábricas; sin embargo, esta labor era gratuita y no percibían salario alguno por su trabajo. Desde el punto de vista de Gómez-Grillo (2005), “de esta forma la cárcel aparece en la historia como una fórmula de explotación de la mano de obra cautiva”.

Por otra parte, durante la Revolución Industrial, las máquinas reemplazaron a la mano de obra del hombre como una forma de producción en las fábricas; por este motivo, el trabajo de los reclusos dejó de ser conveniente y atractivo para los dueños de las empresas; motivo por el cual las “casa de trabajo” debieron ser cerradas debido a los escasos beneficios empresariales alrededor de las mismas (Gómez-Grillo, 2005).

Estos motivos dieron origen a un nuevo concepto de prisiones. Por ejemplo, en Roma, el Hospicio San Miguel, se convirtió en una institución donde los delincuentes podían aprender y desarrollar un oficio; mismo que ejercían durante el día y, en las noches, permanecían reclusos dentro de esta institución. Esta institución y su modelo mixto de reclusión y trabajo permaneció en operación hasta finales del siglo XVIII. Posteriormente, el Hospicio San Miguel pasaría a ser dirigido por los cuáqueros, mismos que en 1776, establecieron una institución penitenciaria en Pensilvania bajo un esquema total de aislamiento y de silencio absoluto (Gómez-Grillo, 2005).

Para el puritanismo cuáquero esta imposición del silencio a los presos era un tratamiento que pretendía lograr en el cautivo la expiación y remordimiento por el delito cometido; Gómez-Grillo (2005), afirma que en este tratamiento “no se busca hacer del recluso un trabajador explotado, sino un pecador arrepentido, ya que el recluso aislado en su celda debería leer la biblia y cumplir un trabajo menor”. El hecho de permanecer aislado

y la soledad obligada de acuerdo a este sistema penitenciario, se pretendía impedir cualquier influencia humana contaminante.

Del sistema penitenciario requerido subraya el autor que, en una visita a esta institución, los pensadores Tocqueville y Beaumont en 1831, emitieron la siguiente opinión: “cuando estos hombres dejen esta cárcel no serán hombres honestos, pero habrán aprendido un modo honesto de comportarse... y si no son virtuosos, serán seguramente más sensatos” (Melossi y Pavarini en Gómez Grillo, 2005).

De acuerdo a Gómez-Grillo (2005) el modelo de prisión de Filadelfia se retoma en la localidad de Auburn, y se instala la prisión reconocida como *Sing Sing*; sin embargo, esta presentaba algunas modificaciones, ya que se mantiene el aislamiento y el silencio durante todas las horas del día, pero se implementa un esquema de trabajo durante el día; es decir, “en este modelo auburniano se mezclan el modelo de explotación de la mano de obra cautiva y el objeto moralizador y correccional” de la prisión de Filadelfia.

Gómez-Grillo (2005), en su ponencia relató que para 1836, en España el coronel Manuel María Montesinos, fue nombrado como dirigente del presidio de Valencia y estableció que esta institución operaría bajo el lema: “La penitenciaría solo recibe al hombre. El delito se queda en la puerta”. El autor afirma que este régimen penitenciario dividió al proceso de reclusión en tres etapas:

- La de “Los hierros”: En la que la persona recluida se encontraba encadenada de uno de sus pies, pero no estaba en aislamiento.
- La de “El trabajo”: En esta, los reclusos permanecían en los talleres con la finalidad de que aprendieran un oficio.
- La de “La libertad intermedia”: En este esquema, el recluso podía salir durante el día a trabajar y debía regresar a la institución a dormir por las noches.

Con este sistema penitenciario “progresivo”, se buscaba en base al “progreso” en la conducta del recluso, aminorar, suavizar o reducir la pena. De esta forma podemos diferenciar que el sistema penitenciario progresivo del coronel Montesinos “es muy

diferente, al sistema celular creado en Filadelfia, en donde el preso debe cumplir su condena sea cual fuere su progreso” (Gómez-Grillo, 2005).

Gómez Grillo (2005), postula que en el desarrollo de la historia carcelaria universal, se pueden declarar cuatro etapas: la primer forma carcelaria era el aseguramiento del recluso hasta la aplicación de la sentencia; la segunda forma carcelaria radicó en la explotación laboral del preso utilizándolo como mano de obra prisionera; mientras que la tercera etapa en la historia carcelaria consistió en el modelo de Filadelfia, considerado como un “modelo correccionalista y moralizador enfocado a la redención del preso”; como cuarta etapa se manifiesta el modelo “progresista” de Montesinos en la penitenciaría de Valencia, España. Este modelo se replicó en la mayoría de los penales del mundo.

De estas cuatro formas de prisión, Alejandro Maconochie, director de las Colonias Penales de Australia, aplicó en 1845 su modelo penitenciario, bajo un esquema de sistema progresivo, al cual denominó “Mark System” (Gómez-Grillo, 2005). Este modelo estaba organizado en tres etapas las cuales son:

1. Filadelfia que es el aislamiento celular continuo diurno y nocturno bajo régimen.
2. El modelo Auburn, consistente en el trabajo colectivo diurno, aislamiento celular nocturno siempre bajo el criterio de silencio absoluto continuo.
3. “Tickets of leave”, esto es, “ticket de salida”, en el cual el recluso se ganaba esta oportunidad a través de su trabajo, ya que con un número suficiente de ese ticket lograba el preso su libertad condicional o su libertad plena. Este tratamiento se aplicó en toda Inglaterra con algunas variantes.

Por otra parte en Irlanda, en 1856 Sir Walter Crofton, director de Prisiones Irlandesas, introduce el modelo penitenciario de “la libertad intermedia”, la cual estaba constituida en cuatro etapas: 1. Modelo Filadelfia; 2. Modelo Auburn; 3. Modelo Montesinos; y 4. Crofton, con el Modelo de la libertad anticipada y plena (Gómez-Grillo, 2005).

Gómez Grillo (2005), afirma “que esta es la fórmula de tratamientos de los delincuentes más aplicada en el mundo penitenciario con las variantes consiguientes de país a país”. Para el autor el ciclo de transformación a lo largo de la historia de la cárcel, inicia en el siglo XVIII con el surgimiento de estas instituciones, se consagra en el siglo

XIX, y en el siglo XX la cárcel es condenada; mientras que para el siglo XXI, el autor afirma debe de ser el siglo de la desaparición de la cárcel. Asimismo, sostiene que son tres las grandes posturas en la institución carcelaria; el “reformismo”, el “reduccionismo” y el “abolicionismo”. Para los reformistas las prisiones representan lugares donde los delincuentes reciben tratamiento tal como lo establece la Organización de las Naciones Unidas en sus normas mínimas para tratamientos de delincuentes.

La Organización de las Naciones Unidas en el documento titulado *Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos* (1977), afirma que lo que ha ocurrido se fundamenta en el hecho de que a las instituciones penitenciarias “no les han proporcionado los medios para cumplir su encomienda resocializadora”, y que por lo tanto se debe reformarla, transformarla y mejorarla, con una selección apropiada de personal con el cambio de programas del ofrecimiento de penas que, tal como lo establece Gómez-Grillo (2005), estas “sean adaptadas a las necesidades de los presos, y en las cuales haya trabajado en la formación profesional, educación general, terapia individual y de grupo”.

De acuerdo a los reduccionistas, Gómez-Grillo (2005) sostiene que la cárcel debe reducirse en su mínima expresión, que deberá ser utilizada sólo para aquellos sujetos merecedores de penas largas; en este caso serían los culpables de delitos graves. Mientras que respecto a los abolicionistas, el autor afirma que estos buscan que se elimine en su totalidad la prisión, y consideran “que la única manera de mejorar las cárceles sería suprimiéndolas, ya que para ellos la cárcel es un causa perdida, que deberá ser reemplazada por hospitales, o por algo diferente a la pena de prisión que se conoce”.

Desde la perspectiva de Gómez-Grillo (2005), Foucault, Baratta y Melossi, son tres de los principales exponentes en la historia evolutiva del proceso carcelario. El autor sostiene que, de acuerdo a Foucault, “la exigencia disciplinaria se cumplirá mediante tres prácticas”, estas son “el aislamiento, el trabajo y la modulación de la pena”:

El aislamiento garantizará que se puede ejercer sobre el preso un poder completo, ya que la soledad aseguraría la sumisión total. En relación al trabajo penitenciario Foucault cree que se recompensa la habilidad del obrero, pero no se enmienda al culpable, y que confía más en la variación de la pena, es decir, en su no fijación estática, ya que esta deberá irse ajustando a la transformación “útil” del recluso durante su proceso de encierro.

Para el teórico criminológico crítico, Alessandro Baratta, “la cárcel es contraria a todo moderno ideal educativo porque... la educación alienta el sentimiento de libertad y de espontaneidad del individuo y la vida en la cárcel... tiene un carácter represivo y uniforme...”; el autor afirma que los estudios de este género concluyen diciendo que “la posibilidad de transformar un delincuente violento asocial en un individuo adaptable a través de una larga pena, no puede realizar un objetivo como institución educativa” (Baratta, 1986 en Gómez Grillo, 2005).

Para Darío Melossi y Máximo Pavarini, ambos criminólogos, “la posibilidad del tratamiento penitenciario se ajusta igualmente a los principios del radicalismo crítico criminológico” (Gómez-Grillo, 2005). Melossi y Pavarini, afirman que el objetivo final de la educación penitenciaria es transformar a un “sujeto real”, el que cometió un delito, en un “sujeto ideal”, aquel que se encuentra recluido y que debe ser reeducado. Desde la perspectiva de ambos criminólogos, la cárcel y las “casas de corrección” se convirtieron en fábricas donde los internos eran explotados por su mano de obra cautiva, ya que tratan de transformar al delincuente en un trabajador proletario, y para ellos el encarcelamiento es un verdadero proceso al cual llaman “mutación antropológica”, o sea la transformación de un delincuente en un proletario. Para Melossi y Pavarini:

La penitenciaría es, por tanto, una fábrica de proletarios y no de mercancías... la cárcel, en su dimensión de instrumento coercitivo, tiene un objetivo muy preciso: la reconfirmación del orden social del burgués (la neta distinción entre el universo de los propietarios y de los no propietarios) para que se convierta en un proletario socialmente no peligroso, es decir, para que sea un proletario que no amenace la propiedad.

En resumen, Gómez-Grillo (2005) identifica la existencia de diferentes esquemas o modelos carcelarios-penitenciarios que han imperado a lo largo de la historia y que cuentan con rasgos distintivos y particulares cada uno, entre estos se encuentran:

1. El penitenciarismo de los países socialistas, que corresponde a la idea del trabajo.
2. Al sistema nórdico, el cual está basado en la actitud respetuosa hacia la personalidad del recluso, sus derechos y el interés por sus estudios.
3. El sistema europeo, como un sistema ecléctico, en el cual sobresalen los países de Bélgica y España.
4. El sistema de Japón, cuya tendencia es hacia la organización militar o paramilitar.
5. El sistema de Estados Unidos y su masificación.

6. El sistema de Latinoamérica, sustentado en la liberalidad interna con un régimen de comunicaciones con el exterior, y visitas íntimas periódicas, con profundas fallas materiales, estructurales y funcionales, que de acuerdo al autor esta clasificación, es considerada en Europa como “notoriamente acertada”.

2.1.4. La perspectiva institucional de la reinserción social en México

Con la finalidad de analizar la legislación existente en materia de reinserción social resulta preciso definir este concepto desde diferentes perspectivas; Ojeda-Velázquez (2012), en *Reinserción social y función de la pena*, define este concepto como una manera de lograr que un hombre vuelva a encauzarse hacia la sociedad en la que cometió un delito; es decir, que puede regresar a la vida comunitaria. Por otra parte, Machado (2014) define a la reinserción social como:

El derecho que recae sobre todo condenado, que, mediando su voluntad, será asistido a través del sistema público, de forma gradual e individual, dotándolo de herramientas laborales y educacionales, acceso a la salud, a desarrollar algún deporte, y todas aquéllas que sean necesarias para ayudarlo a retomar su vida, y una vez en libertad poder dirigir su conducta con pleno respeto a las normas legales.

Córdova (2016) en el artículo *Política de reinserción social en México, la cárcel y su potencial para la reincorporación de los delincuentes a la sociedad*, citando al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define que la reinserción social como “el proceso por el cual el sistema de justicia criminal busca la reducción de la incidencia criminal al remover al agresor de la sociedad. Este sistema de justicia busca también que durante el internamiento se capacite al interno para que no vuelva a delinquir en su retorno a la sociedad y con ello se prevenga la reincidencia delictiva”.

De acuerdo a Córdova (2016), tomando como referencia la información del Senado de la República, afirma que en México el trabajo de reinserción social actualmente se está concentrando en el período de internamiento del privado de la libertad, pero que realmente se están haciendo pocas acciones en la comunidad penitenciaria a favor de los internos que se están reintegrando a la libertad.

Citando al Artículo 18 de la *Constitución Mexicana*, Córdova (2016), subraya que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos,

del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.

La autora precisa que el hecho de que, en la República Mexicana, se excluya al Estado y a la Federación de la responsabilidad de procurar los elementos y las políticas públicas necesarias para cumplir con los objetivos de la reinserción social de todas los privados y privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, y ésta, sólo recaiga en el sistema penitenciario, limita que este proceso se lleve a cabo de forma efectiva e integral para los reclusos del país.

En este sentido, la legislación mexicana, a través del *Código Penal Federal Mexicano* (2017), en el Título Segundo, Capítulo II, Artículo 25 referente a la Prisión, sostiene que:

La prisión consiste en la pena privativa de la libertad personal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en los centros penitenciarios, de conformidad con la legislación de la materia y ajustándose a la resolución judicial respectiva.

La medida cautelar de presión preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta, así como de las que pudieran imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea.

El límite máximo de la duración de la pena de la privación de la libertad hasta por sesenta años contemplada en el presente artículo no es aplicable para los delitos que se sancionen de conformidad con los estipulado en otras leyes.

Foucault en su obra *Vigilar y Castigar* (1989), define a la prisión “como lugar de ejecución de la pena, que es a la vez lugar de observación de los individuos castigados” (Rubio-Hernández, 2012). Mientras que la visión crítica de Baratta, en el texto titulado *Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal* (1999), afirma que: “la cárcel representa, en suma, la punta del iceberg que es el sistema penal burgués, ya que representa el momento culminante de un proceso de selección que comienza aun antes de la intervención del sistema penal con la discriminación social y escolar, con la intervención de los institutos de control de la desviación de los menores, de la asistencia social”.

De acuerdo a Julia Calvo Blanco (2016), autora de *Definición y Caracteres de Prisión en Derecho Mexicano*, la prisión como pena en el sentido jurídico, fue desconocida en el derecho antiguo, ya que dentro de los siglos XI y XII no aparecen mencionada; la autora establece que el concepto de prisión surge desde el Derecho Canónico y, desde ahí, se crean sitios para recluir a los culpables con la intención de que reflexionaran de sus culpas, y como parte de su penitencia para el arrepentimiento.

La autora sostiene que, en el caso de México, Bernardino de Sahagún y Bartolomé de las Casas, narraban que en nuestro país existió la prisión. Para conocer el desarrollo de las prisiones, Calvo (2016), lo divide en varias fases; la primera etapa de la prisión menciona que era un lugar donde tenían asegurados físicamente a los prisioneros; después surge la período de la explotación con las casas de trabajo, en donde se utilizaba a los presos como fuerza de trabajo; posterior a esta etapa viene la fase correccionalista y moralizadora, durante los siglos XVIII y XIX, que es cuando nace el sentido propio del término prisión; para los siglos XX y XXI emerge la última fase el período readaptador y resocializador que “estará subordinado a la individualización penal y al tratamiento penitenciario y pos penitenciario”.

Para Calvo (2016), el concepto de prisión se desarrolla una vez que se dio la desaparición de la pena de muerte, de los castigos corporales y otras penas que eran consideradas como denigrantes para quienes cometieron un delito; todo esto desaparece como parte del pensamiento del período de la Ilustración, dominante en el siglo XVIII; en este cambio, el Tratado de los delitos y de las penas de Beccaria, tuvo una influencia importante.

Por otra parte, Calvo (2016), afirma que de acuerdo en la modalidades y condiciones imperantes dentro de un centro penitenciario, se puede hablar de tres niveles de seguridad: máxima, media y mínima (este último implica una modalidad abierta); así mismo, la autora afirma que sobre los métodos de ejecución del sistema penitenciario existen “régimenes penitenciarios”; y que en el caso de México, el sistema penitenciario está basado en un régimen progresivo técnico, ya que “la extinción o la liberación jurídica de la prisión se da por varios caminos: por expiración del plazo íntegro

de la condena, por indulto, amnistía, condena condicional, perdón, prescripción, muerte del interno o conmutación por otra pena” (Calvo, 2016).

2.2. Sociología de la educación

Como punto de partida para establecer el significado e importancia de la educación, es importante analizar la definición de sociología; según el autor Luciano Pratt, citado en *Sociología de la Educación* (Castillo-Romero, 2012), “la sociología es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de la vida en sociedad. Su objeto de estudio son los seres humanos y sus relaciones sociales, así como sus transformaciones culturales, económicas y políticas a través de la historia”.

De acuerdo a Castillo-Romero (2012), se debe entender a la sociología como el estudio científico de los seres humanos en su relación como sistema social; el autor afirma que “por este motivo se tiene una visión en conjunto y un objetivo general para observar y analizar en forma sistemática la multiplicidad del desarrollo de la sociedad, y la organización que han desarrollado los seres humanos a lo largo de la historia”. Asimismo, Castillo-Romero, sostiene que estas relaciones se vuelven prácticas culturales de las personas que están involucradas en ese sistema social e impactan “tanto en la construcción de instituciones tales como el Estado, el sistema educativo, las normas jurídicas”.

Para Castillo-Romero (2012), la sociología, desde su marco teórico y de representación, debe partir del análisis sobre la sociedad y su cultura; asimismo, el autor explica que este primer acercamiento servirá “para tener una idea más precisa sobre la definición del objetivo de estudio y la relación directa con la idea educativa”.

La sociología según Adorno y Horkheimer (1969), citados por Rojas-León (2014), nace como “hija del positivismo”; ésta busca liberar al conocimiento de la voluntad religiosa y de cualquier relación o tendencia de la metafísica que provenga de la filosofía, y esto tratan de lograrlo a través del rigorismo de la objetividad y de un proceso científico y de investigación de las problemáticas sociales. De esta forma, Rojas-León (2014) sostiene que “el aporte de la sociología hacia la investigación, son los métodos y las investigaciones teóricas acerca de la sociedad que van a surgir de los mismos estudios científicos de la sociología”.

Con lo anterior se da un alejamiento de lo emocional y lo religioso que predominaba desde la filosofía; Elías (2002), sostiene que este alejamiento se da como una “forma de comprender la realidad, pasando a una racionalidad a través de la ciencia, y tratando de evitar la transferencia de conocimientos, técnicas y métodos de las ciencias naturales a las ciencias sociales”.

De acuerdo a Rojas-León, el saber sociológico es legitimado o deslegitimado por la sociedad, según la función que le dé quien está investigando y la utilidad que se le asigne socialmente. De esta forma, el autor asevera que:

Para algunos la sociología es capaz del análisis y diagnóstico de la sociedad, para otros aporta el ideario de la lucha de los oprimidos en contra del poder, para algunos es la generadora de instrumentos para la dominación de quienes ejercen poder político y para otros, se integra en proyectos de cambios sociales por medio de la acción participativa de comunidades. Al final la utilización del conocimiento sociológico por parte de la comunidad científica, los actores sociales y los actores políticos encargados de la toma de decisiones importantes, son en última instancia quienes definen la importancia (práctica) de los aportes de la sociología para la sociedad.

Rojas-León (2014) en *Aportes de la Sociología al estudio de la Educación*, menciona que una serie de aportes teóricos se han realizado a través de la Sociología a la Educación, los cuales se pueden estructurar por escuelas y corrientes para el mejor entendimiento de la misma. Conforme al autor, una de las corrientes es el funcionalismo y la influencia de Durkheim; en esta corriente el sociólogo de origen francés, se prioriza por encima del individuo a las estructuras sociales, dando “una importancia relevante a la socialización y a los procesos reproductivos de las pautas socioculturales; otorgando un valor relevante a la coacción y coerción social sobre el individuo” (Rojas-León, 2014).

Es importante destacar que la sociología para Durkheim, es muy importante; el autor afirma que esta representa la adquisición de las competencias necesarias de los individuos “como parte del proceso de integración de los mismos a la sociedad” (Rojas-León, 2014). Dando como resultado final un modelo de personas o de individuo específico para un determinado sistema social en espacio y tiempo definidos.

Para Durkheim (citado por Rojas-León, 2014); la educación y el sistema educativo dan respuesta a los requerimientos y necesidades de un sistema social, además considera importante para un sistema educativo las aportaciones y participación específica del

Estado, estableciendo “fines de índole social, y el poder que la educación tiene para tratar de alcanzar esos fines”. Así mismo, el sociólogo francés reconoce “la diferencia entre educación y pedagogía donde se desprende que la educación no es más que la materia de la pedagogía; esta última estriba en una determinada forma de pensar respecto a los elementos de la educación”.

Por otra parte, Durkheim citado por Rojas-León (2014), afirma que “es la Sociología la ciencia que ayuda a determinar los fines de la educación que se encuentran acordes con los fines de la sociedad, y para lo cual es necesario la reproducción de las pautas socioculturales, donde cada norma e institución cumple con darle mantenimiento a la sociedad para que siga conservando su forma”.

Para el autor de *Educación moral*, el proceso educativo se presenta desde la primera infancia, pero es sin duda en la segunda infancia, la cual se desarrolla en “la primaria y lejos de familia”, donde “se sientan las bases de la moral para la vida social que se vive fuera del círculo familiar”; es así como los individuos durante la infancia aprenden las reglas morales para particulares circunstancias que “al agente moral le toca decidir cómo convenga particularizarla, siempre hay un margen que se deja a su iniciativa, pero este margen es limitado” (Rojas-León, 2014).

Dentro del análisis antes realizado, Durkheim menciona “elementos de la moralidad”: entre estos se encuentra el “espíritu de la disciplina”, que a través de regular las conductas define las posibilidades que un individuo tiene en la sociedad; la “vinculación a los grupos”, lo cual implica el ingreso a la sociedad de los individuos en base a su necesidad natural de pertenencia a grupos sociales. Asimismo, dentro de este esquema es preciso definir el espacio correspondiente a los individuos; por tal motivo, el sociólogo afirma que hay un tercer elemento, este es la “autonomía de la voluntad”, misma que es un “elemento de la moralidad y parte de la antinomia entre las reglas morales exteriores a la voluntad y la autonomía individual”.

De esta forma Rojas-León (2014), concluye con una definición de la educación donde dice que:

Es un proceso cambiante que se desarrolla durante el ciclo de vida (con un énfasis especial en la niñez-adolescencia-juventud), poniendo al alcance de los individuos, valores, conocimientos, desarrollo de destrezas, pautas socioculturales, que le permite a los individuos una mejor inserción en la sociedad, y un desarrollo a cada uno de ellos de sus capacidades y actitudes, en busca de un desarrollo pleno del bienestar personal y social de los individuos.

Tomando como referencia los conceptos de Durkheim expuestos por Rojas-León (2014), la educación debe ser un agente que potencie las capacidades de las personas que configuran un determinado sistema social; a través de este proceso los miembros de la sociedad podrán desarrollar las habilidad, actitudes y conocimientos necesarios para su crecimiento y para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Sin embargo, la educación es un proceso cambiante y debe adaptarse a las características de los individuos; de esta forma y contextualizando al sistema penitenciario, según los conceptos teóricos de Durkheim, la educación que se proporciona en los centros penitenciarios en México, en específico en el CERESO Apodaca, bien canalizada puede crear en los internos representaciones sociales que les ayuden en su proceso de reinserción social, una vez que obtengan su libertad.

Araya (2002) en el artículo *Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión*, dice que “las representaciones sociales son sistemas cognitivos, en los que se puede reconocer estereotipos, creencias, opiniones, valores y normas que tienden a tener una orientación de actitud positiva o negativa. Este sistema se constituye también de códigos, valores, principios que conforman la conciencia colectiva, la misma que norma y establece los límites en que las mujeres y hombres actúan”. La pregunta que se hace la autora es: ¿Por qué estudiar las representaciones sociales?

Moscovi (citado por Materán, 2008) define las representaciones sociales como:

...sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (...) No representan simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (...) sistemas de valores, ideas y prácticas con una doble función; primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad, al proveerlos con un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal.

Por su parte, Araya (2002) respecto al significado de representaciones sociales menciona que:

Las representaciones sociales se definen como formas específicas de entender y comunicar la realidad, y éstas influyen una vez que son determinadas por las personas por medio de sus interacciones. Por lo tanto, las representaciones sociales corresponden en la sociedad, a los mitos y creencias; versión contemporánea del sentido común.

Para Araya (2002), las representaciones sociales (RS) se producen por medio de las vivencias y experiencias que dan en el día a día de forma cotidiana, por el sentido común; es decir, las representaciones sociales, se elaboran por las diferentes situaciones que afectan a las personas, como pueden ser las etapas de la vida: adolescencia, juventud, entre otras. Es importante destacar que esta forma en la que se conocen las representaciones sociales es la que ha tenido un impacto más significativo en campo de investigación en ciencias sociales.

Moscovici (1961), citado por Araya (2002), habla sobre los factores que originan las representaciones sociales, “las cuales nacen determinadas por las condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el hecho de surgir en momentos de crisis y de conflictos”. Asimismo, el autor, basado en los resultados de su investigación dedujo tres condiciones que considero de emergencia: “primero la dispersión de la información; en segundo la focalización del sujeto en forma individual y en forma colectiva; y tercera que es la presión a la inferencia del objeto socialmente definido”.

En la primera condición la dispersión de la información, que menciona Moscovici, citado por Araya (2002). Toda la información con la que se cuenta no es suficiente y por lo general está desorganizada; todos los datos de los cuales disponen las personas para dar respuesta a una pregunta por lo general son limitados.

La segunda condición que es la focalización del sujeto en forma individual o forma colectiva, Moscovici citado por Araya (2002), menciona al respecto que se focalizan porque intervienen en la interacción social como hecho que alteran las opiniones. Para otros investigadores, como Banchs (1984) y Herzlich (1979), citados por la autora, “la focalización es señalada, en términos de implicación o atractivo social de acuerdo a los

intereses particulares que se mueven dentro del individuo perteneciente a los grupos sociales, la focalización será diversa”.

La tercera condición mencionada por Moscovici, se refiere a “la presión a la inferencia del objeto socialmente definido, es decir, se da una presión socialmente, que reclama posturas, acciones y opiniones de hechos que están focalizados por el interés público”. Durante la vida regular y cotidiana de todo individuo, el contexto y las relaciones sociales demandan a los grupos sociales y los miembros de esos grupos, estar en situación de responder en todo momento.

Araya (2002), menciona que las representaciones sociales se generan a través de dos procesos. El primero de los procesos se le conoce como objetivación; a través de este proceso “se materializan un conjunto de significados, es decir, se establece una relación entre conceptos e imágenes; objetivizar es reabsorber un exceso de significados materializándolos” (Moscovici, 1961). El mismo Moscovici afirma que “todas las definiciones sobre la objetivación de una representación social intentan explicar el paso de un conocimiento científico al dominio público”.

El segundo proceso por el cual se generan las representaciones sociales se le conoce como anclaje, con este proceso las representaciones sociales, “se enlazan directamente con el marco de referencia de la colectividad, y ayuda para interpretar la realidad y actuar; permite que los eventos y objetos de la realidad que aparecen como extraños y sin significado para la sociedad, se concreten en su realidad social”. A través de este proceso “la sociedad cambia el objeto social por un instrumento del cual pueda disponer, y este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 1961).

Moscovici, citado por Araya (2002), aclara ambos procesos argumentando que “la objetivación traslada la ciencia al dominio del ser, y que el anclaje la delimita en el del hacer”. De esta forma “las representaciones sociales aparecen en la sociedad moderna en donde el conocimiento está fortalecido por las informaciones, las cuales instan a ser consideradas como pautas para la vida cotidiana”.

Materán (2008), en *Las Representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa*, resalta que la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, “ha generado una de las vertientes modernas de la investigación en las ciencias sociales, en especial el ámbito psicosocial y, que todavía trabaja por convertirse en una tradición de investigación, al igual que movimientos como el constructivismo social”.

Asimismo, Materán (2008), afirma que “el modo en que la teoría de las representaciones sociales de Moscovici, interviene en las prácticas educativas y constituye un objeto pertinente de investigación, porque participan en la formación de los conocimientos”.

Desde la presente investigación se postula que es a través de la aplicación de la teoría de las representaciones sociales en el proceso educativo, y de reinserción social de los centros penitenciarios, en forma específica en el CERESO Apodaca, se puede contribuir en forma constructiva para que las personas privadas de la libertad se integren satisfactoriamente en la sociedad.

2.2.1. Fundamentación de la educación a nivel mundial

La educación es un derecho de los ciudadanos en el mundo; este proceso les permite a los individuos contar con las herramientas necesarias para mejorar sus condiciones de vida y, con ello, ampliar sus posibilidades de desarrollo y de movilidad social. Tal es la importancia de la educación a nivel mundial que la Organización de las Naciones Unidas, insta de manera constante a los países miembros para diseñar políticas públicas y programas sociales para facilitar el acceso a la educación a todas las personas.

Desde el punto de vista internacional, la educación se encuentra fundamentada como uno de los derechos fundamentales. En la *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (ONU, 1948), específicamente en el Artículo 1º se indica que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”; entre los derechos con los que todos los seres humanos deben contar es la educación.

Asimismo, la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, en el Artículo 2º señala que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Además, dentro de este mismo artículo se mencionaba que los derechos universales son efectivos independientemente de la condición de los individuos; textualmente en el texto se menciona que:

No se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

En lo que respecta al derecho a la educación, la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, en el Artículo 26, en el primer apartado menciona que:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

De esta forma, la ONU insta a las naciones miembro a buscar las políticas públicas adecuadas para lograr que todos los ciudadanos de estos países tengan la posibilidad de acceder a la educación; principalmente a la preparación elemental obligatoria y, además, señalan que se debe generalizar la instrucción técnica y profesional. La educación, tal como se establece en la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, debe buscar que los ciudadanos desarrollen por completo sus capacidades; textualmente, el segundo apartado del Artículo 26 indica que:

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Por otro lado, la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, en el Artículo 25, se indica que todos los seres humanos tienen el derecho a una calidad de vida óptima para su desarrollo y que le permita alcanzar el estado de bienestar en todos los sentidos;

para conseguir este objetivo, la educación tiene un papel relevante. De forma textual en este documento se establece que:

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2019), indica que la educación “es un derecho humano fundamental” ya que esta “recoge los principios de indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos dado que la educación cubre aspectos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”.

Desde esta organización se considera que la educación es uno de los derechos que puede ser considerado como “clave” ya que a través de este proceso los seres humanos obtienen las capacidades necesarias para el completo ejercicio y disfrute del resto de los derechos humanos (UNESCO, 2019). En ese sentido, esta institución internacional indica que:

Todos los derechos civiles, culturales, económicos, sociales y políticos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima. La efectiva implementación del derecho a la educación es por lo tanto un requisito previo para la democratización y para la total participación de todos los ciudadanos en todas las esferas de la vida.

Como se mencionó anteriormente, la educación es “un derecho humano fundamental” y el cual representa la misión principal de la UNESCO; además, la educación se encuentra ligada a otros reglamentos e instrumentos internacionales que regulan los derechos humanos. Actualmente, tal como lo establece la UNESCO, la educación es uno de los principios rectores en los que se fundamenta la denominada Agenda Mundial Educación 2030 y se encuentra contenida dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS número 4). Este se enfoca en que todos los seres humanos tengan la posibilidad de acceder a la educación y es “un catalizador para lograr un desarrollo sostenible”.

Empero, aún cuando desde la UNESCO y otros organismos internacionales se establece que la educación es un aspecto de gran importancia para el desarrollo de los seres humanos, existen factores que alejan –sobre todo a los menores de edad– de los planteles educativos, aspecto que incide directamente en sus condiciones de vida limitando sus posibilidades de desarrollo.

... y a pesar de que el derecho a la educación para todos está presente en varios instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la educación básica libre y obligatoria, millones de niños siguen privados de oportunidades para acceder a la educación y gozar de la misma. Así pues, uno de los más importantes retos morales de nuestro tiempo es adquirir un desarrollo realmente progresivo.

La UNESCO (2019) indica que la educación tiene “un carácter de derecho habilitante”. Se considera que este proceso “es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad”.

Para conseguir con los objetivos anteriormente planteados, es necesario que exista “igualdad de oportunidades y el acceso universal”; de otra forma, la brecha de rezago existente actualmente no podrá disminuir. Por tal motivo, los instrumentos, normas y reglas diseñados por la UNESCO incluyen una serie de “obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad”. Este marco normativo y legal es sumamente importante, por lo que los estados miembros de la ONU buscan la forma idónea –de acuerdo a la realidad de cada país– para cumplir lo que en este se indica.

Asimismo, para lograr incrementar las posibilidades de acceso a la educación de todos los seres humanos, este organismo brinda asistencia y asesoramiento a los Estados para que “puedan elaborar marcos jurídicos e institucionales nacionales sólidos con miras a fomentar las bases y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible”. Es decir, desde la UNESCO se fomenta la creación de una reglamentación local adaptada a las condiciones de cada nación que, a su vez, es responsabilidad de los gobiernos cumplir cabalmente; tanto las obligaciones de índole política y jurídica para suministrar una educación de alta calidad, “así como a la aplicación y seguimiento más eficaces de las políticas y estrategias en los sistemas educativos” (UNESCO, 2019).

Para la evaluación de las políticas educativas implementadas por cada Estado para garantizar el acceso a la educación de todos los ciudadanos, los Gobiernos utilizan distintos métodos e indicadores que determinen un enfoque común respecto al sistema educativo de cada país. En este sentido, la UNESCO (2019), indica que también es relevante la labor de investigación realizada desde las mismas instituciones educativas para el mejoramiento de este proceso.

La UNESCO, en la publicación titulada *La educación como derecho humano* (2005), indica que este proceso debe cumplir con varios requisitos, entre los que se incluyen la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad. Estos configuran un sistema educativo equitativo y que este configurado de acuerdo a las necesidades de cada grupo social.

La disponibilidad, según UNESCO (2019), indica que “la educación fundamental debe ser gratuita y obligatorio para todas las personas”. Por tal motivo, esta institución insta a todas las naciones miembro a “eliminar cargas y costes, y dotes de ayudas a la infancia que atraviesa mayores dificultades, como las niñas, los huérfanos o aquellos más pobres”. Asimismo, indica que cada una de las naciones debe destinar una parte del producto interno bruto a financiar la educación de todos los ciudadanos, principalmente en el nivel básico.

Por otro lado, la accesibilidad de la educación indica que “se debe eliminar toda forma de discriminación en el acceso a la educación, bien sea por cuestión de raza, etnia o por cualquier otra causa”. Asimismo, UNESCO (2019), tal como lo indica en la Convención contra la Discriminación en Educación (1960), que cada una de las naciones miembro debe buscar la manera de que los “miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma”.

Además de los dos aspectos analizados anteriormente, la UNESCO (2005), señala que la educación debe contar con el requisito de la aceptabilidad, es decir que esta “ha de ser de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje”; y además es

fundamental que el proceso incluya la adaptabilidad necesaria, esto es que la educación “debe adaptarse a cada alumno o alumna”.

Aplicados al contexto penitenciario, estos requisitos —principalmente el de adaptabilidad y aceptabilidad, permitirán que el proceso educativo se adecúe a las características de las personas privadas de la libertad dentro de un centro de reinserción social para el cumplimiento de una sentencia; asimismo, la educación que se brinda a los internos penitenciarios debe ser accesible, es decir, debe reconocerse que estas personas cuentan con el derecho a seguir educándose y que las instituciones deben disponer una parte de su presupuesto a garantizar su acceso a actividades educativas.

2.2.2. Acuerdos internacionales en torno a la educación

En la historia han existido distintos hechos trascendentales para el desarrollo de la educación en el mundo. El primero de estos sucesos, según García-Salcido (2018), se registró el 10 de diciembre de 1948, cuando los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas desarrollaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en este documento, en el que se incluyen los derechos y libertades de todos los ciudadanos, el Artículo 26 incluye lo correspondiente al derecho a la educación —tal como se estableció anteriormente—.

Sin embargo, García-Salcido (2018), afirma que, aunque este documento busca el “ideal común”; las buenas intenciones contenidas en este texto, no obligan a las naciones miembros de la ONU a cumplir de forma forzosa con esta reglamentación. Por tal motivo, en 1966, se elaboró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de esta forma, las naciones miembros de la ONU ratificaron su obligación para “garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades fundamentales indicadas en el mismo”.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que opera desde 1976, en el artículo 13 menciona el derecho a la educación recuperando el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y, además, detalla las características que la educación debe de cumplir; textualmente este artículo indica que:

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. (...) la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Para los años 90, con fundamento en los tratados internacionales citados con anterioridad sobre el derecho a la educación, la comunidad internacional buscó la manera de incrementar la atención sobre el tema educativo. Por tal motivo se puso en marcha el programa Educación para todos (EPT), mismo que fue presentado como reflejo de la preocupación de las naciones miembro de la ONU respecto al incumplimiento del derecho a la educación en el mundo.

Finalmente, en el año 2000, se registró uno de los sucesos más importantes para la educación con el desarrollo del Foro Mundial sobre la Educación; este evento, que se llevó a cabo en Dakar, reunió a representantes de todas las naciones para realizar un análisis de los avances realizados en la búsqueda de brindar oportunidades educativas a todos los seres humanos; asimismo, se estableció que el principal logro que las naciones deberían buscar sería lograr el derecho de la educación para todos en el año 2015.

En el año 2015, después de la negociación respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en continuación a los mismos, se presentaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible (2015-2030). La agenda, denominada “Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y que entró en vigor en enero de 2016, incluye como meta número 4, a la educación de calidad, indicando que las naciones miembros de la ONU deben “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Sin embargo, para el año 2018, seguía existiendo un importante rezago educativo, principalmente en menores de edad; inclusive, aún se estima la existencia de “617 millones de personas que carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización” (ODS, 2020).

2.2.3. Retos de la educación a nivel internacional

A nivel internacional, aún existen importantes retos para lograr que todos los seres humanos cuenten con acceso a oportunidades educativas; Vernos Muñoz, Relator Especial

de la Organización de las Naciones Unidas, indica que “la educación debe constituir un espacio de libertad para el ejercicio y el aprendizaje de todos los derechos, responsabilidades y capacidades humanas” (UNICEF, 2008).

La UNICEF (2008), después del análisis de las condiciones académicas y de acceso a oportunidades educativas imperantes en las naciones miembro de esta organización indicó que existen una serie de prioridades para “la defensa y promoción del derecho a la educación para los próximos años”; si bien estas recomendaciones fueron establecidas en el año 2008, la situación actual no es distante de aquella realidad.

La primera de las prioridades educativa enfatizadas por UNICEF (2008), tiene relación la educación y el desarrollo. Esta institución establece que las naciones miembros de la ONU deben “impulsar el derecho a la educación dentro del marco de los derechos humanos, destacando la relación que existe entre la educación y el desarrollo”. Para esto, se considera que es necesario que cada nación evalúe cuáles son los obstáculos existentes para el acceso a la educación, principalmente en aspectos relacionados con cuotas, costos de libros, vestimenta y materiales necesarios; y, en base a esta evaluación deberán establecer las medidas pertinentes para que no se conviertan en un impedimento para la educación.

Otro de los retos de la educación planteados desde la UNICEF (2008), se enfoca en la disminución de la discriminación en el ámbito educativo; principalmente porque esta afecta a todos los seres humanos que buscan continuar con su preparación académica. Este aspecto tiene una importancia especial puesto que los grupos indígenas, las minorías religiosas, raciales o lingüísticas, así como los grupos en vulnerabilidad (como pueden ser las personas privadas de la libertad) pueden ver coartado su derecho a la educación al ser discriminados por alguno de estos motivos.

La UNICEF (2008), indica que otro de los retos importantes para las naciones miembro de la ONU, abarca lo concerniente a la calidad de la educación; es decir, esto implica “incidir en los procesos de aprendizaje y en el entorno del alumno(a) y también la calificación de los maestros y maestras”. En ese sentido, desde esta organización se

establece que es fundamental trabajar en el incremento de profesores de calidad y que cuenten con la preparación adecuada para ejercer su función.

Además de lo planteado anteriormente, la UNICEF (2008), indica que el acceso a oportunidades educativas debe ser regulado; el reto en este sentido, es que aquellas naciones que incumplan con las obligaciones correspondientes en relación a la educación puedan ser juzgadas en los tribunales tanto nacionales como internacionales. Para esto, además, esta institución indica que otro de los desafíos es la creación de un mecanismo de recolección y medición de indicadores para evaluar el grado de consecución del derecho a la educación.

Por último, como advertencia final, la UNICEF (2008), indica que las naciones que conforman la ONU, tienen el reto de destinar la financiación adecuada dedica a la educación pública y gratuita y que, en caso de ser necesario, deberán trabajar de la mano con el Banco Mundial para obtener los recursos necesarios para que todos los seres humanos cuenten con acceso a oportunidades educativas.

2.3. Educación en México: Fundamentación y motivación

En México, la educación encuentra su principal fundamento en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; desde 1857, el artículo tercero establecía, aunque de una forma limitada y en apariencia sencilla el derecho a la educación. En este documento se indicaba que “la enseñanza es libre, la Ley determinará que confesiones necesitan título para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir”. Ramírez-Raymundo (2013), indica que, en el desarrollo de la educación en México, este es “un punto de referencia que permitiría observar la evolución histórica del derecho a la educación”.

Posteriormente, durante el Gobierno de Benito Juárez (1858-1872) se contempló que la educación, por lo menos en el nivel primario, debía ser obligatoria y gratuita para todos los ciudadanos, sin embargo, años más tarde “no quedaría reflejado en la Constitución de 1917, sino hasta años posteriores con las reformas” (Ramírez-Raymundo, 2013).

Durante la época de la Revolución Mexicana de 1910, la educación era un derecho exclusivo de la élite y de las clases económicamente mejor posicionada; el acceso general y las oportunidades para todos los ciudadanos aún no está considerado. Cuando se promulgó la Constitución de 1917, respecto a la educación, se incluyeron conceptos como enseñanza libre, educación laica y gratuita, entre otros. El Artículo 3º indicaba que:

La enseñanza es libre; pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa, al ministro de algún culto, podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria.

Posteriormente, en 1934 se realizó la primera reforma al Artículo 3º de la Constitución Mexicana. Ramírez-Raymundo (2013) señala que esta reforma fue impulsada por el Partido Nacional Revolucionario y en esta, se agregaron los conceptos de “educación socialista”, así como una serie de obligaciones y facultades del Estado sobre el derecho a la educación. La reforma a este artículo establece que:

La educación que imparte el Estado será socialista, y además de excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear una juventud con un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Sólo el Estado-Federación, Estados, Municipios - impartirá educación primaria, secundaria y normal.

Podrá concederse autorizaciones a los particulares... de acuerdo en todo caso con las siguientes normas: I.-... las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, las sociedades por acciones exclusivas o preferentemente realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas directa o indirectamente con la propaganda de un credo religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas económicamente...

... La educación primaria será obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente... El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias... a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y al señalar las acciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos infrinjan.

La reforma al Artículo 3º realizada en 1934, realizada durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), indica que, tal como lo analiza Ramírez-Raymundo (2013), la educación era una prioridad para la administración federal, principalmente porque “está

más enfocado a su parte administrativa y organizacional en relación a las obligaciones y atribuciones del Estado en la materia, de tal forma que las garantías y derechos de los ciudadanos no se desarrollan en este momento de la historia”.

Uno de los puntos más importantes de esta reforma radica en el que se establecieron las aportaciones que el gobierno debería de destinar para garantizar el acceso a la educación de todos los ciudadanos; además, se contemplan acciones dirigidas para penar a los funcionarios que no cumplan con las disposiciones respecto a la educación.

La segunda reforma al Artículo 3º de la Constitución Mexicana de 1917 se llevó a cabo en 1946; esta incluye elementos enfocados hacia el reconocimiento de la educación como un derecho y se establecen mecanismos a través de los cuales se pudiera garantizar el acceso a todos los ciudadanos a oportunidades educativas. En esta reforma se suprimió el concepto de “educación socialista”; Ramírez-Raymundo (2013), indica que esta tiene “una diferencia sustancial en la redacción jurídica en comparación con la anterior reforma”. De manera textual, la reforma de 1946 indica que:

La educación que imparta el Estado-Federación, Estados, Municipios-tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. I.- Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias... basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: a).- Será democrático... como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; b).- Será nacional en cuanto - sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá... aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y c).- Contribuirá a la mejor convivencia humana... VI.- La educación primaria será obligatoria; VII.- Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; VIII.- El Congreso de la Unión... expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la fundación social educativa... a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

La Reforma de 1946 representó el interés constitucional en la educación como un proceso que tiene como objetivo desarrollar todas las facultades y capacidades de los seres humanos; a su vez, con esta modificación al Artículo 3º, el Estado reconocía que brindar oportunidades educativas a todos ciudadanos no sería fácil; sino que “conllevaba

identificar todos los elementos jurídicos, administrativos y de políticas públicas que se requieran para alcanzar su cumplimiento” (Ramírez-Raymundo, 2013). Como aspectos destacables de esta Reforma se encuentran que la educación primaria debe ser gratuita y obligatoria tal como lo establecía también la reforma de 1934; sin embargo, en esta, la gratuidad de la educación se extiende a todos los niveles.

Después de más de 30 años, en 1980, la tercera reforma al Artículo 3º tuvo como objetivo que las instituciones de educación superior tuvieran una mayor independencia. Ramírez-Raymundo (2013) afirma que para tal efecto “se realizó una adición, porque la fracción VIII es sustituida por una nueva fracción, y esta misma se convierte en la fracción IX”. El Artículo 3º de la Constitución Mexicana, con los añadidos anteriormente señalados estipula que:

VIII.- Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del Artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. IX.- El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.

Ramírez-Raymundo (2013), considera que los cambios y reformas en el campo de la educación realizadas durante 1946 y 1980 no son sustanciales. Es hasta 1992, en la cuarta reforma en la que, tal como lo indica el autor “se deroga la fracción IV que versa sobre las actividades educativas de las corporaciones religiosas, la fracción I se divide para pasar a ser fracciones I y II, quedando de la misma forma su contenido jurídico, por lo que se recorren las fracciones II y III para ser III y IV respectivamente, y esta última fracción mencionada es mínimamente reformada en cuestiones de redacción”.

La quinta reforma llegaría un año más tarde, en 1993 se modificó el Artículo 3º para indicar que el Estado Mexicano deberá atender todos los niveles educativos, desde el básico hasta el superior; asimismo, continúa considerando que la educación primaria y secundaria siguen siendo obligatorias. La principal modificación realizada durante este año se centra en el primer párrafo del artículo, el cual indicaba que “todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados y Municipios impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias”. Así mismo, Ramírez-Raymundo (2013), indica otra modificación, esta se presentó en el párrafo quinto que dice: “V.- Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

Sería hasta el año 2002, cuando se reformaría nuevamente el Artículo 3º; estas modificaciones se presentaron en forma de adiciones. Asimismo, en el Artículo 31 de la Constitución Mexicana, se refuerzan los conceptos del Artículo 3º y se establece la educación como una obligación para los mexicanos. En ese sentido, el Artículo 31 indica que:

Son obligaciones de los mexicanos: I. Hacer que sus hijos o pupilos concurren a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

En 2012 se registró otra modificación menor al Artículo 3º de la Constitución Mexicana; este cambio de redacción suprimió las palabras “estado, federación, estados y municipios”. Por lo tanto, se sustituyó con el siguiente texto “la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”.

Asimismo, esta reforma implicó que se agregara otros términos al inciso C del primer párrafo; sin embargo, estas modificaciones no cambiarían su contenido jurídico (Ramírez-Raymundo, 2013) ya que se precisó que la educación debería tener “aprecio y

respeto por la diversidad cultural”. Además, la fracción V se adecuó para indicar que el Estado promoverá todas las modalidades y niveles educativos y en el Artículo 31 se reformó la primera fracción de la siguiente forma: Todos los mexicanos buscarán “hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley”.

Para el año 2013, la novena reforma al Artículo 3º de la Constitución Mexicana, estableció el compromiso del Estado por garantizar la calidad de la educación; misma que está relacionada con los “recursos, materiales y organización” (Ramírez-Raymundo, 2013). En este sentido, desde la Constitución se indica que el Estado deberá buscar contar con la infraestructura, el personal docente y los instrumentos legales y jurídicos que permitan garantizar el cumplimiento de lo estipulado en este artículo.

Con este objetivo, las fracciones III, VII y VIII se modificaron de forma importante; además, según Ramírez-Raymundo (2013), “se adiciona un párrafo tercero, un inciso D al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX”. La adición al párrafo tercero indica que:

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

Por otro lado, la adición del inciso D de la fracción II establece que es obligación del Estado brindar una educación de calidad. Textualmente indica que la educación “será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos”. Además, en las reformas de los párrafos III, VII y VIII y por primera vez en la fracción III, se establece la necesidad de realizar exámenes de oposición; estos cambios estipulan que:

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República... Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a

cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan...

En esta misma reforma se registra la modificación del párrafo VII en el que se busca impulsar y desarrollar la investigación en el nivel de educación superior y establece que este es un factor que incide tanto en los ingresos de los docentes, como en sus posibilidades de promoción y crecimiento laboral (Ramírez-Raymundo, 2013). Por otro lado, en el párrafo VII se establece la necesidad de “fijar las aportaciones económicas correspondientes a la educación y las sanciones para los funcionarios que incumplan las disposiciones legales”. Finalmente, en la adición realizada al párrafo IX, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, mismo que sería dirigido por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) “con personalidad jurídica y patrimonio propio”. En forma concreta, esta fracción señala que:

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social...

Ramírez-Raymundo (2013), sostiene que el ámbito educativo en México, la creación del INEE, “ha sido un gran paso para realizar el impacto que tiene el alcance del derecho a la educación a través de las evaluaciones realizadas en el territorio nacional, y si bien no tiene un carácter jurídico de impartición de justicia, su creación está enfocada en evaluar la calidad, desempeño y resultados de sistema educativo en México”.

En relación a la creación del INEE y a la necesidad de que el Estado garantice el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos, se reformó también el Artículo 73 de la Constitución Mexicana para adecuarse a lo establecido en el Artículo 3º; específicamente se adecuó el párrafo XXV, quedando de la siguiente manera:

XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales... Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma.

Otra reforma al Artículo 3º de la Constitución se llevó a cabo en el año 2016; esta, entre otros cambios, implicó que se dejará de utilizar el término “individuo” al de “persona”. Ramírez-Raymundo (2013) analiza que este cambio “se encuentra en resonancia con el artículo primero Constitucional reformado en el 2011 y consagra el principio pro persona”.

El análisis de los principales cambios en la fundamentación de la educación en México como un derecho constitucional permiten indicar que este proceso permite el desarrollo y la realización personas. Contar con preparación educativa posibilita a todas las personas para encontrar las oportunidades que le permitan el acceso a condiciones de vida dignas. En ese sentido, desde la Constitución Mexicana se establece que la educación debe estar al alcance de todas las personas independientemente de su condición jurídica; por tal motivo, las personas privadas de la libertad deben contar con las opciones educativas que les permitan un mejor desarrollo cuando abandonen el centro penitenciario donde cumplen con su sentencia, así mismo, esto permitirá que se cumplan cabalmente los objetivos de la reinserción social.

Es importante destacar que, desde la Constitución Mexicana, se busca crear los mecanismos y políticas necesarias, así como la otorgación del presupuesto, para el desarrollo de investigaciones respecto al aspecto educativo. En lo que respecto al contexto de los grupos en condiciones de vulnerabilidad –como el de las personas que se encuentran reclusas– estas acciones se vuelven doblemente necesaria para determinar la forma idónea de brindar educación y capacitación laboral a este sector de la sociedad que se encuentra inmerso en un proceso de reinserción social.

2.3.1. Ley General de Educación

El Artículo 1º de la Ley General de Educación en México establece que el objetivo de esta reglamentación es “regular la educación que imparten el Estados –Federación,

entidades federativas y municipios–, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios”. En ese sentido, esta Ley indica que todas las personas tienen derecho a acceder a oportunidades educativas de calidad.

En este contexto, el Artículo 2º de esta Ley establece que “todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables”.

La educación, tal como lo establece esta ley, “es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera de que tengan sentido de solidaridad social”.

En el contexto penitenciario, el acceso de las personas privadas de la libertad a mejores oportunidades laborales permitirá que estos, al cumplir con su sentencia, cuenten con mayores herramientas para su desarrollo personal y social y, con ello, se transformen en una persona con un alto sentido de la vida en comunidad. Por tal motivo, es importante asegurar que estas personas cuenten con oportunidades que los posibiliten para continuar con su preparación académica.

La Ley General de Educación, en el último párrafo del Artículo 2º dice que “el sistema educativo nacional deberá asegurar la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes”. Además de estos conceptos, el Artículo 3º, afirma que:

El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Esta Ley, además, indica que la educación es un derecho para todos los mexicanos, sin importar sus condiciones; específicamente, el Artículo 7º señala que los fines de la educación que imparta el estado serán:

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas... II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos... VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos...

Reforzando lo que se indica en el texto anteriormente citado, el Artículo 8º de esta Ley, en los párrafos III y IV estipula que la educación:

III. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos y IV. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

Estos puntos refuerzan lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto al derecho de la educación. Desde esta reglamentación, el proceso educativo es visto más allá de la preparación académica; durante el período donde una persona tiene acceso a la educación, ella, recibe las herramientas necesarias para la vida comunitaria y para incrementar sus posibilidades de desarrollo. En ese sentido, el Estado busca garantizar que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones sociales, tengan acceso a la educación.

La reglamentación imperante en México en materia educativa indica de manera clara que ninguna persona puede ser excluida del acceso a oportunidades académicas; entre estas, las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social en el país. La educación de este sector de la población, además de disminuir el importante

rezago que existe entre las personas recluidas, permitirá que éstas, incrementen sus posibilidades de desarrollo y mejores sus condiciones de vida; asimismo, con estas acciones se presentará un descenso en la reincidencia delictiva.

2.3.2. Educación para los adultos

En la actualidad, la educación para los adultos permite que todas aquellas personas que por algún motivo debieron interrumpir su preparación académica, puedan retomar sus estudios y, con ello, concluir con su formación. Ramírez y Víctor (2010), sostienen que cada día es más común que adultos que no pudieron concluir su educación o aquellos que deciden continuar preparándose a lo largo de la vida busquen este tipo de opciones.

Los autores sostienen que esto se debe a que “el mundo está en permanente cambio, la mayor longevidad y la posibilidad de mayor tiempo de ocio han convertido la educación no formal y la educación de adultos en puntos clave de los nuevos desarrollos educativos”. Ramírez y Víctor (2010), definen a la educación de los adultos como aquella que se busca con la finalidad de “de iniciar, continuar y terminar su proceso de desarrollo o persiguiendo múltiples fines u objetivos; por tanto, este tipo de educación está dirigida a una población con características, estructuras e intereses propios”; por lo tanto, los modelos de educación a los adultos debe contar con una visión más inclusiva y debe de tomar como punto de partida las características y necesidades de quienes desean continuar preparándose.

La educación para los adultos no es un concepto nuevo. Ramírez y Víctor (2010), mencionan que fue a partir del siglo XVIII cuando en Inglaterra se diseñaron planes para que las personas pudieran aprender oficios y con ello, lograran la satisfacción personal. Por otra parte, para mediados del siglo XIX, en Francia, se establecieron las denominadas “Clases de Adultos”, lo que derivó en la creación de la “Asociación Politécnica de Instrucción Popular” y los “Cursos para adultos de las alcaldías de París”.

Para el siglo XX, la educación de los adultos estaba enfocada plenamente en la formación y capacitación laboral; después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la UNESCO, a lo largo del mundo se comenzaron a promover otra serie de acciones, principalmente, a través de las Conferencias Internacional de Educación de Adultos.

Ramírez y Victor (2010) señalan que entre los puntos más importantes se encuentran los siguientes:

En 1960, en la Conferencia de Montreal, Canadá, se emprendieron campañas de alfabetización.

En 1961, Cuba realizó una gran campaña de alfabetización donde logró reducir el analfabetismo a 3.9% en un solo año.

En 1972, se llevó una conferencia en Tokio, Japón donde se tomó en cuenta que en los años sesenta habían ocurrido cambios sociales, económicos, políticos, etc., acelerados por el avance científico y tecnológico.

En 1976, se realizó la tercera Conferencia Internacional sobre la Educación de Adultos en Nairobi, Kenya.

En 1985, se efectuó la IV Conferencia en París, donde se reconoció el papel de las Organizaciones No Gubernamentales.

En 1990, se tuvo la Conferencia Mundial sobre “Educación para todos” en Jomtiem, Tailandia.

En 1997, se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Educación de Adultos celebrada en Hamburgo, Alemania, donde se hizo una reflexión del programa “Educación para todos” y se reafirmaron los criterios de continuar atendiendo las necesidades básicas de instrucción para los adultos, con énfasis en la alfabetización y en la educación básica.

En México, la educación de los adultos es un aspecto sumamente importante de forma institucional; disminuir el rezago educativo entre las personas mayores de edad permite que tengan mejores oportunidades de desarrollo, principalmente, económico y social. En ese sentido, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública en México (2016), indica que “la experiencia en la impartición de los servicios educativos y el análisis de los elementos que inducen o limitan a los adultos a continuar sus estudios llevó en 1996 y 1997 a revisar los fundamentos conceptuales de la educación para adultos y a reformar sus modelos y estructuras de operación”.

El modelo establecido por la SEP a través del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA) indica que “el conocimiento informal y la experiencia que hombres y mujeres han acumulado a lo largo de su vida, ocupan un papel preponderante”; las opciones educativas para los adultos en México, están enfocadas en “promover la adquisición de las competencias académicas básicas y las destrezas laborales que permitirán a las personas una mejor integración al mercado de trabajo” (SEP, 2016).

Las opciones educativas en México parten de un modelo flexible y adaptado a las necesidades de los estudiantes; la SEP indica que en este “el adulto podrá optar por la educativa de su preferencia, con base en sus objetivos específicos de estudio, sus posibilidad y requerimientos de aprendizaje”. Asimismo, en este esquema, la SEP sostiene que el nivel de secundaria en la modalidad a distancia es una de opciones más solicitadas actualmente; la premisa para el diseño de este programa es el “acercamiento [de los adultos] con el entorno y las necesidades de la población adulta”; además, incorpora nuevos sistemas de calificación y acreditación de competencias.

El programa considera mecanismos novedosos de evaluación, en los que se valorarán los saberes previos de las personas, así como sistemas flexibles de acreditación que permitirán a la población mayor de 18 años tener acceso a los distintos grados o materias específicas de este nivel de la educación.

Ramírez y Victor (2010) indican que, en México, desde hace más de 50 años, “se concebía la educación para adultos de una manera fragmentada” y que se fundamentaba en tres aspectos principales: “alfabetización, post-alfabetización y educación básica”. Este modelo educativo se realizaba por etapas o en secuencia “primero se alfabetizaba, después, para afianzar la alfabetización, se proponían programas de post-alfabetización y finalmente se buscaba certificar a los adultos a través de la educación básica”.

Al realizar un recuento respecto a las orientaciones de la pública dirigida a los adultos, es posible identificar que esta ha pasado por distintos esquemas tanto de contexto y de modalidades de la educación básica informal. El INEA (2010), define el “rezago educativo” como el “grupo de personas de 15 años o más edad, que no saben leer, escribir, que no han iniciado o concluido la primaria o secundaria y no están siendo atendidos, por el sistema escolarizado”.

Entre otros planes para eliminar las deficiencias en materia educativa entre los adultos, el INEA, creó el programa titulado “Cero rezagos educativos”. En este programa, se busca que a través de comprometer a las autoridades federales, estatales y municipales para realizar los planes necesarios para promover entre los ciudadanos adultos para que se incorporen a las distintas opciones educativas de INEA, permanezcan en ellos y logren culminar con sus estudios. Ramírez y Victor (2010), afirman que “a pesar de tales

esfuerzos, poco avance se ha visto, por lo que creemos necesario efectuar una serie de rupturas en la forma de concebir y operar la educación de adultos en el país”.

Entre los problemas que Ramírez y Victor (2010), identifican y por los cuales la educación para los adultos en México no tiene la efectividad adecuada; se consideran tres dificultades globales:

- a. Las condiciones de los adultos analfabetas o con escasa escolaridad en el país plantean la necesidad de definir cuál puede ser la contribución de la educación de adultos a dos realidades: La enorme dimensión y el preocupante crecimiento del rezago educativo de la población adulta del país causado por la ineficiencia del sistema educativo formal. El fenómeno del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema, consecuencia de un conjunto de factores de carácter estructural e histórico que afectan de manera especial a la población que comparte pobreza con analfabetismo o escasa escolaridad.
- b. Las manifestaciones de agotamiento del modelo tradicional que, desde los gobiernos, ha definido el quehacer en educación para adultos. Los esfuerzos de alfabetización no están produciendo los resultados esperados. Los programas de capacitación para el trabajo no han mostrado capacidad para impactar sobre el empleo y el ingreso de los destinatarios al campo productivo.
- c. Existen elementos derivados de la investigación y de experiencias innovadoras que ofrecen bases para reorientar profundamente el trabajo de la educación de adultos desde cada uno de los estados. Como nos percatamos hasta este momento el único actor que se ocupa de la educación de adultos es el gobierno, pero no debemos olvidar que también la sociedad civil debe estar comprometida con esto; por un lado, el gobierno ve a la educación para adultos como una actividad cuya finalidad tiene que subsanar los errores cometidos en el sistema escolarizado y busca incorporar a los sectores pobres al desarrollo; mientras que para la sociedad civil, la educación se concibe como un proyecto de autonomía y emancipación de los sectores populares.

Asimismo, Ramírez y Victor (2010), sostienen que además de las dificultades anteriormente señaladas, existen también varias premisas y conceptos sobre la educación para los adultos que, con mayores frecuencias, son aceptados por todos los actores sociales. Entre estas ideas se encuentran:

La educación para adultos no se puede separar de la realidad de la pobreza en el país. Es necesario que la actividad educativa de adultos se ligue de manera más estrecha con las necesidades vitales más urgentes de los adultos que, por la situación de sobrevivencia en la que se encuentran, requieren que se visualice una transformación de las condiciones de vida.

El analfabetismo y la falta de escolaridad son manifestaciones de una realidad de pobreza de naturaleza estructural (Diario Oficial de la Federación, 2005). Respecto a la función de educación para adultos, se acepta ya que ésta no es el motor de desarrollo. No depende de

la alfabetización aumentar las posibilidades de empleo, ni de modificar las relaciones asimétricas entre el campo y la ciudad. Sin embargo, no es posible concebir el desarrollo de las condiciones de vida de amplios sectores de la población si éstos no superan su condición de exclusión de los saberes actuales y de las habilidades básicas que permitan su participación en los procesos de transformación de las realidades que los afectan cotidiana y socialmente.

Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública en México desarrolló el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Este modelo, tal como se establece en el Diario Oficial de la Federación (2017), “pretende con base en las experiencias e intereses de las personas se desarrolle y obtenga mayor percepción o visión del mundo para resolver los problemas de la vida cotidiana de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven sus conocimientos con nuevos elementos que les sean útiles y significativos para potenciar su desarrollo; refuercen las capacidades, actitudes y valores que les permitan mejorar y transformar su vida y entorno, en un marco de legalidad, respeto y responsabilidad”.

Aun cuando el enfoque principal de este programa de la SEP es combatir el rezago existente en materia educativa; sin embargo, va más allá, éste busca la equidad y que disminuya la desigualdad social. En este programa se busca la formación de personas que puedan transformarse y desarrollarse socialmente y económicamente; el propósito de este es que las personas puedan tener una visión diferente del mundo; ya que esta “puede mejorar su entorno familiar y laboral de ahí que se adentre a la necesidad de estar en la globalización de nuestra época y que le ayude a mejor en muchos ámbitos” (Ramírez y Victor, 2010).

Además de los atributos académicos ya descritos, el MEVyT “contribuye a que las personas jóvenes y adultas puedan desarrollar competencias y habilidades básicas; fortalecer sus valores como mexicanos y abordar conocimientos que le son de interés para resolver sus problemas cotidianos”. Según lo establecen Raymundo y Victor (2010), este programa se “caracteriza por su pertinencia y utilidad, y además permite reconocer, evaluar y valorar los conocimientos previos adquiridos por las personas jóvenes y adultas”; el MEVyT, generado por el INEA, presenta una propuesta desarrollada por módulos y que busca que las personas –jóvenes o adultas– desarrollen los conocimientos que les permitan salir del rezago.

El modelo de la INEA se basa en cuatro competencias principales: “comunicación, solución de problemas, razonamiento y participación”. Asimismo, Raymundo y Victor (2010) sostienen que el MEVyT:

...además promueve la toma de conciencia sobre actitudes y valores, en relación a los derechos humanos, la igualdad entre las personas y la visión de futuro, el sentido de identidad y pertenencia, entre otras. Antes se afirmaba que sin alfabetización la vida se encontraba desprovista de cultura. El iletrado era un marginado de la estructura social, y la alfabetización, por ende, la forma de recuperarlo; sin embargo, el hecho de que una persona sea analfabeta o con escasa escolaridad no significa que no sepa nada. Es necesario que consideremos que el analfabeto no es un recipiente vacío, es decir, ya tiene conocimientos previos que la misma vida le ha enseñado.

En el contexto penitenciario, la educación dirigida a los adultos es sumamente importante. Las personas privadas de la libertad se caracterizan por contar con un nivel educativo bajo (primaria y secundaria), por lo que su preparación, no solamente académica si no personal, tiene un gran valor para el proceso de reinserción social. Los internos penitenciarios, a través de programas de educación para los adultos, podrán desarrollar las competencias y habilidades que, por un lado, les permite disminuir la brecha de conocimiento y rezago educativo y, además, les permitirá acceder a oportunidades laborales cuando abandonen el penal, factor que también repercutirá en la disminución de la reincidencia delictiva.

2.3.3. Educación para el desarrollo humano

Un aspecto importante en el desarrollo y crecimiento de todo ser humano, es sin duda alguna la educación, proceso versátil que se lleva a cabo durante todo el ciclo de vida, principalmente durante la niñez, adolescencia y la juventud. Este proceso les brinda a las personas valores, conocimientos, destrezas y pautas culturales, lo que les permite una mejor inclusión en la sociedad, y un desarrollo personal.

Para la UNESCO (2019), “la educación es un derecho humano para todos, a lo largo de la vida, y el acceso a la instrucción, debe ir acompañado de la calidad”, este derecho humano es el objetivo principal y la misión a cumplir de la UNESCO, y se encuentra ligado a la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948). La única institución de la Organización de las Naciones Unidas en disponer de un precepto que

abarca todos los aspectos relacionados en torno a la educación es la UNESCO, es por eso que esta institución es la encargada de coordinar el trabajo de la *Agenda de Educación Mundial 2030*, que respalda el derecho a la educación como principio rector, y además forma parte del *Objetivo de Desarrollo Sostenible* (ODS) número 4, el cual “está basado en los derechos humanos y garantiza el derecho a la educación como catalizador para alcanzar un desarrollo sostenible”.

La UNESCO indica que, en la actualidad, el número de personas que tienen acceso a recibir educación representan la cantidad más alta de la historia; las estadísticas de esta institución contabilizan más de 1,500 millones de jóvenes y niños que se encuentran inscritos en una escuela. Sin embargo, en contraparte, continúan existiendo millones y niños que no tienen oportunidades educativas a su alcance por diversas razones, principalmente relacionadas con la pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, establecieron el marco legal al que los estados que pertenecen a esta institución deben adherirse para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a la educación. En esta reglamentación, se establecen las obligaciones jurídicas internacionales enfocadas a promover y fomentar las bases para lograr una educación de calidad sostenible, asiste a los estados en la elaboración de sus marcos jurídicos e institucionales nacionales. Sin embargo, son los gobiernos a los que les corresponde cumplir con las obligaciones tanto políticas como jurídicas, concernientes al suministro de educación de calidad para todos, así como aplicar las políticas y estrategias en los sistemas educativos.

Alonso-Jiménez (2011), en su artículo *Educación y desarrollo humano, hacia un modelo educativo pertinente*, menciona que la inclusión de todo individuo en los cambios que se producen, la educación se convierte en una herramienta estratégica para la formación de los individuos en el siglo XXI. La autora cita a Urzúa, De Puelles y Torreblanca (1995), quienes apuntan “a la relación que existe entre la educación y el desarrollo humano, debate científico que no se detiene, ya que se cuentan con diferentes explicaciones de esa relación”.

Por otra parte, Venguer (1983), citado por la Alonso-Jiménez, realiza una revisión de las diferentes explicaciones sobre la relación antes mencionada:

El desarrollo es la maduración biológica, y la educación adecúa al nivel de desarrollo alcanzado.

Uno de los elementos que puede influir, aunque limitadamente al desarrollo es el proceso de adaptación al medio y la educación.

Tanto educación como desarrollo son significativos; el desarrollo es la enseñanza y adquisición de hábitos de conducta.

El desarrollo también es visto como un producto del proceso de la experiencia social, y este ocurre siempre bajo el contexto de la educación que conduce al desarrollo.

Alonso-Jiménez (2011) menciona que los diferentes paradigmas educativos legitiman las políticas que se establecen en este rubro, las estrategias de curriculum académico, la preparación del cuerpo docente y de los estudiantes, por mencionar algunos aspectos. Describe que a través de la historia y durante siglos, la enseñanza se ha realizado con conocimientos pobres en los procesos de aprendizaje, donde se le determina al aprendiz un papel totalmente pasivo partiendo de la “perspectiva del paradigma tradicional educativo”, y se cristaliza en los llamados “modelos educativos exógenos”, fundamentado en el “pensamiento reduccionista del desarrollo humano”.

Es a comienzos del siglo XX, cuando el sujeto en los procesos de aprendizaje tiende a tener una participación activa, lo que viene a conformarse como cimiento sólido de un nuevo paradigma educativo, aunado a la evolución del papel de los profesores en el proceso académico, y las subsecuentes transformaciones en su desarrollo, dando pie a un nuevo modelo educativo denominado “endógeno” (Alonso-Jiménez, 2011).

Alonso-Jiménez (2011) cuestiona: ¿cuál de los modelos educativos posee la congruencia para enfrentar los retos actuales de la educación, pues el papel de la misma, tal y como lo argumenta Tedesco (2003), “la educación deberá añadir en forma metodológica la labor de la formación de la personalidad”? Para dar respuesta a la problemática planteada, es importante evaluar los modelos educativos exógeno y endógeno y ver su congruencia con la nueva sociedad de la información y conocimiento, y el impacto que ocasionan en la formación y desarrollo de la personalidad (Alonso-Jiménez, 2011).

Kaplún (2002), citado por Alonso-Jiménez (2011), retoma los modelos educativos y los enriquece, dando como resultado tres modelos fundamentales:

Un modelo donde la educación se centra en los contenidos.

Un modelo donde la educación se centra en los efectos, y

Un modelo donde la educación se centra en los procesos.

Kaplún (2002), establece que los dos primeros modelos se les denomina exógenos, ya que su planteamiento va desde fuera del destinatario, es decir, “visualiza al educando como objeto de la educación; en cambio el tercer modelo se le denomina endógeno, porque parte del destinatario en sí, es decir, se le considera al educando como el sujeto de la educación”.

El primer modelo donde la educación se centra en los contenidos, representa a la educación tradicional, la cual está basada en la transmisión de conocimiento y valores del profesor hacia al alumno, tal como lo menciona Alonso-Jiménez citando a Kaplún (2002). Este modelo pedagógico que puede ser considerado como tradicional, se generó en el siglo XVIII; sin embargo, es en el siglo XIX donde se cimienta, gracias a sus prácticas pedagógicas, así mismo este modelo se identifica con la educación escolástica, ya que se le considera al profesor “la médula central en el proceso de enseñanza y a la escuela como la principal fuente de información para el educando, dejando así muy poco margen para que el alumno se desarrolle mentalmente” (Canfux, 2000).

De acuerdo a Alonso-Jiménez (2011), este modelo llevado a la práctica nos muestra que la realidad es completamente ajena a la experiencia de los alumnos; sus objetivos van dirigidos a las tareas que el profesor realiza más que a las acciones de los alumnos debe de realizar; el contenido que se enseña se concentra en grandes cúmulos de información y su transmisión disgrega de la experiencia del alumno y su realidad social; su método de enseñanza es por lo general expositivo; y la evaluación del aprendizaje se enfoca hacia el resultado, es decir, por lo general en este modelo se memoriza información y exige un alto grado de dirección del profesor misma que viene a restringir la participación cognoscitiva de los estudiantes.

El segundo modelo de Kaplún (2002), donde la educación se centra en los efectos y de carácter exógeno; consiste principalmente en “moldear la conducta de las personas

con una serie de objetivos establecidos previamente”. Este modelo nació en el siglo XX en los Estados Unidos, en los años cuarenta y se asocia en principio con el entrenamiento militar, posteriormente en los años sesenta llega a América Latina.

Este modelo se enfoca “en condicionar al educando para que este adopte las ideas”, es decir Kaplún (2002), citado por Alonso-Jiménez (2011), califica a este modelo como una especie de “educación manipuladora”, es decir, el objetivo del modelo se centra en que el educando haga lo que un “planificador o programador” determina, por lo tanto de esta forma todas estas acciones se convierten en técnicas enfocadas al aprendizaje, pues todos los pasos que se llevan en la enseñanza ya vienen programados.

Por lo tanto, en este modelo la educación genera una serie de hábitos que limita que los estudiantes participen activamente en el proceso, debido a que tanto el material y el contenido, como los propósitos y objetivos ya se encuentran definidos, es decir, sólo ejecutan, y la conducta de las personas se moldea a través de los objetivos establecidos.

Es importante señalar que estos modelos exógenos, según los conceptos de Venguer (1982), comparten el sustento conductista; es decir, “se basa en el mecanismo de estímulos y recompensas”. Es importante mencionar que la concepción del conductismo en relación al desarrollo humano es muy limitada, ya que lo reduce a una serie de respuestas aprendidas dentro de un ambiente que se encarga de proveer las oportunidades precisas para aprender, ignorando de tal forma la vida interna del sujeto; es por eso que a los modelos educativos exógenos presentados se les considera de “una pertinencia limitada para la formación y desarrollo integral de la personalidad dentro de un contexto tan complejo como lo que se exige actualmente” (Alonso-Jiménez, 2011).

Por último, tenemos el modelo donde la educación se centra en los procesos, para Kaplún (2002) citado por Alonso-Jiménez (2011), este modelo se focaliza en “el proceso de transformación de la persona, es decir, a diferencia de los dos anteriores, no se preocupa por los contenidos que se transmiten, ni por los efectos en el comportamiento, sino más bien este modelo se preocupa por la interacción lógica entre las personas y su realidad, así como en el desarrollo de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social”.

Este modelo, apareció a finales del siglo XIX, bajo el inicio de la escuela nueva o activa misma que comenzó su desarrollo durante los primeros años del siglo XX; los postulados de esta escuela se orientan en escuela tradicional y autoritaria que era predominante en este tiempo. Se desarrolla en forma simultánea como una tendencia pedagógica en varios países capitalistas como Estados Unidos, Inglaterra, Francia por mencionar algunos, teniendo una fuerte aceptación en América Latina.

Muchas de las ideas sostenidas de esta tendencia según Rodríguez y Sanz (2009), tienen consecuencia en diferentes movimientos pedagógicos, aún en la educación de la época actual, incluyendo la educación superior. Un ejemplo de ello es: “la creciente consideración de los métodos activos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la atención que se le ha prestado al enriquecimiento y desarrollo de los medios de enseñanza; la búsqueda por una mayor vinculación entre la escuela, la naturaleza y la vida social; la presencia de modelos curriculares que tienden a la globalización; y el reclamo por propuestas educativas donde se valore al alumno como sujeto de su propio aprendizaje, y se atienda también su formación moral y afectiva”.

Todo lo antes mencionado, sin duda alguna, estriba en el tránsito generado hacia una serie de nuevas aproximaciones en la relación existente entre educación y desarrollo humano. Verguer (1983), citado por Alonso-Jiménez (2011), dice al respecto en una primera explicación: “el desarrollo como la maduración de las estructuras (biológicas) previas existentes, y la educación adaptada al nivel de desarrollo ya alcanzado”, se aborda desde diferentes enfoques teóricos. El psicoanálisis, enfocado al análisis del aspecto afectivo es trascendental para el proceso académico, ya que desarrolla una teoría sobre la motivación inconsciente y nos muestra una idea negativa de la naturaleza del hombre, el cual se encuentra subyugado a los impulsos de los cuales no tiene control.

Sin embargo, en la educación el reconocimiento del mundo afectivo de los sujetos como las motivaciones y mecanismos de defensa tienen un alto valor, principalmente al ser difundidos los trabajos de sus seguidores.

A través de la misma línea de pensamiento, pero inmersa en el denominado “movimiento cognitivo”, Alonso-Jiménez (2011), afirma que “se subvalora el rol de lo

social, tanto en el desarrollo psíquico y, por consiguiente, no le concede un papel fundamental a la educación en el proceso para la construcción del conocimiento y desarrollo de los individuos”, es aquí en donde el profesor juega un rol de facilitador del aprendizaje. De acuerdo a la autora (2011), la psicología cognitiva norteamericana presenta propuestas diferentes, sin embargo, coincide en que:

La importancia de las estructuras interiores en el aprendizaje, aunque desconoce y subestima el papel de factores externo; considera al aprendizaje como el resultado de resignificar, y darle sentido al mundo a partir de lo que ya se conoce, y de la forma en que se presenta la nueva información; el aprendizaje es un ser activo, que busca información, reorganiza lo ya sabido para integrar lo nuevo, optando y decidiendo activamente; y en la formación de las representaciones y estructuras mentales no desarrolla la dimensión temporal.

En este artículo la autora habla también del constructivismo, el cual muestra la realidad como resultado de la construcción que el sujeto hace tanto en lo cognitivo como en lo afectivo, favoreciendo la interacción entre lo que ya se tiene, lo nuevo y el establecimiento de relaciones significativas.

Retomando a Venguer (1983), citado por Alonso-Jiménez (2011), en su segunda explicación entre la relación de educación y desarrollo humano, indica que “el desarrollo es un proceso de adaptación a las condiciones del medio, y la educación uno de los elementos del medio, que puede influir, aunque limitadamente al desarrollo ya alcanzado, resume los aportes del enfoque humanista”. En este sentido la función actual de la educación es originar “la autorrealización”, lo que hace que vivan en un mundo cambiante, “donde lo más importante es aprender a aprender”.

Con respecto a todo lo anterior la autora nos muestra que el cambio principal del modelo endógeno hacia un modelo exógeno se da en dos sentidos: por un lado el individuo pasa de ser un “objeto de la enseñanza” a ser “sujeto del aprendizaje”; así mismo en el sentido de que el individuo pasa de ser un “hombre encerrado” y enfocado solamente a satisfacer las necesidades más urgentes, a ser un “hombre abierto” y encaminado a la mejora social incrementando su autonomía y autorregulación (Alonso-Jiménez, 2011).

Venguer (1983), nuevamente nos brinda una explicación de lo anterior y dice que: “nos aproxima a la comprensión del desarrollo como un producto del proceso de

apropiación de la experiencia social, que siempre ocurre bajo la influencia de la educación, que va delante y lo conduce”.

De esta forma Alonso-Jiménez (2011), menciona que el desarrollo se define como un “proceso complejo, que se caracteriza por una periodicidad múltiple, por una desproporción en el desarrollo de las distintas funciones, por las metamorfosis o transformación cualitativa de una formas en otras, por lo complicado entrecruzamiento de los procesos de evolución e involución, por la entrelazada relación entre los factores internos y externos y por el intrincado proceso de superación de las dificultades y de la adaptación” (Vigotsky, 1987).

Así mismo Alonso-Jiménez (2011) citando el *Informe sobre Desarrollo Humano de Michoacán* (2007), menciona que en este informe se establece que el proceso educativo debe permanecer de forma constante a lo largo del crecimiento y durante toda la vida, en donde cada individuo descubre, elabora y reinventa el conocimiento haciéndolo suyo tal y como lo afirman González Rey y Mitjáns (1996) y González Serra (2004).

La autora después de todo lo antes descrito, también habla sobre las escuelas del siglo XXI, donde la sociedad de este siglo es conocida como la “sociedad de la información y el conocimiento”, con procesos formativos dirigidos a que los alumnos aprendan a aprender; que los alumnos enfrenten la información, es decir, que busquen, seleccionen, elaboren y difundan la información necesaria y útil; que los alumnos tomen conciencia de todos los impedimentos económicos, ideológicos, políticos y culturales de la tecnología en la sociedad (Area 1998).

Alonso-Jiménez (2011), después de todo lo expuesto, plantea la pregunta: “¿Cuál debe ser el modelo educativo para las escuelas de este siglo?”, y posterior a la evaluación y estimación efectuada, llega a la conclusión de que el modelo educativo endógeno es el más pertinente, ya que no sólo se basa en la concepción del desarrollo humano, sino que admite la composición de una base teórica-metodológica e histórica-cultural, “pauta para el diseño de situaciones de enseñanza-aprendizaje en los diferentes niveles del sistema educativo”.

Resumiendo, al respecto la autora cita a Kaplún (2002), quien define la pertinencia del modelo educativo endógeno:

El eje en este modelo educativo no es el profesor, sino el grupo educando, el educador sólo está para facilitador del proceso; el modelo exalta los valores y la capacidad potencial de todo individuo; concibe a la educación como un proceso permanente donde lo importante es aprender a aprender; se abre a la ambigüedad de la realidad; el empleo de recursos tecnológicos estimula a la reflexión y participación y ante la pluralidad de opciones; favorece la toma de conciencia en el educando; y proclama una educación con un compromiso social (Alonso-Jiménez, 2011).

Contextualizando los conceptos anteriormente analizados en esta parte del andamiaje teórico de este proyecto de investigación a la situación que viven las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social “Apodaca”, es preciso indicar que la educación de estas personas es un aspecto toral para conseguir los objetivos planteados dentro del proceso de reinserción social.

En este mismo sentido, el modelo que puede aplicarse al contexto penitenciario en el estado de Nuevo León es el endógeno puesto que las personas privadas de la libertad deben ser consideradas como sujetos activos dentro del proceso educativo que viven dentro de esta institución de seguridad. La preparación de los internos, además de brindar conocimiento, debe convertirse en un proceso donde exalte su potencial, se considere su realidad y se aliente su reflexión para favorecer la toma de consciencia y el compromiso social del educando.

2.3.4. Educación y comunicación

Los medios de comunicación, como una de sus principales funciones, tienen el propósito de transmitir información que permita a los miembros de la audiencia mantenerse informados y, con ello, tener un mayor conocimiento sobre su entorno; en ese sentido, los medios masivos se convierten en agentes a través de los cuáles las personas son capaces de aprender.

Dentro del ambiente carcelario esto puede traducirse en el uso de herramientas tecnológicas y de medios de comunicación para suministrar a las personas que se encuentran cumpliendo con un proceso condenatorio dentro de un penal, la información

necesaria para que en su aprendizaje se dé de una forma mejor y, con ello, se haga más significativo. Para que esto tenga un efecto positivo, es necesario que estos individuos reconozcan que el contenido de los medios es de importancia para su crecimiento personal.

Este concepto, enfocado a discernir sobre qué hacen las personas con el contenido de los medios, es abordado en la *Teoría de Usos y Gratificaciones*; en esta, se establece que los miembros de la audiencia, buscan el acercamiento a los medios de comunicación para satisfacer una serie de necesidades elementales; entre las que se encuentran las informativas, de identificación personal, de orientación ante la incertidumbre y, en algunos casos, hasta de evasión, tal como lo indica Lozano (2011). Asimismo, el autor sostiene que:

Según el enfoque de usos y gratificaciones, los diferentes medios de comunicación constituyen alternativas funcionales entre muchas otras que puede seleccionar cada individuo para satisfacer sus necesidades. Una persona quiere entretenerse, por ejemplo, puede optar por ir al cine, ver la televisión, escuchar la radio, leer un libro, platicar con sus amigos, vecinos o familiares, jugar cartas, ir a bailar, a un museo, al parque o la plaza, entre muchas otras opciones.

Según el estudio de Cerda (2015), los internos penitenciarios manifiestan la necesidad de incluirse en cursos de capacitación y de oficios que les permitan continuar con su desarrollo personal; sin embargo, en ocasiones, las instituciones enfocadas a albergar a personas en el proceso de reinserción social no cuentan con la infraestructura necesaria para satisfacer esta necesidad.

En este punto es donde los medios de comunicación son trascendentales; de existir alternativas que los empleen con el objetivo de brindar contenidos académicos a los internos penitenciarios, éstos, pueden priorizar esta información y emplearla para su crecimiento personal; tal como lo afirma la teoría de usos y gratificaciones “cada contenido de los medios podría cumplir con diferentes funciones, dependiendo del uso que le diera cada persona”.

Sin embargo, no toda la responsabilidad recaería sobre los internos privados de la libertad; para que esto funcionara adecuadamente, sería necesario que los internos penitenciarios contaran con un seguimiento cercano de personal capacitado que evaluara

el impacto de la información contenida en los mensajes de los medios de comunicación mostrados a los internos.

Así mismo, esta teoría indica que “la calidad y relevancia social de los mensajes de los medios no debe juzgarse de antemano, sino en función de los usos que les dan los miembros del público” (Lozano, 2011); esto quiere decir que no basta con crear contenido que, en apariencia, sea educativo, sino que se deben diseñar los mecanismos necesarios que permitan evaluar que los internos penitenciarios utilicen los contenidos analizados y, con ello, demuestren un aprendizaje significativo.

Por su parte, el modelo de las multimediaciones de Orozco (Citado por Lozano, 2011), indica que dentro de la mediación cognoscitiva; es decir, “aquella que incide en el proceso del conocimiento”, es decir, que el contenido que los miembros de la audiencia reciben de los medios configuran, en una medida importante su percepción respecto a determinadas situaciones y, además, les permiten discernir entre cuales sucesos deben ser considerados importantes y cuáles no. Según el autor:

La cantidad y calidad de información, los conocimientos y las valoraciones que un sujeto traiga a la pantalla del televisor median su recepción del mensaje, en tanto que influyen en aquellos aspectos que son percibidos en general, en aquellos otros que son percibidos como relevantes, y en las asociaciones posibles que resulten de los percibido con lo anteriormente asimilados en la mente del sujeto.

Esto indica que, si se busca hacer efectivo el contenido de los medios, respecto del aprendizaje, será necesario desarrollar un sentido crítico entre los miembros de la audiencia —en este caso internos penitenciarios—, donde se reconozca la importancia de activar un enfoque constructivista en este tipo de información.

Así mismo, este proceso cognoscitivo está ampliamente influido por la cultura; si los internos penitenciarios muestran predisposición o negatividad a la información que se transmite y difunde a través de los medios masivos, presentarles información educativa no provocará ningún efecto. En cambio, si la persona privada de la libertad muestra su intención de aprender y pondera la importancia del contenido educativo, los efectos de este serán aún mayores.

En síntesis, la educación que se brinda a través de los distintos medios y canales de comunicación, según las teorías analizadas puede ser posible; sin embargo, para el cumplimiento de este objetivo es necesaria una participación activa de los internos penitenciarios, principalmente, reconociendo la importancia que este tipo de contenidos tiene en su formación y en su desarrollo.

El ambiente carcelario, el encierro y la privación de la libertad son elementos que pueden ser muy difíciles de sobrellevar, limitando sus posibilidades de desarrollo y, en caso de que éstos, decidan participar en actividades educativas, se corre el riesgo de un menoscabo en su aprendizaje significativo.

Según Schunk (2012), “el desarrollo de competencias en cualquier área representa un proceso de adquisición de habilidades, en consecuencia, comenzaremos por examinar los temas relevantes para la adquisición de habilidades generales y específicas”. Retomando este concepto y aplicándolas al ambiente penitenciario, si los internos no establecen su educación como un tema relevante, el aprendizaje nunca sucederá.

En el modelo de adquisición de habilidades (Schunk, 2012), indica que existen diversos tipos de habilidad y que éstas, se clasifican según su grado de especificidad y pueden aplicarse a una amplia variedad de disciplinas, esta clasificación se compone de habilidades generales y habilidades específicas.

Según Brunner (citado por Schunk, 2012), “la adquisición de habilidades generales facilita el aprendizaje de muchas maneras”. El autor sostiene que aprender tareas como “jugar ajedrez, aprender a tocar la flauta, aprender matemáticas y aprender a leer con fluidez las rimas de una poesía” son relativamente similares pues se requieren atención, memoria y perseverancia. Estas tareas, permiten que exista una disciplina en el aprendizaje.

Por su parte, las habilidades específicas solamente son útiles en ciertas áreas. Mientras que las generales permiten la solución de problemas. Por ejemplo. El pensamiento crítico es una habilidad general que se utiliza diariamente; mientras que aprender a factorizar polinomios es una habilidad específica que se emplea en casos en los que las habilidades matemáticas son requeridas.

En lo que respecta al ambiente carcelario, al aplicar este modelo de adquisición de competencias, podemos concluir que, al implementar planes educativos dentro de un penal o de un centro penitenciario, estos, deben plantearse en etapas y resaltando la utilidad que la adquisición de nuevo conocimiento trae para los internos, sobre todo, cuál puede ser su aplicación una vez que recuperen la libertad.

Por ejemplo: comenzar educando a los internos en actividades como ajedrez o artísticas les brindarán, además de entretenimiento y distracción, la formación de disciplina; factor fundamental para entrar en un programa educativo formal, ya que, si esta no existe, el aprendizaje de los internos en los centros de reinserción se dificultará. Cuando los internos logren un esquema educativo disciplinario, será posible continuar con planes educativos formales; pues ya contarán con una formación básica y tendrán “la costumbre” de estudiar.

Así mismo, y tal como se mencionó anteriormente, es necesario crear conciencia en los internos penitenciarios respecto a la importancia que la educación tiene para él en su formación como persona y para alcanzar los objetivos del proceso de reinserción social y, sobre todo, en sus posibilidades de desarrollo cuando estos recuperen su libertad.

Los medios de comunicación se desarrollan a un ritmo vertiginoso; la evolución de los medios y de la información que a través de ellos se transmite, se transforma de una forma en la que no se termina de entender un medio y ya ha aparecido uno nuevo con presentaciones novedosas.

Así mismo, los medios de comunicación ya no solo son reconocidos como transmisores de información; estos se han convertido en factores de cambio socioeconómico y en una gran influencia para la sociedad, pues se han erigido en el principal referente informativo para un sector importante de la audiencia.

Por lo tanto, organismos como la ONU y la UNESCO, han reconocido la importancia que tienen los medios masivos de comunicación como un instrumento para la promoción de la cultura y del contenido académico. Según estas organizaciones, los medios y la información que se difunde en los mismos “siguen siendo el medio más eficaz

de promover la comprensión entre los pueblos y de garantizar la paz, la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos”.

Está demostrado que los medios masivos tienen un impacto importante y una influencia considerable en la conciencia de las personas, tanto individual como colectivamente; tal es así, que, en ocasiones, es el contenido que se divulga a través de éstos, la base para construir las ideas de la audiencia.

En ese sentido, Shoemaker y Reese (1991), indicaron que, según la *Sociología de la Producción de Mensajes*, la clave de los contenidos de los medios es analizar cuáles son los objetivos por los que estos fueron creados; es decir, cuál es la intención detrás de los mensajes de los medios.

En el ámbito carcelario estos conceptos podrían ser aplicados para desarrollar contenido que, a través de los medios, sirva para brindar a los internos contenido educativo que les permita adquirir y desarrollar competencias que los posibiliten para acceder a oportunidades de trabajo dentro de los centros penitenciarios y, sobre todo, una vez que puedan regresar a la vida comunitaria en libertad.

Desde este punto de vista, es importante que los internos que se encuentran privados de su libertad en un CERESO –tal como se mencionó anteriormente–, desarrollen un sentido crítico y reconozcan la importancia de la información que se brinda a través de los medios de comunicación y que la educación hacia medios sea vista más allá del uso de herramientas comunicativas. Al respecto Flores, Frau-Meigs y Velez (2015) afirman que:

Este concepto no se limita a proporcionar una alfabetización tecnológica, es decir, a señalar el ‘cómo utilizar’ una computadora, un teléfono celular (...), sino que debe comprender el ‘para qué’ utilizar esta tecnología con base a un desarrollo sustentable, ético y responsable de la misma.

A su vez, además de promover la educación hacia medios; las empresas mediáticas deben trabajar y generar sus contenidos sobre una base ética y moral. Como proveedoras de información, estas empresas representan el primer acceso de las personas a ciertos contenidos, por lo que su responsabilidad es muy grande y el impacto en la mentalidad de

la audiencia y en la opinión pública es inconmensurable. En ese sentido, Flores, Frau-Meigs y Velez (2015) indican que:

Se debe incentivar que las empresas mediáticas empleen los canales de comunicación a los que tienen acceso de una manera ética y, sobre todo, responsable; pues, tal como se señaló anteriormente, este contenido puede impactar de manera directa en los miembros de la audiencia.

De la misma forma en la que las grandes corporaciones mediáticas pueden crear contenidos que les permitan cumplir con sus objetivos comerciales, políticos, económicos; otras organizaciones pueden diseñar contenido a través de los cuales se difundan mensajes positivos y en los cuales se cree conciencia respecto a las diversas problemáticas sociales a las que nos enfrentamos.

2.4. Educación en el contexto penitenciario

La educación para las personas privadas de la libertad no es un tema sencillo. El proceso educativo aplicado al contexto penitenciario, además de combatir el rezago educativo característico de quienes se encuentran en esta situación, permite que quienes se encuentran reclusos retomen su preparación y capacitación laboral para que, al recuperar su libertad, puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

En ese contexto, Blazich (2007), en *La educación en contextos de encierro* dice que: “La educación en contextos de encierro conforma un escenario altamente complejo. Los establecimientos educativos que funcionan en instituciones penitenciarias desarrollan sus actividades en un campo de tensiones permanentes, generadas no solo por la particularidad de su alumnado sino por un difícil contexto de funcionamiento en el que priman las cuestiones de seguridad”.

La educación dentro de los centros penitenciarios es una de las situaciones en las que no existe la cantidad suficiente de estudios e investigaciones que permitan indicar la situación actual de las personas privadas de la libertad y, principalmente, para encontrar la forma idónea de crear un programa educativo específico para este sector. La UNESCO (1995) indica que “la particularidad de su alumnado y el difícil contexto de funcionamiento definen una situación surcada por múltiples variables que implican diversos niveles de abordaje”.

2.4.1. Perspectiva institucional de la educación penitenciaria

La *Declaración Universal de los Derechos Humanos* (1948), redactada por la Organización de las Naciones Unidas, establece cual es el ideal común de todos los países que la integran y cuáles son los objetivos por los que estos deben esforzarse; para conseguirlo, la enseñanza y la educación son aspectos torales, la Asamblea General de la ONU indicó:

La presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.

En este documento, en el Artículo 26 se indica que la educación deberá ser gratuita y todos los ciudadanos deberán tener acceso a esta; principalmente, en lo que corresponde a los niveles más elementales; así mismo, ésta se ofrecerá en condiciones de igualdad; textualmente, en este artículo se indica que:

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos (*Declaración Universal de los Derechos Humanos*, 1948).

Por otra parte, dentro de este mismo Artículo, se establece que uno de los objetivos de la educación es buscar el desarrollo de los seres humanos, principalmente de su personalidad, así como de “fortalecer las libertades fundamentales y favorecerá la comprensión y la tolerancia”; al respecto, en el citado documento se indica que:

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los

grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Aplicado al ambiente y contexto carcelario, desde las Naciones Unidas, se establece que aun cuando las personas se encuentren privadas de la libertad en un centro penitenciario, éstas, deberán tener acceso a la educación, de forma tal que su proceso educativo les permita continuar con su crecimiento tanto personal como laboral, pues de otra manera se violarán sus derechos fundamentales como seres humanos.

Así mismo, la educación, desde la perspectiva de la ONU, debe ser considerada como un factor que permita que los internos penitenciarios puedan reflexionar respecto a los distintos aspectos de su vida y les permita reinserirse con éxito a la sociedad.

Además, durante 2015, la Organización de las Naciones Unidas, estableció 17 objetivos globales, a través de los cuales se busca “terminar con la pobreza, proteger la integridad del planeta y asegurar la prosperidad” para todos los ciudadanos; estos objetivos fueron denominados *Objetivos de Desarrollo Sostenible* (ODS), e indican que, en un plazo no mayor a 15 años, estos deberán ser cumplidos en su totalidad; con este fin, la ONU indica que se requiere la participación activa de todos los actores sociales (administraciones gubernamentales, iniciativa privada, ciudadanos y sociedad civil).

El objetivo número 4 de los ODS, establece todo concerniente al tema de la educación; esta es considerada como “la base para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible”. Sin embargo, en su redacción se indica que es necesario incrementar los esfuerzos por brindar mayor y mejor educación a todos los ciudadanos; textualmente este objetivo dice:

Se han producido importantes avances con relación a la mejora en el acceso a la educación a todos los niveles y el incremento en las tasas de escolarización en las escuelas, sobre todo en el caso de las mujeres y las niñas. Se ha incrementado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización, si bien es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances en la consecución de los objetivos de la educación universal.

Dentro de las metas de este ODS, se establece que en un plazo que no supere el año 2030, se deberá “asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres

y mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza de la secundaria”. Así mismo, en otra de las metas se indica que para este mismo año se deberán “aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento”.

Estas metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 son aplicables al contexto carcelario. Aun cuando las personas privadas de la libertad se encuentran dentro de un centro de reinserción social, estas no deben perder sus posibilidades de acceso a la educación; pues, de lo contrario, se limitarán de manera severa sus posibilidades de regresar a la sociedad. Así mismo, la educación que se les brinde debe estar orientada a la adquisición de habilidades que le permitan que, al presentarse su liberación, puedan tener acceso a mejores oportunidades laborales y, con ello, se disminuya la posibilidad de reincidir.

Otra de las metas de este objetivo, es la que indica que la educación que se brinde alrededor del mundo debe ser inclusiva e igualitaria para todos; en ese sentido, esta meta indica que es fundamental “garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional”. Así mismo, dentro de estas metas se indica que se debe:

Garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.

Por su parte, la UNESCO (1994) en el documento titulado *La educación básica en los establecimientos penitenciarios*, realizó un análisis concreto sobre la educación de las personas que se encuentran dentro de un penal y, en la *Cuarta Conferencia Internacional de la UNESCO sobre Educación de Adultos*, se estableció una declaración en la que se indicó que todas las personas tienen los siguientes derechos relacionados con la educación:

- a) El derecho a leer y escribir,
- b) El derecho a preguntar y analizar,
- c) El derecho a imaginar y crear,
- d) El derecho a leer acerca del propio mundo de cada uno y a escribir la historia,
- e) El derecho a tener acceso a los recursos de la educación,
- f) El derecho a desarrollar los conocimientos individuales y colectivos.

Los derechos educativos establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, resultan, desde el punto de vista de esta institución, como fundamentales; en el contexto penitenciario, la UNESCO indica que el respeto de estos derechos tiene una influencia positiva en la personalidad del recluso. Al respecto, la UNESCO (1994), afirma que en lo que concierne al tema educativo, “se debe permitir a los internos, siempre que sea posible, el acceso a bibliotecas, laboratorios, talleres, actos culturales y actividades educacionales a fin de que puedan desarrollarse en la máxima medida posible”.

Al aplicar lo que dice esta meta a la educación en el contexto carcelario es posible darse cuenta de la necesidad de que la educación, además de brindar las competencias necesarias para el desarrollo laboral, debe erigirse como un método que permita alejar a las personas de conductas violentas y que adquieran un mejor estilo de vida.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo establece diversos puntos de vistas, perspectivas y algunas líneas de acción que permitan “llevar a México a su máximo potencial”. Este plan rige el establecimiento y el diseño de políticas públicas, así como la programación de presupuestos de la administración federal; además, es visto como un método de transmisión de la información relacionada con las estrategias que se siguen en el país para buscar su crecimiento.

De las metas previstas dentro del PND, algunas de éstas, se enfocan no solamente a cuidar la integridad y las condiciones de vida de todos los ciudadanos que se encuentran en libertad; desde este documento se afirma que también debe estar consideradas todas aquellas personas que cumplen con una sentencia dentro de un centro penitenciario para cumplir una sentencia por haber cometido un delito.

En ese sentido, la meta titulada “México incluyente”, indica que el acceso a los derechos sociales debe ser igualitario para todos y que es tarea del gobierno garantizar que

esto se cumpla pues, de lo contrario, la desigualdad social y la brecha entre los ciudadanos se hará más extensa. Textualmente, esta meta indica que:

Un México incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva.

Tal como se establece en esta meta del Plan Nacional de Desarrollo, en México, ninguna persona debe ser limitada en el acceso a sus derechos sociales; estos deben ser igualitarios para todos y, bajo ninguna circunstancia, deberán ser negados. Dentro de estos derechos, uno de los más importantes es el que se relaciona con la educación, principalmente, de aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como lo son los internos penitenciarios en los CERESO del país.

Por tal motivo, el acceso igualitario a oportunidades educativas para los internos penitenciarios, les permitirá tener mejores condiciones de vida, además de la posibilidad de acceder a oportunidades laborales y sobre todo, permitirá que los objetivos de la reinserción social se alcancen con mayor facilidad.

Así mismo, dentro del PND se establece que el acceso a la educación, además de ser gratuita y de calidad, deberá contar con las políticas públicas adecuadas para garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas posibilidades de acceso a este derecho. La meta titulada “México con Educación de Calidad” sostiene que:

Un México con educación de calidad propone implementar políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.

Las metas antes descritas y, en concordancia con documentos internacionales, como los de la ONU, indican que la educación tiene una gran importancia para la formación de cualquier ser humano; por lo que resulta necesario que el Estado encuentre las vías necesarias para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a este derecho. En el ambiente carcelario este factor adquiere una mayor relevancia, pues la educación es

un factor clave para el proceso de reinserción social y que permitirá una mejor reintegración de los liberados a la vida en comunidad.

La resolución aprobada durante el *Quinto Congreso Mundial de la Educación* llevado a cabo en Berlín, Alemania durante junio de 2006, en materia de educación penitenciaria establecía, en materia de educación dentro de los centros penitenciarios (Caride, 2013), que esta:

... debería incluir temas en el aula, educación básica y general para adultos, una educación profesional acreditada que sea sensible a las tendencias del mercado laboral, educación a distancia, actividades creativas y culturales, educación física y deportes, educación social y programas de reinserción antes y después de la puesta en libertad.

La educación es uno de los derechos humanos inalienables a toda la población; esta, en conjunto con otros aspectos como puede ser la práctica deportiva y/o cultural, son una parte importante dentro del proceso de reinserción social que vive una persona privada de la libertad. Según Cerda y Jurado (2017) en el análisis titulado *Rezago educativo y carencia de recursos: Desafíos por afrontar en la agenda educativa penitenciaria*, publicado en *Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica* (Cerda, 2017) afirman, tras evaluar el aspecto educativo y cultural de la población reclusa en el CERESO Apodaca, que sus principales necesidades académicas están relacionadas con el rezago educativo imperante en esta institución de seguridad.

El diagnóstico educativo realizado por Cerda y Jurado (2017) indica que los servicios académicos que se ofertan dentro del CERESO Apodaca, resultan insuficientes para dar un cumplimiento cabal a lo que se establece en los principales reglamentos y leyes que garantizan el acceso a la educación y en los que se indican los criterios operacionales de la operación penitenciaria, como lo son la Ley General de Educación y la Ley Nacional de Ejecución Penal; además, la forma en la que se desarrolla el proceso educativo en este penal, dista de las recomendaciones establecidas de forma internacional por la UNESCO.

Entre los principales resultados de este análisis se encuentra que 4 de cada 10 internos en el CERESO Apodaca tienen un nivel de educación de secundaria. En este escenario, el análisis arrojó que las causas de este hecho son múltiples y variadas, sin

embargo, ponen de manifiesto que 8 de cada 10 internos no ha podido concluir sus estudios de nivel básico. Además, para aquellas personas privadas de la libertad que cuentan con secundaria, no existen opciones educativas para continuar su preparación en bachillerato ni opciones de educación técnica o de oficios (Cerde y Jurado, 2017).

La educación dentro del proceso de reinserción social de las personas reclusas en un penal es sumamente importante. Para lograr que, una vez cumplida su sentencia, estas personas puedan reintegrarse a la vida en sociedad, es necesario que cuenten —como mínimo— con la educación y preparación académica básica, de forma que puedan “desempeñar como un ciudadano con todas las facultades y derechos propios de este concepto” (Cerde y Jurado, 2017). En este sentido, la Ley General de Educación, en el Artículo 3º indica que:

El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal cita el Artículo 85 para aclarar cuales son los aspectos que se aplican a la enseñanza en los tres niveles contemplados dentro de la educación en México:

Las personas privadas de la libertad tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior en forma gratuita. Asimismo, la Autoridad Penitenciaria incentivará la enseñanza media superior y superior, mediante convenios con instituciones educativas del sector público, que les otorgaran la validez oficial correspondiente de los estudios culminados.

Esta misma ley, en el Artículo 81 en el que se aborda el tema de la participación en actividades deportivas indica que es de suma importancia que en las instituciones penitenciarias existan planes que fomenten el involucramiento de los internos en estas actividades. En el citado artículo se suscribe que “la persona privada de su libertad podrá participar en actividades físicas y deportivas, atendiendo a su estado físico, con el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales”.

La educación, tal como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, debe formar parte de un ideal común entre las naciones, por lo que desde este documento se invita a todos los países a ponderar este proceso como un aspecto toral para el desarrollo de los ciudadanos. De manera específica, la declaración indica que:

Tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción.

En el Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se fundamenta que el acceso a la educación es un derecho de todos los ciudadanos que, entre sus principales características se encuentra que debe ser gratuita en los niveles básicos y, en lo que respecta a los niveles superiores, las naciones deben procurar que existan oportunidades equitativas para todas las personas. Además, en este artículo se señala que la educación:

...tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2013), el acceso a la educación representa un derecho que le permite a las personas el fortalecimiento de todos los demás derechos fundamentales. Esta organización asegura que “la educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo”. Por tal motivo, la UNESCO ha establecido una serie de principios rectores y de obligaciones para la administración gubernamental, además, se indica la necesidad de crear instrumentos regulatorios sobre el derecho a la educación en todos los países:

Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión. Estos instrumentos constituyen un testimonio de la gran importancia que los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la educación (UNESCO, 2013).

La reglamentación establecida por UNESCO (2013), en materia de educación señala que es obligaciones de las naciones dar cabal cumplimiento a los lineamientos que se consideran dentro de esta; haciendo énfasis en los procesos jurídicos y de políticas públicas enfocados a la posibilidad de brindar una educación de alta calidad para todos los ciudadanos, por lo que las naciones deberán “supervisar la aplicación de políticas y estrategias educativas que sean eficaces”, puesto que según esta organización “la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad”.

En México, todos los individuos tienen derecho a recibir educación. El Estado (federación, entidades federativas y municipios) deben “impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior” tal como se establece en el Artículo 3º de la Constitución Mexicana; además, en este artículo se fundamenta que “la educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media superior, serán obligatorias”. Asimismo, desde la Constitución se indica que la educación:

Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.

La educación en México está contemplada dentro de las garantías individuales; es decir, representa un derecho que debe ser salvaguardado por el Estado para todos los ciudadanos; esta garantía se encuentra reglamentada en el Capítulo 1 del Artículo 3º de la Constitución, titulado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. De forma textual en este se indica que:

Este artículo constitucional deja clara la obligación del Estado de garantizar la educación a todos los ciudadanos. La Constitución, como principios rectores del quehacer del Estado mexicano indica que además de ser obligatoria, la educación deberá ser de calidad, tanto en materiales, como en métodos, infraestructura e idoneidad de los docentes, de forma que se “garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.

En lo que respecta a la educación para la reinserción social, según el investigador Jorge Ojeda Velázquez (2012), autor del artículo *Reinserción Social y Función de la Pena*, ésta, es uno de los aspectos fundamentales que permitirá conseguir los objetivos de este

proceso. Según este autor, brindar educación como parte de las actividades realizadas por los internos durante su internamiento, les permitirá además adaptarse con éxito al sistema social y reducir la posibilidad de que estos vuelvan a delinquir.

En este mismo sentido, el Artículo 18 de la *Constitución Mexicana* indica que:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

La *Ley Nacional de Ejecución Penal*, aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y publicada en junio de 2016, tomando como sustento lo establecido en la Constitución Mexicana en diversos aspectos y derechos fundamentales de los ciudadanos, estableció la reglamentación básica para el funcionamiento de las instalaciones penitenciarias en México. De manera específica, es en el Capítulo IV de esta Ley donde se afirma que la educación es un aspecto toral del proceso de reinserción social en el país. En el Artículo 83 de la LNEP, denominado “El derecho a la educación” se conceptualiza a la preparación académica dentro del ambiente penitenciario de la siguiente manera:

La educación es el conjunto de actividades de orientación, enseñanza y aprendizaje, contenidas en planes y programas educativos, otorgadas por instituciones públicas o privadas que permitan a las personas privadas de su libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo personal.

En esta misma reglamentación se indica que la educación que se brinde dentro de los centros de reinserción social debe ser laica, gratuita y, en su contenido, deberá abarcar no solamente contenido académicos, sino que habrá de considerar también tópicos cívicos, sociales, de expresiones artísticas, de salud física y morales, de tal manera que sea lo más parecida a lo que se desarrolla en todos los planteles educativos del país.

...en todo caso, orientada por las técnicas de pedagogía y quedará a cargo de profesores o maestros especializados. Así mismo, las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autoridad educativa correspondiente podrán realizar las labores de docencia a las que hace referencia el presente artículo.

Finalmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el Artículo 85, en el que se aborda el tema de la “Enseñanza básica, media superior y superior”, indica que las personas que se encuentren dentro de un centro de reinserción social “tendrán derecho a realizar estudios de enseñanza básica y media superior en forma gratuita”. Mientras que en lo que respecta a la educación media superior, desde esta Ley se alienta a que las instituciones penitenciarias establezcan convenios de colaboración con instituciones educativas públicas para ofrecer alternativas de preparación académica de este nivel y a través de los cuales los internos puedan certificar de forma oficial los estudios que realicen dentro del penal.

Sin embargo, a pesar de que la reglamentación es clara en el aspecto educativo, existen factores –económicos, de recursos humanos y de seguridad– que limitan el acceso de las personas privadas de la libertad a la educación, motivo por el cual resulta necesario el establecimiento de las políticas públicas adecuadas para garantizar que los internos puedan continuar con su preparación académica y así, al cumplir con su sentencia, tengan mayores posibilidades de desarrollo al regresar a la vida comunitaria.

2.5. Estadística de población penitenciaria

2.5.1. Población penitenciaria en el mundo

A nivel mundial, la cantidad de personas privadas de la libertad se ha ido incrementado a lo largo de los años; principalmente, en las regiones geográficas donde se presentan las mayores concentraciones poblacionales; por tal motivo, la realidad penitenciaria se ha convertido en un tema de interés a lo largo y ancho del mundo.

Según los datos del *World Prison Brief* desarrollado por el Institute for Crime & Justice Policy Research de la Universidad de Londres, para el año 2019, se contabilizaron un total de 10,743,619 personas privadas de la libertad en el mundo, es decir, el 0.15% de la población mundial; esto representa un promedio de 48,178 internos por país y una tasa mundial de 145 personas reclusas por cada 100,000 habitantes

Tabla 2.1*Población penitenciaria a nivel mundial (2019)*

Aspecto	Valor
Población en el mundo	7,385,920,000 hab.
Población penitenciaria	10,743,619 internos
Porcentaje de población penitenciaria	0.15%
Taza mundial (100,000 habitantes)	145 personas
Promedio por país	48,178 internos

Fuente: Elaboración propia con datos del World Prison Brief del ICPR (Institute for Criminal Policy Research)

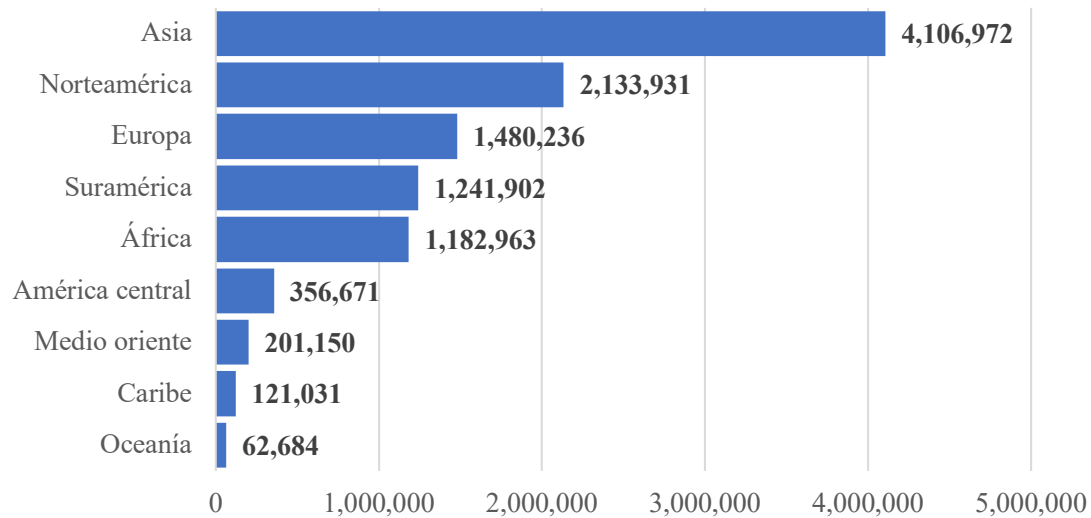
El estudio realizado por el ICPR divide al mundo en 9 regiones geográficas diferentes, estas son África, Asia, Caribe, Norteamérica, América central (donde se incluye a México), Suramérica, Europa, Medio oriente y Oceanía; en estas regiones, según los datos de esta institución, se contabilizaron para el año 2019 un total de 10,887,720 personas privadas de la libertad en los 223 países que las conforman.

En cuanto a la cantidad de internos, la región de Asia es donde se registra la mayor población penitenciaria con un total de 4,106,972 personas privadas de la libertad (37.72% de los internos en el mundo), seguida de Norteamérica con 2,133,931 (19.60% del total mundial); Europa con 1,482,236 internos (13.60% mundial) y Suramérica con 1,241,902 (11.41% mundial). Es preciso destacar que, de estas regiones, Norteamérica es la que cuenta con una menor cantidad de naciones, por lo que el promedio de internos por país se incrementa considerablemente al tener una media de 533,482; sin embargo, la mayor cantidad de internos se presenta en Estados Unidos.

Tabla 2.2*Población penitencia por región continental (2019)*

Región	Países analizados	Total de internos	Promedio por país	Porcentaje mundial
África	54	1,182,963	21,907	10.87%
Asia	31	4,106,972	132,483	37.72%
Caribe	23	121,031	5,262	1.11%
Norteamérica	4	2,133,931	533,482	19.60%
América central	8	356,671	44,584	3.28%
Suramérica	13	1,241,902	95,531	11.41%
Europa	57	1,480,236	25,969	13.60%
Medio oriente	12	201,150	16,763	1.85%
Oceanía	21	62,684	2,994	0.58%
Total (mundo)	223	10,887,720	48,824	100.00%

Fuente: Elaboración propia con datos del World Prison Brief del ICPR (Institute for Criminal Policy Research)

Gráfica 2.1.*Población penitenciaria por región continental (2019)*

Fuente: Elaboración propia con datos del World Prison Brief del ICPR (Institute for Criminal Policy Research)

Al realizar el análisis en cada una de las regiones en las que el ICPR clasificó a la población penitenciaria, así como las naciones que las componen es posible analizar que en la región de África, los países con la mayor cantidad de personas privadas de la libertad son Sudáfrica con 154,437 internos (1.42% del total mundial y 13.05% de la región); Etiopía con 113,727 internos (1.04% del total mundial y 9.61% de la región) y Egipto con 106,000 internos (1.04% del total mundial y 8.96% de la región).

Mientras que, en la región asiática, se encontró que la nación con la mayor cantidad de internos penitenciarios es China al contabilizar 1,710,000 personas privadas de la libertad (15.71% del total mundial y 41.64% de la región); seguida por India con 478,600 internos (4.40% del total mundial y 11.65% de la región) y Tailandia con 358,369 internos (3.29% del total mundial y 8.73% de la región).

En la región del Caribe, la mayor incidencia de personas reclusas se encuentra en Cuba con 57,337 internos, lo que representa el 47.37% de la región; sin embargo, solamente representa el 0.53% de la población penitencia en el mundo. Por otra parte, la República Dominicana contabiliza un total de 26,782 internos (0.25% del total mundial y 22.13% de la región), mientras que Haití registra solamente 10,905 internos (0.10% del total mundial y 9.01% de la región).

Norteamérica presenta una situación particular, si bien es una las regiones geográficas con una mayor cantidad de personas privadas de la libertad, la mayoría (98.13%) se encuentran reclusos en Estados Unidos, esta nación contabiliza un total de 2,094,000 lo que representa el 19.23% de total de población penitenciaria en el mundo. Es decir que 2 de cada 10 personas en un penal se encuentran en este país. Por otro lado, Canadá registra solamente 39,579 internos (0.36% del mundo y 1.85% de la región).

Uno de los puntos importantes a considerar es que dentro del estudio del ICPR, México, está considerado como parte de América Central; en esta región, nuestro país encabeza el listado con un total de 213,493 personas privadas de la libertad (1.95% del total mundial y 59.86% de la región). Además, en El Salvador se registraron 36,691 internos (0.34% del total mundial y 10.29% de la región) y en Guatemala existen 26,691 (0.24% del total mundial y 7.20% de la región).

En Suramérica, el país que presenta la mayor cantidad de población penitenciaria es Brasil con 755,274 internos (6.94% del total mundial y 60.82% de la región); sin embargo, la diferencia entre este país y los siguientes en el listado es considerable. Argentina contabiliza un total de 103,209 internos penitenciarias (0.95% del total mundial y 8.31% de la región); mientras que Colombia presenta 98,971 internos (0.91% del total mundial y 7.97% de la región).

En el caso de la región europea, Rusia tiene el índice más alto de personas privadas de la libertad; en este país se contabilizan un total de 491,650 internos penitenciarios (4.52% del total mundial y 33.21% de la región). En segundo puesto se encuentra Turquía con 281,094 internos (2.58% del total mundial y 18.99% de la región) y, en tercera posición se sitúa Reino Unido con 79,083 personas reclusas (0.73% del total mundial y 5.34% de la región).

La nación con la mayor cantidad de reclusos en la región de Medio Oriente es Arabia Saudita con 61,000 internos (0.56% del total mundial y 30.33% de la región); seguido por Irak, con 45,000 internos (0.41% del total mundial y 22.37% de la región) y Jordania con 20,060 internos (0.18% del total mundial y 9.97% de la región).

Finalmente, en la región de Oceanía, Australia es el país con la mayor cantidad de internos penitenciarios al registrar un total de 41,180 internos (0.38% del total mundial y

65.69% de la región); seguido por Nueva Zelanda con 9,469 internos (0.09% del total mundial y 15.11% de la región) y Papua, Nueva Guinea con 5,087 internos (0.05% del total mundial y 8.12% de la región).

Tabla 2.3

Top 3 de países con mayor población penitenciaria clasificados por región (2019)

Región	País	Población penitenciaria	Porcentaje mundial	Porcentaje de región
África	Sudáfrica	154,437	1.42%	13.06%
	Etiopia	113,727	1.04%	9.61%
	Egipto	106,000	0.97%	8.96%
Asia	China	1,710,000	15.71%	41.64%
	India	478,600	4.40%	11.65%
	Tailandia	358,369	3.29%	8.73%
Caribe	Cuba	57,337	0.53%	47.37%
	República Dominicana	26,782	0.25%	22.13%
	Haití	10,905	0.10%	9.01%
Norteamérica	Estados Unidos	2,094,000	19.23%	98.13%
	Canadá	39,579	0.36%	1.85%
	Bermuda	226	0.00%	0.01%
América central	México	213,493	1.96%	59.86%
	El Salvador	36,691	0.34%	10.29%
	Guatemala	25,691	0.24%	7.20%
Suramérica	Brasil	755,274	6.94%	60.82%
	Argentina	103,209	0.95%	8.31%
	Colombia	98,971	0.91%	7.97%
Europa	Rusia	491,650	4.52%	33.21%
	Turquía	281,094	2.58%	18.99%
	Reino Unido	79,083	0.73%	5.34%
Medio oriente	Arabia Saudita	61,000	0.56%	30.33%
	Irak	45,000	0.41%	22.37%
	Jordania	20,060	0.18%	9.97%
Oceanía	Australia	41,180	0.38%	65.69%
	Nueva Zelanda	9,469	0.09%	15.11%
	Papua Nueva Guinea	5,087	0.05%	8.12%

Fuente: Elaboración propia con datos del World Prison Brief del ICPR

La tabla 2.4 muestra los 25 países con la mayor población penitenciaria, durante el año 2019, según el World Prison Brief del ICPR. En este listado, Estados Unidos es la nación con la mayor población penitenciaria con un total de 2,094,000 personas privadas de la libertad, es decir, 19.23% del total mundial; en este país se encuentran 2 de cada 10 internos penitenciarios en el mundo. En segundo puesto se encuentra China con 1,710,000

internos (17.71% del total mundial) y, en tercera posición, está Brasil con 755,274 internos (6.94% del total mundial). En este listado México ocupa la posición número 11 al contabilizar 213,493 personas privadas de la libertad en las diversas instituciones penitenciarias tanto estatales como federales; esto representa un total de 1.96% del total de internos en el mundo.

Tabla 2.4

25 países con el mayor número de personas privadas de la libertad (2019)

Número	Región	País	Población penitenciaria	Porcentaje
1	Norteamérica	Estados Unidos	2,094,000	19.23%
2	Asia	China	1,710,000	15.71%
3	Suramérica	Brasil	755,274	6.94%
4	Europa	Rusia	491,650	4.52%
5	Asia	India	478,600	4.40%
6	Asia	Tailandia	358,369	3.29%
7	Europa	Turquía	281,094	2.58%
8	Asia	Irán	240,000	2.20%
9	Asia	Indonesia	236,567	2.17%
10	Asia	Filipinas	215,000	1.97%
11	América Central	México	213,493	1.96%
12	África	Sudáfrica	154,437	1.42%
13	Asia	Vietnam	123,697	1.14%
14	África	Etiopía	113,727	1.04%
15	África	Egipto	106,000	0.97%
16	Suramérica	Argentina	103,209	0.95%
17	Suramérica	Colombia	98,971	0.91%
18	Suramérica	Perú	96,440	0.89%
19	Asia	Myanmar	92,000	0.84%
20	Asia	Bangladesh	88,084	0.81%
21	África	Marruecos	85,767	0.79%
22	Europa	Reino Unido	79,083	0.73%
23	Asia	Pakistán	77,275	0.71%
24	Europa	Polonia	69,065	0.63%
25	Asia	Malasia	68,603	0.63%

Fuente: Elaboración propia con datos del World Prison Brief del ICPR

2.5.2. Población penitenciaria en México

En lo que respecta a la población penitenciaria en México, los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (CNGSPSP, 2020) realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística indican que nuestro país, para el año 2019, se contabilizaron un total de 156,722 personas privadas de la libertad; de estas, 148,479 son hombres (94.7%) y 8,243 (5.3%) son mujeres.

Tabla 2.5

Género de los internos penitenciarios en México (2019).

Género	Internos	Porcentaje
Masculino	148,479	94.7%
Femenino	8,243	5.3%
Total	156,722	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

De las personas privadas de la libertad en México, el 89.8% (140,731 personas) se encuentran dentro de un centro de reinserción social por haber cometido un delito del fuero común; el 7.7% (12,145) por un delito de orden federal y 2.5% (3,846 personas) por delitos que abarcan ambos fueros.

Entre la población penitenciaria del género masculino, el 90.0% se encuentra recluido por un delito del fuero común (133,571 personas); mientras que el 86.9% de las mujeres se encuentra en la misma situación (7,160). Por otro lado, el 7.5% de los hombres (11,163 personas) y el 11.9% de las mujeres (982 personas) se encuentran reclusos por delitos del fuero federal. El 2.5% de los hombres (3,745 personas) y 1.2% de las mujeres (101 personas) están privados de la libertad por delitos correspondientes a ambos tipos de fuero.

Tabla 2.6

Población penitenciaria en México clasificada por género y tipo de fuero (2019)

Tipo de fuero	Total		Hombres		Mujeres	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Fuero común	140,731	89.8%	133,571	90.0%	7,160	86.9%
Fuero federal	12,145	7.7%	11,163	7.5%	982	11.9%
Ambos fueros	3,846	2.5%	3,745	2.5%	101	1.2%
Total	156,722	100%	148,479	100%	8,243	100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (2020).

En cuando a la edad, los resultados del CNGSPSP (2020), indican que el 90.0% de los internos penitenciarios en el país tienen menos de 49 años; por lo que puede considerarse que las personas privadas de la libertad en el país corresponden a individuos jóvenes y en la etapa productiva de la vida; por otra parte, solamente el 10.0% de los internos en México tienen una edad igual o superior a los 50 años.

Asimismo, cabe destacar que 4 de cada 10 internos penitenciarios tienen una edad inferior a los 30 años de edad; motivo por el cual es posible deducir la importancia de brindar oportunidades educativas a este sector de la población para que incrementen sus posibilidades de desarrollo personal, profesional y social cuando recuperen su libertad al concluir su proceso condenatorio.

Tabla 2.7

Rango de edad de los internos penitenciarios en México (2019).

Rango	Internos	Porcentaje
18 a 24 años	30,561	19.6%
25 a 29 años	34,479	22.0%
30 a 34 años	27,897	17.9%
35 a 39 años	21,784	13.9%
40 a 44 años	16,142	10.3%
45 a 49 años	10,030	6.4%
50 a 54 años	5,955	3.8%
55 a 59 años	3,448	2.2%
60 años o más	3,291	2.1%
No identificado	3,134	2.0%
Total	156,722	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

En lo que respecta al nivel educativo de las personas privadas de la libertad en México, el 69.5% de la población penitenciaria cuenta con un nivel educativo básico (52,283 –33.4%– primaria y 56,588 –36.1%– secundaria). Por otro lado, solamente el 13.7% (21,520 personas) alcanzaron el nivel de preparatoria; 2.9% (4,591 personas) estudios técnicos o comerciales; solamente 3.3% (5,247 personas) concluyeron estudios

de licenciatura). Apenas 109 internos tienen estudios de maestría y 774 de doctorado. Además, 6.5% de los internos (10,260 personas) manifestaron no contar con ningún nivel de estudios.

Tabla 2.8

Escolaridad de los internos penitenciarios en México (2019).

	Internos	Porcentaje
Sin estudios	10,260	6.5%
Primaria	52,283	33.4%
Secundaria	56,588	36.1%
Preparatoria	21,520	13.7%
Técnico o comercial	4,591	2.9%
Licenciatura	5,247	3.3%
Maestría	109	0.1%
Doctorado	774	0.5%
No especificado	5,347	3.4%
Total	156,722	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

2.5.2.1. Nivel educativo de las personas privadas de la libertad en México

En lo que respecta al nivel educativo básico, los estados que registran los mayores índices de personas privadas de la libertad que solamente cuentan con una educación de nivel de bachillerato o inferior, son Baja California Sur con 94.6% del total, de los cuales, el 44.8% terminó la primaria, 23.4% la secundaria y 26.4% la preparatoria.

En segundo puesto se encuentra el estado de Sinaloa con 93.7% del total de la población penitenciaria del país (35.1% primaria; 41.5% secundaria y 17.1% preparatoria); por Nayarit con 93.3% (34.1% primaria; 36.6% secundaria y 22.7% preparatoria); Tlaxcala con 93.1% (28.0% primaria, 47.8% secundaria y 17.4% preparatoria) y Baja California con 93.1% del total (26.0% primaria; 46.1% secundaria y 20.7% preparatoria).

De manera general, los resultados del Censo Nacional de Gobierno Seguridad Pública y Sistema Penitenciario de INEGI, muestran que 8 de cada 10 personas privadas de la libertad cuenta solamente con estudios del nivel básico y/o medio superior

(preparatoria). En la siguiente tabla se detalla la situación presente en cada uno de los estados de la República Mexicana en este sentido.

Tabla 2.9

Internos penitenciarios con escolaridad del nivel básico en México (2019)

Entidad	Primaria		Secundaria		Preparatoria		Total	% del total
	F.	%	F.	%	F.	%		
B.C. Sur	539	44.8%	281	23.4%	317	26.4%	1,137	94.6%
Sinaloa	1,570	35.1%	1,858	41.5%	767	17.1%	4,195	93.7%
Nayarit	705	34.1%	757	36.6%	469	22.7%	1,931	93.3%
Tlaxcala	208	28.0%	355	47.8%	129	17.4%	692	93.1%
B. California	3,060	26.0%	5,418	46.1%	2,430	20.7%	10,908	92.7%
Guanajuato	2,136	35.2%	2,524	41.6%	922	15.2%	5,582	92.1%
Chiapas	570	26.6%	1,096	51.1%	308	14.4%	1,974	92.0%
Aguascalientes	429	26.7%	769	47.9%	271	16.9%	1,469	91.6%
Jalisco	4,728	35.8%	5,448	41.2%	1,889	14.3%	12,065	91.3%
Zacatecas	666	31.2%	850	39.8%	422	19.8%	1,938	90.7%
San Luis P.	911	37.1%	976	39.7%	338	13.8%	2,225	90.6%
Querétaro	410	15.9%	781	30.3%	1,137	44.1%	2,328	90.3%
Tamaulipas	1,258	33.0%	1,589	41.7%	590	15.5%	3,437	90.2%
Morelos	1,007	30.3%	1,482	44.6%	489	14.7%	2,978	89.7%
Hidalgo	991	23.0%	2,245	52.0%	624	14.5%	3,860	89.4%
Yucatán	469	33.5%	592	42.3%	185	13.2%	1,246	89.0%
Puebla	1,985	39.2%	1,797	35.5%	715	14.1%	4,497	88.9%
Durango	839	23.2%	1,489	41.2%	878	24.3%	3,206	88.7%
Chihuahua	413	29.4%	677	48.2%	154	11.0%	1,244	88.5%
Guerrero	1,540	36.2%	1,396	32.8%	769	18.1%	3,705	87.1%
Veracruz	2,230	37.1%	1,823	30.3%	1,064	17.7%	5,117	85.1%
México	14,113	47.0%	9,338	31.1%	1,835	6.1%	25,286	84.2%
Campeche	422	33.4%	402	31.8%	212	16.8%	1,036	82.0%
Nuevo León	1,570	24.1%	2,867	44.0%	786	12.1%	5,223	80.1%
Coahuila	1,717	43.4%	1,037	26.2%	405	10.2%	3,159	79.9%
Oaxaca	1,364	38.9%	1,051	30.0%	370	10.6%	2,785	79.5%
Quintana Roo	745	29.9%	909	36.5%	296	11.9%	1,950	78.4%
Colima	2,696	33.4%	2,321	28.8%	1,013	12.6%	6,030	74.7%
Sonora	1,455	18.1%	2,995	37.2%	1,013	12.6%	5,463	67.9%
Michoacán	1,478	27.9%	1,372	25.9%	641	12.1%	3,491	65.9%
Tabasco	59	1.5%	93	2.4%	82	2.1%	234	6.0%
Cd. de Méx.	ND	ND	ND	ND	ND	ND%	ND	ND
Total	52,283	33.4%	56,588	36.1%	21,520	13.7%	130,391	83.2%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020)

Uno de los indicadores considerados dentro del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México realizado por INEGI, evalúa la cantidad de personas que cuentan con la habilidad de leer y escribir. Los resultados indican que el 85.2% de las personas privadas de la libertad cuenta con la habilidad de leer y

escribir; mientras que solamente el 10.2% no tiene esta posibilidad. Además, en el 4.6% de los casos no se identificó si la persona es capaz de leer y escribir.

Tabla 2.10

Escolaridad de los internos penitenciarios en México (2019).

	Internos	Porcentaje
Sabe leer y escribir	133,565	85.2%
No sabe leer y escribir	16,029	10.2%
No identificado	7,128	4.6%
Total	156,722	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

Si se analiza este indicador por entidad, los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (2020), muestran que el estado de Nuevo León, Chipas, Tlaxcala y Aguascalientes muestran un porcentaje de alfabetización superior al 99.0% de la población penitenciaria; mientras que en Durango el 98.6% de los internos sabe leer; en Zacatecas el 97.9%; en Quintana Roo el 97.5%; en Colima el 97.2%; en Baja California el 97.0%.

Además, en Sonora (96.8%), Baja California (96.7%), Veracruz (96.6%), San Luis Potosí (96.3%), Jalisco (95.6%), Nayarit (95.3%), Yucatán (94.6%), Hidalgo (94.5%), Chihuahua (93.9%), Guerrero (93.1%), Campeche (92.6%) y México (92.0%) la estadística que 9 de cada 10 internos penitenciarios saben leer y escribir.

Por el contrario, el estado donde la población penitenciaria muestra el mayor rezago en materia de alfabetización es Puebla, en esta entidad el 76.8% de los internos penitenciarios no saben leer escribir. En el estado de Morelos, el 63.9% presenta deficiencias en lectura y escritura; en Guanajuato esta cifra asciende al 33.4%; 22.5% en Sinaloa; 19.6% en Querétaro; 15.8% en Oaxaca y 12.9% en Coahuila.

Tabla 2.11

Alfabetización de las personas privadas de la libertad en México (2019)

	Sabe leer y escribir		No sabe leer y escribir		No identificado		Total
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	
Aguascalientes	1,588	99.0%	16	1.0%	0	0.0%	1,604
Baja California	11,369	96.7%	0	0.0%	394	3.3%	11,763
Baja California Sur	1,166	97.0%	36	3.0%	0	0.0%	1,202
Campeche	1,169	92.6%	94	7.4%	0	0.0%	1,263

Chiapas	2,125	99.1%	20	0.9%	0	0.0%	2,145
Chihuahua	1,320	93.9%	62	4.4%	24	1.7%	1,406
Ciudad de México	ND	ND%	ND	ND	ND	ND	ND
Coahuila	3,434	86.9%	512	12.9%	6	0.2%	3,952
Colima	7,839	97.2%	229	2.8%	0	0.0%	8,068
Durango	3,565	98.6%	50	1.4%	0	0.0%	3,615
Guanajuato	4,038	66.6%	2,025	33.4%	0	0.0%	6,063
Guerrero	3,961	93.1%	293	6.9%	0	0.0%	4,254
Hidalgo	4,082	94.5%	236	5.5%	0	0.0%	4,318
Jalisco	12,632	95.6%	540	4.1%	40	0.3%	13,212
México	27,638	92.0%	2,387	7.9%	0	0.0%	30,025
Michoacán	1,319	24.9%	312	5.9%	3,663	69.2%	5,294
Morelos	1,087	32.7%	2,123	63.9%	110	3.3%	3,320
Nayarit	1,971	95.3%	98	4.7%	0	0.0%	2,069
Nuevo León	6,491	99.5%	20	0.3%	10	0.2%	6,521
Oaxaca	2,949	84.2%	555	15.8%	0	0.0%	3,504
Puebla	1,173	23.2%	3,885	76.8%	0	0.0%	5,058
Querétaro	2,072	80.3%	507	19.6%	0	0.0%	2,579
Quintana Roo	2,425	97.5%	63	2.5%	0	0.0%	2,488
San Luis Potosí	2,365	96.3%	64	2.6%	28	1.1%	2,457
Sinaloa	3,471	77.5%	1,006	22.5%	0	0.0%	4,477
Sonora	7,787	96.8%	251	3.1%	5	0.1%	8,043
Tabasco	1,278	32.6%	184	4.7%	2,458	62.7%	3,920
Tamaulipas	3,290	86.4%	130	3.4%	390	10.2%	3,810
Tlaxcala	736	99.1%	7	0.9%	0	0.0%	743
Veracruz	5,808	96.6%	205	3.4%	0	0.0%	6,013
Yucatán	1,325	94.6%	75	5.4%	0	0.0%	1,400
Zacatecas	2,092	97.9%	44	2.1%	0	0.0%	2,136
Total	133,565	85.2%	16,029	10.2%	7,128	4.5%	156,722

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

En el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario realizado por INEGI durante 2015 se evaluaron otra serie de variables que no han sido analizadas en otros años o que, por lo menos, no se encuentran disponibles para consulta. Entre estos indicadores se encuentra el nivel en el que las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social en México están estudiando.

Los datos de este censo indican que en México un total de 68,817 internos penitenciarios en México se encontraban estudiando; de estos, 50.0% estudiaban primaria (19.2%) y secundaria (30.8%). Por otro lado, el 6.9% de los internos que se encontraba estudiando lo hacía en cursos de alfabetización; 6.5% se estaba preparando en docencia; 7.9% en artes y humanidades; 7.6% en ciencias sociales; 3.3% en ciencias naturales y

computacionales; 6.5% en ingeniería y manufactura; 0.01% en agronomía y veterinaria; 8.7% en servicio y, además, en 2.3% de los casos no se especifica.

Sin embargo, es preciso indicar que, en este indicador, aunque se establece el nivel educativo, el análisis de INEGI no muestra cuál es la institución o instituciones que respaldan o certifican los estudios de las personas privadas de la libertad.

Tabla 2.12

Nivel en el que se encuentran estudiando los internos penitenciarios en México (2015)

	Internos	Porcentaje
Alfabetización	4,758	6.9%
Educación primaria	13,193	19.2%
Educación secundaria	21,180	30.8%
Educación (docente)	4,454	6.5%
Artes y humanidades	5,405	7.9%
Ciencias sociales	5,248	7.6%
Ciencias naturales y computacionales	2,282	3.3%
Ingeniería y manufactura	4,461	6.5%
Agronomía y veterinaria	11	0.0%
Salud	277	0.4%
Servicios	5,980	8.7%
No especificado	1,568	2.3%
Total	68,817	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2015).

2.5.2.2. Infraestructura y personal penitenciario en México

En materia de infraestructura, el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario desarrollado por INEGI contempla una serie de indicadores relacionados con los espacios físicos y con el personal humano que labora dentro de los centros de reinserción social; entre estos se encuentran la cantidad de instalaciones, el personal que en ellas labora y la distribución de los espacios dentro de los penales.

Las instituciones penitenciarias, no solamente deben ser vistas como lugares privativos o de encierro; sino como instalaciones enfocadas a proveer a las personas privadas de la libertad la ayuda necesaria para facilitar su reinserción en aspecto como: capacitación para el trabajo, educación, salud, psicología, psiquiatría, asistencia legal, entre otras.

Según datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para el año 2019 se contabilizan un total de 288 instalaciones penitenciarias en el país; cifra que contrasta con la emitida por el ICPR que indica la existencia de 379.

Las cifras del citado censo muestran que el Estado de México, es la entidad federativa con mayor cantidad de centros penitenciarios en el país con 24, es decir, el 8.3% del total. Seguido por Sonora con 19 (6.6%); Veracruz con 18 (6.3%); Veracruz con 17 (23.5 por ciento); Zacatecas con 17 (5.9%); Chiapas con 16 (5.6%); Guerrero con 14 (4.9%); Jalisco con 14 (4.9%); Hidalgo con 13 (4.5%); además de Michoacán, Oaxaca y Tamaulipas con 12 instalaciones cada entidad (4.2%)

Nuevo León, figura en la posición número 23, al contabilizar apenas cinco centros penitenciarios (CERESO Apodaca I y II, CERESO Cadereyta y CERESO Apodaca Femenil) equivalente al 1.7% del total de instalaciones de seguridad y de reinserción social en México.

Tabla 2.13
Centros penitenciarios en México (2019)

	Internos	Porcentaje
Aguascalientes	5	1.7%
Baja California	8	2.8%
Baja California Sur	5	1.7%
Campeche	3	1.0%
Coahuila	7	2.4%
Colima	4	1.4%
Chiapas	16	5.6%
Chihuahua	11	3.8%
Ciudad de México	ND	ND
Durango	5	1.7%
Guanajuato	11	3.8%
Guerrero	14	4.9%
Hidalgo	13	4.5%
Jalisco	14	4.9%
México	24	8.3%
Michoacán	12	4.2%
Morelos	6	2.1%
Nayarit	4	1.4%
Nuevo León	5	1.7%
Oaxaca	12	4.2%
Puebla	4	1.4%
Querétaro	5	1.7%

Quintana Roo	4	1.4%
San Luis Potosí	7	2.4%
Sinaloa	5	1.7%
Sonora	19	6.6%
Tabasco	9	3.1%
Tamaulipas	12	4.2%
Tlaxcala	4	1.4%
Veracruz	18	6.3%
Yucatán	5	1.7%
Zacatecas	17	5.9%
Total	288	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

En los centros de readaptación social en México, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario se contabilizaron 2,463 espacios; es decir, instalaciones destinadas a actividades como dormitorios, visitas conyugales, administrativos, deportivos, servicios médicos, entre otros.

En ese sentido, las estadísticas indican que el 11 por ciento de los espacios son utilizados como dormitorios (272 espacios); 10.6 por ciento son empleados para visitas conyugales (261 espacios); 10.5 por ciento para fines administrativos (259 espacios); 10.4 por ciento para actividades deportivas (256 espacios); 9.3 es empleado para brindar servicios médicos (235 espacios); mismo porcentaje de aquellos espacios usados como locutorios (230 espacios).

En lo que respecta al ámbito educativo, las cifras del censo indican que el 9.3 por ciento de los espacios se utilizan como aulas escolares, estos son equivalente a 228 espacios; 10 por ciento para talleres (246 espacios); mientras que apenas el 6.8 por ciento de los espacios son empleados como bibliotecas (220 espacios). Estas cifras indican que dentro de los centros de readaptación social en México 26 por ciento de los espacios son empleados con fines educativos o relacionados con este objetivo.

Tabla 2.14

Distribución de los espacios en los centros penitenciarios en México (2019)

	Internos	Porcentaje
Dormitorios	272	11.0%
Visitas conyugales	261	10.6%
Administrativos	259	10.5%
Deportivos	256	10.4%

Talleres	246	10.0%
Servicio médico	235	9.5%
Locutorios	230	9.3%
Aulas escolares	228	9.3%
Visitas familiares	220	8.9%
Bibliotecas	168	6.8%
Otros	66	2.7%
Guarderías	22	0.9%
Total	68,817	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

Al interno de los centros de reinserción social en México, laboran personas que brindan atención de diferentes índoles a la población penitenciaria del país. Entre personal directivo, técnico y de operación y de seguridad, el sistema penitenciario mexicano se compone, para el año 2020, por 32,503 empleados en las 288 instituciones de seguridad existentes en el país, lo que representa un promedio de 113 funcionarios por CERESO.

El estado de México es la entidad con mayor cantidad de personal al contabilizar 3,802 personas en las 24 instituciones penitenciarias existentes en este territorio; esto es, 11.7% del total de personas que laboran en este sistema en México. A su vez, esto equivale a que, dentro de las cuatro instalaciones de seguridad en esta entidad, laboran un promedio de 158 personas.

Jalisco ocupa la segunda posición; aquí laboran 2,342 personas dentro de los 14 centros penitenciarios ubicados en esta región. Esto equivale al 7.21% del personal en esta materia en México y a un promedio de 167 trabajadores por centro. Seguido por Michoacán, entidad donde trabajan 2,226 personas, 6.85% del total nacional en 12 centros para un promedio de 186 personas por instalación de seguridad.

Mientras que en Guanajuato se registran 2,142 personas laborando dentro del sistema penitenciario (6.59% del total nacional) lo que implica un promedio de 195 personas por centro; seguido por Chiapas que, para 16 centros penitenciarios cuenta con un personal de 1,732 personas, esto es 5.33% del total nacional y un promedio de 108 personas por centro.

En lo que respecta al personal penitenciario, destacan casos como el que se presenta en el estado de Hidalgo, donde el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad

Pública y Sistema Penitenciario en México indica la existencia de 13 centros de reinserción social; sin embargo, esta entidad apenas contabiliza a 406 personas laboran dentro del sistema carcelario (1.25% del total nacional), esto asciende a un promedio de 31 trabajadores por institución

Un caso similar se presenta en el estado de Zacatecas; el personal que trabaja dentro de los centros penitenciarios en esta entidad apenas representa el 1.81% por ciento del total nacional con 588 personas. Cifra que, para los 17 centros penitenciarios registrados en el estado, representa apenas un promedio de 35 personas laborando en los mismos.

Misma tendencia que se registra en el estado de Coahuila donde existen 292 empleados dentro de 7 centros penitenciarios; es decir, un promedio de 42 trabajadores por cada instalación de seguridad y de Tlaxcala, donde los 4 centros penitenciarios, trabajan apenas 222 personas (56 en promedio por centro).

En el caso de Nuevo León, esta entidad ocupa la posición número 7 al contabilizar un total de 1,563 personas laborando dentro del sistema penitenciario. Esta cifra equivale al 4.81% por ciento del total nacional y a un promedio de 313 personas trabajando dentro de cada uno de los cinco centros de reinserción de esta entidad.

Tabla 2.15

Personas que labora dentro de los centros penitenciarios en México (2019)

Entidad	Personal	Porcentaje	Centros penitenciarios	Promedio por centro
Aguascalientes	468	1.44%	5	94
Baja California	1,417	4.36%	8	177
Baja California Sur	409	1.26%	5	82
Campeche	292	0.90%	3	97
Coahuila	292	0.90%	7	42
Colima	451	1.39%	4	113
Chiapas	1 732	5.33%	16	108
Chihuahua	1 397	4.30%	11	127
Ciudad de México	ND	ND	ND	ND
Durango	642	1.98%	5	128
Guanajuato	2 142	6.59%	11	195
Guerrero	843	2.59%	14	60
Hidalgo	406	1.25%	13	31
Jalisco	2 342	7.21%	14	167
México	3 802	11.70%	24	158
Michoacán de Ocampo	2 226	6.85%	12	186

Morelos	940	2.89%	6	157
Nayarit	480	1.48%	4	120
Nuevo León	1 563	4.81%	5	313
Oaxaca	877	2.70%	12	73
Puebla	1 241	3.82%	4	310
Querétaro	557	1.71%	5	111
Quintana Roo	304	0.94%	4	76
San Luis Potosí	888	2.73%	7	127
Sinaloa	803	2.47%	5	161
Sonora	1 252	3.85%	19	66
Tabasco	1 223	3.76%	9	136
Tamaulipas	971	2.99%	12	81
Tlaxcala	222	0.68%	4	56
Veracruz	1 125	3.46%	18	63
Yucatán	607	1.87%	5	121
Zacatecas	588	1.81%	17	35
Total	32,503	100	288	113

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020)

En lo que respecta a la clasificación del personal que labora dentro de los centros penitenciarios en México, las estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario indican que el 63.3% de quienes trabajan dentro de los centros de reinserción social corresponden al personal de custodia; es decir, que 20,589 de las 32,503 personas que laboran dentro del sistema, se dedican a vigilar y salvaguardar la integridad de los internos.

Por otro lado, solamente el 8.6% –2,780 personas– se desempeñan como personal de apoyo en los centros penitenciarios. El 16.8% –5,455 personas– corresponde a personal técnico y de operación; mientras que el 11.3%, equivalente a 3,679 personas, realizan funciones directivas dentro de los centros de reinserción social.

En el caso de Nuevo León, para el año 2019 se contabilizaron un total de 1,563 empleados dentro del sistema penitenciario. De estos, el 69.0%, es decir, 1,078 personas, laboran como personal de custodia y de seguridad dentro de los centros de reinserción social. Por otro lado, el 15.7% –245 personas– corresponden a empleados del departamento técnico y de operación; 10.4% (162 personas) forman parte del grupo directivo y solo el 5.0% (78 personas) corresponden al personal de apoyo.

Tabla 2.16*Clasificación del personal que labora en los centros penitenciarios en México (2019)*

Estado	Directivos		Técnico y de operación		Custodios		Personal de apoyo	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Aguascalientes	64	13.6%	94	20.0%	308	65.7%	3	0.6%
Baja California	133	9.4%	234	16.5%	1,016	71.7%	34	2.4%
Baja California Sur	28	6.8%	69	16.9%	265	64.8%	47	11.5%
Campeche	46	15.8%	64	21.9%	147	50.3%	35	12.0%
Coahuila	24	8.2%	55	18.8%	196	67.1%	17	5.8%
Colima	62	13.7%	77	17.1%	281	62.3%	31	6.9%
Chiapas	496	28.6%	325	18.8%	884	51.0%	27	1.6%
Chihuahua	176	12.6%	144	10.3%	1,077	77.1%	0	0.0%
Ciudad de México	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Durango	50	7.8%	95	14.8%	445	69.3%	52	8.1%
Guanajuato	140	6.5%	239	11.2%	1573	73.4%	190	8.9%
Guerrero	44	5.2%	141	16.7%	556	66.0%	102	12.1%
Hidalgo	18	4.4%	55	13.5%	291	71.7%	42	10.3%
Jalisco	143	6.1%	467	19.9%	1447	61.8%	285	12.2%
México	407	10.7%	637	16.8%	2737	72.0%	21	0.6%
Michoacán	48	2.2%	275	12.4%	1322	59.4%	581	26.1%
Morelos	66	7.0%	162	17.2%	501	53.3%	211	22.4%
Nayarit	13	2.7%	87	18.1%	348	72.5%	32	6.7%
Nuevo León	162	10.4%	245	15.7%	1078	69.0%	78	5.0%
Oaxaca	133	15.2%	233	26.6%	466	53.1%	45	5.1%
Puebla	149	12.0%	140	11.3%	839	67.6%	113	9.1%
Querétaro	51	9.2%	116	20.8%	357	64.1%	33	5.9%
Quintana Roo	74	24.3%	61	20.1%	166	54.6%	3	1.0%
San Luis Potosí	188	21.2%	141	15.9%	506	57.0%	53	6.0%
Sinaloa	236	29.4%	183	22.8%	375	46.7%	9	1.1%
Sonora	113	9.0%	225	18.0%	742	59.3%	172	13.7%
Tabasco	248	20.3%	113	9.2%	727	59.4%	135	11.0%
Tamaulipas	46	4.7%	218	22.5%	574	59.1%	133	13.7%
Tlaxcala	28	12.6%	49	22.1%	123	55.4%	22	9.9%
Veracruz	184	16.4%	273	24.3%	557	49.5%	111	9.9%
Yucatán	71	11.7%	120	19.8%	296	48.8%	120	19.8%
Zacatecas	38	6.5%	118	20.1%	389	66.2%	43	7.3%
Total	3,679	11.3%	5,455	16.8%	20,589	63.3%	2,780	8.6%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020)

2.5.2.3. Educación y el sistema penitenciario mexicano

En lo que respecta a la cantidad de espacios totales en cada entidad y la proporción de estos que son dedicados a la educación o a la capacitación de las personas privadas de la libertad dentro de los centros de reinserción, la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México, indica que, de los 2,462

espacios identificados dentro de los centros de reinserción social, solamente 642 (26.1%) son utilizados con finalidades académicas.

El estado de Campeche es la entidad de la República Mexicana en donde existe una mayor utilización de los espacios con fines de educación, los resultados de INEGI (2020) indican que, de 22 áreas disponibles, 7 son utilizadas con este objetivo (31.8%). En segundo puesto se encuentra Quintana Roo donde de 19 espacios, 6 se utilizan con fines educativos (31.6%). Por otro lado, en Tamaulipas se emplea el 30.9% (21 de 68 espacios); en Aguascalientes el 30.6% (11 de 36 espacios) y en la Ciudad de México el 30.2% (38 de 126 espacios).

Mientras que Tabasco, por el contrario, solamente dedica el 12.0% de sus instalaciones para fines de preparación académica de las personas privadas de la libertad (9 de 75 espacios). Entre las entidades con el menor porcentaje de áreas usadas con fines educativos también se encuentran Guerrero con 18.4% (19 de 103 espacios); San Luis Potosí con 19.7% (12 de 61 espacios); Hidalgo con 21.4% (24 de 112 espacios) y Nayarit con el 22.2% (2 de 9 espacios). En relación a este aspecto, el estado de Nuevo León ocupa la posición número 17, al utilizar el 27.3% de los espacios disponibles a la educación de los internos en los centros de reinserción social de la entidad. INEGI indica que en el estado se emplean 9 de las 33 áreas disponibles con este fin.

Tabla 2.17

Cantidad de espacios dedicados a la educación/capacitación en los centros penitenciarios en México (2019)

Entidad	Espacios totales	Espacios educación ¹	Porcentaje
Campeche	22	7	31.8%
Quintana Roo	19	6	31.6%
Tamaulipas	68	21	30.9%
Aguascalientes	36	11	30.6%
Ciudad de México	126	38	30.2%
Jalisco	121	36	29.8%
Sonora	129	38	29.5%
Colima	31	9	29.0%
Puebla	31	9	29.0%
Sinaloa	31	9	29.0%
Chihuahua	90	26	28.9%
Michoacán de Ocampo	167	48	28.7%
Guanajuato	101	29	28.7%
Querétaro	43	12	27.9%
Baja California	54	15	27.8%

Veracruz	137	38	27.7%
Nuevo León	33	9	27.3%
Tlaxcala	22	6	27.3%
Baja California Sur	48	13	27.1%
Yucatán	41	11	26.8%
Coahuila de Zaragoza	76	20	26.3%
Morelos	50	13	26.0%
Oaxaca	144	37	25.7%
Chiapas	114	28	24.6%
Durango	29	7	24.1%
México	184	44	23.9%
Zacatecas	157	37	23.6%
Nayarit	9	2	22.2%
Hidalgo	112	24	21.4%
San Luis Potosí	61	12	19.7%
Guerrero	103	19	18.4%
Tabasco	75	9	12.0%
Total	2,462	642	26.1%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020). ¹Se consideran los espacios destinados a talleres, aulas escolares y bibliotecas.

En lo que respecta a espacios, el estado de Michoacán es la entidad donde se destina una mayor cantidad de espacios a la educación y/o capacitación de las personas privadas de la libertad; las cifras de INEGI indican que en este estado existen 48 áreas enfocadas a este fin, de las cuales, 16 corresponden a bibliotecas, 16 a talleres y 16 a aulas escolares. En segundo puesto se encuentra el estado de México con 44 espacios, de estos, 4 se emplean como bibliotecas, 20 como talleres y 20 aulas escolares. En Ciudad de México, de 38 espacios disponibles, 13 son usados como bibliotecas, 12 como talleres y 13 como aulas escolares. En Sonora, que también tiene 38 espacios disponibles, 12 son empleados como bibliotecas, 13 como talleres y 13 como aulas escolares. Además, en Veracruz, con la misma cantidad de áreas, 4 son usadas como bibliotecas, 17 como talleres y 17 como aulas escolares.

Por el lado contrario, en Nayarit solamente 2 espacios son utilizados para la educación de los internos, uno como taller y otro como aula escolar. En Tlaxcala, de 6 espacios existentes, 2 son bibliotecas, 2 talleres y 2 aulas escolares, mismas distribuciones que se presenta en el estado de Quintana Roo. Mientras que, en Durango, donde existen 7 espacios disponibles, uno es una biblioteca, 3 son talleres y 3 aulas escolares. En este listado el estado de Nuevo León ocupa la posición número 24, en la entidad de 9 espacios

disponibles para la educación de los internos, 3 son bibliotecas, 3 talleres y 3 aulas escolares tal como lo establecen las estadísticas emitidas por INEGI.

Al analizar la situación de los espacios destinados a la preparación educativa de las personas privadas de la libertad en relación a la población penitenciaria de cada estado, los resultados del análisis de la CNDH indican que estos resultan insuficiente para la atención de los internos. La situación más grave se presenta en el estado de Nayarit, donde para 2,069 internos apenas existen 2 espacios destinados a la educación de estos.

Sin embargo, a pesar de la cantidad de espacios que dentro de los centros de reinserción social en México se encuentran destinados para ofrecer servicios educativos, la relación de estos con la cantidad de personas privadas de la libertad en estas instituciones resulta insuficiente para la atención de toda la población penitenciaria. En total, en los 288 penales existentes en México, solamente existen 642 espacios utilizados para funciones educativas para la atención 156722 internos; es decir, existe un área o salón destinado con fines académicos por cada 244 internos penitenciarios.

Esta situación es aún más aguda en 12 entidades que se sitúan por encima de este promedio. Entre estos se encuentran Nayarit donde existe un espacio destinado a fines educativos por cada 1035 internos; Baja California con un espacio cada 784 internos; Nuevo León con un espacio cada 725 internos; México con un espacio por cada 682 internos; Puebla con un espacio por cada 562 internos; Durango con un espacio cada 516 internos; Sinaloa con un espacio cada 497 internos; Jalisco con un espacio 367 internos; Chihuahua con un espacio cada 310 internos y Morelos con un espacio educativo por cada 255 internos.

En los estados de Guerrero; Querétaro; Sonora; Guanajuato; San Luis Potosí registran cifras superiores a las 200 personas privadas de la libertad por cada espacio que se destina dentro de los centros de reinserción social a la preparación académica de estos. Mientras que en Tamaulipas; Campeche; Hidalgo; Veracruz; Colima; Aguascalientes; Chiapas; Yucatán; Tlaxcala; Michoacán y Coahuila, se registra que por cada espacio utilizado para labores educativas se contabilizan entre 100 y 200 personas privadas de la libertad. Solamente los estados de Oaxaca y Baja California Sur manejan cifras de entre 50 y 100 internos penitenciarios por cada espacio educativo. En relación a este indicador

el estado de Zacatecas es la entidad que presenta la mejor relación entre espacios educativos y cantidad de internos penitenciarios beneficiados. En este estado existen 37 espacios destinados para la educación, de los cuales 10 son bibliotecas, 16 salones para talleres y 11 aulas, para una población penitenciaria de 2136, lo que representa un espacio educativo por cada 58 personas recluidas.

Tabla 2.18

Espacios dedicados a la educación/capacitación en los centros penitenciarios en México (2019)

Entidad	Espacios educación ¹	Bibliotecas	Talleres	Aulas escolares	Población	Internos por espacio
Nayarit	2	0	1	1	2069	1035
Baja California	15	5	5	5	11763	784
Nuevo León	9	3	3	3	6521	725
México	44	4	20	20	30025	682
Puebla	9	3	3	3	5058	562
Durango	7	1	3	3	3615	516
Sinaloa	9	3	3	3	4477	497
Tabasco	9	1	6	2	3920	436
Quintana Roo	6	2	2	2	2488	415
Jalisco	36	12	12	12	13212	367
Chihuahua	26	8	9	9	8068	310
Morelos	13	5	4	4	3320	255
Guerrero	19	2	12	5	4254	224
Querétaro	12	4	4	4	2579	215
Sonora	38	12	13	13	8043	212
Guanajuato	29	9	10	10	6063	209
San Luis Potosí	12	0	6	6	2457	205
Tamaulipas	21	7	7	7	3810	181
Campeche	7	2	2	3	1263	180
Hidalgo	24	7	9	8	4318	180
Veracruz	38	4	17	17	6013	158
Colima	9	3	3	3	1406	156
Aguascalientes	11	4	3	4	1604	146
Chiapas	28	0	14	14	3952	141
Yucatán	11	3	4	4	1400	127
Tlaxcala	6	2	2	2	743	124
Michoacán	48	16	16	16	5294	110
Coahuila	20	7	7	6	2145	107
Oaxaca	37	12	13	12	3504	95
B. California Sur	13	4	5	4	1202	92
Zacatecas	37	10	16	11	2136	58
Cd. de México	38	13	12	13	ND	ND
Total en México	642	168	246	228	156722	244

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020). ¹Se consideran los espacios destinados a talleres, aulas escolares y bibliotecas.

La operación de los centros penitenciarios en México ubica al personal que se encarga de la educación y preparación académica de las personas privadas de la libertad en el área de pedagogía que, a su vez, corresponde al departamento técnico y de operación de los centros penitenciarios. En relación a este punto, de los 32,503 empleados del sector penitenciario, 5,455 forman parte del departamento técnico y de operación y, de estos, solamente 664 pertenecen al área de pedagogía, esto es apenas el 12.2% del total de trabajadores del área técnica y de operación y el 2.0% del total de empleados en los penales en México.

Esta cifra indica que hay un empleado del área de pedagogía por 236 personas privadas de la libertad; aspecto que puede resultar insuficiente para la atención de una población penitenciaria de 156,722 internos.

Sonora con el 25.3% del personal técnico (57 de 225) y 4.6% del personal total (57 de 1252); Veracruz con el 18.7% del personal técnico (51 de 273) y 4.5% del personal total (51 de 1125); Baja California Sur con el 17.4% del personal técnico (12 de 69) y el 2.9% del personal total (12 de 409), son las entidades que presentan un mayor porcentaje de empleados en el área de pedagogía. En la mayoría de los estados, incluido Nuevo León, el porcentaje del personal total que se dedica a labores educativas dentro del centro penitenciario es inferior al 2.0% de los empleados de dichas instituciones; en esta entidad las personas dedicadas del área de pedagogía representan 11.0% del personal técnico (27 de 245), lo que corresponde al 1.7% del total general (27 de 1563).

Tabla 2.19

Personal enfocado a actividades de pedagogía y educativas (2019)

Entidad	Personal total	Técnico y de operación	Pedagogía	% técnico y de operación	% del total General
Aguascalientes	469	94	11	11.7%	2.3%
Baja California	1,417	234	19	8.1%	1.3%
Baja California Sur	409	69	12	17.4%	2.9%
Campeche	292	64	8	12.5%	2.7%
Coahuila	292	55	2	3.6%	0.7%
Colima	451	77	4	5.2%	0.9%
Chiapas	1,732	325	38	11.7%	2.2%
Chihuahua	1,397	144	24	16.7%	1.7%
Ciudad de México	ND	ND	ND	ND	ND
Durango	642	95	15	15.8%	2.3%
Guanajuato	2142	239	9	3.8%	0.4%
Guerrero	843	141	23	16.3%	2.7%

Hidalgo	406	55	6	10.9%	1.5%
Jalisco	2342	467	58	12.4%	2.5%
México	3802	637	109	17.1%	2.9%
Michoacán	2,226	275	23	8.4%	1.0%
Morelos	940	162	19	11.7%	2.0%
Nayarit	480	87	8	9.2%	1.7%
Nuevo León	1563	245	27	11.0%	1.7%
Oaxaca	877	233	12	5.2%	1.4%
Puebla	1241	140	16	11.4%	1.3%
Querétaro	557	116	16	13.8%	2.9%
Quintana Roo	304	61	10	16.4%	3.3%
San Luis Potosí	888	141	20	14.2%	2.3%
Sinaloa	803	183	4	2.2%	0.5%
Sonora	1252	225	57	25.3%	4.6%
Tabasco	1223	113	15	13.3%	1.2%
Tamaulipas	971	218	25	11.5%	2.6%
Tlaxcala	222	49	3	6.1%	1.4%
Veracruz	1125	273	51	18.7%	4.5%
Yucatán	607	120	12	10.0%	2.0%
Zacatecas	588	118	8	6.8%	1.4%
Total	32,503	5,455	664	12.2%	2.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

2.5.3. Población penitenciaria en Nuevo León

En los centros penitenciarios ubicados en el estado de Nuevo León, CERESO Apodaca I y II, CERESO Cadereyta y CERESO Escobedo (femenil), según se establece en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario realizado por INEGI, se contabilizaron para el año 2019 un total de 6,521 personas privadas de la libertad; de estas, el 95.0% son hombres (6,196 personas) y el 5.0% son mujeres (325 personas).

Tabla 2.20

Género de los internos penitenciarios en Nuevo León (2019).

Género	Internos	Porcentaje
Masculino	6,196	95.0%
Femenino	325	5.0%
Total	6,521	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

De las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social ubicados en Nuevo León, el 85.7% (5,591 personas) cumple una sentencia por haber cometido un delito del fuero común; 12.5% (813 personas) por un delito del fuero federal y solamente el 1.8% (117 personas) cometieron crímenes considerados en ambos fueros. Esta misma tendencia se muestra tanto en hombres como mujeres; entre la población del género masculino el 85.7% (5,313 personas) se encuentra recluido por delito del fuero común, mientras que en las internas esta cifra asciende al 85.5% (278 personas); en cuanto al fuero federal, el 12.5% de los hombres (813 personas) y el 14.5% de las mujeres (47 personas) se encuentran cumpliendo una sentencia por delitos de este tipo; además, el 1.9% de los hombres (117 personas) cometió delitos correspondientes a ambos fueros, situación que no se presentó entre las mujeres.

Tabla 2.21

Población penitenciaria en Nuevo León clasificada por género y fuero (2019)

Tipo de fuero	Total		Hombres		Mujeres	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Fuero común	5,591	85.7%	5,313	85.7%	278	85.5%
Fuero federal	813	12.5%	766	12.4%	47	14.5%
Ambos fueros	117	1.8%	117	1.9%	0	0.0%
Total	6,521	100%	6,196	100%	325	100%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (2020).

Los datos de INEGI indican que para el año 2019, el 44.0% de la población penitenciaria en Nuevo León (2,867 personas) contaba con la secundaria terminada; mientras que el 24.1% (1,570 personas) solamente terminó la primaria; de esta forma, se concluye que el 68.1% de los internos penitenciarios en Nuevo León cuenta solamente con educación del nivel básico.

Por otro lado, el 12.1% (786 personas) concluyó la preparatoria; el 2.6% terminó una carrera técnica o comercial, mismo porcentaje de aquellos que pudieron llevar a cabo sus estudios de licenciatura (172 personas). Se identificaron 8 personas con estudios de maestría y una persona más con doctorado. Además, el 1.0% (67 personas) manifestó no tener estudios y en el 13.5% de los casos, su estatus académico no está especificado.

Tabla 2.22*Escolaridad de los internos penitenciarios en Nuevo León (2019).*

	Internos	Porcentaje
Sin estudios	67	1.0%
Primaria	1,570	24.1%
Secundaria	2,867	44.0%
Preparatoria	786	12.1%
Técnico o comercial	171	2.6%
Licenciatura	172	2.6%
Maestría	8	0.1%
Doctorado	1	0.0%
No especificado	879	13.5%
Total	6,521	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

En lo que respecta a la alfabetización, el 99.5% de las personas privadas de la libertad en el estado de Nuevo León sabe leer y escribir. Solamente 20 personas (0.3%) no sabe leer y escribir y en 10 casos no se identificó este aspecto.

Tabla 2.23*Alfabetización de los internos penitenciarios en Nuevo León (2019).*

	Internos	Porcentaje
Sabe leer y escribir	6,421	99.5%
No sabe leer y escribir	20	0.3%
No identificado	10	0.2%
Total	6,521	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2020).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Nuevo León, contabilizaba, para diciembre de 2019, un total de 6,634 personas privadas de la libertad en la entidad; esto representa el 77.8% de la capacidad total de los centros penitenciarios ubicados en el estado (8,527 personas).

Por su parte, en el *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019* realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se analiza la situación de los tres penales del estado de Nuevo León; sin embargo, es importante indicar que este documento no incluye la población penitenciaria del Centro de Reinserción Social Apodaca II, instalación penitenciaria que alberga a los internos que anteriormente se

encontraban reclusos en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico cerrado durante octubre de 2019.

En el citado documento se indica que dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca I que cuenta con una capacidad instalada para 1,815 internos, se alberga a un total de 1,621 personas privadas de la libertad; esto equivale a una ocupación de 89.3%. Por otro lado, en el CERESO Cadereyta, se presenta una condición de sobre población, puesto que, para una capacidad instalada de 1,621 personas, en esta institución se encuentran 1,826 internos, es decir, tiene una ocupación de 112.6%. Finalmente, en el CERESO Femenil de Escobedo, la ocupación es de 77.7%, en este penal se encuentran 335 mujeres privadas de la libertad, mientras que su capacidad es para 431 personas.

Tabla 2.24

*Personas privadas de la libertad en Nuevo León (2019) *.*

	Internos	Porcentaje	Ocupación
CERESO Apodaca I	1,815	1,621	89.3%
CERESO Cadereyta	1,621	1,825	112.6%
CERESO Escobedo (femenil)	431	335	77.7%

Fuente: CNDH. (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (2019). México: Comisión Nacional de Derechos Humanos. *En este documento no se incluyen estadísticas relacionadas con el Centro de Reinserción Social Apodaca II.

2.6. Evaluación de la calidad penitenciaria

2.6.1. Evaluación y diagnóstico de los centros de reinserción social en México

Como parte de la constante evaluación de la calidad penitenciaria en los centros de reinserción social en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llevó a cabo durante el año 2019 el análisis de las condiciones imperantes en las instituciones de seguridad instaladas a lo largo de México. Con esta finalidad, la CNDH evaluó un total de 209 instituciones, lo que equivale al 66% de los centros penitenciarios en el país, en estos se estima que se ubican 186,148 personas privadas de la libertad, lo que representa el 94% del total de internos en penales estatales.

Los resultados de esta análisis se publicaron en el texto titulado *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019* y abarcan cinco rubros diferentes entre los que se encuentran: integridad personal del interno (capacidad y población, distribución y

separación, atención de salud, prevención de incidentes); estancia digna (capacidad de las instalaciones, higiene, alimentación); condiciones de gobernabilidad (normativas, personal de seguridad y custodia, autogobierno, actividades ilícitas); reinserción social (integración de expedientes, funcionamiento de comité técnico, actividades laborales, capacitación y educación) y atención a internos con requerimiento específicos (mujeres, personas adultas, población LGBTTTI).

Entre las principales deficiencias diagnosticadas por la CNDH (2018) se encuentran la falta de separación de las personas privadas de la libertad según su estado jurídico, falta de infraestructura y materiales, carencias de higiene, falta de programas de atención para las adicciones, poco control por parte de funcionarios, controles de acceso familiar inadecuados, entre otros. De manera general, la CNDH considera importante atender los siguientes puntos:

Figura 2.2

Temas importantes de atención en los centros penitenciarios en México

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
<p>RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiente separación entre hombres y mujeres. • Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. • Deficiencias en los servicios de salud. <p>RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento de los centros. • Deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. • Deficiencias en la alimentación. <p>RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. • Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias • Ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad. Condiciones de autogobierno/cogobierno • Presencia de actividades ilícitas. <p>RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deficiente separación entre procesados y sentenciados. • Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. • Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. <p>RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria. • Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas.

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De forma específica, en cuanto a las problemáticas identificadas en este diagnóstico destaca que (CNDH, 2020):

Los rubros que presentaron las deficiencias con mayor incidencia se refieren a la insuficiencia de personal (72.68%), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.67%), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84%), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19%), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91%), presencia de actividades ilícitas (40.44%) deficiencia en los servicios de salud (32.79%).

Se identificaron como deficiencias significativas, la falta programas de prevención y de atención de incidentes violentos (42.62%), la presencia de cobros (39.89%), así como la detección de condiciones de autogobierno en un (33.33%), situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre los centros, favoreciendo como se observó la violencia dentro de los mismos.

En el 44.26% de los centros visitados se observó insuficiencia de vías para la remisión de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, y en el 34.43% se apreciaron deficientes condiciones materiales de cocina y comedores.

El 33.33% de los centros estatales al momento de la visita presentaron sobrepoblación, lo que en consecuencia estimula insuficiencia en actividades laborales y de capacitación (66.67%), deportivas (20.22%) y educativas (18.58%), así como insuficiencia de talleres y áreas deportivas en el 21.31% de los establecimientos.

En 32.24% de los establecimientos locales supervisados se ubicaron con hacinamiento, lo que implica que existen áreas que rebasan de manera considerable su capacidad.

En el 26.78% de los centros se observaron deficientes condiciones materiales y de higiene del área médica, así como una carencia de instrumental médico, de unidad odontológica, de personal para atender a las personas privadas de la libertad y de atención psicológica. Lo anterior es coincidente con las carencias en alimentación (26.78%); y los servicios de salud (32.79%), al no contemplar dietas específicas para los enfermos que así lo requieren, tales como quienes padecen diabetes.

En el 31.69% de los centros se observaron deficientes condiciones para la comunicación con el exterior; y en el 30.60% se detectaron anomalías en los procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias a los internos.

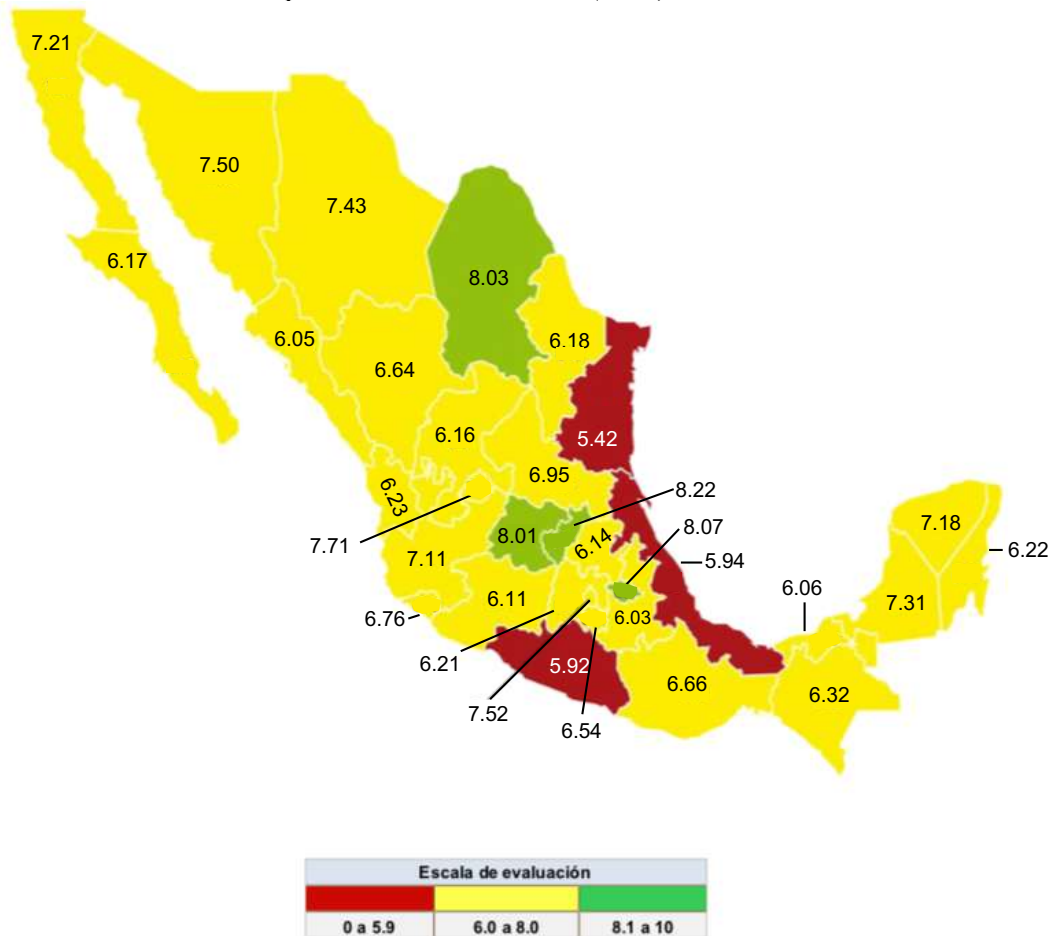
Los resultados del diagnóstico de la CNDH (2020), indican que, al evaluar distintos indicadores relacionados con los 5 rubros antes mencionados en una escala del 1 al 10, los estados donde existen los centros de reinserción social evaluados obtuvieron una calificación promedio de 6.75 durante el año 2019. Los penales con las mejores condiciones para los internos penitenciarios son los que se ubican en el estado de Querétaro (8.22); Tlaxcala (8.07); Coahuila (8.03); Guanajuato (8.03); Aguascalientes

(7.71); Ciudad de México (7.52); Sonora (7.5); Chihuahua (7.43); Campeche (7.31) y Baja California (7.21).

Si se considera que en esta escala la calificación “aprobatoria” es de 6 puntos en promedio, los penales que se encuentran por debajo de esta medida y en donde las condiciones imperantes dificultan los objetivos de las tareas de reinserción social son los que se ubican en los estados de Veracruz (5.94), Guerrero (5.92) y Tamaulipas (5.42)

Figura 2.3

Evaluación de los centros penitenciarios en México (2019)



Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

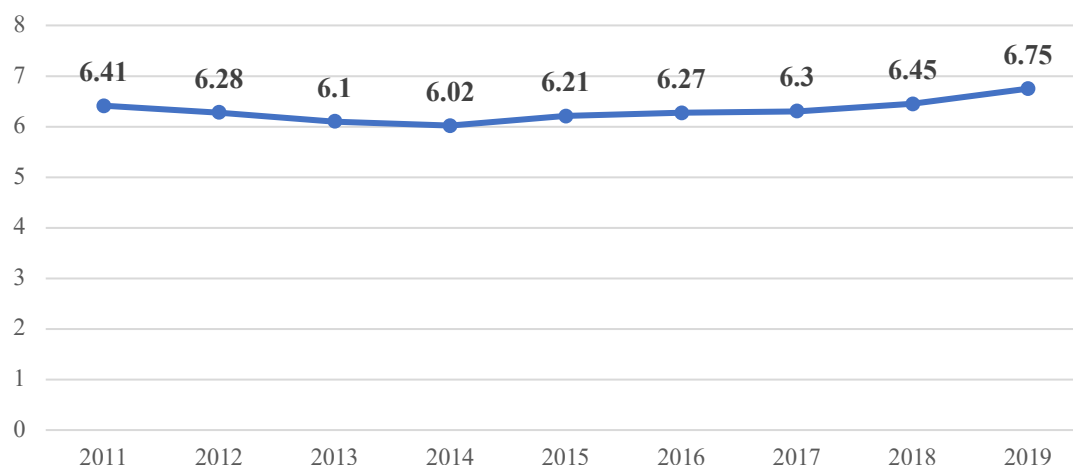
A lo largo del período comprendido entre los años 2011 y 2019, el promedio de evaluación de los centros penitenciarios en México ha mostrado una variación que puede considerarse como mínima. Para el año 2011, los penales en el país promediaron una evaluación de 6.41, situación que mostraría una tendencia a la baja para alcanzar un

promedio 6.28 para 2012, 6.1 para 2013 y alcanzaría su punto más bajo en 2014 con una evaluación 6.02.

A partir de este momento, el promedio de evaluación presentó una tendencia al alza, si bien este incremento no es considerable ha mostrado signos de mejoría. Para 2015 el promedio de evaluación se elevó de 6.02 a 6.21; posteriormente, para 2016 alcanzaría 6.27, 6.3 para 2017 y 6.45 para 2018. Finalmente, en 2019 se presentaría la evaluación más alta de los centros penitenciarios mexicanos en la última década con un promedio de 6.75.

Figura 2.4

Promedio de los centros penitenciarios en México (2011–2019)



Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

2.6.2. Evaluación penitenciaria en Nuevo León

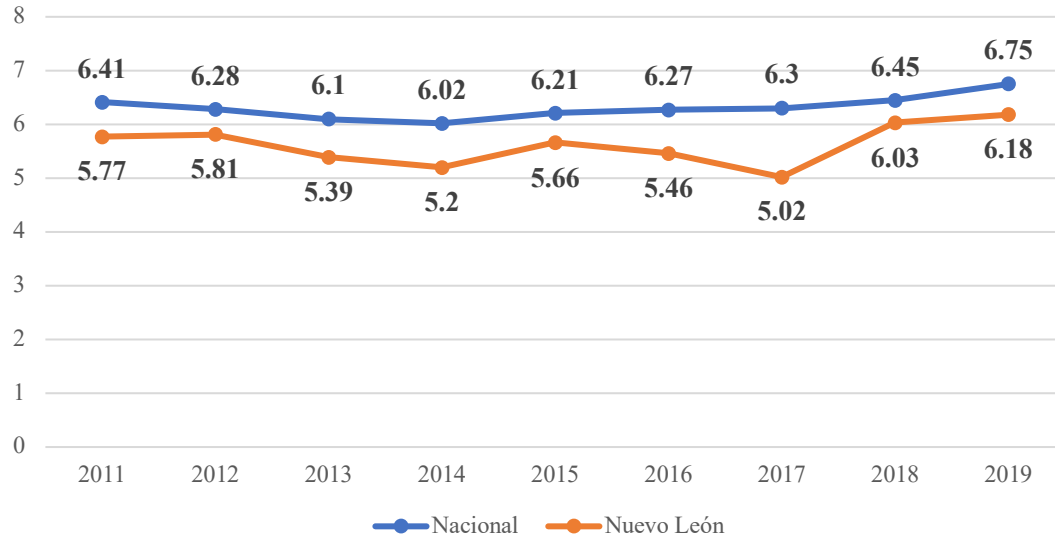
2.6.2.1. Evaluación y diagnóstico de los centros de reinserción social en Nuevo León

En el listado general de la CNDH (2020), Nuevo León, se ubica en una posición intermedia; es decir, aunque no se encuentra entre las entidades peor evaluadas, las estadísticas señalan que, según los promedios obtenidos, el estado tiene una calificación que lo sitúa por debajo de la media nacional. Esta tendencia se ha registrado desde hace varios años. En el año 2011, el promedio obtenido por los centros de reinserción social en México alcanzó 6.41, sin embargo, Nuevo León obtuvo 5.77. Para 2012, el promedio fue de 6.28 nacional y 5.81 en la entidad; en 2013 fueron 6.10 por 5.39; en 2014 se registró

6.02 por 5.20; en 2015 fue 6.21 por 5.66; en 2016 se alcanzó 6.27 por 5.46; en 2017 fue 6.30 por 5.02; en 2018 fue 6.03 por 6.45 y, finalmente, en 2019 fue 6.18 por 6.75 nacional. La estadística más actualizada obtenida por CNDH indica que el promedio nacional es de 6.75 (el más alto desde 2011), mientras que en el caso de Nuevo León fue de 6.18 (más alto históricamente).

Figura 2.5

Evaluación general de los centros penitenciarios en Nuevo León (2011–2019)



Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH.(2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En relación con los penales del estado de Nuevo León, la instalación penitenciaria que obtuvo la evaluación más alta por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018) fue el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo con 6.87; estadística que sitúa esta institución un poco por encima del promedio nacional (6.75). Por otra parte, el Centro de Reinserción Social de Apodaca obtuvo 6.19; el Centro de Reinserción Social de Cadereyta tuvo 5.49, lo que lo colocó, según los datos de CNDH, en la escala más baja y con importantes necesidades cuya atención es urgente.

Figura 2.6*Promedio de los centros penitenciarios en Nuevo León (2019)*

No.	Centro	2019
1.	Centro de Reinserción Social de Apodaca.	6.19
2.	Centro de Reinserción Social de Cadereyta.	5.49
3.	Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo.	6.87

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH (2020), indica que los aspectos de los Centros de Reinserción Social del estado de Nuevo León que requieren atención urgente son aquellos relacionados con los “aspectos que garantizan una estancia digna”, es decir, mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad dentro de los penales.

En el nivel preventivo se encuentran los “aspectos que garantizan la integridad personal del interno”; “condiciones de gobernabilidad”; “reinserción social del interno” y “atención a internos con requerimientos específicos”.

Figura 2.7*Tendencia de los centros penitenciarios en Nuevo León por rubro (2019).*

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre las instalaciones penitenciarias que operan en el estado de Nuevo León el CERESO de Apodaca, requiere atención urgente en los rubros de “aspectos que garantizan la integridad personal del interno”; “aspectos que garantizan una estancia digna” y “condiciones de gobernabilidad”. Mientras que en nivel preventivo se encuentran los aspectos relacionados con “reinserción social del interno” y “atención a internos con requerimientos específicos”.

En el caso del CERESO de Cadereyta, en nivel preventivo se encuentran las “condiciones de gobernabilidad”; el proceso de “reinserción del interno” y la “atención a internos con requerimientos específicos”. En el nivel de atención urgente están los rubros de “aspectos que garantizan la integridad personal del interno” y “aspectos que garantizan una estancia digna”.

En lo que corresponde al CERESO Femenil de Escobedo, en el nivel de atención apropiada se encuentran los rubros de “aspectos que garantizan una estancia digna” y de “atención a internos con requerimientos específicos”. Mientras que en nivel preventivo se encuentran los “aspectos que garantizan una estancia digna”; “reinserción social del interno” y la “atención a internos con requerimientos específicos”.

Figura 2.8

Evaluación de los centros penitenciarios en Nuevo León por rubro (2019).

CENTROS	I	II	III	IV	V
1) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APODACA					
2) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CADEREYTA					
3) CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL DE ESCOBEDO					

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Centro de Reinserción Social Apodaca obtuvo una evaluación promedio de 6.19, misma que se encuentra por debajo de la media nacional de 6.45. Este penal, tal como sostiene la CNDH (2019), presenta condiciones que no son óptimas para el desarrollo de las tareas relacionadas con el proceso de reinserción en el que se encuentran los internos; en este penal que cuenta con una capacidad para 1,815 internos, se ubicaban durante ese período un total de 1,621 reclusos.

Figura 2.9

Evaluación del CERESO Apodaca (2019).

Calificación	6.19	H	M
Tendencia:		Capacidad:	1,815
		Población:	1,621

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En cuanto a los aspectos que requieren atención urgente por parte de la administración del CERESO de Apodaca, se encuentran deficiencias en los servicios de salud y falta programas de prevención de accidentes; condiciones de higiene deplorables en diversas áreas; personal de seguridad y custodia insuficiente; presencia de actividad ilegales dentro del penal; inadecuada organización de los internos y falta de programas para la prevención de adicciones. En la figura 2.10 se establecen los puntos específicos identificados en el diagnóstico por la CNDH (2018) que deben atenderse a la brevedad:

Figura 2.10

Temas importantes de atención en el CERESO Apodaca (2019).

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
<p>RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en los servicios de salud. Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos. Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.
<p>RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA</p> <ul style="list-style-type: none"> Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.
<p>RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Ejercicio de funciones de autoridad de personas privadas de la libertad. Condiciones de autogobierno/cogobierno. Presencia de actividades ilícitas y cobros.
<p>RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.
<p>RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La evaluación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2020), también analiza aquellos aspectos en los que los centros de reinserción social atienden de manera apropiada. En ese sentido, en el CERESO de Apodaca, los aspectos considerados como positivos por la CNDH, son respecto a la capacidad de internos que el penal puede recibir, así como la supervisor del titular de las condiciones de los mismos; condiciones

de higiene apropiadas para el contacto con el exterior; normatividad suficiente y apropiada; capacitación al personal; clasificación de los internos; integración y funcionamiento del comité técnico; actividades educativas y deportivas; atención a personas adultas mayores, con discapacidad, a aquellas que viven con VIH y a la comunidad LGBTTTI. El siguiente cuadro especifica las áreas en las que la administración de este centro penitenciario obtuvo una evaluación generalmente positiva:

Figura 2.11


Temas donde existe una atención apropiada en el CERESO Apodaca (2019).

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:	
RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO	
✓ Número de internos en relación a la capacidad del centro.	
✓ Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.	
✓ Atención de las personas internas en condiciones de aislamiento.	
RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA	
✓ Existencia y capacidad de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro.	
✓ Condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior.	
RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD	
✓ Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones	
✓ Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.	
✓ Capacitación del personal penitenciario.	
RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO	
✓ Clasificación de las personas privadas de la libertad.	
✓ Integración y funcionamiento del Comité Técnico.	
✓ Actividades educativas.	
✓ Actividades deportivas.	
✓ Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.	
RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	
✓ Atención a personas adultas mayores.	
✓ Atención a personas con discapacidad.	
✓ Atención a personas que viven con VIH/SIDA.	
✓ Atención a personas LGBTTTI.	

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Centro de Reinserción Social Cadereyta, presenta una condición de sobrepoblación y de hacinamiento; con una capacidad para 1,621 personas, en este penal se encuentran privados de la libertad un total de 1,826 individuos. Esta situación provoca que dentro de este centro penitenciario no se puedan garantizar las condiciones necesarias contempladas dentro del proceso de reinserción social. De manera general, el CERESO Cadereyta obtuvo una evaluación promedio de 5.49, lo que lo sitúa muy por debajo del promedio nacional.

Figura 2.12*Evaluación del CERESO Cadereyta (2019).*

Calificación	5.49	H	M
Tendencia:		Capacidad: 1,621	Población: 1,826

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre los aspectos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que requieren una atención urgente se encuentran, principalmente, la sobrepoblación y el hacinamiento imperante en este centro de reinserción social; además de las deficiencias en servicios de salud. Por otro lado, se considera necesario mejorar las condiciones de higiene; la insuficiencia de personal; la falta de actividades de capacitación y la atención específica a grupos vulnerables.

Figura 2.13*Temas importantes de atención en el CERESO Cadereyta (2019)*

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO <ul style="list-style-type: none"> • Sobrepoblación. • Hacinamiento. • Deficiencias en los servicios de salud. • Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA <ul style="list-style-type: none"> • Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. • Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores. • Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior.
RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. • Presencia de actividades ilícitas y cobros.
RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO <ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación • Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas. • Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.
RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS <ul style="list-style-type: none"> • Deficiencia en la atención a personas indígenas. • Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. • Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI. • Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre los aspectos que se atienden de manera apropiada dentro del CERESO Cadereyta se encuentra la atención del titular respecto al funcionamiento del centro; las condiciones de higiene en talleres y áreas deportivas; una adecuada normatividad dentro de la institución; integración del expediente apropiado para los internos; funcionamiento óptimo del comité técnico; atención a personas adultas mayores y que viven con VIH.

Figura 2.14

Temas donde existe una atención apropiada en el CERESO Cadereyta (2019)

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:	
RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO	✓ Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA	✓ Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.
RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD	✓ Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). ✓ Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. ✓ Capacitación del personal penitenciario.
RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO	✓ Integración del expediente técnico-jurídico. ✓ Clasificación de las personas privadas de la libertad. ✓ Integración y funcionamiento del Comité Técnico. ✓ Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.
RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	✓ Atención a personas adultas mayores. ✓ Atención a personas que viven con VIH/SIDA.

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2020). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.


El Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, es una instalación penitenciaria que ha sido adecuada para albergar a mujeres privadas de la libertad. Anteriormente, las internas en el estado de Nuevo León se ubicaban en el área femenil del CEPRERESO de Topo Chico y otras más en un edificio ubicado en el área de Constituyentes, en las instalaciones que albergaron por algunos años a lo que se conocía como el Consejo Tutelar de Menores. Hasta antes de la creación del Cereso Femenil de Escobedo, las mujeres no contaban con un centro penitenciario exclusivo para el género femenino.

En cuanto a la evaluación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2018), este centro de reinserción social femenil obtuvo una calificación

superior al promedio nacional de 6.87; sin embargo, la CNDH considera que muestra una tendencia a la baja. Esta instalación que de manera oficial puede albergar a 431 mujeres, cuenta con una población de 335 internas; es decir, tiene una ocupación de poco menos de 89.3% de su capacidad.

Figura 2.15

Evaluación del CERESO Femenil Escobedo (2019)

Calificación	6.87	H	M
Tendencia:		Capacidad:	431
		Población:	335

Fuente: Recuperado de CNDH (2018). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Aunque la evaluación de la CNDH es generalmente positiva, existen áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad en el CERESO Escobedo; entre las deficiencias de atención urgentes detectadas se encuentran deficiencias de servicios de salud; falta de higiene; insuficiencia de personal; deficiente integración de expedientes y falta de atención a grupos con necesidades específicas. La figura 2.16 muestra los aspectos más urgentes en esta institución:

Figura 2.16

Temas importantes de atención en el CERESO Femenil Escobedo (2019)

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO <ul style="list-style-type: none"> Deficiencias en los servicios de salud. Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.
RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA <ul style="list-style-type: none"> Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior. Deficiencias en la alimentación.
RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD <ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO <ul style="list-style-type: none"> Deficiente integración del expediente técnico-jurídico. Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.
RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS <ul style="list-style-type: none"> Deficiencia en la atención a personas con discapacidad. Deficiencia en la atención a personas LGBTTTI.

Fuente: Recuperado de CNDH (2018). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Entre los aspectos positivos determinados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2020), en el Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, se encuentran que no existe hacinamiento ni sobrepoblación; la forma en la que se encuentran distribuidas las internas; buena supervisión del director del penal; higiene en el área de talleres y deportivas; capacitación al personal adecuada; integración correcta de expedientes; clasificación de las internas; atención a menores de edad que viven con sus madres dentro de la instalación. La figura 2.17 muestra todos los aspectos positivos evaluados en cada rubro por la CNDH:

Figura 2.17

Temas donde existe una atención apropiada en el CERESO Femenil Escobedo (2019).

SE OBSERVÓ UNA APROPIADA ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS:	
RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO	
✓ Número de internas en relación a la capacidad del centro.	
✓ Distribución de personas privadas de la libertad.	
✓ Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.	
RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA	
✓ Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.	
RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD	
✓ Procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.	
✓ Capacitación del personal penitenciario.	
RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO	
✓ Clasificación de las personas privadas de la libertad.	
✓ Integración y funcionamiento del Comité Técnico.	
✓ Actividades laborales y de capacitación.	
✓ Actividades educativas.	
✓ Vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.	
RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS	
✓ Atención a personas adultas mayores.	

Fuente: Recuperado de CNDH (2018). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

2.6.2.2. Evaluación del aspecto educativo y académico en los penales de Nuevo León

Para contar con una referencia respecto a los servicios educativos que se brindan en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León, se considerarán los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es importante indicar que los indicadores relacionados con el aspecto educativo no fueron publicados en las ediciones realizadas por la CNDH posteriores al año 2015.

Asimismo, en este documento se evaluaron, para el caso de Nuevo León, el Centro de Reinserción Social Apodaca, el Centro de Reinserción Social Cadereyta y el ya clausurado Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico. Para 2015, el CERESO conocido como Apodaca II aun no comenzaba su construcción y las mujeres privadas de la libertad permanecían en un anexo al CEPRERESO Topo Chico previo a su traslado al nuevo penal de Escobedo que comenzó en 2018.

De manera específica, el rubro educativo forma parte de los llamados aspectos que enfocados a la “reinserción social del interno”; en este sentido, de manera general los centros penitenciarios que operaban durante el año 2015 en Nuevo León (CEPRERESO Topo Chico, CERESO Apodaca y CERESO Cadereyta) se encontró que los espacios para talleres obtuvieron un promedio de 6.83; por otro lado las actividades de capacitación obtuvieron un 4.91, por lo que es posible establecer que existían importantes deficiencias en la preparación para el trabajo.

Por otro lado, en lo que respecta a las actividades educativas, la evaluación fue de 6.99; la programación de actividades educativas obtuvo 7.33; el material didáctico para las clases y cursos fue evaluado con 5.24; el registro del nivel de escolaridad de la población obtuvo un 8.66 y la certificación oficial de estudios 8.52. Es importante destacar que en lo que respecta a las oportunidades de acceso a la educación fueron calificadas con un promedio de 5.19, lo que indica que, en los penales de Nuevo León, las alternativas académicas son insuficientes.

Tabla 2.25

Evaluación de aspectos educativos en los centros penitenciarios en Nuevo León (2015)

Rubro	Promedio
Espacios para talleres	6.83
Actividades de capacitación	4.91
Actividades educativas	6.99
<i>Programación de actividades educativas</i>	7.33
<i>Material didáctico</i>	5.24
<i>Registro del nivel de escolaridad de la población</i>	8.66
<i>Certificación oficial de estudios</i>	8.52
<i>Oportunidad de acceso a la educación</i>	5.19

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2015). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Centro de Reinserción Social Apodaca, inaugurado en 1989, fue considerado como una de las instalaciones penitenciarias más modernas y adecuadas para llevar a cabo el proceso de reinserción social de los internos; sin embargo, a lo largo de los años esta institución ha visto disminuida su calidad.

En lo que respecta a las actividades educativas, la evaluación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el año 2015 identificó una serie de carencias importantes en esta materia. Entre los aspectos evaluados se encontró que los espacios para talleres dentro del CERESO Apodaca obtuvieron un promedio de 7.5; es decir, en cuestión de aulas y equipamiento la calificación es satisfactoria.

Sin embargo, los resultados indican que las actividades de capacitación son el aspecto con la más baja calificación al obtener un promedio de 2.23. El resto de las actividades educativas dentro de este penal obtuvo una calificación general de 6.32. Además, la programación de actividades educativas tuvo una evaluación de 4; el material didáctico de 5.49 y las oportunidades de acceso a la educación 5.48.

Es importante destacar que en el trabajo de la CNDH se destaca que, a pesar de las carencias identificadas, el registro del nivel de escolaridad de la población se realizó de manera óptima y fue evaluado con un promedio de 8; mientras que la certificación oficial de los estudios obtuvo 8.62.

Tabla 2.26

Evaluación de aspectos educativos en el Centro de Reinserción Social Apodaca (2015)

Rubro	Promedio
Espacios para talleres	6.83
Actividades de capacitación	2.23
Actividades educativas	6.32
<i>Programación de actividades educativas</i>	4.00
<i>Material didáctico</i>	5.49
<i>Registro del nivel de escolaridad de la población</i>	8.00
<i>Certificación oficial de estudios</i>	8.62
<i>Oportunidad de acceso a la educación</i>	5.48

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2015). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El diagnóstico de la CNDH evalúa al Centro de Reinserción Social de Cadereyta de manera positiva en el ámbito educativo; dentro de esta institución se obtuvo un

promedio de 10 en lo que respecta a espacios para talleres, misma calificación que se tuvo en el registro del nivel de escolaridad de la población. De manera general, las actividades educativas dentro de este penal tuvieron una calificación de 8.13.

Por otro lado, aspectos como la certificación oficial de estudios obtuvo un promedio de 8.9 y las oportunidades de acceso a la educación 6.87. Sin embargo, el material didáctico necesario para llevar a cabo estas actividades tiene un promedio de 4.92 por lo que puede resultar insuficiente; asimismo, las actividades de capacitación laboral apenas alcanzaron 4.05 de promedio.

Tabla 2.27

Evaluación de aspectos educativos en el Centro de Reinserción Social Cadereyta (2015)

Rubro	Promedio
Espacios para talleres	10.00
Actividades de capacitación	4.05
Actividades educativas	8.13
<i>Programación de actividades educativas</i>	10.00
<i>Material didáctico</i>	4.92
<i>Registro del nivel de escolaridad de la población</i>	10.00
<i>Certificación oficial de estudios</i>	8.9
<i>Oportunidad de acceso a la educación</i>	6.87

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2015). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Finalmente, en el diagnóstico de la CNDH realizado durante el año 2015, donde se evaluaron las condiciones educativas de los centros penitenciarios del estado de Nuevo León (entre otros factores) se tomó en cuenta el ahora clausurado Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico; se considera la evaluación de este penal como referencia de las condiciones desfavorables que existían en el mismo.

De forma general, esta institución penitenciaria era la que contaba con la peor evaluación y en donde se registraban las carencias más importantes; cabe destacar que, durante su operación, este penal albergó tanto a hombres como a mujeres privadas de la libertad, estas últimas permanecían en un anexo en el que no existían las condiciones idóneas para el proceso de reinserción social, finalmente, fueron trasladadas al CERESO Femenil Escobedo.

En relación a los espacios para talleres, la evaluación realizada por la CNDH, indica que éstos, obtuvieron un promedio de 5.00, cifra que indica que estos espacios no eran los adecuados para llevar a cabo estas actividades. Además, de forma general, las actividades educativas obtuvieron un 7.06 y las de capacitación un 7.17, número que las coloca apenas por encima de la evaluación aceptable; esto representó una calificación de 5.92 en las oportunidades de acceso a la educación.

La programación de actividades educativas obtuvo un promedio de 8.0 a pesar de las carencias en materia educativa existentes dentro de este centro penitenciario; sin embargo, se registró un importante déficit en material didáctico, este rubro apenas alcanzó un 5.33. Por otro lado, el registro del nivel de escolaridad de la población (8.0) y la certificación de estudios (8.06) fueron los aspectos mejor evaluados en este penal.

Tabla 2.28

Evaluación de aspectos educativos en el Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico (2015)

Rubro	Promedio
Espacios para talleres	5.00
Actividades de capacitación	7.17
Actividades educativas	7.06
<i>Programación de actividades educativas</i>	8.00
<i>Material didáctico</i>	5.33
<i>Registro del nivel de escolaridad de la población</i>	8.00
<i>Certificación oficial de estudios</i>	8.06
<i>Oportunidad de acceso a la educación</i>	5.92

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de CNDH (2015). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. México: Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Capítulo III

Marco metodológico

Capítulo III

Marco metodológico

3.1. Resumen

Con la intención de conocer la situación educativa y el perfil académico de los internos penitenciarios, esta investigación, desde una perspectiva cualitativa – cuantitativa, analiza el estatus educativo, la capacitación y la preparación académica recibida dentro de un centro penitenciario de aquellas personas que deben purgar una condena dentro de una de las instalaciones de seguridad del estado de Nuevo León.

En su elaboración, se tienen consideradas diversas técnicas de investigación que permitirán establecer un panorama de las condiciones educativas y de capacitación de las personas privadas de la libertad, específicamente, dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca durante el año 2017. Asimismo, dado que, en el año 2019, la Universidad Autónoma de Nuevo León, dio a conocer la implementación de estudios de preparatoria en este CERESO, para este mismo año, se actualizaron los datos referentes al campo educativo con indicadores específicos en este ámbito.

Para tal fin, entre las formas de recolección de datos se encuentran una encuesta dirigida a los internos del CERESO Apodaca durante los años 2017 y 2019, con temas vinculados al desempeño educativo de la población penitenciaria; entrevistas dirigidas con los diversos encargados de los programas académicos y de capacitación laboral dentro de la institución, así como con representantes de organizaciones no gubernamentales y pastores y agentes de pastoral penitenciaria, enfocados al desarrollo educativo y espiritual de los internos.

3.2. Tipo de investigación

Este proyecto de investigación parte de un enfoque cualitativo y cuantitativo con un carácter no experimental y descriptivo. Tiene como principal objetivo evaluar las tareas educativas que se desarrollan dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca como

parte de las tareas de reinserción social consideradas para las personas privadas de la libertad.

Dentro de esta evaluación, se consideran diversos aspectos relacionados con el desempeño escolar de quienes se encuentran reclusos dentro de este centro penitenciario y cómo estas actividades impactan en su proceso de reinserción, mismo que, teóricamente, debería incrementar las posibilidades de que, éstos, regresen de forma exitosa a la comunidad y se disminuyan las posibilidades de reincidencia.

La metodología desarrollada para esta investigación contempla diversas técnicas para recolección de datos con propósitos diferentes. En primera instancia, se aplicará una entrevista semiestructurada (o encuesta) a una muestra de personas privadas de la libertad dentro de esta institución. Este instrumento contempla, indicadores específicos para analizar el ámbito educativo y su relación con el proceso de reinserción social.

Así mismo, se contempla realizar entrevistas dirigidas con aquellas personas que tienen como función principal, coordinar las tareas educativas y académicas desarrolladas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca. Cabe aclarar que dentro de esta institución de seguridad una sola persona tiene a su cargo los programas enfocados a actividades culturales, deportivas y académicas.

Por lo tanto, en lo que corresponde al criterio de clasificación de acorde al período en que la información es captada, el estudio mantiene un carácter de seguimiento retrospectivo parcial y prospectivo no concurrente; metodológicamente se establece como observacional–no experimental.

3.3. Población por estudiar

La población considerada para efectos de este trabajo de investigación enfocada a la evaluación del estatus académico y de capacitación de las personas privadas de la libertad dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca durante los años 2017 y 2019.

3.4. Muestra

A fin de evaluar el estatus educativo y académico de las personas privadas de la libertad dentro de este centro penitenciario, durante el año 2017, se trabajó con una muestra de 363 personas privadas de la libertad, sobre una base total de 1,837 internos, que en ese momento se ubicaban en el CERESO de Apodaca, de los cuales, 312 respondieron los indicadores académicos. La encuesta se elaboró bajo un esquema de muestra voluntaria de cuota para analizar indicadores específicos que permiten establecer, además de su escolaridad, el grado de preparación para realizar actividades laborales y la participación en programas escolares dentro del centro penitenciario.

Para el año 2019, la muestra levantada de forma voluntaria fue de 180 personas privadas de la libertad, de un total de 1,642 personas que, hasta junio de 2019, se encontraban internadas en este CERESO. Por tal efecto, se obtuvieron los consentimientos informados de la población sujeta a estudio.

En el caso de las entrevistas dirigidas, se seleccionaron personas con experiencia dentro del ámbito escolar, a fin de conocer su opinión respecto a la importancia que la educación tiene dentro del proceso de reinserción. Además, se elaboraron entrevistas con representantes de organizaciones no gubernamentales enfocadas al apoyo a este sector de la población y que conocen de primera mano la situación vivida dentro del centro penitenciario, así como funcionarios encargados de las tareas de educación dentro del penal.

3.4.1. Participantes

Para la parte cualitativa del proyecto, se contempló la elaboración de entrevistas dirigidas con miembros de la administración del Centro de Reinserción Social Apodaca, enfocados al desarrollo e implementación de los programas educativos y académicos específicos para las personas privadas de la libertad con la finalidad de comprender cuál es el impacto de las acciones educativas en el proceso de reinserción social. Entre los participantes se encuentran:

- Lic. Alejandro Balderrama Avitia, Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del estado de Nuevo León.

- Lic. Radamés Tovar Velázquez, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte del Centro de Reinserción Social Apodaca.
- Pbro. Roberto Ibarra Montes (Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey).

3.5. Hipótesis o guías de trabajo

Para efectos de este trabajo de investigación se consideran las siguientes guías de trabajo:

1. Los servicios educativos ofrecidos para las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca son insuficientes para cumplir con lo estipulado tanto en la *Ley General del Educación* como en la *Ley de Ejecución Penal* y las recomendaciones de organismos especializados en el tema a nivel mundial como la UNESCO.
2. La infraestructura, salones e instalaciones para llevar a cabo las tareas educativas y académicas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca resultan insuficientes para brindar atención a una población penitenciaria cercana a las dos mil personas.
3. Los programas educativos y escolares brindados a las personas privadas de la libertad dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca no permiten el crecimiento académico de los mismos, principalmente, en el nivel medio superior y superior pues no existen estas opciones en esta instalación de seguridad.
4. La falta de programas educativos específicos para las personas privadas de libertad dentro del CERESO Apodaca es un aspecto que dificulta el proceso de reinserción social, mermando las posibilidades de que estas personas puedan tener un regreso exitoso a la sociedad y, a su vez, que se disminuyan los índices de reincidencia.
5. El personal que labora en materia educativa académica dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, resulta insuficiente para atender a una población penitenciaria próxima a las dos mil personas privadas de su libertad.

6. La educación y capacitación para que las personas privadas de la libertad puedan tener un oficio después de cumplir con el período de sentencia es escaso o insuficiente, lo que se convierte en un factor que impacta negativamente el proceso de reinserción social e incrementa las posibilidades de reincidencia.
7. Las condiciones familiares imperantes durante la infancia de las personas privadas de la libertad es un factor que incide en la formación de conductas delictivas, sobre todo cuando existían carencias materiales y familiares, así como la presencia de miembros del núcleo que estuvieron recluidos en un centro de reinserción social.
8. Las personas privadas de la libertad se caracterizan por sufrir condiciones de vida durante su infancia que limitaron sus oportunidades educativas y académicas; además, aspectos como agresiones familiares y también dentro de los planteles educativos se convirtieron en un factor que impacto de forma negativa en su formación escolar.

3.6. Variables o indicadores

Para el desarrollo de los instrumentos enfocados a conocer la situación académica y educativa de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, se analizaron indicadores específicos con respecto a temas vinculados a infraestructura educativa; servicios utilizados; capacitación, avances en materia educativa, adquisición del conocimiento y la situación escolar de los internos durante su infancia.

En primera instancia y como parte del proyecto de investigación titulado *Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica* (Cerde, 2017), se incluyeron una serie de indicadores para evaluar de forma específica las condiciones educativas de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca. Este instrumento, aplicado durante febrero de 2017, incluyó un total de 399 indicadores divididos en 14 rubros; de los cuales se retomaron solamente aquellos considerados pertinentes para efectuar la valoración de la situación escolar de las personas privadas de la libertad, las cuales representan un total de 37 indicadores.

Por otra parte, para complementar la información obtenida se diseñaron indicadores específicos enfocados a evaluar el desarrollo educativo de las personas

privadas de la libertad durante el periodo correspondiente a su infancia. Estos fueron incluidos como parte del instrumento desarrollado para el proyecto de investigación que lleva por título *Prisión, espiritualidad y religión: Una visión desde la reinserción social*; en total son 20 los indicadores aplicados en este sentido.

En general, los temas respecto a educación y capacitación dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca incluidos en las encuestas aplicadas son:

- Infraestructura y servicios educativos en el CERESO Apodaca.
- Servicios educativos utilizados por las personas privadas de la libertad.
- Cursos complementarios de apoyo a la reinserción social y laboral.
- Lectura y adquisición del conocimiento.
- Avances en materia educativa dentro del CERESO Apodaca.
- Desarrollo familiar durante la infancia de las personas privadas de la libertad.
- Presencia de delitos y pertenencia a pandillas.
- Desarrollo educativo de las personas privadas de la libertad durante la infancia.

3.6.1. Operacionalización de las variables del instrumento aplicado a personas privadas de la libertad para evaluar su situación educativa.

3.6.1.1. Encuesta aplicada en febrero de 2017 dentro del estudio Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica

Variable	Definición conceptual	Dimensión	Indicadores	Ítems
Características generales, condiciones sociodemográficas y composición de los núcleos de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.	Hace mención a los datos sociodemográficos y composición familiar de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.	Datos sociodemográficos del interno y de familiares de las personas privadas de la libertad de la libertad en el CERESO Apodaca.	Edad de las personas privada de la libertad; escolaridad del interno previo a su reclusión; escolaridad del interno posterior a su reclusión; tiempo de sentencia asignado.	¿Cuál es su edad? ¿Cuál era su escolaridad previa a ingresar al CERESO Apodaca? ¿Cuál fue el tiempo de sentencia que le fue asignado?
Nivel educativo y expectativas académicas del interno en el CERESO Apodaca.	Esta variable se enfoca en analizar el desarrollo académico de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, así como sus logros en grados educativos.	Grados académicos logrados durante el cumplimiento de su sentencia dentro del CERESO Apodaca.	Nivel educativo del interno a su ingreso al CERESO Apodaca y los avances de grado que hayan obtenido dentro del esquema básico de primaria, secundaria, medio superior o carrera trunca.	¿Cuál era su grado educativo a su llegada al CERESO Apodaca? ¿Ha acudido a los servicios educativos que se ofrecen en esta institución penitenciaria? ¿Cuántas veces? ¿Por qué razón decidió acudir a los servicios educativos? En caso contrario, ¿por qué decidió no hacerlo? ¿Cómo evalúa las aulas educativas del CERESO Apodaca? ¿Cuál era su grado educativo a su llegada al CERESO Apodaca? ¿Considera que el apoyo de maestros y material escolar recibido por la institución es suficiente para su desarrollo educativo? De los siguientes contenidos de educación califique con 3 la más importante para su desarrollo educativo; con 2 la moderadamente importante y 1 la menos importante: Redacción; Conocimientos técnicos profesionales; Habilidades en comunicación; Capacitación para la administración y oficios. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los estudios realizados en el CERESO Apodaca?

				<p>¿En cuál de los grados educativos considera haber avanzado?</p> <p>¿Cuál es su nivel de satisfacción con los estudios realizados en el CERESO Apodaca?</p> <p>¿En qué actividades ocupa su tiempo dentro del CERESO Apodaca?</p> <p>¿El departamento de Trabajo Social del CERESO Apodaca lo ha invitado a continuar con sus estudios?</p>
Avance académico y capacitación en oficios de los internos del CERESO Apodaca.	Los avances de grado y capacitación en algún oficio que obtenga el privado de la libertad dentro de la CERESO Apodaca.	Avances académicos que han generado un documento de certificación de estudios.	Obtención de certificados, diplomas o comprobantes de culminación de cursos. Participación del interno en programas de capacitación laboral.	<p>En su situación escolar ¿considera que ha tenido algún avance dentro del CERESO Apodaca?</p> <p>De los estudios que usted realizó en el CERESO Apodaca ¿recibe un certificado, diploma o reconocimiento?</p> <p>¿Cuál estudio realizado dentro del penal fue reconocido con un certificado escolar?</p> <p>¿Ha acudido a servicios de capacitación laboral?</p> <p>¿Qué cursos de capacitación le gustaría que existieran dentro del CERESO Apodaca para desarrollar un buen trabajo dentro y fuera del penal?</p> <p>¿Cómo evalúa las aulas para talleres de trabajo y capacitación del CERESO Apodaca?</p> <p>¿Considera que la preparación recibida dentro del CERESO Apodaca le será útil al salir del penal?</p>
Deserción de los estudios iniciados de los internos del CERESO Apodaca	Abandono de estudios iniciados de los internos del CERESO Apodaca	Abandono de estudios de los internos del CERESO Apodaca	Deserción de estudios una vez iniciados. Hábitos estudio y de lectura; tipos de lectura ejercidos por los internos del CERESO Apodaca.	<p>¿Usted ha abandonado sus estudios dentro del CERESO Apodaca una vez iniciados?</p> <p>¿Durante su estancia en el penal ha abandonado algún estudio?</p> <p>¿Cuál es el total de horas por semana que usted dedica actividades educativas?</p> <p>¿Le gusta leer?</p> <p>¿Qué medios de lectura prefiere?</p> <p>En la lectura de libro o revistas ¿cuáles temas le gusta leer?</p> <p>¿Cómo evalúa la biblioteca del CERESO Apodaca?</p>

3.6.1.2. Encuesta aplicada en junio de 2019 dentro del estudio Prisión, espiritualidad y religión: Una visión desde la reinserción social

Variable	Definición conceptual	Dimensión	Indicadores	Ítems
Características generales, condiciones sociodemográficas y composición de los núcleos de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.	Hace mención a los datos sociodemográficos y composición familiar de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.	Datos sociodemográficos del interno y de familiares de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.	Edad de la persona privada de la libertad; escolaridad del interno previo a su reclusión; escolaridad del interno posterior a su reclusión; tiempo de sentencia asignado.	¿Cuál es su edad? ¿Cuál era su escolaridad previa a ingresar al CERESO Apodaca? ¿Cuál era su escolaridad posterior a ingresar al CERESO Apodaca? ¿Cuál fue el tiempo de sentencia que le fue asignado?
Realidad familiar durante la infancia, ambiente familiar, así como investigar la existencia de posibles factores delictivos dentro del núcleo familiar en esta etapa.	Se refiere a las condiciones de vida, familiares y educativas de las personas privadas de la libertad durante su infancia.	Condiciones de vida, familiares y educativas de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.	Antecedentes delictivos familiares; edad en la que dejaron el hogar; problemas durante la infancia; agresiones durante la infancia; pertenencia a pandillas,	¿Alguno de sus familiares ha estado dentro de un centro de reinserción social? ¿Cómo evalúa su ambiente familiar? Durante su infancia, ¿había problemas en su familia? En caso afirmativo, ¿de qué tipo? Durante su infancia, ¿fue víctima de violencia? ¿Ha pertenecido a alguna pandilla? ¿Desde qué edad? ¿Algún familiar ha pertenecido a una pandilla?
Situación escolar de las personas privadas de la libertad durante el periodo de su infancia.	Dentro de esta variable se considera el desarrollo académico de las personas internas durante su infancia, así como aspectos familiares relacionados con este aspecto.	Situación escolar de las personas privadas de la libertad durante su infancia y el impacto familiar en su desarrollo académico.	Asistencia a la escuela; evaluación del ambiente escolar durante la infancia; apoyo familiar para el desarrollo educativo; razones por las que no han podido contar con apoyo familiar.	¿Durante su infancia asistió de forma regular a la escuela? ¿Cómo evalúa el ambiente escolar predominante durante su infancia? ¿Durante su infancia recibió apoyo de su familia para cumplir con sus compromisos escolares? En caso negativo, ¿por qué razón no ha recibido apoyo familiar para cumplir con sus compromisos escolares?
Agresiones y problemáticas presentes en la formación educativa de las personas privadas de la libertad.	Define la presencia de agresiones de distintos tipos que de alguna manera influyan en el aprovechamiento académico de los internos durante su infancia.	Problemáticas presentes en la formación educativa durante la infancia de las personas privadas de la libertad.	Presencia de agresiones;	Durante su infancia, ¿recibió agresiones en su etapa escolar? En caso afirmativo, ¿quién o quiénes fueron los agresores? ¿Cuál fue el tipo de agresión que recibió durante la etapa educativa de su infancia? ¿Cuál fue su respuesta ante las agresiones recibidas? ¿Recibió apoyo de las autoridades de la escuela ante las agresiones recibidas?

3.7. Instrumentos

Para la realización de esta investigación se plantearon una serie de indicadores específicos que fueron incluidos en los instrumentos de recolección de datos diseñados para la realización de dos proyectos de investigación que evaluaron las condiciones de reinserción social imperantes dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca; estos son *Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica* (Cerde, 2017) y *Prisión, espiritualidad y religión: Una visión desde la reinserción social* (Cerde, 2020) coordinados por la Dra. Patricia Liliana Cerde Pérez (directora de este proyecto de tesis).

Tal como se mencionó anteriormente, de los aspectos evaluados en la citada encuesta solo se consideraron aquellos enfocados al análisis de la situación académica y educativa de 543 personas privadas de la libertad entrevistadas durante los años 2017 y 2019 así como de aspectos relacionados con la infraestructura de las aulas para servicios educativos; los programas a los que asiste la persona privada de la libertad; cursos complementarios de apoyo a la reinserción social; lectura y adquisición de conocimiento y avances en materia educativa dentro del CERESO Apodaca. Los formatos de encuesta completos se incluyen en los Anexos 4 y 5 de este trabajo de investigación.

Para la realización de las entrevistas dirigidas, se utilizaron cuestionarios bases con preguntas que guiaran el proceso de recolección de la información. Las preguntas básicas se pueden encontrar en los Anexos 6, 7, 8 y 9.

3.8. Recolección de datos

Como parte de la recolección de datos de este trabajo de investigación se emplearon diversas técnicas de investigación enfocadas al análisis de las condiciones educativas y académicas de las personas privadas de la libertad dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca; entre estas se encuentran:

1. Análisis documental de la población carcelaria en el ámbito internacional, nacional y en Nuevo León.
2. Análisis de los registros estadísticos y de información respecto a los internos en centros penitenciarios en el estado de Nuevo León, realizados por la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad

Pública. A través de este procedimiento se conocieron las características básicas y datos generales de quienes purgan una sentencia en instalaciones de seguridad de esta entidad.

3. Aplicación de encuestas dirigidas a una muestra representativa de la población penitenciaria del CERESO de Apodaca en dos momentos, marzo de 2017 y junio de 2019. Dentro de este procedimiento, se evaluará el perfil académico y laboral de los internos para conocer cuál es su estatus educativo y cuál es el oficio o profesión que ejercían antes de ingresar en un centro penitenciario.
4. Entrevistas dirigidas a expertos en el ámbito educativo y carcelario para conocer su opinión respecto a la realidad académica de los internos. Asimismo, se entrevistará a representantes de organizaciones no gubernamentales que conozcan de primera mano la situación vivida dentro de los centros penitenciarios.

3.9. Procesos y técnicas estadísticas para el análisis de datos

Las muestras cuantitativas fueron levantadas, en primera instancia, durante marzo del 2017, con la participación de los estudiantes del doctorado en Filosofía con orientación en Comunicación e Innovación Educativa, quienes también colaboraron en llenado de una base de datos en el que se evaluaron las condiciones de reinserción social imperantes dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca. La segunda recolección de datos se realizó durante el mes de junio de 2019.

Los indicadores correspondientes al ámbito educativo y académico se incluyeron dentro de los instrumentos de investigación aplicados para los proyectos de investigación titulados *Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica* (Cerde, 2017) y *Prisión, espiritualidad y religión: Una visión desde la reinserción social* (Cerde, 2020) coordinadas por la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez.

El levantamiento de encuestas se realizó de forma multitudinaria dentro del auditorio del Centro de Reinserción Social Apodaca; para la aplicación se tuvo un estricto margen de confidencialidad, no fueron requeridos nombres, domicilios o algún dato que permitiera identificar a la persona privada de la libertad participante. A fin de que fuera

más cómodo y de que las personas pudieran responder con mayor confianza se optó por un método auto administrado. Sin embargo, en los casos de que las personas privadas de la libertad tuvieran dificultades para leer o entender las preguntas se efectuó la encuesta en forma de entrevista.

Una vez levantados ambos instrumentos de recolección de datos, se crearon dos bases de datos a través del software estadístico SPSS v.22 (Statistical Software for the Social Sciences) con la finalidad de someter la información a diversos procesamiento estadísticos. En ambos casos, de los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta, solamente se tomaron aquellos en los que se evaluaron las condiciones académicas y de capacitación de las personas privadas de la libertad, así como algunos datos generales.

En lo que respecta a las entrevistas a profundidad, se desarrolló un método de análisis de tipo cualitativo en el que se examinaron exhaustivamente cada una de las preguntas brindadas por el entrevistado.

3.10. Costo estimado del proyecto

El financiamiento total de esta investigación corrió por parte de la autora de este proyecto. La información empleada en su elaboración en los datos emanados de los diversos estudios realizados de forma longitudinal por el Centro de Investigación para la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León coordinado por la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez, en los cuales la sustentante participó en su papel de tesista.

En el CERESO de Apodaca, se contó con el apoyo del profesor Moisés Ramírez Martínez, Subdirector de Reinserción Social, quien facilitó las actividades para el levantamiento de las encuestas dentro de este centro penitenciario. El análisis de los datos recolectados será coordinado por el autor de este proyecto y se realizará con el apoyo de estudiantes inscritos en el programa de servicio social del Centro de Investigación para la Comunicación.

Capítulo IV

Análisis de resultados

Capítulo IV

Análisis de resultados

El propósito de este capítulo es analizar la opinión de las personas privadas de la libertad sobre los servicios educativos, culturales y deportivos que se ofertan dentro del CERESO Apodaca como parte del proceso académico, así como de la capacitación que se realiza como apoyo a la reinserción social de los internos.

A nivel internacional, tal como se establece en la resolución aprobada en 5º Congreso Mundial de la Educación celebrado en Berlín durante el año 2006, se indica que, respecto a la educación en los establecimientos penitenciarios, ésta, debe incluir “temas en el aula, educación básica y general para adultos”. Así mismo, ésta debe enfocarse al desarrollo de los internos por lo que debe ser “una educación profesional acreditada que sea sensible a las tendencias del mercado laboral, educación a distancia, actividades creativas y culturales, educación física y deportes, educación social y programas de reinserción antes y después de la puesta en libertad”.

La educación es uno de los derechos humanos inalienables de toda la población. La educación, junto a la cultura y el deporte, es una parte sustancial del proceso de reinserción social del interno. Los hallazgos de este estudio reflejan las necesidades de la población penitenciaria del CERESO de Apodaca, respecto a estos tres ejes, los cuales, según los resultados obtenidos, se presentan en términos de un fuerte rezago educativo.

Los servicios educativos ofrecidos en esa institución son insuficientes para cumplir con lo estipulado tanto en la Ley General del Educación como en la Ley de Ejecución Penal y las recomendaciones de organismos especializados en el tema a nivel mundial como la UNESCO.

Un dato representativo es que el mayor nivel de instrucción es la secundaria para cuatro de cada diez internos. Aunque las causas del rezago educativo son diversas de acuerdo con la percepción de los internos, vemos que no ha sido posible alcanzar el nivel básico requerido de estudios para 8 de cada 10 internos. Para que quienes ya han concluido

la secundaria, es decir, 4 de cada 10 internos, no pueden realizar la preparatoria, ni obtener un diploma técnico o de oficio que les permita complementar su educación.

4.1. Carencias y desafíos educativos para la reinserción social en el CERESO Apodaca: Resultados de la encuesta aplicada en marzo 2017

De manera general las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca, son personas jóvenes que se encuentran en la etapa productiva de su vida y que muestra una tendencia positiva hacia la participación en actividades educativas y culturales que les permitan continuar su aprendizaje y, con ello, tener la posibilidad de acceder a mejores oportunidades de desarrollo una vez que cumplan con su sentencia.

Sin embargo, en el ámbito educativo se presentan una serie de limitaciones que impactan de forma negativa al desarrollo académico de los internos, como lo son la falta de opciones educativas del nivel medio superior; la falta de personal y las carencias en materiales e insumos. A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la aplicación del instrumento enfocado a evaluar las condiciones educativas y académicas de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca; en total, se consideran las respuestas de 312 internos en aspectos relacionados con la calidad educativa, infraestructura, capacitación, entre otros.

Los internos del CERESO Apodaca se caracterizan por ser personas que, en su mayoría, se encuentran en una edad entre los 26 y los 35 años, rango de edad en el que se sitúa el 36.2% de los encuestados (113 personas). Además, el 28.5% de los participantes tiene una edad entre los 36 y los 45 años (89 personas) y 14.4% tiene menos de 25 años. Por otro lado, el 10.6% de los internos tiene una edad entre los 46 y los 55 años (33 personas) y 6.4% de los mismos tiene una edad superior a los 55 años (20 personas).

Los resultados de la encuesta aplicada entre la población penitenciaria del Centro de Reinserción Social Apodaca indican que el 89.7% de los encuestados (9 de cada 10) tiene una edad inferior a los 45 años. Este resultado es evidencia de que las personas internas en este penal se encuentran en la etapa productiva de su vida, factor por el cual su preparación educativa tiene una gran importancia para que, al concluir su sentencia, puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

Tabla 4.1

Edad de las personas privadas de la libertad dentro del Centro de reinserción Social Apodaca entrevistadas clasificadas por rango

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 25 años	45	14.4%
De 26 a 35 años	113	36.2%
De 36 a 45 años	89	28.5%
De 46 a 55 años	33	10.6%
Más de 55 años	20	6.4%
No contestó	12	3.8%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

La edad promedio de las personas que se encuentran recluidas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca es de 35 años. El interno que reporta la mayor edad tiene 77 años, mientras que los internos más jóvenes cuentan con apenas la mayoría de edad, 18 años. La edad que se presentó con mayor frecuencia se hizo patente entre aquellos internos que tienen 26 años. Si se considera que, tal como lo establece Cerda (2017), el tiempo de sentencia promedio es de 15 años, se estima que los internos abandonarán el penal con una edad que se ubica entre los 40 y los 50 años.

Tabla 4.2

Valores estadísticos de edad de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca entrevistadas

	Valor
Media	35 años
Mediana	34 años
Moda	26 años
Mínimo	18 años
Máximo	77 años

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

En lo que respecta al nivel educativo de las personas privadas de la libertad, el 66.0% de los internos ha concluido estudios correspondientes a la educación básica; de estos, el 22.8% (71 personas) ha terminado la primaria y 42.9% la secundaria (134 personas). De la misma forma, el 4.8% (15 personas) cuenta con primaria trunca y 7.7% con secundaria inconclusa. Por otro lado, el 7.7% de los internos (24 personas) ha terminado los estudios del nivel medio superior (preparatoria o bachillerato); 2.8% (9 personas) concluyó el bachillerato técnico. Además, 8 personas (2.6%) indicaron que

terminaron una carrera profesional (licenciatura), uno más la dejó inconclusa. Solamente 12 internos señalaron no tener estudios.

Tabla 4.3

Escolaridad de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria	71	22.8%
Primaria trunca	15	4.8%
Secundaria	134	42.9%
Secundaria trunca	24	7.7%
Preparatoria	24	7.7%
Preparatoria técnica	9	2.8%
Licenciatura/profesional	8	2.6%
Licenciatura/profesional trunca	1	0.3%
Ningún estudio	12	3.8%
No contestó	11	3.5%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

4.1.1. Infraestructura y servicios educativos en el CERESO Apodaca

Los lineamientos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, señalan que uno de los ejes rectores que fundamenta el trabajo de los Centros de Reinserción Social en México es la educación; la cual es considerada como un aspecto que además de permitir que los internos cuenten con una mejor preparación académica, los capacita para desempeñar funciones laborales a través de cuales puedan acceder a mejores oportunidades laborales cuando recuperen su libertad.

Sin embargo, diversos factores inciden en que las instalaciones de los centros de reinserción social no sean las adecuadas para el desarrollo académico de las personas privadas de la libertad limitando su acceso a la educación. En ese sentido, los internos del CERESO Apodaca, de forma mayoritaria, tienen una evaluación positiva de los espacios utilizados como aulas educativas; el 15.7% de la población de este penal considera que son “excelentes” (49 personas), mientras que 42.3% (132 personas) afirman que estas son “buenas”.

Por otro lado, el 28.2% (88 personas) las evaluó de forma “regular”; 5.1% (16 personas) dijo que son “malas” y 4.2% (13 personas) las consideró “muy malas”. Aun

cuando la evaluación de las aulas educativas es generalmente positiva, es importante indicar que el 37.5% de la población del CERESO Apodaca indica que existe un área de oportunidad y de mejoramiento en el tema de infraestructura educativa.

Tabla 4.4

Opinión de las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca respecto a las aulas educativas

	Frecuencia	Porcentaje
Excelentes	49	15.7%
Buenas	132	42.3%
Regulares	88	28.2%
Malas	16	5.1%
Muy malas	13	4.2%
No contestó	14	4.5%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Además de los espacios utilizados como aulas educativas, dentro del CERESO Apodaca existe una biblioteca que cuenta con un acervo que, aunque es limitado, permite que las personas privadas de la libertad tengan acceso a obras literarias, así como a libros de texto educativos. En este sentido, 68.2% de los internos (213 personas) evaluaron de forma positiva las condiciones de la biblioteca del penal; 19.2% (60 personas) las calificó como “excelentes”, mientras que 49.0% (153 personas) dijo que son “buenas”. Asimismo, el 20.5% (64 personas) señaló que la biblioteca se encuentra en condiciones que se pueden catalogar como “regulares”; 4.8% dijo que son “malas” (15 personas) y 2.6% (8 personas) “muy malas”.

Tabla 4.5

Opinión de las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca respecto a la biblioteca

	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	60	19.2%
Buena	153	49.0%
Regulares	64	20.5%
Mala	15	4.8%
Muy mala	8	2.6%
No contestó	12	3.8%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca reportaron que entre las actividades a las que destinan su tiempo destaca que lo utilizan “en trabajar”, tal como lo mencionaron el 81.7% de los internos (255 personas). En segundo puesto se encuentra el 43.9% de los internos (137 personas) que dijeron que lo emplean “en caminar” en las instalaciones del CERESO; seguido por el 35.9% (111 personas) que indicaron utilizarlo “en leer”; 34.9% que afirmó dedicarlo “en labores de limpieza” (109 personas); 29.5% (92 personas) lo usa para “hacer artesanías”; 28.8% (90 personas) lo utiliza para “ver televisión” y 18.9% (59 personas) lo usa para “dormir”.

De las ocho actividades consideradas como parte de este reactivo, solamente el 18.9% de la población penitenciaria en el CERESO Apodaca dedica parte de su tiempo “en estudiar”; es decir, solamente 2 de cada 10 de las personas que se encuentran recluidas en este centro penitenciario participan en actividades educativas.

Tabla 4.6

En que ocupan su tiempo las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca

	Si lo emplea		No lo emplea		No contestó	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
En dormir	59	18.9%	242	77.5%	11	3.5%
En trabajar	255	81.7%	46	14.7%	11	3.5%
En caminar	137	43.9%	164	52.6%	11	3.5%
En estudiar	54	17.3%	247	79.2%	11	3.5%
En labores de limpieza	109	34.9%	192	61.5%	11	3.5%
En ver televisión	90	28.8%	211	67.6%	11	3.5%
En elaborar artesanías	92	29.5%	209	67.0%	11	3.5%
En leer	111	35.6%	190	60.9%	11	3.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Al ser cuestionados respecto a si han acudido a los servicios educativos que se ofertan dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, el 50.0% de los internos participantes señaló que “sí ha acudido” a los mismos, esto representa un total de 156 de las 312 personas consideradas en el estudio. Por otro lado, el 35.9% de los internos (112 personas) “no han acudido”. Además, 44 personas no respondieron a este cuestionamiento (14.1%).

Tabla 4.7

Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han acudido a servicios educativos

	Frecuencia	Porcentaje
Sí han acudido	156	50.0%
No han acudido	112	35.9%
No contestó	44	14.1%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Los resultados indican que el 15.3% de los mismos (24 personas) solamente ha acudido una vez a los servicios educativos que se ofertan en el CERESO Apodaca; el 9.0% de los internos (14 personas) lo ha hecho dos veces; 6.4% (10 personas) lo hizo tres veces y 3.8% (6 personas) ha empleado estos servicios 5 veces. El 7.7% de los internos (12 personas) afirmó haber acudido “varias veces” sin especificar en cuantas ocasiones lo ha hecho y 5.1% (8 personas) señaló que “muchas veces”. Solamente 3 internos (1.9%) indicó ir diariamente, mientras que otro más señaló que asiste a “evaluaciones”. Estos datos indican que, aunque la mayoría de los internos ha utilizado estos servicios lo hace de manera intermitente.

Tabla 4.8

Cantidad de veces por las que las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca han acudido a servicios educativos

	Frecuencia	Porcentaje
Una vez	24	15.3%
2 veces	14	9.0%
3 veces	10	6.4%
4 veces	3	1.9%
5 veces	6	3.8%
6 veces	6	3.8%
8 veces	1	0.6%
10 veces	1	0.6%
15 veces	1	0.6%
20 veces	4	2.5%
A cursos	1	0.6%
A evaluaciones	1	0.6%
Diariamente	3	1.9%
Muchas veces	8	5.1%
Varias veces	12	7.7%
No contestó	60	38.5%
Total	156	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 156 personas que afirmaron acudir servicios educativos

Un aspecto que es importante destacar es el hecho de que desde la administración del Centro de Reinserción Social Apodaca, de manera específica a través del departamento de Trabajo Social de la institución se realizan invitaciones de manera recurrente para que los internos se integren a las actividades educativas que se ofertan dentro del penal.

Los resultados de la encuesta aplicada indicaron en el 62.5% de los casos (195 personas) que “sí lo han invitado” para realizar actividades académicas que le permitan iniciar o continuar con sus estudios de primaria y secundaria. Por el contrario, el 33.0% (103 personas) señalaron que “no lo han invitado” y 4.5% (14 personas) no respondieron a este cuestionamiento.

Tabla 4.9

Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron que el departamento de Trabajo Social los ha invitado a iniciar o continuar con sus estudios de primaria y secundaria

	Frecuencia	Porcentaje
Sí lo han invitado	195	62.5%
No lo han invitado	103	33.0%
No contestó	14	4.5%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

En este mismo sentido, además de invitar a los internos para que se integren a actividades educativas y académicas, es importante que desde el departamento de Trabajo Social del penal se mantenga una atención constante respecto a la participación de las personas privadas en las mismas y, sobre todo, se analicen las razones por las cuales se presenten posibles casos de abandono educativo.

En relación con este punto, el 54.8% de los internos penitenciarios encuestados (171 personas) indicó que el departamento de trabajo social del CERESO Apodaca “sí ha estado al pendiente” de su participación en actividades educativas; mientras que el 37.2% de las mismas (116 personas) señalaron que este departamento “no ha estado pendiente”.

Tabla 4.10

Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron que el departamento de Trabajo Social ha estado pendiente de su participación o la razón del abandono de los programas a los que se inscribió

	Frecuencia	Porcentaje
Sí ha estado pendiente	171	54.8%
No ha estado pendiente	116	37.2%
No contestó	25	8.0%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Entre las razones por las que los internos del Centro de Reinserción Social Apodaca acudieron al departamento educativo se encuentran la necesidad de “estudiar y aprender”, tal como lo mencionaron 27 de los encuestados que en alguna vez han utilizado estos servicios; 15 internos (9.6%) se acercaron a esta área para “estudiar computación”, misma cifra de aquellos que lo hicieron para “estudiar secundaria”; además, 11 personas (7.0%) buscaron “cursos de capacitación”.

Entre otras de las razones que mencionaron las personas privadas de la libertad participantes en el estudio se encuentran “estudiar primaria y secundaria” (7 personas); “estudiar y superarme” (6 personas); “estudiar preparatoria” (5 personas); “obtener beneficios” (5 personas) por mencionar las más importante. En la siguiente tabla se muestran las principales razones por las que los internos del CERESO Apodaca decidieron utilizar los servicios educativos.

Tabla 4.11

Razones por las que las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca han acudido a servicios educativos

	Frecuencia	Porcentaje
Estudiar y aprender	27	17.3%
Estudiar computación	15	9.6%
Estudiar secundaria	15	9.6%
Cursos de capacitación	11	7.0%
Estudiar primaria y secundaria	7	4.5%
Otras razones	7	4.5%
Estudiar y superarme	6	3.8%
Estudiar preparatoria	5	3.2%
Obtener beneficios	5	3.2%
Acudir a la biblioteca	4	2.6%
Participar en deportes	4	2.6%
Estudiar primaria	2	1.3%
Mantenerse ocupado	2	1.3%

Porque me desempeño como asesor	2	1.3%
Terminar mis estudios	2	1.2%
Estudiar inglés	1	0.6%
Estudiar secundaria y preparatoria	1	0.6%
Me invitaron a estudiar	1	0.6%
Porque me gusta estudiar	1	0.6%
Solo cuando ingresó	1	0.6%
No contestó	37	23.7%
Total	156	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 156 personas que afirmaron acudir servicios educativos.

Por otro lado, entre las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca que no han utilizado los servicios educativos (112 personas), las razones para justificar esta ausencia son variadas, la más importante es “por el trabajo”; 6 personas indicaron que la labor que desempeñan en el penal les impide continuar con su educación. Además, 4 personas señalaron que “no quieren estudiar”; 3 personas señalaron que no existe la oportunidad de continuar en el nivel de preparatoria. Los internos también señalaron que existe “falta de tiempo”, que “los cursos no son buenos”, “que no han completado la papelería” y que “ya terminó sus estudios”.

Tabla 4.12

Razones por las que las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca no han acudido a servicios educativos

	Frecuencia	Porcentaje
Por el trabajo	6	5.4%
No quiere estudiar	4	3.6%
No hay preparatoria	3	2.7%
No lo han invitado	2	1.8%
Falta de tiempo	1	0.9%
Los cursos no son buenos	1	0.9%
No ha completado papelería	1	0.9%
No sabe dónde es	1	0.9%
Ya terminó sus estudios	1	0.9%
No contestó	92	82.1%
Total	112	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 112 personas que afirmaron no acudir a servicios educativos.

4.1.2. Servicios educativos utilizados por las personas privadas de la libertad

Los servicios educativos que se ofertan dentro del CERESO Apodaca tienen como una de sus principales finalidades contribuir al proceso de reinserción social de los internos; además, a través de estas opciones se busca que las personas privadas de la libertad concluyan sus estudios y con ello se evite el rezago académico que, usualmente, caracteriza a este sector de la población que mayoritariamente cuenta con una preparación del nivel básico.

Al ser cuestionados respecto al nivel educativo de las personas privadas de la libertad a su llegada al CERESO Apodaca, los resultados muestran que el 13.8% de los internos (43 personas) cuenta con la primaria sin terminar, misma cifra de aquellos que concluyeron este nivel educativo. Por otro lado, el 22.8% de los reclusos (71 personas) terminó la secundaria, 17.6% (55 personas) truncaron sus estudios en este nivel.

Por otra parte, el 4.8% (15 personas) afirmó tener la preparatoria terminada, 8.7% (27 personas) no pudo concluir el bachillerato. El 1.9% (6 personas) tienen estudios técnicos finalizados, misma cantidad no pudo concretarlos. En el nivel superior 4 personas lograron concluir su preparación profesional, otros 4 no lograron finalizarla.

Tabla 4.13

Grado educativo del interno a su llegada al CERESO Apodaca

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria sin terminar	43	13.8%
Primaria terminada	43	13.8%
Secundaria sin terminar	55	17.6%
Secundaria terminada	71	22.8%
Preparatoria sin terminar	27	8.7%
Preparatoria terminada	15	4.8%
Estudios técnicos sin terminar	6	1.9%
Estudios técnicos terminados	6	1.9%
Estudios superiores sin terminar	4	1.3%
Estudios superiores terminados	4	1.3%
Posgrado sin terminar	1	0.3%
No contestó	37	11.9%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Los resultados de la encuesta aplicada indican que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca (44.9%, 140 personas) han utilizado los servicios

educativos que se ofertan en este penal para concluir su preparación académica. Sin embargo, es importante destacar que el 42.3% (132 personas) señalaron que no los ha utilizado.

Tabla 4.14

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han utilizado servicios educativos para concluir su educación

	Frecuencia	Porcentaje
Sí los ha utilizado	140	44.9%
No los ha utilizado	132	42.3%
No contestó	40	12.8%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Entre las 140 personas privadas de la libertad que señalaron que han utilizado los servicios educativos que se ofertan dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, el 19.3% (27 personas) ha buscado actividades académicas del nivel de primaria; 61.4% (86 personas) en secundaria; el 6.4% ha buscado prepararse en nivel de bachillerato; además, una persona afirmó haber accedido a estudios del nivel universitario y una persona más buscó cursos de computación.

De esta forma, el 70.0% de las personas privadas de la libertad han buscado concluir su preparación en el nivel educativo básico.

Tabla 4.15

Servicios educativos utilizados por las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria	27	19.3%
Secundaria	86	61.4%
Preparatoria	9	6.4%
Universitarios	1	0.7%
Otros (computación)	1	0.7%
No contestó	16	11.4%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

Un dato importante es el hecho de que 2 de cada 10 personas privadas de la libertad que deciden insertarse en actividades educativas ha terminado abandonándolas, tal como

lo afirmó el 23.6% de los internos que usaron los servicios educativos (33 personas). Por otro lado, el 60.0% (84 personas) no ha abandonado sus estudios dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca. Según la SEP, el porcentaje de abandono en el nivel básico es de 10.0% de la matrícula; mientras que en el superior es de 8.0%.

Tabla 4.16

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han tenido que abandonar sus estudios una vez iniciados

	Frecuencia	Porcentaje
Sí ha abandonado	33	23.6%
No ha abandonado	84	60.0%
No contestó	23	16.4%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

De las personas que se encuentran realizando actividades educativas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca el 62.1% de las mismas (87 personas) afirmó que le dedica menos de 3 horas semanales a su preparación académica; mientras que el 10.7% (15 personas) invierte de 3 a 6 horas por semana; 3.6% (5 personas) de 6 a 9 horas; 2.9% (4 personas) de 9 a 12 horas y 3.6% (5 personas) destina entre 12 y 15 horas semanales. Esta estadística permite observar que el tiempo dedicado por los internos a su preparación educativa puede resultar insuficiente para el cumplimiento de sus objetivos académicos.

Tabla 4.17

Número de horas a la semana que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca dedican a actividades educativas

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 3 horas	87	62.1%
De 3 a 6 horas	15	10.7%
De 6 a 9 horas	5	3.6%
De 9 a 12 horas	4	2.9%
De 12 a 15 horas	5	3.6%
No contestó	24	17.2%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

De las 140 personas que participan en actividades educativas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, el 75.0% (105 personas) consideran que han tenido un

avance significativo en sus condiciones académicas. Por otro lado, solamente el 15.0% (21 personas) afirmaron que a pesar de participar en este tipo de actividades no han tenido un avance importante. En este cuestionamiento 14 personas decidieron no responder.

Tabla 4.18

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que consideran haber tenido un avance educativo

	Frecuencia	Porcentaje
Sí ha avanzado	105	75.0%
No ha avanzado	21	15.0%
No contestó	14	10.0%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

De las personas privadas de la libertad que afirmaron que han tenido un avance educativo dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, el 20.0% de los mismos (21 personas) han logrado un progreso en el nivel de primaria; 64.8% (68 personas) lo hizo en el nivel de secundaria; es decir, según estos datos, el 84.8% de los internos que participan en actividades educativas ha mostrado progreso en el nivel básico.

Sin embargo, solamente 5 personas (4.8%) indicaron que tuvieron un avance en el grado de preparatoria. Entre las razones por las que no ha existido un mayor índice de personas privadas de la libertad que muestren progreso en el nivel medio superior se fundamenta en el hecho de que no existen opciones educativas de este tipo dentro del penal.

Tabla 4.19

Grado en que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca consideran haber tenido un avance educativo

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria	21	20.0%
Secundaria	68	64.8%
Preparatoria	5	4.8%
Universitarios	0	0.0%
Otro (computación)	1	1.0%
No contestó	8	10.0%
Total	105	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en el CERESO “Apodaca”. *Se consideran las 105 personas que han tenido un avance educativo.

Un aspecto sumamente importante para las personas privadas de la libertad y para el proceso de reinserción social en el que se encuentran inmersos, es el hecho de poder certificar los estudios que se encuentran cursando dentro de CERESO Apodaca. En este escenario, el 51.4% de los internos que han utilizado los servicios educativos de esta institución (72 personas) afirmaron que “sí lo ha recibido”; mientras que el 34.3% (48 personas) “no lo ha recibido”. Además, 20 personas no respondieron a esta pregunta.

Tabla 4.20

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que han recibido un certificado

	Frecuencia	Porcentaje
Sí lo ha recibido	72	51.4%
No lo ha recibido	48	34.3%
No contestó	20	14.3%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

Entre las personas privadas de la libertad que afirmaron haber certificado la culminación de sus estudios, el 33.3% (24 personas) lo hizo en el nivel de primaria; 47.2% (34 personas) en secundaria. Por otra parte, solamente una persona pudo concluir sus estudios universitarios y siete personas más (9.7%) pudieron obtener una certificación en primaria y secundaria. Estos datos, junto con los obtenidos en indicadores anteriores, refrendan la necesidad de ofrecer alternativas de capacitación y de educación del nivel medio superior dentro del penal.

Tabla 4.21

Nivel en que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca han recibido algún certificado

	Frecuencia	Porcentaje
Primaria	24	33.3%
Secundaria	34	47.2%
Preparatoria	0	0.0%
Universitarios	1	1.4%
Primaria y secundaria	7	9.7%
No contestó	6	8.3%
Total	72	100%

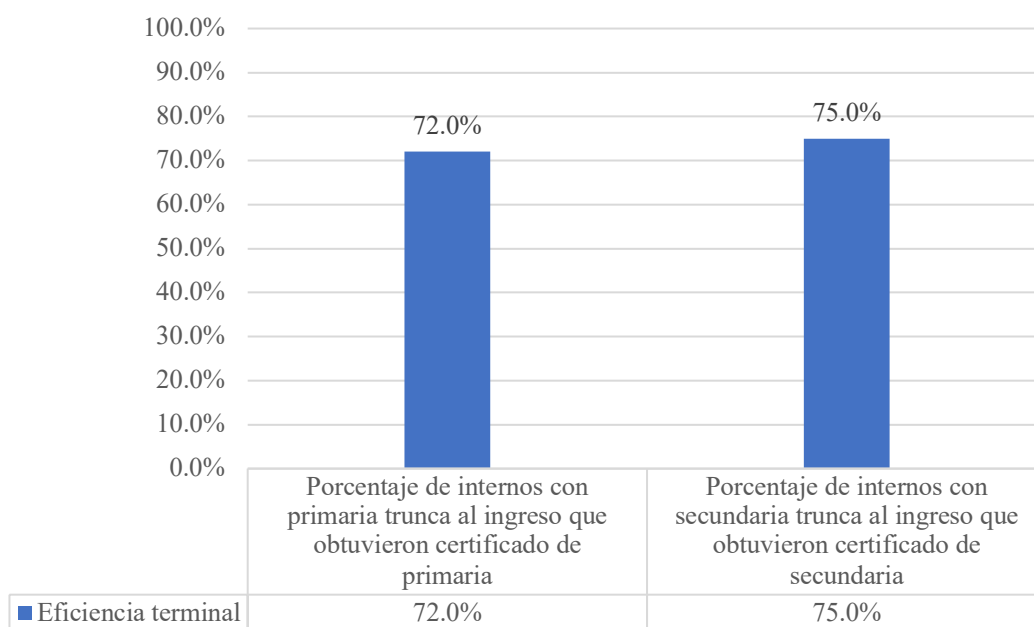
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 72 personas que han recibido algún certificado, diploma o reconocimiento.

Al evaluar el estatus educativo de las personas privadas de la libertad que, a su ingreso al penal, afirmaron contar con educación trunca en el nivel de primaria o secundaria, se encontró que el nivel de eficiencia terminal, es decir que participaron en actividades académicas que les permitieron concluir estos estudios, es superior al 70.0% de los casos.

En lo que respecta al nivel de primaria, de los internos que habían dejado inconclusos sus estudios en este nivel, el 72.0% de los mismos pudo concluirlos dentro del CERESO Apodaca y lograron certificarlos. Por otro lado, en lo que respecta al nivel de secundaria, el 75.0% de los reclusos que no habían podido obtener su certificado de secundaria, lo hicieron durante su estancia dentro de este penal.

Figura 4.1

Porcentaje de personas privadas de la libertad que certificaron sus estudios dentro del CERESO Apodaca



Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Sin embargo, aun cuando los resultados obtenidos en la aplicación de este instrumento de investigación evidencian que las personas privadas de la libertad muestran una participación positiva en actividades académicas, los mismos internos señalan que existen importantes carencias para poder continuar con su preparación dentro del penal.

En este sentido, el 57.9% de los internos del CERESO Apodaca participantes (81 personas) señalan que el apoyo que tienen por parte de los maestros, así como el material escolar brindado por la institución resulta suficiente para su desarrollo educativo. Sin embargo, el 28.6% (40 personas) indica lo contrario; de esta forma, 3 de cada 10 internos considera que tanto la labor de los profesores como los recursos son insuficientes.

Tabla 4.22

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que consideran que el apoyo de maestros y que el material escolar recibido por la institución es suficiente.

	Frecuencia	Porcentaje
Sí es suficiente	81	57.9%
No es suficiente	40	28.6%
No contestó	19	13.6%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

A pesar de las carencias en el apoyo de los profesores y de la falta de recursos para el desarrollo de actividades educativas dentro del CERESO Apodaca, la mayor parte de las personas privadas de la libertad tuvo una evaluación generalmente positiva respecto a los servicios educativos. El 30.0% de los internos participantes en este estudio (42 personas) afirma que el nivel de satisfacción respecto a sus estudios es “alto”; el 47.1% (66 personas) tiene se encuentra en nivel “medio” y solamente el 8.6% (12 personas) señaló que su nivel de satisfacción es “bajo”.

Tabla 4.23

Nivel de satisfacción de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca respecto a los estudios que ha realizado

	Frecuencia	Porcentaje
Alto	42	30.0%
Medio	66	47.1%
Bajo	12	8.6%
No contestó	20	14.3%
Total	140	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

En lo que respecta a los contenidos que se abordan dentro de la oferta educativa del Centro de Reinserción Social Apodaca, las personas privadas de la libertad participantes en el estudio afirmaron, en un 31.4% (44 personas), que requieren desarrollar competencias de redacción como complemento a los niveles de educación básico, medio superior y superior. Por otro lado, el 30.0% (42 personas) indicó que es importante adquirir habilidades de comunicación; el 28.6% (40 personas) afirma que es fundamental la preparación en oficios y 21.4% (30 personas) cree necesaria la capacitación para administración.

Tabla 4.24

Contenido educativo que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca consideran importante para su desarrollo

	Sí es importante		No es importante		No contestó	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Redacción	44	31.4%	45	32.1%	51	36.4%
Habilidades en comunicación	42	30.0%	43	30.7%	54	39.2%
Oficios	40	28.6%	47	33.6%	53	37.8%
Conocimientos técnicos	30	21.4%	52	37.1%	58	41.4%
Capacitación para administración	19	13.6%	60	42.9%	62	43.5%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 140 personas que han utilizado servicios educativos.

4.1.3. Cursos complementarios de apoyo a la reinserción social y laboral

Además de la preparación académica y la búsqueda de reducir la brecha educativa y combatir el rezago académico que caracteriza a la población penitenciaria, las oportunidades educativas dentro de los centros de reinserción social tienen el objetivo de brindar capacitación y preparación a las personas para que puedan encontrar oportunidades de desarrollo una vez que concluyan su sentencia y abandonen la institución.

En relación con este aspecto, los resultados de la encuesta indican que el 23.7% de las personas privadas de la libertad considera que contar con una oferta de “varios cursos” le serviría para acceder a mejores oportunidades al dejar el penal. Por otro lado, el 12.8% (40 personas) afirma que los cursos de computación les serían útiles; 9.9% (31 personas) indicó que los cursos de cocina; 9.3% (29 personas) de mecánica automotriz; 9.0% (82 personas) de carpintería; 4.2% (13 personas) desea recibir capacitación de manejo de

montacargas; 3.2% (10 personas) para mantenimiento de electricidad; 2.6% (8 personas) para realizar serigrafía y 1.6% (5 personas) para panadería.

Tabla 4.25

Curso de formación que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca consideran que les servirán al salir de la institución

	Frecuencia	Porcentaje
Varios cursos	74	23.7%
Computación	40	12.8%
Cocina	31	9.9%
Mecánica automotriz	29	9.3%
Carpintería	28	9.0%
Manejo de montacargas	13	4.2%
Electricidad	10	3.2%
Serigrafía	8	2.6%
Panadería	5	1.6%
No contestó	74	23.7%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

De las personas privadas de la libertad el 76.0% (238 personas) “sí mostraron interés” en participar en actividades educativas y académicas como parte de su proceso de reinserción social; por otro lado, el 24.0% (74 personas) no se encuentran interesados en este tipo de cursos.

Tabla 4.26

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que les interesaría participar en actividades educativas y de capacitación laboral que complementen su reinserción social

	Frecuencia	Porcentaje
Sí mostraron interés	238	76.0%
No mostraron interés	74	24.0%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

En este sentido, el 20.3% de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Apodaca (78 personas) le interesaría participar en cursos de computación como complemento al proceso que se encuentra viviendo dentro del penal. Además, el 17.4% (67 personas) está interesado en cursos de cocina; a 16.4% (63 personas) desea recibir capacitación en mecánica automotriz; 15.1% (58 personas) le

gustaría prepararse en carpintería; 10.4% (40 personas) en electricidad, cifra similar a quienes desean capacitarse para el manejo de montacargas; 5.7% (22 personas) en panadería y 4.4% (17 personas) en serigrafía.

Tabla 4.27

Actividades educativas y de capacitación en los que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca les interesaría participar como complemento a su reinserción social

	Frecuencia	Porcentaje
Computación	78	20.3%
Cocina	67	17.4%
Mecánica automotriz	63	16.4%
Carpintería	58	15.1%
Electricidad	40	10.4%
Manejo de montacargas	40	10.4%
Panadería	22	5.7%
Serigrafía	17	4.4%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

4.1.4. Actividades culturales y deportivas

Dentro de los centros de reinserción social y como parte del proceso enfocado a que las personas privadas de la libertad puedan desarrollar las competencias necesarias para reintegrarse a la vida en la sociedad se llevan a cabo una serie de actividades complementarias culturales y deportivas que, además de ayudar a hacer más llevadero el tiempo de estancia de los internos en el penal, les permite ocupar su tiempo en actividades positivas.

En ese sentido, el 33.4% de los internos participantes (104 personas) indicó que “sí han participado” en actividades artísticas para complementar su formación académica; es decir, 3 de cada 10 personas privadas de la libertad se han integrado a estas prácticas. Sin embargo, el 41.7% (130 personas) han decidido no participar y el 24.9% (78 personas) no respondieron a este cuestionamiento. Esto permite concluir que el 66.6% (208 personas) no han participado en actividades artísticas, lo que representa un área de oportunidad para el departamento de educación, cultura y deporte del CERESO Apodaca.

Tabla 4.28

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron haber participado en alguna actividad artística

	Frecuencia	Porcentaje
Sí han participado	104	33.4%
No han participado	130	41.7%
No contestó	78	24.9%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Entre las diferentes actividades artísticas en las que las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca pueden participar se encontró que el 26.9% (28 personas) práctica la pintura; el 20.2% (21 personas) realiza artículos tallados en madera; 17.3% (18 personas) desarrolla varias de las actividades disponibles; 12.5% (13 personas) práctica teatro; 8.7% (9 personas) lo hace en el ámbito musical; 6.7% (7 personas) en literatura y 3.8% (4 personas) en danza.

Tabla 4.29

Actividades artísticas en las que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca han participado

	Frecuencia	Porcentaje
Pintura	28	26.9%
Tallado en madera	21	20.2%
Varias actividades artísticas	18	17.3%
Teatro	13	12.5%
Música	9	8.7%
Literatura	7	6.7%
Danza	4	3.8%
No contestó	4	3.8%
Total	104	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 104 personas que afirmaron participar en actividades artísticas.

Asimismo, de manera eventual, dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca se realizan presentaciones o eventos artísticos en fechas especiales. Con relación a este aspecto, el 31.7% de las personas privadas de la libertad encuestadas (33 personas) ha tenido “participación en obras de teatro”; 23.1% (24 personas) lo ha hecho en “exposiciones de pintura”; 8.7% (9 personas) en “presentaciones de piezas musicales” y 6.7% (7 personas) en “presentaciones de danza”. Adicionalmente, 3 personas

mencionaron participar en “varios eventos artísticos” y una más en la “creación de escritos literarios”.

Tabla 4.30

Eventos artísticos en las que las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca han participado

	Frecuencia	Porcentaje
Participación en obras de teatro	33	31.7%
Exposición de pintura	24	23.1%
Presentación de piezas musicales	9	8.7%
Presentaciones de danza	7	6.7%
Varios eventos artísticos	3	2.9%
Creación de escritos literarios	1	1.0%
No contestó	27	26.0%
Total	104	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 104 personas que afirmaron participar en actividades artísticas.

Por último, en lo que respecta a las actividades artísticas, dentro del CERESO Apodaca, es función del departamento de Trabajo Social trabajar en conjunto con el área educativa para invitar a las personas privadas de la libertad a integrarse a actividades culturales; en ese sentido, el 64.1% de los internos (200 personas) indicó que “sí lo han invitado”; mientras que en el 32.7% de los casos “no lo han invitado”.

Tabla 4.31

Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron que el departamento de Trabajo Social lo ha invitado a integrarse a programas de cultura de este centro, como es la música, la pintura, entre otras

	Frecuencia	Porcentaje
Sí lo han invitado	200	64.1%
No lo han invitado	102	32.7%
No contestó	10	3.2%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

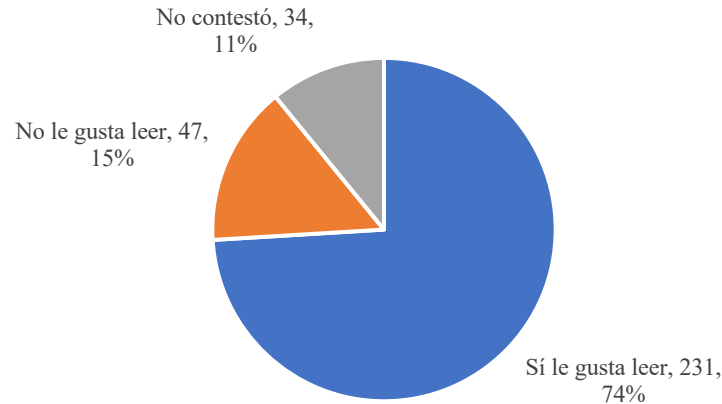
4.1.5. Lectura y adquisición del conocimiento

Como parte de las actividades que se realizan dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca para complementar las actividades educativas que se ofertan dentro de esta institución, se invita a las personas privadas de la libertad a utilizar las diferentes áreas en donde existe material de lectura para su entretenimiento o para continuar con su

preparación académica. En ese sentido, el 74.0% (231 personas) afirmaron que “sí le gusta leer”; mientras que el 15.0% (47 personas) indicó lo contrario. Además, 34 personas (11.0%) no respondieron.

Figura 4.2

Personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca que gustan de la lectura.

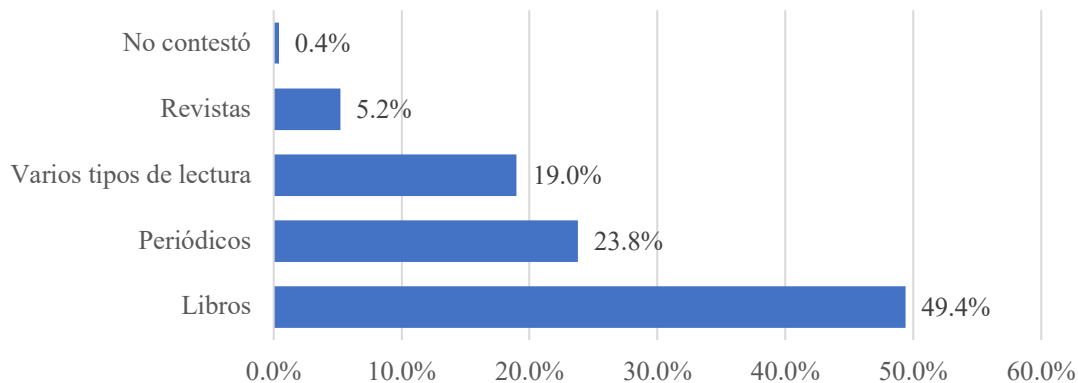


Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Entre las preferencias de lectura imperantes entre las personas privadas de la libertad, el 49.4% indicó que le gusta leer libros; al 23.8% le gusta informarse a través de los periódicos; 19.0% señaló que prefiere varios tipos de lectura y 5.2% afirmó que prefiere leer revistas. El 0.4% de los internos no respondió este cuestionamiento.

Figura 4.3

Preferencias de lectura de las personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca



Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

Para las personas privadas de la libertad es de suma importancia contar con actividad que, además de ayudarles a sobre llevar el tiempo de su estancia, les permitan desarrollar su mente a través del entretenimiento. Por tal motivo se cuestionó a los internos respecto a si suelen practicar ajedrez dentro del CERESO Apodaca; los resultados indican que en el 62.2% de los casos (194 personas) no tienen esta costumbre; mientras que el 20.2% (63 personas) sí practica ajedrez de forma cotidiana, esto es 2 de cada 10 internos encuestados.

Tabla 4.32

Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca que afirmaron practicar ajedrez

	Frecuencia	Porcentaje
Si práctica ajedrez	63	20.2%
No práctica ajedrez	194	62.2%
No contestó	55	17.6%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

De las 63 personas que indicaron practica ajedrez como parte de sus actividades cotidianas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, el 38.1% (24 personas) afirmaron que han participado en torneos de esta disciplina. Por otro lado, el 57.1% (36 personas) no han participados. Además 3 personas no respondieron a este cuestionamiento.

Tabla 4.33

Personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social "Apodaca" que practican ajedrez y han participado en torneos

	Frecuencia	Porcentaje
Sí ha participado	24	38.1%
No ha participado	36	57.1%
No contestó	3	4.8%
Total	63	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017). *Se consideran las 63 personas que practican ajedrez.

4.1.6. El deporte como complemento a las actividades educativas

Otra de las actividades que se realizan como complemento a la preparación educativa y académica de las personas privadas de la libertad y que depende directamente

del Departamento de Educación, Cultura y Deporte corresponde a la participación de los internos en actividades físicas. En este sentido, la oferta existente dentro del CERESO Apodaca es amplia y abarca una cantidad considerable de disciplinas deportivas.

Los resultados de la encuesta aplicada a 312 internos indica que los internos de la citada institución penitenciaria suelen, en el 30.4% de los casos (95 personas), participar en varios deportes, principalmente el fútbol. En relación con el soccer, se encontró que el 24.7% de las personas privadas de la libertad (77 personas) suelen practicar este deporte. Además, el 8.3% (26 personas) suele hacer caminata; 6.1% (19 personas) juega béisbol; 3.2% (10 personas) hace box; 2.2% (7 personas) trote y 1.3% (4 personas) volibol.

Tabla 4.34

Deportes practicados por las personas privadas de la libertad entrevistadas en el Centro de Reinserción Social Apodaca

	Frecuencia	Porcentaje
Varios deportes	95	30.4%
Fútbol	77	24.7%
Caminata	26	8.3%
Beisbol	19	6.1%
Box	10	3.2%
Trote	7	2.2%
Volibol	4	1.3%
Carreras de obstáculos	1	0.3%
No contestó	73	23.4%
Total	312	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 312 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (febrero, 2017).

4.2. Educación en el contexto carcelario: Un enfoque para la reinserción social

Como seguimiento a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada durante el año 2017, se aplicaron una nueva serie de indicadores a personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca durante el mes de julio de 2019. La finalidad de esta segunda aplicación era profundizar en la educación de los internos, principalmente, en aquellas dificultades que experimentaron durante su infancia para mantenerse estudiando, así como el impacto que estas dificultades tuvieron en su formación.

En este apartado se muestran los resultados de la aplicación de 180 encuestas entre la comunidad penitenciaria del CERESO Apodaca en la que se evaluaron aspectos

relacionados con su educación, su desarrollo familiar y personal durante su infancia, así como otra serie de indicadores vinculados a la capacitación laboral para identificar posibles situaciones de vulnerabilidad que hayan limitado sus posibilidades académicas.

4.2.1. Datos generales de las personas privadas de la libertad participantes

De la misma forma en la que se encontró en la primera aplicación de encuestas entre la comunidad penitenciaria, las personas privadas de la libertad son personas generalmente jóvenes, la edad promedio de los internos es de 37 años; el interno más joven tiene 19 años, el mayor 71 años.

Entre los internos participantes en este estudio el 1.7% (3 personas) tienen entre 18 y 20 años; 10.7% (19 personas) de 21 a 25 años; 21.9% (39 personas) se ubica entre los 26 y 30 años, 19.1% (34 personas) entre los 31 y los 35 años; 14.0% (25 personas) tiene entre 36 y 40 años; 9.6% (17 personas); 6.2% (11 personas) tiene entre 46 y 50 años y 16.3% (29 personas) tiene más de 50 años.

Estos datos indican que el 67.4% de las personas privadas de la libertad recluidas en el CERESO Apodaca durante el año 2019 y que participaron en la aplicación de este instrumento tienen una edad inferior a los 40 años; es decir, se encuentran en una etapa de vida en la que pueden integrarse a actividades laborales, motivo por el cual su preparación educación y la capacitación para el trabajo se tornan importantes. Considerando que entre estos el tiempo promedio de sentencia es de 16 años, se estima que los internos abandonarán el penal entre los 35 y los 65 años.

Tabla 4.35

Edad de las personas privadas de la libertad encuestadas clasificadas por rango

	Frecuencia	Porcentaje
De 18 a 20 años	3	1.7%
De 21 a 25 años	19	10.7%
De 26 a 30 años	39	21.9%
De 31 a 35 años	34	19.1%
De 36 a 40 años	25	14.0%
De 41 a 45 años	17	9.6%
De 46 a 50 años	11	6.2%
Más de 50 años	29	16.3%
No contestó	1	0.6%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Al ser cuestionados respecto al nivel educativo que poseían previo a su ingreso al centro penitenciario, el 73.6% de las personas privadas de la libertad participantes en el estudio indicó que solamente contaban con estudios básicos, de los cuales el 27.8% (50 personas) había terminado la primaria, 45.8% (81 personas) la secundaria. Por otra parte, el 12.8% (23 personas) logró terminar la preparatoria, mientras que 9 personas (5.0%) concluyeron sus estudios profesionales y 3 más (1.7%) tiene estudios técnicos o comerciales.

Tabla 4.36*Escolaridad de las personas privadas de la libertad previo a su reclusión*

	Frecuencia	Porcentaje
Sin estudios	5	2.8%
Primaria	50	27.8%
Secundaria	81	45.8%
Preparatoria	23	12.8%
Técnico/comercial	3	1.7%
Licenciatura	9	5.0%
Posgrado	0	0.0%
Otros estudios	0	0.0%
No contestó	9	5.0%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

En lo que respecta al nivel educativo, es importante destacar que, durante el año 2019, existió una mejora importante en la preparación de las personas privadas de la libertad. Al analizar la situación de forma específica se encontró que el 59.4% de los internos participantes contaba con estudios del nivel básico, 6.7% (12 personas) contaba con primaria, 39.4% (71 personas) con secundaria; esto representa un avance de 14.0% de personas privadas de la libertad que no habían concluido su educación en este nivel antes de ingresar al centro penitenciario.

Asimismo, se presenta un incremento considerable en el nivel medio superior, si bien no se ha establecido un programa permanente de educación de bachillerato, han existido esfuerzos de instituciones educativa y universidades (como Universidad Autónoma de Nuevo León), para brindar opciones a los internos del CERESO Apodaca. En ese sentido, de las 23 personas que reportaron contar con preparatoria antes de su ingreso al penal, ahora son 36 personas las que afirmaron contar con bachillerato.

Tabla 4.37*Escolaridad de las personas privadas de la libertad posterior a la reclusión*

	Frecuencia	Porcentaje
Sin estudios	1	0.6%
Primaria	12	6.7%
Secundaria	71	39.4%
Preparatoria	36	20.0%
Técnico/comercial	1	0.6%
Licenciatura	6	3.3%
Posgrado	0	0.0%
Otros estudios	0	0.0%
No contestó	53	29.4%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

4.2.2. Historia de familia

Al indagar en la historia familiar de las personas, se encontró que en 17.8% de los casos (32 personas) alguno de los miembros de su núcleo ya había estado o está privado de la libertad. Mientras que en el 68.9% de los casos, el encuestado señaló que ninguno de sus familiares a estado recluido en un CERESO.

Tabla 4.38*Personas privadas de la libertad que afirmaron que alguno de sus familiares ha estado en un centro de reinserción social*

	Frecuencia	Porcentaje
No ha estado privado de la libertad	124	68.9%
Sí ha estado privado de la libertad	32	17.8%
No contestó	24	13.4%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Las personas privadas de la libertad que afirmaron que uno de los miembros de su núcleo ha estado en un centro de reinserción social para cumplir con una condena señalaron, en el 21.9% de los casos (7 personas) que esta corresponde a su hermano o hermana; 18.8% (6 personas) señaló que fueron sus tíos; 18.8% (6 personas) indicó que el recluido es su padre; 18.8% (6 personas) sostuvo que fueron otros familiares; 6.3% (2 personas) señaló que fue su madre y uno más dijo que su hijo. Además, 6 personas (18.8%) respondieron que son varios los familiares que han estado o se encuentran recluidos en un CERESO.

Tabla 4.39

*Parentesco de los familiares de las personas privadas de la libertad que han estado dentro de un centro de reinserción social**

	Frecuencia	Porcentaje
Hermano(a)	7	21.9%
Padre	6	18.8%
Tío(a)	6	18.8%
Otro familiar	6	18.8%
Varios familiares	4	12.4%
Madre	2	6.3%
Hijo(a)	1	3.1%
Abuelo(a)	0	0.0%
No contestó	0	0.0%
Total	32	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran las 32 personas que afirmaron que alguno de sus familiares ha estado recluido.

Algo que caracteriza a las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca es el hecho de que abandonaron su hogar a una edad temprana. Los resultados indican que el 56.6% de los encuestados dejó su casa antes de los 20 años; de estos, el 19.4% (35 personas) vivió en su hogar hasta los 15 años; mientras que el 37.2% (67 personas) lo dejaron entre los 16 y los 20 años.

Por otro lado, el 20.0% (36 personas) indicó que se fue de su hogar a una edad que se ubica entre los 21 y los 25 años; 6.1% (11 personas) señaló que lo abandono entre los 26 y los 30 años; además 5.6% (10 personas) lo hizo después de los 30 años.

Tabla 4.40

Edad hasta la cual las personas privadas de la libertad vivieron con su familia de origen

	Frecuencia	Porcentaje
Hasta los 15 años	35	19.4%
Entre los 16 y los 20 años	67	37.2%
Entre los 21 y los 25 años	36	20.0%
Entre los 26 y los 30 años	11	6.1%
Después de los 30 años	10	5.6%
No contestó	21	11.7%
Total	180	18.08%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

En relación con el ambiente imperante en el núcleo familiar en la infancia, el 27.2% de los encuestados (49 personas) lo calificó como “excelente”; 36.1% (65 personas)

afirmó que es “bueno”; 21.7% lo evalúa como “regular”; estos datos indican que la mayoría de las personas privadas de la libertad tienen una percepción positiva respecto a la realidad familiar durante su etapa de formación. Por otro lado, solamente el 4.4% (8 personas) indicaron que el ambiente familiar era “malo” y 2.8% (5 personas) afirmó que era “muy malo”.

Tabla 4.41

Evaluación del ambiente familiar durante la infancia de las personas privadas de la libertad encuestadas

	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	49	27.2%
Bueno	65	36.1%
Regular	39	21.7%
Malo	8	4.4%
Muy malo	5	2.8%
No contestó	14	7.8%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Las familias de las personas privadas de la libertad se caracterizan por ser núcleos donde existen carencias (principalmente económicas) que derivan en la generación de problemas y conflictos dentro del grupo. En ese sentido, los resultados de la encuesta indican que en el 39.4% de los casos (71 personas) los participantes sostuvieron que durante su infancia existieron problemas “económicos” dentro de su familia; el 22.2% (40 personas) señaló que hubo la presencia de “alcoholismo”; 21.1% (38 personas) “separación o divorcio”; en el 18.9% (34 personas) se presentaron “conductas agresivas”; en 15.6% (28 personas) afirmaron que existió “drogadicción”; 10.6% (19 personas) reportaron “violencia física” y en 4 casos (2.2%) abuso sexual.

Tabla 4.42

Problemas vividos en la infancia de los hogares de las personas privadas de la libertad

	Sí tuvieron		No tuvieron		No contestó	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Económicos	71	39.4%	57	31.7%	52	28.9%
Alcoholismo	40	22.2%	73	40.6%	67	37.2%
Separación o divorcio	38	21.1%	80	44.4%	62	34.4%
Conductas agresivas	34	18.9%	75	41.7%	71	39.4%
Drogadicción	28	15.6%	88	48.9%	64	35.6%
Violencia física	19	10.6%	93	51.7%	68	37.8%
Abuso sexual	4	2.2%	104	57.8%	72	40.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

En lo que respecta a la presencia de violencia dentro del núcleo familiar, el 25.0% de las personas privadas de la libertad encuestadas (45 personas), sostuvieron que fueron víctimas de agresiones durante su infancia. Por el contrario, el 63.9% (115 personas) indicaron que no se presentaron agresiones. Además, 11.1% de los encuestados (20 personas) no respondieron a este cuestionamiento.

Tabla 4.43

Personas privadas de la libertad que afirman haber sido víctimas de violencia durante su infancia

	Frecuencia	Porcentaje
No fueron víctima de violencia	115	63.9%
Sí fueron víctimas de violencia	45	25.0%
No contestó	20	11.1%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Entre los principales tipos de agresiones recibidas por las personas privadas de la libertad durante su infancia se encuentran los ataques verbales, el 64.4% de los encuestados (29 personas) que afirmaron haber sido víctimas de violencia en su infancia sostuvieron que fue de forma verbal; además el 60.0% (27 personas) indicaron que sufrieron agresiones físicas; 37.8% (17 personas) fue de tipo psicológico y 6.7% (3 personas) señaló que fue de índole sexual.

Tabla 4.44

*Tipo de agresiones recibidas durante la infancia por las personas privadas de la libertad encuestadas**

	Sí tuvieron		No tuvieron		No contestó	
	Frec.	%	Frec.	%	Frec.	%
Física	27	60.0%	18	40.0%	0	0.0%
Verbal	29	64.4%	16	35.6%	0	0.0%
Psicológica	17	37.8%	28	68.2%	0	0.0%
Sexual	3	6.7%	42	93.3%	0	0.0%
Otra	3	6.7%	42	93.3%	0	0.0%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 45 personas que afirmaron recibir agresiones en su infancia.

En cuanto a los victimarios, el 28.9% de las personas privadas de la libertad que afirmaron haber sido víctimas de violencia durante su infancia (13 personas), indicaron que fueron varios los agresores; el 20.0% (9 personas) señalaron que el principal causante

fue su padre; 17.8% (9 personas) indicó que fue su madre; 15.6% (7 personas) reportó que fueron otras personas ajenas a su núcleo; 4.4% (2 personas) dijo que su tío; además una persona señaló como victimario a su abuelo y otra más a sus hermanos.

Tabla 4.45

*Personas privadas de la libertad que afirman haber sido víctimas de violencia durante su infancia**

	Frecuencia	Porcentaje
Varios	13	28.9%
Padre	9	20.0%
Madre	8	17.8%
Otros	7	15.6%
Tíos	2	4.4%
Abuelos	1	2.2%
Hermanos	1	2.2%
No contestó	4	8.9%
Total	45	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 45 personas que afirmaron recibir agresiones en su infancia.

Al ser cuestionados respecto a la pertenencia a un grupo de pandillas, el 27.2% de las personas privadas de la libertad participantes (49 personas) afirmó que durante su infancia y/o adolescencia fue miembro de uno de estos grupos. Mientras que, por el contrario, el 63.9% de los mismos (115 personas) nunca estuvo integrado a una pandilla.

Tabla 4.46

Personas privadas de la libertad que afirman haber sido miembros de alguna pandilla

	Frecuencia	Porcentaje
No ha sido miembro de pandillas	115	63.9%
Sí ha sido miembro de pandillas	49	27.2%
No contestó	16	8.9%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Entre las personas que, si formaron parte de una pandilla durante su infancia y/o adolescencia, el 77.6% de los mismos (38 personas) afirmó haberse unido a este núcleo antes de tener 15 años de edad; el 18.4% (9 personas) lo hizo entre los 16 y los 18 años; solamente una persona indicó que comenzó a formar parte de una pandilla después de haber cumplido los 21 años.

Tabla 4.47

*Edad en la que las personas privadas de la libertad ingresaron a la pandilla a la que pertenecieron**

	Frecuencia	Porcentaje
Menos de 15 años	38	77.6%
Entre 16 y 18 años	9	18.4%
Entre 19 y 21 años	0	0.0%
Más de 21 años	1	2.0%
No contestó	1	2.0%
Total	49	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran las 49 personas que afirmaron haber sido miembros de pandillas.

Es importante indicar que, en ocasiones, estas conductas pueden ser aprendidas de otros miembros del núcleo familiar; en ese sentido, los resultados de la encuesta aplicada indican que solamente el 13.9% de los participantes (25 personas) afirmaron que uno de los miembros de su familia había formado parte de una pandilla con anterioridad. En el caso contrario, 74.4% (134 personas) sostuvieron que ninguno de los integrantes de su familia se ha integrado a una pandilla.

Tabla 4.48

Personas privadas de la libertad que afirman que alguno de sus familiares ha sido miembro de alguna pandilla

	Frecuencia	Porcentaje
No ha sido miembro de pandillas	134	74.4%
Sí ha sido miembro de pandillas	25	13.9%
No contestó	21	11.7%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

4.2.3. Situación académica y escolar durante la infancia

Tal como lo refiere Cerda (2017, 2019, 2020), las condiciones de vida y familiares de las personas privadas de la libertad se caracterizan por la existencia de importantes carencias que limitan sus posibilidades de desarrollo. En estos núcleos existen dificultades económicas, problemas alimenticios y conflictos entre sus integrantes. Estas condiciones no se generan a raíz de la reclusión de uno de los integrantes del núcleo, sino que ya estaban presentes, en una proporción considerable, los internos penitenciarios provienen

de núcleos familiares donde no existe un ambiente propicio para la niñez, debido a las limitaciones anteriormente descritas.

En estos núcleos, la atención de las urgencias familiares y la necesidad de generar ingresos económicos provoca que, en algunos casos, aspectos como la educación de sus integrantes pueda pasar a segundo término. En ese sentido, el 72.8% de las personas privadas de la libertad participantes (131 personas) en el estudio indico que “sí asistió a la escuela” durante su infancia; mientras que el 12.2% (22 personas) señaló que no lo hizo.

Tabla 4.49

Personas privadas de la libertad que durante su infancia asistieron de forma regular a la escuela

	Frecuencia	Porcentaje
No asistió a la escuela	22	12.2%
Sí asistió a la escuela	131	72.8%
No contestó	27	15.0%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

En relación con el ambiente imperante durante su educación, el 65.6% de los internos participantes (118 personas) lo evaluaron de forma positiva; de estas el 20.0% (36 personas) lo consideró “excelente”, 45.6% (82 personas) dijo que era “bueno”. Por otro lado, el 20.0% (36 personas) lo calificó como “regular”; mientras que solamente el 1.1% (2 personas) dijo que era “malo” y 2.8% (5 personas) “muy malo”.

Tabla 4.50

Evaluación de las personas privadas de la libertad respecto al ambiente escolar durante su infancia

	Frecuencia	Porcentaje
Excelente	36	20.0%
Bueno	82	45.6%
Regular	36	20.0%
Malo	2	1.1%
Muy malo	5	2.8%
No contestó	19	10.5%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

De manera general, 7 de cada 10 personas privadas de la libertad encuestadas (69.4%, 125 personas), señalaron que “sí fue apoyado” por su familia para lograr el

cumplimiento cabal de sus compromisos escolares durante su infancia. Mientras que 2 de cada 10 (21.7%, 39 personas) indicaron lo contrario. Además, 8.9% (16 personas) no respondió a este cuestionamiento.

Tabla 4.51

Apoyo familiar para que las personas privadas de la libertad cumplieran sus compromisos escolares

	Frecuencia	Porcentaje
No fue apoyado	39	21.7%
Sí fue apoyado	125	69.4%
No contestó	16	8.9%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Como se mencionó anteriormente, los internos penitenciarios del CERESO Apodaca, provienen de familias donde existían importantes carencias, principalmente de índole financiero, esto limitó las posibilidades del núcleo para brindar el apoyo necesario para que el ahora interno pudiera cumplir sus compromisos escolares. En ese sentido, se encontró que el 35.9% de los internos que mencionaron que no contaron con apoyo familiar (14 personas), éste, no existió por los “problemas económicos” del núcleo; mientras que en 10.3% (4 personas) indicaron que fue por la “ausencia de alguno de los padres”. Además, en 2 casos mencionaron que la razón fue por “problemas de salud de algún integrante”; mientras que en otros 2 casos argumentaron “varias razones” y en un caso más dijeron “otras razones”.

Tabla 4.52

*Razones por las que las personas privadas de la libertad afirman que no han podido recibir apoyo de su familia para cumplir sus compromisos escolares**

	Frecuencia	Porcentaje
Problemas económicos	14	35.9%
Ausencia de alguno de los padres	4	10.3%
Problema de salud de algún integrante	2	5.1%
Varias razones	2	5.2%
Otras razones	1	2.6%
No les importaba mucho	0	0.0%
No contestó	16	41.0%
Total	39	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 39 personas que afirmaron no recibir apoyo de su familia.

Además de las carencias imperantes en su núcleo familiar, 2 de cada 10 personas privadas de la libertad participantes en este estudio (22.2%, 40 personas) sostuvieron que recibieron agresiones durante su infancia en su etapa educativa. Por otro lado, el 68.9% (124 personas) indicó que no fue víctima de agresiones; el 8.9% (16 personas) no respondió a este cuestionamiento.

Tabla 4.53

Personas privadas de la libertad que afirmaron haber recibido agresiones durante su estancia en la escuela

	Frecuencia	Porcentaje
No recibieron agresiones	124	68.9%
Sí recibieron agresiones	40	22.2%
No contestó	16	8.9%
Total	180	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019).

Entre las 40 personas que señalaron que sufrieron agresiones durante la etapa escolar de su infancia, el 47.5% (19 personas) afirmó que sus victimarios fueron sus propios compañeros; el 17.5% (7 personas) indicó que fueron varios los agresores; el 12.5% (5 personas) sostuvo que fue violentado por sus maestros; 10.0% (4 personas) recibió maltrato por miembros de pandillas; mientras que un interno dijo que uno de los directivos del plantel escolar fue quien lo agredió.

Tabla 4.54

*Agresor de las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela**

	Frecuencia	Porcentaje
Compañeros	19	47.5%
Varias	7	17.5%
Maestros	5	12.5%
Pandillas	4	10.0%
Directivos	1	2.5%
Otros	0	0.0%
No contestó	2	5.0%
Total	40	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 40 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela.

Entre los tipos de agresiones recibidas por las personas privadas de la libertad durante su etapa educativa, el 40.0% (16 personas) indicó que fue víctima de varios tipos de agresiones (física, verbal y psicológica principalmente). Mientras que el 30.0% (12

personas) sufrieron agresiones físicas; 15.0% (6 personas) de forma verbal y 5.0% (2 personas) violencia psicológica.

Tabla 4.55

*Tipo de agresión que sufrieron las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela**

	Frecuencia	Porcentaje
Varias	16	40.0%
Física	12	30.0%
Verbal	6	15.0%
Psicológica	2	5.0%
Otra	1	2.5%
Sexual	0	0.0%
Todas	0	0.0%
No contestó	3	7.5%
Total	40	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 40 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela.

Ante las agresiones recibidas, el 27.5% de las personas privadas de la libertad que afirmaron recibirlas durante su etapa educativa (11 personas) indicaron que reaccionaron o respondieron de “varias formas” (sin especificar cuales). Por otro lado, el 20.0% (8 personas) señaló que “no hizo nada”; 12.5% (5 personas) respondió de manera física a través de golpes; 10.0% (4 personas) lo hizo de manera verbal; misma cantidad que mencionó hacerlo de “otras formas”; además 7.5% (3 personas) señaló que dio “aviso a las autoridades escolares”.

Tabla 4.56

*Respuesta de las personas privadas de la libertad a las agresiones recibidas mientras se encontraban en la escuela**

	Frecuencia	Porcentaje
Varias formas	11	27.5%
No hice nada	8	20.0%
Respondí con golpes	5	12.5%
Respondí con agresiones verbales	4	10.0%
Otra forma	4	10.0%
Avisé a las autoridades escolares	3	7.5%
Le pedí ayuda a otros compañeros	1	2.5%
Solicité ayuda a la familia	1	2.5%
No contestó	3	7.5%
Total	40	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 40 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela.

De las personas que fueron víctimas de agresiones mientras se encontraban en la escuela, el 57.5% de estas (23 personas) no recibieron apoyo de las autoridades. Solamente el 25.0% (10 personas) indicaron que sí contaron con esta ayuda. Además, 7 personas (17.5%) no respondieron a este cuestionamiento.

Tabla 4.57

*Personas privadas de la libertad que mientras se encontraban en la escuela recibieron apoyo de las autoridades ante las agresiones recibidas**

	Frecuencia	Porcentaje
No recibieron apoyo de las autoridades	23	57.5%
Sí recibieron apoyo de las autoridades	10	25.0%
No contestó	7	17.5%
Total	40	100%

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a 180 personas privadas de la libertad en Centro de Reinserción Social Apodaca (Julio, 2019). *Se consideran solamente las 40 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela.

4.3. Tensiones y conflictos; escasez de recursos humanos y materiales en el ámbito pedagógico; ausencia de presupuestos específicos y capacitación exigua frena proceso educativo en Apodaca.

Sujeta a tensiones y conflictos propios del ambiente carcelario, el proceso educativo en las cárceles de Nuevo León y, concretamente en el penal de Apodaca, opera bajo la carencia de presupuestos específicos destinados al rubro de la educación; a la falta de personal especialista en el ámbito de Pedagogía; a programas y planes educativos poco especializados que se traducen en una exigua eficiencia.

Así lo describen los expertos en el ámbito penitenciario y educativos consultados para el desarrollo del presente trabajo.

En materia de capacitación, señalan, Renace es una de las pocas organizaciones civiles que imparte cursos de capacitación y habilidades a los internos. Las tres empresas maquiladoras que operan dentro del penal, Girsá, Fima y comercializadora textil, también impulsan cursos de capacitación. Sin embargo, las ofertas de capacitación que se brindan responden casi por completo a las necesidades de las tres maquiladoras ahí instaladas. Adicionalmente, se imparten cursos sobre derechos humanos, autoestima y mejoramiento de las relaciones humanas y de familia

Hasta ahora, el INEA, no brinda los recursos o evidencias sobre el desempeño de los internos ni sobre su proceso de alfabetización. Existen casos de personas que aparentemente han certificado sus estudios de primaria o secundaria pero no son capaces de realizar un ejercicio de lectura y escritura. Los cursos educativos y de oficio, no cuentan siempre con el personal capacitado para ofrecerlos; en la mayoría de los casos son impartidos por el personal del INEA o algún interno que labora como monitor; los profesores enviados por la SEP también resultan insuficientes.

Aunque en Apodaca, se desarrollan un promedio de 25 eventos culturales por año, no se tiene un seguimiento exacto del tiempo dedicado por los internos a su formación educativa. Entre las causas que influyen para el abandono educativo está el hecho de que los horarios de trabajo de las empresas ahí operantes suelen empalmarse con aquellos establecidos para la impartición de clases y, el interno, opta por darse de baja en los cursos académicos porque le resulta mayormente apremiante la obtención de ingresos de su trabajo en las maquiladoras.

A esto, debe añadirse que las actividades académicas en el penal de Apodaca no consideran la realidad temporal de esta comunidad, por lo cual su desarrollo es limitado. No se reconocen ahí, por ejemplo, modelos educativos que consideren la relación vinculante con la temporalidad de la ejecución de la sentencia de los internos en su proceso, ni tampoco el contexto en el cual viven los participantes o su procedencia sociocultural, familiar y económica.

La educación, en Apodaca, se desarrolla en base a la capacidad autodidacta de los internos. Ellos reciben un texto y luego le son aplicados exámenes en los cuales se espera que demuestren su aprendizaje.

Si bien es cierto que los funcionarios del penal dan lo mejor de sí para que los procesos educativos no se interrumpan al interno del centro penitenciario, es un hecho que, en mucho, la competitividad laboral en el mundo libre es elevada y, hasta ahora, la educación ofrecida dentro del penal está por debajo de los estándares que reclama el mercado externo.

Entre los limitantes que frenan los procesos de educación en el penal están la situación de inseguridad; el autogobierno y la falta de recursos materiales y humanos enfocados al tema educativo.

A lo anterior se suma el hecho de que la valoración de la educación está subestimada y se subordina a la pretensión de responder al mercado laboral y en su contexto, a la obtención de beneficios jurídicos, pero no necesariamente al desarrollo armónico de las personas.

A continuación, se describen las entrevistas realizadas sobre este ámbito.

4.3.1. La importancia de la educación en la administración penitenciaria (Entrevista con Lic. Alejandro Balderrama Avitia, Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del estado de Nuevo León)

La educación es uno de los ejes torales para lograr que el proceso de reinserción social se lleve a cabo de forma efectiva. Para las personas privadas de la libertad integrarse a actividades educativas y académicas les permite ampliar su panorama de oportunidades para que, al regresar a la vida en convivencia social, estos tengan mayores posibilidades de reintegrarse y de acceder a mejores empleos.

Por tal motivo, desde la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León se realiza la gestión permanente con instituciones públicas y privadas para brindarle servicios básicos de educación a los internos de los penales de la entidad. Desde el punto de vista del Lic. Alejandro Balderrama Avitia, Director Jurídico de la institución antes citada, permite dar cumplimiento a lo establecido en la legislación mexicana en materia penitenciaria.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se realizan actualmente, existen importantes carencias que inciden de forma negativa en los programas académicos que se desarrollan dentro de los centros de reinserción social del estado de Nuevo León. Balderrama afirma que uno de los principales problemas es que “no hay un presupuesto específico para tema educativo” por lo que las autoridades de cada institución penitenciaria “se encargan, en la mayoría de los supuestos, de pagar esos propios maestros, insumos y material educativo”. La falta de un fundamento financiero impide que el departamento educativo presente una falta de abastecimiento general.

Además de las carencias económicas, existen dificultades metodológicas que limitan el alcance de las actividades educativas que se realizan dentro de los centros penitenciarios; en el caso específico del Centro de Reinserción Social Apodaca, la falta de personal especializado en pedagogía provoca que los planes o programas educativos resulten poco eficaces. Al respecto, Balderrama sostiene que esto se debe a que la administración del penal no es “un área experta en programa educativos” pero que, sin embargo, deben plantear “opciones educativas que resulten útiles para los esquemas sociales actuales”.

La integración de las personas privadas de la libertad a actividades educativas, además de reducir la brecha educativa existente entre los internos, caracterizados en general por contar solamente con educación del nivel básico, les permite acceder a beneficios dentro de su proceso de reinserción social. En ese sentido, el funcionario sostiene que participar en cursos o programas académicos les permite a los internos acceder a “beneficios de preliberaciones”.

Este beneficio, sostiene Balderrama, representa “el principal incentivo” ya que les permite “obtener su libertad con anticipación”. Este aspecto resulta sumamente importante considerando que, dentro de los centros de reinserción social, el aspecto educativo no es de participación forzosa y se da por “la voluntad del propio interno”. Por lo tanto, la promoción de las actividades educativas dentro del CERESO Apodaca, se fundamenta en la obtención del “beneficio de preliberaciones”.

Actualmente, dentro del CERESO Apodaca, las actividades educativas se realizan con apoyo de instituciones educativas y universitarias externas. Y, aunque no conoce con precisión la cantidad de personas que se encuentran integradas a los cursos que se ofertan dentro de la institución, Balderrama, afirma que la educación que se le brinda a las personas privadas de la libertad les proveerá las herramientas necesarias para desempeñar un oficio cuando recuperen su libertad.

En ese sentido, el Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria afirma que el “esquema de educación básica incide en ser beneficioso para ellos dentro de cualquier oficio”. Sin embargo, considera que, dentro del CERESO Apodaca, los

programas educativos deben “estar más enfocados al tema de los oficios”; por lo que es fundamental la “capacitación para el trabajo” dentro de la institución.

Dentro de este contexto, las opciones educativas enfocadas a la capacitación laboral que se realizan dentro del CERESO Apodaca, “son cursos que la institución RENACE ha ofrecido”; esta institución estableció “una unidad que se instaló en los laboratorios de cómputo” donde imparten cursos de más de 20 temas; entre estos, Balderrama, destaca que “la mayoría de ellos son de computación y el resto son de desarrollo de habilidades”. En este mismo aspecto el funcionario destaca la participación de las “tres empresas grandes” que operan dentro del penal y que realizan actividades de capacitación al personal.

Por otro lado, Balderrama es tajante al señalar que las posibilidades de acceder a una oportunidad laboral bien remunerada cuando los internos recuperen su libertad no dependen solamente de la educación que se les pueda brindar dentro del centro penitenciario; estas pueden variar de acuerdo “a la oferta laboral que existe ahí afuera” y en ocasiones no está ligada “con la capacidad académica o los estudios de una persona”.

Aun cuando no es el único factor que puede ayudar a las personas privadas de la libertad para acceder a mejores oportunidades laborales, Balderrama, afirma que dentro del CERESO Apodaca existe educación en los tres niveles de primaria, secundaria y preparatoria. Para lograr contar con una oferta de este tipo, sostiene que existe participación de ONG y voluntarios que imparten cursos y/o talleres que apoyan la formación de las personas privadas de la libertad; sin embargo, desconoce los temas que se imparten.

Asimismo, además de la educación de nivel básico y medio superior, dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, se imparten cursos enfocados al conocimiento de los derechos humanos, al desarrollo de la autoestima y al mejoramiento de las relaciones interpersonales y familiares de las personas privadas de la libertad, todas estas, tal como lo establece Balderrama, son realizadas por instituciones externas al CERESO.

Como complemento y para ayudar a que la transición de la privación de la libertad a la vida en convivencia no resulte tan violenta para los internos, se ofrecen dentro del CERESO programas que apoyan a la persona para reintegrarse a su núcleo familiar. En

ese sentido, Balderrama resalta que “la reinserción social abarca tanto etapas de internamiento como de externas”, por lo que para lograr este objetivo se cuenta con la participación de “organizaciones que inciden en todos los rubros de la reinserción social”.

Además de estas actividades enfocadas a que el interno se reintegre a su familia y a su comunidad, dentro del CERESO Apodaca, en materia de acceso a la cultura, “hay talleres de toda naturaleza”. Balderrama afirma que en esta institución existen programas de “teatro... artísticas relacionadas con el teatro y la música... fomento de la lectura... concursos de literatura, cuento, poesía”. Estas, de manera general, son apoyadas por instancias externas y se realizan de manera permanente a lo largo del año.

En el ámbito deportivo, Balderrama sostiene que “es una situación ganar-ganar, porque incide en la salud del centro, del propio interno, en sus sistemas de autoestima, de su tiempo debidamente aplicado”. Por este motivo, en lo que respecta a las actividades deportivas, en el CERESO Apodaca existen “actividades deportivas de forma permanente”, así como “torneos organizados por el propio centro y por ligar en el exterior”.

Desde el punto de vista de Balderrama, la educación es un aspecto sumamente importante dentro del proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca; sin embargo, las limitantes existentes inciden de forma directa en que no exista una oferta que permita cumplir de manera clara con lo establecido en la legislación nacional en materia penitenciaria. Para los internos, desde el punto de vista del funcionario, el beneficio mayor de la integración a estas actividades se centra en la posibilidad de acceder a la preliberación y desarrollar capacidades y habilidades en el ámbito laboral.

A continuación, se presentan de manera íntegra las respuestas emitidas por el Lic. Alejandro Balderrama Avitia, Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del estado de Nuevo León sobre la situación educativa y académica de las personas privadas de la libertad y de los programas educativos existentes dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca.

Emma Cerda Pérez [ECP]: ¿Cuáles son las acciones del Estado para garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de la libertad en el Cereso Apodaca?

Alejandro Balderrama Avitia [ABA]: “Bueno en todos los centros penitenciarios en particular, se tienen que hacer gestiones ante las instancias educativas públicas y privadas para poder brindar los servicios básicos de educación, la ley nacional actualmente marca un esquema de corresponsabilidad con la Secretaría de Educación, bajo el contexto de una comisión intersecretarial, esta comisión intersecretarial ya se integró en el estado Nuevo León, en particular; estamos en etapas preliminares de la integración de convenios específicos sobre la materia con la Secretaría de Educación. En la actualidad existen programas tanto con instancias federales como con locales, en el ámbito educativo al igual que con las universidades y escuelas autónomas o privadas”.

[ECP]: ¿Cuál es el presupuesto anual que se destina para la educación en el penal de Apodaca y cómo se distribuye?

[ABA]: “No hay un presupuesto específico para el tema educativo hay presupuesto para el pago de nóminas de funcionarios que pudieran estar destinados a incidir en el sistema educativo y son las propias autoridades o instancias quienes brindan el esquema educativo dentro del centro quienes se encargan en la mayoría de los supuestos de pagar esos propios maestros insumos y material educativo”.

[ECP]: ¿Considera usted que el currículum informativo que se desarrolla en los procesos educativos en la institución penitenciaria del CERESO de Apodaca es el indicado de acuerdo a las necesidades que a futuro tendrá el interno en su proceso de reinserción social, laboral y familiar? ¿Por qué?

[ABA]: “La mayoría de las necesidades que tienen en el aspecto educativo las personas privadas de la libertad se dan dentro de los esquemas básicos y seguimos la línea que han marcado dichos programas educativos; no somos un área experta en programas educativos en sí mismo, probablemente cuando estos van enfocados a un esquema que también les brinden herramientas para cuestiones laborales o técnica hacia el exterior, es donde sí debemos tener cierto cuidado en que sean opciones educativas que le resulten útiles para los esquemas sociales actuales y que los represente, pero definitivamente que es importante analizarlo pero los

esquemas básicos que son, más nos guiamos por los programas del propio sector público educativo”.

[ECP]: ¿Ofrece el sistema penitenciario algún incentivo a las personas privadas de la libertad para iniciar estudios durante el encarcelamiento y cuáles son?

[ABA]: “El incentivo principal no es el que ofrece el sistema penitenciario, es el que se les otorga a las propias personas privadas de la libertad al momento de la solicitud de beneficios preliberacionales; como para el otorgamiento de los mismos se tiene que hacer un análisis de su participación en los esquemas de reinserción dentro de los centros, el principal incentivo de ellos precisamente obtener su libertad con anticipación y como los esquemas educativos no son forzosos en la actualidad, sino parte de la voluntad de la propia personas privadas de la libertad de participar. El incentivo del sistema penitenciario significa tener la disponibilidad de los programas educativos pero las personas privadas de la libertad, es la que tiene que voluntariamente participar en él y para su beneficio posterior, en un beneficio preliberacional, pero ese es el principal incentivo y más que por la autoridad penitenciaria es el esquema legal el que incentiva su participación”.

[ECP]: En la currícula educativa de las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca, se encuentra la educación en derechos humanos como parte de la instrucción pedagógica de las personas privadas de la libertad de esta institución ¿La impartición estos cursos está cargo de personal del CNDH o de otra institución?

[ABA]: “Hasta donde tengo entendido los programas en materia de derechos humanos los brindan más bien instituciones privadas, si dentro de los esquemas básicos de educación, tengo entendido que en la currícula se menciona el tema. Pero como una educación específica o particular sobre la materia principalmente lo dan las organizaciones de la sociedad civil”.

[ECP]: En el CERESO Apodaca ¿Cuántos internos actualmente reciben instrucción de primaria, secundaria, preparatoria, técnica o profesional?

[ABA]: “Ahorita no le traigo el dato, pero con mucho gusto se lo podemos dar posteriormente, se lo pide al profe”.

[ECP]: Estima usted que la educación recibida en esta institución les otorgue a las personas privadas de la libertad las herramientas necesarias para desarrollarse en algún oficio una vez que se obtenga su libertad?

[ABA]: “Sí al fin y al cabo aun cuando sea un esquema de educación básica incide en ser beneficioso para ellos dentro de cualquier oficio. Lo que pasa es que el esquema que está más enfocado al tema de los oficios es el laboral y de capacitación para el trabajo, si usted quiere visualizarlo con el educativo contemplando también ese aspecto entonces definitivamente que sí, sí le es beneficioso”.

[ECP]: De acuerdo al nivel educativo que obtienen las personas privadas de la libertad que estudian en el CERESO Apodaca ¿Cree usted les posibilite a los internos acceder a puestos de labor o salarios dignos una vez que sean liberados y se desarrollen en el ámbito laboral?

[ABA]: “Lo que pasa es que esta problemática no es exclusiva de un centro penitenciario, depende de la oferta laboral que existe ahí afuera, a veces está no va a la par con la capacidad académica o los estudios de una persona, la disponibilidad de puestos de trabajo dignos tiene que ver más con factores económicos, que con factores propios de del centro, pero yo creo que depende en gran medida de las opciones laborales que encuentren al salir”.

[ECP]: De acuerdo a las nuevas normativas en el ámbito de la educación obligatoria se han incluido los niveles formativos de primaria, secundaria y el estudio de preparatoria ¿En el CERESO Apodaca se imparten actualmente estos tres niveles educativos?

[ABA]: “Sí, tal cual”.

[ECP]: En este centro penitenciario ¿Existe alguna ONG o voluntariado que a través de cursos y/o talleres apoyen en la formación o fortalecimiento de valores de las personas privadas de la libertad? De ser así ¿Cuáles son los talleres o cursos que se imparten al interior del penal?

[ABA]: “Sí, hay los nombres específicos de los talleres no se lo sabría decir de igual manera se los puedo Moisés lo debe tener, pero si hay eso está talleres”.

[ECP]: En educación integral en el centro de Apodaca ¿Se imparten cursos que apoyen a los internos a complementarse su instrucción? Y ¿Algunos de estos cursos atienden el desarrollo de la autoestima de lo del interno, apoyándolo para mejorar las relaciones interpersonales al interior de la institución y de sus relaciones familiares?

[ABA]: “Claro uno de ellos es el de la doctora Ramírez, Lucero la abogada el de ‘Justicia Restaurativa’ es para la mejora de relaciones interpersonales con la familia”.

[ECP]: En esta institución ¿Existe algún taller o curso específico para apoyar al interno a la reinserción social y familiar una vez que cumpla su condena? ¿Existe algún tipo de participación por parte de la sociedad civil en los temas de reinserción social?

[ABA]: “Bueno la reinserción social abarca tanto etapas de internamiento como de externación; en externación hay un programa de servicios postpenales, donde se les canaliza a programas públicos, es un proyecto en etapas preliminares y hay participación exclusivamente de instancias del sector público; sin embargo la norma te habla de la posibilidad de presentarlo a organizaciones de la sociedad civil, hacia el interior de los centros definitivamente si hay presencia y participación de las organizaciones, estamos hablando de más de 120 organizaciones que inciden en todos los rubros de la reinserción social”.

[ECP]: Uno de los ejes de la reinserción social es la capacitación laboral sobre este rubro ¿Cuál es la propuesta de cursos de capacitación laboral que ofrecen en el CERESO Apodaca?

[ABA]: “Prácticamente son cursos que la institución RENACE, nos ha ofrecido dentro de una unidad que se instaló en los laboratorios de cómputo y son 20 temas, la mayoría de ellos son de computación y el resto son de desarrollo de habilidades, también cada empresa tenemos tres empresas grandes y cada una de ellas capacita a su personal en diferentes rubros también, que son GIRSA, FIMA y la comercializadora textil. Le iba a mandar los temas en específico por correo”.

[ECP]: ¿Cuáles son los oficios o profesiones con las egresan las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca una vez que concluyan su sentencia?

[ABA]: “Pues es que son más que todo oficios en los sistemas, en los temas específicos, por desgracia. Si había esquemas donde se les daba ciertos esquemas de capacitación para actividades específicas, muchos de ellos con el ISSSTE, otros con la Secretaría de Trabajo, específicamente, es un tema complicado porque ya no hemos logrado que haya apoyo en el insumo para el desarrollo de los cursos y eso ha limitado un poquito la participación con escuelas técnicas y con instancias públicas que brindaban esos cursos en el pasado; entonces tenemos nuestro acceso pero en Apodaca puede ser que no sea el caso, pero tenemos empleos de cursos de montacarguista, de barbería, arreglo de refrigeración, de arreglo de equipos de cómputo, en algunos de los otros centros penitenciarios y aparte de aquellos propios en la actividad que tienen las maquiladoras que están hasta el interior del centro”.

[ECP]: Para el desarrollo cultural de los internos del CERESO Apodaca ¿Con cuáles cursos o servicio se cuenta en esta institución y cuál es el de mayor demanda?

[ABA]: “En actividades culturales en la mayoría de los centros, tenemos presencia de la instancia pública de cultura, hay talleres de toda naturaleza, del desarrollo de habilidades artísticas y plásticas, hay desde algunos ejemplos, en Apodaca en el ámbito del teatro, de actividades artísticas relacionadas con el teatro, con la música, en todos los centros tenemos la presencia de algún grupo musical, también en el fomento de la lectura, hay concursos nacionales y locales de literatura, de cuento, de poesía, hay muchísimos ejemplos de diversas instancias que brinda estos cursos de manera permanente y también el sector público, tiene presencia desde las desde jóvenes infractores están los adultos privados de la libertad”.

[ECP]: Respecto al deporte que es otro de los ejes de la reinserción social ¿En esa institución existen programas deportivos que apoyen en el cumplimiento de ese rubro de la reinserción social penitenciaria? ¿Qué actividades deportivas? ¿En qué esquema se llevan a cabo dentro del penal? ¿Hay un responsable? ¿Cómo operan? ¿Cómo influye esto en la reinserción social de los internos?

[ABA]: “Bueno pues en el esquema social deportivo si hay un responsable en el centro, si fluye desde la perspectiva de desarrollo personal, así como el esquema

de salud, en su esquema de salud definitivamente, hay actividades deportivas organizadas como el fisiculturismo, hay torneos de fútbol, hay torneos en ocasiones de otras disciplinas, hay actividades deportivas de manera permanente, hay box, recientemente se desarrolló un torneo Inter carcelario, también hay la presencia de distintos espacios de béisbol, de softbol, de voleibol, de básquetbol, de fútbol, hay torneos organizados por el propio centro, por ligas en el exterior, por ejemplo fútbol americano, en el fútbol soccer, participamos en ligas hacia el exterior”.

“El deporte es una situación ganar-ganar, porque incide en la salud del centro de la propia persona privada de la libertad, en sus sistemas de autoestima, de su tiempo debidamente aplicado”.

[ECP]: Respecto a los insumos escolares ¿Existe suficiente abastecimiento de libros y artículos escolares necesarios para el desempeño de los educandos de esta institución?

[ABA]: “Pues no, le voy a decir que no, de manera muy general, aunque hay casos de excepción, pero no tenemos los números ideales ni mucho menos, no existe como tal”.

[ECP]: ¿Existen algunos programas de apoyo por parte del gobierno actual para las familias de las personas privadas de la libertad y de ser así en qué consisten los programas o apoyos que se brindan a los familiares?

[ABA]: “Está el programa permanente de familias con futuro, es de desarrollo social ellos los canalizan a los programas existentes de dicha dependencia entre los que destacan “Jefas madres de familia”, está también apoyo para temas de los oídos, aparato auditivo, también en temas visuales, en temas alimenticios programas ‘Hambre Cero’, se les canalizar esos y actualmente está próximo generarte un esquema de becas para hijos de personas privadas de la libertad por parte de la Secretaría de educación y la dirección estatal de becas”.

[ECP]: El encarcelamiento de uno de los miembros de la familia madre o padre es un aspecto que impacta de forma negativa a toda la familia ¿Considera usted que este hecho quebranta las expectativas académicas de los hijos o hijas de la interno?

[ABA]: “Sí yo creo que sí, definitivamente, que el impacto del privado de la libertad trasciende a su familia y a sus esquemas de vida en general, no nada más el aspecto educativo y como tal si se ven mermados; definitivamente creo que es una carga adicional a la que tenían antes de que la persona privada de la libertad este no existía en ese momento con todas sus complicaciones”.

[ECP]: En la encuesta aplicada a los familiares de internos en el penal de Apodaca, se detecta que el nivel académico tanto del interno como de sus familiares es un nivel de estudios básicos ¿Cree usted que el bajo nivel educativo sea un factor que limite la obtención de mejores oportunidades en el aspecto laboral?

[ABA]: “Sin duda, definitivamente que sí; no significa que todas las oportunidades las mejores oportunidades están necesariamente relacionadas con el desarrollo de una profesión, pero sin duda alguna tiene que ver con su desarrollo personal y su capacidad intelectual, es incide en todos los rubros aún y cuando no sea un aspecto profesional el que desarrolle, ahí es donde yo encuentro que está la limitante, porque no necesariamente las funciones mejores remunerados son las profesionales, sin embargo tradicionalmente así ha acontecido, pero tiene que ver más con el desarrollo intelectual de la persona y sus capacidad de administrarse de gestionarse lo que pudiera incidir con la falta de educación”.

[ECP]: Considerando que el hecho del encarcelamiento de uno de los jefes de familia, madre o padre provoca los impactos psicológicos, económicos y sociales que vive a su interior la familia de los internos. ¿Cree usted que el desarrollo del módulo de atención psicológica y académica, dentro de los penales, enfocados al apoyo de las familias de las personas privadas de la libertad servirá de soporte para sobrellevar mejor el proceso de encarcelamiento de su familiar y fortalecería por otra parte el proceso de reinserción familiar del interno o interna una vez que esté de regreso al ámbito familiar? ¿Por qué?

[ABA]: “De qué sería importante que recibieran ese apoyo si, lo único que me daría incertidumbre, es el hecho que tenga que ser hacia el centro penitenciario, yo creo que, si debe existir ese apoyo, esta cercanía con las familias, porque también he dicho que ellos están siendo atendidas, definitivamente que influyen el esquema

de inserción de la propia persona privada de la libertad, pero yo no sé desde mi punto de vista, porque no soy un profesional de la materia”.

“Desde el punto de vista de sus esquemas psicológicos y atención psicológica, que tan conveniente será que, dentro del propio recinto penitenciario, con todas las carencias de infraestructura que estos tienen, lo que representaría como una carga adicional a los sistemas penitenciarios, esa sería mi única inquietud. Que sería importante que si se diera es atención claro que sí que incidiría de manera positiva, por supuesto que sí, lo único que me generaría incertidumbre es qué tan conveniente sería que fuera hacia el interior del centro y no en algún esquema hacia el exterior, estructura que tiene todo el gobierno y todo el estado en el exterior, para poder brindar esos servicios, pero de qué hace falta algo así para fortalecer a las familias de las propias personas privadas de la libertad si hace falta”.

[ECP]: Dentro del ámbito de la reinserción social ¿considera usted importante el apoyo que la familia puede dar al interno tanto durante su periodo de reclusión como su posterior liberación?

[ABA]: “Muy importante, es la más importante; ellos añoran el contacto con sus familias, ellos, las personas privadas de la libertad añoran tener esa cercanía con su familia y es fundamental para evitar la reincidencia, que sean bien recibidos por estos cuando salgan, porque él encarcelamiento en sí mismo es un factor de separación de las familias en algunos casos, ya sea porque fueron víctimas de lo propias personas privadas de la libertad o porque sufrieron las consecuencias del encierro de la personas privadas de la libertad y hay cierto rechazo a que regresen; definitivamente la familia es un factor mucho muy relevante para que estos logren su proceso de reinserción, probablemente es fundamental”.

4.3.2. Educación, cultura y deporte: Un camino hacia la reinserción social (Entrevista con Radamés Tovar Velázquez, coordinador del área de Educación, Cultura y Deporte)

En el Centro de Reinserción Social Apodaca, ubicado en la parte Norte del estado de Nuevo León, se desarrollan varios programas educativos y de capacitación para el

trabajo que, al finalizar su condena, permitirán que la persona privada de la libertad pueda reintegrarse a la sociedad con mayores posibilidades de éxito. En promedio, dentro del departamento de educación, cultura y deporte del CERESO se atienden a 96 personas de manera diaria en los distintos cursos que, en lo general, son llevados a cabo por instructores del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos existentes en materia educativa dentro del CERESO Apodaca, el Coordinador del área de Educación, Cultura y Deporte, Radamés Tovar Velázquez, considera que si bien ha existido un avance en el aspecto académico de los internos, no existen indicadores específicos que permitan medir el grado de avance que han tenido las personas privadas de la libertad; Tovar asegura que el INEA no brinda recursos o evidencias sobre el desempeño de los internos ni sobre su proceso de alfabetización.

Al ser entrevistado durante el año 2017, Tovar mencionó que de manera mensual se realiza un censo entre la población penitenciaria del CERESO Apodaca y de su participación en actividades educativas. Sin embargo, al no contar con colaboración de información específica, no se puede realizar una evaluación fidedigna de la efectividad de los programas educativos en este penal; inclusive, Tovar sostiene que dentro de este penal existen casos de personas que aparentemente han certificado sus estudios pero que aún no son capaces de realizar un ejercicio de lectura y escritura.

De forma coincidente, Tovar sostiene que el principal beneficio de obtener un certificado de primaria o secundaria (o de cualquier otro nivel que se pueda ofrecer), más allá de la preparación académica, es aquél que se relaciona con la evaluación de la posible reducción de condena por el juez; incentivo que considera como un importante factor de motivación para participar en los programas educativos, inclusive, lo coloca a la par de formar parte de las empresas instaladas en el penal.

Entre las dificultades que Tovar identifica dentro del departamento educativo del CERESO Apodaca se encuentran que los cursos educativos y de oficios que se llevan a cabo para las personas privadas de la libertad, si bien son atractivos y de beneficio para los internos, señaló que no se cuenta con el personal capacitado suficiente para

desarrollarlos; en la mayoría de los casos son impartidos por personal de INEA o algún interno que trabaja como monitor (persona privada de la libertad previamente capacitada).

En lo que respecta al personal que labora en el CERESO Apodaca y que se encuentra enfocado a la preparación educativa de las personas privadas de la libertad, Tovar diagnóstica que los profesores enviados por INEA y por la Secretaría de Educación Pública, resulta insuficiente para la atención escolar de los internos. Además, aun cuando se han destinado y acondicionado áreas específicas para estas actividades, como una biblioteca, sala de cómputo y aulas, el personal que trabaja en el CERESO carece de insumos y algunos recursos resultan obsoletos o desactualizados.

Dentro del CERESO Apodaca se ofrecen algunos cursos adicionales para complementar la educación de los internos, entre estos se encuentran programas de inglés y computación; inclusive, algunos internos pueden certificar sus habilidades para el dibujo artístico. En lo que respecta al aspecto de capacitación para el trabajo y oficios, Tovar indicó que estos dependen del departamento laboral puesto que están vinculados con las empresas instaladas dentro del penal; el funcionario señaló que dentro del penal se ofrece la certificación para su de montacargas a los internos que están por terminar su condena.

Dentro del departamento educativo, las personas privadas de la libertad también desarrollan su aspecto humano, emocional y autoestima con la finalidad de que sean capaces de mejorar sus relaciones interpersonales. En ese sentido, Tovar, refirió que RENACE (ONG de la sociedad civil) le brinda a los internos opciones educativas para su desarrollo personal. Este programa, desarrollado y auspiciado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, implica que, de manera periódica, se lleven a cabo conferencias y sesiones de apoyo psicológico para los internos; adicionalmente, se incluyeron textos y libros de autoayuda en el acervo de la biblioteca.

Otra de las dificultades existentes dentro del departamento educativo del CERESO Apodaca se presenta en los insumos y materiales necesarios para desarrollar los distintos cursos que formar parte de la oferta académica del penal; en lo que respecta a libros de texto, Tovar afirmó que estos son abastecidos por el INEA. Por otro lado, el funcionario señaló que una de las principales necesidades del área educativa corresponde a la falta de equipamiento de cómputo, así como obras literarias enfocadas en desarrollo humano.

Aun cuando muestran una amplia disposición para participar en programas educativos, Tovar señala que algunas personas privadas de la libertad toman la decisión de abandonar sus estudios para integrarse de tiempo completo a actividades laborales; esto se debe, entre otras razones, a que los internos ponderan la generación de ingresos económicos para ellos y su familia por encima de su preparación académica. Sin embargo, Tovar, afirma que es necesario una evaluación específica de la deserción escolar dentro del penal.

En cuanto a la cantidad de horas que las personas privadas de la libertad invierten a su preparación académica, Tovar, señaló que no existen datos específicos puesto que cada interno recibe atención de forma personalizada y, para ello, se ponen de acuerdo con el instructor. De esta forma, dentro del CERESO Apodaca, no existe un seguimiento exacto respecto al tiempo dedicado por los reclusos a su formación educativa; asimismo, el funcionario señaló que no existe un registro de la reincidencia delictiva de aquellos internos que pudieron certificar sus estudios dentro del penal.

En la entrevista, Tovar indicó que, para trabajar en el aspecto cultural de las personas privadas de la libertad, se llevan a cabo distintos cursos y talleres enfocados en estas áreas. En el aspecto cultural, los cursos abarcan disciplinar como la literatura, pintura, teatro y danza; mientras que señaló que los eventos culturales, alrededor de 25 anuales, se desarrollan a lo largo del año contando con una participación y numerosa por parte de las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca.

Por otra parte, en el tema deportivo, Tovar afirmó que dentro de esta institución se llevan a cabo actividades para el desarrollo de habilidades y destrezas mentales del individuo, como torneos de ajedrez. Además, respecto a las actividades físicas, se practica fútbol soccer, béisbol, softbol, volibol y box; además, en menor medida se realizan caminatas, trote e *insanity* (*ejercicios aeróbicos y anaeróbicos en intervalos*). El deporte más practicado es el fútbol, actividades en la que los internos han sobresalido en competencias internas y externas.

Para el desarrollo de las actividades educativas que se llevan a cabo dentro del CERESO Apodaca, las autoridades de este centro penitenciario gestionan la integración

de entrenadores del INDE, a través de un programa estatal que abarcará todas las instituciones penales del estado.

A continuación, se reproduce de manera íntegra y textual, la entrevista con el Licenciado Radamés Tovar Velázquez, Coordinador de Educación, Cultura y Deporte del Centro de Reinserción Social “Apodaca”:

Emma Cerda Pérez [ECP]: En materia de educación ¿en este centro penitenciario se tiene un censo de los niveles educativos de los internos?

Radamés Tovar Velázquez [RTV]: “Sí”.

[ECP]: Estos son los resultados al mes de febrero (de 2017), ¿Cuál es el promedio diario de internos asistiendo a clases?

[RTV]: “96 internos semanales”.

[ECP]: ¿Cuál fue el promedio total de internos que participaron en los cursos educativos durante el año anterior?

[RTV]: “Casi la misma cantidad al de este año, 96 internos por semana”.

[ECP]: ¿Cuál es el indicador para medir los avances en el tema de alfabetización en los internos que participan en estos programas?

[RTV]: “No hay, ya que la responsabilidad recae en INEA”.

[ECP]: De obtener un certificado de educación, ¿cuáles serían los beneficios para el interno?

[RTV]: “El juez lo considera como una referencia que ayuda a la reducción de la condena del interno que ha obtenido un certificado de estudios durante su internamiento”.

[ECP]: ¿Ofrece el sistema penitenciario algún incentivo para iniciar estudios durante el encarcelamiento?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Se tiene algún programa de educación laboral?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Cuántas de estas personas se encuentran con:

[RTV]: “Con primaria incompleta hay 112 personas. Con secundaria incompleta, 265. En preparatoria incompleta: 206”.

El Lic. Radamés Tovar complementó los datos de nivel de escolaridad con la siguiente tabla

Grado de estudios	Cantidad de personas
Analfabetas	28
Primaria inconclusa	112
Primaria concluida	218
Secundaria inconclusa	265
Refieren haber terminado secundaria	925
Refieren haber terminado preparatoria	87
Preparatoria concluida	206
Profesional inconclusa	38
Concluida	26
Carrera técnica concluida	50

[ECP]: ¿En este centro penitenciario se imparten cursos que apoyen a los internos a complementar sus estudios en su instrucción?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: De ser no, especifique en cuál etapa no y por qué motivo es no.

[RTV]: “No aplica”.

[ECP]: ¿Cuenta con personal especializado para desarrollar los programas educativos en cada etapa?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: Este personal educativo los proporciona:

[RTV]: “La Secretaría de Educación, y a través de recursos propios, ONG, y voluntarios”.

[ECP]: ¿Existen espacios asignados específicamente para la implementación de estos cursos?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Se cuenta con una biblioteca para el apoyo educativo de los internos?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Al término de estos cursos se extienden los certificados que acrediten el termino de cada nivel educativo?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Los cursos de desarrollo de oficios dependen también de su área?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: En caso de contestar afirmativamente ¿cuáles son estos oficios?

[RTV]: “Computación; inglés; certificación de montacargas. (Solo para internos próximos a salir); certificación de dibujo artístico”.

[ECP]: ¿Alguno de estos cursos atiende al desarrollo de la autoestima del interno, para mejorar las relaciones interpersonales al interior de la institución y de sus relaciones familiares?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Existe algún taller específico para apoyar al interno a la reinserción social y familiar?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: ¿Cuántas de estas personas, asistentes a los cursos de oficio, se encuentran activos en los procesos laborales de esta institución?

[RTV]: “Se refirió al área de laboral”.

[ECP]: Al termino de estos cursos ¿se extiende algún certificado de los oficios estudiados?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: En que porcentaje estos oficios son para fortalecer y actualizar el trabajo que ejercían antes de ingresar a este centro penitenciario?

[RTV]: “Esta pregunta se debe contestar directamente desde el área de laboral”.

[ECP]: ¿En qué medida beneficia a los internos que se integran a estos esquemas educativos al momento de ser evaluados para el proceso de preliberación?

[RTV]: “Reducción de condena”.

[ECP]: ¿Cómo se abastece de material didáctico para la instrucción?

[RTV]: “INEA provee los libros de texto y la institución los útiles, aunque a veces los útiles son escasos”.

[ECP]: ¿Cuáles son las principales necesidades en cuanto a equipamiento de esta institución?

[RTV]: “Actualización de equipos computacionales”.

[ECP]: ¿Cuáles son las principales razones de deserción escolar durante el encarcelamiento?

[RTV]: “La causa más recurrente es que el interno busca una fuente de trabajo. Al abrirse vacantes en las empresas que operan dentro del penal, el interno obtiene el empleo y este da en el mismo horario en que el instructor INEA puede asistir a dar clase. Por lo tanto, el interno se da de baja del programa educativo, en aras de tener un ingreso con que mantenerse dentro del penal y aportar algo a la economía de su familia que está afuera”.

[ECP]: ¿Qué medidas se toman para atraer de nuevo a las personas que han abandonado los estudios dentro del penal?

[RTV]: “Se les da seguimiento por medio de entrevistas para conocer las razones del abandono de sus estudios y ver la posibilidad de reincorporarse. Este procedimiento se hace por ley”.

[ECP]: ¿Cuál es el total de horas que un interno dedica a la educación dentro del penal?

[RTV]: “La cantidad de horas depende de la programación que se acuerde entre el interno y el instructor de INEA”.

[ECP]: ¿Cuál es el presupuesto anual que se destina para la educación en este penal y como se destina?

[RTV]: “Se refirió al departamento de Recursos Financieros”.

[ECP]: ¿En esta institución penal se cuenta con computadoras que cubran las necesidades de la educación en nuevas tecnologías?

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: De todas las personas que han participado y concluido estos procesos educativos a juicio de usted qué porcentaje de reincidencia existe de los internos reinsertados en la sociedad.

[RTV]: “Sí”.

[ECP]: Para el desarrollo cultural, ¿con qué servicios se cuenta?

[RTV]: “Literatura; pintura; teatro; danza; cursos que coadyuven a la cultura”

[ECP]: ¿Cuál de los cursos mencionados, cuentan con una mayor demanda? ¿cuál será el de menor demanda?

[RTV]: “Pintura es el de mayor demanda y en el que se destaca más. Mientras que el de teatro es el de menor demanda por ser nuevo”.

[ECP]: ¿Cuál de los cursos mencionados se destacan a nivel interno y externo en participaciones tales como concursos estatal y nacional?

[RTV]: “En literatura y danza prehispánica”

[ECP]: En el interior de este organismo existen cursos o dinámicas que impulsen a los internos a resaltar los valores cívicos y culturales?

[RTV]: “Sí, se cuenta con los cursos virtuales de RENACE que buscan el desarrollo humano de la persona. Es un curso con módulos no en línea, sino precargados en las computadoras de la sala de cómputo”.

[ECP]: ¿Cuenta con personal especializado para desarrollar los cada uno de estos cursos?

[RTV]: “No”.

[ECP]: ¿Con qué frecuencia durante el año, se realizan actividades culturales organizadas por el departamento encargado de cultura dentro del penal?

[RTV]: “Se realizan veinticinco eventos anuales”.

[ECP]: Para desarrollar las habilidades y destrezas mentales del individuo, ¿existen actualmente cursos sobre juegos de ajedrez?

[RTV]: “No, pero se está trabajando un proyecto con INDE para implementarlo”.

[ECP]: ¿De resolución de crucigramas?

[RTV]: “No”.

[ECP]: ¿Juegos de memoria?

[RTV]: “No”.

[ECP]: ¿Algún otro tipo de actividad?:

[RTV]: “Meditación”

[ECP]: En esta institución que programas deportivos existen:

[RTV]: “Futbol, béisbol, softbol, volibol, box e *insanity*”.

[ECP]: De los deportes mencionados, ¿cuáles de ellos tienen una mayor participación?

[RTV]: “Futbol soccer”.

[ECP]: De todos estos deportes en cuales se han destacados los internos de esta institución en contiendas internas y externas.

[RTV]: Futbol soccer y básquetbol.

[ECP]: ¿Cuenta con personal especializado para desarrollar los programas deportivos?

[RTV]: “No”.

[ECP]: ¿Existe algún programa de entrenamiento físico en el que se reciba el apoyo de la sociedad civil?

[RTV]: “Hay una iniciativa estatal para que los tres penales de Nuevo León cuenten con asesoría de entrenadores del INDE a partir del mes de abril”.

[ECP]: Algunos de estos deportes se han concursado fuera de esta institución.

[RTV]: “No”.

[ECP]: Las competencias se han desarrollado en instituciones similares a estas?

[RTV]: “No”.

[ECP]: De ser así ¿cuáles son las instituciones participantes fuera de las áreas penitenciarias?

[RTV]: “Únicamente el INDE”.

[ECP]: ¿Existen cursos deportivos que ayuden al interno en el manejo de su estrés?

[RTV]: “Sí, el *insanity*”.

4.3.3. Falta de programas institucionales y de planeación educativa: El contexto académico en el CERESO Apodaca (Entrevista con el Pbro. Roberto Ibarra Montes, miembro de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey)

La labor que realiza la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey para apoyar al proceso de reinserción de las personas privadas de la libertad implica su participación en distintas áreas, entre ellas la educativa. En ese sentido, el Padre Roberto Ibarra Montes, miembro de esta organización diagnostica que, en lo que respecta a las actividades académicas, las autoridades del CERESO Apodaca no “consideran la realidad temporal de los participantes” y considera que su “desarrollo es muy limitado”.

Desde el punto de vista de Ibarra, el proceso educativo que se oferta dentro del CERESO Apodaca se sujeta “parcialmente” a las disposiciones establecidas por el INEA. Esto significa que, para el éxito de la preparación de los internos, estos deben desarrollar su capacidad autodidacta y eventualmente, recibir apoyo por instructores de INEA o por otros internos previamente capacitados. Asimismo, el Padre señala que la educación que se ofrece se limita a que el interno recibe libros de texto y, posteriormente, le son aplicados exámenes en los que se espera que demuestre su aprendizaje.

En lo que respecta al aspecto temporal, Ibarra Montes diagnostica que dentro del CERESO Apodaca no existe un análisis del contexto de la realidad de la población penitencia; en este escenario, considera que “no se reconocen modelos en relación con la temporalidad de la ejecución de la sentencia en su proceso, ni el contexto de los participantes”, por lo que afirma es necesario el trabajo coordinado de todos los departamentos de la institución y de un proceso individualizado de enseñanza.

Una de las carencias más importantes en materia educativa dentro del CERESO Apodaca es la falta de una planeación educativa bien fundamentada; Ibarra sostiene que

“no hay una propuesta de planeación organizacional para la promoción de la reinserción social” ni “un plan de trabajo que guíe la propuesta de servicios que se pueden ofertar”. Además, señala que no existen alternativas de educación más allá del nivel básico, principalmente, debido a la falta de recursos humanos y materiales y de la falta de interés de los internos.

Por otro lado, Ibarra señala que la oferta educativa presente en esta institución penitenciaria resulta insuficiente para que las personas privadas de la libertad puedan adquirir y desarrollar las habilidades que les permitan desarrollarse de forma laboral una vez que recuperen su libertad; al respecto considera que “actualmente la competitividad en el campo laboral... es muy elevada” por lo que la educación ofrecida dentro del penal está por debajo de los estándares que demanda el mercado laboral.

En este contexto, Ibarra afirma que la limitante de solo contar con educación básica (primaria y secundaria) dentro del penal es un aspecto que, al recuperar la libertad, puede posicionar a los internos en una posición de discriminación y exclusión social. Por tal motivo, sostiene que es necesario el desarrollo de alternativas educativas que permitan que los internos, al volver a la vida social, puedan responder con competitividad; sin embargo, actualmente la educación “está subestimada y subordinada a responder al mercado laboral y a beneficios jurídicos” sentenció el Padre Roberto.

El modelo educativo desarrollado por INEA implica la participación de internos que, previa capacitación, toman la responsabilidad de ser quienes apoyan académicamente a sus compañeros reclusos; en ese sentido, Ibarra afirma que esta labor no es la adecuada y que, inclusive, se han presentado casos en los que se han conocidos personas privadas de la libertad que a pesar de “haber acreditado primaria o secundaria, según sea el caso, ya en el ejercicio de su vida, manifiestan limitaciones, por ejemplo, para leer y/o escribir”.

Además de los aspectos antes señalados, Ibarra sostiene que dentro del CERESO Apodaca existen condiciones que limitan el desarrollo de programas educativos de forma exitosa; entre estos destaca “la situación de inseguridad, autogobierno y la limitante de recursos”, estos factores “hacen imposible el establecimiento de metodologías o planes de trabajo”.

Otro de los puntos de atención urgente identificados por el Padre Roberto es la falta de validez oficial de la oferta educativa existente en el CERESO; factor que provoca el poco interés de las personas privadas de la libertad. Además, sostiene que la capacitación para el trabajo se limita de forma exclusiva a las actividades realizadas en las maquiladoras instaladas en el penal, actividades en las que, desde su punto de vista, es poca la posibilidad de que sigan desempeñándose en las mismas una vez que recuperen la libertad.

Finalmente, Ibarra Montes sostiene que para establecer un plan educativo apropiado para las personas privadas de la libertad es necesaria la participación y “una multiplicidad de esfuerzos y, además de una meta y objetivo” en el que se cuente con la participación de diversas instituciones educativas. A continuación, se reproduce de manera íntegra la entrevista realizada al Pbro. Roberto Ibarra Montes, miembros de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey.

Emma Cerda Pérez [ECP]: ¿Considera usted que el currículo que se desarrolla en los procesos educativos del CERESO Apodaca es el indicado de acuerdo a las necesidades del desarrollo educativo de los internos de esta institución penitenciaria?

Padre Roberto Ibarra Montes [RIM]: “Parcialmente, apegado a que el desarrollo es muy limitado. Desde la experiencia contada por las personas privadas de la libertad la educación básica (primaria y secundaria) se ofrece en el centro penitenciario se sujeta parcialmente a las disposiciones del modelo del INEA, esto se centra en la capacidad autodidacta de los interesados auxiliados ocasionalmente por otras personas privadas de la libertad con preparación académica; el proceso “pedagógico” que se sigue, a ejemplo, es el siguiente: el interesado accede en la promoción de los servicios ofrecidos por el personal técnico, el participante recibe la “dotación” de libros y posteriormente se le aplican con eventualidad exámenes que evidencien su aprendizaje, durante su aprendizaje los participantes tienen la oportunidad de recibir apoyo de enseñanza por parte de otras personas privadas de la libertad que colaboran en el “sistema” de enseñanza”.

“Además, no se considera la realidad temporal de los participantes: si bien es cierto se ofrecen con gran esfuerzo los servicios educativos a nivel básico no se

contextualiza en relación a la realidad de la población penitenciaria, puesto que no se reconocen modelos en relación a la temporalidad de la ejecución de la sentencia en su proceso, ni el contexto socio-económico-cultural de los participantes, así como el delito (esto no con el fin de hacer distinción discriminatoria, sino como base para adecuar el modelo educativo); la necesidad de los datos anteriores exigen una trabajo coordinado con las demás departamentos del centro penitenciario, exigiendo un proceso individualizado de enseñanza”.

“No hay ofertas posteriores a la educación básica: esto puede responder a una diversidad de razones, entre ellas pueden estar, la escasez de recursos humanos y materiales para ello, la ausencia de espacios y organización de actividades de las personas, así como la falta de interés de las personas privadas de la libertad; partiendo del supuesto de la falta de interés se puede concluir que las ofertas de educación no cubren las necesidades de los participantes puesto que no estimula el despertar de su interés (es importante que las personas privadas de la libertad valoren, en su contexto de reinserción, la educación no sólo como un medio para tener logros laborales sino como medio de desarrollo personal). A mi juicio, considero que cuando se tiene una grata experiencia de aprendizaje, porque tal responde a mi realidad personal, se despierta el deseo de aprender y seguir preparándose”.

“No existe de hecho ejes rectores de planeación educativa en el contexto de reinserción: no hay una propuesta de planeación organizacional para la promoción de la reinserción social, esto para poder ‘hermanar’ un plan de trabajo que guíe las propuestas de servicios que se pueden ofertar para el plan de actividades de las personas privadas de la libertad; esto fomentaría que se ofrecieran modelos educativos desde la perspectiva de reinserción social y no sólo de reclusión, respondiendo así a las necesidades de los participantes”.

[ECP]: ¿Cree usted que el aprendizaje recibido en esta institución les otorga las herramientas necesarias para desarrollarse una vez que se encuentren en libertad?

[RIM]: “No relativamente. El esfuerzo del comité técnico, en el departamento de arte, cultura y deporte hace el gran esfuerzo de ofertar los medios de educación

que están a su alcance, quedando a la libertad de interés y de partición voluntaria de las personas privadas de la libertad; se ofertan servicios educativos sin considerar la situación de internamiento (proceso de ejecución de sentencia de los participantes). Las ofertas de educación se limitan a los cursos y reconocimientos de educación básica (primaria y secundaria) desde un modelo que en el contexto privativo de la libertad muestra muchas deficiencias.

Es limitada la oferta educativa a nivel básica (primaria y secundaria): actualmente la competitividad en el campo laboral, en el ordinario social, es muy elevada por tanto una persona que sólo cuenta con la preparación básica, con un modelo como el del INEA y bajo el contexto en el que se oferta, las personas cuando son liberadas son poco competitivas bajo los estándares que demanda el mercado laboral.

Las personas que son liberadas/externadas de los centros penitenciarios se enfrentan a grandes retos de discriminación y exclusión social: es por tanto que no sólo tendrían que tener una preparación básica, sino dotarlos de cualidades y herramientas que les sirvan de apoyo para asumir su libertad, no sólo para responder a la competitividad del mercado laboral sino también al contexto cultural y social al que se incluirán.

La valoración de la educación está subestimada y subordinada a responder al mercado laboral, y en su contexto, a beneficios jurídicos: la concepción de la preparación académica está basada en el criterio de funcionalidad para el mercado laboral, olvidando así el fin más noble que es el desarrollo armónico de las personas, siendo éste el fin más conciliable con las pretensiones que puede tener la finalidad de la reinserción social”.

[ECP]: ¿Piensa usted que el programa educativo del Instituto Nacional de Educación al Adulto (INEA) en el desarrollo de su Modelo de Educación para la Vida sea la adecuada para preparar a los internos en su desarrollo educativo?

[RIM]: “No, relativamente. Desconozco a profundidad el programa educativo del INEA en el desarrollo de su Modelo de Educación para la vida, sin embargo,

conozco parcialmente la forma en la que se implementa en el centro penitenciario en cuestión”.

“No está contextualizado a la realidad de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios: se agregan razones dadas en la respuesta de la pregunta uno”.

[ECP]: ¿Ha observado si la capacitación de internos que hace el INEA como asesores educativos, sea la apropiada para formar al interno de acuerdo con las necesidades que a futuro tendrá fuera de la Institución penitenciaria?

[RIM]: “No, no he observado; desconozco al respecto. Si bien es cierto no tengo relación con el tema que se cuestiona considero, en relación a los resultados obtenidos (esto bajo la experiencia de contacto con algunas personas que han sido liberadas/externadas han manifestado) las personas pueden obtener su “constancia” que acredita haber cursado la primaria o secundaria, según sea el caso, pero ya en el ejercicio de su vida manifiestan limitaciones, por ejemplo, para leer y/o escribir”.

[ECP]: Ante las condiciones que imperan al interior del penal de Apodaca, ¿cree posible que se desarrolle adecuadamente el proceso de la reinserción y la reeducación de los internos en los centros penitenciarios?

[RIM]: “No, relativamente. La situación de inseguridad, autogobierno y la limitante de recursos para el fomento de la reinserción social hace imposible el establecimiento de metodologías o planes de trabajo para atender la realidad penitenciaria”.

“La reinserción social no se limita a las condiciones de seguridad: si bien el sano cumplimiento de la pena privativa de la libertad supone las condiciones básicas de seguridad, y en ello se ofrecen las “garantías” necesarias y posibles para la promoción de actividades de reinserción social, éstas últimas no se limitan a la seguridad cuando se tienen objetivos claros por parte de quienes ofrecen la atención de reinserción social; mencionado lo anterior podemos mencionar que es deseable la gobernabilidad de los centros penitenciarios y contar con infraestructura adecuada, pero a ausencia de ello no se ha de limitar la procuración

de proceso de reinserción valorándose como justificante el contexto sino al contrario tomando los mismos como un reto para lograr el objetivo, un reto que dice “sintonía” con la realidad que se vive al exterior de los centros penitenciarios”.

“Las personas privadas de la libertad no son conscientes de la significatividad de la reinserción social: más que las condiciones de los centros penitenciarios, que de suyo es urgentemente deseable sean buenas, una de las claves que considero es que las personas reclusas no tienen noción del significado de la reinserción social como proceso personal, la mayoría de ellos centran su estadía en el lugar en relación al cumplimiento de una pena limitando así la colaboración y los efectos de los limitados programas de reinserción social que se ofertan; es posible que los “reclusos” centren su estadía únicamente en el cumplimiento de la pena a causa de una ausencia de procesos de perdón y reconciliación personal que les lleven a asumir su realidad”.

[ECP]: ¿Piensa usted que la educación de personas adultas en las cárceles limitada a una simple capacitación y una educación restringida a los niveles de educación secundaria, sean herramientas suficientes para su desempeño laboral una vez que ha logrado su libertad?

[RIM]: No, no son herramientas suficientes. Se agregan razones de las respuestas a la pregunta dos y tres.

[ECP]: Una de las funciones de los centros penitenciarios es ofrecer a los internos opciones de capacitación y educación que les permita, una vez liberados, desempeñar algún oficio o insertarse exitosamente en la sociedad ¿Considera usted que en el caso del CERESO Apodaca se cumple esta función?

[RIM]: “No, relativamente. Las ofertas educativas formales, es decir con posible validez oficial, dispuestas en el centro penitenciario son muy pocas, aunado a ello existe un desinterés de las personas privadas de la libertad a cursarlas, en el caso de existir fuera de la educación básica; las ofertas de capacitación que se brindan responden a las necesidades de las empresas (maquiladoras) que se encuentran dentro del centro penitenciario, en donde la mayoría de las veces cuando las

personas son liberadas/externadas no tienen la posibilidad de desempeñarse en las mismas áreas laborales en las que se desempeñaron durante su internamiento.

Es poca la oferta educativa con validez oficial, esto fuera de la educación básica. La capacitación laboral que se oferta responde a cubrir las necesidades del presente, es decir, para incorporarse a una oferta de empleo durante el internamiento.

Existe un limitado compromiso por parte de las empresas que colaboran al interior del centro penitenciario para ofrecer fuentes de empleo a las personas que son liberadas/externadas y que guardan conocimiento y experiencia en el ramo.

No existe un programa de capacitación o de cursos preliberacionales, es decir, con vistas o miras a su reinserción o inclusión social.

No hay lineamientos claros establecidos (plan de trabajo) para la procuración de la reinserción social que haga eficientes y efectivos los esfuerzos del personal técnico y O.S.C.”.

[ECP]: ¿Considera usted que el hacinamiento en que viven los internos limita la privacidad del interno y afecta en su proceso de aprendizaje educativo?

[RIM]: Si. Puesto que, desde una noción vaga de la psicología ambiental, la violación al espacio vital de un apersona provoca inestabilidad emocional y por ende altera la capacidad cognitiva de la misma, disminuyendo así su disposición y capacidad de aprendizaje; aunado a ello está la consecuencia de la violencia en la convivencia social que genera el hacinamiento. Puesto que no se cuentan con áreas de estudio para realizar las debidas actividades de aprendizaje.

[ECP]: ¿Cree usted factible que en el penal de Apodaca con el apoyo de la sociedad y del Estado, se pueda desarrollar la infraestructura necesaria para la implementación de un programa de educación a distancia que le permita a los internos llegar a consolidar su educación a nivel universitario?

[RIM]: “Sí. Se requeriría para lograrlo una multiplicidad de esfuerzos y, además de una meta y objetivo, se necesita una programación clara que responda a las

necesidades no sólo del sistema penitenciario sino de la población privada de la libertad”.

“Como paso básico para lograrlo, considero que se debe de crear un plan temporal de organización transversal, es decir, a través del establecimiento de objetivos, ejes rectores y líneas de acción con incidencia en los diferentes departamentos para así procurar programas de reinserción social integrales”.

[ECP]: De acuerdo con su experiencia, ¿considera que la educación impartida en las instituciones penitenciarias exalta los valores morales y éticos que sirvan para concientizar al interno en su proceso de reinserción en la sociedad?

[RIM]: No. Sostengo mi respuesta invocando los argumentos presentados en las respuestas a las preguntas anteriores.

Capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

Capítulo V

Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

La educación dentro del proceso de reinserción social es un aspecto toral para lograr que las personas privadas de la libertad, puedan tener acceso a mejores oportunidades de desarrollo personal y laboral una vez que recuperen su libertad, tal como se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en la reglamentación establecida a nivel internacional. Sin embargo, en el caso del CERESO Apodaca, se presenta una serie de limitantes que impiden el cumplimiento cabal de lo establecido en los citados reglamentos.

Después de analizar la opinión de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, se identificó que los internos no encuentran, dentro de la oferta educativa de esta institución, una alternativa que les permita dar seguimiento a sus estudios de nivel medio superior. Diversos problemas de seguridad en este penal provocaron que las instituciones educativas y universitarias que brindaban apoyo se alejaran y, con ello, se limitaron las opciones de formación de bachillerato o de preparación técnica.

Ante este escenario, las autoridades del penal se encuentran en trabajo constante para establecer vínculos de colaboración son instituciones educativas de carácter público, así como de la sociedad civil, para ofrecer alternativas académicas que resulten de interés y que puedan contar con la participación de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca.

La población penitenciaria del CERESO Apodaca se caracteriza por estar compuesta por personas generalmente jóvenes y en edad productiva (entre los 18 y 55 años) y que cuentan con una educación que se ubica en el nivel básico (primaria y secundaria). Ellos, deben cumplir con una sentencia promedio de 15 años; motivo por el cual su proceso educativo se convierte en un aspecto importancia para su formación personal y laboral en el futuro.

Los hallazgos indican que la mayor parte de los encuestados cuentan con el nivel educativo básico, el cual es el máximo nivel que se oferta dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca; por lo que se encuentran a la expectativa de que esta institución pueda ofrecerles una alternativa para continuar con su educación puesto que hasta el momento en que se realizó el presente estudio, no tenían un programa de preparatoria o de bachillerato, que diera seguimiento eficaz a su desarrollo académico. La normatividad imperante en materia penitenciaria indica que es una obligación del Estado, proveer educación del nivel medio superior como parte de las tareas de reinserción social en los penales mexicanos.

De manera general, los internos evalúan de forma positiva las actividades educativas que se desarrollan dentro del CERESO Apodaca; sin embargo, los expertos coinciden en el aspecto de que la oferta académica del centro penitenciario puede no resultar de interés para los internos. Una evidencia de este hecho es que la mayor parte de los internos (8 de cada 10) afirma que prefiere dedicar su tiempo en actividades laborales antes que su preparación académica.

Desde el punto de vista de los expertos encuestados, la participación simultánea en programas tanto educativos como laborales puede provocar que las personas privadas de la libertad no desarrollen de manera adecuada sus actividades académicas; esto puede derivar en el no cumplimiento de los requisitos mínimos para certificar su educación dentro del CERESO y, con ello, se limitarán sus oportunidades para convertirse en una persona competitiva en el mercado laboral al reincorporarse a la sociedad. Sin embargo, en las condiciones actuales imperantes en penal de Apodaca, el trabajo resulta de mayor interés para los internos por encima de las actividades escolares.

Un aspecto importante que se presenta dentro del CERESO Apodaca, es que se registra una baja tasa de certificación en educación básica; es decir, aun cuando las personas privadas de la libertad se integran a actividades educativas, no logran obtener el certificado correspondiente a sus estudios. Los expertos entrevistados sostienen que, de manera general, el modelo educativo imperante dentro de este penal se limita a proveer materiales educativos y posteriormente, evaluar los conocimientos a través de exámenes; sin embargo, esta evaluación es insuficiente y se han presentado casos de internos

certificados aun cuando no han desarrollado habilidades básicas de alfabetización como leer o escribir.

La educación que se brinda a las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca es evaluada de forma positiva. La participación de los internos en estos cursos les permite el desarrollo de nuevos aprendizajes y, tal como lo establecen los expertos entrevistados, les permite acceder al beneficio de liberación anticipada, motivo por el cual los internos deciden formar parte de los programas educativos que, si bien son limitados, representan una alternativa para la superación y para se logre un mejor proceso de reinserción social.

Sin embargo, las carencias en materia educativa imperantes dentro del CERESO Apodaca limitan de manera importante el involucramiento de las personas privadas de la libertad en los cursos que se ofrecen dentro del penal; entre estas deficiencias destacan la falta de personal, escasez de materiales de apoyo para el aprendizaje, infraestructura insuficiente, falta de certificación y la inexistencia de programas académicos del nivel medio superior y superior y de capacitación para el trabajo.

Tanto los expertos participantes como las personas privadas de la libertad coinciden en el hecho de que la educación es un factor que fortalece y que es benéfico para el proceso de reinserción social. En ese sentido, los internos requieren de una educación que les permita interiorizar y propiciar un cambio en la forma en la que ven la vida; por lo que es necesario que los programas educativos dentro del penal consideren la realidad y el contexto de los internos de forma particular.

En el contexto penitenciario, el respecto del interno a sí mismo y hacia los demás, se fundamenta en distintos ámbitos, entre los que se encuentran el educativo, psicológico, laboral, cultural y espiritual. Por lo tanto, los programas educativos deben estar fundamentos en estos aspectos para así poder impulsar un verdadero cambio en los internos del CERESO Apodaca, los cuales les permitan prepararse de forma apropiada para su reencuentro con la sociedad. Cerda (2017) considera que “educar desde la cárcel no es educar para la cárcel” sino para lograr el crecimiento de los internos.

Las personas privadas de la libertad no aprenden solamente en las aulas o en los programas educativos, también lo hacen a través de su entorno personal, familiar y

comunitario. Sin embargo, a pesar de los encomiables esfuerzos de las autoridades penitenciarias para diseñar e implementar programas educativos dentro del CERESO Apodaca, el acceso de los internos a la oferta académica tiene importantes limitaciones tanto de contenido como de recursos humanos, factor que provoca que este penal no cumpla con lo establecido en la normatividad prevista en México, en conceptos como educación básica, lo que incide en que se acentúe la brecha entre lo que sucede en la realidad y lo que se prevé en la ley.

Entre los principales resultados de la encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, durante el año 2017, se encontró que 5 de cada 10 de los participantes se encuentran expectantes respecto al desarrollo de un programa educativo del nivel medio superior en este penal. La población penitenciaria que ha logrado alcanzar el nivel básico de educación, es decir, el mayor nivel que se oferta dentro de la institución, no encuentra una opción para continuar con sus estudios, por lo que 2 de cada 10 de estos deciden abandonar sus estudios.

En relación con la integración de las personas privadas de la libertad a los programas educativos existentes dentro del CERESO Apodaca, se encontró que 5 de cada 10 lograron alcanzar en el nivel de secundaria. Por el contrario, se encontró que 4 de cada 10 internos decidieron no utilizar los servicios que ofrece del departamento educativo, esto se debe, por un lado, a la falta de interés y la necesidad de trabajar y, por el otro, a la falta de alternativas del nivel medio.

Sin embargo, es importante establecer que, con base a los resultados de la encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad, las causas de inasistencia de los internos a los servicios educativos resultan indefinidas puesto que los datos no son del todo concluyentes, puesto que la mayoría de los participantes no respondieron a este cuestionamiento. Por otro lado, entre las personas que indicaron la razón por la que no accedieron a programas educativos es porque prefieren integrarse a actividades laborales; 8 de cada 10 internos decide emplear su tiempo en trabajar.

El análisis de las condiciones educativas de las personas privadas de la libertad a su ingreso al penal se encontró que de aquellos que reportó solamente haber cursado la primaria, el 72% de ellos la dejó inconclusa, mientras que, en el nivel de secundaria, esta

cifra ascendió al 75%. Por otro lado, se identificó que 6 de cada 10 de los internos que decidieron utilizar los servicios educativos del CERESO Apodaca, tuvieron un avance y lograron certificar sus estudios de primaria y/o secundaria.

Los servicios educativos que se ofertan dentro del penal de Apodaca son evaluados de forma generalmente positiva por las personas privadas de la libertad participantes en el estudio; 8 de cada 10 internos declararon tener un nivel de satisfacción de medio a alto, factor por el cual es posible indicar que existe una buena percepción respecto a los servicios educativos que se brindan dentro de la institución, aun cuando los mismos internos encuentran insuficientes los recursos y el personal que labora en este departamento.

De manera general, la mayoría de las personas privadas de la libertad afirmaron que el departamento de trabajo social del CERESO Apodaca, los ha invitado a incorporarse en actividades educativas para continuar sus estudios de primaria y secundaria. Así mismo, 5 de cada 10 de los participantes, señalaron que este departamento ha dado un seguimiento estrecho a su participación o abandono de los programas educativos en los que ha decidido participar.

Las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, mostraron una disposición importante para integrarse a cursos complementarios; 8 de cada 10 internos participantes manifestó su interés en continuar su preparación en áreas vinculadas a su desarrollo laboral. Entre las opciones que los internos consideraron como más interesantes se encuentran computación; mecánica automotriz; cocina; electricidad y manejo de montacargas, puesto que son actividades que posteriormente les pueden resultar útiles para acceder a mejores oportunidades de trabajo.

Además de la capacitación para la integración laboral, los internos, en una relación de 4 de cada 10 de estos, afirmaron que su participación en actividades laborales se relaciona con su superación personal y académica; es decir, se involucran en programas educativos para combatir el rezago educativo que se presenta en este sector, principalmente, en los niveles educativos de primaria y secundaria.

De las personas privadas de la libertad que se integraron a actividades educativas y académicas, la mayoría (6 de cada 10), se comprometieron de manera importante a las

mismas y permanecieron en el programa hasta su finalización. En este sentido, además de la amplia participación de los internos del CERESO Apodaca, en las diferentes opciones educativas, principalmente del nivel básico, estos muestran la disposición para realizar las tareas que les son encomendadas para lograr certificar su preparación.

Sin embargo, las personas privadas de la libertad coinciden con los expertos entrevistados en esta investigación, en el hecho de que dentro del departamento educativo existen carencias importantes que limitan el impacto de los programas académicos. En este contexto, aunque los internos sostienen, en 6 de cada 10 casos, que han tenido el apoyo de maestros y el acceso a los materiales necesarios, consideran que estos resultan insuficientes para la atención de toda la población penitenciaria que participa en actividades académicas.

Como complemento a los programas educativos que se desarrollan dentro del CERESO Apodaca se llevan a cabo actividades deportivas y recreativas; los resultados de la encuesta indican que 7 de cada 10 personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, practica algún deporte, principalmente, en los torneos que se organizan dentro de esta institución penitenciaria. Es importante considerar que la práctica deportiva se desarrolla mayoritariamente dentro del penal y, en la mayoría de los casos, no existen expertos externos que puedan guiar o dirigir a los internos para que realicen estas actividades de forma correcta.

Por otro lado, la mayor parte de las personas privadas de la libertad encuestadas manifiesta tener un gusto por la lectura; 7 de cada 10 de los participantes afirmaron realizar estas actividades de manera cotidiana. En cuanto a los materiales de lectura, los internos afirmaron sentirse atraídos por la lectura de libros, principalmente, obras literarias clásicas o libros de texto académicos.

Además de los programas educativos, los internos son invitados por otros departamentos para participar en las diversas actividades culturales que se ofrecen dentro del CERESO Apodaca; entre estas destacan la práctica literaria, dibujo y pintura, música, teatro y danza. El desarrollo de estas actividades se traduce en la organización y realización de hasta 25 eventos anuales dentro de esta institución penitenciaria donde los

internos demuestran sus habilidades en estas disciplinas que, en algunos casos, les ha permitido ganar concursos estatales y nacionales.

Al evaluar la infraestructura utilizada con fines académicos, las opiniones de las personas privadas de la libertad fueron generalmente positivas; 6 de cada 10 internos tienen una buena impresión de los espacios destinados a su preparación educativa dentro del penal. Además, consideran que los cursos que se ofrecen dentro de este departamento son importantes para su desarrollo, principalmente aquellos que se relacionan con oficios; conocimientos técnicos; habilidades de comunicación y capacitación para la administración.

Los expertos entrevistados coinciden en que el esfuerzo realizado por las autoridades del CERESO Apodaca para ofrecer alternativas educativas y de desarrollo cultural para las personas privadas de la libertad, es importante; sin embargo, siguen siendo limitadas considerando la población penitenciaria de estas instituciones, por lo cual concluyen que es necesaria la participación de instituciones externas. Entre las principales dificultades que se encuentran en este sentido citan la ausencia de convenios con otras organizaciones para solventar las necesidades existentes; la falta de continuidad en algunos eventos; la carencia o inexistencia de maestros y/o instructores y la falta de programas que se desarrollen de forma permanente.

En la encuesta aplicada durante el año 2019 a las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca se evaluaron una serie de aspectos que se relacionan con su educación, su desarrollo familiar y personal durante su infancia, así como indicadores enfocados a identificar las problemáticas que estos hayan vivido durante su formación educativa y que de alguna forma se hayan convertido en una limitante para ellos.

De la misma forma que en la encuesta desarrollada durante 2017, se encontró que los internos son personas generalmente jóvenes; para 2019, 7 de cada 10 internos tiene una edad inferior a los 40 años y poseía, en el 73% de los casos, una educación solamente de nivel básico al ingresar al penal; los encuestados reportan en un porcentaje considerable que dentro del penal pudieron concluir y certificar sus estudios del nivel de primaria y secundaria.

En lo que respecta al desarrollo familiar, se encontró que en 2 de cada 10 casos los internos del CERESO Apodaca provienen de núcleos familiares en donde alguna vez uno de sus familiares ya ha estado privado de la libertad; generalmente, son los hermanos, padres y tíos, los miembros de la familia que han pisado un centro de reinserción social con anterioridad.

Los internos encuestados se caracterizan por abandonar su núcleo familiar a una edad temprana; la mitad de los participantes afirmaron haberse abandonado su hogar antes de los 20 años a pesar de mencionar, en 6 de cada 10 casos, que su ambiente familiar era excelente aun con las carencias existentes.

Entre las principales dificultades vividas por las personas privadas de la libertad durante su infancia, destacan aquellas de índole económico, mismas que se convierten en la mayoría de los casos en un aspecto generador de conflictos dentro del núcleo familiar. Además, dentro de las familias de los internos, se han presentados casos de alcoholismo; separación o divorcio; conductas agresivas; adicciones; violencia física y, en menor medida, agresiones sexuales.

El 25% de las personas encuestadas afirmó haber sido víctima de violencia dentro de su núcleo familiar durante su infancia; mayoritariamente esta se presentó de manera verbal, física y psicológica. Estas agresiones fueron realizadas por “varios” familiares, entre los que figuran, principalmente, el padre o la madre de los internos.

Los internos del CERESO Apodaca participantes en el estudio reportan, en 3 de cada 10 casos, que durante su infancia o adolescencia formaron parte de una pandilla. Refieren que se integraron a este grupo antes de cumplir 15 años; es decir, comenzaron a juntarse en núcleos de pandillas desde una edad muy temprana. Además, 1 de cada 10 internos, afirmó que uno de los miembros de su familia también formó parte de una pandilla.

En lo que respecta a la asistencia a la escuela, 7 de cada 10 personas privadas de la libertad, indicaron que asistieron de forma regular a la escuela y evaluaron de forma positiva el ambiente escolar imperante durante su infancia. Además, el 70% de los internos señaló que durante su formación educativa contó con el apoyo constante de su núcleo

familiar; empero, el resto de los internos que no tuvo ayuda de parte de su familia, esto, se debió generalmente a los problemas económicos del grupo.

A pesar de señalar que el ambiente escolar era positivo, 2 de cada 10 internos afirmó que durante su educación fue víctima de agresiones, siendo los compañeros de clase los principales agresores, quienes ejercían violencia física y verbal en contra de ellos, durante la etapa de infancia o adolescencia de los internos. Es importante destacar que la mayor parte de los internos, señaló que no hacía nada ante las agresiones recibidas y que, en 6 de cada 10 casos, no encontraron apoyo por parte de las autoridades.

Como parte del trabajo realizado para cumplir con los requisitos establecidos dentro del Doctorado en Filosofía con Orientación en Comunicación e Innovación Educativa en la FCC de la UANL, se llevó a cabo una estancia de investigación en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Durante el desarrollo de esta estancia se realizó un proyecto en el que se analizaron las condiciones de los grupos familiares de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca (ver Anexo 2). En este trabajo, se estableció el diseño de una Unidad de Atención Psicopedagógica para la atención educativa de los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad en la que, de manera muy importante, se requiere la participación activa de los internos.

Entre los principales resultados de este proceso, se encontró que 4 de cada 10 de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, tienen hijos que cuentan con una edad inferior a los 10 años; en 2 de cada 10 casos, estos, tienen entre 11 y 20 años y 1 de cada 10 entre 16 y 20. Estas estadísticas indican que la mayoría de los hijos de personas internadas en este penal tienen hijos que se encuentran en la etapa educativa de su vida.

Sin embargo, el 50% de las personas privadas de la libertad en este centro, desconoce la situación académica de sus hijos; siendo la esposa, en 3 de cada 10 casos, quien se encarga de llevar un seguimiento de las condiciones educativas de los menores. Por otra parte, en 7 de cada 10 casos, los internos expusieron que sus hijos menores requieren apoyo económico para continuar con su educación, en 2 de cada 10 casos, dijeron que becas. Estos datos indican la necesidad urgente de los internos por contar con

apoyo institucional para que sus hijos continúen con su formación académica, principalmente, por las dificultades económicas que enfrentan sus núcleos familiares.

En la cuestión financiera, se encontró que el 62% los núcleos familiares, tienen un ingreso mensual de \$3,000 pesos, por lo que para sobrevivir todos los miembros del grupo familiar deben participar en la generación de ingresos económicos para solventar sus necesidades. Ante esta situación, los resultados del estudio realizado con las familias de internos en el CERESO Apodaca, muestran que los hijos e hijas de estos, viven la pobreza de la familia o de sus cuidadores responsables y que, son escasas sus posibilidades de apoyo puesto que dentro del penal los ingresos por participar en actividades laborales son mínimos (inferiores a \$600 pesos semanales) y sin posibilidades de acceder a un esquema de seguridad social.

La edad promedio de los hijos e hijas de personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca es de 12.4 años y, desde el punto de vista de los mismos internos, su desempeño educativo es adecuado, 43% lo calificó como bueno y 25% como excelente; sin embargo, resaltan que sus hijos, en 5 de cada 10 casos, enfrentan carencias económicas importantes; falta de tiempo de las personas responsables para cuidarlos; experimentan discriminación y falta de aprovechamiento, factores que inciden de manera negativa en el desarrollo educativo de estos menores.

La falta de conocimiento de las personas privadas de la libertad sobre la situación académica de sus hijos, considerando su promedio de edad, evidencia la necesidad de que estos desarrollen mejores habilidades parentales para brindar un mejor acompañamiento —en la medida de lo posible— para estos menores. Ante esto, al ser cuestionados, los internos del CERESO Apodaca manifestaron su disponibilidad para acceder a este tipo de cursos complementarios que les permitirán, por un lado, estar al tanto de la situación educativa de sus hijos y proveerles un mejor apoyo y, por el otro, mejorar sus competencias para relacionarse con ellos aun cuando se encuentre dentro del penal.

5.1.1. Respuesta a las guías de trabajo

A continuación, como parte del desarrollo de este proyecto, se da respuesta a cada una de las guías de trabajo que sustentaron y condujeron la realización de esta investigación:

1. Los servicios educativos ofrecidos para las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Apodaca, son insuficientes para cumplir con lo estipulado tanto en la *Ley General del Educación* como en la *Ley Nacional de Ejecución Penal* y las recomendaciones de organismos especializados en el tema a nivel mundial, como la UNESCO.

En relación a esta guía de trabajo los resultados de las encuestas aplicadas durante 2017 y 2019, indican que aunque existen acciones importantes dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, para efectos de mejorar las condiciones educativas de las personas privadas de la libertad en esta institución, éstas no tienen el alcance o el impacto necesario para dar un cumplimiento cabal a lo establecido en la reglamentación internacional en materia penitenciaria y, sobre todo, a lo que se indica en la Ley Nacional de Ejecución Penal, sobre a la educación en los CERESO.

Entre las principales carencias y limitaciones existentes en el ámbito académico dentro del CERESO Apodaca, destaca la falta de opciones educativas del nivel medio superior y superior; este factor es sumamente importante puesto que la población es mayoritariamente joven (menos de 40 años) y, tal como lo muestran los resultados, tienen un nivel educativo básico (primaria y secundaria). La falta de un programa de bachillerato o de educación técnica, limita de manera importante el desarrollo educativo de las personas privadas de la libertad.

Otro aspecto que impacta en que las acciones educativas que se llevan a cabo dentro del CERESO Apodaca, no cumplan con lo establecido reglamentariamente, es que, en materia de capacitación laboral, esta, se limita a preparar a las personas privadas de la libertad para realizar las actividades contempladas dentro de las empresas maquiladoras que se encuentran instaladas en el penal. Los expertos entrevistados coinciden en que, si bien esta preparación es positiva para activarse laboralmente en el CERESO, las actividades realizadas son tan específicas que, cuando el interno recupera su libertad, no encuentra un empleo donde pueda aplicar estas habilidades.

De la misma forma, los expertos entrevistados afirman que, para mejorar las condiciones educativas de las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca, es necesaria la participación de instituciones de la sociedad civil, instituciones

educativas y universidades de la entidad, para desarrollar un programa educativo sólido y fundamentado a través del cual los internos tengan mejores posibilidades académicas.

Asimismo, los resultados de la encuesta indican que existen carencias en materiales, en infraestructura y en recursos humanos para el desarrollo de actividades académicas que tengan un impacto positivo en la educación y en el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad. Los internos prefieren participar en otras actividades, principalmente laborales. Todos estos aspectos inciden en que lo planteado en la LNEP, no se cumplan totalmente; aunque es necesario reconocer el esfuerzo de las autoridades del CERESO Apodaca, dentro de este ámbito.

Por lo indicado anteriormente esta guía de trabajo se considera válida.

2. La infraestructura, salones e instalaciones para llevar a cabo las tareas educativas y académicas dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, resultan insuficientes para brindar atención a una población penitenciaria cercana a las dos mil personas.

Como se mencionó a lo largo de este trabajo, uno de los ejes en los que se fundamenta el proceso de reinserción social en México, tal como lo establece la *Ley Nacional de Ejecución Penal*, es el ámbito educativo. En ese sentido, desde esta reglamentación se establece que cada centro penitenciario en el país deberá contar con la infraestructura adecuada para que las personas privadas de la libertad se puedan integrar a actividades académicas que le permitan continuar su preparación educativa y ser capacitados para desempeñarse en actividades laborales.

Desde el punto de vista de las personas privadas de la libertad del CERESO Apodaca, la mayor parte de estos, evaluaron de manera positiva los espacios utilizados para las actividades académicas que se desarrollan en el penal. Sin embargo, 4 de cada 10 internos, afirma que la infraestructura educativa de esta institución tiene importantes áreas de oportunidad y de mejora para brindar un mejor servicio escolar a los internos. De la misma forma, 3 de cada 10 internos considera que la biblioteca del centro penitenciario no se encuentra en buenas condiciones.

Las carencias en materia de infraestructura educativa dentro del CERESO Apodaca (entre otros factores), han provocado que aproximadamente el 30.0% de las personas privadas de la libertad que decidieron comenzar o continuar con su educación

tomaran la decisión de abandonar sus estudios. En este sentido, los expertos entrevistados señalaron que además de los espacios, es necesario destinar un presupuesto específico a la mejora continua de estas instalaciones.

Además, desde el punto de vista de los expertos participantes, los espacios existentes dentro del CERESO Apodaca y, los programas que en ellos se desarrollan, representan un esfuerzo importante de las autoridades del centro para el avance educativo de los internos; sin embargo, al mismo tiempo, consideran que, en algunos casos, las actividades educativas dependen de organismos externos al penal, factor que dificulta su desarrollo puesto que están a expensas de la disponibilidad de estas instituciones.

Con los datos expuestos es posible afirmar que esta guía de trabajo es válida.

3. Los programas educativos y escolares brindados a las personas privadas de la libertad dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, no permiten el crecimiento académico de los mismos, principalmente, en el nivel medio superior y superior pues no existen estas opciones en esta instalación de seguridad.

Los resultados de las encuestas aplicadas en los años 2017 y 2019 indican resultados contrastantes en relación al crecimiento de las personas privadas de la libertad. De los internos que decidieron integrarse a actividades académicas dentro del CERESO Apodaca, 8 de cada 10 consideran que han tenido un avance académico derivado de su participación en los cursos dentro del penal.

Aun cuando la participación de las personas privadas de la libertad, ha representado, desde el punto de vista de los mismos internos, un avance importante, es necesario indicar que solamente la mitad de los participantes en los programas educativos, han tenido la posibilidad de certificar los estudios que realizó dentro del CERESO Apodaca, la mayor parte de estos, logró obtener el certificado de primaria y/o secundaria.

Sin embargo, este avance se ha registrado solamente en el nivel básico (primaria y secundaria), aun cuando la legislación nacional en materia penitenciaria indica que la educación en los penales debe abarcar hasta la preparatoria. En ambos periodos de tiempo en los que fue aplicada el instrumento de investigación, solamente 5 personas indicaron

que lograron concluir en nivel de bachillerato dentro del CERESO Apodaca; empero, no han certificado dichos estudios.

Los expertos encuestados coinciden en que la falta de un programa educativo de bachillerato limita la preparación de las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca y, con ello, incide de forma negativa en sus oportunidades de desarrollo, no solo académico, sino laboral. La falta de preparación del nivel medio superior, sobre todo para una población penitenciaria joven, coartará sus posibilidades de crecimiento y, al recuperar su libertad, será una limitante para acceder a mejores oportunidades de trabajo.

En este mismo sentido, es importante establecer que los cursos y programas educativos que se ofertan en el CERESO Apodaca, son diseñados por el INEA y ejecutados por el personal que esta institución destina al penal; sin embargo, aun cuando el esfuerzo realizado por este organismo es importante, desde la administración del penal se indica que no existen evidencias suficientes del trabajo que se realiza, de la eficiencia terminal y de la efectividad de los programas educativos. Además, aún cuando una parte de la población penitenciaria que participa en actividades educativas ha logrado certificar sus estudios de primaria y secundaria, se han presentado casos en los que, aunque cuentan con estos documentos, los internos no son capaces de realizar ejercicios básicos de lectura y escritura.

Los resultados antes expuestos permiten concluir que esta guía de trabajo es válida.

4. La falta de programas educativos específicos para las personas privadas de libertad dentro del CERESO Apodaca es un aspecto que dificulta el proceso de reinserción social, mermando las posibilidades de que estas personas puedan tener un regreso exitoso a la sociedad y, a su vez, que se disminuyan los índices de reincidencia.

Desde el punto de vista de los expertos entrevistados la falta de programas educativos diseñados de forma específica para las personas privadas de la libertad es un factor que, por un lado, dificulta las labores del proceso de reinserción social. Las actividades académicas que se ofertan dentro del CERESO Apodaca, se limitan a los

programas establecidos por INEA que, como objetivo principal, se enfocan en la alfabetización de los internos y en los niveles de primaria y secundaria.

Asimismo, los entrevistados sostienen que si bien la preparación ofrecida por INEA, es importante para el desarrollo de los internos, esta no está diseñada de manera particular para las personas privadas de la libertad; es decir, dentro de estos programas no se consideran aspectos como la realidad del interno, su edad, su condena y la necesidad de desarrollar habilidades que le permitan conseguir un empleo una vez que cumpla con su sentencia.

Por otro lado, también afirman que en lo que corresponde a los programas de capacitación laboral, estos se encuentran limitados a la preparación que las empresas maquiladoras que operan dentro del penal ofrecen para la realización de productos específicos como artículos de limpieza (estropajos) o prendas de seguridad (chalecos, lentes, entre otros).

Es importante destacar que, en relación a este mismo aspecto, las personas privadas de la libertad demostraron un interés importante en cursos de capacitación y en programas educativos diseñados de forma específica para sus necesidades; 8 de cada 10 internos indicaron que le gustaría participar en actividades educativas y capacitación laboral y que, al mismo tiempo, incidan de manera positiva en su proceso de reinserción social. Entre las áreas que consideran más interesantes se encuentran computación, mecánica automotriz, carpintería y manejo de montacargas, por mencionar las más importantes. Además, 2 de cada 10 internos afirmó que le gustaría integrarse a varios cursos durante su estancia en el penal.

De manera particular, tanto los entrevistados como las personas privadas de la libertad sostienen la necesidad del desarrollo de un programa educativo específico del nivel medio superior que permita que las personas que ya cuentan con primaria y secundaria –o que concluyeron estos niveles dentro del penal–, puedan darle seguimiento a su preparación académica.

Los resultados de la encuesta y las opiniones de los expertos permiten concluir que esta guía de trabajo es válida.

5. El personal que labora en materia educativa académica dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca resulta insuficiente para atender a una población penitenciaria próxima a las dos mil personas privadas de su libertad.

Las opiniones de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, indican que 3 de cada 10, tienen un nivel de satisfacción alto en relación a los estudios que ha realizado dentro de esta institución; sin embargo, el resto se encuentra en un nivel medio o bajo. Una de las principales razones por las que se presenta esta situación se fundamenta en que 3 de cada 10 internos considera que el apoyo de los profesores que laboran dentro de esta institución es insuficiente.

Entre los factores por los que existe una falta de personal educativo dentro del CERESO Apodaca, es la falta de presupuesto. Las carencias de recursos económicos imposibilitan a esta institución para la contratación de profesores que apoyen a los internos en sus actividades académicas; esto, a su vez, influye en que no se pueda desarrollar un plan académico a largo plazo. Los expertos entrevistados indican que la falta de un área experta en el desarrollo de programas educativos implica que no existan las opciones que resulten más útiles para la preparación de los internos.

Actualmente, los cursos y programas educativos que se ofertan dentro del CERESO Apodaca son manejados por personal de la INEA, que asiste a capacitar y preparar a las personas privadas de la libertad; sin embargo, el personal que esta institución envía al penal resulta insuficiente para brindar una educación de calidad a toda la población penitenciaria. En este contexto, el personal del INEA, capacita a los internos que muestren un mejor rendimiento para fungir como “monitores” que operan como profesores de sus compañeros internos. Si bien estas acciones ayudan a que los programas académicos continúen en funcionamiento, no cumple con los requisitos establecidos en la legislación actual.

Ante la falta de personal, Alejandro Balderrama Avitia, Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del Estado de Nuevo León, afirmó que esta deficiencia se solventa a través de la participación de organizaciones no gubernamentales y de la participación de voluntarios, quienes imparten cursos o desarrollan talleres que permiten una mejor preparación académica de los internos. Sin embargo, las temáticas de

los mismos son establecidos por estas organizaciones y, en ocasiones, no contemplan ni la realidad ni las necesidades de los internos.

En base a estos datos, en posible validar esta guía de trabajo.

6. La educación y capacitación para que las personas privadas de la libertad puedan tener un oficio después de cumplir con el período de sentencia es escaso o insuficiente, lo que se convierte en un factor que impacta negativamente el proceso de reinserción social e incrementa las posibilidades de reincidencia.

Los entrevistados participantes en el desarrollo de este trabajo indicaron que una de las principales deficiencias existentes dentro de la operación del CERESO Apodaca se presenta en lo correspondiente a la preparación para el trabajo. Las opciones de capacitación, generalmente ofrecidas por las empresas maquiladoras instaladas en el interior de esta institución, se limitan en instruir a los internos para los productos específicos que estas desarrollan y que, en ocasiones, puedan resultar poco útiles fuera del penal.

Por tal motivo, los internos muestran un importante interés en la participación en cursos complementarios y de capacitación además de aquellos en los que puedan concluir con su preparación en nivel básico y medio superior. Entre las principales áreas en las que los reclusos se muestran interesados es en computación, mecánica automotriz, carpintería y manejo de montacargas, es decir, habilidades que les permitan el desempeño de un oficio y/o integrarse a una empresa.

En este mismo sentido, es importante indicar que, dentro del CERESO Apodaca, no existe un área con la preparación específica para el desarrollo de programas educativos; motivo por el cual las actividades académicas que se diseñan son en base a esquemas empíricos y que, en algunos casos, no están adaptados totalmente a la realidad y las necesidades del interno.

Con base en los datos expuestos, esta guía se considera válida.

7. Las condiciones familiares imperantes durante la infancia de las personas privadas de la libertad, es un factor que incide en la formación de conductas delictivas, sobre todo

cuando existían carencias materiales y familiares, así como la presencia de familiares que estuvieron reclusos en un centro de reinserción social.

Las personas privadas de la libertad participantes en esta investigación se caracterizan por ser personas jóvenes y que debieron abandonar su hogar a temprana edad, en ocasiones antes de los 15 años. Asimismo, dentro de sus núcleos familiares se presentan una serie de dificultades que impactaron en su desarrollo. Al analizar los resultados de la encuesta aplicada durante el año 2019, en la que se evaluaron las condiciones familiares y educativas durante la infancia de las personas privadas de la libertad, se encontró que, en 2 de cada 10 casos, uno de los miembros de su familia ha estado o se encuentra privado de la libertad; generalmente, su padre o sus hermanos.

De forma general, las personas privadas de la libertad, reportaron que el ambiente familiar en su infancia fue positivo; sin embargo, a pesar de la aparente armonía imperante en el núcleo, estos, experimentaban problemas que impactaron de forma negativa en las condiciones de vida de sus integrantes. Entre las principales dificultades se encuentran aquellas de índole económico, problemas de alcoholismo en alguno de los integrantes, separación o divorcio de los padres o tutores y conductas agresivas.

Los internos, en 3 de cada 10 de los casos analizados, reportaron haber formado parte de pandillas durante su infancia, la mayor parte de estos, se integró a la misma con menos de 15 años; estas agrupaciones, por lo general, provocan la aparición de conductas delictivas en los adolescentes que, posteriormente, conllevan a que estos, deban ser reclusos en un centro penitenciario. De la misma forma, 1 de cada 10 personas privadas de la libertad mencionaron que también uno de los miembros de su núcleo familiar, formó parte de una pandilla.

Aunado a los aspectos anteriormente señalados, la cuarta parte de las personas privadas de la libertad encuestadas señalaron que fueron víctimas de violencia dentro de su familia durante el periodo de su infancia. Entre los principales tipos de agresiones sufridas por los internos se encuentran aquellas de índole física, verbal y psicológica; además, se presentaron casos de violencia sexual. En este mismo sentido, es importante indicar que, en la mayoría de los casos, los agresores son los padres de los internos.

La participación de la familia en la formación de cualquier persona es sumamente importante y, su apoyo, es fundamental para que este continúe con su formación, no solamente académica, sino como ser humano. Sin embargo, los aspectos antes expuestos incidieron de forma negativa en el desarrollo de los internos y, entre otros aspectos, dificultaron su avance académico. A largo plazo, estas dificultades y la falta de preparación educativa, en algunos casos, pudieron convertirse en un factor detonante de conductas delictivas en este sector de la población.

Con fundamento en estos aspectos, esta guía de trabajo se considera válida.

8. Las personas privadas de la libertad, se caracterizan por enfrentar condiciones de vida durante su infancia que limitaron sus oportunidades educativas y académicas; además, aspectos como agresiones familiares y también dentro de los planteles educativos, se convirtieron en un factor que impactó de forma negativa su formación escolar.

Al evaluar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad que participaron en la aplicación de la encuesta, se encontró que una cuarta parte de estos, fue víctima de violencia dentro de su núcleo familiar, principalmente de forma física, verbal y psicológica; entre los agresores de encuentran mayoritariamente el padre y la madre de los internos, además, en algunos casos, fueron varios los agresores. La violencia imperante dentro de los núcleos familiares de los internos, es un factor de amplia incidencia en el desarrollo personal y educativo de los internos encuestados.

Aun ante las situaciones que se vivían dentro de los núcleos familiares de las personas privadas de la libertad encuestadas, solamente 2 de cada 10 de estos, indicaron que no asistieron de forma regular a la escuela; además, afirmaron que el ambiente educativo, en 6 de cada 10 casos, era positivo y adecuado para su formación educativa; solo 3 de cada 10, tuvieron una mala evaluación. Asimismo, la mayoría de los internos afirmó que contó con apoyo de su núcleo familiar para llevar a cabo sus actividades educativas durante su infancia.

Sin embargo, a pesar de recibir apoyo familiar, la mayor parte de las personas privadas de la libertad, indicaron que, dentro de su núcleo, existieron problemas que incidieron de forma negativa en sus posibilidades de desarrollo educativo y académico; entre estos, los internos destacaron las dificultades económicas y la ausencia de alguno de

los padres. Estos factores, aun cuando existía un ambiente educativo positivo, se convirtieron en limitantes para que los internos pudieran continuar con su formación académica.

Aunado a las dificultades familiares, 2 de cada 10 internos encuestados, afirmaron que fueron víctimas de agresiones durante su formación educativa; es decir sufrieron situaciones violentas dentro del plantel educativo en el que se encontraban. Las agresiones que se presentaron con mayor frecuencia eran de tipo físico y verbal, aunque también existieron internos que sufrieron varios tipos de violencia proveniente, generalmente, de sus propios compañeros. Todos estos aspectos, además de dificultar el desarrollo de los internos durante su infancia, se convirtieron en factores que impidieron que tuvieran una formación adecuada.

Por las razones antes expuestas esta guía de trabajo se considera válida.

5.2. Recomendaciones

De acorde a los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas realizadas durante los años 2017 y 2019, y con fundamento en las opiniones de los expertos consultados para la realización de este trabajo, así como de la investigación tanto documental como de campo realizada para el presente trabajo, se establecieron las siguientes recomendaciones, enfocadas a brindar una mejor preparación educativa a las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca, conforme a lo previsto tanto en la legislación nacional actual, como en la normatividad internacional imperante.

1. Realizar un censo entre la población penitenciaria del CERESO Apodaca, para evaluar su situación educativa, sus expectativas y necesidades académicas, así como para analizar su realidad socio familiar y económica; con ello, se podrían establecer programas educativos en los que se reconozca un modelo en relación con la temporalidad de la ejecución de la sentencia aplicada en su proceso.

En este sentido, se reconoce que existen esfuerzos importantes por parte de las autoridades del CERESO Apodaca, de instituciones como el INEA y de organizaciones no gubernamentales para brindar oportunidades educativas a los internos; sin embargo, es necesario que estas se encuentren adaptadas a las necesidades y requerimientos de las

personas privadas de la libertad para ofrecer alternativas educativas que, cuando estos recuperen su libertad, les resulten útiles.

Los resultados de esta investigación muestran que los internos del penal de Apodaca son personas jóvenes y que cumplirán una sentencia promedio de 15 años; de esta forma habrá personas privadas de la libertad que cumplan su sentencia entre los 35 y los 40 años. Este aspecto evidencia la necesidad de ofrecer opciones educativas para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a mejores oportunidades laborales cuando recuperen su libertad.

En ese contexto, para el diseño de un programa educativo que cumpla tanto con las necesidades como con las expectativas de las personas privadas de la libertad, es necesario desarrollar y aplicar instrumentos específicos a través de los cuales sea posible conocer a profundidad estos aspectos. Los programas educativos dentro del CERESO Apodaca, deben permitir una disminución en el rezago académico que caracteriza a esta población y, además, capacitarlos internos para desempeñar oficios que les permitan generar ingresos económicos.

2. Gestionar ante las instancias correspondientes tanto del Estado, como de la Secretaría de Educación Pública y de Universidad del Estado de Nuevo León, el desarrollo y aplicación de un programa de educación media superior (bachillerato), para que las personas privadas de la libertad puedan dar continuidad a su preparación académica y, con ello, cumplir lo establecido en la legislación penitenciaria.

Los resultados de la encuesta aplicada indican un grado importante de interés de las personas privadas de la libertad por participar en actividades educativas; sin embargo, cuando estos cuentan con el nivel de secundaria (o lo concluyen dentro del penal), no existen alternativas educativas que le permitan continuar con su preparación, factor que provoca que estos ya no se integren a programas académicos.

Además, es importante establecer que la legislación operante actualmente en México, indica que dentro de los centros de reinserción social se debe de contar con el servicio de educación media superior, como una forma de que las personas privadas de la libertad tengan acceso a una mejor preparación educativa; los esfuerzos actuales resultan insuficientes.

Asimismo, en este mismo punto se recomienda el establecimiento de convenios con instituciones educativas y universitarias del estado de Nuevo León, que puedan proveer programas de bachillerato técnico para las personas privadas de la libertad y que, a su vez, puedan certificar los estudios realizados por estos.

3. Mantener una supervisión constante de las actividades educativas que se realizan en el CERESO Apodaca y de la eficiencia terminal de los internos participantes. Para ello, se sugiere un acompañamiento estrecho del departamento de Educación, Cultura y Deporte del penal, así como de otros departamentos relacionados, para establecer un esquema periódico para la detección y solución de problemáticas.

Se recomienda el diseño y aplicación de un esquema de seguimiento académico coordinado entre el departamento de Educación, Cultura y Deporte, así como el departamento de Trabajo Social del CERESO Apodaca, para mantener una vigilancia constante sobre la participación de las personas privadas de la libertad en las actividades educativas y de capacitación que se ofrecen dentro del penal.

Este esquema tendría la función de establecer las condiciones adecuadas para que la participación de los internos en la oferta educativa del penal sea constante y, con ello, se incremente la eficiencia terminal. Además, desde este programa deben establecerse las estrategias adecuadas para atraer a un mayor número de personas privadas de la libertad en actividades académicas.

Por otra parte, dentro de este mismo modelo de acompañamiento para la educación de los internos, es importante que se establezcan los mecanismos adecuados que permitan evidenciar el aprendizaje y el aprovechamiento de los internos para que, al concluir con los estudios que haya decidido cursar, este, pueda obtener el certificado correspondiente.

4. Diseñar e implementar una campaña a través de la cual los internos que forman parte de la comunidad penitenciaria del CERESO Apodaca, identifiquen la importancia de la preparación educativa en el proceso de reinserción social y, con ello, incentivarlos para que continúen con su educación o concluyan sus estudios truncos.

La Ley Nacional de Ejecución Penal, señala que en el proceso de reinserción social la educación es uno de sus ejes principales; en esta legislación se establece que la integración de las personas privadas de la libertad a actividades educativas no es

obligatoria y su participación es decisión de cada interno. Por este motivo, es necesario la implementación de una estrategia a través de la cual, los internos reconozcan la importancia de la educación en su proceso de reinserción social.

Actualmente, uno de los principales incentivos por el que las personas privadas de la libertad deciden integrarse a los programas académicos existentes dentro del CERESO Apodaca, es para la obtención del beneficio de preliberación, aspecto sumamente importante para los internos. Sin embargo, es necesario también para los internos identificar los beneficios que la educación y la capacitación laboral tendrán para ellos, una vez que recuperen su libertad.

Por tal motivo, es recomendable el establecimiento de una campaña o estrategia de sensibilización para que las personas privadas de la libertad, conozcan los beneficios y la utilidad que tiene la preparación educativa para su proceso de reinserción social, para su desarrollo humano y, a largo plazo, para posibilitar su acceso a oportunidades laborales mejor remuneradas; de esta forma, los internos podrán reconocer que además del beneficio de liberación anticipada, la educación se puede convertir en el fundamento de mejores condiciones de vida cuando recuperen su libertad,

5. Establecer vínculos de colaboración entre el CERESO Apodaca e instituciones educativas públicas y privadas, en el diseño e implementación de programas educativos y de cursos complementarios a través de los cuáles se fortalezca la preparación académica de las personas privadas de la libertad, principalmente, en áreas de capacitación técnica como computación, mecánica automotriz, electricidad y carpintería (por mencionar algunas) y en aspectos de desarrollo humano y personal.

Actualmente, las condiciones económicas y el presupuesto del CERESO Apodaca, no permiten el establecimiento de programas educativos pertinentes para una población penitenciaria de más de dos mil internos; por lo tanto, ha sido necesaria la participación de instituciones como el INEA y algunas organizaciones no gubernamentales para poder ampliar la gama de opciones académicas que se ofertan dentro de esta institución penitenciaria; sin embargo, esta resulta insuficiente.

Por tal motivo, es necesario que las autoridades del CERESO Apodaca, a través del departamento de Educación, Cultura y Deporte, establezca vínculos de colaboración

entre este penal e instituciones educativas y universidades del estado de Nuevo León, para el diseño e implementación de programas educativos y cursos complementarios para las personas privadas de la libertad, de forma que estos, puedan recibir una preparación integral.

Entre las principales áreas en las que se sugiere el desarrollo de estos programas educativos y cursos complementarios, en conjunto con instituciones educativas y universitarias de la localidad, se encuentran aquellos vinculados con el desempeño de oficios, tales como clases de computación, mecánica automotriz, electricidad, carpintería, desarrollo humano, redacción y habilidades interpersonales, mismas que han sido identificadas por las personas privadas de la libertad como más atractivas, interesantes y útiles para su desarrollo personal y profesional.

6. En materia de capacitación, se sugiere el diseño de programas enfocados al desarrollo de habilidades que permitan que las PPL, puedan ejercer un oficio cuando tras el cumplimiento de su sentencia, puedan recuperar su libertad, mismos que deben ser certificados y contar con el aval de instituciones educativas y universitarias.

Si bien es cierto que, dentro del CERESO Apodaca, existen actividades de capacitación laboral, esta se encuentra limitada a las actividades realizadas dentro de las maquiladoras que se encuentran instaladas dentro de este centro penitenciario y que, en ocasiones, no resultan de utilidad para la obtención de un empleo cuando el interno recupera su libertad; además, estas, no cuentan con ninguna certificación pertinente como evidencia del conocimiento adquirido.

Por tal motivo, es necesario que, de manera coordinada las autoridades del CERESO y las instituciones educativas y universitarias del estado de Nuevo León, establezcan programas de capacitación laboral que se planteen desde un fundamento realista y adaptado a las condiciones laborales actuales en la entidad. Para esto, se sugiere realizar un seguimiento de las principales demandas del sector laboral en materia de recursos humanos, de forma que los internos puedan recibir capacitación para desempeñarse en estas actividades.

Asimismo, es importante que, como parte de estos programas de capacitación para el trabajo, las instituciones educativas y universidades participantes, una vez que el interno

sea capaz de evidenciar las habilidades y/o conocimientos adquiridos, puedan certificar los estudios de las personas privadas de la libertad. Este certificado permitirá que los internos puedan demostrar su participación en actividades académicas dentro del centro penitenciario.

7. En cuanto al ámbito deportivo, se recomienda realizar programas conjuntos con organismos deportivos especializados que ayuden al crecimiento del interés en estas actividades en los internos y, acreciente en ellos, el espíritu de superación personal y la importancia del trabajo de equipo o de grupo; mientras que en lo que respecta al acceso a la cultura, se sugiere canalizar los talentos de los internos a través de cursos de literatura, pintura, dibujo y arte en general.

En este sentido, al analizar las opiniones de los expertos consultados para el desarrollo de este trabajo, se recomienda la contratación de especialistas en temas deportivos o entrenados especializados que, a través de cursos diseñados de forma específica para los internos, logren que estas actividades no sean consideradas solamente como un aspectos de entretenimiento o pasatiempo para los internos; sino como una actividad que requiere e implica responsabilidad, sentido ético y en las que se dimensione al deporte como una acción formativa.

En materia cultural, además de la canalización del talento y habilidades de las personas privadas de la libertad a través de cursos o prácticas artísticas; es recomendable, tal como se realiza en otros países, que se creen espacios para la venta de escritos, pinturas y obras artísticas de los privados de la libertad, constituyéndose en un ingreso económico para ellos y sus familias y, sobre todo, en toda una formación intelectual y espiritual que permite elevar en las personas su propia autoestima.

8. Formar un departamento de formación académica y educativa dentro del CERESO Apodaca que, de manera exclusiva y con el apoyo de expertos en el área educativa y con vinculación a instituciones educativas y universitarias, desarrolle planes y estrategias de preparación y formación para las personas privadas de la libertad y brinde un seguimiento a las actividades educativas y al aprovechamiento de los internos.

Durante la realización de las entrevistas con los expertos consultados para el desarrollo de este trabajo de investigación, se identificó que una de las deficiencias

existentes dentro del Centro de Reinserción Social Apodaca, es que este no cuenta con el personal especializado en pedagogía para el diseño de los programas educativos adecuados para la atención de la población penitenciaria de esta institución y que, actualmente, los cursos que se ofertan dentro de la institución son coordinados por el INEA o por el departamento de Educación, Cultura y Deporte de este centro; sin embargo, los esfuerzos han resultado insuficientes y no se adaptan a la realidad que viven los internos.

Por tal motivo, se considera necesario que se establezca un departamento específico e independiente donde se evalúe la situación académica de las personas privadas de la libertad en este centro penitenciario; ello a efectos de diseñar los programas educativos necesarios que permitan la atención de las necesidades educativas de los internos y que, a su vez, satisfagan sus expectativas de desarrollo académico y de capacitación para el trabajo.

Dentro de esta área es conveniente que trabajen en conjunto pedagogos y profesores especializados en el desarrollo de opciones educativas para población en situaciones de vulnerabilidad. Además, es recomendable que este nuevo departamento educativo establezca vínculos con otras instituciones educativas y con universidades de la localidad, para el fortalecimiento de los programas que se diseñen y para la certificación de los estudios que las personas privadas de la libertad realicen.

9. Como parte de trabajo realizado durante la estancia de investigación desarrollada en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, se establecieron una serie de recomendaciones enfocadas a la creación de una Unidad de Atención Psicopedagógica para los hijos e hijas de personas privadas de la libertad; dentro de esta, se sugiere que además se incluya un programa que permita que los internos del CERESO Apodaca desarrollen sus habilidades parentales y, con ello, establezcan mejores relaciones con sus descendientes.

Como parte de la oferta educativa que se brinda a las personas privadas de la libertad dentro del CERESO Apodaca, sería recomendable la inclusión, en lo que respecta a su formación básica, de cursos enfocados al desarrollo de habilidades y competencias parentales. Desde el punto de vista de la reinserción social, la educación para la familia

constituye un aspecto toral para sensibilizar a los internos sobre sus responsabilidades familiares y comunitarias; al mismo tiempo, esto permitiría que cuando la persona reclusa recupere su libertad y retorne a su núcleo familiar, lo haga con mayores posibilidades de éxito; inclusive, la participación de los internos en estos cursos podría considerarse dentro de la evaluación que se realiza para el acceso al derecho de preliberación.

El desarrollo de capacidades parentales en las personas privadas de la libertad también resulta benéfico para las personas que forman parte de su núcleo familiar, principalmente de sus hijos e hijas. Este tipo de educación, además de ayudar a establecer mejores relaciones interpersonales entre el interno y los miembros de su núcleo, permitirá el fortalecimiento de aspectos emocionales en los menores de edad; posibilitará un apego al sentido de la familia; ayudará a la formación de valores para evitar o disminuir el impacto de la estigmatización social de la cual suelen ser objeto.

En este mismo sentido, desde la Unidad de Atención Psicopedagógica, se recomienda la realización de un genograma de las familias de las personas privadas de la libertad, en el que se tomen en cuenta aspectos clave de las relaciones de los internos; esto permitirá que se diseñen cursos específicos donde el interno pueda tomar conciencia de su situación y conozca las formas en las que puede intervenir de forma positiva en la vida de sus hijos a través de su parentalidad. Entre los temas que podrían abordarse de estos cursos se encuentran aquellos vinculados de forma directa con la crianza de los menores, como su educación, responsabilidad familiar, adicciones y, sobre todo, en los que se establezca la idea de que la educación permite un mejor desarrollo personal y familiar.

Bibliografía y referencias

- Ainscow, M. y Miles, S. (2008) Por una educación para todos que sea inclusiva: ¿Hacia dónde vamos ahora? *Revista Perspectivas*, volumen XXXVIII, número 1, marzo 2008. p. 17–44.
- Alonso–Jiménez, L. (2011). Educación y desarrollo humano: hacia un modelo educativo pertinente. *Revista de Educación y Desarrollo*, 19.
- Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: ejes teóricos para su discusión. *Cuaderno de Ciencias Sociales FLACSO*, 127.
- Área, M. (1998). Una nueva educación para un nuevo siglo. *Revista Netdidáctica*, 1.
- Baratta, A. (1999). *Criminología crítica y crítica del derecho penal*. México: Editorial Siglo XXI.
- Bauman, Z. (2004). *Modernidad líquida*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Blazich, G. (2007). La educación en contexto de encierro. *Revista Iberoamericana de Educación*, número 44, mayo–agosto.
- Calvo, J. (2016). *Definición y caracteres de prisión en derecho mexicano*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). *Ley Nacional de Ejecución Penal*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2017). *Código Penal Federal*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2019). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*: Diario Oficial de la Federación.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2019). *Ley General de Educación*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Canfux, V. (2000). *La pedagogía tradicional*. Bolivia: Editorial Universitaria (Universidad Juan Misael Saracho).
- Castillo–Romero, J. (2012). *Sociología de la Educación*. México: Red Tercer Milenio.
- Cerda, E. y Jurado, V. (2017). Rezago educativo y carencia de recursos: Desafíos por afrontar en la agenda educativa penitenciaria. En Cerda, *Reinserción social: Entre*

- urgencias penitenciarias y normatividad jurídica. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Cerda, P. (2014). *Prisión y familia: Retos para la cohesión social del siglo XXI*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Cerda, P. (2015). *Vulnerabilidad y silencio: El impacto carcelario en las familias penitenciarias*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Cerda, P. (2017). *Reinserción social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica*. México: Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Christie, N. (1993). *La industria del control del delito ¿La nueva forma de Holocausto?* Argentina: Editores del Puerto.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2019). *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria*. México: CNDH.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2020). *Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2019*. México: CNDH.
- Córdova, C. (2016). Política de reinserción social en México: La cárcel y su potencial para la reincorporación de los delincuentes a la sociedad, 9 (18), 105–141.
- Cunjama, D., Cisneros, J. y Ordaz, D. (2012). *Prisión, reinserción social y criminalidad: Reflexiones sobre la situación carcelaria y la violencia en México*. España: Editorial Académica Española.
- Durkheim, E. (2002). *La educación moral*. España: Ediciones Morata.
- Elias, N. (2002). *Compromiso y distanciamiento*. España: Península.
- Flores–Michel, J., Frau–Meigs, D. y Velez, I. (2015). Educación en medios. Un problema mundial, *Ciencia UANL*, 18 (74), 33–37.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. (2008). *Un enfoque de la educación basado en los derechos humanos*. Estados Unidos: UNICEF.
- Foucault, M. (1989). *Vigilar y castigar*. México: Editorial Siglo XXI.
- García–Salcido, H. (2018). *Concepto del derecho a la educación en México, a partir de su génesis y evolución. Desde la Constitución de 1917 hasta la reforma en 2016 [Tesis de maestría]*. México: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

- García, D., Devis, J. y Sparkes, A. (2009) Deporte entre rejas, ¿Algo más que control social? *Revista Internacional de Sociología*, volumen 67, número 2, p. 391–412.
- Gobierno del Estado de México. (2006). *Penitenciaria modelo* [Versión electrónica]. Disponible en: http://sseguridad.edomex.gob.mx/penitenciaria_modelo
- Goffman, E. (2006). *Estigma: La identidad deteriorada*. Argentina: Amorrourtu.
- Gómez–Grillo, E. (2005). Evolución histórica de la cárcel. *Revista Relación Criminológica*, 14.
- Gomez, J. y Pernas, R. (2013) Educar en las cárceles: Nuevos desafíos para la educación social en las instituciones penitenciarias. *Revista Educación*, número 360, p. 36–47.
- González Rey, F. y Mitjáns, A. (1996). *La personalidad, su educación y desarrollo*. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- González–Serra, D. (2004). *Psicología educativa*. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.
- Horkheimer, M. (2000). *Teoría tradicional y teoría crítica*. España: Paidós.
- Institute for Crime and Justice Policy Research. (2019). *World Prison Brief*. Estados Unidos: ICPR.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. *Revista En Números (Documentos de análisis y estadística)*, 1 (11).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). *Resultados de la Encuesta Nacional a Población Privada de la Libertad*. México: INEGI.
- Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2020). *Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México*. México: INEGI.
- Kaplún, M. (2002). *Una pedagogía de la comunicación (el comunicador popular)*. Cuba: Editorial Caminos.
- Lozano, J. (2011). *Teoría e investigación de la comunicación de masas*. México: Pearsons.
- Machado, R. (2014). *Régimen de Educación de Penas*. España: EUROsocial.
- Materán, A. (2008). Las representaciones sociales: un referente teórico para la investigación educativa, 13 (2), 243–248.

- Moscoso, D., Pérez, A., Muñoz, V., González, M. y Rodríguez-Morcill, L. (2012) El deporte de la libertad. Deporte y reinserción social en la población penitenciaria en Andalucía. *Revista Anduli*, número 11, p. 55–69
- Moscovici, S. (1961). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Argentina: Huemul.
- Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2013). *Guía de introducción a la prevención de la reincidencia y la reintegración social de delincuentes*. Nueva York: Organización de las Naciones Unidas.
- Ojeda–Velázquez, J. (2012). *Reinserción social y función de la pena*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
- Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación. (2008). *Educación en prisiones en Latinoamérica: Derechos, libertad y ciudadana*. Brasil: UNESCO.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005). *La educación como derecho humano*. Estados Unidos: UNESCO, ITXEA.
- Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Estados Unidos: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas. (1977). *Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos*. Ginebra: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas. (2009). *Anotaciones a la agenda del 11º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos*. Estados Unidos: ONU.
- Organización de las Naciones Unidas. (2019). *Objetivos del Desarrollo Sostenible [Versión electrónica]*. Disponible en: <https://www.un.org/>.
- Palacios, P. (2012). *Criminología Contemporánea: Introducción a sus fundamentos*. México: Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- Ramírez, L. y Víctor, A. (2010). Educación para adultos en el siglo XXI: análisis del modelo de educación para la vida y el trabajo en México ¿avances o retrocesos? *Revista Tiempo de Educar*, 11 (21), 59–78.
- Rodríguez, A. y Sanza, T. (2000). *La escuela nueva*. Bolivia: Editorial Universitaria (Universidad Juan Misael Saracho).
- Rojas–León, A. (2014). Aportes de la sociología al estudio de la educación (autores clásicos). *Revista Educación*, 38 (1), 33–58.

- Rubio–Hernández, H. (2012). La prisión. Reseña histórica y conceptual. *Revista Ciencia Jurídica*. 1 (2).
- Scarfó, F. y Aued, V. (2013). El derecho a la educación en las cárceles: Abordaje situacional. *Revista Reveduc*, 7 (1).
- Schoemaker, P. y Reese, S. (1991). *Mediating the message, theories of influences on mass media content*. Estados Unidos: Longman Editions.
- Schunk, D. (2012). *Teorías del aprendizaje: una perspectiva educativa*. México: Pearsons.
- Secretaría de Educación Pública. (2009). *La estructura del sistema educativo mexicano*. México: Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.
- Secretaría de Gobernación. (2019). *Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024*. México: Diario Oficial de la Federación.
- Tedesco, J. (1993). *Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social*. España: Paidós.
- Urzúa, R., De Puelles, M. y Torreblanca, J. (1995). *La educación como factor de desarrollo*. Argentina: V Conferencia Iberoamericana de Educación.
- Venguer, L. (1983). *Temas de psicología preescolar*. Cuba: Editorial Pueblo y Educación.

Anexos

Anexo 1. Reconocimiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León por el trabajo realizado dentro del proyecto titulado Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de PPL.



**Secretaría
de Seguridad
Pública**
Nuevo León Siempre Ascendiendo

Monterrey, Nuevo León, 10 de febrero de 2020.

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Sistema Nacional de Investigadores P R E S E N T E.-

Por este medio extendiendo la presente constancia y a su vez certifico la calidad de la investigación coordinada por la Doctora Patricia Liliana Cerda Pérez, (Catedrática e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León) en la que, bajo una perspectiva de análisis multidisciplinario, donde además participan otros investigadores y estudiantes de posgrado del nivel de doctorado, permitirá el desarrollo de un programa de intervención enfocado a mejorar las condiciones educativas, académicas y sociales de los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, en los centros de reinserción social del estado de Nuevo León.

El trabajo, titulado "Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de Personas Privadas de la Libertad: Programas de apoyo para infantes y adolescentes en vulnerabilidad", plantea que además de la participación del núcleo familias de las personas que tienen la responsabilidad de los menores, hijos e hijas de PPL, es necesario impulsar una visión holística donde se establezcan unidades de atención psicopedagógica para infantes y adolescentes en vulnerabilidad derivada de que sus padres o madres estén encarcelados; estos enfrentan condiciones de desigualdad social y la carencia de programas sociales y políticas públicas donde se atiendan los rezagos, deserciones o reprobación en asignaturas dentro de los niveles básicos de primaria y secundaria, así como de preparatoria.

El objetivo de este proyecto de investigación parte de una premisa en la que se establece que, desde una perspectiva socioeducativa, los hijos e hijas de las personas que integran la comunidad penitenciaria de Nuevo León, son los principales ejes de la familia que resultan afectados en su ciclo de formación académica tras la reclusión de sus padres o tutores. El encarcelamiento de los padres o tutores, frena las expectativas de desarrollo escolar, en infantes y adolescentes, propiciada tanto por la falta de recursos socioeconómicos, como psicopedagógicos y parentales que los fortalezcan. Lo anterior genera discapacidades sociales que impactan directamente en el aprovechamiento escolar de estos núcleos infantiles y juveniles.

Calle Félix U. Gómez 2223 Norte
Col. Reforma
Monterrey, Nuevo León
CP 64450

nl.gob.mx/seguridad
(81) 2020.3600
sspnl@nuevoleon.gob.mx

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Secretaría de Seguridad Pública

Nuevo León | Siempre Ascendiendo

En este documento, además de diagnosticar las condiciones educativas de los infantes y adolescentes que viven las consecuencias de la privación de la libertad de uno de sus padres, se establecen las directrices para el desarrollo de un programa de intervención a través del cual se garantice que los hijos e hijas de internos logren un desempeño educativo positivo. Luego de examinar tanto las condiciones socioeconómicas e historias de vida familiar de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, como la situación socioeconómica y familiar de los menores hijos de PPL, y de quienes tienen bajo su responsabilidad, la crianza de estos niños/niñas y adolescentes, se identificaron cuatro ideas centrales:

1. Activación de programas específicos y políticas sociales destinadas a los menores que enfrentan vulnerabilidades y discapacidades sociales, al ser hijos e hijas de PPL.
2. Establecer una política social para infantes en vulnerabilidad donde se prioricen programas psico educativos y sociales a través de los cuales se abatan los índices de rezago, reprobación o abandono escolar.
3. Los programas previstos dentro del proceso de reinserción social para las personas privadas de la libertad debe incluir el desarrollo de habilidades y competencias parentales.
4. Incluir a los familiares cuidadores en un esquema de habilidades parentales para fortalecer aspectos importantes en la estabilidad emocional de los menores en esquemas de autoestima.

Estas directrices, a su vez, requieren de una serie de indicadores para la operación de un programa de intervención desde el Estado, bajo una perspectiva de educación inclusiva integral para menores hijos e hijas de personas privadas de la libertad; entre estos se encuentran:

- Realizar un censo sobre las condiciones socio educativas, económicas y familiares de niños, niñas y adolescentes menores hijos de personas privadas de la libertad.
- Establecer programas específicos de acompañamiento desde las Unidades de Asesoría Psicopedagógicas de la SEP, donde se apoye a los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, menores de edad que suelen transitar por esquemas de vulnerabilidad y discapacidad social, desde el momento de la detención de su padre/madre; el periodo de su encarcelamiento y durante la liberación del mismo.
- Desarrollo de habilidades parentales de las personas privadas de la libertad.
- Apoyos a la familia extensa o a los cuidadores, responsables de la crianza de menores que son hijos e hijas de personas que están privadas de la libertad.
- Competencias parentales para los cuidadores de hijos e hijas de internos de personas privadas de la libertad.

Calle Félix U. Gómez 2223 Norte
Col. Reforma
Monterrey, Nuevo León
CP 64450

nl.gob.mx/seguridad
(81) 2020.3600
sspnl@nuevoleon.gob.mx



Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Secretaría de Seguridad Pública

Nuevo León Siempre Ascendiendo

La calidad de las investigaciones que satisfactoriamente coordinó la doctora Cerda Pérez, ha permitido que los resultados de las mismas se conviertan en un apoyo en las tareas que desde el campo del desarrollo social despliega el Estado de Nuevo León para mejorar las condiciones de vida de los hijos e hijas de personas privadas de la libertad. Además, coadyuvaron para que, desde el campo de la investigación, se generara un conocimiento que impacta positivamente para la elaboración de programas y políticas de apoyo para la comunidad penitenciaria de Nuevo León, a través de acciones concretas de las autoridades responsables del ramo.

Para finalizar, es importante destacar que en la elaboración de este proyecto, la Dra. Cerda Pérez, coordinó las actividades desarrolladas por dos candidatos al grado de Doctor en Filosofía con orientación en Comunicación e Innovación Educativa (M.C. Emma Cerda Pérez y M.C. José Gregorio Jr. Alvarado Pérez), durante un periodo de estancia de investigación desarrollado entre los meses de julio y agosto de 2019, en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Algunos de los resultados de este proyecto se desprenden del trabajo de tesis realizado por ambos estudiantes bajo la dirección de Cerda Pérez.

En mi calidad de Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, agradezco la labor que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología realiza para alentar trabajos como los anteriormente descritos entre los miembros de la comunidad científica.

Atentamente.-

LIC. ALDO FASCI ZUAZUA

Secretario de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León

Calle Félix U. Gómez 2223 Norte
Col. Reforma
Monterrey, Nuevo León
CP 64450

nl.gob.mx/seguridad
(81) 2020.3600
sspnk@nuevoleon.gob.mx

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Anexo 2. Programas de apoyo para infantes y adolescentes en vulnerabilidad. Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de Personas Privadas de la Libertad

Este proyecto forma parte de las actividades desarrolladas dentro de la estancia de investigación realizada por el M.C. José Gregorio Alvarado Pérez y por la M.C. Emma Cerda Pérez en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León coordinadas por el Dr. Juan Antonio Caballero Delgadillo (miembro del S.N.I y co asesor de este proyecto de tesis) y por la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez (miembro del S.N.I. y directora de este proyecto de tesis).

Este programa de intervención para el apoyo psicopedagógico de los hijos e hijas de personas privadas de la libertad en el estado de Nuevo León, tiene como finalidad el fundamento de los puntos de atención específica que requieren los infantes en el ámbito educativo ya que son una población sujeta a discapacidades sociales que afectan su aprovechamiento académico; el mismo, que se desprende de los diversos libros respecto a la realidad penitenciaria realizados por la Dra. Cerda Pérez y del trabajo realizado por Alvarado Pérez durante la estancia de investigación. En su desarrollo incluye una visión que representa una alternativa para brindar mejores oportunidades de desarrollo educativo a los niños, niñas y adolescentes que sufren las consecuencias de la privación de la libertad de uno de sus padres y, con ello, les permitirá, en el futuro, contar con mayores posibilidades para su crecimiento social y profesional.

Este proyecto, que cuyo registro de ISBN se encuentra en trámite y que se dará a conocer en una fecha posterior, presenta una serie de indicadores encaminados a la creación de estrategias específicas para la atención psicopedagógica de los hijos e hijas de personas privadas de la libertad; mismas que se desprenden del análisis de las condiciones socioeconómicas y de las historias de vida de quienes componen estos núcleos.

Introducción

A nivel internacional, la educación de los niños y niñas es una prioridad; reducir la brecha de conocimiento y las desigualdades en el ámbito educativo es uno de los aspectos prioritarios que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, considera como fundamental para el desarrollo social y el crecimiento de todas las naciones. Sin embargo, existen aspectos que dificultan el acceso a oportunidades educativas a los infantes y adolescentes; una de ellas, es cuando se presenta la privación de la libertad de uno de sus padres o de ambos progenitores.

La reclusión es una problemática que se extiende más allá de los muros de un centro de reinserción social. Su impacto se traduce en la existencia de carencias económicas, inestabilidad emocional y, en general, en la acentuación de las condiciones de vulnerabilidad de las familias de personas privadas de la libertad. En este contexto, cuando el recluso es el padre o madre, los menores de edad, hijos e hijas de internos penitenciarios, son los principales afectados, sobre todo, en su desarrollo familiar, escolar y académico.

Estos núcleos, caracterizados por ingresos económicos bajos y por un nivel educativo básico, se reorganizan para mantener la estabilidad y poder hacer frente a las nuevas necesidades de la familia. Esta situación que provoca que, en ocasiones, la educación de los menores sea dejada en segundo plano para afrontar aspectos aparentemente más urgentes.

Para los menores de edad, la reclusión es un factor que incide directamente en el aspecto emocional y anímico; principalmente, por la ausencia de uno de sus padres. Esta situación activa en no pocos menores y adolescentes, condiciones de depresión, miedo, ansiedad y otra serie de complicaciones en su estado de ánimo que, en algunos casos, pueden convertirse en padecimientos que llevan estos menores a enfrentar una discapacidad psicosocial, misma que impacta de forma negativa en su aprovechamiento escolar.

Aunado a estos hechos, los núcleos familiares de las personas privadas de la libertad en el estado de Nuevo León enfrentan la falta de políticas públicas específicas que les permitan hacer frente a las carencias que viven. En el ámbito educativo, además de becas y apoyo económico para aspectos como útiles escolares o uniformes, los menores de edad requieren acompañamiento estrecho y especializado a lo largo de su educación; hasta ahora, se carece de programas de atención psicopedagógica permanentes y sistemáticos que de manera holística atiendan a hijos/hijas de internos penitenciarios, en sus problemas de rezago, deserción o reprobación de grados y cursos, a través de los cuales se aumenten sus posibilidades de desarrollo social.

Asimismo, quienes tras la reclusión ejercen la tutela de los menores de edad, no cuentan con algún programa de apoyo que les permita ejercer esta función de manera adecuada dentro del contexto de la privación de la libertad de uno de los miembros de su familia. Diversos estudios señalan que las problemáticas derivadas de la reclusión provocan que la atención de estos núcleos se centre el estatus jurídico del interno y en sus necesidades e, inclusive, llevan a la colectivización del trabajo para mantener la estabilidad económica.

Las repercusiones que se viven dentro de los núcleos familiares de las personas privadas de la libertad y la falta de programas y políticas públicas para su atención provocan —en ocasiones— el alejamiento y la involuntaria falta de atención para los menores de edad. Aun cuando investigaciones realizadas al respecto indican que la educación de los hijos e hijas de internos es un aspecto muy importante para quienes los tutelan, las carencias económicas y las necesidades del interno son aspectos que limitan la posibilidad de brindarles mejores oportunidades educativas.

El presente trabajo plantea que además de la participación del núcleo familiar de las personas que tienen la responsabilidad de los menores, hijos/hijas de personas privadas de la libertad, es necesario, impulsar una visión holística, donde se establezcan unidades de atención psicopedagógica específicamente para infantes y adolescentes que transitan en la vulnerabilidad de que sus padres o madres estén encarcelados; en la desigualdad social y en la carencia de políticas sociales y programas sistemáticos donde se atiendan los rezagos, deserciones o reprobación en sus unidades de aprendizaje dentro de los niveles básicos de primaria y secundaria, así como de preparatoria.

Dentro de esa misma visión integral, el presente documento propone que las personas privadas de la libertad, tengan, aún en su contexto de reclusión, el acceso a esquemas de formación que les permitan el desarrollo de una parentalidad positiva con sus vástagos y que, en aquellos expedientes de internos/internas, en donde por el tipo de delitos cometidos no se ponga en riesgo la seguridad e integridad de los menores, se activen dentro de los programas previstos de reinserción social

para la comunidad penitenciaria, vínculos de comunicación y apoyo entre padres/madres e hijos de PPL, a través de la impartición de cursos para el ejercicio de una parentalidad positiva.

La educación de los menores de edad que enfrentan las consecuencias de la privación de la libertad depende de la participación de las personas que los cuidan, así como de la colaboración de sus padres, aun cuando se encuentren dentro de un centro de reinserción social.

Enmarcado sobre el concepto de la inclusión educativa, los lineamientos descritos en el presente programa se orientan a la formulación de una propuesta de intervención para el desarrollo de una Unidad de Atención Psicopedagógica en los centros de reinserción social de Escobedo (femenil) y en el de Apodaca (varonil), en el que se desarrollen y apliquen programas de apoyo para infantes y adolescentes en vulnerabilidad, así como para el desarrollo de habilidades parentales. Además, desde esta unidad, se proyecta la realización de un censo a través del cual puedan conocerse a profundidad las condiciones familiares, económicas, socioeducativas y académicas de los menores de edad.

Este proyecto de intervención se fundamenta conceptualmente en un esquema de análisis sustentado en un modelo ambiental integrado por cinco núcleos, mismos que se cimientan en diversas investigaciones realizadas entre los años 2014-2019, en torno al sistema penitenciario en el estado de Nuevo León; entre estos se encuentran:

En este sentido, el presente trabajo se fundamenta conceptualmente en un esquema de análisis sustentado en un modelo ambiental integrado por 5 núcleos:

- El sistema penitenciario y las familias.
- Situación y condiciones sociofamiliares y educativas de los hijos/hijas de internos penitenciarios, desde información generada por la familia extensa y/o los responsables cuidadores de infantes y adolescentes hijos de PPL.
- Antecedentes y perspectivas de desarrollo socioeducativo y familiar de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, así como las opiniones de las personas privadas de la libertad, sobre las necesidades socioeducativas de sus hijos/hijas.
- El Sistema educativo, rezagos, deserción y educación en grupos vulnerables.
- Justificación y motivación para el impulso de programas socioeducativos dirigidos a los hijos e hijas de personas privadas de la libertad en Nuevo León.

Este proyecto tiene como objetivo principal identificar las condiciones sociales de las familias de internos penitenciarios del CERESO Apodaca (femenil) y de Escobedo (varonil); así como sondear cuáles son los tipos de apoyo y de atención escolar requeridos por los hijos e hijas de internos penitenciarios. Desde la fundamentación de este proyecto se establece que estos menores son una población que, en un momento determinado, puede desarrollar discapacidades sociales que afectan su aprovechamiento académico.

La creación de una Unidad de Atención Psicopedagógica permitirá brindar atención a la población infantil, hijos e hijas de personas privadas de la libertad quienes, tal como se analizará a lo largo de este documento, no solamente viven bajo un esquema de bajo ingresos, sino que enfrentan una vulnerabilidad de tipo social. Para estos niños y niñas, la ausencia de sus padres, la desigualdad social y las carencias en materia de programas de atención y apoyo los coloca en un contexto donde su educación y desarrollo se encuentran comprometidos; motivo por el cual se justifica y fundamenta la implementación de apoyos psicopedagógicos específicos para su atención.

Premisa

Bajo una perspectiva socioeducativa, los hijos e hijas de las personas que integran la comunidad penitenciaria de Nuevo León son los principales ejes de la familia que resultan afectados en su ciclo de formación académica tras la reclusión de sus padres o tutores. El encarcelamiento de los padres o tutores frena las expectativas de desarrollo escolar, en infantes y adolescentes, propiciada tanto por la falta de recursos socioeconómicos, como psicopedagógicos y parentales que los fortalezcan. Lo anterior genera discapacidades sociales que impactan directamente en el aprovechamiento escolar de estos núcleos infantiles y juveniles.

Objetivos

- Delinear las condiciones socioeconómicas y familiares que prevalecen entre los núcleos de familia en cuyo seno, alguno de sus miembros, está privado de la libertad en los penales masculino, de Apodaca y femenino, de Escobedo.
- Explorar cómo son las condiciones en las cuales se desenvuelven familiar y educativamente los menores que son hijos o hijas de personas privadas de la libertad en los penales de Nuevo León, desde las opiniones de quienes son los responsables cuidadores de estos menores.
- Delimitar los antecedentes y perspectivas de desarrollo socioeducativo y familiar de las personas privadas de la libertad en la entidad y, sondear sus opiniones respecto de los tipos y casos de atención socioeducativa educativa que requieren sus hijos/as.
- Examinar documentalmente los esquemas previstos dentro del sistema educativo mexicano para el abordaje de casos de rezagos, deserción y educación en grupos vulnerables, enfatizando en los núcleos configurados por niños/niñas y adolescentes, hijos/hijas de personas privadas de la libertad.
- Fundamentar los puntos de atención específica que requieren los hijos e hijas menores de personas privadas de la libertad dentro del ámbito educativo, al ser una población sujeta a discapacidades sociales que afectan su aprovechamiento y oportunidades educativas

Metodología

Para la realización del presente programa se utiliza una metodología donde se incluyen técnicas propias de la investigación social como son:

1. Documentales.
2. Encuestas a 180 internos del penal varonil de Apodaca y 162 mujeres del penal femenino de Escobedo, levantadas en campo durante el mes de julio del 2019.
3. Análisis de fuentes bibliográficas, hemerográficas y de carácter oficial, vinculados a los 5 núcleos temáticos del modelo ambiental a partir del cual se fundamenta el presente trabajo.

Elementos contemplados dentro del programa de intervención

- Condiciones socio económicas y educativas de los internos penitenciarios y sus familias.
- Derechos de familia y de los menores dentro del ámbito del bienestar social y educativo.
- Condiciones de desarrollo socio educativo y familiares de las personas privadas de la libertad y su relación con hijos/hijas.
- Educación y grupos en vulnerabilidad.
- Motivaciones para fortalecer la educación de hijos de PPL desde el derecho a la educación y la realidad enfrentada por familias penitenciarias en Nuevo León.

Impacto y beneficiarios

Los impactos que el encarcelamiento de una persona trae al individuo, han sido documentados ampliamente durante las últimas décadas. Desde las disciplinas vinculadas a la Criminología, la Sociología, la Psicología y la Psiquiatría, se debaten teorías y enfoques que permiten tener una mayor claridad sobre las múltiples aristas a considerar cuando se estudian los impactos que el sistema carcelario tiene, sobre quienes viven dentro de una comunidad penitenciaria.

Como contraparte, en México, la literatura y estudios relacionados con los impactos económicos, emocionales, familiares y educativos que la cárcel conlleva para la familia de los internos, para sus hijos/as; cónyuges y padres, entre otros, son escasos.

Subsiste en el país, dentro del ámbito de la investigación, un déficit en materia de estudios que permitan ahondar en el conocimiento de los efectos que el encarcelamiento trae al núcleo familiar de las personas privadas de la libertad, sobre todo en los ámbitos de bienestar y desarrollo, los cuales permitan estar al tanto del estado y condiciones de estas familias. Tales déficits en esta área del conocimiento frenan y, en ocasiones hasta nulifican, la posibilidad de establecer programas y políticas públicas donde se abatan no sólo la pobreza económica compartida por gran parte de los internos e internas del sistema penitenciario y sus familias, sino también la desigualdad social que profundiza aún más sus propias líneas de pobreza.

En México, como en múltiples países del mundo, las penas privativas de la libertad son ejecutadas teniendo como base el propósito de la reinserción social de las personas que delinquen, y con ello, evitar la reincidencia, haciendo énfasis especial en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018). La reinserción social es vista como un objetivo a lograr en cada persona privada de la libertad, en su proceso para reintegrarse a la sociedad; esto constituye un enfoque vanguardista dentro del derecho penal mexicano.

Sin embargo, los efectos que la cárcel trae para las familias de quienes están encarcelados, en las áreas económicas, emocionales y educativas, entre otras, no cuentan con políticas sociales y programas claros y permanentes donde se frenen las condiciones precarias que suelen caracterizar a estos núcleos, no sólo porque el trabajo en ellos, suele colectivizarse y las cargas son absorbidas incluso por los hijos/as de los internos/as; tales olvidos o poca atención institucional, conllevan el riesgo de que la pobreza generacional se recicle en círculos familiares donde el delito, entró ya a su casa y provocó, entre otros factores discutibles, el encarcelamiento de uno de sus miembros.

La mayor parte de los artículos que se elaboran, fundamentan y sostienen los códigos civiles que rigen a las diversas entidades del país, puntualizan que la alimentación, la salud, la educación y el sano esparcimiento y convivencia, aseguran a las familias erigirse en una fuente primaria para el impulso de valores, hábitos, costumbres y educación, donde se favorece el desarrollo físico, emocional y académico de los menores de edad. La familia, núcleo central de la sociedad, es la célula que permite a la colectividad el desarrollo social a través del cual se da pie al bienestar de los individuos y sus entornos inmediatos.

En el caso de las familias de internos, los conflictos económicos, emocionales y de alteraciones psíquicas, desencadenados por la detención o internamiento de uno de sus miembros, pueden variar en sus dimensiones y magnitudes, dependiendo no sólo de la condición jurídica en la cual se encuentra uno de los suyos, sino también de las capacidades tanto psicológicas, como de los soportes económicos y de las redes y apoyos sociales que las familias tengan.

Tal como lo establecen diversos análisis elaborados tanto internacional como nacionalmente en estudios dados a conocer por Rogowski, Michael Chauvel y Fleur (2009); Pérez (2014); García Borés (2006) y Robertson (2007), los aspectos en los cuales se ven mayormente afectados las familias de internos versan sobre la imagen de sí mismo/a; además de alteraciones en sus estados psíquicos, emocionales, actitudinales, afectivos y sexuales.

Autores como Hagan y Dinovitzer (1999) precisan diferencias considerables entre perder por lo menos temporalmente a una madre y a un padre, así como el impacto que estas circunstancias tiene en sus hijos. En el caso de las mujeres privadas de la libertad, el encarcelamiento de una madre en los hijos resulta más significativo por el riesgo siempre latente de que éstos sean removidos de su hogar para pasar al cuidado de familiares o del Estado, para la familia “es una carga económica y emocional inesperada con resultados muchas veces subóptimos”.

Una investigación elaborada en base a encuestas aplicadas durante los años 2002, 2005, 2009 y 2013, a 5,220 personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la Ciudad de México y del estado de México (Bergman et al, 2014), revela que 7 de cada 10 internos en las cárceles de México, tienen hijos. En otros análisis hechos a propósito de este tema, se señala que en promedio el 60.6% de los internos penitenciarios tienen entre 1 y 2 hijos/as; 32.5% tienen entre 3 y 4 hijos y 6.5%, reportó tener aún más. Esta misma investigación indica que en un 66.3% de los casos, las PPL vivían con ambos padres antes de la detención y 24.0% sólo con la madre. Un 67.1% de los internos varones señalaban que sus hijos vivían con la madre de sus vástagos y el 16.0% con los abuelos (Pérez, 2014).

Algunos estudiosos del tema indican que los efectos emocionales en los hijos/as de personas privadas de la libertad varían, dependiendo entre otros factores, de las edades. Entre los hallazgos emanados de una investigación realizada en Nueva Zelanda, se encontró que los niños entre 0 y 3 años de edad, enfrentaban fundamentalmente ansiedad por separación y poco apego al padre encarcelado; los infantes entre 4 y 7 años, presentaban enuresis (orinaban su cama en la noche); pesadillas; ansiedad por la separación; agresividad y poco compromiso escolar; entre 8 y 10 años, también padecían agresividad, depresión y ausentismo escolar; los ubicados entre 11 y 15 años podían ser violentos y se ausentaban de la escuela (Rogowski y Chavel, 2009). Estudios elaborados por Pérez (2014), en las cárceles de la ciudad de México y en el Estado de México, aunque no especifican las alteraciones observadas por grupos de edad, asientan que, tras la detención, el 34.2% de los hijos/as de internos/as habían tenido problemas en la escuela; 34.2% presentaban problemas de conducta; 27.8% tenía problemas de salud y 27.5% observó problemas de ansiedad.

La privación de la libertad de uno de los integrantes de la familia es un evento que afecta tanto a adultos como niños de ese núcleo, provocando temores, ansiedad y depresión. En el caso de los menores, al no detectarse a tiempo, ignorarse o no atenderse tanto por la propia familia, como por quienes se desempeñan dentro del campo educativo, en los propios planteles a donde asisten los infantes y adolescentes o por los diversos gabinetes que, desde la Secretaría de Educación Pública, se tienen para población en algún tipo de vulnerabilidad, se tiene el riesgo de que se altere y lesione el desempeño físico, emocional, académico y social de los menores.

En México y concretamente, en el estado de Nuevo León, los derechos de los niños/as y adolescentes, son considerados como la fundamentación y prioridad a establecerse dentro de los programas, planes y políticas de desarrollo. En este sentido, la población infantil, hijos/as de la comunidad penitenciaria, no sólo vive mayoritariamente bajo esquemas de pobreza económica, tal como se destaca en los apartados subsiguientes de la presente investigación, también viven esquemas de vulnerabilidad social generada por el encarcelamiento de alguno de sus progenitores.

Estas condiciones, generan a estos niños/as, riesgos emanados no sólo por la ausencia de las figuras paterna o maternas en su cotidiano vivir, sino que, además, la desigualdad social y la falta de programas y políticas dirigidas a menores con padres en encarcelamiento, coloca a dichos infantes y adolescentes, bajo contextos de discapacidad social en áreas como educación y desarrollo.

En Nuevo León, si se considera que para el 2019, la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, calculaba la población penitenciaria en 6,508 personas y el número de hijos/as de es decir aproximadamente 13,316 menores. Estos infantes/adolescentes, podrían beneficiarse, al ampliarse los programas y políticas de apoyo educativo actuales, priorizando y considerando a tales núcleos, como infantes y adolescentes que viven desigualdad y discapacidad social, tal como se propone en el presente estudio.

I. El sistema penitenciario y las familias

I.1. La prisión y sus efectos en las familias de personas privadas de la libertad, en Nuevo León

A lo largo de poco más de un lustro, se han desarrollado diversos estudios sobre las condiciones imperantes dentro de la comunidad penitenciaria de Nuevo León y de sus familias (Cerde, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), a través de los cuales se evidencia la existencia de diversas y múltiples variables asociadas a las vulnerabilidades de distintas índoles, latentes en las familias en cuyo seno existe una o más personas encarceladas.

Dentro de los factores de riesgo comprobados en estas investigaciones están la fragilidad económica, vinculada tanto a pobreza como a pobreza extrema, las cuales llevan a tales núcleos familiares a la “colectivización” del trabajo, donde niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores, deben trabajar para sacar adelante la economía del hogar, una vez que el padre o la madre o ambos (en algunos casos), están en la prisión. La colectivización del trabajo se presenta en el 86% de las familias de internos penitenciarios (Cerde, 2015).

En dichos estudios se ha señalado que en un 80% de las familias penitenciarias (Cerde, 2014), se generan gastos extras derivados del hecho de que uno de los suyos está internado o internada dentro de los penales de Nuevo León. Ante la ausencia de salarios decorosos y prestaciones sociales, para quienes desempeñan algún tipo de trabajo dentro de las cárceles de Nuevo León y del país, las familias suelen hacerse cargo del pago de trámites legales de la persona privada de la libertad; transporte para la visita semanal al penal; desembolsos para alimentación, productos de higiene de las personas privadas de la libertad y, en algunos casos, sostenían, se paga hasta para la “seguridad física” del interno y/ o la interna.

De forma mayoritaria, estas familias encuentran en el ejercicio de la economía informal, el modo para solventar sus gastos como núcleo, así como aquellas erogaciones extraordinarias, generadas por la vida en prisión de unos de los suyos. La ayuda del Estado, hasta el año 2015, en alguno de los programas previstos para grupos en pobreza o vulnerabilidad era apenas recibida por 3 de cada 10 familias. En 8 de cada 10 familias subsisten también problemas como ansiedad, temor, depresión, vergüenza y sentido de culpa, entre otros estados anímicos.

En 151 entrevistas efectuadas en el año 2015 (Cerde, 2015) a familias de internos penitenciarios, se detectó que el 62.4% de ellas (6 de cada 10), devengaban un salario mensual inferior a los \$3,000 pesos; en el 29.1% de los casos, su ingreso se ubicó entre 3 y \$6,000 pesos mensuales. Poco más del 50 por ciento de ellas, carecen de vivienda propia, por lo que están sujetos al pago

de renta o a vivir con familiares. El rubro de mayor impacto en sus gastos es el alimenticio (83,1%; seguido por el pago de servicios (50.0%); salud y vivienda (46.0%); transporte (43.0%) y educación (30.0%). En estas familias, un 40.0% apenas concluyó estudios de secundaria; 38.4% sólo la primaria; 9.0% terminó la preparatoria; 1.3% una carrera técnica y 2.6% no tiene educación de ninguna índole. Estos datos coinciden con las descripciones hechas internacionalmente por autores como Rosenbluth y Krupart (2007), al sustentar que la vulnerabilidad económica y social de las familias de internos penitenciarios, ya existía de manera previa al encarcelamiento de uno de sus miembros. La pobreza infantil entre los hijos de población carcelaria se erige así en un esquema de pobreza intergeneracional.

Al analizarse las condiciones de 151 familias de internos, se encontró que una tercera parte de tales familias está constituida por los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad. Más de la mitad de los niños y adolescentes hijos de internos e internas, se encuentran en la edad para recibir educación formal; un 33.0% de estas familias manifiesta tener problemas económicos para desarrollar plenamente sus tareas educativas (Cerde, 2015). Los costos individuales, económicos y educativos, así como sociales que la cárcel trae a las familias significan un gran peso para los adultos que se hacen cargo de infantes y adolescentes y también para los menores; con ello, se tiene una merma significativa sobre el capital social de Nuevo León y del Estado mexicano moderno.

Hasta ahora, se carecen de políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos de hijos de internos e internas privados de la libertad en los de 267 penales que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica operan en el país (INEGI, 2017). La violación de tales derechos incluyen a aquellos que asisten tanto a los niños menores de 3 años que viven con sus madres en los penales de México (Cerde, 2016) como aquellos que asisten a de infantes y adolescentes, hijos/hijas, de encarcelados y encarceladas, cuya tutoría recae en esposas, esposos, abuelos, tíos o parientes, de las personas privadas de la libertad, quienes se ven sumergidos en la ausencia de políticas públicas que les ayuden en medio de su pobreza económica, a solventar gastos de alimentación, salud, educación y bienestar para los menores.

Dentro de los programas de apoyo en el combate a la pobreza y la vulnerabilidad que esta condición conlleva, se vive la ausencia de políticas públicas que específicamente se diseñen para respaldar a los hijos e hijas de personas privadas de la libertad. Asimismo, los ingresos generados por las personas privadas de la libertad no son suficiente para apoyar a su núcleo familiar; mientras que los ingresos de quienes integran estos grupos de familia se ven afectados por atender las nuevas necesidades emergentes a raíz de la reclusión.

En el texto “Reinserción social: Entre urgencias penitencias y normatividad jurídica” (Cerde, 2017) y en “Mujeres y Reinserción Social: La trasgresión de los derechos de género en la realidad penitenciaria” (Cerde, 2018), se describe y analiza la realidad laboral que enfrentan las personas privadas de la libertad en los centros de reinserción social del estado de Nuevo León. En lo que corresponde a oportunidades de trabajo, dentro de estas instalaciones de seguridad, las condiciones se alejan de los lineamientos establecidos tanto a nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (2002) y del mismo Estado mexicano.

Los resultados de la aplicación de una encuesta a una muestra representativa tanto del Centro de Reinserción Social “Apodaca” (varonil); como del Centro de Reinserción Social “Topo Chico”

(Femenil)¹ (312 internos y 172 internas), indican que el trabajo penitenciario es un elemento valorado por las personas privadas de la libertad; sin embargo, los ingresos económicos resultan insuficientes para apoyar a su núcleo familiar y para reparar los daños del delito cometido.

Los resultados de la encuesta aplicada indican que la población privada de la libertad en los centros de reinserción social en el estado de Nuevo León, México, tienen una edad media ubicada en los 35.5 años; es decir, se encuentran en plena etapa productiva. Dentro de la muestra analizada, el 84.3% de las mujeres y 93.0% de los hombres se encontraban trabajando antes de su ingreso al penal; el resto, vivía en el desempleo.

Entre la población privada de la libertad del género masculino, encuestada, unas 246 personas se encuentran trabajando; de estas, 4 de cada 10 (41.5%) tiene un ingreso entre \$300 y \$600 pesos semanales; la misma relación se presenta entre aquellos con un ingreso inferior a los \$300 pesos semanales (37.8%). Aproximadamente el 80.0% de los internos entrevistados gana menos de \$600 pesos por semana. Por otra parte, el 11.8% tiene un ingreso entre los \$600 y \$900 pesos; 1.2% entre \$900 y \$1,200 y 3.8% más de \$1,200 por semana.

Esta situación se agudiza en el caso de la población femenina. La encuesta aplicada indica que de 133 mujeres que se encuentran laborando, 7 de cada 10 (70.7%) tienen un ingreso inferior a los \$300 pesos por semana; 2 de cada 10 (18.8%) sus ganancias se ubican entre los \$300 y \$600 pesos. Apenas 7 personas señalaron tener un ingreso superior a \$600 pesos semanales.

En lo que corresponde a los internos penitenciarios, la mayoría invierte sus ingresos en solventar los gastos de abogados (72.0%); el 32.0% en apoyo a su familia; 24.4% en gastos personales. De esta forma, 7 de cada 10 internos dedican parte de sus ingresos al concepto de pagos legales. En lo que respecta a las mujeres, de los salarios penitenciarios femeninos devengados, un 18.0% está orientado a apoyar los gastos de su familia (24 frecuencias), mientras que un 40.6% no expende su dinero en este ámbito y 41.4% no contestó. Algunas mujeres privadas de la libertad aplican su salario en el pago de abogados. Este rubro es mínimo (apenas un 4.5%), mientras que 48.9% no gasta en ello y el 46.7% no respondió a esta pregunta específica.

Los escasos recursos económicos generados por las personas privadas de la libertad y la falta de un programa institucional para ofrecer oportunidades laborales dignas y con las prestaciones que por ley están determinadas, provoca que los miembros de edades menores de los núcleos familiares de los internos e internas penitenciarios, no puedan acceder a opciones de seguridad social como el IMSS.

Los resultados de la encuesta aplicada indican que, en lo que respecta a las mujeres, la mayor parte de sus hijos no tienen acceso a la seguridad social suscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social; el 74.2% de sus vástagos carecen de esta prestación, mientras que el 25.8% sí tiene este servicio médico. Por otra parte, 4 de cada 10 (43.9%) señaló contar con Seguro Popular; 55.0% dijo que ni ella, ni sus hijos cuentan con este servicio. Lo anterior es un indicador importante en el sentido de que la seguridad social de más del 50.0% de los hijos/as de internas penitenciarias carece de servicio médico para la atención de su salud.

¹ La aplicación de este instrumento se realizó durante los meses de abril y mayo de 2018; previo al traslado de la población penitenciaria femenil a las instalaciones del Centro de Reinserción Social “Escobedo”.

I.2. Recuento estadístico de personas privadas de la libertad y su núcleo familiar

En México, las estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario realizado por INEGI, indican que para el año 2016, se contabilizaron 217,595 personas privadas de la libertad. De estos, el 94.8% son hombres (206,223 internos) y el 5.2% restante son mujeres (11,372).

Tabla 1

Población penitenciaria por género.

Género	Internos	Porcentaje
Hombres	206,223	94.8%
Mujeres	11,372	5.2%
Total	217,595	100.0%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2015)

En el país, según INEGI y el *Institute for Criminal Policy Research* (ICPR), el promedio familiar de integrantes es de cuatro personas; cada pareja tiene en promedio dos hijos; en el caso de las familias de personas privadas de la libertad, en el 73.0% un hombre es/era el jefe de familia, en el 27.0% es/era una mujer; el 71.0% de los hombres internos y el 86.0% de las mujeres reclusas tiene hijos.

Al extrapolar la información provista tanto por el ICPR como por INEGI, se encontró que, en México, de los 217,955 internos, el 73.0% —equivalentes a 159,198 internos—, tienen hijos; esto representa que existen aproximadamente 312,396 personas hijos e hijas de internos penitenciarios.

En lo que respecta al género masculino, de las 206,223 personas privadas de la libertad, 146,418 tienen hijos(as); esto indica que 292,836 personas son descendencia de internos penitenciarios. Por su parte, de las 11,372 mujeres reclusas en centros de reinserción social en México, 9,780 tienen hijos, lo que representan que 19,560 personas son hijos(as) de internas.

Tabla 2

Educación, familia y prisión en México

Género	Internos	% con hijos	Internos con hijos	Cantidad de hijos
Hombres	206,223	71%	146,418	292,836
Mujeres	11,372	86%	9,780	19,560
Totales	217,955	73%	159,198	312,396

Fuente: Elaboración propia con datos de ICPR y del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2015)

Por otra parte, en el estado de Nuevo León, de las 7,841 personas privadas de la libertad, el 77.0% tiene hijos. Esto equivale a 5,639 internos con hijos, lo que, a su vez, indica la existencia de aproximadamente 11,279 personas descendientes de internos penitenciarios. De las personas internas en los centros de reinserción social de estado de Nuevo León, 7,360 son hombres, de los cuales, 5,225 tienen hijos(as); lo que representa 10,451 personas hijos(as) de personas privadas de la libertad en el estado. Por otro lado, existen 481 mujeres dentro de las instalaciones penitenciarias de la entidad, de estas, 414 tienen hijos(as), lo que equivale a 828 personas hijos de mujeres internas.

Tabla 3
Educación, familia y prisión en Nuevo León

Género	Internos	% con hijos	Internos con hijos	Cantidad de hijos
Hombres	7,360	71%	5,225	10,451
Mujeres	481	86%	414	828
Totales	7,841	75%	5,639	11,279

Fuente: Elaboración propia con datos de ICPR y del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en México (2015)

II. Familia y menores

II.1. Comunidad Penitenciaria y Familia en Nuevo León

Entre los años 2016 y 2019, en Nuevo León, el número de población penitenciaria, no ha variado significativamente; durante el primer trimestre del año 2019, el número de internos e internas privados de la libertad ascendía a 7,046 personas entre procesados, sentenciados y ejecutoriados, de las cuales 366 se ubicaban en el penal femenino (Reporte Índigo, 2019). Para el año 2016, la comunidad penitenciaria se distribuía de la siguiente manera:

Tabla 4
Población total privada de la libertad de 18 años y más en el Estado de Nuevo León por género (2016)

	Frecuencia	Porcentaje	
		Nuevo León	Nacional
Hombres	6,307	94.2%	3.1%
Mujeres	388	5.7%	3.6%
Estado de Nuevo León	6,695	100%	3.1%

Fuente: Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Por lo que respecta a su vida familiar, hasta el año 2017, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad entrevistadas en el CERESO Apodaca, Nuevo León, vivían con su esposa y con sus hijos antes de ser encarcelados; 3 de cada 10 es casado. Tres cuartas partes (76.3%) tienen hijos; el 66.8% de los descendientes de internos tienen hijos con menos de 20 años edad y el 60.0% se encuentra estudiando los niveles básicos de educación (28.3% primaria, 22% secundaria y 8.8% preparatoria). La edad promedio de los internos se sustentaba en 35 años. La sentencia dictada a esta población tiene un promedio que alcanza los 14.7 años de condena. Las personas privadas de la libertad entrevistadas indicaron, en 7 de cada 10 casos, que, tras la reclusión, dentro de sus núcleos familiares se han desarrollado —y en algunos casos se han acentuado—, problemas económicos; en el 67.0% de estas familias el ingreso mensual, dicen, era inferior a los \$6,000 pesos mensuales. Aunado a los escasos recursos financieros, 8 de cada 10 familias ayudan al interno para satisfacer sus necesidades, hecho que impacta aún más su situación económica. Antes de ser encarcelados, el 40.4% vivía con su esposa; un 58.0% por ciento de ellos tienen pareja heterosexual. Un 3 por ciento de los internos se ha divorciado o separado de sus parejas tras su reclusión. Asimismo, 9 de cada 10 internos (87.5%) mantienen visitas semanales de sus familias; sólo el 12.2% admite vivir el abandono de su núcleo familiar (Cerdeña, 2017). Hasta marzo del 2019, los hijos e hijas de personas privadas de la libertad en el CERESO de Apodaca, según datos proporcionados por el Departamento de Trabajo Social, sumaban un total de 1,340 infantes y adolescentes distribuidos por edades de la siguiente manera:

Tabla 5
Edad de los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad en el CERESO Apodaca²

Rango de edad	Cantidad	Porcentaje
De 3 a 6 años	383	28.6%
De 7 a 12 años	601	44.9%
De 13 a 15 años	223	16.6%
De 16 a 18 años	133	9.9%
Total	1,340	100%

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Departamento de Trabajo Social del CERESO Apodaca (hasta el mes de abril de 2019).

Para el caso de las mujeres, de una población femenina entrevistada durante el año 2018 (172 personas), distribuidas en ese momento entre las instalaciones del penal de Topo Chico y el área de Constituyentes, el estado civil de las mujeres privadas de la libertad encuestadas se concentra en el rubro de unión libre (30.8%); seguido por quienes declararon ser solteras (27.3%); las mujeres casadas constituyen el 26.7%, mientras que las divorciadas y viudas representan el 15.2%, al tener cada una de ellas un porcentaje del 7.6%, respectivamente (Cerde, 2018). Para agosto del 2019, las internas del penal femenino de Nuevo León conforme a datos proporcionados por el Departamento de Trabajo Social de este centro penitenciario se tenía un total de 340 infantes que cursaban grados considerados entre primaria y secundaria, según la siguiente distribución.

Tabla 6
Distribución de hijos de personas privadas de la libertad del CERESO Femenil Escobedo por grados académicos

Grado académico	Cantidad	Porcentaje
Primaria (1° a 3er año)	113	33.2%
Primaria (4° a 6° año)	135	39.7%
Secundaria	92	27.1%
Total	340	100%

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Trabajo Social del CERESO Femenil Escobedo (hasta el mes de agosto de 2019).

III. Antecedentes y perspectivas de desarrollo educativo y familiar de personas privadas de la libertad

Durante el mes de julio del 2019, se levantaron un total de 342 encuestas en los penales de Apodaca, Nuevo León, donde se alberga sólo población masculina y en el femenino de Escobedo, N.L. La muestra estuvo configurada en un 52.6% por varones y en un 47.4% por mujeres.

Tabla 7
Género de las personas privadas de la libertad encuestadas

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Masculino (CERESO “Apodaca”)	180	52.6%
Femenino (CERESO “Escobedo”)	162	47.4%
Total	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

² Previo al cierre del Centro de Reinserción Social “Topo Chico” y al eventual traslado de internos de esta institución al Centro de Reinserción Social “Apodaca”.

Las edades de la población encuestada mantienen un promedio de 37.26 años de edad en el caso de los varones, mientras que en las mujeres es de 31 años de edad como media. En ambos penales el mínimo de años de edad de la población encuestada es de 19; el máximo es de 55 años para las mujeres y 71 años para los varones. De la población encuestada, la mayor parte se concentra entre personas jóvenes de entre 21 y 35 años. En el caso de las mujeres el 53.7% se ubica entre los 26 y 35 años de edad; un 16.0% tiene entre 21 y 25 años; 14.8% entre los 36 y 40; 6.8% entre 41 y 45 años de edad 3.1% entre 18 y 20 años y, este mismo porcentaje, lo ocupan quienes mantienen un rango de edad entre 46 y 50 años; sólo 1.9% de las mujeres entrevistadas tienen arriba de 50 años. En el caso de los varones, el 41.0% de ellos tienen edades comprendidas entre los 26 y 35 años de edad; 16.3% tiene más de 50 años; 14.0% tiene entre 36 y 40 años; 10.7% se ubica entre 21 y 25 años; 9.6% entre 41 y 45 años de edad; 6.2% entre 46 y 50 años y 1.7% entre 18 y 20 años.

Tabla 8

Edad de las personas privadas de la libertad encuestadas clasificadas por rango

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
De 18 a 20 años	5	3.1%	3	1.7%	8	2.4%
De 21 a 25 años	26	16.0%	19	10.7%	45	13.2%
De 26 a 30 años	47	29.0%	39	21.9%	86	25.3%
De 31 a 35 años	40	24.7%	34	19.1%	74	21.8%
De 36 a 40 años	24	14.8%	25	14.0%	49	14.4%
De 41 a 45 años	11	6.8%	17	9.6%	28	8.2%
De 46 a 50 años	5	3.1%	11	6.2%	16	4.7%
Más de 50 años	3	1.9%	29	16.3%	32	9.4%
No contestó	1	0.6%	1	0.6%	2	0.6%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

La población sin estudios antes de su reclusión en los CERESO, preserva porcentajes más elevados entre los varones que están privados de la libertad que entre las mujeres. Para el primer grupo la población sin estudios alcanzó el 1.8%, mientras que en las mujeres fue de 0.6%. En el penal femenil, la población entrevistada señala haber concluido la primaria en un 24.7%; la secundaria en un 50.0%; preparatoria 13.0%; técnico comercial 2.5% y licenciatura 7.4%. En el ámbito de los PPL (personas privadas de la libertad) masculinos, el 27.8% terminó la primaria; 45.8% la secundaria; 12.8% la preparatoria; 1.7% técnicos comerciales y 5.0% obtuvo un nivel de licenciatura.

Tabla 9

Escolaridad de las personas privadas de la libertad encuestadas previo a su reclusión

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Sin estudios	1	0.6%	5	2.8%	6	1.8%
Primaria	40	24.7%	50	27.8%	90	26.3%
Secundaria	81	50.0%	81	45.8%	162	47.4%
Preparatoria	21	13.0%	23	12.8%	44	12.9%
Técnico/comercial	4	2.5%	3	1.7%	7	2.0%
Licenciatura	12	7.4%	9	5.0%	21	6.1%
Posgrado	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Otros estudios	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
No contestó	3	1.9%	9	5.0%	12	3.5%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

La escolaridad declarada tras el ingreso a los CERESOS, en el caso de la población sin estudios, en las mujeres se elimina hasta el 0%; en el hombre conserva el 0.6%. Posterior a la reclusión, las mujeres indican que tienen primaria concluida en el 7.4% de los casos; secundaria 43.8%; preparatoria 27.8%; técnico comercial 1.2%; licenciatura 4.9%, en tanto que un 14% no respondió. En los varones, los estudios de primaria fueron declarados por el 6.7%; secundaria por el 39.4%; preparatoria 20%; técnico comercial 0.6%; licenciatura 3.3% y un porcentaje de hasta el 29.4% no respondió.

Tabla 10

Escolaridad de las personas privadas de la libertad encuestadas posterior a la reclusión

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Sin estudios	0	0.0%	1	0.6%	1	0.3%
Primaria	12	7.4%	12	6.7%	24	7.0%
Secundaria	71	43.8%	71	39.4%	142	41.5%
Preparatoria	45	27.8%	36	20.0%	81	23.7%
Técnico/comercial	2	1.2%	1	0.6%	3	0.9%
Licenciatura	8	4.9%	6	3.3%	14	4.1%
Posgrado	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Otros estudios	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
No contestó	24	14.8%	53	29.4%	77	22.5%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

El tiempo de sentencia que se les aplicó a la población encuestada por los delitos cometidos es de 16.7 años para las mujeres y 16.4 años para los varones; con un mínimo de un año para ambos sexos y un máximo de 198 años para las mujeres y de 327 años para los hombres.

Tabla 11

Estadísticos de tiempo de sentencia aplicado a las personas privadas de la libertad encuestadas

Medida	Femenino	Masculino
Media	16.7 años	16.4 años
Máximo	198 años	327 años
Mínimo	1 año	1 año
Varianza	411.9	714.6
Desviación estándar	20.295	26.733

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

Sobre los tiempos de sentencia cumplidos por la población encuestada, se preserva una media de 4.26 años en el caso de las mujeres y de 5.94 años en el de los varones, con un máximo de 14 años para las mujeres y de 33 años para los hombres; asimismo, se tiene un mínimo de un año para ambos géneros.

Tabla 12

Estadísticos de tiempo de sentencia cumplido por las personas privadas de la libertad encuestadas

Medida	Femenino	Masculino
Media	4.26 años	5.94 años
Máximo	14 años	33 años
Mínimo	1 año	1 año
Varianza	14.032	40.6
Desviación estándar	3.746	6.370

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

Sobre el estado civil de la población participante en la presente muestra, en las mujeres, el mayor porcentaje se ubica bajo una condición de unión libre (35.2%); seguido por quienes declaran ser solteras (29.6%); casadas 24.1%; divorciadas 6.2% y viudas 3.7%. En los varones, el mayor porcentaje lo ocupan quienes afirmaron ser solteros (37.8%); seguidos por quienes están en unión libre (25%); casados 21.7%; divorciados 10.0% y viudos 1.1%.

Tabla 13

Estado civil de las personas privadas de la libertad encuestadas

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Soltero(a)	48	29.6%	68	37.8%	116	33.9%
Casado(a)	39	24.1%	39	21.7%	78	22.8%
Divorciado(a)	10	6.2%	18	10.0%	28	8.2%
Viudo(a)	6	3.7%	2	1.1%	8	2.3%
Unión libre	57	35.2%	45	25.0%	102	29.8%
No contestó	2	1.2%	8	4.4%	10	2.9%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

De la población penitenciaria entrevistadas el 97.5% de las mujeres afirman tener hijos, mientras que, en los varones, este porcentaje se ubica en el 70.6%.

Tabla 14

Personas privadas de la libertad que tienen hijos

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No tiene hijos	4	2.5%	51	28.4%	52	15.2%
Sí tiene hijos	158	97.5%	129	70.6%	285	83.3%
Total	162	100%	180	99.0%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

De 285 PPL (hombres y mujeres) que declaran tener vástagos, la media del número de hijos en el caso de las mujeres es de 2.8 hijos; en los varones es de 2.5 hijos; con un mínimo de un hijo (a) para ambos géneros y un máximo de 7 hijos en las mujeres y de 9 en los varones.

Tabla 15

Estadísticos de cantidad de hijos¹

Medida	Femenino	Masculino
Media	2.8 hijos	2.5 hijos
Máximo	7 hijos	9 hijos
Mínimo	1 hijo	1 hijo
Varianza	1.466	2.218
Desviación estándar	1.211	1.489

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 285 personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos.

Las mujeres entrevistadas señalaron tener un total de 158 hijos, de las cuales el 33.5 tiene hasta 3 vástagos; 25.3% dos hijos; 15.9% cuatro; 15.8% un solo hijo; 8.9% cinco hijos y 0.6% más de 5 hijos. Con 127 hijos, la población masculina del CERESO Apodaca indicó que el 26.4% tiene un solo hijo; 25.6% dos hijos y este mismo porcentaje declara tener hasta 3 hijos; 11.2% de los hombres tienen 4 hijos, mientras que 4.8% tiene 5 hijos; este mismo porcentaje (4.8%) dice tener más de 5 hijos.

Tabla 16

Cantidad de hijos de las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Un hijo	25	15.8%	33	26.4%	58	20.5%
Dos hijos	40	25.3%	32	25.6%	72	25.4%
Tres hijos	53	33.5%	32	25.6%	85	30.0%
Cuatro hijos	25	15.9%	14	11.2%	37	13.1%
Cinco hijos	14	8.9%	6	4.8%	20	7.1%
Más de cinco hijos	1	0.6%	6	4.8%	7	3.4%
No contestó	0	0.0%	4	3.2%	2	0.7%
Total	158	100%	127	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 285 personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos.

En el caso de las PPL del CERESO de Escobedo, el número de hijos que tienen asciende a 433, mientras que en los varones suman 279.

Tabla 17

Cantidad de hijos de las personas privadas de la libertad encuestadas

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Hijos de internas	433	60.8%
Hijos de internos	279	39.2%
Total	712	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019)

De los 433 hijos de mujeres privadas de la libertad en Escobedo, 51.5% son del género femenino y 47.3% masculino. Los PPL de Apodaca, con 279 hijos. 50.9% son hijos mujeres y 46.9% varones.

Tabla 18

Género de los hijos de las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Femenino	223	51.5%	142	50.9%	365	51.3%
Masculino	205	47.3%	131	46.9%	336	47.2%
No contestó	5	1.2%	6	2.2%	11	1.5%
Total	433	100%	279	100%	712	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 285 personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos.

Al preguntarles la escolaridad en la cual se ubican sus hijos, las mujeres privadas de la libertad en Escobedo, señalaron que 14.1% no se ubica en edad escolar; 14.3% cursa el preescolar; 31.6% está en la primaria; 20.6% en secundaria; 8.8% en preparatoria; 2.5% estudia el nivel licenciatura y 7.6% de ellas no respondió. En los privados de la libertad dentro del CERESO de Apodaca, el 3.2% de sus hijos aún no tiene la edad para iniciar estudios de preprimaria; 8.6% está en preescolar; 30.5% la primaria; 26.2% secundaria; 10.8% preparatoria; 5.7% la licenciatura y 15.1% no contestó. En ambos casos, los hijos de internas e internos se ubican en poco más del 50% en niveles entre primaria y secundaria.

Tabla 19

Escolaridad de los hijos de las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Aún sin edad de estudiar	61	14.1%	9	3.2%	70	9.8%
Preescolar	62	14.3%	24	8.6%	86	12.1%
Primaria	137	31.6%	85	30.5%	222	31.2%
Secundaria	89	20.6%	73	26.2%	162	22.8%
Preparatoria	38	8.8%	30	10.8%	68	9.6%
Técnico/comercial	2	0.5%	0	0.0%	2	0.3%
Licenciatura	11	2.5%	16	5.7%	27	3.8%
No contestó	33	7.6%	42	15.1%	75	10.5%
Total	433	100%	279	100%	712	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 285 personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos.

La edad media de los hijos de personas privadas de la libertad en los CERESO de Escobedo y Apodaca se ubica en los 12.2 años para el caso de las mujeres y 12.4 años en los varones. La edad mínima de los hijos de PPL de ambos géneros es de 1 año y la máxima es de 43 años en las mujeres y 50 años en los varones.

Tabla 20

Estadísticos de cantidad de hijos que tienen las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Medida	Femenino	Masculino
Media	12.2 años	12.4 años
Máximo	43 años	50 años
Mínimo	1 año	1 año
Desviación estándar	8.5	8.7

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 285 personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos.

De los 433 hijos de mujeres internadas en Escobedo, que configuraron la presente muestra, el 52.2% de sus hijos tienen edades que se ubican entre los 0 y 10 años de edad (226 casos); seguidos por pubertos y adolescentes entre 11 y 15 años (21.9%); adolescentes y jóvenes entre 16 y 20 años de edad y de adultos jóvenes de entre 21 y 25 años de edad (6.2%); el 1.8% tienen hijos (as) entre 26 y 30 años; únicamente el 0.7% (2 casos) indican que sus hijos o hijas tienen entre 31 y 35 años. Dentro de la población privada de la libertad del CERESO Apodaca, se detecta que el 38 por ciento de ellos aseguran tener vástagos cuyas edades están entre el 0 y los 10 años de edad; 17.2% cuenta con hijos de entre 11 y 15 años (48 casos); 13.3% de entre 16 y 20 años; 11.1% entre 21 y 25 años; 3.9% entre 26 y 30 años; 3.6% entre 31 y 35 años; 2.9% entre 36 y 40 años y 2.2% entre 41 y 45 años de edad.

Tabla 21

Edad de los hijos de las personas privadas de la libertad encuestadas clasificada por rango¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de 5 años	113	26.1%	45	16.1%	158	22.2%
De 6 a 10 años	113	26.1%	61	21.9%	174	24.4%
De 11 a 15 años	95	21.9%	48	17.2%	143	20.1%
De 16 a 20 años	63	14.5%	37	13.3%	100	14.0%
De 21 a 25 años	27	6.2%	31	11.1%	58	8.1%
De 26 a 30 años	8	1.8%	11	3.9%	19	2.7%
De 31 a 35 años	3	0.7%	10	3.6%	13	1.8%
De 36 a 40 años	0	0.0%	8	2.9%	8	1.1%
De 41 a 45 años	0	0.0%	6	2.2%	6	0.8%
De 46 a 50 años	0	0.0%	2	0.7%	2	0.3%
No contestó	11	2.6%	20	7.2%	31	4.4%
Total	433	100%	279	100%	712	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 285 personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos.

El 84% de las mujeres y el 84.4 de varones de la población privada de la libertad en los penales de Escobedo y Apodaca, reciben visitas familiares. Un 16% de las mujeres en Escobedo no tiene visitas de familia y un 10.6% de los varones en Apodaca, afirman que no son visitados por sus familias. En conjunto, el 13.2% de la población carcelaria no tiene ningún familiar que le visite.

Tabla 22

Personas privadas de la libertad que reciben visitas familiares en el CERESO

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No recibe visitas familiares	26	16.0%	19	10.6%	45	13.2%
Sí recibe visitas familiares	136	84.0%	152	84.4%	288	84.2%
No contestó	0	0.0%	9	5.0%	9	2.6%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

De las 288 personas privadas de la libertad (de un total de 342 encuestadas) que afirman reciben visitas de sus familiares, las mujeres reciben visita en un 71.3%, una vez por semana (97 casos); un 14.7% dice que es visitada 2 veces a la semana; 10.3% hasta en 3 ocasiones, mientras que cuatro o cinco veces es el 0.7%, respectivamente, y, más de 5 veces es el 1.5%. En los varones, la visita de una vez por semana es del 62.5%; seguidos por quienes son visitados hasta en dos ocasiones 17.1%; 3 veces, 6.6%; 5 veces 3.3% y cuatro veces 2.6%

Tabla 23

Cantidad de visitas recibidas semanalmente por las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Una vez	97	71.3%	95	62.5%	192	66.6%
Dos veces	20	14.7%	26	17.1%	46	16.0%
Tres veces	14	10.3%	10	6.6%	24	8.3%
Cuatro veces	1	0.7%	4	2.6%	5	1.7%
Cinco veces	1	0.7%	5	3.3%	6	2.1%
Más de cinco veces	2	1.5%	0	0.0%	2	0.7%
No contestó	1	0.7%	12	7.8%	13	4.5%
Total	136	100%	152	100%	288	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 288 personas privadas de la libertad que afirmaron recibir visitas.

En cuanto a quienes son los familiares que visitan a las PPL, en el caso de las mujeres, éstas, son visitadas principalmente por sus hijos (as) 72.8%; seguidos por la madre (61.8%); hermanos (as) con el 43.4%; el padre (27.9%); otros familiares o personas con el 24.3% respectivamente, mientras que las parejas sentimentales ocupan el 11% y los esposos el 7.4%. En el caso de los varones, éstos son visitados principalmente por la madre (59.2%); seguida de los hermanos (as) 53.9%; los hijos(as) (39.5%); el padre (28.9%); la esposa (27%) y pareja (22.4%), así como “otros familiares” u “otras personas” con el 12.5%, respectivamente.

Tabla 24

Cantidad de visitas recibidas semanalmente por las personas privadas de la libertad encuestadas

Categoría	Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
		F	%	F	%	F	%
Padre	Sí es visitado	38	27.9%	44	28.9%	82	28.6%
	No es visitado	97	71.3%	104	68.4%	201	69.7%
	No contestó	1	0.8%	4	2.7%	5	1.7%
Madre	Sí es visitado	84	61.8%	90	59.2%	174	60.5%
	No es visitado	51	37.5%	58	38.2%	109	38.8%
	No contestó	1	0.7%	4	2.7%	5	1.7%
Esposa(o)	Sí es visitado	10	7.4%	42	27.6%	51	18.1%
	No es visitado	125	91.9%	105	69.1%	230	79.9%
	No contestó	1	0.7%	5	3.3%	6	2.0%
Pareja	Sí es visitado	15	11.0%	34	22.4%	49	17.0%
	No es visitado	120	88.2%	110	72.4%	230	79.9%
	No contestó	1	0.7%	8	5.2%	9	3.1%
Hijos(as)	Sí es visitado	99	72.8%	60	39.5%	159	55.2%
	No es visitado	36	26.5%	88	57.9%	124	43.1%
	No contestó	1	0.7%	4	2.7%	5	1.7%
Hermanos(as)	Sí es visitado	59	43.4%	82	53.9%	141	49.0%
	No es visitado	76	55.9%	66	43.4%	142	49.3%
	No contestó	1	0.7%	4	2.7%	5	1.7%
Otros familiares	Sí es visitado	33	24.3%	19	12.5%	52	18.1%
	No es visitado	102	75.0%	129	84.9%	231	80.2%
	No contestó	1	0.7%	4	2.7%	5	1.7%
Otras personas	Sí es visitado	33	24.3%	19	12.5%	52	18.1%
	No es visitado	102	75.0%	129	84.9%	231	80.2%
	No contestó	1	0.7%	4	2.7%	5	1.7%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 288 personas privadas de la libertad que afirmaron recibir visitas.

El 82.7% de la población carcelaria femenina no tiene visita conyugal en el penal de Escobedo, mientras que, en los varones, este porcentaje se ubica en el 58.3%. Sólo un 13% de las mujeres encuestadas tienen visita conyugal y un 34.4% de los varones son visitados por sus esposas, concubinas o parejas sentimentales.

Tabla 25

Personas privadas de la libertad que reciben visita conyugal en el CERESO

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No recibe visita conyugal	134	82.7%	105	58.3%	239	69.9%
Sí recibe visita conyugal	21	13.0%	62	34.4%	83	24.3%
No contestó	7	4.3%	13	7.2%	20	5.8%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Dentro de la población encuestada, el 79.0% de las PPL mujeres está en un centro penitenciario por primera vez y el 19.2% es reincidente. Para el caso de los varones, el 59.4% afirma que ésta es su primera ocasión dentro de un centro penitenciario, mientras que el 31.1% es reincidente.

Tabla 26

Número de ocasiones en las que los encuestados(as) han estado privados de la libertad

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No es la primera vez	32	19.8%	56	31.1%	88	25.7%
Sí es la primera vez	128	79.0%	107	59.4%	235	68.7%
No contestó	2	1.2%	17	9.4%	19	5.6%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

De un total de 88 hombres y mujeres que afirmaron haber sido reclusos con anterioridad (32 mujeres y 56 hombres), el 37.5% de las mujeres aseguró haber estado privada de su libertad por menos de 3 años; el 21.9% de ellas entre 3 y 6 años; 15.6% entre 7 y 10 años y más de 10 años el 12.5%. Otro 12.5% no contestó. En los varones, el 35.7% sostiene haber ingresado más de una vez en un centro de reinserción con condenas de menos de 3 años; 26.8% con permanencias de entre 3 y 6 años; el 17.9% entre 7 y 10 años, mientras que más de 10 años fue el 12.5% y 7.2% no contestó.

Tabla 27

Tiempo total de privación de la libertad de las personas que han ingresado más de una vez a un centro de reinserción¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de tres años	12	37.5%	20	35.7%	32	36.4%
De 3 a 6 años	7	21.9%	15	26.8%	22	25.0%
De 7 a 10 años	5	15.6%	10	17.9%	15	17.0%
Más de 10 años	4	12.5%	7	12.5%	11	12.5%
No contestó	4	12.5%	4	7.2%	8	9.1%
Total	32	100%	56	100%	88	100%

III.1. Historia de familia

El 67.3% de las mujeres indica que ninguno de sus familiares ha estado en un centro de reinserción social, en tanto que un 31.5%, admite que algún miembro de su núcleo familiar si ha estado dentro de la cárcel. Para los PPL varones, el porcentaje de quienes dicen que dentro de su familia no hay personas que hubiesen estado en prisión alcanza el 68.9% y un 17.8% aclara que si ha tenido familiares en algún CERESO.

Tabla 28

Personas privadas de la libertad que afirman que alguno de sus familiares ha estado en un centro de reinserción social¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No ha estado privado de la libertad	109	67.3%	124	68.9%	233	68.1%
Sí ha estado privado de la libertad	51	31.5%	32	17.8%	83	24.3%
No contestó	2	1.2%	24	13.4%	26	7.6%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Los familiares de las personas privadas de la libertad que han estado dentro de un centro de reinserción social, en el caso de las mujeres son los hermanos (as) con un 31.4%; los tíos (as) 15.7%; el padre 7.8%; la madre 5.9%; otros familiares 23.5%; varios familiares 3.9% y otro 3.9% no respondió. En los PPL de Apodaca, los familiares que han estado en prisión son en primer lugar los hermanos (21.9%); seguidos por los tíos (as) y “otros familiares” con el 18.8%, respectivamente; el padre (18%); “varios familiares” 12.4% y la madre con el 6.3%.

Tabla 29

Parentesco de los familiares de las personas privadas de la libertad que han estado dentro de un centro de reinserción social¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Padre	4	7.8%	6	18.08%	10	12.0%
Madre	3	5.9%	2	6.3%	5	6.0%
Abuelo(a)	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tío(a)	8	15.7%	6	18.8%	14	16.9%
Hermano(a)	16	31.4%	7	21.9%	23	27.7%
Hijo(a)	4	7.8%	1	3.1%	5	6.0%
Otro familiar	12	23.5%	6	18.8%	18	21.7%
Varios familiares	2	3.9%	4	12.4%	6	7.2%
No contestó	2	3.9%	0	0.0%	2	2.4%
Total	51	100%	32	100%	83	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 83 personas privadas de la libertad que afirmaron que algún familiar a estado dentro de un centro de reinserción social.

De los 83 internos (as) (51 mujeres y 32 hombres) que afirmaron que algún familiar ha estado dentro de un centro de reinserción social, el 27.5% de las mujeres indica que su familiar estuvo en prisión menos de 3 años; 37.3% entre 3 y 6 años; 15.7% más de 10 años; 11.8% entre 7 y 10 años; 2% dijo que está en proceso y 5.9% no contestó. En el caso de los PPL de Apodaca, el 31.3% indica que su familiar ha estado por más de 10 años en el sistema penitenciario; 21.9% entre 7 y

10 años; 18.8% menos de 3 años; 15.6% entre 3 y 6 años, mientras que 12.5% no respondió a esta pregunta.

Tabla 30

Tiempo total de privación de la libertad de los familiares de los encuestados que han ingresado más de una vez a un centro de reinserción¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de tres años	14	27.5%	6	18.8%	20	24.1%
De 3 a 6 años	19	37.3%	5	15.6%	24	28.9%
De 7 a 10 años	6	11.8%	7	21.9%	13	15.7%
Más de 10 años	8	15.7%	10	31.3%	18	21.7%
En proceso	1	2.0%	0	0.0%	1	1.2%
No contestó	3	5.9%	4	12.5%	7	8.4%
Total	51	100%	32	100%	83	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 83 personas privadas de la libertad que afirmaron que algún familiar ha estado dentro de un centro de reinserción social.

A pregunta expresa sobre cómo estuvo compuesto su núcleo familiar durante su infancia, en el global de hombres y mujeres entrevistadas para la muestra de julio 2019, se concluye que la figura de la madre ha estado presente en un 83.9% de los PPL, durante sus primeros años de vida; la del padre en un 71.6%; hermanos 81.0%; posteriormente, sus hijos (as) formaron parte de ese núcleo (16.7%); su esposo o esposa (6.1%); la pareja (7.0%) u “otros familiares” 19.6%.

En el caso de las mujeres del CERESO de Escobedo, la presencia de la madre en su núcleo familiar, durante su infancia se registra en el 88.3% de la población encuestada: el padre estuvo presente en el 76.5%; los hermanos (as) 85.8%; hijos o hijas 19.8%; el esposo 4.3%; la pareja 4.9% y “otros familiares” 19.8%.

Las PPL del CERESO de Apodaca, indican que la figura de la madre estuvo presente en su infancia (80% así lo declara); 67.2% tuvo a su padre; 76.7% a sus hermanos (as); 13.9% tuvo a sus hijos (as) en ese mismo núcleo; 7.8% tuvo a su esposa; 8.9% tuvo a su pareja y un 19.4% convivió con “otros familiares”.

Tabla 31

Personas que componían el núcleo familiar de las personas privadas de la libertad durante su infancia.

Categoría	Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
		F	%	F	%	F	%
Padre	Sí estaba	124	76.5%	121	67.2%	245	71.6%
	No estaba	34	21.0%	36	20.0%	70	20.5%
	No contestó	4	2.5%	23	12.8%	27	7.9%
Madre	Sí estaba	143	88.3%	144	80.0%	287	83.9%
	No estaba	15	9.3%	14	7.8%	29	8.5%
	No contestó	4	2.5%	22	12.2%	26	7.6%
Hermanos(as)	Sí estaba	139	85.8%	138	76.7%	277	81.0%
	No estaba	19	11.7%	18	10.0%	37	10.8%
	No contestó	4	2.5%	24	13.3%	28	8.2%
Hijos(as)	Sí estaba	32	19.8%	25	13.9%	57	16.7%
	No estaba	126	77.8%	141	78.3%	267	78.1%
	No contestó	4	2.5%	14	7.8%	18	5.3%
Esposa(o)	Sí estaba	7	4.3%	14	7.8%	21	6.1%
	No estaba	151	93.2%	150	83.3%	301	88.0%

Pareja	No contestó	4	2.5%	16	8.9%	20	5.8%
	Sí estaba	8	4.9%	16	8.9%	24	7.0%
	No estaba	150	92.6%	148	82.2%	298	87.1%
Otros familiares	No contestó	4	2.5%	16	8.9%	20	5.8%
	Sí estaba	32	19.8%	35	19.4%	67	19.6%
	No estaba	126	77.8%	129	71.7%	255	74.6%
	No contestó	4	2.5%	16	8.9%	20	5.8%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Dentro de las preguntas hechas a la población muestra, se formuló una demanda específica de hasta qué edad habían ellos vivido dentro del hogar paterno/materno. Dentro de los hallazgos encontrados se concluye que, en promedio, el 24% de ellos vivieron hasta los 15 años con sus padres; este porcentaje resulta significativamente más alto en el caso de las PPL de Escobedo, ya que las mujeres indican haber vivido con su familia nuclear hasta los 15 años, en un 29.0% de los casos, porcentaje sensiblemente superior al 19.4% obtenido en los varones.

En las mujeres, el 39.5% de ellas vivieron con sus padres en edades que oscilan entre 16 y 20 años; 21.0% entre los 21 y 25 años; 4.3% entre los 26 y 30 años y 4.3% después de los 30 años. Para el caso de los varones del CERESO de Apodaca, Nuevo León, un 37.2% vivió con los padres hasta que tuvieron edades comprendidas entre los 16 y 20 años; 20.0% entre los 21 y 25 años; 6.1% entre los 26 y 30 años y 5.6% después de los 30 años.

Tabla 32

Edad hasta la cual las personas privadas de la libertad vivieron con su familia de origen

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Hasta los 15 años	47	29.0%	35	19.4%	82	24.0%
Entre los 16 y los 20 años	64	39.5%	67	37.2%	131	38.3%
Entre los 21 y los 25 años	34	21.0%	36	20.0%	70	20.5%
Entre los 26 y los 30 años	7	4.3%	11	6.1%	18	5.3%
Después de los 30 años	7	4.3%	10	5.6%	17	5.0%
No contestó	3	1.8%	21	11.7%	24	7.0%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Tabla 33

Edad hasta la cual las personas privadas de la libertad vivieron con su familia de origen

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Excelente	58	35.8%	49	27.2%	107	31.3%
Bueno	50	30.9%	65	36.1%	115	33.6%
Regular	35	21.6%	39	21.7%	74	21.6%
Malo	12	7.4%	8	4.4%	20	5.8%
Muy malo	4	2.5%	5	2.8%	9	2.6%
No contestó	3	1.9%	14	7.8%	17	5.0%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Durante su infancia, la realidad familiar de internos e internas penitenciarias enfrentó problemáticas complejas, donde en promedio, son los conflictos derivados de la falta de recursos económicos (40% de los casos en ambos géneros); la separación o divorcio de los padres (24.9%)

y el alcoholismo (21.6%), los conflictos que ocuparon los tres primeros sitios. Dos puntos que destacan aquí, se refieren a los altos porcentajes que se detectan de abuso sexual sufrido por las PPL, de Escobedo, quienes admiten haber sido víctimas de abuso sexual en el 11.7% de los casos, el cual contrasta con el 2.2% declarado por los PPL del CERESO de Apodaca; asimismo la violencia física alcanza al 21.0% de las mujeres encuestadas, mientras que, en los varones, este porcentaje se ubica en el 10.6%. Un 21.0% de las mujeres indican que, durante su infancia, padecieron al interior de su núcleo el hecho de que entre su familia se vivía el alcoholismo; el 22.2% reconoce haber sido objeto de conductas agresivas; 42.0% vivieron problemas económicos; 29.0% la separación o divorcio de los padres; 8.6% conflictos derivados de las adicciones a las drogas. Los varones, durante su niñez, vivieron conductas agresivas en su núcleo familiar en un 18.9% de los entrevistados; las problemáticas económicas estuvieron presentes en el 39.4%; la separación o divorcio de sus padres en el 21.0% y conflictos derivados de la drogadicción en el seno familiar por parte de alguno de sus miembros (15.6%).

Tabla 34

Problemas vividos en la infancia dentro de los hogares de las personas privadas de la libertad

Categoría	Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
		F	%	F	%	F	%
Alcoholismo	Sí tuvieron	34	21.0%	40	22.2%	74	21.6%
	No tuvieron	120	74.1%	73	40.6%	193	56.4%
	No contestó	8	4.9%	67	37.2%	75	21.9%
Conductas agresivas	Sí tuvieron	36	22.2%	34	18.9%	70	20.5%
	No tuvieron	118	72.8%	75	41.7%	193	56.4%
	No contestó	8	4.9%	71	39.4%	79	23.1%
Económicos	Sí tuvieron	68	42.0%	71	39.4%	139	40.6%
	No tuvieron	85	52.5%	57	31.7%	142	41.5%
	No contestó	9	5.6%	52	28.9%	61	17.8%
Separación o divorcio	Sí tuvieron	47	29.0%	38	21.1%	85	24.9%
	No tuvieron	106	65.4%	80	44.4%	186	54.4%
	No contestó	9	5.6%	62	34.4%	72	20.8%
Drogadicción	Sí tuvieron	14	8.6%	28	15.6%	42	12.3%
	No tuvieron	139	85.8%	88	48.9%	227	66.4%
	No contestó	9	5.6%	64	35.6%	73	21.3%
Violencia física	Sí tuvieron	34	21.0%	19	10.6%	53	15.5%
	No tuvieron	119	73.5%	93	51.7%	212	62.0%
	No contestó	9	5.6%	68	37.8%	77	22.5%
Abuso sexual	Sí tuvieron	19	11.7%	4	2.2%	23	6.7%
	No tuvieron	134	82.7%	104	57.8%	238	69.6%
	No contestó	9	5.6%	72	40.0%	81	23.7%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Durante su infancia, el 58.0% de las mujeres indican que, en su hogar, no tuvieron una habitación propia y 38.9% declara que sí tuvo acceso a contar con una habitación propia dentro de su hogar. En el caso de los varones, un 42.8% dice que, si tuvo una habitación propia en su hogar, mientras que 48.9% asegura que no contó con una habitación individual.

Tabla 35

Personas privadas de la libertad que afirman que durante su infancia tenían una habitación para ellos solos

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No tenía habitación propia	94	58.0%	88	48.9%	182	53.2%
Sí tenía habitación propia	63	38.9%	77	42.8%	140	40.9%
No contestó	5	3.1%	15	8.5%	20	5.9%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Las mujeres privadas de la libertad también reportan porcentajes sensiblemente más altos como víctimas de violencia en el hogar durante su infancia, en relación de aquel admitido por los varones. En el caso de las PPL de Escobedo, éstas, en un 35.2% señala haber sido víctimas de violencia durante su infancia; en los hombres, este porcentaje se ubica en 25.0%. El promedio de la población penitenciaria que fue víctima de violencia durante su niñez alcanza el 29.8%.

El 59.8% de las mujeres puntualiza que no fue víctima de violencia alguna durante su infancia y un 63.9% de los varones asienta lo mismo. En este punto, la población femenina que no respondió a esta pregunta ascendió al 5.0%, mientras que la masculina duplicó este porcentaje al alcanzar el 11.1%.

Tabla 36

Personas privadas de la libertad que afirman haber sido víctimas de violencia en su infancia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No fueron víctimas de violencia	97	59.8%	115	63.9%	212	62.1%
Sí fueron víctimas de violencia	57	35.2%	45	25.0%	102	29.8%
No contestó	8	5.0%	20	11.1%	28	8.1%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

De las 102 personas privadas de la libertad (57 mujeres y 45 varones), que afirmaron haber sido víctimas de violencia en su hogar durante su infancia, el 56.1% de las mujeres sufrieron violencia tanto física como verbal, respectivamente; el 47.4% (27 casos) fue objeto de violencia sexual por parte de algún miembro de su propia familia, mientras que la de carácter psicológico alcanzó al 38.6% de ellas.

En los varones, la violencia verbal durante su infancia alcanzó el porcentaje más alto (64.4%), seguida de la de carácter físico (60.0%); la psicológica 37.8% y la sexual 6.7%. Si bien para ambos géneros, la violencia física, verbal y psicológica, representan las agresiones mayormente vividas durante su infancia, es en las mujeres donde la violencia sexual, se intensifica con porcentajes que representan hasta un 40.0% más de la vivida por los hombres durante su infancia en el hogar. Del total de mujeres privadas de la libertad entrevistadas (162), un 16.6% admite haber sido violentada sexualmente durante su infancia. En México, de acuerdo con el INEGI, de 46.5 millones de mujeres de 15 años y más, el 34.3% ha sufrido de violencia sexual en alguna etapa de su vida.

Tabla 37

Tipo de agresiones recibidas por las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Categoría	Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
		F	%	F	%	F	%
Física	Sí recibió	32	56.1%	27	60.0%	59	57.8%
	No recibió	22	38.6%	18	40.0%	40	39.2%
	No contestó	3	5.3%	0	0.0%	3	3.0%
Verbal	Sí recibió	32	56.1%	29	64.4%	61	59.7%
	No recibió	22	38.6%	16	35.6%	38	37.3%
	No contestó	3	5.3%	0	0.0%	3	3.0%
Psicológica	Sí recibió	22	38.6%	17	37.8%	39	38.2%
	No recibió	32	56.1%	28	62.2%	60	58.8%
	No contestó	3	5.3%	0	0.0%	3	3.0%
Sexual	Sí recibió	27	47.4%	3	6.7%	30	29.4%
	No recibió	27	47.4%	42	93.3%	69	67.6%
	No contestó	3	5.3%	0	0.0%	3	3.0%
Otra	Sí recibió	0	0.0%	3	6.7%	3	2.9%
	No recibió	54	94.7%	42	93.3%	95	93.1%
	No contestó	3	5.3%	0	0.0%	3	3.0%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 102 personas que afirmaron haber sido víctimas de agresiones.

A las PPL participantes en esta muestra, se les preguntó qué familiar le había agredido durante su infancia. Aquí las respuestas más altas las obtuvieron conceptos como “otros familiares”, donde no se incluyen padres, madres, abuelos o tíos. En el caso de las mujeres “los otros”, ocupan el 28.1% de los agresores; seguidos por padre y tíos con el 15.8%; la madre con el 12.3%; “varios” 12.4%; los hermanos con el 8.8% y los abuelos con el 5.3%

En los varones, los “varios” familiares ocupan el porcentaje más alto de personas que los agredieron cuando eran niños (28.9%); seguidos por el padre (20.0%); la madre (17.8%); otros 15.6%; tíos 4.4% y los abuelos y hermanos con el 2.2% respectivamente.

Tabla 38

Familiar que agredió a las personas privadas de la libertad encuestadas.

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Padre	9	15.8%	9	20.0%	18	17.6%
Madre	7	12.3%	8	17.8%	15	14.7%
Abuelos	3	5.3%	1	2.2%	4	3.9%
Hermanos	5	8.8%	1	2.2%	6	5.9%
Tíos	9	15.8%	2	4.4%	11	10.8%
Otros	16	28.1%	7	15.6%	23	22.5%
Varios	7	12.4%	13	28.9%	4	3.9%
No contestó	1	1.8%	4	8.9%	5	4.9%
Total	57	100%	45	100%	102	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 102 personas que afirmaron haber sido víctimas de agresiones.

Las respuestas sobre las conductas asumidas ante las agresiones recibidas durante su infancia, tienen un gran punto de coincidencia entre los hombres y mujeres entrevistados: el 50.0% de ellos “no hicieron nada”, tal como lo indican el 49.1% de las mujeres de Escobedo y el 51.1% de los internos de Apodaca. Ante las agresiones recibidas en el hogar, un 40.0% de las mujeres optaron por salirse del hogar nuclear; un 26.3% “se iba con amigos o amigas”; 19.3% lo comentó con sus padres; 14.0% respondía con agresiones verbales; 10.5% pidieron ayuda a un familiar; 8.8% de ellas respondió con golpes, mientras que 5.3% dijo que había asumido “otras formas”. En los varones, tras las agresiones recibidas en el hogar durante su infancia, un 27.5% decidió irse de su hogar; 25.5% se fue con sus amigos o amigas; 18.6% respondió con agresiones verbales; 16.7% les comentaron a sus padres; 11.8% contestaron con golpes; 6.9% pidieron ayuda a un familiar y 7.8% sólo comentaron que habían decidido responder con “otra forma”.

Tabla 39

Forma de respuesta a las agresiones recibidas por las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Categoría	Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
		F	%	F	%	F	%
No hice nada	Sí fue respuesta	28	49.1%	23	51.1%	51	50.0%
	No fue respuesta	27	47.4%	20	44.4%	47	46.1%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Respondí con golpes	Sí fue respuesta	5	8.8%	7	15.6%	12	11.8%
	No fue respuesta	50	87.7%	36	80.0%	86	84.3%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Respondía con agresiones verbales	Sí fue respuesta	8	14.0%	11	24.4%	19	18.6%
	No fue respuesta	47	82.5%	32	71.1%	79	77.5%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Le comenté a mis padres	Sí fue respuesta	11	19.3%	6	13.3%	17	16.7%
	No fue respuesta	44	77.2%	37	82.2%	81	79.4%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Le pedí ayuda a un familiar	Sí fue respuesta	6	10.5%	1	2.2%	7	6.9%
	No fue respuesta	49	86.0%	42	93.3%	91	89.2%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Me salí de la vivienda	Sí fue respuesta	23	40.4%	5	11.1%	28	27.5%
	No fue respuesta	32	56.1%	38	84.4%	70	68.6%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Me iba con amigos o amigas	Sí fue respuesta	15	26.3%	11	24.4%	26	25.5%
	No fue respuesta	40	70.2%	32	71.1%	72	70.6%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%
Otra forma	Sí fue respuesta	3	5.3%	5	11.1%	8	7.8%
	No fue respuesta	52	91.2%	38	84.4%	90	88.2%
	No contestó	2	3.6%	2	4.4%	4	3.9%

Del total de la muestra participante (342), el 27.2% de los hombres (49 casos) afirman haber sido miembros de alguna pandilla, así como el 9.3% de las mujeres (15 casos). El 88.9% de las mujeres dice nunca haber pertenecido a ninguna pandilla, así como el 63.9% de los varones.

Tabla 40

Personas privadas de la libertad que afirman haber sido miembros de alguna pandilla

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No ha sido miembro de pandillas	144	88.9%	115	63.9%	259	75.7%
Sí ha sido miembro de pandillas	15	9.3%	49	27.2%	64	18.7%
No contestó	3	1.8%	16	8.9%	19	5.3%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

De los 64 hombres y mujeres privados de la libertad que admitieron haber pertenecido a una pandilla antes de ingresar al penal, el 71.9% en promedio, se adhirió a dichas bandas juveniles antes de cumplir los 15 años de edad. En las mujeres el 53.3% estuvo en pandillas antes de los 15 años; el 6.7% entre los 16 y 18 años de edad; el 6.7% con más de 21 años y el 33.4% no contestó.

En el caso de los varones, la integración a algún tipo de pandilla antes de los 15 años se dio en el 77.6% de los casos; seguidos por quienes lo hicieron entre los 16 y 18 años de edad (15.6%) y más de 21 años (3.1%), mientras que un 9.4% no respondió.

Tabla 41

Edad en la que las personas privadas de la libertad ingresaron a la pandilla a la que pertenecieron¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de 15 años	8	53.3%	38	77.6%	46	71.9%
Entre 16 y 18 años	1	6.7%	9	18.4%	10	15.6%
Entre 19 y 21 años	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Más de 21 años	1	6.7%	1	2.0%	2	3.1%
No contestó	5	33.4%	1	2.0%	6	9.4%
Total	15	100%	49	100%	64	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 64 personas que afirmaron pertenecer a pandillas.

Sobre la pregunta específica de que, si algún familiar es o ha sido miembro de alguna pandilla, el 82.2% señala que no es así. Las mujeres en el 90.7% de los casos descartaron que alguien de su familia haya estado o participado en una pandilla; los hombres, a su vez, también señalan esto en el 74.4% de los casos. Sólo el 4.3% de las mujeres asientan que alguien de su familia pertenece o ha estado en alguna pandilla (7 casos); el 13.9% de los varones encuestados (25 casos) también admite que algún pariente pertenece o ha pertenecido alguna pandilla.

Tabla 42

Personas privadas de la libertad que afirman que algún familiar ha sido miembro de alguna pandilla

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No ha sido miembro de pandillas	147	90.7%	134	74.4%	281	82.2%
Sí ha sido miembro de pandillas	7	4.3%	25	13.9%	32	9.4%
No contestó	8	4.9%	21	11.7%	29	8.5%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Al preguntárseles sobre cuál era el parentesco que se tiene o tenía con los miembros de su familia que pertenecen o se sumaron como integrantes de una pandilla, el 40.6% en promedio de hombres y mujeres entrevistados, citó como primera línea de familia a sus hermanos (as). En el caso de las mujeres, un 42.9% no respondió a esta demanda específica y un 14.3% dijo que “varios” parientes —sin especificar patrón o línea de parentesco—, pertenecía a tales organizaciones. En los varones, se indicó que además de sus hermanos (40.0%), son los tíos (as) quienes han estado dentro de una pandilla (32.0%); seguidos por “otros” 12.0% y el padre con 8.0%.

Tabla 43

Parentesco de las familias de las personas privadas de la libertad que indicaron que uno de sus familiares ha pertenecido a una pandilla¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Padre	0	0.0%	2	8.0%	2	6.3%
Madre	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Abuelos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Tíos(as)	0	0.0%	8	32.0%	8	25.0%
Hermanos(as)	3	42.9%	10	40.0%	13	40.6%
Otros	0	0.0%	3	12.0%	3	9.4%
Varios	1	14.3%	1	4.0%	2	6.2%
No contestó	3	42.9%	1	4.0%	5	15.6%
Total	7	100%	25	100%	32	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 32 personas que afirmaron que un familiar ha pertenecido a pandillas.

Un 70% de los privados de la libertad entrevistados reciben apoyos de algún tipo de sus familias. Los varones (131 casos), tienen apoyos en el 72.8% de los casos; mientras que las mujeres perciben en un 67.3%, alguna forma de soporte por parte de su familia. En este sentido, son las mujeres quienes reciben un menor respaldo económico o moral por parte de su núcleo familiar. Mientras que el 18.3% de los varones, indica no recibir apoyo alguno de su familia tras su reclusión en el CERESO de Apodaca, en el caso de las mujeres del CERESO de Escobedo, este porcentaje se eleva hasta 9.5 puntos, al sostenerse en un 27.8% de ellas, quienes no tienen respaldo alguno de su familia tras su encarcelamiento.

Tabla 44

Personas privadas de la libertad que afirman que reciben apoyo de su familia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No recibe apoyo de la familia	45	27.8%	33	18.3%	78	22.8%
Sí recibe apoyo de la familia	109	67.3%	131	72.8%	240	70.2%
No contestó	8	4.9%	16	8.9%	24	7.0%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

La familia de los PPL apoya principalmente a los internos e internas llevándoles su compañía, pero también alimentos, productos de higiene, dinero, ropa y medicina. En este rubro, se evidencia que los varones suelen tener mayores respaldos por parte de su familia nuclear que las mujeres. Así, por ejemplo, en el rubro de alimentos donde se promedia que un 60.4% de los familiares de hombres y mujeres privados de la libertad llevan al interno (a) algún tipo de comida para ellos (as), al desglosarse dicho porcentaje, se observa que el 71.8% de los PPL de Apodaca si cuentan con este soporte, mientras que, en las mujeres del CERESO de Escobedo, dicho porcentaje se reduce al 46.8%. Es decir, 7 de cada 10 internos tienen alimentos proporcionados por sus familias, mientras que, en las mujeres, esto se da en 4 de cada 10.

El respaldo para tener productos de higiene personal, un 68.7% de los varones privados de la libertad dice recibirlos por parte de su familia; en las mujeres, dicho rubro llega al 49.5%. Los soportes económicos para los varones se presentan en un orden del 66.4% de la población, mientras en las mujeres, éste se ubica en el 43.1%.

Sólo en el ámbito de medicamentos las mujeres privadas de la libertad suelen tener un mayor respaldo por parte de sus familias, al comparárseles con lo que reciben los varones. Un 48.6% de las PPL de Escobedo, así lo indican contra un 35.9% de los varones internados en el CERESO de Apodaca. Asimismo, en la ropa, 52.7% de los hombres reciben auxilio de su familia en dicho apartado; en las mujeres, este rubro se ubica en el 43.1%

Tabla 45

Tipo de apoyo familiar recibido por las personas privadas de la libertad¹

Categoría	Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
		F	%	F	%	F	%
Alimentos	Sí recibe apoyo	51	46.8%	94	71.8%	145	60.4%
	No recibe apoyo	54	49.5%	31	23.7%	85	35.4%
	No contestó	4	3.7%	6	4.6%	10	4.1%
Económico	Sí recibe apoyo	47	43.1%	87	66.4%	134	55.8%
	No recibe apoyo	58	53.2%	39	29.8%	97	40.4%
	No contestó	4	3.7%	5	3.8%	9	3.7%
Productos de higiene personal	Sí recibe apoyo	54	49.5%	90	68.7%	144	60.0%
	No recibe apoyo	51	46.8%	35	26.7%	86	35.8%
	No contestó	4	3.7%	6	4.6%	10	4.1%
Medicinas	Sí recibe apoyo	53	48.6%	47	35.9%	100	41.7%
	No recibe apoyo	52	47.7%	78	59.5%	130	54.2%
	No contestó	4	3.7%	6	4.6%	10	4.1%
Ropa	Sí recibe apoyo	47	43.1%	69	52.7%	116	48.3%
	No recibe apoyo	58	53.2%	57	43.5%	115	47.9%
	No contestó	4	3.7%	5	3.8%	9	3.7%
Otro tipo de apoyo	Sí recibe apoyo	50	45.9%	34	26.0%	84	35.0%
	No recibe apoyo	55	50.5%	92	70.2%	147	61.3%
	No contestó	4	3.7%	5	3.8%	9	3.7%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 240 personas que afirmaron tener apoyo familiar.

Al concluir su condena, de la población entrevistada, el 90.7% de las mujeres regresará a la casa de su familia, mientras que dicho porcentaje en los varones se ubica en el 70.0%. Un 7.4% de las mujeres privadas de la libertad, no tornará con su familia al salir de prisión y tampoco lo harán el 17.8% de los hombres internados en el CERESO de Apodaca.

Tabla 46

Personas privadas de la libertad que afirman que a su salida regresará a vivir con su familia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No regresará con su familia	12	7.4%	32	17.8%	44	12.9%
Sí regresará con su familia	147	90.7%	126	70.0%	273	79.8%
No contestó	3	1.9%	20	11.2%	23	6.7%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

De los 44 internos e internas que al concluir su condena no regresarán a la casa de su familia, un promedio del 65.9% lo hará “con otras personas no familiares”; 15.9% con otros familiares; 6.8% “con amigos o amigas” y 11.4% no respondió.

Tabla 47

Persona con la que vivirán los privados de la libertad que afirmaron que no regresarán con su familia¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Otros familiares	2	16.7%	5	15.6%	7	15.9%
Amigos(as)	2	16.7%	1	3.1%	3	6.8%
Otras personas (no familiares)	8	66.7%	21	65.6%	29	65.9%
No contestó	0	0.0%	5	15.6%	5	11.4%
Total	12	100%	32	100%	44	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 44 personas que no regresarán con su familia.

III.2. Situación académica y escolar

De 342 hombres y mujeres privados de la libertad entrevistados, durante el mes de Julio del 2019, el 86.4% de las mujeres afirman que durante su infancia asistieron a la escuela de forma regular; dicho porcentaje resulta menor en el caso de los varones (72.8%), lo que al promediarse entre ambos géneros da un global del 79.2% de población carcelaria que indica haber asistido a la escuela de manera regular, durante la etapa de su niñez. En el caso de las mujeres, un 6.8% asegura no haber asistido regularmente a la escuela durante su niñez y en los varones bajo esta misma condición, el porcentaje alcanza al 12.2% de la muestra.

Tabla 48

Personas privadas de la libertad que durante su infancia asistieron de forma regular a la escuela

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No asistió a la escuela	11	6.8%	22	12.2%	33	9.6%
Sí asistió a la escuela	140	86.4%	131	72.8%	271	79.2
No contestó	11	6.8%	27	15.0%	38	11.1%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Al pedirseles que evaluaran cómo había sido el ambiente escolar durante la etapa de su infancia, la mayoría de los entrevistados lo ubicaron en rangos que van de excelente, bueno y regular. Las mujeres afirmaron que el ambiente escolar en su infancia fue “bueno” en un 61.1%; “excelente” en un 16.7% y “regular” en el 16.7% de los casos. Sólo el 0.6% (un caso) la calificó como “muy malo” y 4.9% no respondió a esta cuestión. Para los PPL masculinos, un 45.6% de ellos dijo que el ambiente escolar en su etapa de infancia fue “bueno”; un 20.0% dijo que fue “excelente” y, este mismo porcentaje lo situó como “regular”; un 2.8% lo consideró “muy malo”; 1.1% lo evaluó en el rango de “malo” y el 10.5% no contestó.

Tabla 49

Evaluación de las personas privadas de la libertad respecto al ambiente escolar de su infancia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Excelente	27	16.7%	36	20.0%	63	18.4%
Bueno	99	61.1%	82	45.6%	181	52.9%
Regular	27	16.7%	36	20.0%	63	18.4%
Malo	0	0.0%	2	1.1%	2	0.6%
Muy malo	1	0.6%	5	2.8%	6	1.8%
No contestó	8	4.9%	19	10.5%	27	7.9%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Se les preguntó a los participantes si durante su infancia, la familia les había apoyado para cumplir con sus compromisos escolares. En promedio, un 70.8% afirma que si fue respaldado en este quehacer. Las mujeres indican en un 72.2% que su familia le ayudó para cumplir tales compromisos (117 casos), mientras que los varones, en el 69.4% también asientan haber sido respaldado por su familia (125 casos). La falta de soporte para cumplir con los compromisos escolares durante la etapa de la infancia de las PPL, se presentó en un 25.3% de las internas (41 casos) y un 21.7% (39 casos) en los varones.

Tabla 50

Personas privadas de la libertad que afirmaron haber sido apoyados por su familia para cumplir sus compromisos escolares

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No fue apoyado	41	25.3%	39	21.7%	80	23.4%
Sí fue apoyado	117	72.2%	125	69.4%	242	70.8%
No contestó	4	2.5%	16	8.9%	20	5.8%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

De los 80 hombres y mujeres privados de la libertad que indican enfrentaron la falta de apoyo de su familia para cumplir con sus compromisos escolares durante la etapa de la infancia, se establece —conforme sus propias respuestas—, que la causa principal motivante en cuanto a la ausencia de respaldo de su familia se centra en el factor económico.

El 41.5% de las mujeres evaluaron que fueron los problemas económicos por los cuales atravesaba su familia, la causa principal que impidió el debido soporte del núcleo familiar durante su etapa de niñez y compromisos escolares; el siguiente punto mencionado por ellas, fue la ausencia de alguno de los padres (14.6%); 7.3% lo atribuyó a los problemas de salud de algún integrante de la su familia; 4.9% “porque no les importaba mucho”; otro porcentaje similar (4.9%) lo fundamentó en “otras razones”; 2.9% a “varias razones” y 24.4% no respondió.

A su vez, las PPL en el CERESO de Apodaca, atribuyeron en un 35.9% a los problemas económicos al interno de su núcleo, como la causa que impidió a su familia apoyarlo en sus compromisos escolares durante la etapa de su infancia; 10.3% a la ausencia de alguno de sus padres; 5.2% a “varias razones”; 5.1% a problemas de salud de algún integrante de la familia; 2.6% a “otras razones” y el 41.0% no contestó.

Tabla 51

Razones por las que las personas privadas de la libertad afirman que no han podido recibir apoyo de su familia para cumplir sus compromisos escolares

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Problemas económicos	17	41.5%	14	35.9%	31	16.3%
Problemas de salud de algún integrante	3	7.3%	2	5.1%	5	6.3%
Ausencia de alguno de los padres	6	14.6%	4	10.3%	10	12.5%
No les importaba mucho	2	4.9%	0	0.0%	2	2.5%
Otras razones	2	4.9%	1	2.6%	3	3.8%
Varias razones	1	2.4%	2	5.2%	3	3.8%
No contestó	10	24.4%	16	41.0%	26	32.6%
Total	41	100%	39	100%	80	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Durante su etapa escolar, un 22.2% de la población perteneciente a la comunidad penitenciaria de Escobedo y Apodaca entrevistadas, indican que fueron objeto de agresiones en la escuela a la cual asistían. Las mujeres que no fueron objeto de violencia en sus escuelas llegan al 74.3% (122 casos); en este ámbito de no-violencia en la escuela, los varones se ubican en el 68.9% (124 frecuencias).

Tabla 52

Personas privadas de la libertad que afirmaron haber recibido agresiones durante su estancia en la escuela

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No recibieron agresiones	122	74.3%	124	68.9%	246	71.9%
Sí recibieron agresiones	36	22.2%	40	22.2%	76	22.2%
No contestó	4	2.5%	16	8.9%	20	5.9%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

La población de la comunidad penitenciaria entrevistada que indicó haber sido objeto de algún tipo de violencia durante su etapa escolar (76 casos en hombres y mujeres), externaron en un promedio del 52.6% que, durante dicho ciclo, fueron agredidos por sus compañeros; las agresiones registradas sobre el género femenino, durante ese período fueron estimadas en el orden del 58.3%, mientras que en los varones ascendió al 47.5%.

Las mujeres dicen haber sido agredidas por sus maestros en un 13.9% de los casos; los hombres en el 12.5%; la opción de “varios” fue el siguiente rubro que obtuvo los señalamientos más altos, siendo del orden del 19.4% en las mujeres y del 17.5% en los varones. En el caso de las pandillas, solo el 10.0% de los varones sostuvieron que durante su infancia fueron agredidos por ellas.

Tabla 53

Agresor de las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Compañeros	21	58.3%	19	47.5%	40	52.6%
Maestros	5	13.9%	5	12.5%	10	13.2%
Directivos	0	0.0%	1	2.5%	1	1.3%
Pandillas	0	0.0%	4	10.0%	4	5.3%
Otros	2	5.6%	0	0.0%	2	2.6%
No contestó	1	2.8%	2	5.0%	3	3.9%
Varios	7	19.4%	7	17.5%	14	18.4%
Todos	0	0.0%	2	5.0%	2	2.6%
Total	36	100%	40	100%	76	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 76 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela

Sobre el tipo de agresiones recibidos por los PPL, hombres y mujeres durante su etapa escolar, la opción “varias”, donde se enfoca la combinación de violencia física, verbal y psicológica recibió el promedio más alto con un 43.4%. Durante el ciclo escolar comprendido en su etapa de la infancia, los hombres manifiestan haber sufrido violencia física en un 30.0% de los casos; 15.0% padeció la de carácter verbal y 5.0% psicológica. En las mujeres la violencia física se presentó en

un 19.4%; 22.0% fue objeto de agresiones verbales; 5.6% de carácter psicológico y 2.6% asegura que “fueron todas”.

Tabla 54

Tipo de agresiones recibidas por las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Física	7	19.4%	12	30.0%	19	25.0%
Verbal	8	22.2%	6	15.0%	14	18.4%
Psicológica	2	5.6%	2	5.0%	4	5.3%
Sexual	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Otra	0	0.0%	1	2.5%	1	1.3%
Varias	17	47.3%	16	40.0%	33	43.4%
Todas	1	2.8%	0	0.0%	1	1.3%
No contestó	1	2.8%	3	7.5%	4	5.3%
Total	36	100%	40	100%	76	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 76 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela

Luego de ser agredidos dentro del ámbito escolar durante su infancia, el 25.0% de las mujeres manifiesta que “no hizo nada”, mientras que, en los varones, este porcentaje se ubica en el 20.0%. Entre ambos géneros, un 26.2% en promedio, asegura haber respondido de “varias formas”.

En esta misma pregunta, las mujeres respondieron en un 16.7% de los casos, que ellas, avisaron a las autoridades sobre los hechos acontecidos; lo mismo hicieron el 7.5% de los varones.

Como contraste, “los golpes” a sus agresores, fue la respuesta para el 12.5% de los varones y del 5.6% de las mujeres; las agresiones verbales fueron las conductas asumidas por el 10.0% de los varones y el 5.6% de las mujeres.

Las mujeres comentaron en el 11.1% de los casos, que ellas pidieron ayuda a su familia cuando fueron agredidas en la escuela; en este rubro, los varones lo hicieron apenas en el 2.5% de los casos. El solicitar apoyo a los compañeros de aula se presentó en el 2.5% de las respuestas dadas por los hombres y no tuvo ningún requerimiento en este rubro en el caso de las mujeres.

Tabla 55

Respuesta a las agresiones recibidas por las personas privadas de la libertad mientras se encontraban en la escuela¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No hice nada	9	25.0%	8	20.0%	17	22.4%
Respondí con golpes	2	5.6%	5	12.5%	7	9.2%
Respondí con agresiones verbales	2	5.6%	4	10.0%	6	7.9%
Avisé a las autoridades escolares	6	16.7%	3	7.5%	9	11.8%
Le pedí ayuda a otros compañeros	0	0.0%	1	2.5%	1	1.3%
Solicité ayuda a la familia	4	11.1%	1	2.5%	5	6.6%
Otra forma	1	2.8%	4	10.0%	5	6.6%
Varias formas	9	25.1%	11	27.5%	20	26.2%
No contestó	3	8.3%	3	7.5%	6	7.9%
Total	36	100%	40	100%	76	100%

A pregunta expresa sobre si tras las agresiones enfrentadas durante la etapa escolar, ellos, (hombres y mujeres entrevistados) tuvieron en ese momento apoyo de las autoridades del ramo, el 44.4% de las mujeres indicó que sí; en los hombres, este porcentaje se ubica en el orden del 57.5%. Un 38.9% de las mujeres asegura no haber obtenido ningún apoyo de la autoridad escolar y un 25.0% de los varones indica lo mismo. En promedio un 17.1% de la población entrevistada no respondió a esta pregunta.

Tabla 56

Personas privadas de la libertad que recibieron apoyo educativo de las autoridades¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No recibió apoyo	16	44.4%	23	57.5%	39	51.3%
Sí recibió apoyo	14	38.9%	10	25.0%	24	31.6%
No contestó	6	16.7%	7	17.5%	13	17.1%
Total	36	100%	40	100%	76	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 76 personas que afirmaron recibir agresiones en la escuela

III.3. Salud física y mental

Los resultados de la encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad muestran que las carencias vividas dentro de sus núcleos familiares durante su infancia se manifestaron en el ámbito económico, de vivienda y, además, de salud. El 41.8% de los internos encuestados manifestó no tener ningún tipo de seguridad social; es decir, 4 de cada 10 personas no tenía acceso a servicio médico. Esta misma tendencia se manifiesta en el 40.1% la población femenina y en el 43.3% de los internos correspondientes al género masculino.

Tabla 57

Personas privadas de la libertad que recuerdan haber tenido acceso a servicio de seguridad social durante su infancia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No tenía seguridad social	65	40.1%	78	43.3%	143	41.8%
Sí tenía seguridad social	80	49.4%	83	46.1%	163	47.7%
No contestó	17	10.5%	19	10.6%	36	10.5%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Un aspecto importante es que, aun cuando en un porcentaje importante no contaban con un esquema de seguridad social, 9 de cada 10 personas privadas de la libertad indicaron haber sido vacunados durante su infancia. Los resultados indican que el 95.7% de las mujeres y el 84.4% de los hombres afirmaron contar con un esquema de vacunación.

Tabla 58

Personas privadas de la libertad que recuerdan haber sido vacunado durante su infancia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No fue vacunado	5	3.1%	14	7.8%	19	5.6%
Sí fue vacunado	155	95.7%	152	84.4%	307	89.8%
No contestó	2	1.2%	14	7.8%	16	4.7%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Las personas privadas de la libertad encuestadas afirmaron en un 67.8% (7 de cada 10 personas) no haber tenido algún problema de salud grave; mientras que el 26.0% indicó si haberla padecido. En este mismo sentido, el 67.3% de las mujeres y el 68.3% de los hombres indicaron no haber tenido enfermedades graves; mientras que el 28.4% de la población femenina y en el 23.9% de la masculina si se han registrado enfermedades graves.

Tabla 59

Personas privadas de la libertad que tuvieron problemas de salud grave en su infancia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No ha tenido problemas	109	67.3%	123	68.3%	232	67.8%
Sí ha tenido problemas	46	28.4%	43	23.9%	89	26.0%
No contestó	7	4.3%	14	7.8%	21	6.1%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

Entre las enfermedades que se presentaron con mayor frecuencia entre las personas privadas de la libertad encuestadas se encuentran la varicela (32.6%); la viruela (23.6%); varias enfermedades (8.9%); paperas (5.6%) y hepatitis (4.5%). Por lo que respecta a la población penitenciaria del género femenino, el 37.0% afirmó haber tenido varicela; 30.4% mencionó padecer “otras” enfermedades; 17.4% tuvo viruela y 6.5% hepatitis. Mientras que, entre los hombres, la enfermedad que se presentó con mayor frecuencia fue la viruela (30.2%); la varicela (27.9%) y 16.2% señaló haber padecido varias enfermedades durante su infancia.

Tabla 60

Problemas de salud grave que las PPL recuerdan haber tenido durante su infancia¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Varicela	17	37.0%	12	27.9%	29	32.6%
Sarampión	0	0.0%	3	7.0%	3	3.4%
Hepatitis	3	6.5%	1	2.3%	4	4.5%
Paperas	2	4.3%	3	7.0%	5	5.6%
Viruela	8	17.4%	13	30.2%	21	23.6%
Otras	14	30.4%	2	4.7%	16	18.0%
No contestó	1	2.2%	2	4.7%	3	3.3%
Varias	1	2.2%	7	16.2%	8	8.9%
Total	46	100%	43	100%	89	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). 1Se consideran solamente las 89 personas que afirmaron haber tenido problemas de salud graves durante su infancia.

De las personas privadas de la libertad que afirmaron haber padecido alguna enfermedad durante su infancia, el 52.8% indicó haber recibido atención médica y de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social; el 11.2% en el Seguro Popular; 11.2% con un médico particular. Asimismo, los internos participantes indicaron organismos como el ISSSTE (4.5%); organizaciones benéficas (3.4%) y organizaciones públicas (2.2%). Además, 5 personas afirmaron que nunca recibieron atención.

De esta forma, el 47.8% recibió atención en el IMSS; 17.4% en el seguro popular y 17.4% con médicos particulares. Por su parte, entre los internos del género masculino, el 58.1% fue atendido

en el IMSS; 9.3% en el ISSSTE; 4.7% en el Seguro Popular, mientras que la cifra de aquellos que acudieron con médicos particulares fue de 11.2%

Tabla 61

Problemas de salud grave que las personas privadas de la libertad recuerdan haber tenido durante su infancia¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Seguro social	22	47.8%	25	58.1%	47	52.8%
Seguro popular	8	17.4%	2	4.7%	10	11.2%
ISSSTE	0	0.0%	4	9.3%	4	4.5%
Hospital PEMEX	0	0.0%	1	2.3%	1	1.1%
Organizaciones benéficas	0	0.0%	3	7.0%	3	3.4%
Organizaciones públicas	1	2.2%	1	2.3%	2	2.2%
Médico particular	8	17.4%	2	4.7%	10	11.2%
Otros	4	8.7%	1	2.3%	5	5.6%
Varios	0	0.0%	1	2.3%	1	1.1%
No fue atendido	2	4.3%	3	7.0%	5	5.6%
No contestó	1	2.2%	0	0.0%	1	1.1%
Total	46	100%	43	100%	89	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 89 personas que afirmaron haber tenido problemas de salud graves durante su infancia.

Los resultados de la encuesta aplicada indican que 7 de cada 10 personas privadas de la libertad afirmaron no haber recibido apoyo psicológico durante su infancia; apenas 2 de cada 10 (16.4%) afirmaron haber recibido esta clase de atención.

En el caso de las mujeres, apenas el 14.8% indicó ser tratada por un psicólogo, mientras que, en el caso de los hombres, esta cifra se elevó al 17.8%. Sin embargo, los resultados de la encuesta indican que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no tuvieron atención del tipo psiquiátrico o psicológico.

Tabla 62

Personas privadas de la libertad que recuerdan haber recibido apoyo psicológico durante su infancia

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No recibió apoyo psicológico	128	79.0%	123	68.3%	251	73.4%
Sí recibió apoyo psicológico	24	14.8%	32	17.8%	56	16.4%
No contestó	10	6.2%	25	13.9%	35	10.2%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

De los participantes en la encuesta, 3 de cada 10 (27%) señalaron haber tenido varios problemas psicológicos; 2 de cada 10 (21.4%) fue atendido por depresión; 12.5% por otro tipo de padecimientos psicológicos; 10.7% por adicciones. Además, existieron casos de estrés (3.6%); ansiedad (3.6%) y miedo (5.4%).

Tabla 63

Problemas psicológicos por los que las personas privadas de la libertad recuerdan haber recibido atención durante su infancia¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Depresión	5	20.80%	7	21.90%	12	21.40%
Angustia	1	4.20%	0	0.00%	1	1.80%
Estrés	0	0.00%	2	6.30%	2	3.60%
Ansiedad	1	4.20%	1	3.10%	2	3.60%
Miedo	1	4.20%	2	6.30%	3	5.40%
Adicciones	1	4.20%	5	15.60%	6	10.70%
Otras	5	20.80%	2	6.30%	7	12.50%
Varias	7	29.40%	8	24.80%	15	27.00%
No contestó	3	12.50%	5	13.60%	8	14.20%
Total	24	100%	32	100%	56	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 56 personas que afirmaron haber recibido atención psicológica durante su infancia.

De las 56 personas que afirmaron haber recibido atención por un problema de índole psicológico, el 20.0% (11 personas) fue atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social; 18.2% con médicos particulares, misma cifra de aquellos que recibieron tratamiento en organizaciones diversas no especificadas. Asimismo, 5 personas (9.1%) fue atendida en instituciones públicas. Es importante indicar que 4 personas no recibieron atención psicológica.

Tabla 64

Lugar donde las personas privadas de la libertad recuerdan haber recibido atención durante su infancia para sus problemas psicológicos¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Seguro social	1	4.20%	10	32.30%	11	20.00%
Seguro popular	2	8.30%	3	9.70%	5	9.10%
ISSSTE	1	4.20%	1	3.20%	2	3.60%
Hospital PEMEX	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Organizaciones benéficas	2	8.30%	2	6.50%	4	7.30%
Organizaciones públicas	4	16.70%	1	3.20%	5	9.10%
Médico particular	6	25.00%	4	12.90%	10	18.20%
Otros	4	16.70%	6	19.40%	10	18.20%
No fue atendido	1	4.20%	3	9.70%	4	7.30%
No contestó	3	12.50%	1	3.20%	4	7.30%
Total	24	100%	32	100%	56	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 56 personas que afirmaron haber recibido atención psicológica durante su infancia.

III.4. Ámbito Laboral

La encuesta aplicada a 342 personas privadas de la libertad en los Centros de Reinserción Social varonil (Apodaca) y femenino (Escobedo), durante Julio del 2019, indica que, en lo que corresponde a las mujeres, 8 de cada 10 (75.9%), se encuentra trabajando; mientras que solo 2 de cada 10 (20.4%) no lo hace. En la población penitenciaria del género masculino; 9 de cada 10 (88.9%) desempeñan alguna actividad laboral dentro del CERESO; tan solo 13 personas afirmaron lo contrario. La estadística general indica que el 82.7% de los internos encuestados (283 personas) tienen un empleo dentro del CERESO.

Tabla 65

Personas privadas de la libertad que afirmaron encontrarse trabajando dentro del CERESO

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No se encuentra trabajando	33	20.40%	13	7.20%	46	13.50%
Sí se encuentra trabajando	123	75.90%	160	88.90%	283	82.70%
No contestó	6	3.70%	7	3.90%	13	3.80%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019).

En lo que respecta a las actividades laborales desempeñadas por las personas privadas de la libertad, los datos de la encuesta aplicada indican que, entre la población del género femenino, el 35.8% (4 de cada 10 personas) se dedican al desarrollo de artesanías y manualidades; el 14.6% ejerce tareas de maquila; el 5.7% hace labores de limpieza; 4.1% es canastera; asimismo, este resultado demuestra que el 33.3% (una tercera parte de las mujeres) efectúa varias actividades laborales. Por otra parte, en lo que respecta a los hombres, el 18.4% se desempeña en actividades de maquila; 10.1% a la elaboración de artesanías y manualidad; 8.2% a la fabricación de comida; 5.7% a labores de limpieza; 4.4% a la costura y 3.2% a la repostería. Entre la población masculina, 2 de cada 10 personas (17.3%) realiza varias actividades. La estadística general indica que la cuarta parte de la población penitenciaria (25.4%) realiza una o más actividades laborales dentro del CERESO. El 21.4% se emplea en la elaboración de artesanías y manualidades; el 16.7% labora dentro de las maquiladoras instaladas dentro de los centros de reinserción social; 5.7% se dedica a la limpieza de las instalaciones y el 5% prepara alimentos.

Tabla 66

Actividades laborales desempeñadas por las personas privadas de la libertad encuestadas¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Elaboración de comida	1	0.80%	13	8.20%	14	5.00%
Artesanías y manualidades	44	35.80%	16	10.10%	60	21.40%
Canastero(a)	5	4.10%	4	2.50%	9	3.20%
Limpieza	7	5.70%	9	5.70%	16	5.70%
Lavado de ropa	2	1.60%	1	0.60%	3	1.10%
Tareas de maquila	18	14.60%	29	18.40%	47	16.70%
Tareas de costura	1	0.80%	7	4.40%	8	2.80%
Pastelería o repostería	0	0.00%	5	3.20%	5	1.80%
Otras actividades	4	3.30%	43	27.20%	47	16.70%
Varias actividades	41	33.30%	28	17.30%	69	25.40%
No contestó	0	0.00%	3	1.90%	3	1.10%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

El trabajo es una de las actividades que forman parte del proceso de reinserción social que los internos/internas realizan con la finalidad de obtener un beneficio económico, además de una reconsideración sobre el dictamen de sus condenas, motivo por el cual, buscan insertarse en las diferentes opciones laborales que se ofrecen dentro del CERESO. En ese sentido, las estadísticas indica que, dentro de la población femenina, el 43.2% (4 de cada 10), lleva trabajando menos de un año: el 19.3% (3 de cada 10) lleva de uno a cinco años; el 22.8% de 5 a 10 años; mientras que apenas el 3.2% ha trabajado por más de 10 años.

Por su parte, en lo que corresponde a los hombres; una cuarta parte de estos (25.6%) lleva trabajando menos de un año; el 33.8% lleva de 1 a 5 años; el 16.3% tiene de 5 a 10 laborando; misma cifra de aquellos que llevan más de 10 años. La estadística general indica que el 33.2% (3 de cada 10), llevan menos de un año en sus actividades laborales; el 31.8% lleva de 1 a 5 años; el 19.1% tiene de 5 a 10 años y el 11% tiene más de 10 año participando laboralmente.

Tabla 67

Tiempo en el que las personas privadas de la libertad encuestadas llevan trabajando¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de un año	53	43.10%	41	25.60%	94	33.20%
De 1 a 5 años	36	29.30%	54	33.80%	90	31.80%
De 5 a 10 años	28	22.80%	26	16.30%	54	19.10%
Más de 10 años	4	3.20%	27	16.90%	31	11.00%
No contestó	2	1.60%	12	7.50%	14	4.90%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

En lo general, el ambiente de trabajo dentro de los centros de reinserción social es evaluado como bueno; tal como lo indican el 47.3% de las personas privadas de la libertad encuestada; por otra parte, el 23.7% lo considera regular y el 18.4% piensa que es excelente. En este mismo aspecto, solamente el 7.1% calificó como malo el ambiente laboral que se vive dentro de los CERESO.

Entre la población femenina, 6 de cada 10 (56.9%) calificó el ambiente como bueno; 2 de cada 10 (20.3%) dijo que era excelente y 17.9% lo evaluó como regular. Por su parte, entre los hombres, 4 de cada 10 (40%) dijeron que es bueno; 28.1% lo calificó como regular y 16.9% como excelente.

Tabla 68

Evaluación del ambiente laboral de las personas privadas de la libertad¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Excelente	25	20.30%	27	16.90%	52	18.40%
Bueno	70	56.90%	64	40.00%	134	47.30%
Regular	22	17.90%	45	28.10%	67	23.70%
Malo	5	4.10%	15	9.40%	20	7.10%
No contestó	1	0.80%	9	5.60%	10	3.60%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

Los ingresos recibidos por las personas privadas de la libertad por el trabajo que desempeñan dentro de los centros de reinserción social son muy bajos. Los resultados demuestran que 6 de cada 10 personas recluidas en el estado de Nuevo León, percibe menos de \$300 pesos por semana; la cuarta parte (25.1%) recibe entre \$300 y \$600 pesos semanales; 4.6% entre \$600 y \$900; 1.8% gana entre \$900 y \$1200 pesos y apenas el 0.4% (1 persona) percibe más de \$1,200 por semana.

Esta misma tendencia aplica entre la población femenina, 8 de cada 10 (82.1%) personas perciben menos de \$300 pesos semanales; 9.8% gana entre \$300 y \$600 pesos; 0.8% (una persona) recibe entre \$600 y \$900 pesos; además, 2 mujeres indicaron no recibir pago por las actividades que desarrollan. Entre los hombres, el 46.9% recibe menos de \$300 pesos a la semana; 36.9% entre

\$300 y \$600 pesos; 7.5% recibe entre \$600 y \$900 pesos; 3.1% gana de \$900 a \$1,200 pesos y apenas un interno percibe más de \$1,200 pesos semanales.

Tabla 69

Ingresos semanales de las personas privadas de la libertad¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de \$300 pesos	101	82.10%	75	46.90%	176	62.20%
Entre \$300 y \$600 pesos	12	9.80%	59	36.90%	71	25.10%
De \$600 a \$900 pesos	1	0.80%	12	7.50%	13	4.60%
De \$900 a \$1200 pesos	0	0.00%	5	3.10%	5	1.80%
Más de \$1200 pesos	0	0.00%	1	0.60%	1	0.40%
No recibe pago	2	1.60%	0	0.00%	2	0.70%
No contestó	7	5.70%	8	5.00%	15	5.30%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

Como una forma de generar más ingresos, las personas privadas de la encuestadas señalaron, en 29.3% (3 de cada 10 persona), que deben trabajar horas extras; por otra parte, 6 de cada 10 (61.5%) indicó que no hace este tipo de actividades. En lo que respecta a la población penitenciaria del género femenino, apenas 1 de cada 10 (10.6%) señaló que trabaja horas extras; mientras que, en la población masculina, el 43.8% indicó completar sus actividades laborales horas adicionales de trabajo.

Tabla 70

Personas privadas de la libertad que trabajan horas extra dentro del CERESO¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
No trabajan horas extra	96	78.00%	78	48.80%	174	61.50%
Sí trabajan horas extra	13	10.60%	70	43.80%	83	29.30%
No contestó	14	11.40%	12	7.50%	26	9.20%
Total	162	100%	180	100%	342	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

De las 83 personas que indicaron trabajar horas extras, el 66.3% indicó recibir menos de \$50 pesos por cada hora extra laborada; el 10.8% señaló percibir de \$50 a \$100 pesos horas; 8.4% gana más de \$100 pesos por hora extra y una persona indicó que trabaja horas extra, pero estas no son remuneradas.

Entre la población penitenciaria del género femenino, son apenas 13 personas las que laboran horas adicionales; de estas, 8 perciben menos de \$50 pesos por cada hora extra trabajada; 3 ganan más de \$100 pesos y una señaló trabajar, pero no recibir remuneración. Entre los hombres, el 67.1% gana menos de \$50 pesos por hora extra, 12.9% indicó recibir de \$50 a \$100 pesos; 5.7% gana más de \$100 pesos.

Tabla 71

Ingresos por hora extra trabajada por las personas privadas de la libertad¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Menos de \$50 pesos	8	61.50%	47	67.10%	55	66.30%
De \$50 a \$100 pesos	0	0.00%	9	12.90%	9	10.80%
Más de \$100 pesos	3	23.10%	4	5.70%	7	8.40%
Sí trabaja, pero no le pagan	1	7.70%	0	0.00%	1	1.20%
No contestó	1	7.70%	10	14.30%	11	13.20%
Total	13	100%	70	100%	83	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 83 personas que afirmaron tener un trabajo y que hacen horas extra.

Un aspecto importante de resaltar es el hecho de que la mayoría de las personas privadas de la libertad encuestadas encuentran gratificante el trabajo que desarrolla dentro del CERESO. En general el 71.0% evalúa de forma positiva la labor que desempeña (38.5% lo califica como satisfactorio y 32.5% como muy satisfactorio). El 15.9% lo evalúa como poco satisfactorio y apenas el 6.7% lo evalúa de forma no satisfactoria. En lo que respecta al género femenino, la tendencia se presenta de la misma forma. El 74.0% de las mujeres privadas de la libertad califica de manera positiva el trabajo que desarrolla (37.4% muy satisfactorio y 38.2% como satisfactorio). Mientras que, en los hombres, el 70.0% califica su trabajo de manera positiva (28.7% muy satisfactorio y 38.8% como satisfactorio).

Tabla 72

Evaluación de la satisfacción laboral de las personas privadas de la libertad¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Muy satisfactorio	46	37.40%	46	28.70%	92	32.50%
Satisfactorio	47	38.20%	62	38.80%	109	38.50%
Poco satisfactorio	17	13.80%	28	17.50%	45	15.90%
Algo insatisfactorio	2	1.60%	3	1.90%	5	1.80%
Muy insatisfactorio	1	0.80%	13	8.10%	14	4.90%
No contestó	10	8.10%	8	5.00%	18	6.40%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

En general, la mayoría de las personas privadas de la libertad invierten sus ingresos en sus gastos personales (comida, limpieza, entre otros), tal como lo afirmó el 54.1% de los encuestados; asimismo, el 19.0% indicó que tiene varios gastos; 1 de cada 10 señaló que el dinero lo destina al cuidado de sus hijos y el 4.9% apoya a los gastos familiares. En cuando a las mujeres, el 44.7% señaló utilizar sus ingresos en sus gastos personales; el 25.8% indicó tener varios gastos y el 15.4% lo destina a sus hijos. Por su parte, el 61.3% de los hombres emplea sus ingresos en sus gastos personales; 13.2% tiene gastos variados y el 6.3% se lo entregan a sus descendientes.

Tabla 73

Aspecto en el que invierten sus ingresos las personas privadas de la libertad¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
En mis gastos personales	55	44.70%	98	61.30%	153	54.10%
En pago de abogados	1	0.80%	1	0.60%	2	0.70%
Apoyo a los gastos familiares	2	1.60%	12	7.50%	14	4.90%
Ahorro	2	1.60%	0	0.00%	2	0.70%
En mis hijos(as)	19	15.40%	10	6.30%	29	10.20%
Otros	4	3.30%	8	5.00%	12	4.20%
Varios gastos	32	25.80%	21	13.20%	53	19.00%
No contestó	8	6.50%	10	6.30%	18	6.40%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

Asimismo, 7 de cada 10 personas privadas de la libertad encuestadas (73.5%) afirmaron que trabajar dentro del centro de reinserción social les será de utilidad cuando obtengan su libertad; mientras que 2 de cada 10 (21.2%) señaló lo contrario. Las mujeres encuestadas señalaron en el 75.0% de los casos que sí les servirá; 17.1% indicó que no les será útil. Mientras que, entre la población de género masculino, el 71.9% afirmó que sí les servirá y el 24.4% que no.

Tabla 74

Personas privadas de la libertad que afirmaron que trabajar dentro del CERESO les será de utilidad cuando obtengan su libertad¹

Respuesta	Femenino		Masculino		Total	
	F	%	F	%	F	%
Sí le servirá	93	75.60%	115	71.90%	208	73.50%
No le servirá	21	17.10%	39	24.40%	60	21.20%
No contestó	9	7.30%	6	3.80%	15	5.30%
Total	123	100%	160	100%	283	100%

Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada a personas privadas de la libertad en el CERESO Femenil “Escobedo” y en el CERESO “Apodaca” (Julio, 2019). ¹Se consideran solamente las 283 personas que afirmaron tener un trabajo.

IV. El fracaso escolar: Causas y consecuencias desde la reclusión

Las causas del fracaso escolar y la deserción son muy extensas, pero todas se relacionan entre sí. El entorno del estudiante —familiar y personal—, marca una pauta en el comportamiento dentro del centro educativo. Según Coll, Palacios y Machesi (2009):

El contexto es inseparable de contribuciones activas de los individuos, sus compañeros sociales, las tradiciones sociales y los materiales que se manejan. Desde este punto de vista, los contextos no han de entenderse como algo definitivamente dado, sino que se construyen dinámicamente, mutuamente, con la actividad de los participantes.

La educación formal ciertamente se dedica a la formación integral del individuo, sin embargo, especialmente se centra en brindar un desarrollo intelectual en los estudiantes. Se tiene la falsa creencia que es totalmente responsabilidad de las instituciones educativas el “educar”, entiéndase este término como la obligación de enseñar contenidos y a su vez disciplinar y crear que todos los estudiantes sean ciudadanos de bien.

El objetivo de la escuela es enseñar contenidos, normas y valores, pero es cuestión principalmente de la familia ayudar a aplicar estos conocimientos y actitudes en la vida real. Marcar a tiempo los límites de convivencia, hará que el niño o adolescente se adapte más fácilmente a los parámetros que tienen las instituciones educativas (De León, 2011).

Según el documento titulado El Derecho a una educación de Calidad: Informe 2014 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), presentado ante el Senado de la República Mexicana por la presidente de esta institución Sylvia Schmelkes, en México, existen diversas problemáticas educativas que incrementan la deserción escolar, aumentan el desempleo y potencia la incorporación de los jóvenes a actividades ilícitas.

En el documento presentado por Schmelkes, se destaca la existencia de rezagos en la educación y un incremento en el índice de deserción escolar, sobre este aspecto sostiene que:

Se trata del problema de mayor relevancia. Afecta al 20% de una generación de secundaria y a 40% de una media superior. Uno de cada tres niños de 15 años se encuentra fuera de la escuela, y una quinta parte de los jóvenes de 18 a 24 años no termina la secundaria (Milenio, 2014).

Así mismo, afirma que la falta de educación en los sectores más jóvenes de la población será, a mediano y largo plazo, un factor que limite las posibilidades económicas y laborales de este sector de la población:

La inasistencia y las trayectorias escolares son difíciles de revertir, y sus efectos son determinantes en el futuro de las personas. La deserción aumenta el riesgo de desempleo, así como de la incorporación de los jóvenes al crimen organizado, apuntó en el informe (Milenio, 2014).

Además, la funcionaria destaca que uno de los grandes problemas encontrados por el INEE es la desigualdad de acceso a oportunidades educativas; principalmente, entre la población que se encuentra entre los 13 y los 17 años de edad.

En lo que respecta a la educación básica el panorama luce similar. De acuerdo al INEE en una sola generación de estudiantes se puede perder hasta el 16% de la misma; sin embargo, afirman que la mayor cantidad de deserción se da en el nivel medio superior.

La deserción escolar en este nivel educativo medio superior, trae consecuencias graves que repercuten directamente en el desarrollo tanto del individuo como del país; el abandono de estos estudios puede obstaculizar su formación y, por ende, frenar el crecimiento en la educación superior y la oportunidad de mejorar la situación laboral y económica.

Proyecciones estimadas por el Sistema para el análisis de la estadística educativa (2005-2006), en México para el 2015-2016, se prevén 1,800,839 egresados de estudios de secundaria, una tasa de absorción de estudiantes que comienzan en el nivel medio superior de 98.6%, con un 15.8% de alumnos en deserción y un 61.6% de eficiencia terminal; estudiantes que son el reflejo de deserción que mide el porcentaje de alumnos que egresaron del nivel, de acuerdo a los que ingresaron tres años antes; asimismo la proyección alcanzaba un 69.3% de egresados acorde a su periodo de egreso (SEMS, 2008). Sin embargo, actualmente la realidad es otra.

En nuestro país existe un alto índice de fracaso escolar, según el Panorama de la Educación 2014, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para 2014,

México, ocupó el primer lugar en el número de estudiantes desertores de 15 a 18 años y ratificó, el tercer lugar entre las naciones con mayor población juvenil que no estudia ni trabaja, con 7 millones 337 mil 520 jóvenes (La Jornada, 2013).

Al presentar el citado documento, la directora del gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, sostuvo que ningún otro país presenta una “caída tan brutal” como México, pues, en nuestra nación se pierde aproximadamente el 40% de los jóvenes que pasan de la educación media superior a la superior. Entre las causas de la deserción se encuentran los problemas económicos y familiares entre otros.

El gran problema se centra sobre todo en los jóvenes de 15 años en adelante, los cuales, por tener carencias económicas, problemas familiares o de adicciones, abandonan la escuela, sin haber alcanzado un nivel de educación mínimo para poder desenvolverse con facilidad en un mundo globalizado y conseguir una buena remuneración por su trabajo, establece el estudio.

Ambos organismos sostienen la necesidad de establecer e impulsar programas de apoyo para que los jóvenes de escasos recursos y en situaciones de vulnerabilidad no dejen de estudiar, pues de lo contrario, sus aspiraciones se ven mermadas, y con ello, las posibilidades de mejores empleos y acceder a una mejor calidad de vida.

La educación es un factor fundamental que incrementa las posibilidades de desarrollar una mejor calidad de vida de cualquier persona. La escolaridad de una persona está estrechamente ligada a su productividad laboral.

Según la OCDE, para el año 2013, en México, se presentó un nivel de productividad inferior al 60% del promedio del resto de las naciones que conforman este organismo; nuestra nación es el país del bloque con la productividad más baja, tal como se revela en el estudio titulado México, Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación.

IV.1. Educación, familia y prisión: El impacto carcelario en el ámbito académico

Para una familia, la reclusión de uno de los miembros de su núcleo, provoca una serie de cambios que alteran severamente su funcionamiento e impactan negativamente la vida de quienes los integran. En primera instancia, genera problemas económicos; mismo que no aparecen después de que se presenta la reclusión, sino que ya estaban presentes y, se agudizan cuando uno de los integrantes de la familia ingresa a la comunidad penitenciaria.

En la investigación titulada “Cárcel y familia: Crisis socio-ambientales en las familias de internos en Nuevo León” (Cerde y Alvarado, 2015), los autores sostienen que en 9 de cada 10 familias existen problemas económicos; factor que afecta las condiciones de vida de aquellos núcleos familiares en los que uno de sus integrantes se encuentra privado de la libertad.

A través de 151 entrevistas semi estructuradas, realizadas durante los años 2014 y 2015 a familias de internos recluidos en los Centros de Reinserción Social del estado de Nuevo León (Topo Chico, Apodaca y Cadereyta), se analizaron las condiciones de vida y la situación de vulnerabilidad que atraviesan los núcleos familiares de internos penitenciarios.

Los resultados de la encuesta indican que el 50% de los encuestados no cuenta con una casa propia (el 21.2% —2 de cada 10 familias— habita en una vivienda prestada, el 15.2% paga renta y el

11.9% la comparte con otras personas). Por otro lado, el 50.3% de las familiares indicó que su vivienda es propia. Además, se encontró que el 55.0% de las familias (83 casos) habitan en el mismo hogar; mientras que el 44.4% (67 casos) decidió cambiar de vivienda.

La vulnerabilidad derivada de no contar con un hogar propio se acentúa cuando en 5 de cada 10 familias encuestadas (45.0%) se afirma que en una vivienda habitan de 5 a 8 personas, con ingresos, en el 94.0% de los casos inferiores a \$6,000 pesos; cifra que resulta insuficiente para solventar las necesidades de la familia (servicios básicos, asistencia médica y, en múltiples casos, ayudar en la manutención del interno/interna penitenciario).

Una vez que se registra la privación de la libertad, la responsabilidad económica del núcleo recayó, en el 26.5% de los casos, en el padre del interno y 20.5% en su madre. Sin embargo, a pesar de los problemas económicos que enfrentan estas familias, apenas en 38 de los 151 núcleos encuestados, afirmaron tener apoyo gubernamental, principalmente proveniente del programa Prospera.

En el tema económico, en el 86.0% de las familias encuestadas se afirmó la existencia de problemas económicos; en 76.0% de estos núcleos además se indicó que sus ingresos mensuales se vieron afectados. El mayor impacto de estas carencias económicas se traduce en problemas alimentarios (83.1%); pago de servicios (50.8%) y salud y vivienda (46.0% cada uno). En este mismo esquema, aunado a esta situación, los familiares de internos penitenciarios, en 3 de cada 10 casos, erogaron de \$1,000 a \$2,000 en gastos propios del integrante recluido.

El impacto de la reclusión de uno de los miembros de su núcleo también incide en el aspecto educativo de quienes componen estos grupos. En 2 de cada 10 casos (16.0%) se presentó una variación en las expectativas educativas. Así mismo, en el 18.5% de las familias encuestadas se afirmó que uno de sus miembros se había visto forzado a interrumpir sus estudios (principalmente en el nivel medio, 50.0%), principalmente, para activarse laboralmente y contribuir a la economía familiar.

Por otra parte, Cerda, Alvarado y Alvarado (2015), describen que, en las 151 familias encuestadas, las estadísticas indican que en estos grupos se incluyen 716 personas; es decir, un promedio de 5 integrantes. El género de los familiares de los internos es, en su mayoría (56.3%) femenino, mientras que 43.7% corresponde al género masculino.

De quienes integran estos núcleos, el 16.3% (117 personas) tiene una edad que fluctúa entre los 21 y 30 años; el 11.2% (80 individuos) entre 31 y 40 años; el 13.4% (96 personas) entre 41 y 50 años; el 8.2% (59 personas) entre 51 y 60 años; mientras que el 4.9% (35 familiares) tiene 61 años o más. La edad promedio de las 716 personas que componen las familias de internos entrevistadas, es de 26.5 años.

En relación a la escolaridad, los resultados indican que el 32.3% de los familiares cursaron hasta primaria; el 28.2% hasta secundaria; el 7.8% alcanzó la preparatoria; el 2.2% terminó una carrera técnica y apenas el 1% tiene estudios profesionales. Asimismo, 11.0% de los familiares aún cuenta con la edad para estudiar y 5.2% no tiene estudios.

Según la clasificación de la Secretaría de Educación Pública (2015), el 55% de los integrantes de los núcleos familiares encuestados se encuentra en la etapa educativa, es decir, están en la edad considerada como ideal para estudiar. Por otra parte, 44.4% se encuentran en una etapa post educativa.

Sin embargo, de las 394 personas que se encuentran en la etapa educativa, el 43.4% los casos los familiares se encuentran cursando estudios acordes a su edad. Mientras que el 31.2% (123 familiares) estos tuvieron que abandonar sus estudios, dejando inconclusa su formación académica (el 56.9% abandonó la secundaria). Por otra parte, el 17.3% aún no tiene edad para comenzar a estudiar; el 3.3% no ha comenzado a estudiar, aunque cuenta con la edad para hacerlo; el 1.5% se encuentra en una etapa previa respecto al nivel ideal (rezago educativo).

En lo que corresponde a los familiares que se encuentran en la etapa post educativa; es decir, que tienen más de 25 años de edad y que, según la SEP, ya no se encuentran en la edad que puede considerarse como “natural” para seguir sus estudios, se encontró que el 34.3% alcanzó hasta el grado de primaria y 33.3% el de secundaria. Es decir, en 67.0% de los familiares de internos en etapa post educativa alcanzaron solamente los niveles más básicos de educación. Por otro lado, el 5.7% (18 personas) tiene estudios de preparatoria; el 4.7% cursó una carrera técnica y apenas el 1.3% (4 personas) alcanzó el nivel superior. Además, el 6.0% de los familiares dejó inconclusa la primaria; 1.9% la secundaria y 1.6% abandonó sus estudios de preparatoria.

De los 716 familiares de personas privadas de la libertad identificados, en el 89.0% de los casos (9 de cada 10), enfrentan problemas de índole económico. De estos, 210 personas (33.0%) tienen dificultades que se manifiestan en el ámbito educativo. Es decir, 3 de cada 10 familiares tienen complicaciones en este aspecto. Por otra parte, en el 53.6% de los casos no existe este tipo de problemática.

En lo que respecta a la relación entre la educación y el acceso a oportunidades laborales, al presentarse la reclusión de uno de los miembros de la familia, la dinámica del núcleo se ve trastocada, principalmente, en el ámbito económico. La falta de uno de los proveedores de ingreso, los gastos legales y las nuevas necesidades del interno, incrementan las problemáticas vividas en estos núcleos. Por lo cual, el acceso a mejores oportunidades laborales es un factor fundamental para el desarrollo de estas familias. Las estadísticas señalan que el 38.8% de los familiares (278 personas) han tenido dificultades para acceder a nuevos empleos; mientras que el 61.2% no ha manifestado esta clase de problemas.

Al realizar esta evaluación por etapa educativa, se encontró que el 38.4% de los familiares de internos en centros penitenciarios que se encuentra en la etapa post educativa; es decir, que ya no está dentro de la edad recomendada para estudiar, ha tenido problemas para encontrar oportunidades laborales. Esto puede explicarse, al hecho de que la mayoría de los familiares alcanzan solamente el nivel de primaria y secundaria. Esto, frena sus expectativas de un mejor empleo.

La situación vivida por las familias de personas privadas de la libertad provoca que la educación sea un aspecto que pueda pasar a segundo término; factor que impacta de forma negativa en el desarrollo humano, profesional y social de quienes integran estos núcleos limitando sus posibilidades para acceder a mejores oportunidades laborales y, con ello, a mejores ingresos.

IV.2. La reclusión y sus efectos académicos.

La siguiente información se deriva de una investigación cuyo objetivo general es evaluar la forma en la que reclusión de uno de los miembros de la familia en el Centro de Reinserción Social “Apodaca” ubicado en el estado de Nuevo León, impacta en el desempeño y en las expectativas

académicas de los integrantes de estos núcleos, con un enfoque dirigido de forma especial en infantes y adolescentes dependientes de la persona privada de la libertad³.

Para este proyecto se realizaron 57 entrevistas semi estructuradas con familiares de personas privadas de la libertad en el CERESO “Apodaca”. Entre los aspectos que se evaluaron con este instrumento se encuentran datos generales y de procedencia; la información respecto a su núcleo familiar; situación económica; educación de niños y adolescentes; educación de la familia; educación y empleo e información del interno.

Los resultados de la encuesta aplicada indican que en 48 de 57 familias habitan jóvenes o adolescentes menores de edad; de estos, 7 de cada 10 (70.8%) se encuentra estudiando; mientras que el 14.6% no lo hace. Por otra parte, en el 14.6% se indicó que “algunos sí, otros no”. Asimismo, dentro de estos núcleos, el 91.7% de las familias encuestadas indicó que la educación de los infantes es algo “muy importante”.

Entre las repercusiones que tiene la privación de la libertad de uno de los miembros de la familia se enfoca en las complicaciones que se desarrollan en la comunicación entre el interno y quienes componen su familia; factor que, a su vez, incide directamente en las expectativas educativas y académicas de los menores de edad que conforman estas familias. En ese sentido, 8 de cada 10 participantes (81.3%) indicó que este aspecto repercute también en el ámbito educativo de los menores.

Por otra parte, el 50.0% de las familias encuestadas indicó que la privación de la libertad de uno de sus integrantes es un factor generador de conflictos al interno del núcleo que frena las expectativas del núcleo. Además, en el 33.3% de las familias participantes se indicó se identificaron jóvenes que no se encuentran estudiando en el nivel que por edad les corresponde. Entre las principales razones se encuentran los problemas económicos (62.5%); mientras que en los casos restantes ha sido por falta de tiempo y/o interés.

En cuanto al rendimiento académico, el 95.8% de los encuestados indicó que tiene conocimiento sobre las calificaciones de los menores de edad. De estos, el 39.6% lo evalúa como excelente; 33.3% como regular; 16.7% como excelente y 4.2% como malo. Tan solo el 6.3% de los encuestados no contestó esta pregunta. Por otra parte, el 50% de los familiares indicaron que participan de manera “muy frecuente” en las juntas y eventos escolares; mientras que el 31.3% indicó que es “algo frecuente”; 10.4% “poco frecuente” y 4.2% “nada frecuente”; además, el 64.6% asiste de forma “muy frecuente” a entregas de calificaciones.

En lo que respecta a la comunicación entre los responsables de los menores de edad y sus profesores, los resultados de la encuesta aplicada indicaron que en 8 de cada 10 casos (85.4%; 41 familias) existe un diálogo respecto a diversos temas relacionados con la educación de los infantes. En cuanto a los temas tratados, el 70.7% de los familiares indicó conversar respecto a las calificaciones del menor; 65.9% sobre su comportamiento; 36.6% respecto al estado de ánimo del menor; 26.8% acerca de las relaciones del menor con sus compañeros y 2.4% señaló otras temáticas.

³ Esta información se deriva del proyecto de tesis para obtener el grado de Doctor en Filosofía con orientación en Comunicación e Innovación Educativa titulado “Infancia, educación y privación de la libertad: Carencias psicopedagógicas en las familias de internos penitenciarios en Nuevo León” desarrollado por el M.C. José Gregorio Alvarado Pérez bajo la dirección de la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez (coordinadora de este proyecto).

La reclusión de uno de los miembros de la familia, además de las problemáticas antes señaladas, es un factor que puede generar burlas, señalamientos y juicios por parte de otros miembros de las comunidades con las que conviven estos núcleos. En este aspecto, el mayor impacto de estos señalamientos se puede reflejar en los menores de edad quienes pueden no reaccionar de la manera más adecuada provocando problemas mayores. Los resultados de la encuesta aplicada indican que el 27.1% de los menores (3 de cada 10) ha sufrido burlas y señalamientos dentro del plantel escolar en el que estudian; mientras que 22.9% (2 de cada 10) los ha recibido en su colonia o en el sector en donde habita.

En la actualidad, contar con educación de nivel superior es un factor que posibilita el acceso a mejores oportunidades laborales y, con ello, a la generación de mayores ingresos económicos. En ese sentido, dentro de los núcleos familiares de internos penitenciarios en el CERESO “Apodaca”, 9 de cada 10 familias entrevistadas (91.7%) señalaron que “Sí considera importante” que los menores de edad que forman parte de su núcleo cuenten con educación superior. De estos, el 83.3% afirmó que la educación superior tiene “muchísima importancia”; 8.3% dijo que es “algo importante”; mientras que apenas el 2.1% dijo que es “poco importante”, misma cifra de aquellos se señalaron que es “nada importante”.

La privación de la libertad de una persona, es un aspecto que también incide de forma negativa en el estado de ánimo de quienes conforman su núcleo familiar; entre las principales afectaciones se encuentran estrés, depresión, tristeza, entre otros sentimientos; mismos que pueden incidir en el aprovechamiento académico de los menores de edad. En ese sentido, los resultados demuestran que 6 de cada 10 familiares (64.6%) indicaron que la reclusión sí impacta en el estado de ánimo de los menores de edad; de estos, en el 83.9% la reclusión provocó depresión y tristeza; mientras que en el 12.9% provocó enojo o rabia.

Las afectaciones señaladas anteriormente, afectan en el 70.9% de los casos (7 de cada 10) de forma negativa el rendimiento escolar y académico de los menores de edad que forman parte de estos núcleos. El principal impacto es la obtención de “malas calificaciones” tal como lo indican el 36.4% de los familiares entrevistados; seguido por “falta de atención” en el 31.8% de los casos; en 27.3% genera “falta de ganas”; en 13.6% es un factor que provoca “problemas con maestros o compañeros” y en 4.5% “abandono escolar”.

IV.3. Impacto económico de la reclusión en la educación de los menores

Como se mencionó anteriormente en este documento, la privación de la libertad tiene un impacto severo en la economía de las personas que conforman el núcleo familiar de los internos penitenciarios; mismas que a su vez tienen repercusiones en el ámbito educativo de los niños y jóvenes que se encuentran estudiando, factor que limita sus posibilidades de crecimiento personal y desarrollo profesional y económico.

Los resultados de la encuesta aplicada indican que 7 de cada 10 familiares entrevistados (70.8%), afirmaron vivir problemas económicos relacionados con la educación al interno de su núcleo. De estos, en 8 de cada 10 casos (79.4%) se traducen en dificultades para el “Pago de cuotas”; en el 58.8% para “Comprar útiles escolares”; 47.1% para “Adquirir uniformes”; 35.3% por el “Transporte al plantel educativo” y 17.6% para la “Alimentación dentro de la escuela”.

Los núcleos familiares de las personas privadas de la libertad y las carencias de índole económico que atraviesan se convierten en factores que dificultan, ante las necesidades de cubrir otros aspectos, los pagos por conceptos de colegiaturas y útiles escolares de los menores de edad. Los

resultados de la encuesta aplicada a los miembros de la familia de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social indican que el 25.0% de los participantes señalaron que el pago por cuotas escolares se ubica entre los \$501 y los \$1,000 pesos anuales; el 22.9% paga entre \$1,001 y \$2,000 pesos; mientras que el 20.8% invierte más de \$3,000 pesos por año.

En lo que respecta al gasto en útiles escolares (uniformes y material escolar) los encuestados señalaron, en su mayoría (41.7%), que invierten entre \$1,001 y \$2,000 pesos en este concepto; 20.8% gasta entre \$501 y \$1,000 pesos y 18.8% invierte más de \$3,000 pesos en este rubro. Estas cantidades, aún cuando en apariencia no son tan elevadas, representan un severo problema en núcleos donde los ingresos son destinados a la manutención del núcleo y a la atención de las necesidades propias del interno dentro del centro de reinserción. Así mismo, estas familias enfrentan el abandono institucional puesto que no existen planes o programas que les brinden apoyo de forma cíclica y permanente. Estas afectaciones en el ámbito económico pueden, en un momento determinado, convertirse en factores que alejen a los menores de edad de los planteles educativos propiciando la deserción y, con ello, se disminuirían considerablemente sus posibilidades de obtener mejores oportunidades laborales que le permitan mejorar sus condiciones de vida.

IV.4. Educación e hijos de PPL

Durante el mes de Julio de 2019, se pidió a la población penitenciaria del CERESO Apodaca, participar voluntariamente en una encuesta aplicada dentro del auditorio de este centro penitenciario. La muestra se centró en conocer desde la opinión de los PPL cuáles eran las condiciones y problemáticas que en materia educativa tenían o tienen sus hijos o hijas. Dentro de los resultados obtenidos se encontró que el 71.7% por ciento de las 180 personas privadas de la libertad en el CERESO de Apodaca (129 internos), tienen hijos y un 25.6% no los tienen, en tanto 2.8% no respondieron a esa pregunta.

Tabla 75

Personas privadas de la libertad que tienen hijos¹

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No tiene hijos	46	25.6%
Sí tiene hijos	129	71.7%
No contestó	5	2.8%
Total	180	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Al preguntarles a los internos sobre si conocían la situación educativa de sus hijos en edad escolar, el 46.5% afirmó estar al tanto de ella; 21.7% dijo desconocerla y un 32.8% no contestó. Los porcentajes de este apartado reflejan que más del 50% de los PPL, no conocen la situación educativa por la cual atraviesan sus hijos e hijas.

Tabla 76

Personas privadas de la libertad que conocen la situación educativa de sus hijos^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No la conocen	28	21.7%
Sí la conocen	60	46.5%
No contestó	41	32.8%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

De los internos que conocen la situación educativa de sus hijos e hijas (60 casos) un 5.0% la calificó en rangos que van de “muy mala” a “mala”; 20.0% estimó que es regular; 43.4% sostiene que es “buena”; 25.0% excelente y el 6.7% no contestó.

Tabla 77

Evaluación de las personas privadas de la libertad sobre la situación educativa de sus hijos^{1,2,3}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Muy mala	2	3.3%
Mala	1	1.7%
Regular	12	20.0%
Buena	26	43.4%
Excelente	15	25.0%
No contestó	4	6.7%
Total	60	100%

¹Se consideran solamente género masculino. ²Se consideran quienes afirmaron tener hijos. ³Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que conocen la situación educativa de sus hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

A pregunta expresa sobre si sus hijos tenían dificultades para estudiar, el 41.1% dijo que no; 25.6% respondió que sus vástagos si tienen algún tipo de dificultad para estudiar y un 33.3% no respondió a esta demanda. Aquí también el porcentaje de quienes desconocen la realidad educativa por la cual atraviesan sus hijos o hijas es elevado.

Tabla 78

Personas privadas de la libertad que saben si sus hijos tienen dificultades para estudiar^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No tienen dificultades	53	41.1%
Sí tienen dificultades	33	25.6%
No contestó	43	33.3%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

De las PPL que en el CERESO de Apodaca afirman que sus hijos tienen problemas para estudiar (33 casos de un total de 180, es decir, 18,3%); el 54.5% (18 casos) mencionan que los problemas de educación para sus hijos están relacionados con la falta de recursos económicos; 24.0% indican que es por la falta de tiempo para apoyarlos; 6.1% por discriminación o bullying; 3.0% por falta de aprovechamiento y 6.0% solo indican la existencia de “otras dificultades”, sin especificar.

Tabla 79

Tipo de dificultades que enfrentan los hijos menores de edad de las personas privadas de la libertad^{1,2,3}

Respuesta	Sí las tiene		No las tiene		No contestó	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Falta de recursos económicos	18	54.5%	10	30.3%	5	15.2%
Discriminación o bullying	2	6.1%	26	78.8%	5	15.2%
Problemas de aprovechamiento	1	3.0%	27	81.8%	5	15.2%
Malas calificaciones	0	0%	28	84.8%	5	15.2%
Falta de tiempo para apoyarlos	8	24.1%	20	60.6%	5	15.2%
Falta de interés en su educación	0	0%	28	84.8%	5	15.2%
Otras dificultades	2	6.1%	26	78.8%	5	15.2%

De las 129 personas privadas de la libertad que, en el penal de Apodaca, afirmaron tener hijos, el 35.7% sostiene que si conocer cuáles son las calificaciones de sus hijos; 31.8% desconoce las calificaciones que tienen sus hijos en el sistema escolar y 32.6% no contestó. Es decir, el 64.4% no sabe cuáles son las condiciones que viven sus vástagos en materia de calificaciones escolares.

Tabla 80

Personas privadas de la libertad que conocen las calificaciones de sus hijos^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No las conocen	41	31.8%
Sí las conocen	46	35.7%
No contestó	42	32.6%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

De los 46 casos de PPL que afirmaron tener información sobre las calificaciones de sus hijos (35.7%). Sólo 4.4% dijeron que sus vástagos tienen calificaciones que ubicaron entre “malas” y “muy malas”; 19.6%, las ubicaron como “regulares”; 41.3% como “buenas”; 21.7% indican que son “excelentes” y 13% no contestó (6 casos).

Tabla 81

Evaluación de las PPL sobre las calificaciones de sus hijos^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Muy malas	1	2.2%
Malas	1	2.2%
Regulares	9	19.6%
Buenas	19	41.3%
Excelentes	10	21.7%
No contestó	6	13.0%
Total	46	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos y que conocen las calificaciones de sus hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

A pregunta expresa sobre quién o quiénes de sus familiares conocen las calificaciones que dentro del sistema escolar tienen los hijos de PPL de Apodaca, de los 129 internos de este CERESO que afirman tener hijos, el 35.7% dijo que la esposa está al tanto de lo que sucede en ese ámbito; 12.4% expresó que su mamá; 1.6% su padre; 2.3% dijeron que los hermanos; 3.9% “otras personas”; 1.6% “otros familiares”; 0.8% “hijos mayores”; 2.3% “la esposa y la madre”; 0.8% “esposa y padre”; “esposa y otras personas”; 0.8% “madre y padre”; 0.8% esposa, madre y padre”; 0.8% Esposa, madre y hermanos”; 0.8% “esposa, padre, madre y hermanos, mientras que el 34.9% no contestó. Esto indica que más de una tercera parte de ellos, ni siquiera saben quién o quiénes están al pendiente de los resultados escolares obtenidos por sus hijos.

Tabla 82

Personas privadas de la libertad que conocen las calificaciones de sus hijos¹

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
Esposa	46	35.7%
Madre	16	12.4%
Padre	2	1.6%
Hermanos	3	2.3%
Hijos mayores	1	0.8%
Otros familiares	2	1.6%

Otras personas	5	3.9%
Esposa y madre	3	2.3%
Esposa y padre	1	0.8%
Esposa y otras personas	1	0.8%
Madre y padre	1	0.8%
Esposa, madre y padre,	1	0.8%
Esposa, madre y hermanos	1	0.8%
Esposa, madre, padre y hermanos	1	0.8%
No contestó	45	34.9%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino y que afirmaron tener hijos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Al preguntárseles si como PPL enfrentan problemáticas para apoyar los estudios de sus hijos, el 37.2% dijo que sí; 27.1% argumentó “no tener problemáticas” y 35.7% no contestó

Tabla 83

Personas privadas de la libertad que enfrentan problemáticas para apoyar a que sus hijos continúen estudiando^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No enfrentan problemáticas	35	27.1%
Sí enfrentan problemáticas	48	37.2%
No contestó	46	35.7%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Respecto a las necesidades de sus hijos para continuar con sus estudios, el 77.1 refirió los recursos económicos; 22.9% la falta de becas; 12.5% mencionó el apoyo gubernamental; falta de tiempo para apoyarlos (10.4%); u “otro tipo de problemas” (6.3%). El 10.4% señala no tenerlos.

Tabla 84

Tipo de problemáticas que enfrentan los hijos menores de edad de las personas privadas de la libertad para que continúen estudiando^{1,2,3}

Respuesta	Sí las tiene		No las tiene		No contestó	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Falta de recursos económicos	37	77.1%	5	10.4%	6	12.5%
Falta de tiempo para apoyarlos	5	10.4%	37	77.1%	6	12.5%
Falta de apoyo gubernamental	6	12.5%	36	75.0%	6	12.5%
Falta de becas	11	22.9%	31	64.6%	6	12.5%
Otro tipo de problemas	3	6.3%	39	81.3%	6	12.5%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran las personas privadas de la libertad que tienen hijos. ³Se consideran solamente las 48 personas que afirmaron que sus hijos enfrentan problemáticas para continuar estudiando. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Sólo el 13.2% de los internos de Apodaca con hijos o hijas tienen acceso algún tipo de apoyo económico o beca educativa para sus hijos; 51.9% afirma no tener acceso a ningún tipo de apoyo o beca educativa para sus hijos/hijas; 34.9% no respondió.

Tabla 85

Personas privadas de la libertad que afirman que sus hijos tienen acceso a algún tipo de apoyo económico o beca^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No tiene acceso	67	51.9%
Sí tiene acceso	17	13.2%
No contestó	45	34.9%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

De las PPL en Apodaca que confirman el tener algún tipo de apoyo educativo para sus hijos/hijas; 23.5% indica que es por becas; 29.4% por apoyos económicos del gobierno; 17.6% por respaldo otorgado por instituciones privadas; otro porcentaje similar (17.6%) no lo especifica, pero manifiesta si tener algún tipo de sostén externo a su familia. En ningún caso, los internos manifestaron contar con algún sustento económico educativo para sus hijos por parte de las ONG.

Tabla 86

Tipo de apoyo al que los hijos menores de edad de las personas privadas de la libertad tienen acceso^{1,2}

Respuesta	Sí las tiene		No las tiene		No contestó	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Becas educativas	4	23.5%	9	52.9%	4	23.6%
Apoyos económicos del gobierno	5	29.4%	8	47.1%	4	23.6%
Apoyo de instituciones privadas	3	17.6%	10	58.8%	4	23.6%
Apoyo de ONG	0	0%	13	76.4%	4	23.6%
Otro tipo de apoyo	3	17.6%	10	58.8%	4	23.6%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos y que tienen acceso a algún tipo de apoyo económico. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Asimismo, el 43.4% de los internos del CERESO de Apodaca, estimó que sus hijos o hijas precisan de apoyos económicos o becas; 20.2% dijo que no era necesario y 36.4% no contestó.

Tabla 87

Personas privadas de la libertad que afirman que sus hijos requieren algún tipo de apoyo¹

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No considera	26	20.2%
Sí considera	56	43.4%
No contestó	47	36.4%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Sobre el tipo de apoyos que los hijos e hijas de internos requieren, desde la perspectiva de sus padres privados de la libertad, están las becas (58.9%); útiles escolares (58.9%); apoyo educativo (21.4%); asesorías escolares (14.3%); uniformes (12.5%) y otros tipos (3.6%)

Tabla 88

Tipo de apoyo que los hijos menores de edad de las personas privadas de la libertad requieren para continuar estudiando^{1,2,3}

Respuesta	Sí las tiene		No las tiene		No contestó	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Becas	33	58.9%	15	26.8%	8	14.3%
Útiles escolares	33	58.9%	15	26.8%	8	14.3%
Apoyo educativo	12	21.4%	36	64.3%	8	14.3%
Asesorías escolares	8	14.3%	40	71.4%	8	14.3%
Uniformes	7	12.5%	41	73.2%	8	14.3%
Otro tipo de apoyo	2	3.6%	46	82.1%	8	14.3%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. ³Se consideran solamente las 56 personas que afirmaron que sus hijos requieren algún tipo de apoyo. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Dentro de la encuesta se les preguntó a los internos varones sobre si a ellos les gustaría participar apoyando a sus hijos escolarmente si se tuviera una unidad educativa específica para ello, el 37.2% respondió que sí; 31.8% expresó su negativa a ello y 31.0% no contestó.

Tabla 89

Personas privadas de la libertad que si existiera una unidad de apoyo escolar para sus hijos(as) les gustaría participar^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No le gustaría	41	31.8%
Sí le gustaría	48	37.2%
No contestó	40	31.0%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Las personas participantes en la muestra de Apodaca consideraron en el 45.7% de los casos que, a través de la educación, sus hijos podrían desarrollarse en un medio ambiente que les permita salir adelante en términos de economía y familia; el 16.3% descartó esta posibilidad y 38.0% no contestó.

Tabla 90

Personas privadas de la libertad que consideran que con la educación sus hijos podrían desarrollarse en un ambiente que les permita salir adelante en términos de economía y familia cuando ellos crezcan^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No lo considera	21	16.3%
Sí lo considera	59	45.7%
No contestó	49	38.0%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

En materia de capacidades físicas diferentes en los hijos (as) de internos penitenciarios en Apodaca, se registraron únicamente dos casos uno con discapacidad visual y otro de carácter auditivo (1.6%); 63,6% de ellos afirman que sus vástagos no tienen ningún tipo de discapacidad y 34.9% no contestó.

Tabla 91

Personas privadas de la libertad que señalaron que alguno de sus hijos tiene una discapacidad que le dificulte o impida continuar con sus estudios^{1,2}

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje
No tienen discapacidades	82	63.6%
Sí tienen discapacidades	2	1.6%
No contestó	45	34.9%
Total	129	100%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

Dentro de las preguntas consideradas en materia de educación para los hijos e hijas de internos penitenciarios, se les preguntó a las PPL, sobre qué le provocaba saber que su hijo o hija estuviera estudiando. Aquí las respuestas fueron más positivas. El 48.8% de ellos, estimó que la educación de sus hijos le provoca “esperanzas para que tengan un mejor futuro, superior al mío”; 21.7% dijo sentir “orgullo y admiración por sus resultados”. Asimismo, el 10.1% declaró sentir “angustia y miedo por no poder ayudarles con sus problemas”; “preocupación y tristeza por su situación” (8.5%) y al 3.1%, le resultó “indiferente”.

Tabla 92

¿La situación educativa de sus hijos(as) le provoca...?^{1,2}

Respuesta	Sí le provoca		No le provoca		No contestó	
	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.	Frec.	Pctje.
Esperanza para que tengan un mejor futuro superior al mío	63	48.8%	18	14.0%	48	37.2%
Orgullo y admiración por sus resultados	28	21.7%	53	41.1%	48	37.2%
Le resulta indiferente	4	3.1%	77	59.7%	48	37.2%
Preocupación y tristeza por su situación	11	8.5%	70	54.3%	48	37.2%
Angustia y miedo por no poder ayudarles en sus problemas	13	10.1%	68	52.7%	48	37.2%

¹Se consideran solamente los internos del género masculino. ²Se consideran solamente las personas privadas de la libertad que afirmaron tener hijos. Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta aplicada en julio de 2019.

IV.5. Razones para participar en la educación de sus hijos.

Dentro del estudio efectuado, se hicieron dos preguntas de carácter netamente cualitativo a las personas privadas de la libertad. Las preguntas se plantearon en el sentido del porqué les gustaría participar activamente en la educación de sus hijos/as y si pensaban que el factor educativo ayuda a formar niños y jóvenes que puedan en edad adulta salir adelante en términos de economía y familia.

Las respuestas fueron variadas y de gran riqueza conceptual. De 181 internos encuestados en el penal de Apodaca, durante Julio del 2019, 40% de ellos dieron respuesta sobre si les gustaría tener una mayor participación en la educación de sus hijos/as que cursan estudios fundamentalmente entre la primaria y la secundaria. Asimismo, Por lo que corresponde al penal femenino de Escobedo, las respuestas de las 162 internas encuestadas, un 80% dijeron estar interesadas en apoyar la educación de sus hijos/as; las mujeres que están en el CERESO de Escobedo coincidieron en resaltar que la educación conceptualmente es como un vehículo de cambio que ayuda en el destino y fortalecimiento de sus familias. También podemos observar que otra razón total en los

encuestados, es que, al brindar este apoyo, les permitiría crear un vínculo de acercamiento con sus hijos, y ayudarles de alguna manera para que no repitan el mismo patrón de comportamiento delictivo que los PPL, han vivido.

Cuando a las personas se les preguntó sobre si la educación era un factor que ayuda a salir adelante en términos de economía y familia, solo el 16% de los varones, está convencido de que la educación es un factor de cambio y de desarrollo en los aspectos económicos y familiares de sus hijos. En esta pregunta, continuamos con un porcentaje bajo de PPL que consideran que la educación es “un factor que ayuda a salir adelante”, aun así, nos podemos dar cuenta que a pesar de la situación actual que las personas privadas de la libertad viven, esta no influye para tomar conciencia de lo determinante que es la educación para forjar un futuro sólido en lo social, económico y familiar de las personas.

De los 180 PPL entrevistadas, en ambas preguntas, la participación fue baja como se pudo observar, sin embargo, el hecho de tener una célula con pensamientos positivos aunque ésta sea pequeña, sobre el apoyo y la educación de sus hijos puede servir ya que estos de alguna forma determinada — buscando la canalización apropiada—, se pueden crear motivaciones para incentivar en los demás PPL, que no están convencidos de su responsabilidad como padres, factores que les lleven a reflexionar sobre la importancia en la vida de sus hijos, de que ellos cuenten y ejerzan habilidades parentales en su relación con sus vástagos.

Si partiéramos de la teoría de la Espiral del Silencio (Newman, 1995), la cual dice que los seres humanos somos sociales por naturaleza y no pueden estar solos o aislados; podría estimarse que los patrones de conducta de algunos internos/internas, donde se expresa su deseo de desarrollar habilidades parentales desde la prisión —a pesar de su propio proceso de encarcelamiento—, pueda erigirse posteriormente en modelos de parentalidad que el resto de las PPL, reacios a la idea de activar su habilidades parentales, se modifiquen hacia conductas más positivas en dicho ámbito. Las respuestas textuales de las PPL en torno a porqué les gustaría participar en la educación escolar de sus hijos son las siguientes:

“Quisiera poder darles a mis hijos la mejor educación”; “para que aprenda más cosas del estudio y sea alguien en su vida y tenga una carrera”; “así podría apoyarlo en algo”; “para estar al pendiente de cómo va en la escuela”; “para poder apoyarlos con los útiles”; “para darles lo mejor a mis hijos”; “para que tengan mejores estudios”; “para ver que el Estado me apoye ayudando a mis hijos”; porque quiero apoyar a mis hijos”; “para poder ayudarlos, ya que no estoy con ellos”; para apoyarlos a ellos que son mi razón de ser”; “para ver cómo se les apoya a mis hijos”; “para apoyarlos en lo que pueda”; “porque no quiero que sufran como yo”; “para ayudar a mi hija”; “para ayudar en el futuro de mi hija”; “para tener un apoyo hacia mi hijo”; “porque amo a mis hijos”; “para que la familia sea apoyada”; “porque lo más importante para mí son mis hijos”; “ser útil para ellos aunque esté en este lugar”; “porque podría ayudarles con el conocimiento y a experiencia que tengo”; “estando bien la familia y los hijos, yo estaría mejor”; “para mayor aprovechamiento de ellos”; “para convivir con ellos y conocerlos mejor”; “para ayudar a sacar a mis hijos adelante”; “por el bien de su educación”; “para aprender”; “para que aprendan más”; “para poder brindarle apoyo a mis hijos”; “porque es importante”; “para poder recibir apoyo y apoyar”; “para que mi hijo siga estudiando y se mantenga ocupado y que no aprenda maldades en la calle”; “se le daría el apoyo suficiente para que el mismo salga adelante y sepa valorar”; “porque se necesita apoyo espiritual, para ver con claridad las necesidades de mis hijos y así poder tener un buen criterio de sus necesidades, solamente viéndolos para progresar con su crianza, lo mejor que les pueda ofrecer”; “para superación”; “para ver en qué puedo yo ayudar a mis hijos”; “mi familia está batallando

en lo económico pero lo más importante es que la parte paternal, no estoy ahí para ayudarlos”.

En cuanto a considerar a la educación como un factor que ayuda a salir adelante a las personas en términos de familia y economía, las respuestas cualitativas proporcionadas por las personas privadas de la libertad fueron las siguientes:

“Creo que sí, mi hija tiene muchos sueños y es muy inteligente”; “para que cuando ellos lleguen a ser grandes puedan tener un trabajo mejor y una familia”; “por qué será mejor persona que yo”; “prepararlos para una mejor vida”; “para que salgan adelante y lleguen a ser alguien en la vida”; “con la educación pueden llegar a tener una vida más cómoda”; “la educación les permite salir adelante”; “para que tengan mayor preparación y educación”; “para que ellos puedan enseñar a los demás”; “para que sean una mejores personas”; “podrán ser algo en la vida”; “para que sean unas personas de bien y nunca estén en un lugar como este”; “para su óptimo desarrollo”; “porque la educación apoya a la familia”; “para que les vaya bien en el futuro”; “serán unas mejores personas”; “la economía está por los suelos; el salario no alcanza y la educación puede ayudar; “porque teniendo educación, tendrían buen trabajo y buena economía”; “porque es una forma de apoyo”; “porque el estudio es para salir adelante”; “por su bienestar económico y social”; “porque es mejor”; “porque es lo mejor para ellos”; “porque entre más estudien más aprenden”; “el estudio es un fin”; “para que fuera alguien en la vida y no pisara estos lugares”; “la educación permite que entre la familia, ellos mismos se apoyen”; “porque la educación te permite tener ejemplos para no equivocarse y arrepentirse después”; porque obtendrían conocimientos”; “porque la educación ayuda a ser mejores personas”.

V. Justificación y motivación para impulsar programas socioeducativos a hijos/hijas de PPL en Nuevo León, desde la intervención estatal

Desde el presente trabajo, se postula que siendo la reinserción social una tarea desarrollada por el Estado para que desde el respeto escrupuloso de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, se logre reinsertar a los internos e internas en la sociedad, bajo un esquema de ciudadanos responsables frente a la colectividad y la observancia de la ley, las tareas de reinserción debieran contemplar la formación holística de las PPL, donde se incluya una concientización en primera instancia de sus deberes como padres, miembros de una familia y como ciudadanos.

Si bien las personas que están en los diversos centros estatales de reinserción social purgan penas por los delitos cometidos, el logro de evitar la reincidencia delictiva transita necesariamente por un esquema donde las personas privadas de la libertad sean conscientes de los efectos que el delito trajo sobre sí mismos; sobre sus hijos y familia y sobre la colectividad.

En este proceso educativo, la formación de las personas privadas de la libertad, mediante cursos de parentalidad, en los expedientes penales que así lo permitan —es decir, en aquellos casos donde no se registra el que hayan cometido algún delito que coloque en riesgo la integridad física del menor y su familia—, debieran impulsarse.

Desde el ámbito internacional, El Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF), recomienda a los estados realizar sus mayores esfuerzos para evitar la separación de niños y niñas de sus padres, sobre todo en las primeras etapas de la vida y, cuando esto suceda, extremar iniciativas y políticas para efectos de aminorar los impactos negativos que dicha separación conlleva.

En el campo internacional, se tiene constancia de por los menos 25 programas desarrollados desde el campo de la investigación cuantitativa para evaluar intervenciones psicosociales en niños, niñas y adultos con padres/madres, privados de la libertad (Revisión sistemática de intervenciones psicosociales para NNA [niños, niñas y adolescentes] con padres/madres privados de libertad agosto de 2014, UNICEF).

Existe constancia a través de programas como el denominado “*New Beginnings*”, donde se buscó mejorar el modo en cómo las madres se relacionan de una forma más efectiva en los procesos de enseñanza de la afectividad y las relaciones parentales. Las intervenciones documentadas desde el campo internacional, establecen que los padres/madres participantes como muestra para la realización de tales proyectos, proceden de grupos considerados en vulnerabilidad socioeconómica, con diversas edades, las cuales, en promedio, se centran en alrededor de los 30 años. Dichas intervenciones no se plantean como de larga duración, dada la esperada rotación de los participantes.

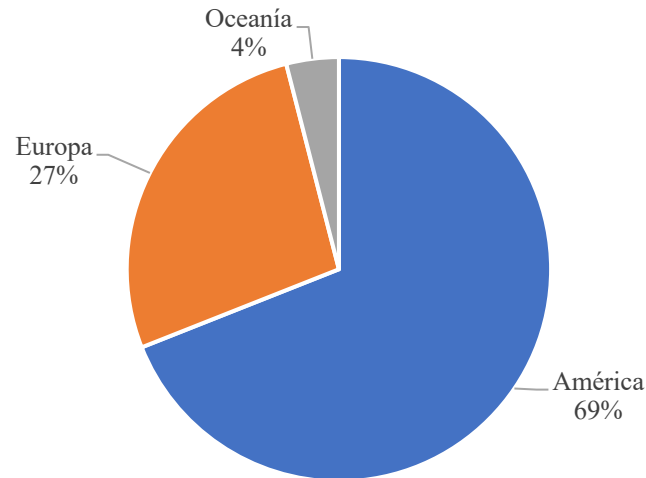
En lo que corresponde a estudios cualitativos, caracterizados por estimar el impacto de los programas o intervenciones para niños/niñas y adolescentes, descendientes de personas privadas de la libertad, el citado documento dado a conocer bajo el auspicio de la Unicef, y, elaborado con la cooperación del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Justicia de Chile, y con el apoyo del Centro de Estudios Públicos de Política Comparada de la Universidad Diego Portales, indica la existencia de 31 intervenciones documentadas (casi siempre en literatura divulgada en revistas científicas publicadas en el idioma inglés); los programas versan sobre aprendizajes sobre habilidades y fortalezas parentales; disminución de conductas disruptivas en los niños; incrementos de rendimiento escolar; valoración de la labor que realizan los cuidadores a cargo de los hijos/as de personas privadas de la libertad; desarrollo personal y autoconocimiento en padres y padres.

Gran parte de los estudios e intervenciones analizadas pretenden el desarrollo de habilidades parentales; las relaciones positivas entre padres/madres/hijos/hijas y el positivo incremento de comunicación entre ellos/ellas. Asimismo, otros objetivos buscan el apoyo psicosocial de padres y madres; la empatía con los hijos/hijas; el incremento de la autoestima; la disminución o erradicación de sustancias; el apoyo psicosocial a los niños/niñas adolescentes y el aumento de capacidades de liderazgos.

Los programas se enfocan en su gran mayoría, a la realización de talleres y habilidades parentales. Los expertos en este ámbito indican que esto podría deberse al hecho de que los impactos que tienen lugar durante la detención, juicio y condena de los padres, son “altos” y disruptivos, por lo cual existe la necesidad de reparar este vínculo y restablecer en la medida de lo posible las rutas de convivencia. En ese estudio se indica que, de 69 intervenciones reportadas en la literatura científica sobre el tema, en 45 de ellas se incluyen talleres de promoción de habilidades parentales, de forma exclusiva o complementaria a otras acciones.

Por lo que corresponde a los sitios donde mayormente se realizan estos programas de intervención, el primer sitio lo ocupa los Estados Unidos de América con un 69% de investigaciones y talleres documentados sobre este tema en revistas científicas de alto impacto; seguido por Europa (27%), dentro del cual el Reino Unido, ocupa un lugar preponderante y Oceanía con el 4%.

Gráfico 1

Distribución geográfica de las intervenciones

*Excepto América del Sur y Asia. Fuente: Revisión sistemática de intervenciones psicosociales para NNA con padres/madres privados de la libertad.

Tabla 93

Distribución de intervenciones por zonas

País	Frecuencia	Porcentaje
Estados Unidos	47	69.1%
Reino Unido	7	10.3%
Dinamarca	3	4.4%
Australia	3	4.4%
Irlanda	2	2.9%
Bélgica	1	1.5%
España	1	1.5%
Holanda	1	1.5%
Italia	1	1.5%
Polonia	1	1.5%
Suecia	1	1.5%
Total	68	100%

Fuente: Revisión sistemática de intervenciones psicosociales para NNA con padres/madres privados de la libertad.

Tabla 94

Tipo de institución que implementa las intervenciones

Tipo de institución	Frecuencia	Porcentaje
Académica	5	8.6%
Gubernamental	13	22.4%
Privada (no gubernamental)	32	55.2%
Organización No Gubernamental	8	13.8%
Total	68	100%

Fuente: Revisión sistemática de intervenciones psicosociales para NNA con padres/madres privados de la libertad.

Los resultados de las intervenciones analizadas por el estudio difundido por Unicef, indican que, si bien éstas presentan múltiples objetivos, en general se concentran en desarrollar habilidades en padres y madres y, secundariamente incorporan a los niños/niñas, como sujetos. Las ejecuciones de los programas, si bien son intervenciones impulsadas desde los estados, en general son organizadas e impartidas por Organizaciones No Gubernamentales.

Un punto importante a considerar desde el presente trabajo es que, si bien se propone reconsiderar el desarrollo de habilidades parentales como un esquema integrador a las tareas propias de los programas de reinserción social para las personas privadas de la libertad, el objetivo eje del mismo es que se prioricen los derechos del menor y, en ese contexto, se potencialicen programas de intervención holísticos en donde se activen planes de desarrollo de habilidades parentales entre los padres y madres de estos menores, actualmente sujetos a un proceso penitenciario; se apoye y escuche también a los cuidadores de estos niños/niñas y adolescentes para conocer las condiciones por las cuales transitan estos menores y se lleve, simultáneamente un proceso de acompañamiento educativo por parte de los gabinetes de la SEP, sobre todo, en aquellos expedientes de menores que presentan retrasos, abandono o reprobación escolar.

V.1. Ámbito Nacional: Reclusión, educación integradora y discapacidad psicosocial

El aprovechamiento académico de un menor de edad que enfrenta la privación de la libertad de uno de sus padres puede verse afectado de manera negativa limitando sus posibilidades de desarrollo, no solo educativo, sino personal. En ese sentido, las condiciones de vida que enfrentan estos menores ponen en manifiesto la necesidad de crear mecanismos y programas de estudio específicos para la atención de estos menores.

El sistema educativo mexicano está preparándose para brindar una educación integral para todos los sectores de la sociedad. Aún así, es preciso activar estudios donde se detalle a profundidad las características sociales y pedagógicas de los hijos e hijas de internos penitenciarios.

El sistema educativo del país, desde su fundamentación conceptual, considera que la educación debe ser inclusiva y debe brindar las mismas posibilidades para todos los estudiantes sin importar sus características y/o condiciones sociales; además, si se detectan necesidades o requerimiento especiales, se deben adaptar los programas de acuerdo con los aspectos identificados.

Para los menores de edad, hijos e hijas de internos penitenciarios, las condiciones de vida que enfrentan dentro de su núcleo familiar se pueden convertir en un factor que los aleje de los centros educativos y/o impacte de forma negativa en su aprovechamiento. Por tal motivo, es necesario que cuenten con programas educativos especiales de acuerdo con la situación que atraviesan, misma que, desde la Secretaría de Educación Pública, está considerada dentro del nuevo modelo de escuela integradora.

V.2. Educación especial, inclusiva e integral en México

La educación en México está fundamentada dentro de las garantías individuales consideradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este documento se establece que es obligación del Estado proveer servicios educativos a todos los ciudadanos del país de una manera inclusiva y sin distinciones.

Sin embargo, existen sectores de la población que, por diversos aspectos de salud física y/o mental o condiciones de vulnerabilidad, requieren de educación diferenciada. En ese sentido, para la Secretaría de Educación Pública, la atención de alumnos y alumnas con necesidades especiales ha

representado un reto, principalmente, porque “implica, entre otras cosas, eliminar barreras ideológicas y físicas que limitan la aceptación, el proceso de aprendizaje y la participación plena de los alumnos” (SEP, 2006).

Durante los años ochenta, la Secretaría de Educación Pública clasificó las modalidades de educación especial en dos categorías: indispensables y complementarios. Los de carácter indispensable funcionaban aparte de los planteles educativos, separados de la educación regular, en espacios diseñados específicamente; su objetivo eran los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Por su parte, en lo que se denominaban servicios complementarios se brindaba atención educativa especial a estudiantes del nivel básico que, por distintos motivos, presentaban dificultades de aprendizaje, aprovechamiento, lenguaje o conducta. Asimismo, dentro de esta categoría se incluían también los alumnos y alumnas con capacidades académicas sobresalientes.

A principios de los noventa, en 1993, la reforma realizada al Artículo 3 de la Constitución Mexicana y la promulgación de la Ley General de Educación, se reorientaron los servicios de educación especial hacia la integración educativa. Este proceso tenía dos objetivos principales: el primero de ellos era combatir la discriminación, segregación y estereotipos de los menores con discapacidad. Además, buscaba la integración de los niños y niñas “que se encontraban separados del resto de la población infantil y de la educación básica general; la atención especializada era principalmente de carácter clínico-terapéutico y, en ocasiones, atendía con deficiencia otras áreas del desarrollo, como el aprendizaje de la lectura, la escritura y las matemáticas”. El segundo de los objetivos implicó reforzar la idea de que los alumnos y alumnas, en ocasiones, requieren apoyo psicopedagógico aun cuando no tienen una discapacidad.

En los llamados Centros de Atención Múltiple (CAM), se ofrecían servicios pedagógicos con “adaptaciones pertinentes, los planes y programas de estudio generales, y formación para el trabajo. Asimismo, se organizaron grupos/grados en función de la edad de la población, lo cual congregó alumnos con distintas discapacidades en un mismo centro y/o grupo”.

Además, se crearon las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) en los que se brindaba apoyo especial a los alumnos que enfrentaran dificultades para su aprendizaje. Dentro de estas unidades, operaban también las Unidades de Orientación al Público, estas se enfocaban en informar y orientar a las familias sobre el proceso de integración educativa.

Estas acciones estaban fundamentadas en las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales realizada en 1994. En estas, se enfatizaba la importancia de que los menores de edad recibieran una educación que se adaptara a sus necesidades, sobre todo, cuando enfrentaban alguna situación que comprometiera su aprendizaje.

Desde entonces, en México se definió que un niño o una niña que presenta necesidades educativas especiales era quien: “en relación con sus compañeros de grupo, enfrentaba dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos consignados en el currículum escolar, requiriendo que a su proceso educativo se incorporen mayores recursos o recursos diferentes a fin de que logre los fines y objetivos curriculares” (SEP, 2006).

Posteriormente, el Programa Nacional de Educación (2001-2006) se indica la necesidad del diseño y aplicación de programas y políticas públicas para atender a la población que presenta algún problema o discapacidad que afecte el acceso, permanencia y egreso del Sistema Educativo

Nacional. El PRONAE, indica también que es fundamental la creación de estrategias para regular, dar seguimiento y evaluar la integración educativa en México. Estas acciones tenían como objetivo “normar los procesos de integración educativa de todas las escuelas de educación básica del país; garantizar la disponibilidad, para los maestros de educación básica, de los recursos de actualización y los apoyos necesarios para asegurar la mejor atención de los niños y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales; y establecer lineamientos para la atención de aquellos con aptitudes sobresalientes” (SEP, 2006).

Estas indicaciones dieron origen al Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. En este programa, diseñado por la SEP, la Oficina de Representación para la Promoción e Integración para personas con Discapacidad de la Presidencia de la República, se indicó que los servicios de educación especial tenían como misión:

Favorecer el acceso y permanencia —y el egreso— en el sistema educativo de niños, niñas y jóvenes que presentan necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a aquellos con discapacidad, proporcionando los apoyos indispensables dentro de un marco de equidad, pertinencia y calidad, que les permita desarrollar sus capacidades al máximo e integrarse educativa, social y laboralmente.

Estos programas y la necesidad de educación especial de una parte de la población educativa en México, provocó que el sistema educativo del país adoptara la inclusión como una de sus metas fundamentales. Este concepto, aplicado en muchos países preocupados por la atender a toda la diversidad de alumnos, define que una escuela es inclusiva cuando “ofrece una respuesta educativa a todos sus alumnos, sin importar sus características físicas o intelectuales, ni su situación cultural, religioso, económica, étnica o lingüística” (SEP, 2016).

Al analizar este concepto, es posible establecer que la educación inclusiva va más allá de la integración de las personas con alguna discapacidad; su enfoque, en cambio, se centra en ofrecer opciones y servicios para promover la participación integral de todos los estudiantes; es decir, reconoce la diversidad de los estudiantes (con o sin discapacidad). Un proceso que, tal como lo establece la Secretaría de Educación Pública (2006), es un cambio profundo del sistema educativo:

Este proceso también implica un cambio en la escuela en su conjunto, que sin duda ha beneficiado al resto de los alumnos y a la comunidad educativa en general, ya que incide en la gestión y organización de la escuela, en la capacitación y actualización del personal docente, en el enriquecimiento de las prácticas docentes y en la promoción de valores como la solidaridad y el respeto, entre otras.

Los centros educativos en los que se aplican estos conceptos fueron catalogados como “escuelas integradoras”, mismas que, entre otras características, fomentaban la participación de todos los estudiantes y ofrecían programas adaptados de educación especial para las personas con discapacidad o para aquellos estudiantes que, por diversas circunstancias, tenían problemas que limitaran o dificultaran su aprendizaje. En general, la SEP (2006) indica que una escuela integradora es aquella que:

Impulsa acciones relacionadas con la información y sensibilización a la comunidad educativa; la actualización permanente de todo el personal de la escuela y de los docentes de educación especial, en caso de que los haya; el trabajo constante con la familia y/o tutores; la participación conjunta entre el personal de la escuela y el personal de educación especial para planear y dar seguimiento a la respuesta educativa de los alumnos que presentan necesidades educativas especiales; la realización de las evaluaciones

psicopedagógicas para determinar los apoyos que los alumnos requieren para participar y acceder a los propósitos educativos, así como de las propuestas curriculares adaptadas de los alumnos que las necesitan.

Desde esta perspectiva, una escuela clasificada como integradora, busca los mecanismos necesarios que permitan eliminar las barreras que obstaculizan el aprovechamiento académico de los y las estudiantes que tienen necesidades educativas consideradas como especiales, principalmente, cuando estas se asocian a discapacidades. Entre las características que la SEP (2016) considera para estas instituciones se encuentran “asegurarse que los estudiantes participen en todas las actividades; aprendan de acuerdo con su propio ritmo, estilo e intereses, y desarrollen habilidades, actitudes y destrezas que les permitan resolver problemas en la vida cotidiana”; estas características llevan a un plantel educativo a la inclusión.

Para lograr la inclusión, es necesario el compromiso de directivos, docentes, padres y madres de familia y de los alumnos para dar respuesta a las necesidades educativas especiales que los estudiantes puedan presentar. Para los planteles educativos, representan el desarrollo de herramientas para ofrecer respuestas, alternativas y planes de especialidad para la educación de calidad de todos los alumnos; es decir, lograr una completa integración educativa. Este concepto, desde la SEP (2016), implica que:

Al hablar de integración educativa o de inclusión, el concepto barreras para el aprendizaje y la participación es utilizado para identificar los obstáculos que se presentan en las escuelas —en su cultura, en sus políticas y en sus prácticas— para que todos los alumnos participen en las distintas actividades y logren los aprendizajes previstos. Consecuentemente, los procesos de integración educativa y/o inclusión implican identificar y minimizar las barreras, maximizar los recursos existentes o asegurar los que se requieren para apoyar la participación y el aprendizaje de todos los alumnos.

Las normas consideradas como básicas por la Secretaría de Educación Pública (2016), para lograr la integración educativa, la inclusión y derribar las barreras para el aprendizaje y lograr la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales son las siguientes:

- *Normalización.* Establece el derecho de toda persona de llevar una vida lo más normalizada posible. Es decir, la sociedad debe poner al alcance de las personas con discapacidad las condiciones de vida lo más parecidas a las del resto.
- *Accesibilidad y diseño universal.* Establece el derecho a que no exista ningún tipo de barrera que excluya a las personas con discapacidad de la participación.
- *Respeto a las diferencias.* Aceptar las diferencias y poner al alcance de cada persona los mismos beneficios y oportunidades para que desarrolle al máximo sus potencialidades y tenga una mejor calidad de vida.
- *Equiparación de oportunidades.* Reconocimiento de que el sistema general de la sociedad, como son el medio físico y la cultura, así como los bienes y recursos estén a disposición de todas las personas en igualdad de condiciones.
- *Autodeterminación y vida independiente.* Se plantea como las aspiraciones de todos los seres humanos y constituyen la base de la propia realización. En ese sentido, es muy importante atender las necesidades de todas las personas con criterios de oportunidad y calidad, en un contexto de libre elección y participación en la toma de decisiones.
- *Participación ciudadana.* Se propone como medio para que todas las estructuras de la sociedad reconozcan la participación de las personas con discapacidad en la elaboración y puesta en marcha de las políticas, planes, programas y servicios sociales.

- *Calidad de vida.* Este principio está relacionado con las condiciones de vida óptimas como resultado de la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas.
- *Educabilidad.* Se fundamenta en la idea de que todo ser humano, independientemente de sus características, tiene la posibilidad de educarse. La educación es un derecho que beneficia a todos.
- *Derechos humanos e igualdad de oportunidades.* Todos los seres humanos tienen derecho a ser considerados personas y a la igualdad de oportunidades para ingresar, en este caso, a la escuela, independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales.
- *Escuela para todos.* Se garantiza que todos los alumnos, sin importar sus características, reciban una educación de calidad a través de reconocer y atender a la diversidad, contar con un currículo flexible que responda a las diferentes necesidades, preocuparse por la actualización del personal docente, y promover la autogestión

La educación inclusiva es una de las prioridades del sistema educativo mexicano. Garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, significa la adaptación de los programas educativos de forma que aquellos que por diferentes motivos ven comprometido su aprovechamiento académico, puedan contar con esquemas de apoyo diferenciado que les permita alcanzar las metas consideradas dentro de cada nivel educativo.

En ese sentido, es importante reconocer que el sistema educativo mexicano ha evolucionado de la educación especial a la educación inclusiva. Bajo este concepto se incluyen aquellas personas con una discapacidad física y/o mental, pero también considera a aquellos estudiantes que, por aspectos relacionados con su contexto social, desarrollan problemáticas emocionales que impactan de manera negativa en su aprovechamiento escolar.

Organizaciones como la ONU, la UNICEF y la OMS, han establecido que las denominadas “discapacidades sociales”, entre las que se encuentran aspectos como el déficit de atención, la depresión y la ansiedad (por mencionar algunos), impactan de forma negativa en el aspecto educativo de los estudiantes (sobre todo cuando son menores de edad). Esta problemática educativa también requiere de apoyo especializado para derribar las posibles barreras que estos menores puedan enfrentar para lograr su aprendizaje.

V.3. Apuntes básicos sobre discapacidad

Entender la necesidad de la educación especial inclusiva, dirigida a personas con discapacidad, conlleva una serie de conceptos que se han transformado. En la actualidad, la educación especial, ha evolucionado para dar paso a nuevas definiciones como la educación inclusiva y las escuelas integradoras. En estas nuevas modalidades se da un peso específico al hecho de la que la educación especial no solo se dirige a las personas con algún tipo de discapacidad física o mental, sino también a todos aquellos estudiantes que enfrentan alguna circunstancia que incide de manera negativa en su aprovechamiento académico.

Para la atención de los alumnos que viven en escenarios sociales complejos o en realidad familiares con problemáticas (como la reclusión de uno de sus integrantes) es necesario reconocer que los menores de edad dentro de este contexto son “alumnos con necesidades educativas especiales” y por lo que su educación requiere de “ajustes razonables”.

Con la finalidad de comprender estos conceptos, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (2018) del Gobierno de México, desarrolló el documento titulado “Glosario de términos de discapacidad”. Este texto tiene la finalidad de homogeneizar el

significado de todos aquellos términos que se relacionan con las personas con discapacidad en el país.

En primera instancia, dentro de este documento se define el concepto de “obligaciones del Estado” y, en este, se incluye la “obligación de proteger”. Este término indica que el Estado debe “impedir la vulneración de los derechos de las personas” y “tomar las medidas oportunas de orden legislativo, administrativo, presupuestario, judicial y de otra índole que sean necesarias para el ejercicio pleno de estos derechos”.

Además, como parte de las obligaciones del Estado, se deben procurar las “capacidades básicas” de todas las personas. Estas incluyen el “conjunto de acciones que permiten a las personas, familias y comunidades tener una plataforma base, tanto en términos de habilidades y capacidades como de patrimonio, especialmente en alimentación, educación, salud, vivienda, entorno y otros aspectos que mejoren su bienestar, eleven su productividad y les permitan comenzar a acumular activos y alcanzar una participación social plena y libre”. Entre estas capacidades, una de las más básicas, es la educación.

Uno de los aspectos que impactan en las capacidades básica en lo general y en la educación en particular, son las discapacidades; mismas que, de no recibir la atención necesaria, pueden convertirse en barreras que impidan el desarrollo de las personas, ya sean estas físicas, mentales o psicosociales.

En el “Glosario de términos de discapacidad”, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos (2018) establece que el concepto “discapacidad” no es un término rígido, sino que tiene un enfoque dinámico y que evoluciona y que “resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Basándose en este concepto, se establece que las “personas con discapacidad” son:

...todas aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás

En lo que respecta al ámbito educativo, las personas con discapacidad (física, mental o psicosocial), requieren de programas de educación especial. Estos, desde el ya citado documento de la CPGMDH (2018) son “servicios educativos destinados para los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social”.

Estos servicios de educación especial, tienen el objetivo de que la preparación académica de los menores de edad sea inclusiva; aquella que “garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos y que surgen de la interacción entre los estudiantes y sus contextos las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas”.

Con base a los conceptos de la CPGMDH y al significado de educación inclusiva, es posible determinar que un “alumno con necesidad educativas especiales” es una persona que “presenta un desempeño escolar significativamente distinto en relación con sus compañeros de grupo, por lo

que requiere que se incorporen a su proceso educativo mayores y/o distintos recursos con el fin de lograr su participación y aprendizaje, y alcanzar así los propósitos educativos” (CPGMDH, 2018).

Según este concepto, los alumnos con necesidades educativas especiales no son solamente aquellos con discapacidades físicas y/o mentales; sino cualquier estudiante que enfrente dificultades que le impidan desempeñarse de manera eficiente en su ambiente educativo, por lo que, en el aspecto académico, requieren “adecuaciones en la metodología, contenidos, propósitos y evaluación”; es decir, un “ajuste razonable”, entendido como:

Modificaciones y adaptaciones necesarias, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, que permitan a las personas compensar alguna deficiencia que les impida el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. por ejemplo, efectuar adaptaciones en la organización de un ambiente de trabajo o un establecimiento docente a fin de eliminar los obstáculos que impidan a una persona con discapacidad participar en una actividad o recibir servicios en igualdad de condiciones con los demás.

Reconocer a los alumnos con necesidades educativas especiales y realizar los ajustes razonables a través de la educación inclusiva, tiene como objetivo principal derribar las denominadas “barreras para el aprendizaje y la participación” y terminar con la discriminación.

La CPGMDH (2018) afirma que las barreras para el aprendizaje y la participación son “todos aquellos factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes”. Estas se fundamentan en diversas problemáticas que pueden enfrentar los menores de edad y “aparecen en relación con su interacción en los diferentes contextos social, político, institucional, cultural y en las circunstancias sociales y económicas. Desde el enfoque de la educación inclusiva, este concepto rebasa al de necesidades educativas especiales ya que se centra en la interacción con el contexto y no como un problema inherente al alumno”.

Por otra parte, en lo que respecta a la discriminación, la educación inclusiva busca terminar con “cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la denegación de ajustes razonables”.

Para finalizar, en los conceptos de la CPGMDH se manifiesta la necesidad de que se establezcan redes sociales de protección en las que los ciudadanos cuenten con políticas públicas que les permitan hacer frente a las dificultades que, eventualmente, se puedan presentar a lo largo de su vida. Estas redes son un “conjunto de herramientas y programas que le permiten a la población enfrentar las contingencias y los riesgos que surgen a lo largo de la vida y ante cambios drásticos en su entorno. Asimismo, se incluyen las acciones para atender a grupos de población que enfrentan condiciones específicas de vulnerabilidad que dificultan su pleno desarrollo”.

V.3.1. Discapacidades sociales

La salud mental se configura por una amplia gama de actividades relacionadas de forma directa o indirecta con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de la Organización Mundial de la Salud, su conceptualización se define como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Desde la OMS, se considera que la salud mental es un aspecto importante para el desarrollo de las personas; esta condición, les permite alcanzar su máximo potencial, superar el estrés y la ansiedad generada día con día, trabajar de forma productiva y seguir haciendo aportaciones a la comunidad. Por tal motivo, la creación de planes estratégicos para el cuidado y prevención de la salud mental es considerado como prioritario por esta organización.

En palabras de la Dra. Margaret Chan, Directora General de la OMS, la salud mental:

... es importante, pero queda un largo camino por recorrer hasta que se consiga. Quedan muchos aspectos por resolver, como el descuido de los servicios y la atención a la salud mental o las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales.

Entre las principales problemáticas o carencias vividas por las personas consideradas con discapacidad psicosocial se encuentran la falta de sensibilización, pocos programas para su atención, falta de participación en colectivos sociales, estigmatización, discriminación y violaciones a sus derechos humanos; por lo que la OMS, a través del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental (2013-2020) ha propuesto a todos sus asociados a establecer medidas para el tratamiento de padecimientos psicosociales de forma urgente.

Los padecimientos psicosociales se erigen como factores que alejan a las personas, de forma temporal o permanente, de acciones que desarrollaban de manera cotidiana; por tal motivo son considerados como incapacitantes. Una discapacidad psicosocial, con frecuencia, es provocada por un suceso inesperado en la vida de la persona, estas se presentan de forma repentina provocan que la vida de la persona se vea transformada por completo.

En ese sentido, la privación de la libertad de uno de los miembros de la familia se erige en un evento extraordinario para todo el núcleo; en gran parte de las ocasiones resulta inesperado y se convierte en un factor que provoca el surgimiento de problemas psicosociales que pueden convertirse en discapacidades si éstos, no son atendidos; sobre todo, en los menores de edad.

Según el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2016), se entiende por discapacidad social, todas aquellas” limitaciones de las personas que presentan disfunciones temporales o permanentes de la mente para realizar uno o más actividades cotidianas”.

Entre las disfunciones mentales asociadas a la discapacidad psicosocial se encuentran el trastorno dual, trastorno bipolar, psicosis, esquizofrenia, depresión y ansiedad, por mencionar algunas. Estos padecimientos tienen como común denominador que su presencia se manifiesta, como uno de los principales signos de alarma, cambios radicales en la personalidad, en las costumbres y en los hábitos del individuo.

Cerda (2015) afirma que cuando uno de los miembros de la familia es recluido dentro de un centro de reinserción social para el cumplimiento de una condena, los afectados mayormente en este suceso son los menores de edad. Principalmente, porque en ellos se generan sentimientos de angustia, miedo y depresión por la situación que vive su familiar recluido, sobre todo, cuando este es su padre o su madre. De la misma forma, para los miembros de la familia que son mayores de edad, la reclusión de uno de los integrantes del núcleo se convierte en una fuente que genera estrés, ansiedad e incertidumbre y porque se acentúan las carencias económicas imperantes en estos grupos.

Estas alteraciones emocionales vividas al interno de las familias de personas privadas de la libertad pueden afectar diversos aspectos de la vida de las personas y, en algunos casos, convertirse en aspectos limitantes para la realización de actividades cotidianas como trabajar o ir a la escuela. En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Pública (2012) señala que una discapacidad social es más propensa a presentarse en la adolescencia o en los primeros años de la adultez, “afectando directamente las funciones mentales y la interrelación de la persona y limita su capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria”.

Asimismo, en el documento denominado *Glosario de Educación Especial e Integración Educativa*, la SEP (2012), se indica que las enfermedades mentales y las alteraciones del estado emocional de una persona como la psicosis (esquizofrenia), trastorno bipolar, depresión, trastorno de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de ansiedad, “sino se identifican y atiende a tiempo, pueden derivar en una discapacidad psicosocial que afecta las habilidades interpersonales necesaria para establecer interacciones sociales recíprocas”; en el mismo documento precisa que “la discapacidad mental no es una discapacidad intelectual”.

Las discapacidades psicosociales no dependen de la personalidad, la voluntad o la inteligencia de quien las padece; en ocasiones, estas comienzan a manifestar cuando se presentan sucesos extraordinarios en la vida de las personas (como puede ser la privación de la libertad de uno de los miembros del núcleo familiar). Por tal motivo, para su atención se requiere la participación e intervención de profesionales de la salud, así como de programas de prevención y tratamiento psiquiátrico y, de requerirse, farmacológico (SEP, 2012).

Para una persona que sufre directa e indirectamente las consecuencias de la privación de la libertad de uno de los miembros de su núcleo familiar, este suceso —usualmente inesperado— puede convertirse en el detonador de problemas emocionales y psicológicos que impactan de forma negativa en sus actividades cotidianas. Para los menores de edad, estos padecimientos psicológicos pueden alejarlos de las aulas, limitando sus posibilidades de desarrollo tanto académico como personal.

Los menores de edad que atraviesan por este tipo de situaciones requieren de la atención estrecha y del acompañamiento, tanto de su núcleo familiar como de profesionales, que les permitan manejar su estado emocional de una mejor manera; asimismo, en ocasiones, este tipo de problemáticas provocan que los menores de edad se alejen de otros compañeros limitando su interacción social. Por tales motivos, para evitar que estas conductas afecten el desempeño académico y la participación social de los menores de edad que se encuentran estudiando, la Secretaría de Educación Pública recomienda que:

...se debe favorecer un ambiente familiar y escolar de convivencia seguro y positivo que le brinde un clima de relaciones interpersonales cordiales, sentimientos de pertenencia a un grupo social y de valoración, apoyar sus iniciativas personales y brindarle confianza e independencia. Más allá de las terapias y el abordaje médico, el fortalecimiento de los vínculos interpersonales y el sentir una realización personal, puede ser de gran ayuda para superar las distintas condiciones psicológicas.

Sin embargo, dentro de estos núcleos de familias donde uno de sus miembros ha sido encarcelado, se enfrentan condiciones económicas adversas en grado extremo, mismas que, en la mayoría de los casos, existían previos a la reclusión de uno de los suyos. Esta realidad ha provocado que existan deficiencias educativas que afectan en la obtención de mejores oportunidades laborales, que también pueden traducirse en dificultades educativas para los menores de edad.

Según el análisis titulado Prisión y Familia (Cerde, 2014) en el que se evaluaron 349 actas de internos que accedieron al beneficio de preliberación, la mayoría de estos cuenta con una educación hasta el nivel de secundaria al registrar el 30.9% de los casos; mientras que el 29.2% cuenta con primaria. Apenas el 10.0% cursó la preparatoria y sólo el 2.0% el nivel superior. Además, es importante destacar que el 12.9% de los candidatos a preliberación no cuentan con educación alguna.

Tabla 95

Escolaridad del preliberado previo al cumplimiento de su condena / distribución por Centro Penitenciario.

Escolaridad	Apodaca		Topo Chico		Cadereyta		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%
Sin educación	32	27.4	8	7.1	5	4.2	45	12.9
Primaria	34	29.0	38	33.9	30	25.0	102	29.2
Secundaria	41	35.0	35	31.3	32	26.7	108	30.9
Preparatoria	9	7.7	14	12.5	12	10.0	35	10.0
Licenciatura	1	0.9	2	1.8	4	3.3	7	2.0
Técnico	0	0	0	0	1	0.8	1	0.3
No especificado	0	0	15	13.4	36	30.0	51	14.6
Total	117	100	112	100	120	100	349	100

Fuente: Prisión y familia: Retos para la Cohesión Social del Siglo XXI (Cerde, 2014)

Además, los datos emanados de la Primera encuesta en Centros Penitenciarios elaborado por el Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE, 2012) en el que se entrevistó a reos del fuero federal, señala que el 20.4% de los internos a nivel federal, alcanzó la educación secundaria; el 18.2% la primaria; el 12% la preparatoria y, apenas el 2.5% consiguió terminar una carrera profesional.

Tabla 96

Escolaridad de los internos.

Escolaridad	Hombres	Mujeres
No asistió a la escuela	5.4%	5.3%
Primaria incompleta	16.7%	23.2%
Primaria completa	18.2%	14.7%
Secundaria incompleta	13.4%	16.8%
Secundaria completa	20.4%	16.8%
Preparatoria o técnica incompleta	12.0%	10.5%
Preparatoria o técnica completa	7.3%	9.5%
Universidad incompleta	4.3%	1.1%
Universidad completa	2.5%	2.1%
Total	100%	100%

Fuente: Primera encuesta en Centro Penitenciarios Federales, CIDE, 2012.

Estos datos indican que, aunado a las carencias económicas vividas en los núcleos familiares de los internos en México, estas familias enfrentan esquemas de falta de preparación académica y, con ello, ven reducidas sus oportunidades de encontrar un empleo mejor remunerado. Además, esto puede provocar que las expectativas académicas de los y las jóvenes se vean limitadas.

Es importante que exista un ambiente familiar adecuado, donde se le dé importancia a la educación de niños y jóvenes. De esta forma, sus expectativas de desarrollo se verán potenciadas, sus posibilidades de encontrar un mejor empleo serán mayores y, a largo plazo, se mejorará la perspectiva económica del núcleo.

VI. Discusión

A través del presente estudio, se da respuesta y confirma la premisa establecida como fundamentación de este en el sentido de que, bajo una perspectiva socioeducativa, los hijos/ hijas de personas privadas de la libertad, son los miembros del núcleo familiar mayormente afectados tras la reclusión de alguno de sus padres. La escasez de recursos económicos; la ausencia de los genitores por estar encarcelados; la necesidad de contar con mayores apoyos psicopedagógicos que les permita salir adelante en su desarrollo educativo, son los factores principales que generan en este sector de la niñez mexicana, discapacidades sociales que impactan directamente en su aprovechamiento escolar.

A lo largo del análisis realizado, se evidencia cómo la población infantil hijos/hijas de personas privadas de la libertad, no sólo enfrentan la pobreza económica y la ausencia de sus padres, también deben confrontar otros esquemas de vulnerabilidad social, surgidos desde la desigualdad social; la estigmatización y la falta de políticas y programas específicos para ellos, donde se de paso a atender las discapacidades sociales presentes en este núcleo poblacional desde diversos ángulos.

Las familias de internos penitenciarios en Nuevo León están sujetas a vivir conflictos económicos, emocionales y alteraciones psíquicas, tras la detención de uno de sus miembros. El alcance de este hecho y sus dimensiones variarán en los diversos miembros que configuran en este grupo, en función no sólo de la condición jurídica en la cual se encuentra la persona privada de la libertad; también incluyen factores como sus fortalezas emocionales; los soportes económicos con los cuales cuenten y las redes y apoyos sociales que se tengan.

Los estudios internacionales realizados desde el campo de la psiquiatría, reportan que los efectos emocionales en los hijos/hijas de personas privadas de la libertad son variables y dependen de la edad de los infantes, con hallazgos de trastornos como ansiedad entre los 0 y 3 años de edad; enuresis, pesadillas, ansiedad, agresividad y poco compromiso escolar entre los 4 y 7 años; depresión, agresividad y ausentismo escolar entre quienes se ubican entre los 8 y 10 años; actitudes violentas y ausentismo escolar entre los 11 y 15 años de edad. En estudios nacionales, realizados en las cárceles de la Ciudad de México y del Estado de México, no se especifican las edades, pero si se reporta que el 34.2% de estos infantes habían tenido problemas escolares; un porcentaje similar observa problemas de conducta; 27.8% diversos problemas de salud y 27.5% ansiedad.

Los datos emanados de las encuestas aplicadas a las familias encuestadas en el Estado de Nuevo León (años 2015 y 2018) muestran que los cuidadores de los menores hijos/hijas de PPL, indican en 6 de cada 10 casos, que, tras la reclusión del padre o la madre, el estado de ánimo de los menores se impactó; de éstos, en 8 de cada 10 la reacción de los infantes fue la depresión y en uno de cada 10 enojo o rabia. Tales afectaciones llevan a que en familias donde se han detectado tales alteraciones, en 7 de cada 10 casos los menores tengan impactos negativos en su rendimiento escolar; con “malas calificaciones” en 3 de cada 10 casos; “falta de atención” en 3 cada 10 casos; “falta de ganas” en 2 de cada 10; 1 de cada 10 asegura que los menores “han tenido problemas con los maestros y compañeros”; en 1 de cada 10 abandono escolar.

Asimismo, los cuidadores responsables de estos infantes asientan que en 3 de cada 10 niños hijos/hijas de personas encarceladas, se han dado “burlas o señalamientos” dentro del plantel escolar y en 2 de cada 10, este tipo de estigmatizaciones se ha dado en su colonia o sector donde habitan. Los gastos erogados por cuotas escolares oscilan entre los \$1000 y \$3000 pesos anuales, al igual que aquellos vinculados a la compra de uniformes y materiales escolares.

La mitad de las familias de internos penitenciarios encuestadas en NL, que tienen a su cargo la responsabilidad de los menores (generalmente la madre o los abuelos), indica que la privación de la libertad de uno de los suyos generó conflictos al interno de su núcleo; en 3 de cada 10 familias participantes se identificó la existencia de jóvenes que no se encuentran estudiando en el nivel que les corresponde por edad. En 9 de cada 10 familias, los cuidadores dijeron estar al tanto del rendimiento académico y las calificaciones obtenidas por los menores.

Los hallazgos en este ámbito también hacen hincapié durante el presente trabajo, en la existencia de un déficit en materia de investigaciones que permiten profundizar en el conocimiento de los efectos que el encarcelamiento tiene para los menores hijos/hijas de personas privadas de la libertad, por grupos de edades y contextos vinculados al bienestar y desarrollo de estos infantes y adolescentes.

Por lo que corresponde a las encuestas aplicadas en Julio del 2019 a internos del penal de Apodaca y mujeres de la comunidad penitenciaria de Escobedo, cuyas edades promedio para los primeros es de 37 años y de 31 años para el segundo grupo, con sentencias que oscilan entre los 16.7 años para las mujeres y 16.4 años para los varones, se reporta que más de la mitad de las mujeres encarceladas, tienen hijos/hijas, cuyas edades se ubican entre los 0 y 10 años de edad (226 infantes); seguidos por adolescentes entre 11 y 15 años (21.9%) y jóvenes entre 16 y 20 años (6.2%). En el penal varonil de Apodaca, se detecta que 38.0% tienen hijos entre 0 y 10 años de edad; 17.2% con hijos/hijas entre 11 y 15 años; 13.3% entre 16 y 20 años. Las PPL de NL, en su gran mayoría tienen hijos/hijas, en plenas edades educativas.

Un 50.0% de las PPL en Apodaca, desconocen la situación académica de sus hijos/hijas; un tercio de ellos si lo hace y el resto no respondió a esta pregunta. En 3 de cada 10 casos, los internos dijeron que es la esposa quien está al tanto de lo que sucede en ese ámbito; uno de cada 10 dijo que su mamá; uno de cada 10 dijo que era el padre; 2 de cada 10 sus hermanos/hermanas; 2 de cada 10 la esposa y la madre.

En 7 de cada 10 casos, los internos expusieron que lo más necesario para que sus hijos continúen sus estudios es el apoyo económico; 2 de cada 10 anotan la necesidad de becas; 1 de cada 10 refirió “apoyos gubernamentales” y 1 de cada 10 “falta de tiempo para apoyarlos”. En casi 4 de cada 10 casos, a los internos les gustaría participar en la educación escolar de sus hijos, mientras que 3 de cada 20 se negaron a ello y en 3 de cada 10 casos no contestaron.

Las encuestas aplicadas tanto a la población penitenciaria, como a las familias que se hacen cargo de los menores, indican que, tras el encarcelamiento de algún miembro de la familia, la crisis económica se agudiza en las propias familias, donde un 62% de ellas, devenga mensualmente \$3,000 pesos y, para sobrevivir, deben colectivizar el sentido del trabajo bajo un esquema de cooperación entre todos sus integrantes. Poco más del 50% de ellos carecen de vivienda propia. Las descripciones en este rubro no difieren tampoco sustancialmente de las descritas por autores como Rosenbluth y Krupart (2007), quienes indican que la vulnerabilidad económica y social, ya existía en etapas previas al encarcelamiento de alguno de sus miembros.

En estudios efectuados en los penales de Nuevo León, durante los años 2014,2015,2016, 2017 y 2018, se asienta que un 80% de las familias penitenciarias, enfrentan erogaciones extraordinarias tras el encarcelamiento de uno de sus miembros, así como diversas y múltiples variables asociadas a vulnerabilidades de distinta índole que van desde conflictos al interno del núcleo; ahondamiento de pobreza económica; estigmatizaciones y falta de oportunidades laborales, entre otros factores.

Las condiciones expuestas por 151 familias de internos penitenciarios asientan que más de la mitad de hijos/hijas de internos penitenciarios se ubican en edades escolares; en un 33% de estos núcleos, admiten tener problemas económicos para desarrollar plenamente sus tareas educativas. Los costos socioeconómicos y educativos generados por los menores bajo su responsabilidad significan un peso de consideración para las madres, abuelos, hermanos/hermanas o demás familiares que asumen este rol.

Hasta ahora, en el país, si bien se tienen programas para el combate de la pobreza, no se cuenta con políticas sociales y programas para atender específica y sistemáticamente a dichos núcleos familiares, caracterizados no sólo por la vulnerabilidad que la pobreza y la desigualdad social en que gran parte de estas familias viven, sino también por la falta de oportunidades laborales surgidas desde la estigmatización social, a la cual se ven sujeta tanto adultos como menores que son familiares de internos penitenciarios.

Los hijos/hijas de internos penitenciarios, viven la pobreza de la familia o cuidadores responsables de ellos y, simultáneamente no tienen tampoco oportunidad de ser apoyados por sus padres o madres encarcelados, cuyo trabajo en los centros penitenciarios de Nuevo León y del resto de México, no llega en múltiples casos, al salario mínimo; tampoco cuentan con un esquema de seguridad social que podrían extenderse a sus vástagos, menores de edad, para su debida asistencia médica.

Dentro de los hallazgos reportados en los estudios sobre reinserción social desarrollados en Nuevo León, durante poco más de un lustro, se señala que, en los penales del Estado, la población masculina que se desempeña en las maquiladoras o en el ejercicio de diversas actividades en 8 de cada 10 casos, los internos devengan menos de \$600 pesos a la semana; 1 de cada 10 gana entre \$900 y \$1,200 pesos a la semana. Esta situación se torna más dramática en el caso de las mujeres, en donde sólo en 2 de cada 10 casos, ellas, devengan entre \$300 y \$600 pesos a la semana porque 8 de cada 10, ganan menos de \$300 pesos a la semana. Dichos ingresos suelen tenerse en gran parte de los penales estatales del país. Para Julio del 2019, 7 de cada 10 mujeres tenían trabajo dentro del penal de Escobedo y 9 de cada 10 en el de Apodaca.

Tanto los internos, como sus familias, coinciden en las encuestas levantadas (7 de cada 10 casos en los internos y 8 de cada 10 en las familias), en que, dentro de su núcleo, los problemas económicos se han profundizado tras el encarcelamiento de uno de sus miembros. Su condición de pobreza acentuada se agudiza ante el hecho de que la formación educativa tanto de los internos/internas, como de su familia, se ubica fundamentalmente en niveles básicos de primaria y secundaria, por lo que el acceso a mejores puestos o la esperanza de movilidad social que la educación permite, es reducida.

Las edades de hijos/hijas de internas de los penales de Nuevo León, se sitúan fundamentalmente entre las de niñez, pubertad y adolescencia, es decir, en etapas escolares. La media de las edades en los hijos de mujeres privadas de la libertad se ubica en 12.2 años y, en hijos/hijas de varones privados de la libertad en el penal de Apodaca, en 12.4 años. En ambas poblaciones, la visita familiar registra hasta un 84% de presencia.

Dentro de las historias de familias de internos/internas se señala que, en el caso de las mujeres, un 31% de ellas ha tenido familiares dentro del penal; en los varones este porcentaje se ubica en el 17%. En su núcleo familiar nuclear, las mujeres reportan que tuvieron la presencia de su madre durante su niñez hasta en 88.3% de los casos y del padre en un 76.5%; en los varones, la madre estuvo presente en un 80% y el padre en un nivel del 67.2% de los casos.

Durante sus etapas de niñez y adolescencia, hombres y mujeres privados de la libertad de los CERESOS de Apodaca y Escobedo, argumentaron que los problemas más agudos que vivieron como núcleo familiar fueron los de carácter económico (40%); seguido por la separación o divorcio de sus padres (24.9%); alcoholismo (21.6%). Dentro de estas problemáticas se asienta el haber enfrentado el abuso sexual dentro de su propia familia con un 11.7% en el caso de las mujeres y 2.2% en los varones. Tres de cada 10 internas aseguran haber sido víctimas de violencia física o verbal en su hogar y 2 de cada 10 varones, admitieron lo mismo.

El 27% de los varones encuestados dijeron haber pertenecido alguna pandilla; en las mujeres este% se redujo al 9.3%. Ambos géneros declaran que también han tenido familiares que enrolaron en alguna pandilla, fundamentalmente hermanos/hermanas.

Al analizarse las condiciones escolares por las cuales transitaban los internos/internas penitenciarias, 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones afirman que ellos asistieron regularmente a la escuela. En promedio, 7 de cada 10 aseguraron haber recibido apoyo de su familia para el desempeño escolar. En ambos géneros, la causa que indican impidió el desarrollo de un debido soporte para el desempeño de su vida escolar fue el factor económico, seguido por factores como ausencia de uno de los padres; problemas de salud de algún miembro de su familia o “porque no les importaba mucho”. Durante su etapa escolar, 2 de cada 10 internos/internas puntualizaron que fueron objeto de violencia física, verbal o psicológica dentro de los planteles, por parte de compañeros en primer lugar; maestros; pandillas y directivos del plantel, entre otros agresores.

Más de la mitad de los internos/internas penitenciarios, durante su infancia no tuvieron acceso a la seguridad social; en 3 de cada 10 de ellos se reporta que en este período tuvieron trastornos psicológicos como depresión; estrés, ansiedad, miedo y adicciones.

Por lo que corresponde a si los internos penitenciarios, conocen la situación educativa de sus hijos/hijas, 5 de cada 10 dijeron que sí; 2 de cada 10 la desconocen y 3 de cada 10 no contestaron. Entre quienes dijeron conocer las trayectorias educativas de sus vástagos 5% la calificó como “muy mala”; 20% como “regular”; 43% como “buena” y 25% “excelente”. En 5 de cada 10 casos, el principal problema relacionado con la educación de sus hijos/hijas lo centran en factores de orden económico; 24% “por falta de tiempo para apoyarlos”; 6% por discriminación o *bullying* y 3% “por falta de aprovechamiento”.

En 6 de cada 10 casos, los internos pidieron para sus hijos/hijas, becas y apoyo en útiles escolares; en 2 de cada 10 apoyos educativos y en 1 de cada 10 asesorías escolares y uniformes. En casi 4 de cada 10 internos se expresó el deseo de participar y “ayudar” apoyando el desempeño escolar de sus hijos si se tuviera una unidad específica para ello.

Estos datos indican la disponibilidad de una buena proporción de los internos/internas para adentrarse en el fortalecimiento de sus habilidades parentales, aún y cuando reconocen las limitantes que la cárcel impone en horarios y visitas. Dichas razones se analizaron tanto cuantitativa como cualitativamente a lo largo de este texto.

Con respecto a los internos que dijeron conocer cuáles son las calificaciones que sus hijos obtienen en su desempeño escolar, un 4% las ubicó entre “malas y muy malas”; 19% regulares; 41% como “buenas” y 21% como “buenas”, mientras que un 13% no contestó.

Al concluir sus condenas, 9 de cada 10 mujeres indican que regresarán a su casa y 7 de cada 10 varones privados de la libertad prevén lo mismo. Este hecho indica el sentido de pertenencia y de familia que subsiste en gran parte de la comunidad penitenciaria.

Por otro lado, dentro de la realidad educativa internacional y nacional analizada, se puede afirmar que prevalecen dentro de los lineamientos previstos para grupos en vulnerabilidad, diversos programas donde se señala la importancia de activar una educación inclusiva, como una fórmula que impulse el desarrollo y bienestar social para las familias y las comunidades.

En ese contexto, los estudios internacionales al referirse a los hijos/hijas de internos penitenciarios, centran su prioridad en los derechos de la niñez y, dan paso, posteriormente a considerar la importancia del desarrollo de habilidades parentales entre las personas privadas de la libertad como un esquema integrador para su propio proceso de reinserción social.

El análisis documental indica que el sistema educativo mexicano se orienta hacia el fortalecimiento de una educación integral e inclusiva para quienes por diversas razones tengan necesidades o requerimientos especiales por algún tipo de discapacidad, a fin de eliminar las barreras físicas, ideológicas o sociales que limitan el aprendizaje en los infantes y adolescentes.

A partir del año 1993, las reformas efectuadas al artículo 3 de la Constitución Mexicana y la promulgación de la Ley General de Educación, los servicios de educación especial se extendieron hacia un concepto de integración educativa para combatir la discriminación, segregación y estereotipos en menores con discapacidad y buscar la integración de niños y niñas que estaban separados del resto de la población infantil. Este mismo concepto reforzó, entre otras cosas, la idea de que los alumnos/alumnas, en ocasiones, requieren de apoyos psicopedagógicos aun cuando no tengan una discapacidad visible. Surgen los CAM y USAER, estos últimos, orientaban a las familias sobre el proceso de integración educativa.

Fundamentándose en las conclusiones y recomendaciones de la ONU y en las propias necesidades nacionales, surgió el Programa Nacional de Educación donde se diseñaron políticas y programas públicos para atender la población que presentara algún problema o discapacidad donde se afectara el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo orientado a la niñez.

Por consecuencia, bajo la óptica de la propia SEP, los procesos de integración educativa o de inclusión educativa, implicarían identificar y reducir los obstáculos que existan para que los niños/niñas, hijos de personas privadas de la libertad, tengan acceso a los apoyos psicopedagógicos que necesiten para su desempeño escolar, sobre todo, considerando sus condiciones familiares, económicas, personales y socioculturales.

Organizaciones como la ONU, UNICEF y la OMS, han identificado como discapacidades sociales entre otras, al déficit de atención, la depresión y la ansiedad, como trastornos que impactan negativamente el desarrollo educativo de los estudiantes, sobre todo, durante las edades tempranas. Los escenarios familiares y personales que se presentan para los hijos/hijas de personas privadas de la libertad, no sólo son complejos por la falta de sus padres, tal como se muestra en los resultados del presente trabajo; su vulnerabilidad se extiende a la falta de un patrimonio económico que garantice el acceso a su educación, a indicadores de salud, buena alimentación y a la atención de los efectos psicosociales que el encarcelamiento de los padres trae para este núcleo de la niñez y adolescencia mexicana.

El propio Glosario de términos de discapacidad, elaborado por la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos, dado a conocer en México, durante el año 2018,

y, analizado en el presente trabajo, recomienda establecer redes sociales de protección y políticas públicas, a los ciudadanos que enfrentan contingencias y riesgos por cambios dramáticos en el entorno de sus diversos ciclos de su vida. La privación de la libertad de sus padres es de hecho, para los hijos/hijas de internos penitenciarios un evento extraordinariamente dramático para los menores y para su familia.

En base a tales conceptos, desde el presente trabajo, se proponen una serie de recomendaciones prácticas para apoyar a los hijos/hijas de internos penitenciarios, atribuyendo a tales núcleos, la existencia de discapacidades sociales provocadas por el encarcelamiento de sus padres; las vulnerabilidades socio-económicas y familiares de quienes se erigen voluntaria y hasta amorosamente como cuidadores de ellos y, el hecho de que en materia de políticas y programas sociales destinados a ellos, aún está por desarrollarse una visión holística de intervenciones que permitan robustecer las trayectorias educativas de este núcleo de la infancia y adolescencia en México.

VII. Recomendaciones: Programas de intervención desde el Estado desde una perspectiva de educación inclusiva en menores hijos/hijas de Personas Privadas de la Libertad

Considerando que no existen fórmulas o recetas únicas que, dentro del contexto internacional y/o nacional, permitan establecer un programa de intervención exitoso al 100%, donde se garantice que todos los hijos/hijas de personas privadas de la libertad, logren un desempeño educativo positivo, se establecen una serie de recomendaciones pertinentes luego de examinar tanto las condiciones socioeconómicas e historias de vida familiar de las personas privadas de la libertad en Nuevo León, como la situación socioeconómica y familiar de los menores hijos de PPL, y de quienes tienen bajo su responsabilidad, la crianza de estos niños/niñas y adolescentes.

Las recomendaciones no se centran únicamente en el concepto de parentalidad intervenida o mediada, a través de programas que el Estado desarrolle de manera única a mediante cursos o seminarios de parentalidad, que incluso sirvan a la persona privada de la libertad en la reducción de su sentencia, sino que parte de cuatro ideas centrales entre las que se encuentran:

1. Los derechos de los niños/niñas y adolescentes, deben protegerse y promoverse activamente como el interés superior que debe priorizarse y resguardarse desde el Estado, así como en toda familia y colectividad. La activación de programas específicos destinados a los menores que enfrentan vulnerabilidades y discapacidades sociales, al ser hijos/hijas de PPL, deben erigirse en una parte importante de las políticas sociales que actualmente se impulsan dentro del Estado de Nuevo León y del resto de la República.
2. Tal como se describió en el desarrollo del presente trabajo, los menores, hijos/hijas de personas privadas de la libertad, pueden ser considerados infantes y adolescentes con discapacidades sociales en el sentido de que la privación de la libertad de alguno de sus padres o de ambos, no sólo impacta el ámbito económico del desarrollo de su niñez, sino su núcleo de familia y su estabilidad emocional y socioeducativa; más allá de la pobreza económica que suele caracterizar a dichos menores y sus entornos inmediatos. De ahí, la importancia de establecer dentro de la entidad una política social para estos infantes, donde se prioricen programas psico-educativos y sociales, a través de los cuales se abatan los índices de rezago, reprobación o abandono escolar, situaciones que profundizan su propia desigualdad social.
3. Los programas previstos dentro del proceso de reinserción social para las personas privadas de la libertad, podrían incluir dentro de su formación básica, la educación para el desarrollo de habilidades y competencias parentales. La educación para la familia en un número significativo

de PPL, es un punto neurálgico para considerar si se pretenden abatir los índices de reincidencia delictiva, no sólo porque se sensibiliza a la persona sobre las responsabilidades en familia y comunidad, sino también porque al salir del centro penitenciario, la familia, es el primer núcleo a donde la mayoría de los internos suelen llegar para dar paso a su reinserción social extramuros. De ahí, que incluso, este concepto podría ser un tipo de educación a considerar como indicador pertinente en las evaluaciones que se realizan sobre las posibles reducciones de las condenas.

4. El desarrollo de capacidades parentales y la sensibilización sobre la importancia que ocupa dentro de este proceso la educación académica de los menores, debe reforzarse entre la familia o cuidadores que se hacen cargo de los infantes y adolescentes, mientras su padre/madre están en la cárcel. Incluir a los cuidadores en un esquema de habilidades parentales, constituye una forma de fortalecer aspectos importantes en la estabilidad emocional de los menores en esquemas de autoestima; apegos al sentido de familia; formación de valores y abordaje efectivo para abatir las estigmatizaciones sociales de las cuales suelen ser víctimas los hijos/hijas de PPL, entre otros posibles aspectos benéficos.

A continuación, se sugieren una serie de indicadores para la operación de un programa de intervención desde el Estado bajo una perspectiva de educación inclusiva integral para menores hijos/hijas de personas privadas de la libertad:

Indicadores para la operación de un programa de intervención desde el Estado desde una perspectiva de educación inclusiva en menores hijos/hijas de personas privadas de la libertad

Indicador 1

Realizar un censo sobre las condiciones socio educativas, económicas y familiares de niños/niñas y adolescentes menores hijos de PPL.

- Operacionalización: Encuesta aplicada a los familiares de PPL, que operan como cuidadores de los hijos menores de internos/internas penitenciarios, para conocer las condiciones socio educativas, económicas y familiares de estos infantes en Nuevo León.
- Justificación: Establecer un diagnóstico general de las condiciones socioeducativas, económicas y familiares, así como de las dificultades académicas por rezagos, abandonos escolares o reprobación de grados, en los hijos de PPL, para efectos de generar programas específicos para el abatimiento de tales problemáticas.

Indicador 2

Establecer programas específicos de acompañamiento desde las Unidades de Asesoría Psicopedagógicas de la SEP, donde se apoye a los hijos/hijas de PPL, menores de edad que suelen transitar por esquemas de vulnerabilidad y discapacidad social, desde el momento de la detención de su padre/madre; el período de su encarcelamiento y durante la liberación del mismo (Podría crearse una unidad de asesoría psicopedagógica que, bajo conceptos de educación inclusiva, aborde el acompañamiento de niños en discapacidad social por tener padres encarcelados).

- Operacionalización: En base a un diagnóstico actualizado sobre las condiciones socio familiares y educativas de los hijos/hijas menores de PPL, para efectos de apoyos escolares no sólo en becas, útiles o transporte, implementar acompañamientos psicopedagógico, tanto en las unidades con que cuenta la SEP, en los diversos municipios del AMM, como en unidades móviles que podrían implementarse dentro de las instalaciones penitenciarias, durante los días de visita familiar previstos para la convivencia de las PPL, con los cuidadores de los menores y los propios hijos/hijas.

Dichas unidades móviles pueden servir tanto para la elaboración del diagnóstico, como para acercamientos con las familias que se hacen cargo del cuidado de los menores. Asimismo, estas unidades pueden funcionar como un centro educativo multigrado en el que los menores de edad reciban, en primera instancia, cursos que les permitan regularizar su situación educativa y, en segundo punto, desarrollen habilidad que les permitan convivir y socializar de manera adecuada con sus compañeros y profesores.

- Justificación: Elaboración de manuales y guías de buenas prácticas para el acompañamiento psico-pedagógico y familiar que precisan los menores hijos/hijas de internos penitenciarios en Nuevo León, considerando edades y etapas de los menores; condiciones de familia y su situación emocional y psicopedagógica, durante procesos claves como son el encarcelamiento de sus padres; la formalización de medidas cautelares que implican la privación de la libertad de sus padres (sea preventiva o provisoria); la sentencia y la liberalización de los mismos.

Indicador 3

Desarrollo de Habilidades Parentales en las Personas Privadas de la Libertad.

- Operacionalización: Basándose en las historias de vida familiares (hacer uso de genograma que normalmente debiera tenerse o elaborarse en los departamentos de Psicología de los centros penitenciarios) y, tomando en cuenta los elementos claves en sus relaciones con la familia nuclear y los hijos, promover cursos y seminarios donde el adulto privado de la libertad, tome conciencia de cómo interviene positivamente en la vida de sus hijos el desarrollo de una parentalidad positiva.
- Justificación: Impulsar una sensibilización efectiva entre las personas privadas de la libertad, sobre la importancia de desarrollar una parentalidad a través de la cual se fortalezca la relación y comunicación entre padres e hijos/hijas; la empatía y un apego positivo entre dichos participantes (padres/madres privados de la libertad y niños/niñas/adolescentes hijos de PPL), fortalecer las relaciones padres/hijos. Estos cursos de parentalidad, pueden formar parte de su educación dentro de las tareas de reinserción social (en internos donde el tipo de delitos cometidos no constituya un riesgo para la integridad física y emocional del niño/niña) al abordar temas que se vinculan directamente con la crianza como son la educación; la responsabilidad con la familia y las instituciones; el alejarse del consumo de drogas, alcohol; la educación como un elemento que les permite salir adelante como persona, familia y sociedad, etc.

Indicador 4

Apoyos a la Familia Extensa o a los Cuidadores, Responsables de la Crianza de Menores que son Hijos/Hijas de Personas que están Privadas de la Libertad.

- Operacionalización: Con la participación de las áreas que integran los departamentos de Reinserción Social en los CERESO de NL, juntamente con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, establecer un esquema de red familiar y comunitaria con quienes se hacen cargo de la crianza de los menores hijos de PPL. Bajo este esquema de red de contacto con las familias de los internos/internas, identificar las necesidades y apoyos requeridos para la crianza de los menores. Con lo anterior, podría elaborarse una especie de eco-mapa a través del cual se aprecien los soportes extra familiares existentes o ausentes en cada familia.
- Justificación: Tanto las autoridades estatales como los cuidadores, pueden identificar en qué aspecto necesitan más apoyo la familia extensa o los responsables de la crianza de menores hijos de PPL y canalizarlos debidamente a quienes puedan apoyarlos.

Indicador 5

Competencias Parentales para los Cuidadores de hijos/hijas de internos de PPL.

- Operacionalización: Establecer seminarios y cursos para las familias de personas privadas de la libertad que se hacen cargo de los hijos/hijas de PPL, a través de los cuales se enfatice la importancia del apego seguro de los menores; el desarrollo de la empatía; el establecimiento de modelos de crianza sustentados en estilos educativos positivos. Podrían aprovecharse las visitas de familia a los penales para explicar el propósito de esta actividad.
- Justificación: Proporcionar a los y las personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de menores hijos/hijas de PPL, las herramientas pertinentes para el desarrollo y aprendizaje de competencias parentales en beneficio de los niños/niñas y adolescentes que transitan por ese período.

Anexo 3. Comprobante de la participación en el proyecto “Desarrollo psicopedagógico y social en hijos de Personas Privadas de la Libertad: Programas de apoyo para infantes y adolescentes en vulnerabilidad”



ASUNTO: CARTA DE FINALIZACIÓN DE
ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN

Monterrey, Nuevo León, a 7 de octubre de 2019.

DRA. REYNA VERÓNICA SERNA ALEJANDRO
Coordinadora del Doctorado en Filosofía con orientación
Comunicación e Innovación Educativa
Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias de la Comunicación
P R E S E N T E .-

Por medio de la presente hago constar que la M.C. Emma Cerda Pérez, estudiante del Doctorado en Filosofía con orientación en Comunicación e Innovación Educativa, con número de matrícula 0488242, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ha concluido de manera satisfactoria la estancia de investigación en el Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminológica (CITEJYC) de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL.

Durante el periodo comprendido del 17 de julio al 17 de septiembre (tres meses), las actividades de Cerda Pérez, coordinadas por un servidor y por la Dra. Patricia Liliana Cerda Pérez (directora de tesis del estudiante) se enfocaron, en primera instancia, a la revisión teórica y metodológica del proyecto de investigación de tesis de la doctorante titulado tentativamente como: “Educación y capacitación para la población penitenciaria: un análisis desde la reinserción social en el CERESO Apodaca”.

Para este proyecto que tiene como objetivo analizar las tareas educativas que se desarrollan en el Centro de Reinserción Social Apodaca, se realizaron una serie de observaciones encaminadas a precisar el trabajo realizado por el estudiante. En ese sentido, el trabajo de tesis refleja tanto la labor del candidato al grado de doctor como de su asesora al analizar un aspecto trascendente para el sistema penitenciario de la entidad.

Por otra parte, es importante destacar que una de las actividades realizadas durante la estancia de investigación es el desarrollo de un programa de intervención para el apoyo psicopedagógico de los hijos e hijas de internos penitenciarios en el estado de Nuevo León, integrando en este propósito a las personas privadas de la libertad cuyo perfil resulte idóneo para la impartición de programas de educación parental. Este proyecto, coordinado por la Dra. Patricia Cerda Pérez, tiene como finalidad el fundamento de los puntos de atención específica que requieren los infantes en el ámbito educativo ya que son una población sujeta a discapacidades sociales que afectan su aprovechamiento académico.

Este proyecto, que se desprende de los diversos libros respecto a la realidad penitenciaria realizados por la Dra. Cerda Pérez y del trabajo realizado por la M.C. Emma Cerda Pérez durante la estancia de investigación, incluye una visión que representa una alternativa para potenciar el desarrollo de habilidades parentales en las personas privadas de la libertad que les permitan una mejor convivencia con sus hijos e hijas.

La propuesta, que se dará a conocer de manera pública en una fecha posterior, presenta una serie de indicadores encaminados a la creación de estrategias específicas para la atención psicopedagógica de los hijos e hijas de personas privadas de la libertad; mismas que se desprenden del análisis de las condiciones socioeconómicas y de las historias de vida de quienes componen estos núcleos. Asimismo, este programa incluye indicadores enfocados al desarrollo de habilidades parentales en los internos en centros de reinserción social del estado de Nuevo León.



Para un servidor, la experiencia vivida durante este periodo de investigación científica ha sido gratificante. El papel realizado por la M.C. Emma Cerda Pérez cumple de manera satisfactoria con los objetivos considerados dentro de la estancia, por lo que certifico su participación en este proceso y manifiesto que se ha desempeñado de manera correcta en cada una de las actividades que le han sido asignadas.

Asimismo, agradezco la invitación y la participación de la Dra. Patricia Cerda; evidencia de su trabajo es el proyecto de tesis que la M.C. Emma Cerda Pérez se encuentra desarrollando. Esta tesis refleja una reflexión teórica y metodológica profunda, con objetivos claramente definidos y con la finalidad de atender una problemática específica y trascendental para el sistema penitenciario del estado de Nuevo León: La educación de las personas privadas de la libertad en la entidad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE.-

DR. J. ANTONIO CABALLERO DELGADILLO
Investigador
 Centro de Investigación de Tecnología
 Jurídica y Criminológica (CITEJYC)
 Facultad de Derecho y Criminología
 Universidad Autónoma de Nuevo León

DR. AMALIA GUILLEN GAYTAN
Subdirectora de Investigación
 Centro de Investigación de Tecnología
 Jurídica y Criminológica (CITEJYC)
 Facultad de Derecho y Criminología
 Universidad Autónoma de Nuevo León



CENTRO DE INVESTIGACIÓN
 DE TECNOLOGÍA JURÍDICA
 Y CRIMINOLÓGICA

Anexo 4. Encuesta a personas privadas de la libertad aplicada en febrero de 2017




ENCUESTA PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE REINSERCIÓN SOCIAL DENTRO DEL CERESO "APODACA"

FOLIO:

Buen día: El propósito de este cuestionario es evaluar las condiciones de vida, económicas, educativas y familiares de quienes se encuentran privados de la libertad dentro del Centro de Reinserción de "Apodaca". Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia y percepción, por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Por favor, lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que mejor describa su opinión. Sus respuestas serán estrictamente confidenciales y se mantienen bajo un régimen de anonimato, le pedimos que **NO ESCRIBA NOMBRE NI DOMICILIO**.

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO

Edad del entrevistado: ()

Ocupación antes de ingresar: ()

Ocupación dentro del CERESO: ()

Escolaridad antes de ingresar: ()

Religión: ()

¿De dónde es originario?: ()

Municipio dónde radicaba: ()

Tiempo de estancia en el CERESO: ()

Delito cometido: ()

Tiempo de sentencia aplicado: ()

¿Es la primera vez dentro de un CERESO? 1. Sí () 2. No ()

En caso negativo, ¿por qué delito ingresó previamente a un CERESO? ()

DE LA FAMILIA DEL ENTREVISTADO

01. Antes de ingresar al CERESO Apodaca, ¿usted vivía con?

1. Esposa () 2. Esposa e hijos () 3. Padres () 4. Padres y hermanos ()

5. Otros familiares () 6. Amigos () 7. Solo ()

02. ¿Cuál es su estado civil?

1. Soltero () 2. Casado () 3. Divorciado ()

4. Viudo () 5. Unión Libre ()

03. ¿Tuvo usted algún cambio de estado civil después de la reclusión? (En caso negativo, pase a la pregunta 05)

1. Sí hubo un cambio () 2. No hubo un cambio ()

04. En caso afirmativo, ¿cuál era su estado civil antes de la reclusión?

1. Soltero () 2. Casado () 3. Divorciado ()

4. Viudo () 5. Unión Libre ()

05. ¿Tiene usted hijos? (En caso negativo, pase a la pregunta 08)

1. Sí tiene () 2. No tiene ()

06. En caso afirmativo, ¿cuántos hijos tiene? ()

07. En caso de tener hijos, ¿puede decirnos cuál es su edad, género (sexo) y escolaridad?

1. Hombre () 2. Mujer () | Escolaridad: () | Edad: ()

1. Hombre () 2. Mujer () | Escolaridad: () | Edad: ()

1. Hombre () 2. Mujer () | Escolaridad: () | Edad: ()

1. Hombre () 2. Mujer () | Escolaridad: () | Edad: ()

1. Hombre () 2. Mujer () | Escolaridad: () | Edad: ()

08. ¿Recibe visitas familiares? (En caso negativo, pase a la pregunta 13)

1. Sí recibe visitas () 2. No recibe visitas ()

09. En una semana, ¿cuántas veces es visitado?

1 vez () 2 veces () 3 veces () 4 veces () 5 veces ()

10. ¿Quiénes lo visitan? (Puede marcar varias opciones)

1. Padre () 2. Madre () 3. Esposa () 4. Concubina () 5. Hijos ()

6. Hermanos () 7. Otros familiares () 8. Otras personas ()

11. Cuando sus familiares lo visitan, ¿existe alguna cuota que deban cubrir? (En caso negativo pase a la pregunta 13)

1. Si existe cuota () | 2. No existe cuota () |

12. En caso afirmativo, ¿cuál fue el motivo de la cuota?

1. Por pasar comida, ropa u otros objetos () | 2. Por seguridad o integridad personal () | 3. Otro () |

13. ¿Por qué cree usted que no ha recibido visitas de sus familiares?

14. ¿Recibe visita conyugal? (En caso negativo, pase a la pregunta 16)

1. Si recibe visitas () | 2. No recibe visitas ()

15. En un mes, ¿Cuántas veces recibe visitas conyugales?

- 1 vez () | 2 veces () | 3 veces () | 4 veces () | 5 veces o más ()

16. ¿Cómo evalúa la relación de usted con su familia?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

17. Antes de su ingreso al CERESO Apodaca ¿Cuáles eran sus ingresos mensuales?

1. Menos de \$3,000 () | 2. De \$3,001 a \$6,000 ()
3. De \$6,001 a \$9,000 () | 4. Más de \$9,000 ()

18. ¿Cree usted que sus familiares tienen problemas económicos para pagar sus traslados a este centro?

1. Si tienen problemas () | 2. No tienen problemas () |

19. ¿Sabe si su familia ha vendido alguna propiedad de su pertenencia para solventar problemas derivados de su encarcelamiento?

1. Si han vendido () | 2. No se han vendido () |

20. ¿Usted se encuentra trabajando dentro del CERESO Apodaca?

(En caso negativo, pase a la pregunta 15)

1. Si trabaja () | 2. No trabaja ()

21. De su trabajo en el CERESO Apodaca, ¿Cuál es su ingreso mensual?

1. Menos de \$1,000 () | 2. De \$1,001 a \$2,000 () | 3. Más de \$2,000 ()

22. ¿Recibe alguna clase de apoyo de su familia? (En caso negativo, pase a la pregunta 24)

1. Si recibe apoyo () | 2. No recibe apoyo ()

23. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de apoyo familiar recibe? (Puede marcar varias opciones)

1. Alimentos () | 2. Económico () | 3. Productos de higiene personal ()
4. Medicinas () | 5. Ropa/vestimenta () | 6. Otros apoyos ()

24. Al salir, ¿regresará a vivir con su familia?

1. Si se regresará () | 2. No regresará ()

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERESO APODACA

25. ¿Cuenta con acceso a llamadas telefónicas con su familia?

1. Si cuenta con acceso () | 2. No cuenta con acceso ()

26. ¿La ventilación y temperaturas en las habitaciones son adecuadas?

1. Si son adecuadas () | 2. No son adecuadas ()

27. ¿La ventilación y temperaturas en las áreas de trabajo son adecuada?

1. Si son adecuadas () | 2. No son adecuadas ()

28. ¿Las habitaciones cuentan con luz suficiente?

1. Si cuenta con luz suficiente () | 2. No cuenta con luz suficiente ()

Conteste las siguientes preguntas según su opinión:

29. ¿Cómo considera la limpieza de las instalaciones del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

30. ¿Cómo evalúa los dormitorios (espacios) del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenos () | 3. Regulares () | 4. Malos () | 5. Muy malos ()

31. ¿Se siente seguro dentro de su dormitorio?

1. Si se siente seguro () | 2. No se siente seguro () |

32. ¿Cómo evalúa los baños y regaderas del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenos () | 3. Regulares () | 4. Malos () | 5. Muy malos ()

33. ¿Cómo evalúa las instalaciones deportivas del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

34. ¿Cómo evalúa los espacios para actividades culturales del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenos () | 3. Regulares () | 4. Malos () | 5. Muy malos ()

35. ¿Cómo evalúa las aulas educativas del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

36. ¿Cómo evalúa la biblioteca del CERESO Apodaca?

1. Excelente () | 2. Buena () | 3. Regular () | 4. Mala () | 5. Muy mala ()

37. ¿Cómo evalúa las aulas para talleres de trabajo y capacitación del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

38. ¿Cómo evalúa la instalaciones médicas del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

39. ¿Cómo evalúa la instalaciones para la atención psicológica del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

40. ¿Cómo evalúa los espacios para visita conyugal del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenos () | 3. Regulares () | 4. Malos () | 5. Muy malos ()

41. ¿Cómo evalúa áreas de visita familiar del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

42. En caso de haberla utilizado, ¿cómo evalúa las instalaciones de la clínica de adicciones del CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

43. ¿En que emplea la mayor parte de su tiempo durante el día? *(Puede contestar varias opciones)*

1. Dormir () | 2. Trabajar () | 3. Caminar () | 4. Estudiar () | 5. Labores de limpieza () | 6. Ver televisión () | 7. Artesanías () | 8. Leer () | 9. No sabe ()

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CERESO APODACA

Por favor seleccione cuáles de los siguientes servicios que se ofrecen dentro del CERESO Apodaca ha tenido la oportunidad de utilizar. En caso afirmativo, mencione aproximadamente cuántas veces los ha utilizado.

44. ¿Ha acudido a Trabajo social?

1. No () | 2. Sí () | 44.1. ¿Cuántas veces?: ()

44.2. ¿Por qué razón(es)?

45. ¿Ha acudido con el psicólogo?

1. No () | 2. Sí () | 45.1. ¿Cuántas veces?: ()

45.2. ¿Por qué razón(es)?

46. ¿Ha acudido a servicios médicos?

1. No () | 2. Sí () | 46.1. ¿Cuántas veces?: ()

46.2. ¿Por qué razón(es)?

47. ¿Ha acudido a servicios educativos?

1. No () | 2. Sí () | 47.1. ¿Cuántas veces?: ()

47.2. ¿Por qué razón(es)?

48. ¿Ha acudido a servicios de capacitación laboral?

1. No () | 2. Sí () | 48.1. ¿Cuántas veces?: ()

48.2. ¿Por qué razón(es)?

Conteste las siguientes preguntas según su opinión. En caso de no haber utilizado el servicio, por favor deje en blanco la pregunta.

49. ¿Cómo evalúa los alimentos que le dan en el CERESO Apodaca?

1. Excelentes () | 2. Buenos () | 3. Regulares () | 4. Malos () | 5. Muy malos ()

50. ¿Cómo evalúa la dieta alimenticia del CERESO Apodaca?

1. Excelente () | 2. Buena () | 3. Regular () | 4. Mala () | 5. Muy mala ()

- 51. ¿Se siente usted seguro de estar dentro del CERESO Apodaca?**
1. Sí se siente seguro () | 2. No se siente seguro () |
- 52. ¿Cómo evalúa el trato de los guardias o custodios que trabajan en el CERESO Apodaca?**
1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()
- 53. Tras los hechos violentos del 2012, ¿cómo percibe usted la seguridad del CERESO Apodaca?**
1. Mejor () | 2. Igual () | 3. Peor () | 4. No aplica () |
- 54. ¿Cómo evalúa la atención del personal administrativo que trabaja en el CERESO Apodaca?**
1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()
- 55. ¿Cómo evalúa la atención y acceso al diálogo de las autoridades (alcalde, subdirector, etc) que trabajan en el CERESO Apodaca?**
1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()
- 56. ¿Cómo evalúa la revisión de celdas por parte del personal del CERESO Apodaca?**
1. De acuerdo con lo que dice la ley () | 2. Con educación y respeto () | 3. Con indiferencia () | 4. Con agresividad y descortesía () | 5. Sin respeto para las personas y sus pertenencias () |
- 57. ¿Cómo evalúa la atención y servicio del personal médico que trabaja en el CERESO Apodaca?**
1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()
- 58. ¿Cómo evalúa la atención psicológica que se brinda dentro del CERESO Apodaca?**
1. Excelente () | 2. Buena () | 3. Regular () | 4. Mala () | 5. Muy mala ()
- 59. ¿Cómo evalúa el curso de meditación que se brinda dentro del CERESO Apodaca?**
1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()
- 60. ¿Cuál es la confianza que tienen en las autoridades penitenciarias del CERESO Apodaca?**
1. Mucha confianza () | 2. Algo de confianza () | 3. Nada de confianza () |
- 61. ¿Cuál es la confianza que tiene en el director del CERESO Apodaca?**
1. Mucha confianza () | 2. Algo de confianza () | 3. Nada de confianza () |
- 62. ¿Cuál es la confianza que tiene en el subdirector de reinserción social del CERESO Apodaca?**
1. Mucha confianza () | 2. Algo de confianza () | 3. Nada de confianza () |
- 63. ¿Cuál es la confianza que tiene en los guardias de seguridad del CERESO Apodaca?**
1. Mucha confianza () | 2. Algo de confianza () | 3. Nada de confianza () |
- CONDICIONES DE ESTANCIA EN EL CENTRO PENITENCIARIO**
Por favor, conteste las siguientes preguntas respecto a la forma en las que viven y opera el CERESO Apodaca.
- 64. ¿Cuenta con el apoyo de un abogado? *(En caso negativo, pase a la pregunta 66)***
1. Sí cuenta con apoyo () | 2. No cuenta con apoyo () |
- 65. En caso afirmativo, ¿Su abogado es...?**
1. De oficio () | 2. Privado () |
- 66. Al ingresar al CERESO Apodaca, ¿Le son entregados por escrito cuáles son los procesos de las diversas comisiones que están dentro del penal?**
1. Sí son entregados () | 2. No son entregados () |
- 67. A su ingreso al CERESO Apodaca, ¿Se le explican las normas y reglamentos operantes dentro del centro?**
1. Sí se explican () | 2. No se explican () |
- 68. ¿Existen códigos internos de jerarquía dentro del centro penitenciario?**
1. Sí se explican () | 2. No se explican () |
- 69. ¿De qué forma se relaciona con los guardias?**
1. Muy bien () | 2. Bien () | 3. Regular () | 4. Mal () | 5. Muy mal () |
- 70. ¿Ha recibido castigos a lo largo de su estancia? *(En caso negativo, pase a la pregunta 72)***
1. Sí a recibido castigos () | 2. No ha recibido castigos () |
- 71. En caso afirmativo, ¿en qué consistió el castigo?**
1. Agresiones o maltrato verbal () | 2. Agresiones o maltrato físico () | 3. Aplazar llamadas familiares () | 4. Aplazar visitas familiares () | 5. Aislamiento o confinamiento () | 6. Suspensión de actividades () | 7. Suspensión de giros económicos () | 8. Suspensión de permisos para comprar en la tienda () | 9. Otro () |

72. ¿Conoce la existencia de celdas de confinamiento o aislamiento? *(En caso negativo, pase a la pregunta 75)*
1. Si conoce () | 2. No conoce ()

73. En caso afirmativo, ¿ha estado alguna vez en una de éstas?
1. Si ha estado () | 2. No ha estado ()

74. ¿Sufrió algún tipo de maltrato durante su estadía en las celdas especiales?
1. Si sufrió maltrato () | 2. No sufrió maltrato ()

75. ¿Ha sufrido algún robo dentro del CERESO Apodaca?
1. Si ha sufrido robos () | 2. No ha sufrido robos ()

TRABAJO SOCIAL

76. Cuando la trabajadora social lo entrevistó o tuvo una plática con usted, ¿le preguntó sobre su situación familiar?
1. Si le preguntó () | 2. No le preguntó ()

77. Cuando la trabajadora social lo entrevistó o tuvo una plática con usted, ¿le informó sobre la manera en que su familia puede venir a visitarlo?
1. Si le informó () | 2. No le informó ()

78. ¿Su familia reside fuera del área metropolitana de Monterrey?
1. Si reside fuera () | 2. No reside fuera ()

79. ¿Ha solicitado apoyo al departamento de Trabajo Social?
1. Si ha solicitado () | 2. No ha solicitado ()

80. ¿El departamento de Trabajo Social ha promovido apoyo económico a organizaciones sociales para que su familia lo visite?
1. Si lo ha promovido () | 2. No lo ha promovido ()

81. A partir de su internamiento, ¿su familia se vio afectada en sus condiciones económicas? *(En caso negativo, pase a la pregunta 83)*
1. Si se vio afectada () | 2. No se vio afectada ()

82. ¿Cuál es la razón o razones por las cuales su familia se ha visto afectada económicamente?

83. A partir de su internamiento, ¿su familia vio afectadas las relaciones como núcleos? *(En caso negativo, pase a la pregunta 85)*
1. Si se vieron afectadas () | 2. No se vieron afectadas ()

84. ¿De qué manera se han visto afectadas las relaciones en su familia?
1. Conflictos en la familia () | 2. Desintegración familiar () |
3. Deserción escolar de alguno de sus miembros () |
4. Pérdida de empleo de alguno de sus miembros () |
5. Carencias económicas ()

85. A partir de su internamiento, ¿su familia se vio afectada en sus relaciones sociales? *(En caso negativo, pase a la pregunta 87)*
1. Si se vieron afectadas () | 2. No se vieron afectadas ()

86. ¿De qué manera se vio afectada su familia en sus relaciones sociales?
1. Pérdida de relaciones o vínculos con los vecinos () |
2. Pérdida de amigos () | 3. Críticas sociales () |
4. Acoso para su pareja, hijos o familia ()

87. ¿Durante su internamiento ha estado usted hospitalizado fuera de este centro? *(En caso negativo, pase a la pregunta 91)*
1. Si ha estado hospitalizado () | 2. No ha estado hospitalizado ()

88. En caso afirmativo, ¿fue notificada su familia?
1. Si fue notificada () | 2. No fue notificada ()

89. ¿Se le informó a su familia sobre su situación médica?
1. Si se le informó () | 2. No se le informó ()

90. ¿Los orientaron en cuanto a la posibilidad de ser visitado en el hospital?
1. Si se les orientó () | 2. No se les orientó ()

91. ¿Ha solicitado apoyo u orientación sobre algún cuestionamiento al departamento de trabajo social (asesoría sobre visita familiar o conyugal, ingreso de artículos, entre otros)? *(En caso negativo, pase a la pregunta 94)*
1. Si lo ha solicitado () | 2. No lo ha solicitado ()

92. ¿Con qué frecuencia mensual acude a pedir apoyo u orientación al departamento de trabajo social?
1 vez () | 2 veces () | 3 veces () | 4 veces () | 5 veces o más ()

93. ¿Por qué asunto o asuntos ha pedido apoyo u orientación al departamento de trabajo social?

94. El departamento de Trabajo Social, ¿lo ha invitado a iniciar o continuar con sus estudios de primaria o secundaria?

1. Si lo considera () | 2. No lo considera () |

95. El departamento de Trabajo Social, ¿lo ha invitado a integrarse a los programas de salud como son el de medicina preventiva?

1. Si lo considera () | 2. No lo considera () |

96. El departamento de Trabajo Social, ¿lo ha invitado participar en los programas de cultura de este centro, como es la música o la pintura, entre otras?

1. Si lo ha invitado () | 2. No lo ha invitado () |

97. El departamento de Trabajo Social, ¿lo ha invitado a participar en los programas deportivos de este centro?

1. Si lo ha invitado () | 2. No lo ha invitado () |

98. El departamento de Trabajo Social, ¿lo ha invitado ingresar a los programas laborales de este centro?

1. Si lo ha invitado () | 2. No lo ha invitado () |

99. Al ingresar a cualquiera de los programas anteriormente mencionados, ¿Trabajo Social ha estado pendiente de su participación o de la razón del abandono de los mismos?

1. Si ha estado pendiente () | 2. No ha estado pendiente () |

DE LA CONVIVENCIA ENTRE LOS INTERNOS

100. ¿De qué forma son sus relaciones internas (consigo mismo)?

1. Excelentes () | 2. Buenas () | 3. Regulares () | 4. Malas () | 5. Muy malas ()

101. ¿Cómo se lleva con otros internos?

1. Muy bien () | 2. Bien () | 3. Regular () | 4. Mal () | 5. Muy mal ()

102. ¿Se ha dado cuenta si existen peleas entre sus compañeros internos?

1. Si existen () | 2. No existen ()

103. ¿Ha conocido casos de maltrato físico entre internos dentro del centro penitenciarios?

1. Si ha conocido () | 2. No ha conocido ()

104. ¿Ha conocido casos de maltrato psicológico (humillaciones, agresiones verbales) entre internos en el centro penitenciario?

1. Si ha conocido () | 2. No ha conocido ()

105. ¿Ha conocido casos de abuso sexual entre internos dentro del centro penitenciario?

1. Si ha conocido () | 2. No ha conocido ()

106. ¿Ha conocido casos de maltrato físico entre un interno y un funcionario dentro del centro penitenciario?

1. Si ha conocido () | 2. No ha conocido ()

107. ¿Ha conocido casos de maltrato psicológico entre un interno y un funcionario dentro del centro penitenciario?

1. Si ha conocido () | 2. No ha conocido ()

108. ¿Ha conocido casos de abuso sexual entre un interno y un funcionario dentro del centro penitenciario?

1. Si ha conocido () | 2. No ha conocido ()

109. ¿Qué sugerencias haría para mejorar las condiciones de vida de esta institución penitenciaria?

DE LA VISITA CONYUGAL

110. ¿Los permisos para acceder a visita conyugal son ágiles?

1. Si son ágiles () | 2. No son ágiles ()

111. Durante la visita conyugal, ¿el trato es cordial y respetuoso por parte del personal penitenciario?

1. Si es cordial y respetuoso () | 2. No es cordial y respetuoso ()

112. ¿Las instalaciones para la visita conyugal son limpias?

1. Si son limpias () | 2. No son limpias ()

113. Durante la visita conyugal, ¿el ambiente es adecuado para visitantes e internos?

1. Si es adecuado () | 2. No es adecuado ()

VISITA FAMILIAR

114. Durante la visita familiar, ¿el trato es cordial y respetuoso por parte del personal penitenciario?

1. Si es cordial y respetuoso () | 2. No es cordial y respetuoso ()

115. ¿Las instalaciones destinadas para visita familiar son limpias?

1. Si son limpias () | 2. No son limpias ()

116. Para la visita familiar, ¿el ambiente es adecuado para visitantes e internos?

1. Si es adecuado () | 2. No es adecuado ()

DEL SERVICIO MÉDICO Y DE SALUD

Por favor, conteste las siguientes preguntas en las que se le solicita su opinión respecto a los servicios médicos y de salud del CERESO Apodaca.

117. En general, ¿cómo califica el servicio médico del CERESO Apodaca?

1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()

118. ¿La atención médica brindada por el personal médico es correcta y amable?

1. Si es correcta y amable () | 2. No es correcta y amable ()

119. En su opinión, ¿cómo evalúa la atención de los médicos y enfermeros del CERESO Apodaca?

1. Excelente () | 2. Bueno () | 3. Regular () | 4. Malo () | 5. Muy malo ()

120. ¿Considera que el personal médico y de enfermería que labora dentro del CERESO Apodaca es suficiente para la atención de los internos?

1. Si es suficiente () | 2. No es suficiente ()

121. Cuando asiste a una consulta, ¿el médico le da toda la información necesaria respecto a su enfermedad?

1. Si brinda información () | 2. No brinda información ()

122. ¿El tiempo dedicado por el médico en su consulta ha sido suficiente?

1. Si es suficiente () | 2. No es suficiente ()

123. ¿Cuánto tiempo dura su consulta?

1. Menos de 30 minutos () | 2. De 30 a 45 minutos () | 3. 45 minutos o más ()

124. Cuando ha acudido al centro médico, ¿existe disponibilidad de horario para atender su problemática?

1. Si existe () | 2. No existe ()

125. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo de espera para recibir una consulta con los médicos del CERESO Apodaca?

1. Menos de 15 minutos () | 2. De 15 a 30 minutos () | 3. De 30 a 45 minutos () | 4. Más de 45 minutos

126. Una vez que cuenta con su receta, ¿la farmacia del CERESO Apodaca cuenta con los medicamentos necesarios para usted? *(En caso afirmativo, pase a la pregunta 128)*

1. Si cuenta con ellos () | 2. No cuenta con ellos ()

127. En caso de no contar con ellos, ¿quién le lleva los medicamentos necesarios?

1. Nadie/no se los llevan () | 2. Su familia (esposa o hijos) () | 3. Sus padres () | 4. Otros familiares () | 5. Otras personas ()

128. ¿Ha estado internado dentro del ambulatorio del CERESO Apodaca? *(En caso negativo pase a la pregunta 130)*

1. Si ha estado internado () | 2. No ha estado internado ()

129. En caso afirmativo, ¿se ha sentido seguro en la zona ambulatoria del CERESO Apodaca?

1. Si se ha sentido seguro () | 2. No se ha sentido seguro ()

130. En caso de emergencia, ¿el personal médico del CERESO Apodaca actúa rápidamente?

1. Si actúa rápidamente () | 2. No actúa rápidamente ()

131. ¿Padece usted alguna discapacidad permanente que requiera equipamiento especial (silla de ruedas, muletas, etc.)? *(En caso negativo pase a la pregunta 134)*

1. Si la padece () | 2. No la padece ()

132. En caso afirmativo, ¿el centro penitenciario cuenta con el equipamiento especial para su discapacidad? *(En caso positivo, pase a la pregunta 134)*

1. Si cuenta con el () | 2. No cuenta con el ()

- 133. En caso negativo, ¿quién le brinda apoyo para conseguir el equipamiento especial para su enfermedad o discapacidad?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 144)*
 1. Su familia (esposa o hijos) () | 2. Sus padres () | 3. Otros familiares ()
 4. Otras personas ()
- 134. ¿Padece usted alguna enfermedad crónica – degenerativa (diabetes, hipertensión, entre otras)?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 139)*
 1. Si padece () | 2. No padece ()
- 135. En caso afirmativo, ¿qué enfermedad crónica – degenerativa padece?**
 1. Diabetes () | 2. Hipertensión () | 3. Cáncer () | 4. Osteoporosis () |
 5. Cardiovasculares () | 6. Otra enfermedad ()
- 136. ¿Recibe del departamento médico del CERESO Apodaca el medicamento necesario para su atención?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 137)*
 1. Si lo recibe () | 2. No lo recibe ()
- 137. En caso negativo, ¿quién le da el medicamento necesario para su atención?**
 1. Su familia (esposa o hijos) () | 2. Sus padres () | 3. Otros familiares ()
 4. Otras personas ()
- 138. Esta enfermedad, ¿se presentó desde antes o después de haber ingresado al CERESO Apodaca?**
 1. Desde antes de ingresar () | 2. Después de ingresar ()
- 139. El departamento médico del centro penitenciario, ¿mantiene vigilancia sobre su estado de salud?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 141)*
 1. Si mantiene vigilancia () | 2. No mantiene vigilancia ()
- 140. Durante el año, ¿cuántas veces es revisado su estado de salud?**
- 141. A su ingreso, ¿el personal médico realizó una evaluación de su estado físico y de salud?**
 1. Si la realizó () | 2. No la realizó ()
- 142. ¿Ha tenido que recibir atención médica de urgencias?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 144)*
 1. Si recibió atención () | 2. No recibió atención ()
- 143. En caso afirmativo, ¿Cuál fue el motivo?**
- 144. Cuando se presenta una enfermedad, lesión o accidente, ¿ha tenido que ser trasladado a otras instalaciones de salud?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 148)*
 1. Si lo han trasladado () | 2. No lo han trasladado ()
- 145. En caso afirmativo, ¿cuál fue la enfermedad, lesión o accidente por el que debió ser trasladado?**
- 146. ¿A qué institución fue trasladado?**
- 147. Una vez trasladado, ¿el médico le informó a su familia respecto a su estado de salud?**
 1. Si le han informado () | 2. No le han informado ()
- 148. ¿Requiere algún tipo de medicamento controlado?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 152)*
 1. Si lo requiere () | 2. No lo requiere ()
- 149. En caso afirmativo, ¿cuál medicamento controlado requiere?**
- 150. ¿Cuál es la enfermedad que se trata con este medicamento?**
- 151. Este medicamento, ¿quién se lo administra?**
- 152. Dentro del centro penitenciario, ¿ha recibido usted algún tipo de apoyo para planificación familiar?** *(En caso negativo, pase a la pregunta 154)*
 1. Si la recibe () | 2. No la recibe ()
- 153. En caso afirmativo, ¿Cuál es el tipo de apoyo que recibe?**
 1. Pláticas por parte del personal médico () | 2. Asesoría de COESIDA () |
 3. Apoyo de ONG's () | 4. Entrega de anticonceptivos () |
 5. Otro tipo de apoyo ()

CLÍNICA DE ADICCIONES

154. ¿Padece usted alguna adicción? *(En caso negativo, pase a la pregunta 177)*

1. Si la padece () 2. No la padece ()

155. ¿Está adicción usted la tenía antes ingresar al CERESO Apodaca o la adquirió dentro del mismo?

1. Antes de ingresar () 2. Dentro del CERESO ()

156. En caso afirmativo, ¿cuál es la adicción que usted padece?

1. Cigarros/tabaco () 2. Alcohol () 3. Marihuana () 4. Solventes ()
5. Cocaína () 6. Psicotrópicos () 7. Otras drogas ()

157. ¿A qué edad comenzó su adicción?

1. Menos de 15 años () 2. De 15 a 25 años () 3. De 26 a 34 años
4. De 35 años o más ()

158. Antes de su internamiento, ¿tuvo usted acceso a algún programa preventivo contra las adicciones? *(En caso negativo, pase a la pregunta 159)*

1. Si tuvo acceso () 2. No tuvo acceso

159. En caso afirmativo, ¿a cuál programa preventivo contra las adicciones tuvo acceso?

160. ¿Ha tratado su adicción anteriormente? *(En caso negativo, pase a la pregunta 160)*

1. Si lo ha tratado () 2. No lo ha tratado ()

161. ¿Hace cuánto trato su adicción?

162. Dentro del penal, ¿ha estado internado en la clínica contra las adicciones? *(En caso negativo, pase a la pregunta 171)*

1. Si ha estado internado () 2. No ha estado internado ()

163. ¿En cuántas ocasiones ha estado internado?

164. De ser afirmativa su respuesta, ¿el internamiento fue de forma voluntaria u obligada?

1. Fue voluntaria () 2. Fue obligada ()

165. ¿Cuánto tiempo duró el internamiento?

166. Durante el tratamiento, ¿recibe o recibió terapias por parte de los psicólogos de la clínica? *(En caso negativo, pase a la pregunta 158)*

1. Si recibe terapias () 2. No recibe terapias ()

167. En caso afirmativo, ¿cuántas veces a la semana recibe terapia?

168. ¿De qué forma son estas terapias?

1. Individual () 2. Grupal () 3. Familiar ()

169. ¿Ha tenido algún costo el tratamiento en la clínica? *(En caso negativo, pase a la pregunta 169)*

1. Si ha tenido costo () 2. No ha tenido costo ()

170. En caso afirmativo, ¿cuál ha sido el costo que ha tenido?

171. Además del personal de la clínica, ¿ha recibido alguna otra atención dentro del penal para tratar su adicción? *(En caso negativo, pase a la pregunta 171)*

1. Si la ha recibido () 2. No la ha recibido ()

172. En caso afirmativo, ¿de quién o quiénes ha recibido atención?

173. ¿Sabe usted si en el penal existen sustancias adictivas como tabaco, alcohol, marihuana, cocaína u otros? *(En caso negativo, pase a la pregunta 173)*

1. Si sabe () 2. No sabe ()

174. En caso afirmativo, ¿cuáles sustancias adictivas existen en el penal?

1. Tabaco () 2. Alcohol () 3. Marihuana () 4. Cocaína ()
5. Psicotrópicos () 6. Otros ()

175. ¿Ha estado internado en la clínica buscando ser beneficiado por el juez que lleva su expediente?

1. Si ha buscado beneficio () 2. No ha buscado beneficio ()

176. ¿De qué manera cree usted que su rehabilitación lo ayuda a usted y a su familia?

SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA

177. Cuando ingresó al CERESO Apodaca, ¿fue entrevistado por el psicólogo o psicóloga? *(En caso negativo, pase a la pregunta 179)*

1. Sí fue entrevistado () 2. No fue entrevistado ()

178. En caso afirmativo, ¿qué tipo de información o servicio le proporcionaron?

179. ¿Ha solicitado el apoyo del Departamento de Psicología durante su estancia en el CERESO de Apodaca? *(En caso negativo, pase a la pregunta 181)*

1. Sí lo ha solicitado () 2. No lo ha solicitado ()

180. En caso afirmativo, ¿le dieron la atención requerida?

1. Sí le dieron atención () 2. No fue le dieron atención ()

181. Si ha utilizado los servicios del área de Psicología, ¿cuál fue el tipo del problema que lo llevó a solicitar apoyo de este departamento?

182. ¿Cuánto duró su última consulta?

183. Si ha utilizado los servicios del área de Psicología, ¿le ha ayudado a sentirse mejor?

1. Sí le ha ayudado () 2. No le ha ayudado ()

184. De los siguientes servicios, ¿a cuáles ha acudido?:

1. Talleres de crecimiento personal ()
2. Aplicación de pruebas psicológicas ()
3. Terapia individual ()
4. Terapia grupal ()
5. Apoyo emocional en diferentes situaciones ()
6. Otro () Especifique: _____

185. Cuando utilizó alguno de estos servicios, ¿cuáles cambios ha notado en su estado de ánimo?

1. Me siento más tranquilo o relajado ()
2. Puedo afrontar los problemas cotidianos de una mejor manera ()
3. Soy menos agresivo ()
4. Tomo mejores decisiones ()
5. Mejores relaciones con compañeros internos ()
6. Mejores relaciones con su familia ()
7. Mejores relaciones con las autoridades del CERESO ()
8. Otro () Especifique: _____

186. En general, ¿cómo califica el servicio que le brindó el Departamento de Psicología?

1. Excelente () 2. Bueno () 3. Regular () 4. Malo () 5. Muy malo ()

187. Si no ha utilizado los servicios de psicología, ¿por qué no lo ha hecho?

1. Tengo que trabajar en lugar de acudir a este departamento ()
2. No le veo utilidad ()
3. Es una pérdida de tiempo ()
4. No existe personal suficiente ()
5. No me gustan las opciones que existen ()
6. Otra: _____

ESPIRITUALIDAD

188. ¿Práctica usted alguna religión? *(En caso negativo, pase a la pregunta 194)*

1. Sí practica alguna religión () 2. No practica alguna religión ()

189. En caso afirmativo, ¿cuál es la religión que profesa?

1. Católica () 2. Metodista () 3. Adventista () 4. Bautista ()
5. Cristiana () 6. Otra () Cuál: _____

190. ¿Con qué frecuencia tiene contacto con su líder religioso (pastor, sacerdote)?

1. Una vez a la semana () 2. Una vez a la quincena ()
3. Una vez al mes () 4. Otra () ¿Cada cuándo?: _____.

191. ¿Su práctica religiosa le ha ayudado a sentirse mejor con usted mismo?

1. Sí le ha ayudado () 2. No le ha ayudado ()

192. ¿Su práctica religiosa le ha ayudado a tener una mejor relación con sus familiares?

1. Sí le ha ayudado () 2. No le ha ayudado ()

193. ¿Su práctica religiosa le ha ayudado a tener una mejor relación con otros internos?

1. Sí le ha ayudado () 2. No le ha ayudado ()

CURSO DE MEDITACIÓN

194. ¿Ha participado el curso de meditación que se ofrece en el CERESO Apodaca? *(En caso negativo, pase a la pregunta 204)*

1. Sí lo he tomado () 2. No lo he tomado ()
3. No sabía que existe un curso de meditación ()

195. ¿Cómo se enteró de que existe un curso de meditación en el CERESO?

1. Me lo recomendó otro interno () 2. Vi un cartel, aviso ()
3. Me enviaron del departamento de Psicología ()
4. Me lo dieron en la clínica de rehabilitación () 5. Otro ()

196. Si ya participó en el curso, ¿en qué circunstancia fue?

1. Me enviaron como parte de mi proceso de reinserción ()
2. Me obligaron a ir () 3. Lo dieron en la clínica de rehabilitación ()
4. Yo lo busqué por mi cuenta ()

197. Si ya ha participado, ¿aprendió las técnicas de meditación Ishayas y las recuerda?

1. Si las aprendí pero no las practico () 2. No aprendí y no las practico ()
3. Si las aprendí y frecuentemente las practico ()

198. ¿Recomendaría el curso de meditación a otros internos?

1. Sí lo recomiendo () 2. No lo recomiendo ()

199. Señale el aspecto que más se relacione con su experiencia en el curso de meditación.

1. Me ayudó a relajarme () 2. Me ayudó a sentir paz ()
3. Me ayudó a enfocarme en otras cosas además de mis problemas ()
4. Me ayudó por un tiempo, después ya no ()
5. No me ayudó en nada ()

200. Si conoce las técnicas de meditación Ishayas, ¿Con qué frecuencia las practica?

1. Siempre () 2. A veces () 3. Casi nunca () 4. Nunca ()

201. ¿Cuándo considera que es una buena opción para meditar?

1. Cuando me siento estresado () 2. Cuando me siento cansado ()
3. Cuando me siento molesto () 4. Cuando me siento triste ()
5. Cuando estoy sereno o relajado ()

202. Seleccione lo qué para usted significa meditar-ascender.

1. Estar en paz () 2. Estar tranquilo () 3. Estar feliz ()
4. No significa nada de lo anterior () 5. Otro ()

203. ¿Practicar las técnicas le ayudó a sentirse mejor?

1. Sí me ayudó practicar las técnicas para no sentir ansiedad ()
2. Sí me ayudó practicar las técnicas para poder dormir ()
3. Sí me ayudó practicar las técnicas para estar atento a las demás actividades ()
4. No me ayudó practicar las técnicas ()

SERVICIOS EDUCATIVOS

204. ¿Qué curso de capacitación te gustaría que existieran dentro del CERESO Apodaca para desarrollar un buen trabajo dentro y fuera del penal?

205. ¿Cuál era su grado educativo a su llegada al CERESO Apodaca?

1. Primaria sin terminar () 2. Primaria terminada ()
3. Secundaria sin terminar () 4. Secundaria terminada ()
5. Preparatoria sin terminar () 6. Preparatoria terminada ()
7. Estudios técnicos sin terminar () 8. Estudios técnicos terminados ()
9. Estudios superiores sin terminar () 10. Estudios superiores terminados ()
11. Posgrado sin terminar () 12. Posgrado terminado ()

206. p1p206 *(En caso negativo pase a la pregunta 208)*

1. Si los ha utilizado () 2. No los ha utilizado ()

207. De los siguientes servicios educativos ofrecidos por el CERESO Apodaca, ¿Cuál(es) ha utilizado?

1. Primaria () 2. Secundaria () 3. Preparatoria () 4. Universitarios ()

208. ¿Usted ha abandonado sus estudios dentro del CERESO Apodaca una vez iniciados? *(En caso negativo pase a la pregunta 210)*

1. Si ha abandonado () 2. No ha abandonado ()

209. En caso afirmativo, ¿cuál fue el motivo del abandono?

210. ¿Cuál es el total de horas por semana que usted dedica en actividades educativas?

1. Menos de 3 horas () 2. De 3 a 6 horas () 3. De 6 a 9 horas ()
4. De 9 a 12 horas () 5. De 12 a 15 horas ()

211. En su situación escolar, ¿considera que ha tenido algún avance dentro de CERESO Apodaca? *(En caso negativo pase a la pregunta 213)*

1. Si ha avanzado () 2. No ha avanzado ()

212. ¿En cuál de los siguientes grados educativos considera haber avanzado?

1. Primaria () 2. Secundaria () 3. Preparatoria () 4. Universitarios ()

213. ¿Considera que el apoyo de maestros y de material escolar recibido por la institución es suficiente para su desarrollo educativo?

1. Si es suficiente () 2. No es suficiente ()

214. De los estudios que usted realizó dentro del CERESO Apodaca, ¿recibió un certificado, diploma o reconocimiento? *(En caso negativo, pase a la pregunta 216)*

1. Si lo recibió () 2. No lo recibió ()

215. En caso afirmativo, ¿en cuál de los siguientes estudios realizados dentro del penal ha recibido usted un certificado escolar?

1. Primaria () 2. Secundaria () 3. Preparatoria () 4. Universitarios ()

216. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con los estudios realizados en el CERESO Apodaca?

1. Alto () 2. Medio () 3. Bajo ()

217. De los siguientes contenidos de educación, califique con 3 la más importante para su desarrollo educativo; con 2 la moderadamente importante y 1 la menos importante.

1. Redacción () 2. Conocimientos técnicos profesionales ()
3. Habilidades en comunicación () 4. Capacitación para la administración ()
5. Oficios ()

218. En el CERESO Apodaca, ¿tiene acceso al uso de medios de comunicación?

1. Si tiene acceso () 2. No tiene acceso ()

219. ¿Cómo te enteras de las noticias del exterior?

1. Por el periódico () 2. Por la radio () 3. Por televisión ()
4. En visitas familiares () 5. En visitas conyugales ()
6. En los pasillos () 7. Por las autoridades del CERESO ()

CULTURA Y DEPORTE

220. ¿Le gusta leer? *(En caso negativo pase a la pregunta 224)*

1. Si le gusta () 2. No le gusta ()

221. ¿Qué medios de lectura prefieres?

1. Periódicos () 2. Revistas () 3. Libros ()

222. ¿En la lectura de libros o revistas cuales temas son los que más te gusta leer?

1. Libros de superación personal () 2. Novelas de ciencia ficción ()
3. Biografías () 4. Temas de política () 5. Temas sobre viajes ()
6. Temas que complementen tus estudios ()

223. Dentro de esta institución, ¿ha participado en alguna actividad artística? *(En caso negativo pase a la pregunta 226)*

1. Si ha participado () 2. No ha participado ()

224. En educación artística, ¿en cuál de las actividades artísticas siguientes ha participado o participa actualmente?

1. Pintura () 2. Literatura () 3. Teatro () 4. Danza ()
5. Música () 6. Tallado en madera ()

225. Su participación en la educación artística, ¿se ha visto representada en alguno de estos eventos?

1. Participación en obras de teatro ()
2. Creación de escritos literarios ()
3. Exposición de pintura ()
4. Presentaciones de danza ()
5. Presentación de piezas musicales ()

226. Al obtener su libertad, ¿cuál de los siguientes cursos considera usted complementarían su formación y le ayudarían a encontrar trabajo?

1. Computación ()
2. Cocina ()
3. Serigrafía ()
4. Panadería ()
5. Carpintería ()
6. Mecánica automotriz ()
7. Electricidad ()
8. Manejo montacargas ()

227. ¿Practica usted ajedrez? *(En caso negativo pase a la pregunta 229)*

1. Sí practica ajedrez ()
2. No practica ajedrez ()

228. ¿Ha participado usted en algún torneo de ajedrez?

1. Sí ha participado ()
2. No ha participado ()

229. De los siguientes deportes, ¿en cuál(es) participa o ha participado?

1. Fútbol ()
2. Beisbol ()
3. Vólibol ()
4. Box ()
5. Caminata ()
6. Trote ()
7. Carreras de relevo ()
8. Carreras de obstáculos ()

ÁMBITO LABORAL

230. Cuando usted ingresó al CERESO Apodaca, ¿solicitó participar en tareas de trabajo ofertadas por las diversas empresas dentro del penal? *(En caso negativo, pase a la pregunta 233)*

1. Sí lo solicitó ()
2. No lo solicitó ()

231. Si su respuesta es afirmativa nos podría decir, ¿le dieron trabajo dentro de las maquiladoras instaladas en el penal? *(En caso negativo, pase a la pregunta 233)*

1. Sí le dieron trabajo ()
2. No le dieron trabajo ()

232. En caso afirmativo a la respuesta anterior, al trabajar dentro de las maquiladoras del penal ¿le dieron un curso de capacitación?

1. Si tuvo capacitación ()
2. No tuvo capacitación ()

233. Si su respuesta es negativa y no lo ocuparon dentro de los talleres que operan en el penal de Apodaca, ¿en qué trabaja en este momento?

1. Elaboración de comida ()
2. Artesanías y manualidades ()
3. Canastero ()
4. Limpieza ()
5. Otras actividades ()

Especifique: _____.

234. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando dentro del penal?

1. Menos de un año ()
2. De 1 a 5 años ()
3. De 5 a 10 años ()
4. Más de 10 años ()

235. ¿Cómo considera su ambiente de trabajo?

1. Excelente ()
2. Bueno ()
3. Regular ()
4. Malo ()

236. ¿A cuánto asciende su ingreso laboral por semana?

1. Menos de \$300 pesos ()
2. Entre \$300 y \$600 pesos ()
3. De \$600 a \$900 pesos ()
4. De \$900 a \$1,200 pesos ()
5. Más de \$1,200 pesos ()

237. En el empleo que desempeña dentro del centro penitenciario, ¿trabaja usted horas extra? *(En caso negativo, pase a la pregunta 239)*

1. Sí trabaja horas extra ()
2. No trabaja horas extra ()

238. Si usted llega a trabajar horas extras dentro del desempeño de su trabajo, ¿a cuánto asciende la hora extra trabajada?

1. Menos de \$50 pesos ()
2. De \$50 a \$100 pesos ()
3. Más de \$100 pesos ()

239. El trabajo realizado por usted le resulta:

1. Muy satisfactorio ()
2. Satisfactorio ()
3. Algo satisfactorio ()
4. Poco insatisfactorio ()
5. Muy insatisfactorio

240. De entre las siguientes respuestas, ¿cuáles son sus motivos para trabajar dentro del centro penitenciario?

1. Para solventar mis gastos personales ()
2. Para mantenerme ocupado y no estar sin hacer nada ()
3. Para ayudar a mi familia con el gasto ()
4. Para prepararme y encontrar trabajo cuando concluya mi condena ()
5. Para evitar malas compañías ()
6. Para ahorrar ()
7. Para conseguir el dinero necesario y obtener mi libertad más rápido ()

241. De las personas que han decidido no trabajar en ninguna actividad dentro del penal, ¿usted piensa que puede ser por?

1. Porque tienen dinero () 2. Los salarios no son buenos ()
3. Los salarios son excesivamente bajos () 4. No les gusta trabajar ()
5. No tienen experiencia en el trabajo () 6. Están enfermos ()
7. Son ancianos () 8. No sabe por qué ()

242. El trabajo que usted desarrolla dentro del penal le sirve, según su opinión para:

1. Capacitarme y aprender algo útil para mi futuro ()
2. Para pasar el tiempo de una forma productiva ()
3. Para manejarme con hábitos y horarios donde se organiza mi día ()
4. Para hacerme respetar dentro del CERESO ()
5. Porque me ayuda como elemento de buena conducta ()
6. Para hacer amigos o compañeros ()

243. Desde su óptica, el trabajo que desempeña dentro del penal a usted le exige:

1. Mucha atención () 2. Algo de atención () 3. Poca atención ()

244. Desde su opinión, el trabajo que desempeña dentro del penal a usted le resulta:

1. Interesante () 2. Importante () 3. Rutinario () 4. Monótono ()
5. Poco importante ()

245. Por favor, señale una o más de las siguientes opciones si usted considera que el trabajo desarrollado por usted mejora sus relaciones con:

1. Su familia () 2. Su pareja sentimental o esposa ()
3. Con sus compañeros de trabajo () 4. Con otros internos ()
5. Con los funcionarios del penal ()

246. ¿Cómo gasta el dinero ganado por su trabajo?

1. En mis gastos personales () 2. En pago de abogados ()
3. Apoyo a los gastos familiares () 4. Ahorro ()
5. Otros () Especifique: _____

247. Desde su opinión, el trabajo que ahora desempeña dentro del penal, ¿le ayuda a aprender cosas útiles para su futuro?

1. Sí le ayuda () 2. No le ayuda ()

248. ¿Usted piensa que el trabajo que actualmente desempeña le servirá para encontrar empleo al salir del CERESO Apodaca? *(En caso negativo, pase a la pregunta 250)*

1. Sí le servirá () 2. No le servirá ()

249. En caso afirmativo, ¿qué tanto considerará que le servirá para encontrar empleo al salir del CERESO Apodaca?

1. Le ayudará mucho () 2. Le ayudará poco ()
3. No le ayudará nada () 4. No sabe si le ayudará ()

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL Y JURÍDICA

250. ¿Considera usted necesario recibir algún tipo de apoyo jurídico y/o legal? *(En caso negativo, pase a la pregunta 253)*

1. Si lo considera necesario () 2. No lo considera necesario ()

251. Dentro del centro penitenciario, ¿ha recibido algún servicio o apoyo jurídico y/o legal? *(En caso negativo, pase a la pregunta 253)*

1. Si ha recibido () 2. No ha recibido ()

252. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de apoyo jurídico y/o legal ha recibido?

253. ¿Conoce usted alguna institución u organización no gubernamental (ONG) que brinde asesoría legal y jurídica? *(En caso negativo, pase a la pregunta 255)*

1. Si conoce () 2. No conoce ()

254. En caso afirmativo, ¿Cuáles conoce usted?

DEL APOYO A LOS INTERNOS

255. ¿Conoce usted alguna institución u organización no gubernamental (ONG) que brinde apoyo a internos penitenciarios? *(En caso negativo, pase a la pregunta 254)*

1. Si conoce () 2. No conoce ()

256. En caso afirmativo, ¿Cuáles conoce usted?

257. ¿Conoce usted alguna institución u organización religiosa que brinde apoyo a internos penitenciarios? *(En caso negativo, pase a la pregunta 259)*

1. Si conoce () | 2. No conoce ()

258. En caso afirmativo, ¿Cuál es la institución religiosa que usted conoce?

REINSERCIÓN SOCIAL

259. ¿Qué es para usted reinserción social?

260. ¿Cree que las tareas de reinserción en las que ha participado le ayudan a seguir con éxito su vida una vez que haya sido liberado para no volver a cometer un delito?

1. Si lo cree () | 2. No lo cree ()

261. ¿Por qué?

262. Durante tu estancia en esta institución, ¿has visto o sufrido actos de corrupción?

1. Sí los ha visto () | 2. No los ha visto ()

263. En caso afirmativo, ¿por parte de quién?

1. Internos () | 2. Autoridades () | 3. Custodios ()

APOYO POST PENITENCIARIOS

264. ¿Sabe usted de apoyos del Estado que se le puedan brindar una vez que salga del CERESO Apodaca para regresar a su núcleo familiar y tener trabajo? *(En caso negativo, pase a la pregunta 266)*

1. Si sabe () | 2. No sabe ()

265. ¿Cuál es el tipo de apoyo estatal que conoce?

266. ¿Sabe si existen organizaciones que le apoyen como enlace laboral (conseguir empleo)? *(En caso negativo, pase a la pregunta 268)*

1. Si sabe () | 2. No sabe ()

267. ¿Cuál es la organización que conoce?

268. ¿Sabe si existen organizaciones que le brinden apoyo psicológico en libertad? *(En caso negativo, pase a la pregunta 270)*

1. Si sabe () | 2. No sabe ()

269. ¿Cuál es la organización que conoce?

270. Una vez que esté en libertad, ¿Considera que estará en riesgo de volver a cometer nuevamente un delito?

1. Sí está en riesgo () | 2. No está en riesgo ()

271. ¿Por qué?

272. En caso afirmativo, por favor indique, ¿en qué momento piensa usted que corre más este riesgo?

1. Al inicio de la liberación () | 2. Dentro de los primeros 6 meses ()

3. De 6 meses a un año () | 4. Después de un año ()

5. Varios años después ()

ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN

Por favor lea cada enunciado y decida con qué frecuencia describe la forma en que usted se ha sentido en los últimos días.

- 1. Me siento decaído y triste.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 2. Por la mañana es cuando me siento mejor**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 3. Siento ganas de llorar o irrumpo en llanto.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 4. Tengo problemas para dormir por la noche.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 5. Como la misma cantidad de siempre.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 6. Todavía disfruto el sexo.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 7. He notado que estoy perdiendo peso.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 8. Tengo problemas de estreñimiento.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 9. Mi corazón late más rápido de lo normal.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 10. Me canso sin razón alguna.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 11. Mi mente está tan clara como siempre.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 12. Me es fácil hacer lo que siempre hacía.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 13. Me siento agitado y no puedo estar quieto.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 14. Siento esperanza en el futuro.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 15. Estoy más irritable de lo normal.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 16. Me es fácil tomar decisiones.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()
- 17. Siento que soy útil y me necesitan.**
1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()

18. Mi vida es bastante plena.

1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()

19. Siento que los demás estarían mejor si yo muriera

1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()

20. Todavía disfruto de las cosas que disfrutaba antes.

1. Pocas veces() 2. Algunas veces() 3. Casi todas las veces() 4. Todas las veces()

Anexo 5. Encuesta aplicada a las personas privadas de la libertad en junio de 2019



ENCUESTA PARA EVALUAR LAS CONDICIONES DE ESPIRITUALIDAD COMO PARTE DEL PROCESO DE REINSERCIÓN SOCIAL

Folio:

INSTRUCCIONES: Buen día: El propósito de este cuestionario es evaluar la importancia de la espiritualidad y de la práctica religiosa y su incidencia dentro del proceso de reinserción social. Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia y percepción, por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. Por favor, lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que mejor describa su opinión. Sus respuestas serán estrictamente confidenciales y se mantienen bajo un régimen de anonimato, le pedimos que **NO ESCRIBA NOMBRE NI DOMICILIO.**

¡AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN!

DATOS GENERALES

01. Edad: _____.

02. Ocupación / Antes del ingreso: _____.

03. Después del ingreso: _____.

04. Escolaridad / Antes del ingreso: _____.

05. Después del ingreso: _____.

06. Ciudad de origen: _____.

07. Municipio donde vivía: _____.

08. Delito cometido: _____.

09. Tiempo de sentencia: _____.

10. Tiempo cumplido: _____.

11. ¿Cuál es tu estado civil?

☐ 1. Soltero(a) ☐ 2. Casado(a) ☐ 3. Divorciado(a). ☐ 4. Viudo(a). ☐ 5. Unión libre

12. ¿Tiene usted hijos?

☐ 1. No tiene ☐ 2. Sí tiene hijos *(Continúe a la pregunta 13)*

↓

(Pase a la pregunta 15)

13. ¿Cuántos hijos tiene? _____

14. ¿Puede decirnos cuál es su edad, género (sexo) y escolaridad?

<input type="checkbox"/> 1. Hombre	<input type="checkbox"/> 2. Mujer	Escolaridad: _____	Edad: _____
<input type="checkbox"/> 1. Hombre	<input type="checkbox"/> 2. Mujer	Escolaridad: _____	Edad: _____
<input type="checkbox"/> 1. Hombre	<input type="checkbox"/> 2. Mujer	Escolaridad: _____	Edad: _____
<input type="checkbox"/> 1. Hombre	<input type="checkbox"/> 2. Mujer	Escolaridad: _____	Edad: _____

15. ¿Recibe usted visitas familiares?

☐ 1. No recibe ☐ 2. Sí recibe *(Continúe a la pregunta 16)*

↓

(Pase a la pregunta 18)

16. En una semana, ¿cuántas veces es visitado?

☐ 1. 1 vez. ☐ 2. 2 veces. ☐ 3. 3 veces. ☐ 4. 4 veces. ☐ 5. 5 veces

17. ¿Quiénes lo visitan? *(Puede marcar varias opciones)*

☐ 1. Padre ☐ 2. Madre ☐ 3. Esposa(o) ☐ 4. Pareja. ☐ 5. Hijos. ☐ 6. Hermanos

☐ 7. Otros familiares. ☐ 8. Otras personas

18. ¿Recibe usted visita conyugal?

☐ 1. No recibe ☐ 2. Sí recibe *(Continúe a la pregunta 19)*

↓

(Pase a la pregunta 20)

19. En una semana, ¿cuántas veces recibe visita conyugal?

☐ 1. 1 vez. ☐ 2. 2 veces. ☐ 3. 3 veces. ☐ 4. 4 veces. ☐ 5. 5 veces

20. ¿Es la primera vez que ingresa a un centro de reinserción?

- ☐ 1. No lo es (Continúe a la pregunta 21) ☐ 2. Sí lo es (Pase a la pregunta 23)

21. ¿Por qué delito ingreso previamente a un centro de reinserción?: _____

22. ¿Cuánto tiempo ha estado privado de su libertad tomando en cuenta las sentencias anteriores?

- ☐ 1. Menos de tres años. ☐ 2. De 3 a 6 años. ☐ 3. De 7 a 10 años. ☐ 4. Más de 10 años

HISTORIA DE FAMILIA

23. ¿Algún familiar de usted está o ha estado privado de la libertad?

- ☐ 1. No lo está ☐ 2. Sí ha estado (Continúe a la pregunta 24)

(Pase a la
pregunta 27)

24. ¿Qué parentesco tiene con usted?

- ☐ 1. Padre ☐ 2. Madre. ☐ 3. Abuelo(a) ☐ 4. Tío(a) ☐ 5. Hermano(a) ☐ 6. Hijo(a)
☐ 7. Otro familiar: _____

25. ¿Cuál fue el motivo de la detención de su familiar? ¿Qué delito cometió?

26. ¿De cuánto tiempo fue la sentencia de su familiar?

- ☐ 1. Menos de tres años. ☐ 2. De 3 a 6 años. ☐ 3. De 7 a 10 años. ☐ 4. Más de 10 años

27. Durante su infancia, ¿su familia estaba compuesta por...?

- 27.1. Padre ☐ 1. Sí ☐ 2. No
27.2. Madre ☐ 1. Sí ☐ 2. No
27.3. Hermanos(as) ☐ 1. Sí ☐ 2. No | Cuántos: _____
27.4. Hijos(as) ☐ 1. Sí ☐ 2. No | Cuántos: _____
27.5. Esposa(o) ☐ 1. Sí ☐ 2. No
27.6. Pareja ☐ 1. Sí ☐ 2. No
27.7. Otros familiares ☐ 1. Sí ☐ 2. No | Cuántos: _____, Parentesco: _____

28. ¿Hasta que edad vivió con su familia de origen?

- ☐ 1. Hasta los 15 años. ☐ 2. Entre los 16 y los 20 años. ☐ 3. Entre los 21 y los 25 años.
☐ 4. Entre los 26 y los 30. ☐ 5. Después de los 30

29. ¿Cómo fue el ambiente familiar en su casa durante su infancia?

- ☐ 1. Excelente. ☐ 2. Bueno. ☐ 3. Regular. ☐ 4. Malo. ☐ 5. Muy malo

30. ¿Por qué considera así el ambiente familiar durante su infancia?

31. ¿Durante su infancia en su casa tuvieron problemas de...?

- | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------|---|
| 31.1. Alcoholismo | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No | 31.2. Drogadicción | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No |
| 31.3. Conductas agresivas | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No | 31.4. Violencia física | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No |
| 31.5. Económicos | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No | 31.6. Abuso sexual | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No |
| 31.7. Separación o divorcio | <input type="checkbox"/> 1. Sí <input type="checkbox"/> 2. No | 31.8. Otro: | _____ |

32. ¿En su hogar durante su infancia tenía usted una habitación para usted solo?

- ☐ 1. No tenía una habitación ☐ 2. Sí tenía una habitación

33. ¿Durante su infancia fue víctima de violencia?

- ☐ 1. No fue víctima ☐ 2. Sí fue víctima (Continúe a la pregunta 34)

(Pase a la
pregunta 37)

34. ¿Qué tipo de agresiones recibió? (Puede marcar varias opciones)

- ☐ 1. Física. ☐ 2. Verbal. ☐ 3. Psicológica. ☐ 4. Sexual. ☐ 5. Otra: _____

35. ¿Por quién fue agredido? *(Puede marcar varias opciones)*
☐ 1. Padre. ☐ 2. Madre. ☐ 3. Abuelos. ☐ 4. Hermanos. ☐ 5. Tíos. ☐ 6. Otros: _____

36. ¿Cómo respondió usted a las agresiones que recibía? *(Puede marcar varias opciones)*
☐ 1. No hice nada. ☐ 2. Respondí con golpes. ☐ 3. Respondía con agresiones verbales
☐ 4. Le comenté a mis padres. ☐ 5. Le pedí ayuda a un familiar. ☐ 6. Me salí de la vivienda
☐ 7. Me iba con amigos o amigas. ☐ 8. Otro: _____

37. ¿Ha sido miembro de alguna pandilla?
☐ 1. No fue *(Pase a la pregunta 37)* ☐ 2. Sí fue *(Continúe a la pregunta 38)*

38. ¿A qué edad ingresó a la pandilla?
☐ 1. Menos de 15 años. ☐ 2. Entre 16 y 18 años. ☐ 3. Entre 19 y 21 años. ☐ 4. Más de 21 años

39. ¿Algún miembro de su familia es o ha sido miembro de alguna pandilla?
☐ 1. No fue *(Pase a la pregunta 41)* ☐ 2. Sí fue *(Continúe a la pregunta 40)*

40. ¿Cuál era el parentesco de su familiar que pertenecía a una pandilla?
☐ 1. Padre. ☐ 2. Madre. ☐ 3. Abuelos. ☐ 4. Tíos(as). ☐ 5. Hermanos(as).
☐ 6. Otros: _____

41. ¿Recibe alguna clase de apoyo de su familia?
☐ 1. No recibe *(Pase a la pregunta 43)* ☐ 2. Sí recibe *(Continúe a la pregunta 42)*

42. En caso afirmativo, ¿Qué tipo de apoyo familiar recibe? *(Puede marcar varias opciones)*
☐ 1. Alimentos. ☐ 2. Económico. ☐ 3. Productos de higiene personal ☐ 4. Medicinas.
☐ 5. Ropa/vestimenta. ☐ 6. Otros apoyos: _____

43. Al salir, ¿regresará a vivir con su familia?
☐ 1. No regresará *(Continúe a la pregunta 44)* ☐ 2. Sí regresará *(Pase a la pregunta 45)*

44. ¿Con quién regresará a vivir?
☐ 1. Otros Familiares. ☐ 2. Amigos (os). ☐ 3. Otros: _____

SITUACIÓN ACADÉMICA Y ESCOLAR

45. ¿En su infancia asistió en forma regular a su escuela?
☐ 1. No tenía una habitación ☐ 2. Sí tenía una habitación

46. ¿Cómo calificaría el ambiente escolar durante su estancia?
☐ 1. Excelente. ☐ 2. Buena. ☐ 3. Regular. ☐ 4. Mala. ☐ 5. Muy mala

47. ¿Por qué lo considera así?

48. Durante su infancia, ¿fue apoyado(a) en su totalidad por su familia para cumplir con sus compromisos escolares?
☐ 1. No fue apoyado ☐ 2. Sí fue apoyado *(Continúe a la pregunta 49)*

49. ¿Cuál fue la principal razón de no haber sido apoyado para cumplir con sus compromisos escolares?
☐ 1. Problemas económicos ☐ 2. Problemas de salud de usted o algún integrante de la familia.
☐ 3. Ausencia de alguno de los padres ☐ 4. No les importaba mucho
☐ 5. Otras razones: _____

50. Durante su estancia en la escuela, ¿usted sufrió agresiones?

- ☐ 1. No sufrió ☐ 2. Sí sufrió (Continúe a la pregunta 51)

(Pase a la
pregunta 55)

51. ¿Por quién fue agredido(a)?

- ☐ 1. Compañeros. ☐ 2. Maestros. ☐ 3. Directivos. ☐ 4. Pandillas.
☐ 5. Otros: _____

52. ¿Qué tipo de agresiones recibió?

- ☐ 1. Física. ☐ 2. Verbal. ☐ 3. Psicológica. ☐ 4. Sexual. ☐ 5. Otra: _____

53. ¿Cómo respondió usted a las agresiones que recibió?

- ☐ 1. No hice nada. ☐ 2. Respondí con golpes. ☐ 3. Respondí con agresiones verbales
☐ 4. Di aviso a la autoridad de la escuela. ☐ 5. Le pedí ayuda a otros compañeros.
☐ 6. Solicité ayuda de mi familia. ☐ 7. Otra forma: _____

54. ¿Recibió apoyo de las autoridades escolares?

- ☐ 1. No recibió apoyo ☐ 2. Sí recibió apoyo

SALUD FÍSICA Y MENTAL

55. Durante su infancia, ¿recuerda haber tenido acceso a algún servicio de seguridad social?

- ☐ 1. No tenía seguridad social ☐ 2. Sí tenía seguridad social

56. Durante su infancia, ¿fue usted vacunado(a) según el esquema de salud pública?

- ☐ 1. No fue vacunado ☐ 2. Sí fue vacunado

57. ¿En su infancia o adolescencia padeció algún problema de salud grave?

- ☐ 1. No padeció ☐ 2. Sí padeció (Continúe a la pregunta 58)

(Pase a la
pregunta 60)

58. ¿Qué problema de salud tuvo?

- ☐ 1. Varicela. ☐ 2. Sarampión. ☐ 3. Hepatitis. ☐ 4. Paperas. ☐ 5. Viruela.
☐ 5. Otras razones: _____

59. ¿En dónde recibió atención médica?

- ☐ 1. Seguro social. ☐ 2. Seguro popular. ☐ 3. ISSSTE. ☐ 4. Hospital PEMEX
☐ 5. Organizaciones benéficas. ☐ 6. Organizaciones públicas. ☐ 7. Médico particular
☐ 8. Otros: _____ ☐ 9. No fue atendido

60. Durante su infancia o adolescencia, ¿recibió apoyos psicológicos?

- ☐ 1. No recibió ☐ 2. Sí recibió (Continúe a la pregunta 59)

(Pase a la
pregunta 63)

61. ¿Por cuál tipo de problema(as) recibió atención psicológica?

- ☐ 1. Depresión. ☐ 2. Agustia. ☐ 3. Estrés. ☐ 4. Ansiedad. ☐ 5. Miedo. ☐ 6. Adicciones.
☐ 7. Otras razones: _____

62. ¿En dónde recibió atención médica?

- ☐ 1. Seguro social. ☐ 2. Seguro popular. ☐ 3. ISSSTE. ☐ 4. Hospital PEMEX
☐ 5. Organizaciones benéficas. ☐ 6. Organizaciones públicas. ☐ 7. Médico particular
☐ 8. Otros: _____ ☐ 9. No fue atendido

63. En general, ¿Cómo califica el servicio médico del CERESO?

- ☐ 1. Excelente. ☐ 2. Bueno ☐ 3. Regular ☐ 4. Malo ☐ 5. Muy malo

64. ¿La atención médica brindada por el personal médico es correcta y amable?

- ☐ 1. Sí es correcta y amable ☐ 2. No es correcta y amable

65. En su opinión, ¿Cómo evalúa la atención de los médicos y enfermeros del CERESO?

- ☐ 1. Excelente ☐ 2. Buena ☐ 3. Regular ☐ 4. Malo ☐ 5. Muy malo

66. ¿Considera que el personal médico y de enfermería que labora dentro del CERESO es suficiente para la atención de los internos?

- ☐ 1. Si es suficiente ☐ 2. No es suficiente

67. ¿Cómo evalúa la atención que brinda el personal médico y de enfermería?

- ☐ 1. Excelente ☐ 2. Buena ☐ 3. Regular ☐ 4. Malo ☐ 5. Muy malo

68. ¿El tiempo dedicado por el médico en su consulta ha sido suficiente?

- ☐ 1. Si es suficiente ☐ 2. No es suficiente

69. ¿Cuánto tiempo dura su consulta?

- ☐ 1. Menos de 30 minutos ☐ 2. De 30 a 45 minutos ☐ 3. 45 minutos o más

70. Cuando ha acudido al centro médico, ¿existe disponibilidad de horario para atender su problemática?

- ☐ 1. Si existe ☐ 2. No existe

71. ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo de espera para tener una consulta con los médicos del CERESO?

- ☐ 1. Menos de 15 minutos ☐ 2. De 15 a 30 minutos ☐ 3. De 30 a 45 minutos ☐ 4. Más de 45 minutos

72. Una vez que cuenta con su receta, ¿la farmacia del CEPRESO cuenta con los medicamentos necesarios para usted?

- ☐ 1. No cuenta (*Continúe a la pregunta 72*) ☐ 2. Sí cuenta (*Pase a la pregunta 73*)



72. En caso de no contar con ellos, ¿Quién le lleva los medicamentos necesarios?

- ☐ 1. Nadie/no se los llevan. ☐ 2. Su familia (esposo o hijos). ☐ 3. Sus padres ☐ 4. Otros familiares
☐ 5. Su pareja. ☐ 6. Otras personas: _____

73. ¿Ha estado internado(a) dentro del ambulatorio del CEPRESO?

- ☐ 1. No ha estado ☐ 2. Sí ha estado (*Continúe a la pregunta 74*)

(*Pase a la
pregunta 75*)



75. ¿Padece usted alguna enfermedad crónico-degenerativa (diabetes, hipertensión, entre otras)?

- ☐ 1. No lo hace ☐ 2. Sí lo hace (*Continúe a la pregunta 76*)

(*Pase a la
pregunta 76*)



76. ¿En caso afirmativo, qué enfermedad crónico-degenerativa padece?

- ☐ 1. Diabetes. ☐ 2. Hipertensión. ☐ 3. Cáncer. ☐ 4. Osteoporosis ☐ 5. Cardiovasculares
☐ 6. Otra enfermedad: _____

77. ¿Recibe del departamento médico del CERESO el medicamento necesario para su atención?

- ☐ 1. Si lo recibe. ☐ 2. No lo recibe

78. El departamento médico del centro penitenciario, ¿mantiene vigilancia sobre su estado de salud?

- ☐ 1. Si mantiene vigilancia. ☐ 2. No mantiene vigilancia

79. A su ingreso, ¿el personal médico realizó una evaluación de su estado físico y de salud?

- ☐ 1. Si la realizó. ☐ 2. No la realizó

80. ¿Ha tenido que recibir atención médica de urgencias?

- ☐ 1. Si recibió atención. ☐ 2. No recibió atención

81. ¿Requiere algún tipo de medicamento controlado?

- ☐ 1. Si lo requiere ☐ 2. No lo requiere

82. ¿Padece usted alguna problema psicológico?

- ☐ 1. No ha tenido ☐ 2. Sí ha tenido (*Continúe a la pregunta 83*)

(Pase a la
pregunta 84)

**84. ¿Recibe apoyo psicológico dentro del CERESO?**

- ☐ 1. No recibe ☐ 2. Sí recibe (*Continúe a la pregunta 85*)

(Pase a la
pregunta 86)

**86. ¿Padece alguna adicción?**

- ☐ 1. No padece ☐ 2. Sí padece (*Continúe a la pregunta 87*)

(Pase a la
pregunta 89)

**83. ¿Qué tipo de problema psicológico ha tenido?**

- ☐ 1. Depresión. ☐ 2. Angustia. ☐ 3. Estrés. ☐ 4. Ansiedad ☐ 5. Miedo
☐ 6. Otra enfermedad: _____

85. ¿Qué tipo de apoyo psicológico recibe?

- ☐ 1. Talleres de crecimiento personal. ☐ 2. Aplicación de pruebas psicológicas.
☐ 3. Terapia individual. ☐ 4. Terapia grupal. ☐ 5. Apoyo emocional en diferentes situaciones
☐ 6. Otra enfermedad: _____

87. ¿Qué tipo de apoyo psicológico recibe?

- ☐ 1. Tabaquismo ☐ 2. Alcoholismo ☐ 3. Drogadicción

88. ¿Ha tenido apoyo para abandonar su adicción por...?

- ☐ 1. La familia. ☐ 2. Compañeros del CERESO ☐ 3. Departamento médico
☐ 4. Autoridades del sistema penitenciario. ☐ 5. Clínica para las adicciones

SITUACIÓN ACTUAL EN EL CERESO

89. ¿Se siente usted seguro(a) de estar dentro del CERERESO?

- ☐ 1. Sí se siente segura ☐ 2. No se siente seguro

90. ¿Se ha dado cuenta si existen peleas entre compañeros(as) internas?

- ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen

91. Dentro del centro penitenciario, ¿ha conocido casos de...?

- 91.1. Maltrato físico entre internos(as) ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen
91.2. Maltrato psicológico entre internos(as) (humillaciones) ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen
91.3. Abuso sexual entre internos(as) ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen
91.4. Maltrato físico entre internos(as) y funcionarios ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen
91.5. Maltrato psicológico entre internos(as) y funcionarios ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen
91.6. Abuso sexual entre internos(as) y funcionarios ☐ 1. Si existen ☐ 2. No existen

92. Actualmente, ¿se encuentra trabajando dentro del CEPREERESO?

- ☐ 1. No trabaja ☐ 2. Sí trabaja (*Continúe a la pregunta 93*)

(Pase a la
pregunta 103)

**93. En caso afirmativo, ¿en qué se encuentra trabajando?**

- ☐ 1. Elaboración de comida ☐ 2. Artesanías y manualidades ☐ 3. Canastera ☐ 4. Limpieza
☐ 6. Lavado de ropa. ☐ 7. Tareas de maquila ☐ 8. Tareas de Costura ☐ 9. Pastelería o Repostería
☐ 10. Otras actividades: _____

94. ¿Cuánto tiempo lleva usted trabajando dentro del penal?

- ☐ 1. Menos de un año. ☐ 2. De 1 a 5 años. ☐ 3. De 5 a 10 años ☐ 4. Más de 10 años

95. ¿Cómo considera su ambiente de trabajo?

- ☐ 1. Excelente. ☐ 2. Bueno. ☐ 3. Regular. ☐ 4. Malo

96. ¿A cuánto asciende su ingreso laboral por semana?

- ☐ 1. Menos de \$300 pesos. ☐ 2. Entre \$300 y \$600 pesos. ☐ 3. De \$600 a \$900 pesos
☐ 4. De \$900 a \$1,200 pesos. ☐ 5. Más de \$1,200 pesos.

97. En el empleo que desempeña dentro del centro penitenciario, ¿trabaja usted horas extra?

- ☐ 1. No trabaja ☐ 2. Sí trabaja (*Continúe a la pregunta 98*)

(Pase a la
pregunta 99)

98. Si usted llega a trabajar horas extras dentro del desempeño de su trabajo, ¿a cuánto asciende la hora extra trabajada?

- ☐ 1. Menos de \$50 pesos ☐ 2. De \$50 a \$100 pesos ☐ 3. Más de \$100 pesos

99. El trabajo realizado por usted le resulta:

- ☐ 1. Muy satisfactorio. ☐ 2. Satisfactorio. ☐ 3. Poco satisfactorio. ☐ 4. Poco insatisfactorio
☐ 5. Muy insatisfactorio

100. ¿Cómo gasta el dinero ganado por su trabajo?

- ☐ 1. En mis gastos personales ☐ 2. En pago de abogados. ☐ 3. Apoyo a los gastos familiares
☐ 4. Ahorro. ☐ 5. En mis hijos(as) ☐ 6. Otros: _____.

101. Desde su opinión, el trabajo que ahora desempeña dentro del penal ¿le ayuda a aprender cosas útiles para su futuro?

- ☐ 1. Si le ayuda ☐ 2. No le ayuda

102. ¿Usted piensa que el trabajo que actualmente desempeña le servirá para encontrar empleo al salir del CEPRERESO?

- ☐ 1. Si le servirá ☐ 2. No le servirá

REINSERCIÓN SOCIAL

103. Por favor responde si considera que son importantes los siguientes aspectos para la reinserción social:

- | | | |
|--|--|--|
| 103.1. Respeto a los derechos humanos | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.2. Acceso a oportunidades de trabajo | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.3. Capacitación para el trabajo | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.4. Oportunidades para la educación | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.5. Salud digna (médicos y medicinas) | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.6. Práctica deportiva | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.7. Servicios de espiritualidad | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |
| 103.8. Atención religiosa | <input type="checkbox"/> 1. No es importante | <input type="checkbox"/> 2. Sí es importante |

104. ¿Cree que las tareas de reinserción en las que ha participado le ayudarán a seguir con éxito su vida?

- ☐ 1. No le ayudará ☐ 2. Sí le ayudarán

105. ¿Considera que estas tareas de reinserción social le ayudarán para no volver a cometer un delito cuando sea liberado?

- ☐ 1. No le ayudará ☐ 2. Sí le ayudarán

106. Para usted, ¿qué es reinserción social?

ESPIRITUALIDAD

107. Para usted, ¿qué es religión? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 17.1. Adoración a Dios y amor a la Virgen María y los profetas ☐ 17.2. Ofrendas y tributos
- ☐ 17.3. Creencia en normas y valores ☐ 17.4. Creencia en imágenes de santos o íconos
- ☐ 17.5. Acudir a lugares para invocar a santos ☐ 17.6. Guía moral para la forma de vida
- ☐ 17.7. Una guía espiritual para el ser humano ☐ 17.8. Adorar a un solo Dios

108. Para usted, ¿qué es espiritualidad? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 18.1. Buscar a Dios en todas las cosas ☐ 18.5. Libertad interior
- ☐ 18.2. Relación con lo espiritual y religioso ☐ 18.6. Sentimientos que promueven la justicia
- ☐ 18.3. Reflexiones para la gratitud ☐ 18.7. Compromiso conmigo, mi familia y la sociedad
- ☐ 18.4. Contemplación en la acción ☐ 18.8. Respetar la vida de las personas
- ☐ 18.9. Aunque no crea en Dios ayudar y respetar al prójimo

109. ¿Practica usted alguna religión actualmente?

- ☐ 1. No práctica ninguna religión ☐ 2. Sí práctica (Continúe a la pregunta 110)

(Pase a la
pregunta 116)

110. ¿Cuál es la religión de profesa en el CERESO?

- ☐ 1. Católica. ☐ 2. Metodista. ☐ 3. Adventista. ☐ 4. Bautista. ☐ 5. Cristiana.
- ☐ 6. Testigos de Jehová ☐ 7. Culto a la Santa Muerte. ☐ 8. Culto a Jesús Malverde
- ☐ 9. Otra: _____

111. ¿Por qué práctica esa religión en el CERESO?

- ☐ 1. Adoración a Dios y amor a la Virgen María
- ☐ 2. Porque el amor a Dios me permite salir adelante.
- ☐ 3. Porque me da esperanza y serenidad
- ☐ 4. Porque mi religión me ayuda tanto a mi familia como a mí.
- ☐ 5. Porque a través de ella pienso que todo estará bien y nada me faltará
- ☐ 6. Porque me ayuda a ser una mejor persona de lo que soy
- ☐ 7. Otra: _____

112. ¿Realiza usted actividades religiosas?

- ☐ 1. No realiza ☐ 2. Sí realiza

113. De las siguientes actividades religiosas, ¿cuáles practica usted en el CERESO?

- ☐ 23.1. Reuniones de culto ☐ 23.2. Lectura de otros libros
- ☐ 23.3. Lectura de Biblia ☐ 23.4. Oraciones personales
- ☐ 23.5. Oraciones en comunidad ☐ 23.6. Participa en pláticas
- ☐ 23.7. Otra práctica: _____

114. ¿Con qué frecuencia practica usted actividades religiosas en el CERESO?

- ☐ 1. Una vez por semana. ☐ 2. Dos veces por semana. ☐ 3. Tres veces por semana
- ☐ 4. Cuatro veces por semana. ☐ 5. Más de tres cuatro por semana

115. ¿Por qué participa en actividades religiosas en el CERESO?

- ☐ 1. Porque pienso que en ellas Dios mismo está presente
- ☐ 2. Porque Dios es comunidad y me gusta participar en los eventos de la comunidad penitenciaria
- ☐ 3. Porque me da seguridad orar con otras personas de esta comunidad
- ☐ 4. Porque siento la presencia de Dios en el penal
- ☐ 5. Porque puedo pedirle a Dios por mi familia y por mí
- ☐ 6. Porque puede sentir la bondad de Dios en mis compañeros
- ☐ 7. Otra: _____

116. Antes de ingresar al centro de reinserción social, ¿practicaba usted alguna religión?

- ☐ 1. No practicaba ☐ 2. Sí practicaba (*Continúe a la pregunta 117*)
(Pase a la pregunta 122)

117. En caso afirmativo, ¿cuál es la religión que profesaba?

- ☐ 1. Católica. ☐ 2. Metodista. ☐ 3. Adventista. ☐ 4. Bautista. ☐ 5. Cristiana.
☐ 6. Testigos de Jehová ☐ 7. Culto a la Santa Muerte. ☐ 8. Culto a Jesús Malverde
☐ 9. Otra: _____.

118. ¿Es la misma religión que practica actualmente?

- ☐ 1. Sí es la misma ☐ 2. No es la misma (*Continúe a la pregunta 119*)
(Pase a la pregunta 29)

119. De no ser la misma religión, ¿por qué decidió cambiar?

- ☐ 1. Conoció una nueva religión. ☐ 2. No se practica en el CERESO.
☐ 3. Lo invitaron sus compañeros. ☐ 4. Le parece más interesante
☐ 5. Otra razón: _____

120. De las siguientes actividades religiosas, ¿cuáles practicaba usted? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 23.1. Reuniones de culto ☐ 23.2. Lectura de otros libros
☐ 23.3. Lectura de Biblia ☐ 23.4. Oraciones personales
☐ 23.5. Oraciones en comunidad ☐ 23.6. Participa en pláticas
☐ 23.7. Otra: _____ ☐ 23.8. No participaba

121. ¿Con qué frecuencia practica usted actividades religiosas?

- ☐ 1. Una vez por semana. ☐ 2. Dos veces por semana.
☐ 3. Tres veces por semana. ☐ 4. Cuatro veces por semana.
☐ 5. Más de cuatro por semana

122. ¿Ha participado en el curso de meditación que se ofrece dentro del CERESO?

- ☐ 1. No participó ☐ 2. Sí participó (*Continúe a la pregunta 122*)
(Pase a la pregunta 129)

123. ¿Por qué decidió participar en el curso de meditación? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 1. Me enviaron como parte del proceso. ☐ 2. Me obligaron a acudir
☐ 3. Lo dieron en la clínica de rehabilitación. ☐ 4. Yo lo busqué por mi cuenta.

124. Del curso de meditación, ¿aprendió las técnicas de meditación ishayas y las practica?

- ☐ 1. Sí las aprendí, pero no las practico. ☐ 2. No las aprendí y no las practico.
☐ 3. Si las aprendí y frecuentemente las practico.

125. Su experiencia en el curso de meditación, ¿le ayudó para...? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 1. Le ayudó a relajarse. ☐ 2. Le ayudó a sentir paz. ☐ 3. Me ayudó por un tiempo, después no
☐ 4. Me ayudó a enfocar y dejar mis problemas. ☐ 5. No me ayudó en nada

126. ¿Cuándo considera que es una buena opción para meditar? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 1. Cuando me siento estresado. ☐ 2. Cuando me siento cansado. ☐ 3. Cuando me siento molesto
☐ 4. Cuando me siento triste. ☐ 5. Cuando estoy sereno y relajado

127. Seleccione lo que para usted signifique meditar-ascender...

- ☐ 1. Estar en paz. ☐ 2. Estar tranquilo. ☐ 3. Estar feliz. ☐ 4. No significa nada de lo anterior

128. ¿Practicar las técnicas de meditación le ayudó para...? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 1. Para estar mejor. ☐ 2. Para no sentir ansiedad. ☐ 3. Para poder dormir
☐ 4. Para estar atento a las demás actividades. ☐ 5. Para practicar las técnicas
☐ 6. Para conectarme conmigo mismo, mi familia y la comunidad

REFERENCIA CONTEXTUALIZADA

129. Cuando llegó al CERESO, ¿se le preguntó respecto a sus preferencias religiosas y/o espirituales?

- ☐ 1. No se le preguntó ☐ 2. Sí se le preguntó

130. ¿Cuándo llegó al CERESO, ¿el personal técnico le ofreció servicios de atención religiosa y/o espiritual?

- ☐ 1. No le ofrecieron ☐ 2. Sí le ofrecieron (*Continúe a la pregunta 131*)

(Pase a la
pregunta 132)

131. ¿Qué tipos de servicios le ofrecieron? (*Puede marcar varias opciones*)

- ☐ 1. Actividades de culto. ☐ 2. Espacios y tiempos para realizar oración en comunidad
☐ 3. Espacio y tiempos para realizar oraciones personales
☐ 4. Le ofrecieron biblia y/o libros de espiritualidad.
☐ 5. Contactarlo con su líder religioso
☐ 6. Otras: _____

132. En algún momento de su internamiento en el CERESO, ¿se ha sentido discriminado(a) por sus creencias religiosas y/o espirituales?

- ☐ 1. No se ha sentido ☐ 2. Sí se ha sentido (*Continúe a la pregunta 133*)

(Pase a la
pregunta 134)

133. En caso de haber sido discriminado(a) por sus creencias religiosas y/o espirituales, ¿de qué manera lo discriminaron?

- ☐ 1. Por la religión que practica. ☐ 2. Por realizar prácticas religiosas.
☐ 3. Por invertir tiempo en lo espiritual ☐ 4. Por sus creencias religiosas
☐ 5. Otras: _____

134. En algún momento de su internamiento en el CERESO, ¿Se le obligó a participar en algunas actividades religiosas distintas a la religión que usted profesa?

- ☐ 1. No fue obligado(a) ☐ 2. Sí fue obligado(a) (*Continúe a la pregunta 135*)

(Pase a la
pregunta 137)

135. ¿A qué actividades fue obligado?

- ☐ 44.1. Reuniones de culto ☐ 44.2. Lectura de otros libros
☐ 44.3. Lectura de Biblia ☐ 44.4. Oraciones personales
☐ 44.5. Oraciones en comunidad ☐ 44.6. Participa en pláticas
☐ 44.7. Otra: _____

136. ¿De qué religión eran esas actividades?

- ☐ 1. Católica. ☐ 2. Metodista. ☐ 3. Adventista. ☐ 4. Bautista. ☐ 5. Cristiana.
☐ 6. Testigos de Jehová ☐ 7. Culto a la Santa Muerte. ☐ 8. Culto a Jesús Malverde
☐ 9. Otra: _____

137. Durante su internamiento en el CERESO, ¿Se le permitió participar de manera libremente en otras actividades religiosas y/o espirituales que fueran diferentes a sus creencias?

- ☐ 1. No se le permitió ☐ 2. Sí se le permitió

138. Durante su internamiento en el CERESO, ¿Se le ha permitido practicar sus creencias religiosas o actividades espirituales?

- ☐ 1. No se le permitió ☐ 2. Sí se le permitió (*Continúe a la pregunta 139*)

(Pase a la
pregunta 140)

139. ¿Qué actividades le han permitido practicar de índole religiosa? (*Puede marcar varias opciones*)

- ☐ 1. Reuniones de Culto. ☐ 2. Oraciones en comunidad. ☐ 3. Oraciones personales.
☐ 4. Lectura de la Biblia ☐ 5. Lectura de otros libros. ☐ 6. Participar en pláticas religiosas.
☐ 7. Actividades de culto. ☐ 8. Espacios y tiempos para realizar oración en comunidad.
☐ 9. Espacio y tiempos para realizar oraciones personales
☐ 10. Poseer una biblia y/o libros espirituales. ☐ 11. Tener en mi celda artículos religiosos.
☐ 12. Diálogo con su líder religioso. ☐ 13. Otras _____

140. Durante su internamiento en el CERESO, ¿Le han prohibido practicar sus creencias religiosas o actividades espirituales?

- ☐ 1. No le prohibieron ☐ 2. Sí le prohibieron (*Continúe a la pregunta 141*)

(Pase a la pregunta 142)

141. ¿Qué actividades le han prohibido practicar de índole religiosa? (Puede marcar varias opciones)

- ☐ 1. Reuniones de Culto. ☐ 2. Oraciones en comunidad. ☐ 3. Oraciones personales.
☐ 4. Lectura de la Biblia ☐ 5. Lectura de otros libros. ☐ 6. Participar en pláticas religiosas.
☐ 7. Actividades de culto. ☐ 8. Espacios y tiempos para realizar oración en comunidad.
☐ 9. Espacio y tiempos para realizar oraciones personales
☐ 10. Poseer una biblia y/o libros espirituales. ☐ 11. Tener en mi celda artículos religiosos.
☐ 12. Diálogo con su líder religioso. ☐ 13. Otras _____.

142. Durante su internamiento en el CERESO Apodaca, ¿el personal técnico del centro penitenciario le puso en contacto con la agrupación religiosa a la que pertenece?

- ☐ 1. No lo puso (*Continúe a la pregunta 143*) ☐ 2. Sí lo puso (*Pase a la pregunta 144*)

143. ¿Por qué no lo pusieron en contacto con la agrupación religiosa a la que pertenece?

- ☐ 1. Las personas de la agrupación religiosa a la que pertenece está en contacto con usted
☐ 2. La agrupación religiosa a la que pertenece ya realiza actividades en el CERESO
☐ 3. Porque el personal del centro penitenciario se negó a hacerlo

144. Durante su internamiento en el CERESO Apodaca, ¿Le prohibieron el ingreso a los representantes de la agrupación religiosa a la que pertenece?

- ☐ 1. No le prohibieron ☐ 2. Sí le prohibieron (*Continúe a la pregunta 145*)

(Pase a la pregunta 146)

145. ¿Por qué razones le prohibieron el ingreso a la agrupación religiosa a la que pertenece?

- ☐ 1. El Estado no reconoce ni a la religión ni a sus líderes
☐ 2. Por la inseguridad y tensión dentro del penal
☐ 3. Lo desconozco
☐ 4. Otras: _____.

ACOMPANAMIENTO INDIVIDUALIZADO

146. Durante su internamiento en el CERESO, ¿logró tener asistencia religiosa personalizada por su líder religioso?

- ☐ 1. No tuvo ☐ 2. Sí tuvo (*Continúe a la pregunta 147*)

(Pase a la pregunta 61)

147. ¿A qué grupo religioso pertenecía la persona que le ofreció asistencia religiosa personalizada?

- ☐ 1. Católica. ☐ 2. Metodista. ☐ 3. Adventista. ☐ 4. Bautista. ☐ 5. Cristiana.
☐ 6. Testigos de Jehová ☐ 7. Culto a la Santa Muerte. ☐ 8. Culto a Jesús Malverde
☐ 9. Otra: _____.

148. ¿Con qué frecuencia se le ofreció asistencia religiosa personalizada?

- ☐ 1. Una vez a la semana. ☐ 2. Una vez a la quincena ☐ 3. Una vez al mes.
☐ 4. Otra, ¿cada cuánto?: _____.

149. Respecto a la asistencia religiosa personalizada, ¿Qué líneas de diálogo llevaban? (Puede marcar varias opciones)

- ☐ 1. Le explicaban mayormente temas de la biblia
☐ 2. Le hablaban temas mayormente religiosos
☐ 3. La mayor parte del tiempo se dedicaban a escuchar mis experiencias
☐ 4. La persona le escuchaba y a partir de ello le ofrecía reflexiones
☐ 5. Confesión

150. ¿Me ayudó en mi proceso personal el recibir asistencia religiosa personalizada?

☐ 1. No le ayudó (*Continúe a la pregunta 60*)

☐ 2. Sí me ayudó

(*Pase a la pregunta 152*)

151. ¿Por qué considera que no le ayudó el recibir asistencia religiosa personalizada?

☐ 1. Porque era muy poco tiempo. ☐ 2. Porque no me sentí escuchado

☐ 3. Porque el líder religioso no fue constante

☐ 4. Porque el líder religioso no estaba preparado

152. ¿Por qué no tuvo asistencia religiosa personalizada?

☐ 1. Porque no se me permitió. ☐ 2. Porque nunca se me ofreció. ☐ 3. Porque el líder religioso no aceptó

☐ 4. Porque el líder religioso sí quería, pero nunca tenía tiempo

153. ¿Su familia practica alguna religión?

☐ 1. No practica

☐ 2. Sí practica (*Continúe a la pregunta 154*)

(*Pase a la pregunta 155*)

154. ¿Qué religión profesa?

☐ 1. Católica. ☐ 2. Metodista. ☐ 3. Adventista. ☐ 4. Bautista. ☐ 5. Cristiana.

☐ 6. Testigos de Jehová ☐ 7. Culto a la Santa Muerte. ☐ 8. Culto a Jesús Malverde

☐ 9. Otra: _____

RELIGIÓN Y SU RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS DE ACOMPAÑAMIENTO

155. ¿Considera usted que la practica religiosa le puede ayudar para...?

155.1. Cuidar más su salud física

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.2. Sentir mayor paz interior con Dios

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.3. Mejorar su relación con sus familiares

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.4. Tener una mejor relación con otros internos

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.5. Tener una mejor percepción de la sociedad

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.6. Tener más esperanza sobre su situación jurídica

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.7. Sentirse más motivado(a) para el trabajo

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.8. Experimentar mayor equilibrio emocional

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

155.9. Motivarse a realizar actividades deportivas

☐ 1. No le ayuda

☐ 2. Sí le ayuda

156. ¿Por qué lo considera así?

157. ¿Ha recibido ayuda asistencial (ropa, artículos de limpieza, comida, apoyo económico para usted o su familia, etc.) de la agrupación religiosa a la que pertenece?

☐ 1. No ha recibido ☐ 2. Sí ha recibido

158. ¿Su práctica religiosa le motiva a realizar actividades artísticas o culturales?

☐ 1. No lo motiva ☐ 2. Sí lo motiva

159. ¿Su práctica religiosa le motiva a realizar cursos de preparación académica (estudiar la primaria, secundaria, etc.)?

☐ 1. No lo motiva ☐ 2. Sí lo motiva

160. Mencione por qué sí o por qué no le motiva su práctica religiosa para realizar estas actividades:

RELIGIÓN Y REINSERCIÓN

161. ¿Considera usted que practicar actividades religiosas puedan ayudar a las personas internas a ser mejores personas?

- ☐ 1. No le ayudan ☐ 2. Sí le ayudan

162. ¿Considera usted que una persona interna se sienta querida y valorada por las personas de afuera cuando les visitan grupos religiosos?

- ☐ 1. No se sienten queridos ☐ 2. Sí se sienten queridos

163. ¿Considera usted que es menos pesada la vida en prisión cuando se tiene la oportunidad de que se hable de Dios?

- ☐ 1. Sí es menos pesada la vida en prisión cuando se habla de Dios
☐ 2. No es menos pesada la vida en prisión cuando se habla de Dios

164. ¿Qué actividades considera usted que pueden realizar las religiones en el CERESO para motivar más a las personas internas? (Puede seleccionar varias opciones)

- ☐ 1. Cursos, talleres y pláticas. ☐ 2. Dinámicas con organizaciones civiles
☐ 3. Dinámicas con organizaciones religiosas. ☐ 4. Conferencias con líderes.
☐ 5. Pláticas con casos de éxito. ☐ 6. Acompañamiento y apoyo durante el proceso jurídico que lleva a la libertad
☐ 7. Acompañamiento y apoyo a su familia

165. ¿Qué consejos les daría usted a los líderes religiosos para mejorar sus servicios en el CERESO?

RELIGIÓN Y REINSERCIÓN

166. Cuando las personas internas en el CERESO ya están próximas a salir, ¿qué considera usted que sea lo que más necesiten?

- ☐ 1. Oportunidad de trabajo ☐ 2. Un lugar para poder vivir ☐ 3. Ayuda para mi familia
☐ 4. Apoyo espiritual ☐ 5. Todas las anteriores

167. ¿Considera usted importante que los líderes religiosos acompañen a las personas internas próximas a recuperar su libertad?

- ☐ 1. No es importante ☐ 2. Sí es importante (Continúe a la pregunta 168)

(Pase a la
pregunta 171)

168. ¿Por qué piensa usted que es importante (varias)

- ☐ 1. Porque apoyan espiritualmente cuando las personas obtienen su libertad
☐ 2. Porque pueden orientar en la búsqueda de trabajo
☐ 3. Porque pueden brindar apoyo para nuestras familias
☐ 4. Porque nos pueden ayudar a incorporarnos de mejor manera a la libertad
☐ 5. Otra: _____

169. En su familia, ¿existen diferencias religiosas?

- ☐ 1. No existen ☐ 2. Sí existen

170. Las diferencias religiosas, ¿Le provocan conflictos con su familia?

- ☐ 1. No le provocan ☐ 2. Sí le provocan

171. ¿Qué tipos de conflictos se provocan en su familia?

RELIGIÓN Y POSTLIBERACIÓN

172. ¿Considera usted importante que los líderes religiosos acompañen a las personas que son liberadas de los centros penitenciarios?

- ☐ 1. No es importante ☐ 2. Sí es importante (Continúe a la pregunta 173)

(Pase a la
pregunta 174)



173. ¿Por qué piensa usted que es importante recibir esta ayuda?

- ☐ 1. Para mantenernos cerca de Dios
☐ 1. Para orientarnos sobre las cosas importantes y correctas en nuestra vida
☐ 1. Para fortalecernos como personas
☐ 1. Para ayudarnos a nosotros y a nuestras familias
☐ 1. Otra: _____

174. Si usted forma parte de una agrupación religiosa, ¿esperaría que le ayuden una vez que sea liberado?

- ☐ 1. No espera ayuda ☐ 2. Sí espera ayuda (Continúe a la pregunta 175)

(Pase a la
pregunta 175)



175. ¿Qué tipo de ayuda esperaría? (Puede marcar varias opciones)

- ☐ 1. A recibir acompañamiento personal, una guía espiritual
☐ 2. A que me ayuden a conseguir trabajo
☐ 3. A que me ayuden a no desanimarme
☐ 4. A que me muestren a Dios cuando esté libre
☐ 5. A que me ayuden con despensa y ropa para mí y mi familia
☐ 6. A sentirme valorado, aceptado y querido por las demás personas de la religión
☐ 7. A que me ofrezcan un lugar en donde vivir
☐ 8. Otros: _____

VALOR DE LAS PRÁCTICAS RELIGIOSAS

176. ¿Sabe usted si participar en actividades religiosas le ayudan para el plan de actividades del comité técnico?

- ☐ 1. No estoy enterado ☐ 2. Sí estoy enterado

177. ¿Conoce usted su Derecho Humano a la Libertad de Conciencia y Religión?

- ☐ 1. No lo conozco ☐ 2. Sí lo conozco

178. Durante todo el tiempo de internamiento, ¿Nunca sintió violado su Derecho Humano a la Libertad de Conciencia y Religión? (En caso de ser negativa, pase a la pregunta 99)

- ☐ 1. No se violó mi derecho ☐ 2. Sí se violó mi derecho

179. ¿De qué manera le fue violado su Derecho Humano a la Libertad de Conciencia y Religión?

180. ¿Presentó algún recurso ante la autoridad cuando sintió que su Derecho Humano a la Libertad de Conciencia y Religión no le fue respetado?

- ☐ 1. No se presentó ☐ 2. Sí se presentó

181. ¿Considera usted que las autoridades deben valorar más la participación de las religiones en los centros penitenciarios?

- ☐ 1. No les deben de valorar más ☐ 2. Sí las deben de valorar más

AUTOEVALUACIÓN

182. Por favor, tómese un momento para pensar acerca de las cosas que son importantes para ti. Responda las siguientes preguntas tan acertadamente como usted pueda, también recuerde que son preguntas subjetivas, por lo que no existen preguntas correctas o incorrectas. Utilice la siguiente escala para responder:

<i>Totalmente falso</i>	<i>Mayormente falso</i>	<i>Algo falso</i>	<i>Ni falso ni cierto</i>	<i>Algo cierto</i>	<i>Mayormente cierto</i>	<i>Totalmente cierto</i>
1	2	3	4	5	6	7
182.1	<input type="checkbox"/>					Entiendo el significado de mi vida
182.2	<input type="checkbox"/>					Estoy buscando por algo que me haga sentir engrandecido
182.3	<input type="checkbox"/>					Siempre estoy buscando mi propósito de vida
182.4	<input type="checkbox"/>					Mi vida tiene un propósito claro
182.5	<input type="checkbox"/>					Tengo claro que es lo que hace que mi vida sea significativa
182.6	<input type="checkbox"/>					He descubierto un propósito de vida satisfactorio
182.7	<input type="checkbox"/>					Siempre estoy buscando por algo que haga que mi vida sea significativa
182.8	<input type="checkbox"/>					Estoy buscando el propósito o misión para mi vida
182.9	<input type="checkbox"/>					Mi vida no tiene un propósito claro
182.10	<input type="checkbox"/>					Estoy buscando el significado de mi vida.

183. Conteste a las siguientes preguntas según su opinión...

183.1 Usualmente yo estoy:	Aburrido	1	2	3	4	5	Emocionado
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.2. Mi vida parece:	Rutinaria	1	2	3	4	5	Siempre emocionante
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.3. En la vida, yo:	No tengo metas	1	2	3	4	5	Tengo metas claras
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.4. Mi existencia personal es:	Sin significado ni propósito	1	2	3	4	5	Con propósito y muy significativa
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.5. Cada día es:	Exactamente igual	1	2	3	4	5	Siempre diferente
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.6. Si pudiera escoger, yo:	Preferiría no haber nacido	1	2	3	4	5	Quisiera 9 vidas para vivirla como esta
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.7. Después de retirarme yo:	No haría nada el resto de mi vida	1	2	3	4	5	Haría algo nuevo que siempre quería hacer
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.8. En mis metas, yo:	No tengo progreso	1	2	3	4	5	Progreso completamente
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.9. Mi vida es:	Vacía y aburrida	1	2	3	4	5	Llena y emocionante
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.10. Si muriera hoy, mi vida fue:	Sin valor	1	2	3	4	5	Muy valiosa
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.11. Pensando en mi vida, yo:	Me pregunto por qué existo	1	2	3	4	5	Siempre veo porque estoy aquí
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.12. En mi punto de vista, el mundo:	Me confunde	1	2	3	4	5	Le da significado a mi vida
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.13. Yo soy:	Muy irresponsable	1	2	3	4	5	Muy responsable
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.14. En cuanto a la libertad de escoger, los humanos son:	Muy limitados	1	2	3	4	5	Totalmente libres
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.15. Respecto a la muerte, yo:	Tengo miedo y no estoy preparado	1	2	3	4	5	Estoy preparado y sin miedo
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.16. Respecto al suicidio, yo:	Es una manera de salir de problemas	1	2	3	4	5	Nunca lo he pensado ni lo haré
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

183.17. Respecto a mi habilidad para encontrar mi propósito:	No tengo ninguna	1	2	3	4	5	Muy buena
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.18. Mi vida está:	Fuera de mi control	1	2	3	4	5	En mis manos, yo la controlo
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.19. Encarar mis tareas diarias es:	Aburrido y doloroso	1	2	3	4	5	Placentero y satisfactorio
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
183.20. He descubierto que:	No tengo misión o propósito de vida	1	2	3	4	5	Un propósito de vida satisfactorio
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

184. A continuación, hay una lista de declaraciones que tratan sobre sus sentimientos generales acerca de usted mismo. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación.

	Muy de acuerdo	De acuerdo	En desacuerdo	Muy en desacuerdo
184.1. En general, estoy satisfecho conmigo mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.2. A veces creo que no soy bueno en absoluto.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.3. Siento que tengo una serie de buenas cualidades.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.4. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las demás personas.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.5. Siento que no tengo mucho de qué estar orgulloso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.6. Ciertamente me siento inútil a veces.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.7. Siento que soy una persona valiosa, al menos en el mismo plano que los demás.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.8. Me gustaría poder tener más respeto por mí mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.9. En general, me siento inclinado a sentir que soy un fracaso.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
184.10. Tomo una actitud positiva hacia mí mismo.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

185. A continuación, hay cinco declaraciones con las que puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Usando la escala de 1 a 7 a continuación, indique su acuerdo con cada artículo colocando el número apropiado en la línea que precede a ese artículo. Por favor sea abierto y honesto en su respuesta.

- 7 - Muy de acuerdo
- 6 - De acuerdo
- 5 - Ligeramente de acuerdo
- 4 - Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- 3 - Ligeramente en desacuerdo
- 2 - en desacuerdo
- 1 - Muy en desacuerdo

<input type="text"/>	185.1. En la mayoría de las formas mi vida está cerca de mi ideal.
<input type="text"/>	185.2. Las condiciones de mi vida son excelentes.
<input type="text"/>	185.3. Estoy satisfecho con mi vida.
<input type="text"/>	185.4. Hasta ahora he conseguido las cosas importantes que quiero en la vida.
<input type="text"/>	185.5. Si pudiera vivir mi vida, no cambiaría casi nada.

FAMILIA Y SALUD (MUJERES Y MENORES)

(En caso de tener hijos y de que éstos vivan con usted dentro del penal responda las siguientes preguntas respecto a los servicios brindados dentro del mismo a los menores; de lo contrario pase a la pregunta 198).

186. ¿Los alimentos proporcionados a su hijo(a) dentro del penal ¿son servidos por la administración penitenciaria?

- ☐ 1. No son servidos ☐ 2. Sí son servidos

187. Su hijo(a), ¿tiene acceso a servicios médicos especializados de pediatría?

- ☐ 1. No tiene acceso ☐ 2. Sí tiene acceso

188. Su hijo (a) ¿cuenta con algún tipo de atención médica?

- ☐ 1. No cuenta ☐ 2. Sí cuenta (*Continúe a la pregunta 191*)

(Pase a la
pregunta 192)

189. ¿Con qué servicio de atención médica cuenta?

- ☐ 1. IMSS
☐ 2. Seguro Popular
☐ 3. ISSSTE
☐ 4. ISSSTELEON
☐ 5. Servicio Médico Privado
☐ 5. Otro servicio: _____

190. Si su hijo enferma ¿las autoridades del penal le proveen de los medicamentos necesarios?

- ☐ 1. No son brindados ☐ 2. Sí son brindados

191. En caso negativo ¿quién le provee los medicamentos necesarios?

- ☐ 1. Su familia (esposo o compañero) ☐ 2. Sus padres ☐ 3. Otros familiares
☐ 4. Otras personas ☐ 5. Nadie se los lleva

192. ¿Alguno de sus hijos (as) ¿nacieron dentro del penal?

- ☐ 1. No nacieron dentro ☐ 2. Sí nacieron dentro (*Continúe a la pregunta 193*)

(Pase a la
pregunta 198)

193. ¿Cuántos de sus hijos (as) nacieron dentro del penal?: _____

194. Durante su embarazo y parto dentro del penal, ¿tuvo usted apoyos espirituales o religiosos tanto en el embarazo como en el post-parto por parte de algún sacerdote, pastor u organización religiosa?

- ☐ 1. No tuvo apoyo ☐ 2. Sí tuvo apoyo (*Continúe a la pregunta 197*)

(Pase a la
pregunta 192)

195. ¿Qué tipo de apoyo obtuvo?

- ☐ 1. Acompañamiento espiritual ☐ 2. Pláticas.
☐ 3. Lecturas de Biblia o textos sagrados ☐ 4. Confesión y comunión
☐ Apoyos materiales como leche, pañales o medicinas
☐ 6. Otros (por favor especifique): _____

196. ¿Sus hijos (as) ¿viven con usted dentro del penal?

- ☐ 1. No viven dentro ☐ 2. Sí viven dentro (*Continúe a la pregunta 199*)

(Pase a la
pregunta 200)

197. Si su hijo (a) vive dentro del penal con usted, ¿cuenta con el apoyo de la institución para?

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 199.1. Vacunación | <input type="checkbox"/> 1. No cuenta | <input type="checkbox"/> 2. Sí cuenta |
| 199.2. Vestido y calzado | <input type="checkbox"/> 1. No cuenta | <input type="checkbox"/> 2. Sí cuenta |
| 199.3. Juguetes | <input type="checkbox"/> 1. No cuenta | <input type="checkbox"/> 2. Sí cuenta |
| 199.4. Áreas de juego | <input type="checkbox"/> 1. No cuenta | <input type="checkbox"/> 2. Sí cuenta |
| 199.5. Servicios religiosos | <input type="checkbox"/> 1. No cuenta | <input type="checkbox"/> 2. Sí cuenta |

198. En caso de que sus hijos (as) no vivan con usted dentro del penal ¿quién está al cuidado de ellos (as)?

- ☐ 1. Padre. ☐ 2. Madre. ☐ 3. Esposo. ☐ 4. Pareja. ☐ 5. Hijos
☐ 6. Hermanos (as). ☐ 7. Otros familiares ☐ 8. Otras Personas.

Anexo 6. Cuestionario base para entrevista a profundidad con el Lic. Alejandro Balderrama Avitia (*Director Jurídico de la Agencia de Administración Penitenciaria del estado de Nuevo León*)

1. ¿Cuáles son los retos para la administración estatal que usted considera que existen en materia penitenciaria en estado de Nuevo León para optimizar la reinserción social? ¿por qué lo considera así?
2. ¿Cuál o cuáles son los problemas más urgentes que, en materia penitenciaria deben ser atendidos por la administración del estado de Nuevo León?
3. Para las familias de personas privadas de la libertad, ¿cuál es la mayor área de oportunidad que tiene la administración del Estado para apoyar a estos núcleos familiares? ¿por qué lo considera así?
4. ¿Considera necesario la existencia de un plan específico para la atención de familias de personas privadas de la libertad, sobre todo de los menores de edad? ¿Por qué?
5. En su experiencia, conviviendo con personas privadas de la libertad y con sus familiares, ¿cuáles considera que son las características socio-familiares de los núcleos familiares en donde uno de los suyos es una PPL en el estado de Nuevo León?
6. ¿Cree usted que las condiciones familiares se vieron afectadas por la privación de la libertad de uno de sus miembros? ¿Por qué?
7. ¿Cuáles son las funciones, atenciones o apoyos que desde la actual administración estatal se tienen para las familias de personas privadas de la libertad?
8. En lo que respecta a la economía, ¿cuál considera que es el estatus financiero de las familias de personas privadas de la libertad en el estado de Nuevo León? ¿Cuáles son sus principales carencias? ¿Por qué?
9. Del contacto que ha tenido con las familias, ¿de qué forma buscan solventar las carencias existentes dentro de estos núcleos?
10. ¿Conoce usted la existencia de organizaciones, instituciones o programas que brinden apoyo económico a las familias de personas privadas de la libertad? ¿cuáles organizaciones conoce? ¿cuáles son sus aportaciones?
11. ¿En qué áreas considera que las familias privadas de la libertad necesitan recibir mayor apoyo?
12. Desde la Agencia de Administración Penitenciaria, ¿existen planes o estrategias para brindar apoyo y acompañamiento a los familiares de personas privadas de la libertad? ¿en qué consiste este apoyo? ¿qué acciones se llevan a cabo?
13. Si fuera posible, ¿cuáles serían las áreas en las que desde su perspectiva debería apoyarse a las familias de personas privadas de la libertad?
14. De las familias de las personas privadas de la libertad, ¿quiénes considera que son los principales afectados por la reclusión de uno de los miembros del núcleo? ¿Por qué lo considera así?

15. En lo que respecta a los menores de edad, principalmente hijos e hijas de las personas privadas de la libertad, ¿cuáles son las afectaciones que desde su perspectiva considera que tiene la reclusión de uno de los miembros del núcleo? ¿Cuál es el área que considera que tiene la mayor afectación?
16. ¿Considera usted que la reclusión de uno de los miembros de la familia es un factor que incide de forma negativa en las expectativas académicas del resto de los miembros del núcleo familiar? ¿Por qué?
17. ¿Existe, desde la Agencia de Administración Penitenciaria, programas de apoyo que permitan brindar un acompañamiento educativo a los menores de edad hijos e hijas de internos penitenciarios? ¿Qué clase de apoyo brindan a los menores?
18. En el aspecto económico, ¿la privación de la libertad es un aspecto que incide directamente en las finanzas de los núcleos familiares de los internos penitenciarios? ¿De qué forma incide?
19. Una vez que se presenta la reclusión, ¿cuáles son los gastos o necesidades relacionadas con la persona privada de la libertad que su familia debe cubrir? ¿Cuál de estas es la más urgente? ¿Por qué?
20. ¿Considera que estas nuevas necesidades derivadas de la reclusión de uno de los miembros de la familia son un factor que incide en otras problemáticas del núcleo? ¿Por qué?
21. Desde su perspectiva, ¿considera que estos problemas económicos inciden en las expectativas educativas de los miembros de estas familias, principalmente de los menores? ¿Cuáles son los principales problemas económicos relacionados con la educación de los menores de edad? ¿Por qué?
22. En relación con la familia, ¿cuáles son los principales cambios que se presentan en la dinámica familiar una vez que se registra la reclusión?
23. ¿De qué forma las familias enfrentan estos cambios?
24. ¿Cuál es el impacto que estos cambios en la dinámica familiar tienen en las expectativas educativas y académicas de quienes las integran, principalmente, los menores de edad?
25. En su experiencia conviviendo con familiares de internos penitenciarios, ¿qué tan importante considera que es para ellos la educación de los menores? ¿Por qué?
26. ¿Han existido casos de familiares que busquen en la Agencia de Administración Penitenciaria apoyo para solventar las necesidades de sus hijos? ¿se les ha brindado apoyo? ¿Cuál fue el apoyo brindado?
27. Las familias de personas privadas de la libertad, ¿han buscado ayuda para que los menores de edad continúen con sus estudios?
28. ¿Considera que la educación de los menores es un aspecto que es dejado en segundo plano por las familias de las personas privadas de la libertad? ¿Por qué?
29. En lo correspondiente al aspecto emocional, ¿de qué manera impacta la privación de la libertad en los miembros de la familia de internos penitenciarios? ¿De qué forma las familias enfrentan este impacto emocional?

30. ¿Existe algún apoyo en el ámbito emocional para las familias de personas privadas de la libertad en el estado de Nuevo León? ¿cuáles son las áreas de abarca este apoyo? ¿Qué instituciones lo brindan?
31. En caso contrario, ¿cuáles son las áreas en las que se debería brindar apoyo emocional a las familias de personas privadas de la libertad?
32. ¿Considera que el impacto emocional es un factor que incide en las expectativas educativas y académicas de los familiares de internos, sobre todo de los menores de edad? ¿Por qué?
33. ¿Ha conocido casos en los que algún miembro de la familia haya tenido que abandonar sus estudios por causa de la reclusión? ¿Cuáles son las razones por las que han tenido que abandonar? ¿Cuál considera que es el impacto de este abandono?
34. En relación con los mayores de edad, ¿qué impacto tiene la reclusión de uno de un integrante de la familia en el ámbito laboral de quienes la componen?
35. En lo laboral, ¿cuál es la principal dificultad que estas familias deben enfrentar?
36. La encuesta aplicada a familiares de internos en el penal de Apodaca indica que los familiares de personas privadas de la libertad cuentan con un nivel de educación básico, ¿considera que este aspecto es un factor que incide en la obtención de mejores oportunidades laborales?
37. Si se diseñara un plan educativo para los menores de edad, hijos o hijas de internos e internas en los penales de Nuevo León ¿cuáles son las características o principales áreas de atención que este plan debería cubrir? ¿Por qué?
38. En caso de no atenderse el ámbito educativo de los menores de edad pertenecientes a las familias de personas privadas de la libertad, ¿cuáles son, desde su perspectiva, las principales consecuencias de esta falta de apoyo?
39. Por otra parte, la encuesta aplicada indica que los familiares adultos, si existiera, se integrarían a programas de capacitación o cursos que les permitieran tener mejores ingresos, en este escenario, ¿qué características debería tener un programa de capacitación orientado a familiares de internos? ¿Por qué lo considera así?
40. De no contar con apoyo educativo, ¿cuáles serían las consecuencias para las familias de internos penitenciarios?
41. ¿Considera usted que los integrantes de estas familias requieren de atención psicológica para conseguir la estabilidad familiar? ¿Por qué?
42. En el caso de los menores, ¿Cree que existe la necesidad de que los menores reciban acompañamiento y terapia psicológica para hacer frente a los problemas emocionales derivados de la reclusión? ¿Por qué?
43. En el ámbito educativo, ¿Considera que el impacto emocional de la reclusión de sus padres o tutores se convierte en un aspecto que incide en las expectativas educativas de los menores? ¿Por qué?

44. En el caso de los adultos, ¿Cree usted que estarían dispuestos a integrarse a cursos o programas de capacitación para encontrar un mejor trabajo? ¿Por qué? ¿En qué áreas del conocimiento u oficios?
45. Si se creara una unidad de atención psicopedagógica para los menores de edad, hijos e hijas de internos penitenciarios, ¿cuáles serían las áreas en las que debería trabajarse con ellos para mejorar su situación y, con ello, su rendimiento académico?
46. ¿Cuál considera que debería ser la dinámica de operación de esta unidad? ¿Sería benéfica la participación de la persona privada de la libertad?
47. En el aspecto pedagógico, ¿cuáles serían los aspectos más urgentes que se deberían atender en estas unidades?

Anexo 7. Cuestionario base para entrevista a profundidad con Lic. Radamés Tovar Velázquez (Coordinador de Educación, Cultura y Deporte del Centro de Reinserción Social Apodaca)

Educación

1. ¿En este centro penitenciario se tiene un censo de los niveles educativos de los internos?
2. ¿Cuál es el promedio diario de internos asistiendo a clases?
3. ¿Cuál fue el promedio total de internos que participaron en los cursos educativos durante el año anterior?
4. ¿Cuál es el indicador para medir los avances en el tema de alfabetización en los internos que participan en estos programas?
5. De obtener un certificado de educación, ¿cuáles serían los beneficios para el interno?
6. ¿Ofrece el sistema penitenciario algún incentivo para iniciar estudios durante el encarcelamiento?
7. ¿Se tiene algún programa de educación laboral?
8. ¿Cuántas de estas personas se encuentran con primaria incompleta, secundaria y preparatoria incompletas?
9. ¿En este centro penitenciario se imparten cursos que apoyen a los internos a complementar sus estudios en su instrucción?
10. De ser no especifique en cuál etapa no y por qué motivo es no.
11. ¿Cuenta con personal especializado para desarrollar los programas educativos en cada etapa?
12. ¿Este personal educativo es proporcionado por la Secretaría de Educación, recursos propios, ONG o voluntarios?
13. ¿Existen espacios asignados específicamente para la implementación de estos cursos?
14. ¿Se cuenta con una biblioteca para el apoyo educativo de los internos?
15. Al término de estos cursos ¿se extienden los certificados que acrediten el término de cada nivel educativo?
16. ¿Los cursos de desarrollo de oficios dependen también de su área?
17. En caso de contestar afirmativamente, ¿cuales son estos oficios?

18. ¿Alguno de estos cursos atiende al desarrollo de la autoestima del interno, para mejorar las relaciones interpersonales al interior de la institución y de sus relaciones familiares?
19. ¿Existe algún taller específico para apoyar al interno a la reinserción social y familiar?
20. ¿Cuántas de estas personas, asistentes a los cursos de oficio, se encuentran activos en los procesos laborales de esta institución?
21. Al término de estos cursos ¿se extiende algún certificado de los oficios estudiados?
22. ¿En qué porcentaje estos oficios son para fortalecer y actualizar el trabajo que ejercían antes de ingresar a este centro penitenciario?
23. ¿En qué medida beneficia a los internos que se integran a estos esquemas educativos al momento de ser evaluados para el proceso de pre liberación?
24. ¿Cómo se abastece de material didáctico para la instrucción?
25. ¿Cuáles son las principales necesidades en cuanto a equipamiento de esta institución?
26. ¿Cuáles son las principales razones de deserción escolar durante el encarcelamiento?
27. ¿Qué medidas se toman para atraer de nuevo a las personas que han abandonado los estudios dentro del penal?
28. ¿Cuál es el total de horas que un interno dedica a la educación dentro del penal?
29. ¿Cuál es el presupuesto anual que se destina para la educación en este penal y como se destina?
30. ¿En esta institución penal se cuenta con computadoras que cubran las necesidades de la educación en nuevas tecnologías?
31. De todas las personas que han participado y concluido estos procesos educativos a juicio de usted ¿qué porcentaje de reincidencia existe de los internos reinsertados en la sociedad?

Cultura

32. ¿Para el desarrollo cultural con servicios se cuenta con cursos de literatura, pintura, teatro, danza o cursos que coadyuven a la cultura?
33. ¿Cuál de los cursos mencionados, cuentan con una mayor demanda; y cuál será el de menor demanda?
34. ¿Cuál de los cursos mencionados se destacan a nivel interno y externo en participaciones tales como concursos estatal y nacional?

35. En el interior de este organismo ¿existen cursos o dinámicas que impulsen a los internos a resaltar los valores cívicos y culturales?
36. ¿Cuenta con personal especializado para desarrollar los cada uno de estos cursos?
37. ¿Con qué frecuencia durante el año, se realizan actividades culturales organizadas por el departamento encargado de cultura dentro del penal?

Deportes

38. Para desarrollar las habilidades y destrezas mentales del individuo existen actualmente: ¿Cursos sobre juegos de ajedrez? ¿Resolución de crucigramas? ¿Juegos de memoria? ¿Otro tipo de cursos?
39. ¿En esta institución que programas deportivos existen?
40. De los deportes mencionados, ¿cuáles de ellos tienen una mayor participación?
41. De todos estos deportes, ¿en cuales se han destacados los internos de esta institución en contiendas internas y externas?
42. ¿Cuenta con personal especializado para desarrollar los programas deportivos?
43. ¿Existe algún programa de entrenamiento físico en el que se reciba el apoyo de la sociedad civil?
44. ¿Algunos de estos deportes se han concursado fuera de esta institución?
45. De ser así, ¿cuáles son las instituciones participantes fuera de las áreas penitenciarias?
46. ¿Existen cursos deportivos que ayuden al interno en el manejo de su estrés?

Anexo 8. Cuestionario base para entrevista a profundidad con el Pbro. Roberto Ibarra Montes (*Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Monterrey*)

1. ¿Cree usted que el aprendizaje recibido en esta institución les otorga las herramientas necesarias para desarrollarse una vez que se encuentren en libertad?
2. ¿Piensa usted que el programa educativo del Instituto Nacional de Educación al Adulto (INEA) en el desarrollo de su Modelo de Educación para la Vida sea la adecuada para preparar a los internos en su desarrollo educativo?
3. ¿Ha observado si la capacitación de internos que hace el INEA como asesores educativos, sea la apropiada para formar al interno de acuerdo con las necesidades que a futuro tendrá fuera de la Institución penitenciaria?
4. Ante las condiciones que imperan al interior del penal de Apodaca, ¿cree posible que se desarrolle adecuadamente el proceso de la reinserción y la reeducación de los internos en los centros penitenciarios?
5. ¿Piensa usted que la educación de personas adultas en las cárceles limitada a una simple capacitación y una educación restringida a los niveles de educación secundaria, sean herramientas suficientes para su desempeño laboral una vez que ha logrado su libertad?
6. Una de las funciones de los centros penitenciarios es ofrecer a los internos opciones de capacitación y educación que les permita, una vez liberados, desempeñar algún oficio o insertarse exitosamente en la sociedad ¿Considera usted que en el caso del CERESO Apodaca se cumple esta función?
7. ¿Considera usted que el hacinamiento en que viven los internos limita la privacidad del interno y afecta en su proceso de aprendizaje educativo?
8. ¿Cree usted factible que en el penal de Apodaca con el apoyo de la sociedad y del Estado se pueda desarrollar la infraestructura necesaria para la implementación de un programa de educación a distancia que le permita a los internos llegar a consolidar su educación a nivel universitario?
9. De acuerdo con su experiencia, ¿considera que la educación impartida en las instituciones penitenciarias exalta los valores morales y éticos que sirvan para concientizar al interno en su proceso de reinserción en la sociedad?

Acerca de la autora

Emma Cerda Pérez

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación con acentuación Publicidad por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, es Máster en Ciencias de la Comunicación por la misma institución. Actualmente, se desempeña como catedrática en la FCC de la UANL e investigadora en el Centro de Investigación para la Comunicación de esta institución; cuenta con el reconocimiento al Perfil Deseable de PRODEP.

En su labor de investigación, donde ha seguido una línea de investigación enfocada a la violencia social, comunitaria y al análisis del sistema penitenciario en Nuevo León, ha publicado más de 16 capítulos de libro entre los que se encuentran: “Técnica cartográfica” en *Bandas juveniles, inmigración y ciudad* (Cerda y Martínez, 2009); “Modelos de intervención social en Nuevo León” en *Violencia y ciudad* (Cerda, 2009); “Las formas de impacto de la publicidad en los educandos” en *Guía para centros educativos en la prevención y manejo del maltrato infantil* (Cerda, 2010); “Violencia y mass media” y “Relatorías” en *Diagnóstico sobre violencia, equidad y género en Nuevo León* (Cerda, 2010); “Alfabetismo en medios: mire cuidadosamente piense críticamente” en *Comunicación, literatura y sociedad* (Cerda, 2010); “Suicidio, educación y familia” en *El suicidio en Nuevo León* (Cerda, 2011) “Hábitos y costumbres: Análisis de las preferencias de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Monterrey” en *Seguridad, ciudadanías y comunicación en las sociedades de incertidumbre y riesgo* (Cerda, 2012); “Secuestradores, secuestrados y trastornos mentales” en *Percepción y realidad del secuestro de Nuevo León* (Cerda, 2013);

En materia penitenciaria, la realizado las siguientes publicaciones, “La voz de la familia fuera de la prisión” en *Vulnerabilidad y Silencio* (Cerda, 2014); “Niñez en prisión: urgencia y vulnerabilidades por atender entre estado y sociedad” en *Derechos de familia y diversidad: Los derechos del reinserción infante y las Instancias penitenciarias* (Cerda, 2016); “Rezago educativo y carencia de recursos: Desafíos por afrontar en la agenda educativa penitenciaria” en *Reinserción Social: Entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica* (Cerda, 2017); “Educación, cultura y deporte en el contexto penitenciario: Aspectos clave para la reinserción social” en *Mujeres y reinserción social: La trasgresión de los derechos de género en la realidad penitenciaria* (Cerda, 2018); “Perfil sociodemográfico y familiar de las personas privadas de la libertad: Condiciones familiares, de salud y de reinserción social en Prisión”, *Espiritualidad y Religión: Una Visión desde la reinserción social* (Cerda, 2020).

